
FERRAN IZQUIERDO BRICHS (ed.)

PODER Y REGÍMENES
EN EL MUNDO
ÁRABE CONTEMPORÁNEO

Editor:

FERRAN IZQUIERDO BRICHS
Universitat Autònoma de Barcelona

Contribuciones de:

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO
Universidad de Alicante

HAIZAM AMIRAH FERNÁNDEZ
Real Instituto Elcano y Universidad Autónoma de Madrid

BÁRBARA AZAOLA
Universidad de Castilla-La Mancha

GÉRALDINE BARRÉ
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

RAFAEL BUSTOS
Universidad Complutense de Madrid

LAURA FELIU
Universitat Autònoma de Barcelona

AMAIA GOENAGA
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos-Universidad Autónoma de Madrid

IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN
Universidad Autónoma de Madrid

FRED HALLIDAY
Profesor de investigación ICREA en IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals)

MIGUEL HERNANDO DE LARRAMENDI
Universidad de Castilla-La Mancha

GEORGE E. IRANI
Profesor visitante en la Universidad San Pablo

SALAM KAWAKIBI
Investigador del Arab Reform Initiative, e investigador asociado de la Fundación CIDOB

ATHINA KEMOU
Universitat Autònoma de Barcelona

JEAN-FRANÇOIS LEGRAIN
Investigador en el CNRS/GREMMO-Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Lyon

ALBERTO LÓPEZ BARGADOS
Universitat de Barcelona

BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos-Universidad Autónoma de Madrid

AURÉLIA MAÑÉ
Universitat de Barcelona

IVÁN MARTÍN
Instituto Complutense de Estudios Internacionales

SALVADOR MARTÍNEZ MÁS
Universidad Carlos III

GEMA MARTÍN MUÑOZ
Directora General de Casa Árabe y su Instituto de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán

LUIGI MAŠCIULLI
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

RAQUEL OJEDA GARCÍA
Universidad de Jaén

M^a ANGUSTIAS PAREJO
Universidad de Granada

ELVIRA SÁNCHEZ
Universitat Oberta de Catalunya

EDUARD SOLER I LECHA
Coordinador del Programa Mediterráneo de la Fundación CIDOB

JAVIER TRAVÍN
Universitat Autònoma de Barcelona

LUCIANO ZACCARA
Director del Observatorio Electoral TEIM-UAM

Interrogar la actualidad
Serie Mediterráneo y Oriente Medio

© 2009 para cada uno de los trabajos:
Ignacio Álvarez-Ossorio, Haizam Amirah Fernández, Bárbara Azaola,
Géraldine Barré, Rafael Bustos, Laura Feliu, Amaia Goenaga,
Ignacio Gutiérrez de Terán, Fred Halliday, Miguel Hernando de Larramendi,
George E. Irani, Ferran Izquierdo Brichs, Salam Kawakibi, Athina Kemou,
Jean-François Legrain, Alberto López Bargados, Bernabé López García,
Aurèlia Mañé, Iván Martín, Salvador Martínez Más, Gema Martín Muñoz,
Luigi Masciulli, Raquel Ojeda García, M^a Angustias Parejo, Elvira Sánchez,
Eduard Soler i Lecha, Javier Travín, Luciano Zaccara

© 2009 de las traducciones del francés e inglés:
Laia Carbonell y Amaia Bengoetxea

© 2009 Fundació CIDOB
Elisabets, 12, 08001 Barcelona
<http://www.cidob.org>
e-mail: subscripcions@cidob.org

Distribuido por Edicions Bellaterra, S.L.
Navas de Tolosa, 289 bis, 08026 Barcelona
www.ed-bellaterra.com

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares de la *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Impreso en España
Printed in Spain

ISBN: 978-84-92511-11-2
Depósito Legal: B. 35.241-2009

Impreso por Book Print Digital. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Índice

Presentación, *Ferran Izquierdo Brichs*, 11

1. La Sociología del poder en el mundo árabe contemporáneo, *Ferran Izquierdo Brichs y Athina Kemou*, 17

La Sociología del poder, 19

Los actores, 24

Recursos de poder, 36

La estructura del sistema, 47

Conclusión: la Sociología del poder en el mundo árabe actual, 53

Notas, 57

Bibliografía, 58

2. Argelia: estructura poscolonial de poder y reproducción de élites sin renovación, *Rafael Bustos y Aurèlia Mañé*, 61

Cartografía de las élites y control de recursos en Argelia, 61

Identificación de los movimientos de protesta, de oposición y de resistencia en Argelia, 73

Relaciones de competencia y alianza entre las élites e influencia de los movimientos sociales en Argelia, 77

La estructura del sistema de poder en Argelia, 87

Escenarios de futuro, tendencias hacia la apertura o el cierre, 89

Notas, 91

Bibliografía, 95

¿Adónde va Argelia?: dos «normalizaciones», tres crisis pendientes y dos incógnitas determinantes, *Iván Martín*, 99

8 Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo

3. Marruecos: la reinención de un sistema autoritario, *Laura Feliu y M^a Angustias Parejo*, 105

Introducción, 105

Cartografía de las élites y control de recursos, 106

Identificación de los movimientos de protesta, de oposición y de resistencia, 118

Relaciones de competencia y alianza entre las élites e influencia de los movimientos sociales, 123

La estructura del sistema de poder: del autoritarismo semicompetitivo al autoritarismo competitivo, 129

Notas, 133

Bibliografía, 139

Marruecos: el régimen y los fusibles, *Bernabé López García*, 145

4. *E pur si muove?* Lógicas del poder y proceso de transición en la República Islámica de Mauritania, *Raquel Ojeda García y Alberto López Bargados*, 151

Introducción, 151

Las élites mauritanas: radiografía de la gestión poscolonial del poder, 152

Los movimientos de oposición y protesta, 159

Estructura del sistema de poder en Mauritania, 161

Epílogo, 173

Bibliografía, 174

Los retos de Mauritania, *Miguel Hernando de Larramendi*, 177

5. El Egipto contemporáneo, entre reformas y continuidad, *Athina Kemou y Bárbara Azaola*, 181

Los fundamentos de las élites, 182

El papel del pueblo: entre relaciones lineales y relaciones clientelares, 191

Las tensiones en la vieja y la nueva guardia, y el islam político, 197

Las dinámicas centrípeta y centrífuga, 203

¿Autoritarismo multipartidista o multipartidismo autoritario?, 207

Notas, 209

Bibliografía, 213

Egipto, de ayer a hoy, *Gema Martín Muñoz*, 217

6. Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo, *Eduard Soler i Lecha y Luciano Zaccara*, 221
 - Introducción, 221
 - Cartografía de la formación de las élites y de su control de los recursos de poder, 222
 - Movimientos de resistencia, oposición y descontento popular, 238
 - Relaciones de competencia y de alianza entre élites y la influencia de movimientos de oposición y resistencia, 248
 - Escenarios de futuro, 254
 - Notas, 256
 - Bibliografía, 257

Los futuros de Arabia Saudí, *Fred Halliday*, 261

7. La república hereditaria Siria: el fracaso de una transición, *Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán*, 265
 - El blindaje de las élites sirias, 265
 - Distribución de poder en el seno de las élites primarias y secundarias, 266
 - Recursos de control e intercambio de prebendas, 280
 - Activismo y movilización política en Siria, 285
 - Las implicaciones nacionales del gran juego americano, 292
 - Notas, 296
 - Bibliografía, 298

¿Hacia dónde se dirige Siria?, *Salam Kawakibi*, 301

8. Élite, poder y cambio político en el Líbano de la II República, *Amaia Goenaga y Elvira Sánchez*, 305
 - Introducción histórica, 305
 - Identificación de las élites y sus recursos, 307
 - Identificación de los movimientos de resistencia, 323
 - Relaciones de competencia y alianza entre élites, 325
 - La estructura del sistema de poder, 329
 - Previsiones de futuro, 333
 - Notas, 334
 - Bibliografía, 338

Líbano: ¿Una paz duradera?, *George E. Irani*, 341

9. Palestina: élites y poder bajo ocupación, *Salvador Martínez Más y Javier Travín*, 345
 - Una nación sin Estado, 346
 - Élites y recursos, 348
 - En el centro de la movilización: Hamas y Fatah, 359
 - Relaciones entre élites, 361
 - Un poder bipolarizado y dependiente, 365
 - Escenarios de futuro: ¿División sin vuelta atrás?, 368
 - Notas, 370
 - Bibliografía, 373

¿Qué futuro le espera a Palestina?, *Jean-François Legrain*, 377

10. Jordania: la supervivencia de la monarquía, *Géraldine Barré y Luigi Masciulli*, 383
 - Transición y apertura política: veinte años después, 383
 - Cartografía de las élites y el control de los recursos de poder, 384
 - Movimientos de reivindicación, descontento popular y resistencia, 395
 - Competencia y alianzas en el proceso de transición política, 402
 - La estructura del sistema de poder en Jordania, 405
 - Escenarios de futuro: entre reformas económicas y continuidad política y social, 407
 - Notas, 408
 - Bibliografía, 409

Jordania: los difíciles equilibrios internos y regionales, *Haizam Amirah Fernández*, 413

Presentación

El siglo XXI comenzó con las miradas dirigidas hacia el mundo árabe y Oriente Medio. Sin embargo, esto no se debía al poder e influencia de los estados y sociedades de la región, sino, todo lo contrario, a su debilidad. La debilidad de las sociedades de Oriente Medio, incluida la iraní, ha convertido esta zona en el escenario privilegiado de la competición global por el poder. La región sufre de forma cotidiana las dinámicas violentas reflejo de tensiones globales. Una de las causas es el petróleo, pero no es la única. Otros factores como los sistemas de poder autoritario, herederos de los procesos coloniales y de liberación, y las injerencias exteriores, están en el origen de las difíciles condiciones de vida que la población árabe y mediooriental ha soportado durante generaciones.

La historia del mundo árabe contemporáneo es un fiel reflejo de las tensiones provocadas primero por el colonialismo europeo y después por el capitalismo globalizado. El poco éxito de las experiencias modernizadoras en el mundo árabe puede resumirse en la derrota de Muhammad Ali y su intento de crear un foco de desarrollo en el Egipto de principios del XIX. Siguiendo el ejemplo modernizador de las élites europeas, Muhammad Ali convirtió a Egipto en una potencia militar, política y económica. Sin embargo, tanto Londres como el sultanado otomano vieron en aquel crecimiento una amenaza para su poder y sus intereses. Así, los dos imperios se aliaron para someter nuevamente a Egipto al dominio de ambos. La victoria se expresó de forma explícita en la prohibición de continuar con el proceso industrializador y la obligación de dismantelar todas las manufacturas que pudieran implicar una competencia con la producción británica, poniendo punto y final a la experiencia modernizadora.

La capitulación de Muhammad Ali es seguramente también uno de los mejores ejemplos de la hipocresía colonial europea. Las élites de Londres y París justificaban su expansión como una «misión civilizadora» que debía llevar la modernidad política y económica al mundo no desarrollado. Sin embargo, cuando una sociedad del Sur conseguía entrar en el camino de la industrialización, estas mismas potencias no dudaban en utilizar la cañonera para impedirlo. El desarrollo era una puerta a la independencia, por lo que era inadmisibles para las potencias imperialistas y para el capital que ya se estaba mundializando.

El período colonial europeo en el mundo árabe fue una de las épocas más turbulentas de la región. Los colonialismos británico y francés se impusieron al mismo tiempo que estallaban las reivindicaciones de independencia en muchas de las sociedades árabes. El fin del Imperio otomano, derrotado por Gran Bretaña y Francia en la Primera Guerra Mundial, fue provocado también por la gran revuelta árabe por la independencia que tuvo lugar durante la guerra. Sin embargo, en la paz de París que siguió a la Gran Guerra, Londres y París no concedieron a los árabes la misma autodeterminación que sí aceptaron para las poblaciones europeas. Muy al contrario, las dos potencias mantuvieron su control sobre buena parte del norte de África, y se repartieron Oriente Medio e impusieron el sistema de mandatos sobre su población. Pero las luchas por la independencia no cesaron y las revueltas en Egipto (1919), Irak (1920), Siria (1925), el Rif (con Abd al-Karim de 1920 a 1925) o Palestina (1936-1939) fueron sanguinariamente reprimidas, sin dudar en algunos casos incluso en realizar bombardeos masivos contra la población civil, instaurando una práctica que aún persiste en la actualidad.

Si bien en esta época la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África fue provocada principalmente por actores externos, a mediados del siglo xx, las independencias darían paso a la entrada en escena de nuevos actores. La creación de nuevos estados y la consolidación de la soberanía en los ya existentes desencadenaron la competición por el poder de las élites de cada uno de estos países. En general, estas nuevas élites eran débiles y poco homogéneas, por lo que la lucha entre ellas por lograr una posición dominante fue feroz. Esta pugna coincidió con el proceso de creación y fortalecimiento de los aparatos estatales, y con el esfuerzo de las propias élites por ganar legitimidad dando respuesta a las necesidades de una población que contaba con la capacidad reivindicativa heredada del período de lucha anticolonialista. Una y otra di-

námica favorecieron la concentración de los recursos de poder en el Estado y en manos de las élites que consiguieron hacerse con su control. Pero estas luchas también potenciaron la imagen de inestabilidad de la región, debido a los golpes de Estado, las represiones, las depuraciones y las injerencias ideológicas, políticas e incluso militares entre países vecinos. En los años cincuenta y sesenta, esta competición por el poder se regionalizó con choques entre aquellos dirigentes que contaban con la capacidad para luchar por el liderazgo del mundo árabe desde Egipto y Arabia Saudí, y en menor grado desde Siria e Irak.

Sin embargo, una vez que estas competiciones tuvieron unas élites ganadoras que consiguieron concentrar el poder y establecer los regímenes de control de los estados y las sociedades, la turbulencia se vio sustituida por una estabilidad conservadora que perdura todavía hoy en día. Muestra de ello es que en muchos casos podemos hablar de élites que permanecen en el poder durante décadas. Como veremos, el control del Estado, la renta, el recurso a la represión y, en algunos casos también la ideología, permitió a los regímenes asentarse en el poder. A ello se le sumaron las alianzas con el exterior. Los apoyos de Washington y de Moscú durante la guerra fría, o de Estados Unidos y los gobiernos europeos en la actualidad, son sabiamente utilizados por los regímenes para asegurar su dominio.

Aun así, cuando dirigimos la mirada hacia Oriente Medio y el sur del Mediterráneo acostumbramos a recibir una imagen de inestabilidad, guerras y violencia que contradice el estancamiento cenagoso de los regímenes autocráticos. Esta inestabilidad vuelve a tener principalmente causas exógenas, como las intervenciones militares, políticas y económicas norteamericanas, o la continuación de la colonización israelí de los territorios palestinos y sirios. La estabilidad nacional de los regímenes autoritarios árabes se ve alterada sobre todo por factores externos, salvo en las pocas ocasiones en que las crisis económicas provocan estallidos de protestas (o cuando algún grupo terrorista atenta contra la población, lo que nunca ha supuesto una amenaza real para las élites en el poder). En estos casos, como veremos, los regímenes utilizan distintos mecanismos para asegurar su posición, como la cooptación de algunos líderes de la oposición, la aplicación de medidas de liberalización muy limitada y, también, la represión.

Vemos, pues, que los regímenes autoritarios árabes y sus élites han desarrollado una gran capacidad de supervivencia y estabilidad que

contradice la imagen que nos llega de una región en constante agitación. Se impone, pues, un análisis que sitúe cada dinámica en su contexto y nos permita comprender estas sociedades tan cercanas, pero que al mismo tiempo generan tantas ideas preconcebidas e interpretaciones erróneas en Occidente.

El objetivo de esta obra es realizar un estudio de las relaciones de poder que definen los regímenes políticos en el mundo árabe actual, y proponer un enfoque y una metodología universales que superen estos prejuicios. La historia del mundo árabe contemporáneo se trata muy a menudo como una anomalía dentro del sistema internacional. Haciendo uso de una perspectiva heredera del orientalismo, que ya denunció Edward Said, se continúa analizando esta región y sus habitantes como un hecho exótico, complejo y sorprendente que no encaja en los parámetros habituales. Incluso se han construido aparatos teóricos específicos para ello. Sin embargo, el análisis de las dinámicas políticas y sociales de un país no puede basarse en una teoría específica para cada región. Los mismos instrumentos utilizados para estudiar e interpretar las sociedades europeas deberían ser válidos para las sociedades orientales, las del sur o las de otras épocas. Al fin y al cabo, las sociedades, a pesar de sus particularidades y diferencias, construyen su historia de acuerdo a dinámicas y tensiones muy similares. La Historia, las historias de todas las sociedades, se escriben principalmente en los momentos puntuales de grandes transformaciones, que tienen lugar cuando la población ve la necesidad de luchar por sus condiciones de vida y es capaz de movilizarse para mejorarlas. Y normalmente, después de las revoluciones que provocan los cambios, las sociedades se sumen en la calma de los grandes períodos de inmovilidad política en los que solo unas pocas personas —las élites— rivalizan por el poder. Estos períodos perduran hasta que la población vuelve a tener la capacidad de movilizarse y provocar otro momento de renovación, recomenzando el ciclo.

Para comprender las dinámicas sociales, políticas, ideológicas y económicas en estas sociedades, como en cualquier otra, es necesario, por lo tanto, analizar las causas de este estancamiento, y también las fuerzas que intentan transformarlas. La democratización de algunos regímenes árabes que se anunció a principios de los años noventa parece haber quedado bloqueada por la resistencia de las élites a ceder su poder. El análisis de las causas de este bloqueo nos conduce a la necesidad de identificar las élites y los movimientos sociales más influyentes en

cada sociedad y su posición respecto al sistema político. Este libro presenta, en primer lugar, una propuesta teórica y metodológica que nos permite ofrecer una perspectiva general sobre el poder y los regímenes políticos en el mundo árabe actual. Los capítulos siguientes analizan la realidad en nueve países árabes con sistemas políticos, económicos y sociales muy distintos entre sí, ofreciendo una visión detallada y comparada de las dinámicas de las relaciones de poder en el mundo árabe. El Magreb está representado por tres países cuyos contrastes nos ayudarán a ver las diferencias, pero también las similitudes en sus estructuras de poder: Argelia, Marruecos y Mauritania —un régimen asentado en la renta, un régimen monárquico y un tercero basado en el poder de los militares y las estructuras tribales que tras una breve experiencia de democracia representativa regresó al viejo juego controlado por los generales—. Los regímenes de Egipto y Arabia Saudí no podían faltar en este estudio, por su peso intrínseco en el mundo árabe y por tratarse de dos modelos paradigmáticos de concentración del poder en manos de unas élites muy reducidas. El Creciente Fértil ofrece también enormes contrastes: Siria y la república hereditaria de los Assad, Líbano con su democracia basada en las diferentes comunidades, la división interna palestina, y la estable monarquía hachemí de Jordania. La comparación de los distintos casos permite apreciar que a pesar de la imagen de homogeneidad que ofrece en ocasiones el mundo árabe, la multiplicidad de modelos y la heterogeneidad de los regímenes es una realidad. Aun así, al mismo tiempo, también podemos observar algunas estrategias comunes en las élites para asegurar su permanencia en el poder; que incluso podrían extrapolarse a muchos otros regímenes de fuera de la región. Esto nos reafirma en la necesidad de aplicar una metodología y una pauta de análisis que sean útiles de forma universal, huyendo de las teorías específicas para cada caso.

La estructura de los capítulos es similar en todos. Un primer apartado analiza las élites, de diferentes ámbitos, de cada uno de los países y los recursos de poder que estas controlan. A continuación se procede a identificar los movimientos de resistencia, oposición o descontento popular, para reconocer tanto los sectores que se oponen al régimen como las demandas de la población. Un tercer apartado analiza las relaciones de competencia y de alianza entre élites, y la influencia de los movimientos de oposición y resistencia, lo que ayuda a definir la estructura del sistema en cada uno de los países. Finalmente se presentan distintos

escenarios de futuro, apartado que se ve complementado por un comentario de un experto en el país para cada uno de los capítulos. Desde aquí aprovechamos la ocasión para agradecer a estos comentaristas su valiosa colaboración en este proyecto.

Queremos expresar también nuestro agradecimiento a la Fundación CIDOB de Barcelona. Esta investigación, en la que han participado 19 investigadores de diferentes universidades españolas, ha podido llevarse a cabo gracias a la financiación y al impulso que esta institución está dando al estudio del mundo árabe y el Mediterráneo en nuestro país. La Fundación CIDOB nos ha brindado la posibilidad de reunir en un mismo proyecto —que se ha concretado en dos seminarios y en esta obra colectiva— a algunos de los mejores especialistas españoles sobre Oriente Medio y el Norte de África, lo que no siempre es tarea fácil dadas las condiciones precarias en las que se mueve la investigación en España.

FERRAN IZQUIERDO BRICHS
Universitat Autònoma de Barcelona

1. La Sociología del poder en el mundo árabe contemporáneo¹

Ferran Izquierdo Brichs y Athina Kemou

El final de la guerra fría y la crisis del Golfo de 1990-1991 abrieron una dinámica que parecía apuntar hacia la democratización del mundo árabe. En los años noventa un grupo de autores subrayaron efectivamente la existencia de algunos tímidos procesos de liberalización en estos países, llegando incluso a hablar de una «mini-ola» democratizadora (Norton, 1993). Dichas dinámicas serían resultado de una serie de factores confluyentes, entre los que cabría destacar: una mayor presencia y efectividad de las organizaciones socioeconómicas, una sociedad civil en clara expansión — ambas vinculadas a la escolarización masiva y la aparición de nuevas clases medias —, y una acción exterior impulsada por algunos estados occidentales y por organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Así, a principios de los años noventa algunos analistas acudieron a la literatura sobre transiciones hacia sistemas democráticos liberales para aplicarla al mundo árabe. Sin embargo, con el fracaso de la democratización, pronto se vio que las dinámicas de las transiciones en Europa del Sur o del Este, o en Latinoamérica, eran bien distintas de las que se desarrollarían en Oriente Medio y el Norte de África. Los planteamientos teóricos de Dankwart A. Rustow (1970), y posteriormente O'Donnell, Schmitter y Wittehead (1986), e incluso Przeworski (1991) y Huntington (1991), se revelaron poco útiles para el análisis de unos procesos que no iban en la misma dirección que los estudiados por ellos.

Como apuntábamos, las transiciones se quedaron en tímidas reformas, y en la actualidad, si bien pueden identificarse ciertos rasgos liberalizadores en algunos de los países, las bases de las estructuras de poder se mantienen inalteradas. Lo que en un inicio parecía una nueva oleada

de transiciones democráticas, revirtió en unas autocracias parciales, cuyos líderes, para mantenerse en el poder, deben permitir —implícita o explícitamente— el acceso de algunos grupos de oposición a ciertas formas de poder social, político o ideológico, aunque siempre manteniendo la capacidad de utilizar la fuerza cuando el régimen se vea amenazado (Brumberg, 2002). El analista norteamericano Daniel Brumberg, al hacer un repaso de los sistemas políticos actuales en el mundo árabe, los divide en dictaduras o autocracias plenas, y autocracias liberalizadas. En las últimas, si bien una minoría concreta controla mediante la fuerza los recursos económicos del país, se ha producido una «inclusión parcial» de sectores más amplios de la población. Entre las primeras cita a Siria, Túnez, Libia o Arabia Saudí, y entre las autocracias liberalizadas a Kuwait, Marruecos, Jordania, Yemen, Argelia o Egipto (Brumberg, 2003).

Las transiciones hacia sistemas democráticos solo comienzan y se desarrollan con éxito si existe una presión de la población que las impulse, pues como es obvio las élites nunca cederán parte de sus poderes o privilegios en aras de la democracia. En el mundo árabe, se iniciaron protestas populares en los años ochenta y noventa, cuando los regímenes rentistas —ya fuera por la disminución de los precios del petróleo o por agotarse su capacidad de endeudamiento— se debilitaron y perdieron legitimidad. La disminución de las ayudas, los servicios sociales, los salarios y los demás mecanismos que permitían distribuir la renta exterior, provocaron un fuerte aumento de la movilización popular, dando lugar a las llamadas «revueltas del pan». Los grupos de oposición ganaron fuerza encabezando las protestas, y amenazaron la estabilidad de las élites en el poder. Pero los regímenes respondieron de forma eficaz, tanto mediante la represión como mediante el intento de cooptación de algunos sectores de la oposición, al mismo tiempo que se valieron de medidas de liberalización política controlada para intentar disminuir la presión popular.

Así encontramos que en el mundo árabe actual no se han desarrollado sistemas verdaderamente democráticos y la transición hacia una democracia sigue encontrando grandes obstáculos, incluso en aquellos países en los que las medidas de liberalización alcanzaran a instaurar elecciones multipartidistas. En estos países, buena parte de los recursos de poder están centralizados en el Estado, por lo que ganando unas elecciones se podría llegar a controlar también buena parte del capital, de la información y de la difusión de la ideología. El avance de un proceso de-

mocrático en un Estado rentista implica la expulsión de muchas de las élites y su sustitución por otras. Además, los regímenes se han visto amenazados por el creciente respaldo popular a los grupos políticos islamistas, que han demostrado en numerosas ocasiones que pueden ganar en el caso de producirse elecciones democráticas libres, como fue el caso en Argelia o más recientemente en los Territorios Ocupados palestinos, o los «avisos» en Jordania, en Egipto, en Marruecos, etc. Es por todo ello que los regímenes han utilizado todos los recursos a su alcance para impedir una democratización real del sistema, contando, en el caso de los países aliados, con el apoyo de los gobiernos occidentales quienes también querían evitar un cambio de élites en el poder.

Así, el fracaso de las transiciones y de la «transitología» (Camau, 1999) en esta región puso de manifiesto que no era suficiente centrar el análisis en aparentes procesos de democratización, sino que debía este extenderse a los problemas de gobernabilidad y cambio político, que no se limitaban únicamente a la continuidad de los regímenes. Si bien algunos autores se preguntaron si podían aplicarse conceptos de corte occidental a sociedades con tradiciones tan diferentes (Camau, 1971), Leca (1994), tampoco resulta útil centrarse en la «excepcionalidad» de los países árabes y crear modelos específicos para la región ya que, desde nuestro punto de vista, las dificultades a la hora de analizar estas transiciones residen más en las limitaciones de los enfoques teóricos que en la anormalidad de estas sociedades.

En este sentido, y siguiendo el camino ya iniciado por las obras de Salamé (1994), Norton (1995), Khader (1997), Brynen, Korany y Noble (1995), Perthes (2004), así como los informes sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe del PNUD (2005), el proyecto de investigación llevado a cabo en el marco de la Fundación CIDOB intenta ofrecer un análisis de las relaciones de poder en el mundo árabe que nos permita comprender y contrastar las dinámicas de los regímenes políticos en esta región.

La Sociología del poder

La propuesta teórica que se presenta a continuación pretende ser una herramienta útil para sistematizar el análisis de las estructuras de poder que

rigen cualquier sociedad. Así, considerando las sociedades y los sistemas políticos árabes como un caso «normal», la Sociología del poder² busca desarrollar un marco teórico universal que permita comparar las dinámicas de las relaciones de poder en esta región a las del resto del mundo.

A lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades ha generado modelos de organización jerarquizados en sus relaciones políticas, sociales y económicas. Una sociedad jerarquizada es un sistema social compuesto por unos actores que establecen relaciones entre sí, de acuerdo a su capacidad para disponer de determinados recursos. De este modo, para analizar la estructura del poder de una sociedad es necesario identificar la tipología de los actores y su relevancia, las dinámicas que rigen las relaciones entre estos, los recursos de poder de que disponen, así como su respectivo peso en la sociedad.

Respecto a los actores, la creación de jerarquías conlleva inevitablemente la división de los miembros de la sociedad entre gobernantes y gobernados o, como se define en nuestro marco teórico, entre élites y población. La segunda se encuentra en la base de la pirámide social y generalmente está sometida a las decisiones de las élites, excepto en momentos puntuales en los que se convierte en actor. La división entre élites y población se fundamenta en los distintos objetivos e intereses que guían a cada uno de los grupos. Por una parte, el interés de las élites debe definirse en términos de poder. Su objetivo prioritario será siempre mejorar su posición en la jerarquía compitiendo con las demás élites.³ La relación que se establece entre las élites es de competición circular, sin fin, pues sus aspiraciones son siempre relativas, al medirse constantemente con la posición del resto de actores. El interés de las élites es entonces lo que definimos como «acumulación diferencial de poder», es decir acumular más poder que sus competidoras. Esta competición por la acumulación de poder se produce en todos los ámbitos de la sociedad. Además, la formación de élites implica inevitablemente competencia por el control de recursos de poder, ya sean estos políticos, económicos, informativos, coactivos, ideológicos, o de cualquier otro tipo.⁴ Respondiendo a este análisis, nuestra concepción del poder está ligada al propio proceso competitivo, y entendemos que el poder acumulado es un poder efectivo en la medida en que es útil para acumular más poder.

Por otra parte, definimos como «relaciones de poder lineales» las relaciones que establece la población cuando es capaz de identificar de forma consciente sus necesidades y se moviliza para alcanzarlas. En es-

tos casos, los objetivos del actor «población» no son relativos y, por lo tanto, cuando se consiguen la relación de poder se extingue. El carácter lineal de dichas relaciones deriva del hecho que se puede marcar un principio —el momento en el cual el proceso de toma de conciencia evoluciona en acción colectiva—, y un fin —cuando la movilización tiene éxito y se consiguen las reivindicaciones o cuando es derrotada y se abandona la acción—.

Por consiguiente, el análisis de los sistemas sociales nos obliga a identificar cuándo una relación de poder es lineal o circular. Dicho de otra forma, es necesario identificar cuándo los actores tienen objetivos e intereses concretos en términos de mejora de su condición de vida, y cuándo los actores tienen como objetivo prioritario la acumulación diferencial. De este modo descubrimos cómo en el análisis de las sociedades, si bien son las relaciones lineales las que dibujan el progreso y las transformaciones, son las relaciones circulares las que predominan, dirigidas por unas élites que se aferran a su posición de poder, contribuyendo así a largos períodos de continuidad y estancamiento en la historia.

Otro elemento fundamental de la Sociología del poder son los recursos de los que disponen los actores y su relevancia en el seno de la sociedad. Los recursos que utilizan las élites para competir por la acumulación diferencial de poder, o la población para luchar por sus objetivos, varían en función del sistema que se analice y de su estructura. Los recursos principales en la mayoría de los sistemas contemporáneos son el Estado, el capital, la ideología, la información, la coacción y la misma población. Sin embargo, eso no implica que no existan otros recursos como pueden ser los partidos o las corporaciones, que en algunos sistemas llegan a tener un papel central. El peso de cada recurso, relacionado con la coyuntura y los procesos de acumulación de cada momento, determina su posición primaria o secundaria.

Los diferentes elementos que acabamos de introducir configuran la estructura de poder de una sociedad, pertenezca esta al mundo árabe o a cualquier otro entorno. Por esta razón, ahondar en la configuración de las estructuras de poder es básico para entender las dinámicas de cambio y continuidad de los sistemas políticos. Y en el caso específico del mundo árabe, la aplicación de Sociología del poder permitirá comprender y explicar el fracaso de las transiciones políticas en esos países.

Relaciones de poder circulares

Como hemos visto, el principio fundamental de la sociología de poder reside en la función acumulativa de las élites, y en que la posición de un actor en una jerarquía determinada dependerá siempre de su capacidad para competir con el resto de los miembros de la jerarquía, o con aquellos otros que están aspirando a entrar en ella. Así, identificamos las relaciones de las élites entre sí como de permanente competencia mutua, o relaciones de poder y por el poder. Y como acabamos de señalar, sus objetivos serán siempre relativos, sujetos a la capacidad de acumulación de sus rivales

De ese modo, la supervivencia como élite de cada actor depende de su capacidad de acumulación diferencial de poder: la acumulación de más poder que el resto de los actores. El poder concreto de cada actor es medido siempre en comparación con las demás élites, por lo que las relaciones que se establecen construyen un sistema en el cual la competición no se detiene nunca. Al mismo tiempo, la lógica de la competición se hace más feroz cuanto mayor es el poder que controlan las élites. Esta dinámica competitiva es propia de los sistemas jerárquicos, por lo que cualquier individuo que se encuentre en esta posición elitista, deberá competir o perderá su poder. La posición de cada una de las personas que forman parte de la élite dependerá de sus recursos, sus capacidades y sus alianzas en la competición con los demás. Esta dinámica de competición constante, y de alianzas dentro ella, se extiende a todos los recursos de poder y a todas las épocas y latitudes que han conocido organizaciones jerárquicas. Además observamos cómo, a lo largo de la historia, las relaciones de poder circulares son factores causantes del conservadurismo, al ser el mantenimiento y acumulación de los recursos de poder de los actores la dinámica dominante.

Por otra parte, en el análisis de la estructura de poder de una sociedad es importante tener en cuenta la multidimensionalidad del poder, la multiplicidad de actores y también que se trata de una competición en la que todos los actores/élites están implicados y se influyen mutuamente. Al ser los recursos de poder multidimensionales y al estar sometidos al control de múltiples actores en competencia, cada uno de estos actores también está sometido a la influencia de los demás. Asimismo, son frecuentes los casos en que los mismos actores pueden coincidir total o parcialmente en el control de unos y otros recursos.

A todo ello debemos añadir que, como el poder no es una abstracción, los actores implicados en una relación de poder no pueden ser entes abstractos como la nación o el Estado, sino individuos o grupos sociales, entendidos como una alianza entre individuos, y el análisis debe centrarse en ellos. Cuando nos referimos al Estado, la corporación, la iglesia, el partido y otras instituciones, debemos tener en cuenta que en realidad nos referimos a las élites que controlan estas instituciones. Y cuando hablamos de la población como actor, a lo que aludimos es a una alianza de individuos con objetivos comunes.

Relaciones de poder lineales

En toda sociedad, en algunos momentos de su historia, junto a las relaciones circulares, coexisten las relaciones de poder que establece la población cuando actúa para mejorar sus condiciones de vida. En las sociedades jerarquizadas no es fácil que los individuos tomen conciencia de sus intereses en términos de mejora de su calidad de vida. Y cuando lo hacen se encuentran con la dificultad de movilizarse para luchar por este objetivo, pues en la mayoría de las ocasiones ello implica enfrentarse a las élites que se resisten a la transformación del statu quo que les es favorable en su proceso de acumulación. Pero cuando la población consigue movilizarse, genera una relación de poder muy distinta de la competición de las élites entre sí. En estos casos, los objetivos de las personas son concretos y, por tanto, cuando se consiguen la relación de poder termina. Por esta razón hablamos de relaciones lineales, que tienen un principio en el proceso de toma de conciencia y un final si la movilización tiene éxito y se consiguen las reivindicaciones.

La población como grupo social acostumbra también a ser un recurso para las élites. La vida cotidiana de una persona suele estar basada en la cesión —consciente, inconsciente o forzada— de la capacidad de decidir. La democracia representativa, las relaciones de producción, el propio Estado, las ideologías, el control de la información, la coacción... son instrumentos en manos de las élites para extraer y acumular el poder de la población.

Sin embargo, cuando una mayoría de la población establece relaciones de poder lineales para alcanzar objetivos propios se convierte en un actor transformador con capacidad para provocar cambios en la so-

ciudad. Estos cambios, definidos por los objetivos que busque la población, pueden ser menores y coyunturales, como por ejemplo un convenio colectivo en una empresa o la lucha por la mejora de un barrio, o grandes y estructurales como la exigencia de derechos y libertades en contra de una potencia colonial o una dictadura.

Los procesos de cambio social solo se producen cuando el pueblo lucha por intereses propios, convirtiéndose en actor político y dejando de ser un recurso en manos de las élites. Sin embargo, esto no significa que no se puedan establecer alianzas entre la población y algunas élites, cuando los intereses de ambas son coincidentes, como veremos más adelante.

Los actores

El análisis de los actores desde la Sociología del poder se centra en aquellos individuos que tienen capacidad de tomar decisiones sobre el uso de los recursos de poder y de intervenir en las relaciones de poder. Nuestra definición parte de las siguientes premisas: se aplica solo a seres humanos que son conscientes de sus intereses, y cuya actividad se caracteriza por la intencionalidad y modifica las relaciones de poder existentes.

Podemos diferenciar entre dos categorías principales de actores: las élites y la población. Como veíamos, esta división responde a los intereses y al tipo de relaciones de poder que establece cada grupo; por una parte, el interés de las élites es la acumulación diferencial de poder y las relaciones que establecen en este proceso circulares; por otra parte, el interés del pueblo es la mejora de sus condiciones de vida, y sus relaciones, lineales.

Las élites

Las aproximaciones teóricas al concepto de élite se han realizado desde diferentes puntos de vista. En nuestro estudio nos alejamos de las nociones de clase o privilegio⁵ para centrarnos en la idea de la competición por la acumulación diferencial de poder, y nos referimos siempre a un número limitado de personas. Tal y como ya señalaba Maquiavelo, «en todas

las repúblicas, sea cual sea su forma de gobierno, apenas cuarenta o cincuenta ciudadanos participan en la dirección de sus asuntos» (1513-1517: cap. XVI). Consideramos pues élites a los individuos que se encuentran en una posición jerárquica superior en las instituciones sociales y cuya supervivencia en esta posición depende de su capacidad para competir por la acumulación de poder.

Los límites de la actuación de cada élite dependen de la estructura de poder de cada sociedad. Así, en sociedades más democráticas existe una mayor especialización de las élites pues estas están más conectadas con recursos específicos de poder, mientras que en sociedades más autocráticas las élites concentran el control de una mayor variedad de recursos. Sin embargo, es muy difícil que en las sociedades contemporáneas, sea cual sea la estructura de su sistema de poder, exista la completa especialización en un recurso o se posea control absoluto sobre todos los recursos, pues estos están mucho más diversificados que en épocas anteriores.

El grado de concentración del poder es también relevante para poder analizar el sistema. Un sistema estructurado sobre pocas élites primarias tenderá a la oligarquía: a la autocracia en su dimensión política y al monopolio en su dimensión económica. Cuantas más élites participen en la competición, más dura será esta y más posibilidades tendrá la población de establecer relaciones lineales por sus propios intereses. Como apunta Mannheim, cuantas más élites haya en una sociedad, más tiende cada élite individual a perder su función y su influencia como líder, pues se compensan entre ellas. En una sociedad democrática de masas, sobre todo si existe una gran movilización social, ningún grupo puede conseguir influenciar profundamente a toda la sociedad (Mannheim, 1940).

Como podemos observar en el presente estudio, la mayoría de los países árabes son ejemplos de lo contrario: un grupo muy reducido de personas controla los principales recursos de poder y, sobre todo, mantiene una relación autocrática con el Estado, principalmente a través del monopolio del uso de las rentas exteriores. Esto no significa que haya un control absoluto por parte del gobernante sobre todos los recursos. En el seno del régimen, el gobernante acostumbra a tener la competencia de otras élites con control sobre el ejército, el partido dominante, los servicios secretos o la ideología más fuerte. Las monarquías de Marruecos y Jordania son probablemente las que han conseguido una mayor concentración del control sobre los recursos, desde el Estado hasta el capital y el ejército.

Por el contrario, un sistema estructurado sobre una gran diversidad de élites primarias tenderá a la poliarquía pues la competición estará abierta. Sin embargo no debemos asociar poliarquía con democracia. El ejemplo del Líbano nos es útil en este sentido. Aunque las élites libanesas forman un sistema notablemente más poliárquico que los existentes en la mayoría de las sociedades árabes, su sistema político confesional no puede ocultar que el proceso de acumulación de las élites en el seno de sus respectivas comunidades religiosas no es, en absoluto, democrático. Georges Corm llega incluso a comparar el sistema libanés con un sistema totalitario (Corm, 2005).

El análisis de las élites y su competición por la acumulación diferencial de poder también debe tener en cuenta factores como los ámbitos de procedencia de dichas élites (sectores sociales, profesionales, educativos, corporativos, de la administración del Estado...), o los mecanismos de acceso al control de los recursos de poder por parte de estas (herencia, nepotismo, clientelismo, conquista, revolución...). En la historia reciente del mundo árabe, las independencias y los diferentes golpes de Estado abrieron el acceso a los recursos a las élites que estaban ligadas a los grupos responsables del cambio político. Posteriormente, a medida que las élites se fueron asentando y ampliando, el nepotismo y el clientelismo se convirtieron en los mecanismos más usados. Con el paso del tiempo, el cambio generacional abrió la puerta a la herencia, no solo en las monarquías, sino también en los regímenes republicanos y en todos los ámbitos del poder. Los ejemplos de Siria con los Assad y Egipto con los Mubarak son los más evidentes en esta dinámica que no se limita a los máximos dirigentes y también puede apreciarse en otras élites, como es el caso de algunas de las «jóvenes guardias» de Siria, Jordania, Egipto, Marruecos y otros países, en los que encontramos a hijos de las élites establecidas disputando el poder político y económico a las «viejas guardias».

La procedencia de las élites tiene una gran influencia en la homogeneidad del grupo dirigente. La cohesión y capacidad de generar alianzas en las élites puede verse facilitada o dificultada por el grado de homogeneidad entre estas. Giddens distingue entre la integración moral y la integración social. La primera se refiere a las ideas y valores que las élites pueden compartir, y al grado de conciencia de tener lazos de solidaridad comunes. La segunda, la integración social, se refiere a la frecuencia y la naturaleza de los contactos y las relaciones entre las élites (Giddens,

1974: 5). Por ejemplo, en el caso de las élites saudíes encontramos un grado muy alto de integración tanto moral como social, principalmente en el seno de las élites primarias constituidas por la familia Saud. A diferencia de Jordania y Marruecos, la extensión de la familia Saud permite que no solo la Casa Real, sino también los principales cargos políticos y económicos estén ocupados por miembros de la familia, por lo que el sistema está ligeramente más descentralizado que en Marruecos y Jordania, donde el rey es el actor primario casi único. Además, el sistema saudí es muy homogéneo porque la mayoría de los cargos primarios recaen en la familia real. En otro ejemplo, esta vez «republicano», en Siria las élites primarias se han construido también sobre bases muy homogéneas, incluso familiares. Líbano, por el contrario, ofrece una muestra de una élite con un grado muy bajo de integración moral y social a escala nacional, aunque en algunos ámbitos comunitarios ocurre todo lo contrario.

Las diferencias de integración, tanto moral como social, de las élites se reflejarán en su capacidad de generar alianzas. La homogeneidad ayuda a crear intereses y percepciones similares sobre la sociedad, que facilitarán las alianzas entre las élites (Whitley, 1974: 65). Así, es probable que en el seno de una élite homogénea las alianzas contra terceros sean más fáciles y más duraderas, o que la competición por el poder pueda desarrollarse de una forma más pautada y menos conflictiva. Siguiendo con los ejemplos anteriores, Soler y Zaccara nos muestran como las disputas en el seno de la familia Saud, aunque pueden ser enormemente tensas, incluso en los momentos de máxima importancia como la sucesión de la corona se han podido solucionar casi siempre mediante negociaciones o incluso estableciendo instituciones para ordenar el proceso (la Ley Fundamental de 1992 y la Comisión Bay'a de 2007). Sin embargo, debemos recordar que la competición entre las élites nunca se detiene por completo, pues al fin y al cabo se trata en todo momento de jugadores individuales. Como podemos observar en el capítulo sobre Siria, a pesar de la homogeneidad, la competición ha conducido incluso a intentos de golpe de Estado como el de Rifa'at contra su hermano Hafez al-Asad, o a tensiones entre Bashar al-Asad y su cuñado Shawkat. Aunque si comparamos el período del régimen de los Asad con las épocas anteriores, sí es de señalar una estabilidad en la que la integración de las élites ha desempeñado un papel importante.

En el sentido contrario, vemos que la heterogeneidad de las élites puede provocar inestabilidad y tener incluso consecuencias cruentas,

como por ejemplo en el Líbano, donde el control de unos recursos de poder de mucha menor valía que en Arabia Saudí ha conducido en ocasiones a enfrentamientos armados, llegando incluso a la guerra civil.

Por otra parte, es también importante tener en cuenta hasta que punto el acceso de otros actores a la élite está abierto o bloqueado. Si bien una élite cerrada suele ser más homogénea y por tanto conllevar una competición menos conflictiva, esta misma cerrazón puede provocar que el acceso de otros competidores externos al grupo, de suceder, se produzca mediante métodos más traumáticos y provoque cambios importantes en la estructura del sistema. Por ejemplo, en Arabia Saudí una nueva élite ajena a la familia Saud solo podría llegar a competir por el control del Estado con una revolución que transformara de forma radical el sistema.

Por el contrario, la democratización efectiva del sistema político podría abrir de una forma ordenada el acceso de nuevas élites al control del Estado, reduciéndose entonces las posibilidades de inestabilidad y de violencia. Sin embargo, esto debilitaría claramente a los dirigentes actuales, que podrían perder el poder, por lo que las élites dominantes harán todo lo que esté en su mano para impedir el acceso de otros competidores. Y es precisamente esta la razón por la que los diferentes regímenes árabes son reacios a permitir transiciones realmente democráticas y que incluso cuando convocan elecciones formales se aseguran de que el control efectivo del Estado permanezca en manos del régimen. Esto se repite sin duda en todos los países que hicieron gestos liberalizadores como Egipto, Jordania o Marruecos. Concretamente en Argelia, la rápida respuesta de las élites en el poder fue a todas luces un golpe de Estado que anulaba la victoria electoral de los islamistas y que, al mismo tiempo, condujo a la guerra civil. Únicamente en los lugares donde las viejas élites no lo han podido evitar, nuevas élites han accedido al control del Estado, pero aun así, el proceso se ha topado con la férrea resistencia de los dirigentes establecidos. En los Territorios Ocupados palestinos, por ejemplo, las reticencias de Fatah a aceptar el gobierno de Hamas hicieron incrementar la tensión hasta el punto de producirse la ruptura entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Y en Líbano, Hezbolá tuvo que hacer valer su fuerza militar para ser incluido en el reparto del Estado entre las comunidades.

La posición de las élites en el sistema y su capacidad de acumulación también está ligada a los recursos que controlan. No todos los siste-

mas se estructuran de la misma manera; en algunos el recurso esencial puede ser el Estado, en otros el capital, y en otros la coacción o la ideología, o una combinación de varios. Pero en el mundo árabe, excepto algunos casos excepcionales, el recurso fundamental es el Estado, y la competición principal se produce entre las élites que pueden rivalizar por su control. Otros recursos, como capital, información o coacción dependen en buena medida de este recurso principal. Solo la ideología escapa, en algunos casos, al control desde el Estado, permitiendo a élites competidoras amenazar la supremacía de los regímenes. En la actualidad, esta amenaza de la ideología proviene del islamismo, que ha sustituido al nacionalismo y a la izquierda como ideología movilizadora de masas.

Élites primarias y secundarias

El análisis de las élites nos permite apreciar que, aunque todas participan en la competición por la acumulación diferencial de poder, presentan diferentes grados de incidencia sobre el sistema. Por una parte, las élites primarias poseen la capacidad de competir por el control de los recursos que permiten mayor acumulación en cada momento, y al mismo tiempo, al relacionarse entre sí, delimitan los equilibrios de poder que estructuran todo el sistema. Como apuntábamos, refiriéndonos al mundo árabe, serán élites primarias aquellas que puedan competir eficazmente por el control del Estado, la renta, la coacción y, en ocasiones, por el capital privado y la ideología.

Por su parte las élites secundarias, aunque intervengan también en la competición, se mueven en la estructura generada por las élites primarias, ocupando puestos subalternos en la jerarquía, por lo que su acceso a los recursos dependerá de sus alianzas con las élites primarias.

Como veremos, la posición primaria o secundaria de una élite puede variar con los cambios en la estructura del sistema, bien por nuevos equilibrios o bien por cambios revolucionarios en los recursos o en los actores. En los países árabes por ejemplo, a medida que se fueron asentando los estados, las élites tribales perdieron poder. En muchas ocasiones pasaron a depender de las élites estatales, pues la distribución de las ayudas sociales, trabajo, prebendas... depende de quien controla la renta exterior. Así, el papel de las élites tribales pasó de ser primario cuando la

base de la organización social, política y económica era la tribu, a ser secundario cuando el Estado se convirtió en el centro del proceso de acumulación de poder.

En ocasiones, un individuo o grupo puede disponer de un recurso de poder importante, pero si se encuentra en una posición de dependencia, continuará siendo una élite secundaria. Bustos y Mañé ofrecen un ejemplo al respecto en el capítulo de Argelia: el del magnate Abdelmunim Khalifa, quien a pesar de haber amasado una enorme riqueza no dejó de tener una posición secundaria, tal y como pudo observarse con su caída en desgracia cuando dejó de ser útil para el proceso de acumulación de las élites primarias argelinas.

Otra forma de identificar la posición de las élites en el sistema es analizando si estas son fácilmente reemplazables a la hora de formar alianzas, sin una merma importante de poder para la élite aliada. Un actor primario puede sustituir fácilmente su alianza con un actor secundario sin que ello afecte a su capacidad de acumulación, mientras que un actor secundario depende de su alianza con el primario. Por ejemplo, cuando una élite estatal de un país árabe decide reemplazar al directivo de una empresa, o decide redistribuir la renta hacia otra tribu, o hacia la misma tribu a través de otro jeque o notable. Por otra parte, las élites primarias siempre establecerán sus relaciones con las secundarias intentando evitar que estas tengan acceso a los principales recursos de poder. En este sentido, Ayubi dice que las alianzas de base distributiva incorporan económicamente a las élites aliadas al régimen, pero las excluyen políticamente (Ayubi, 2000: 307).

Por el contrario, los cambios en las alianzas entre los actores primarios forman parte del «gran juego» y tienen repercusiones directas en los equilibrios de poder del sistema y, por lo tanto, en la estructura del mismo. Una importante alianza entre actores primarios en el mundo árabe fue la de Muhammad ibn Saud con Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que daría lugar a la actual Arabia Saudí. El Pacto Nacional en Líbano es otro ejemplo de alianza fundacional, en este caso de un sistema basado en los equilibrios comunitarios. Tal y como exponen Goenaga y Sánchez, el Líbano moderno nace del pacto de las élites cristianas con las élites suníes para repartirse el control del Estado. Un sistema que se ha ido reestructurando y reafirmando con los cambios en la relación de fuerzas de las distintas comunidades, sobre todo a medida que las élites chiíes han podido reclamar su participación en el control de las instituciones, tras la

guerra civil con el acuerdo de Taif, y con los acuerdos de Doha de 2008 después de la demostración de fuerza de Hezbolá.

La capacidad de ser actor depende, por lo tanto, directamente del poder que se consigue acumular. Por esta razón, un actor tiene que ser analizado en el contexto del subsistema en el que tiene influencia. Diferentes espacios generan diferentes sistemas con distintas estructuras. En ese sentido, en el sistema global deberemos tener en cuenta solo a aquellos actores que tengan capacidad para utilizar recursos «globales» como: estados-potencia; grandes corporaciones transnacionales; hegemonías e ideologías globales (como las grandes religiones, el neoliberalismo, el socialismo o el comunismo, pero no ideologías nacionalistas que solo serán útiles como recursos de poder en ámbitos nacionales); capacidad de coacción internacional; capacidad informativa internacional; normas e instituciones internacionales... Pero puede haber también sistemas regionales, estatales, locales o incluso referidos a una institución como una iglesia, un partido, una corporación, etc. De esta forma, actores primarios en el análisis de un sistema inferior pueden ser secundarios en el sistema superior. Continuando con el ejemplo anterior, si analizamos el sistema tribal de un país árabe, los jeques serán los actores primarios. Pero si analizamos el sistema del país de forma global, los jeques ocuparán un lugar secundario frente las élites que controlan el Estado.

La población

El análisis de la población como actor ofrece mayores dificultades que el de las élites, pues en muchas ocasiones la movilización de las masas responde también a la capacidad de manipulación de algunas élites para utilizarlas en su propio beneficio.

En este sentido Inglehart distingue entre la participación dirigida por la élite y la participación que desafía a la élite. En el primer caso se refiere a una amplia masa de ciudadanos, en general poco preparada políticamente y guiada por un pequeño número de líderes normalmente a través de los partidos, sindicatos, iglesias u otras instituciones. En el segundo caso, la acción está más orientada hacia objetivos concretos y tangibles, y se basa más en grupos formados ad hoc que en una organización burocratizada. Este tipo de participación requiere un nivel más alto de experiencia política por parte de la población (Inglehart, 1977: 299-300).

Por lo tanto, para distinguir cuándo la población es actor o recurso, es necesario analizar el objetivo planteado en la movilización. Cuando los fines de la población están ligados a su interés en términos de mejora de sus condiciones de vida, nos encontramos ante relaciones de poder lineales en las que los colectivos populares cumplen un papel de sujeto. La población se mueve normalmente sobre un eje que abarca desde la no conciencia de sus intereses (resultado de la manipulación ideológica por parte de algunas élites), a la reivindicación de mejoras en su modo de vida y la movilización para conseguirlas. En función de su posición en dicho eje, las personas serán capaces de pasar de ser un mero recurso en manos de los más poderosos, a ejecutar acciones reactivas en contra de actuaciones de las élites que atenten contra su bienestar, o, incluso, emprender acciones proactivas para redefinir y lograr sus verdaderos objetivos. La relación que mantengan las élites con la población también variará en función de la posición de la población sobre el eje. Cuanto más concienciadas estén las personas sobre su situación social, más buscarán legitimarse las élites, con lo que su capacidad de acumulación se verá afectada por la necesidad de dar una respuesta a los intereses y objetivos de la población.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la población se moviliza ante decisiones tomadas por las élites y que lesionan sus intereses. En palabras de Tilly, una acción colectiva reactiva consiste en el esfuerzo de un grupo por reestablecer derechos adquiridos cuando alguien los amenaza o viola (Tilly, 1978: 367-368). En estos casos, la iniciativa siempre parte de las élites y la población se limita a reaccionar ante ellas. Además, los objetivos de esta acción podrían describirse como poco ambiciosos, debido a que dicha posición es defensiva.

Cuando existe una conciencia clara de sus intereses, la población puede tener la iniciativa y movilizarse para conseguir objetivos definidos por ella misma, rompiendo los límites impuestos por las élites. Como define Tilly en la misma obra, las acciones proactivas reivindican derechos que no se habían ejercido con anterioridad. En estas ocasiones, el movimiento es transformador de la realidad social. Sin embargo, en estos casos la movilización de la población resulta más difícil, pues en primer lugar debe adquirir conciencia de su situación y después pensar en los cambios necesarios para mejorarla, además de lograr unirse para luchar por ellos.

Así, un factor esencial en la movilización de la población es la capacidad de acción colectiva. Como menciona Przeworski, lo que amena-

za realmente a los regímenes autoritarios no es la pérdida de legitimidad sino la organización de una contrahegemonía: la existencia de un proyecto colectivo como alternativa de futuro (Przeworski, 1991: 54). En el mundo árabe, las grandes movilizaciones proactivas se dieron —y todavía se dan en el caso palestino— en pro de la liberación del control colonial. Una vez conseguidas las independencias, las movilizaciones de masas pasaron a ser reactivas y a producirse sobre todo en momentos de crisis económica, cuando los regímenes no podían continuar manteniendo las mejoras sociales forjadas con la consolidación de los estados independientes. Como veremos a lo largo del libro, buen ejemplo de ello son las «revueltas del pan» que sucedieron en los años ochenta y noventa en la mayoría de países árabes.

El principal recurso de la población para alcanzar sus intereses es, por lo tanto, su propia movilización mediante acciones de protesta, oposición o resistencia. Sin embargo, no es su único recurso ni el más habitual. A veces la población puede usar la competición de las élites como un recurso para lograr sus objetivos, cuando estas necesitan el apoyo de los grupos sociales. En estos casos, la población gana capacidad de negociación y puede exigir mejoras en su bienestar, pero no deja de estar supeditada a las necesidades coyunturales de las élites que la utilizan como recurso en la competición.

La presencia de colectivos de vanguardia es también un recurso para la movilización de la población. Estos grupos pueden surgir en organizaciones de la sociedad civil, en sindicatos o incluso en organizaciones políticas si defienden los intereses de la mayoría, y su capacidad de acción estará ligada a su incidencia en la población y su potencial para movilizarla. Sin embargo, estas organizaciones sufrirán importantes tensiones si pueden acceder a controlar recursos de poder, pues entonces los objetivos de la población pueden chocar con las necesidades de los líderes de la organización, que perderán su papel de vanguardia de una relación lineal para asumir su papel de élite competidora en una relación circular. En esta ambivalencia se mueven, por ejemplo, algunos líderes y dirigentes de asociaciones profesionales y empresariales en Jordania o Egipto, de algunas ONG en los Territorios Ocupados palestinos, de algunos partidos en Marruecos, Argelia o Egipto, e incluso algunos de los líderes de los Hermanos Musulmanes en Egipto o Jordania.

La población no actúa siempre con la misma intensidad, por lo que también podemos distinguir grados diferentes en sus actuaciones.⁶ Las

acciones reactivas tienen en muchas ocasiones la forma de protestas puntuales y gozan de un cierto grado de espontaneidad. Son movimientos de respuesta a hechos concretos, o demandas generadas por una gran presión ejercida sobre la población hasta el punto de que a esta le es difícil continuar soportándola.

La oposición se distingue de la protesta porque está más estructurada. La diferenciamos de la resistencia si se lleva a cabo desde dentro del sistema, aceptando sus reglas del juego. Normalmente la abanderan las organizaciones políticas, religiosas o de la sociedad civil legales o paralegales (no clandestinas). Los procesos de apertura de algunos regímenes árabes han hecho florecer este tipo de organizaciones y, en ocasiones, algunos grupos, que bajo la represión más dura actuaban desde la clandestinidad contra el régimen, han aceptado contemporalizar con el poder para salir a la superficie y pasar de una actividad de resistencia a una de oposición (el caso de los Hermanos Musulmanes en Egipto es una muestra de esta dinámica).

Los intentos de transformación del sistema, o de algunas de sus políticas en el caso de que afecten a las bases del régimen, adquieren una dimensión más profunda que las dos anteriores. Los movimientos de resistencia solo tienen fuerza en momentos de fragilidad del régimen. Mientras que la respuesta de los regímenes a las protestas y la oposición puede oscilar entre la represión o la negociación y concesiones para aumentar la legitimidad, en el caso de los movimientos de resistencia la coacción es manifiesta pues lo que ponen en duda es la permanencia de las élites y de su control sobre los recursos de acumulación de poder, y por tanto su misma existencia.

Como ya veíamos en Inglehart, las acciones de la población también pueden estudiarse en función de su relación con las élites; pueden estar dirigidas por estas, o pueden cuestionar e incluso amenazar su existencia. Aunque a menudo estas dos dimensiones pueden aparecer en una misma movilización. En el primer caso, tras las actuaciones de la población dirigidas por las élites encontramos en muchas ocasiones grupos estables y jerarquizados, que sirven de recurso a los dirigentes en su competición por la acumulación. En el segundo caso, las movilizaciones establecen relaciones lineales y los grupos acostumbran a ser poco jerarquizados y menos estables, desapareciendo o transformando su lucha cuando se ha conseguido el objetivo concreto que había generado la movilización.

Pero cuando las segundas movilizaciones se producen de forma duradera, lo que ocurre a menudo en luchas por grandes transformaciones sociales, se plantea una controversia en torno al papel de la vanguardia. Es fácil que, con el tiempo, los grupos que organizan la movilización se jerarquicen, y que la vanguardia de estos grupos adopte un papel cada vez más cercano a la élite. Esto puede conducir a la aparición de partidos, o a que algunos dirigentes, una vez conseguido el objetivo, no acepten retirarse e intenten aprovechar el éxito de la movilización para posicionarse en la élite. También puede ocurrir que esta vanguardia, convertida ya en élite, intente transformar los objetivos iniciales de la población en su propio beneficio. En ambos casos, estos líderes habrán abandonado su papel de vanguardia de una relación lineal, para adquirir un papel de élite que utiliza a esta población como recurso en la competición por la acumulación diferencial de poder. Algunos de los regímenes árabes republicanos son producto de esta evolución de la vanguardia, como el FLN en Argelia, el Ba'az en Siria e Irak, o Fatah en Palestina.

Además, como veíamos, la existencia de relaciones lineales no implica automáticamente la desaparición de las relaciones circulares. En muchos casos cuando la masa se convierte en actor también es un recurso para algunas élites que pueden aprovechar la movilización en beneficio propio. En estas ocasiones, cuanto más responda esta élite a las demandas de la población más poder adquirirá. En este sentido, la legitimización de los regímenes árabes se produce por dos mecanismos distintos: como líderes de una ideología hegemónica o dando respuesta a las demandas de la población. Así, la mayoría de las élites en el poder, cuando falla el recurso ideológico intentan satisfacer a la población, y si no tienen capacidad para responder a sus reivindicaciones sufren una crisis de legitimidad.

De este modo, observamos como la visión que se nos va presentando a lo largo de los capítulos de este libro respecto a la vitalidad de la población como actor en el mundo árabe es pesimista. En términos generales, la movilización de los ciudadanos es esporádica y principalmente limitada a acciones de protesta. Las organizaciones de la sociedad civil son escasas y débiles, y los sindicatos y partidos políticos actúan, cada vez en mayor medida, como «oposición» que no cuestiona las bases de los regímenes, cuando no son meros instrumentos al servicio de la acumulación de sus dirigentes.

Recursos de poder

Los recursos que las élites pueden utilizar en su competición por la acumulación de poder conforman otro factor determinante de la estructura del sistema. El peso de los distintos recursos está ligado a la coyuntura y los procesos de acumulación, y el control de cada uno de ellos genera intereses y políticas distintas, y en muchos casos contradictorias. Por otra parte, un sistema con un alto grado de especialización de las élites en recursos distintos, o con diversidad de recursos fundamentales para el proceso de acumulación, será más difuso y con mayor diversidad de élites. En el sentido contrario, un sistema con élites poco especializadas y, por tanto, con capacidad de competir por todos los recursos fundamentales, o en el cual la acumulación de poder se base en un solo recurso, presentará una mayor concentración de élites. En los países árabes la mayoría de sistemas tienden a ser poco especializados con unas élites que compiten por el Estado como recurso primario. En la mayoría de los casos esto refuerza la tendencia a la oligarquía y a la autocracia política.

Esta preponderancia del recurso Estado en el mundo árabe nos llevará a centrar la atención en él, sin embargo comentaremos brevemente en primer lugar algunos de los otros recursos de poder de los que disponen las élites.

Sin entrar en el debate sobre la definición del capital, es importante no confundir este recurso con la riqueza ni con el beneficio. Coincidimos, pues, con la conclusión que, desde la economía política, presentan Nitzan y Bichler, quienes además introducen la idea de la acumulación diferencial:

La acumulación de capital no representa ni riqueza material, ni una amalgama productiva de «trabajo muerto», sino más bien la *mercantilización del poder*. Los capitalistas no acumulan cosas traídas del pasado, sino títulos de poder vendibles proyectados hacia el futuro. En este sentido, sus ganancias capitalizadas no representan un derecho sobre una parte de la producción, sino sobre una parte del control del proceso social. Así, a pesar de que el poder de los capitalistas se ejerce sobre la sociedad, se mide de forma relativa al poder de los otros propietarios. [...] En resumen, la cuestión central no es la acumulación en términos absolutos, sino la acumulación *diferencial*. [...] De esta forma, la conexión entre la acumulación diferencial y el poder tendría que resultar más evidente. Acumular de forma diferencial es aumentar su parte de las ganancias totales y de la capitalización.

Y aumentar su parte distributiva de estas magnitudes es aumentar su poder relativo para influir sobre el proceso de cambio social. La fuente de este poder es la habilidad de los propietarios de limitar estratégicamente o «sabatotear» el proceso de reproducción social» (Nitzan y Bichler, 2002: 36-38).

A partir de esta definición podemos entender que «capital» será todo aquello que sirva para acumular más «poder mercantilizado». Por esta razón, es necesario diferenciar, por ejemplo, el capital de la renta exterior, ya sea esta producto de la exportación de petróleo, de las ayudas recibidas o de la deuda contraída. La función de esta renta en la mayoría de países árabes no es generar más acumulación en forma de capital, sino en forma de control del Estado, clientelismo y legitimidad frente a la población.

También es importante recordar aquí que capital y corporación no son sinónimos. Es necesario diferenciar entre la acumulación de capital y la acumulación de poder corporativo. Giddens distingue entre élites propietarias y élites que controlan la organización. La corporación moderna ha ido evolucionando de estar controlada por los propietarios a estar controlada por los directivos, y estos dos sectores pueden tener intereses distintos (Giddens, 1974: 9). Galbraith también avisaba del poder de la burocracia corporativa (Galbraith, 2004), y del dominio corporativo sobre la economía capitalista, mal llamada «economía de mercado» (Galbraith, 1973).

Capital y corporaciones han adquirido un peso fundamental en los procesos de acumulación en los países desarrollados y en el sistema global. Tras las políticas keynesianas, anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo de los años ochenta y noventa acentuó todavía más la capacidad de acumulación de poder de las élites capitalistas y corporativas. En el mundo árabe, sin embargo, a pesar de casos excepcionales como el de Hariri en Líbano, vemos que tanto la acumulación de capital como la actividad de las corporaciones continúan dependiendo en buena medida del Estado o de las corporaciones multinacionales, por lo que las élites capitalistas y corporativas árabes tienen, en la mayoría de los casos, una posición secundaria.

Como hemos visto, otro recurso importante es la relación que se establece entre las élites y la población. Los esfuerzos por conseguir el apoyo popular constituyen una clara manifestación de la importancia de

este recurso para las élites. Si, como afirmaba Arendt, el poder reside en el grupo, la competición de las élites por conseguir ser las depositarias de la cesión de dicho poder será muy dura. El voto en las elecciones en una democracia representativa es seguramente el mecanismo más visible de extracción de poder a la población, en favor de la acumulación para las élites. La causa de la conversión de la población en recurso debe buscarse en la falta de conciencia de sus propios intereses. Tal y como ya expresaba Marx, la alienación supone la pérdida de la calidad de sujeto humano para convertirse en objeto (Marx, 1844) que será usado por las élites en su competición por la acumulación diferencial de poder, y en este proceso de alienación la ideología cumple un papel fundamental.

El análisis de la ideología como recurso nos lleva a diferenciar entre tres niveles distintos de influencia. Los dos primeros, que veremos más adelante, forman parte de la estructura del sistema, mientras que el último representa un recurso que algunas élites utilizan en la competición. En el primer nivel, que impregna todas las relaciones sociales y que podríamos definir como lo que Foucault llama el «régimen de verdad», encontramos los mecanismos inconscientes que nos hacen aceptar o rechazar ideas, valores y discursos. En el segundo nivel, que Gramsci define como «hegemonía cultural», una clase o un grupo social consigue que sus intereses de grupo sean asumidos como el interés general de toda la población. Pero, como decíamos, ambos serán analizados en el apartado de «Estructura del sistema» de este capítulo.

En el tercer nivel, nos situamos en un plano más concreto e inmediato, el de los sistemas de creencias políticas y religiosas difundidas por las élites para manipular a la población. Este es el nivel más evidente pues es el que se puede utilizar de forma más directa e independiente en la competición por el poder, donde encontraremos ideologías políticas y religiosas rivales, o disputas por el control de dichas ideologías. Estos enfrentamientos se producen, en muchos casos, dentro de la estructura establecida por el «régimen de verdad» y por la «hegemonía cultural», e incluso en el seno de las mismas clases sociales. La debilidad de la hegemonía, como es el caso en el mundo árabe, da mayor fuerza a la competencia entre sistemas de creencias. Esta competición no se da solo entre ideologías políticas enfrentadas o entre ideologías religiosas enfrentadas, sino que todas compiten con todas, pues la función de todas ellas es la misma: la acumulación de poder de las élites que las controlan. Por ejemplo, la decadencia del nacionalismo árabe alimentó la reislami-

zación de las sociedades musulmanas del Norte de África y de Oriente Medio.

La importancia de la información como recurso de poder se refleja en los grandes esfuerzos de los distintos actores por controlarla. Este recurso presenta dos vertientes: el control sobre la información que reciben los ciudadanos (medios de comunicación y educación) por un lado, y la información que se tiene sobre los ciudadanos y los demás actores (servicios de información). Respecto a los medios de comunicación, existen varios factores que deben tenerse en cuenta en el análisis. En primer lugar, el grado de concentración de los medios que se acerca, de forma casi universal, cada vez más a la oligarquía. En segundo lugar, la censura, tanto la impuesta desde el exterior como la procedente desde la dirección de un medio. Y, en tercer lugar, la independencia de los medios de comunicación, es decir, si los directivos son élites primarias o secundarias que están ligadas, por ejemplo, al Estado, a una iglesia, un partido, una corporación, etc. La importancia del control de la información en el mundo árabe es evidente por el grado de concentración de los medios y su posición secundaria respecto a las élites que controlan el Estado. En algunos países la información parece haber experimentado una ligera liberalización, como podría apreciarse en Marruecos, Jordania o Egipto, pero entonces la censura actúa estableciendo unas líneas rojas de protección de los regímenes que no pueden cruzarse, y si se cruzan los medios son duramente castigados. El caso de la televisión qatarí por satélite Al-Jazeera es paradigmático para entender la preocupación que suscita la información independiente en los regímenes árabes. Como comentarán más adelante Azaola y Kemou en el capítulo sobre Egipto, en 2008 se celebró una reunión de los veintidós ministros de Comunicación de la Liga Árabe, con la excepción del libanés y el qatarí, para adoptar un protocolo de censura sobre los medios de comunicación, pensado sobre todo para poder limitar la recepción de la exitosa Al-Jazeera en los países árabes.

En cuanto a la otra vertiente, la de los servicios de información, resulta necesario destacar la importancia del Mujabarat en la práctica totalidad de los países árabes. Como en todas las autocracias, el control de sus rivales y de los ciudadanos es un arma esencial para las élites en el poder. Aquí, ligado al de la información aparece el recurso a la coacción para mantener a la población amedrentada. La omnipresencia de los servicios de información tiene un enorme efecto disuasorio en muchas per-

sonas, reduciendo de forma evidente las manifestaciones de descontento popular, además de lograr provocar una gran desconfianza en el seno de los grupos o movimientos de protesta, oposición o resistencia, debido a las sospechas de infiltraciones de miembros de los servicios secretos.

La mayoría de las organizaciones jerárquicas cuentan con mecanismos de coacción para hacer respetar la autoridad de las élites dirigentes cuando los mecanismos hegemónicos (la legitimidad y la ideología) fallan. La represión directa es normalmente el último recurso al que recurren los regímenes para asegurar su supervivencia. Pero en muchos países árabes, como en cualquier autocracia, la violencia sobre la población está mucho más presente que en un sistema democrático liberal. El encarcelamiento, la tortura, o incluso la pena de muerte no son hechos esporádicos en estos regímenes, hasta el punto de que, como es sabido, el gobierno norteamericano no dudó en recurrir a los servicios de los torturadores de algunos de estos países en su «lucha contra el terrorismo». Sin embargo, a pesar de que sea lo más visible, la capacidad de coacción no se refleja solo en el uso de la violencia, sino también en el uso de la amenaza y el castigo, no forzosamente violento, para reafirmar la autoridad. Y en esta función encontramos, una vez más, en el papel central a los servicios secretos, cultivando con eficacia la presencia permanente de un Estado que «todo lo sabe y todo lo ve».

Además, las luchas por la independencia primero y los conflictos regionales después han reforzado el poder del ejército y la militarización del sistema en estos países. Egipto, Argelia, Siria o Mauritania son claros ejemplos del papel preponderante de las Fuerzas Armadas en la configuración de los regímenes. En Líbano, vemos también, en el papel de las milicias y actualmente de Hezbolá, la importancia de la fuerza armada, incluso para ganar legitimidad ante la población. En el resto de los países el ejército no deja de tener un papel fundamental. Además, la percepción de su papel histórico como responsable de lograr y mantener la independencia, y como elemento garante de la seguridad en una región con numerosos conflictos abiertos, hacen que gran parte de la población tenga una percepción positiva de estos cuerpos, lo que ayuda a incrementar la legitimidad, las prerrogativas y el presupuesto de las élites militares. Allí donde los generales no gobiernan, las élites políticas civiles hacen todo lo posible para tener a los militares satisfechos y, al mismo tiempo, controlados. Y cuando esto no es posible, la competición por el poder estalla en forma de golpes de Estado o en la realización de depura-

ciones en el ejército. Otra consecuencia de la militarización de los sistemas árabes ha sido que casi todos los ejércitos de la región han adoptado el papel de velar en última instancia por el mantenimiento de los regímenes, ya sea porque son los militares los que controlan el poder, o por las alianzas que estos establecen con las élites del régimen.

El Estado

La institucionalización del control de la población representa uno de los principales mecanismos de extracción de poder y de creación de élites. A través de la aprobación de leyes y normas, este proceso permite establecer objetivos colectivos, aceptados por la mayoría, y concentrar el poder en manos de las jerarquías, de forma que la estratificación social se convierte a su vez en una institución de la sociedad. La génesis del Estado está pues directamente conectada a la subordinación de la población a un grupo. Siguiendo las palabras de Balandier, el Estado tradicional permite a una minoría ejercer un dominio duradero, y las luchas por el poder en el seno de esta élite no la debilitan, sino al contrario, refuerzan su posición superior. El poder y la autoridad están tan personalizados que el interés público se distingue con dificultad del interés privado de quien los asume (Balandier, 1999: 176-177).

Como ya apuntábamos anteriormente, desde la visión de Hannah Arendt, el poder se basa en el grupo y no es nunca propiedad de un individuo. El individuo solo recibe «poderes» de un cierto número de personas y en cuanto desaparece el grupo se desvanece también ese poder (Arendt, 2005 [1970]). Si a esta idea de Arendt le añadimos la definición de Max Weber, del Estado como una «comunidad humana que se atribuye (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio dado» (Weber, 1985: 19), llegaremos a la conclusión de que uno de los aspectos más valiosos del Estado, como recurso de poder para las élites que lo controlan, es esta «legitimidad» en el ejercicio del gobierno y en el uso de la violencia. El mismo Weber, al analizar los diferentes mecanismos de legitimación del dominio (tradicional, carismático y legal), se referirá a capacidades de algunas élites de legitimar su dominación a través del control del Estado (Weber, 1985: 11-12).

Es necesario diferenciar entre Estado, gobierno y régimen. El Estado es una institución, que a su vez engloba a otras instituciones, en las

cuales confluyen la legitimidad tanto del ejercicio último del poder público como de la violencia. El Estado es un recurso de poder, pero es también una estructura organizativa de otras relaciones sociales y económicas, y sobre todo un sistema canalizador de recursos, tanto en el sentido de su concentración como de su distribución. El gobierno es la acción de uso del recurso Estado, y también el concepto que utilizamos para definir a los actores que tienen la capacidad de llevar a cabo esta acción en un momento dado. El régimen, sin embargo, es más que el gobierno, es la estructura que adoptan las relaciones de poder en el dominio del recurso Estado, y también usamos dicho término para identificar a las élites que tienen la capacidad de dar forma a esta estructura. La forma del Estado, del gobierno y del régimen variará según la coyuntura histórica del momento de cada sociedad.

El Estado árabe empezó a atraer el interés de los teóricos a partir de los años ochenta, pues antes habían centrado su atención más en nociones como la «Umma islámica» o el nacionalismo árabe (Ayubi, 2000). La aproximación a la formación de los estados árabes adoptó diferentes perspectivas, pues las distintas sociedades partían históricamente de diferentes formas de organización política, que después sufrieron distintos tipos de «exportación» del Estado europeo en diferentes momentos históricos. Badie, por ejemplo, señala que las diversas prácticas políticas y culturales en el proceso de exportación del Estado desde las metrópolis a las colonias varían según la trayectoria sociopolítica de cada poder colonial (Badie, 1992). A esta dinámica colonial y globalizadora que impone modelos de Estado según sus necesidades, debe añadirse el interés de las élites poscoloniales que ven también en el Estado un recurso de enorme potencial para su proceso de acumulación de poder.

Los analistas del Estado árabe proponen tipologías de Estado distintas dependiendo de los elementos en los que centran su atención. Alí al-Wardi distingue entre tres tipos de Estado árabe: a) el Estado mayoritario, en el que coexisten de forma conflictiva los grupos nómadas (*badawa*) y los grupos urbanos (*hadara*); b) el Estado en el que los grupos nómadas se convirtieron en dominantes, como es el caso de la península Arábiga; y c) el Estado en el que dominaron los grupos urbanos, como en el caso de Egipto (citado en Ayubi, 2000: 84). Iliya Harik, por su parte, menciona cinco tipos distintos: a) el sistema imam-jefe; b) el sistema de alianzas entre imames y jefes; c) el sistema secular tradicional; d) el tipo oligárquico de base militar-burocrática; y e) el sistema producto de la co-

lonización (Harik, 1987: 23-34). Ghassan Salamé, por su parte, señala que al contrario que en el resto de los países árabes, el Estado poscolonial en Marruecos y Egipto se basa en una «tradición de poder», el *makhzen* en el primer caso y la tradición faraónica e islámica en el segundo (Salamé, 1996: 59). Nazih Ayubi diferencia tres polos alrededor de los cuales se organiza el Estado y el régimen: el presidente, el ejército y el partido. El Estado-jefe estructura el sistema, y por debajo de él compiten el Estado-seguridad (Ejército y Mujabarat), el Estado-partido y el Estado-burocracia (Ayubi, 2000: 300-301). Como vemos, en todos los casos, la forma final del Estado está ligada a la procedencia de la élite que lo controla y al recurso fundamental que le ha permitido a dicha élite establecer el régimen que le es favorable.

En el caso de los estados árabes, al igual que en la mayoría de sociedades premodernas, no ha habido ningún grupo capaz de mantener una posición hegemónica en términos ideológicos (en el sentido gramsciano). Esta incapacidad por parte de las élites de generar una hegemonía sobre su sociedad tiene su claro exponente en la crisis de legitimidad de la que habla Gema Martín Muñoz:

La legitimidad histórica —haber dirigido la independencia— constituyó el elemento sustancial que dotó a los gobernantes poscoloniales del reconocimiento de sus poblaciones; dicha legitimación se prolongó con la promesa de lograr la independencia política y el desarrollo económico. [...] A medida que [las élites poscoloniales] tenían que dismantelar el pacto social que sustentaba el Estado protector, sin haber cumplido sus promesas de no dependencia y desarrollo económico (legitimidad nacionalista), el malestar de la ciudadanía se polarizó en la falta de participación y representación sociopolítica (legitimidad democrática) y en la necesidad de recuperación cultural de los valores islámicos propios (legitimidad islámica) frente a los exógenos. [...] La sequía progresiva de todas esas fuentes de legitimación lleva hasta el momento actual, en que el contrato social, el modelo político y la identidad cultural están en crisis (Martín Muñoz, 1999: 19).

Por esta razón, a diferencia de lo sucedido en las sociedades occidentales, la autoridad en los países árabes debe apoyarse más en los mecanismos coactivos. Así, la violencia y la coacción adquieren un papel, no de último recurso, sino de recurso cotidiano y normalizado (como la omnipresencia del Mujabarat). Aquí nos encontramos más cerca de la autori-

dad premoderna que de la autoridad invisible basada en la hegemonía de las sociedades modernas. La debilidad de la hegemonía hace más necesaria la coacción, y la autoridad premoderna hace de la exhibición de sí misma y de sus actos (el modelo de castigo en la plaza pública) uno de los mecanismos de restitución y mantenimiento ante quien haya osado ponerla en duda.

Usamos el término premoderna para referirnos a las sociedades que no han accedido a la modernidad de las economías desarrolladas y las instituciones heredadas de la Ilustración. No lo empleamos en un sentido cronológico, como si la premodernidad fuera un estadio al que siguiera el desarrollo y la modernidad. De hecho, en el sistema capitalista globalizado, el modelo de modernidad de las economías del centro desarrollado obstaculiza el acceso de las economías no desarrolladas de la periferia a esta misma modernidad, por lo que la premodernidad es más un estado permanente que un momento en la evolución de las sociedades.

En este punto, es importante huir de los análisis más cerrados del marxismo en los que se presenta al Estado como un mero recurso en manos del capital. Esto es más evidente incluso en el análisis de las sociedades premodernas actuales. La principal fuente de acumulación es el propio Estado, con lo que las élites primarias que definen los equilibrios de poder serán las que controlen el aparato estatal (quizás con las excepciones de Líbano y Mauritania, en los que la comunidad religiosa en el primero y la tribu en el segundo continúan teniendo un peso primordial).

La centralidad del Estado en el proceso de acumulación de poder provoca que la mayor lucha por el poder se localice constantemente alrededor de este. Por esta razón, el análisis de las sociedades árabes en términos de clase es necesario pero insuficiente, pues los equilibrios en las relaciones de poder y en la acumulación están más relacionados con el control del Estado que con las relaciones de producción y la acumulación de capital. Esto explica en gran parte la dificultad del tránsito a sistemas políticos democráticos, pues la pérdida del control del Estado implicaría, casi con seguridad, la desaparición como élite.

Los regímenes rentistas

La débil legitimidad de las élites que controlan el Estado árabe también se refleja en la forma de extraer algunos recursos de la sociedad. La

ausencia de hegemonía ideológica y la falta de legitimidad dificultan el proceso de acumulación en las élites por mecanismos institucionales, por ejemplo a través de la recaudación de impuestos. Esta carencia conlleva la aparición de otros procesos como la corrupción y, sobre todo, la apropiación de los recursos (como los recursos naturales, las rentas exteriores o la deuda externa) antes de que la población tenga acceso a ellos. Una vez se ha conseguido el dominio sobre el recurso que genera la renta, la relación con la ciudadanía ya no es de recaudación sino de distribución, lo que debilita enormemente la capacidad de negociación de la población y, por lo tanto, el poder de las élites es mayor y más autoritario. De esta forma, el Estado se convierte en un instrumento de apropiación «ilegítima» de los recursos de la población, no en el producto de un acuerdo social y ni siquiera de la hegemonía de un grupo que consiga que sus intereses sean aceptados como si fueran los mismos de toda la sociedad. Así, las élites que controlan el Estado buscarán su estabilidad a través de tres estrategias principales: la distribución de las rentas conseguidas a través de los recursos apropiados, la cooptación de otras élites secundarias y la represión.

El análisis de la economía política de los países productores de petróleo ha convergido en la conceptualización de las economías rentistas. Mañé y De la Cámara definen las economías petrolero-rentistas como «las de aquellos territorios en los que la gestión del sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo —político— de lograr el máximo posible de renta del subsuelo para los ciudadanos nacionales» (Mañé y De la Cámara, 2005). Las autoras centran su análisis en las rentas producidas por la extracción de recursos, pero podemos ampliar los mecanismos rentistas a la deuda exterior y a las ayudas recibidas por algunos estados.⁷ Estos dos mecanismos permiten mantener los lazos rentistas con la población a los regímenes árabes en los estados no productores de petróleo, mientras tienen capacidad de endeudamiento o de percepción de ayudas. La intervención pública del gobierno se basa en los ingresos obtenidos de la renta exterior y esto significa que las políticas presupuestarias son principalmente de gasto y tienen como objetivo legitimar el régimen. Esta dinámica conduce al desarrollo de una economía no productiva basada en la renta, que sustenta al sector servicios y al consumo sobre todo a base de productos importados; y así la consecuencia de todo ello es la dependencia directa de la economía y el régimen de los precios del petróleo, o de la capacidad de conseguir créditos y ayudas externas.

De esta forma, el Estado y la renta se unieron como recursos de poder en manos de las élites que los podían controlar. Estas élites acumularon un poder desproporcionado en comparación a otras épocas o a otras élites contemporáneas. Mientras la renta exterior es caudalosa, la capacidad distributiva generada por la renta es suficiente para controlar a la población y, al mismo tiempo, para convertir en clientes a los grupos competidores en la acumulación de poder.

La mayoría de los estados árabes, tanto los ricos en petróleo como los pobres, han entrado en mayor o menor grado en esta dinámica rentista. Los regímenes que no tienen petróleo aprovecharon la importancia estratégica de su cercanía a los pozos para conseguir rentas exteriores, tanto de los que los querían como aliados, como de aquellos que estaban dispuestos a pagar para no verse amenazados. Por esta misma razón, como el petróleo genera amenazas y vulnerabilidad, tanto externas como internas, pero también al mismo tiempo permite aumentar los presupuestos del ejército, la policía y el Mujabarat, los regímenes se militarizan y se convierten en unos de los clientes más importantes de las industrias de armamento (Beblawi y Luciani, 1987: 18, 52, 59-60).

El análisis desde la perspectiva de la Sociología del poder nos ayuda a identificar los actores determinantes, sus objetivos y la función de los recursos que tienen a su alcance. Con frecuencia se presenta a los estados productores de petróleo como un fracaso por no haber conseguido el objetivo del desarrollo económico o por no haber sido capaces de consolidar la independencia respecto a las grandes corporaciones occidentales. Críticas similares se repiten de cara a los estados que dependen de las rentas ligadas a la ayuda exterior o a la deuda externa. Sin embargo, estas acusaciones parten de dos supuestos falsos: el primero es que un Estado tiene objetivos propios, y el segundo que la prioridad de los gobiernos de estos estados es el desarrollo económico y social. En contra del discurso oficial que presenta la actividad económica del régimen como un camino hacia el desarrollo, este habría sido contraproducente para las propias élites primarias. El desarrollo real de las sociedades árabes y de sus economías habría facilitado el surgimiento de otras élites independientes en la competición por el poder, así como la aparición de sectores de la población con voluntad y capacidad para hacer oír su voz, lo que habría redundado en pérdidas para la acumulación de las élites controladoras del Estado. No debe olvidarse que el objetivo prioritario de las élites es la acumulación, por lo que el éxito de las políticas que aplican debe

medirse en función de este objetivo. Por ello, lo que se observa no es un fracaso sino, al contrario, un gran éxito pues la concentración de poder en manos de las élites de los países rentistas es en general mucho mayor que en otras sociedades.

Así, resulta evidente que las élites dominantes en un Estado rentista no pueden ser consideradas como una burguesía que acumula poder en forma de capital, sino más bien como una aristocracia rentista, pues su posición en el proceso de acumulación depende de la capacidad de control sobre el Estado. A su vez, esta aristocracia rentista depende directamente de la burguesía internacional y del apoyo de las élites globales. No obstante, paralelamente a la consolidación de los dirigentes estatales se formó también una burguesía ligada de forma directa al poder del régimen. En ocasiones porque el Estado proporcionó de forma institucional a algunos individuos los medios para invertir (como en los casos de Libia y Arabia Saudí), en otras porque los funcionarios del Estado bien situados desviaron recursos hacia el sector privado en beneficio propio (casos de Argelia, Siria, Irak y la mayoría de estados árabes), y también porque algunos empresarios aprovecharon las rentas y la demanda generadas por el petróleo para invertir en sectores no deficitarios (situación que se repite en todos los países). Por lo general, la burguesía que forma parte de este último grupo suele sentirse desplazada y maltratada por el régimen, pues entiende que los otros dos grupos le hacen una competencia desleal al tener ventajas de las que ella no disfruta (Vieille, 1984: 17).

El Estado rentista se ha convertido por lo tanto en un recurso de poder y en una característica esencial de la estructura de los regímenes árabes contemporáneos. Sus períodos de fortaleza, cuando los precios del petróleo son altos o la posibilidad de captación de créditos y ayudas aumenta, y sus períodos de debilidad, cuando ocurre lo contrario, se reflejan inmediatamente en el poder y la estabilidad de las élites primarias.

La estructura del sistema

Una de las cuestiones todavía centrales en las ciencias sociales es el debate actor versus estructura. Por una parte, la perspectiva que toma como base el papel de la estructura entiende que los intereses y el comportamiento de los actores están definidos por el marco en el que se mueven.

Por otra parte, quienes defienden la primacía de los actores consideran la estructura como el resultado de la acción de unos individuos que tienen objetivos maximizadores. En otras palabras, las estructuras son vistas o como constricciones o como el producto de las decisiones individuales. Por nuestra parte, consideramos que los actores producen y reproducen los elementos característicos de una sociedad continuamente, pero también que su actividad no siempre se desarrolla en las condiciones escogidas por ellos. Las decisiones de los actores no están totalmente determinadas por la estructura, pero tampoco se toman siempre en un marco totalmente controlado por ellos.⁸ Siguiendo a Bhaskar (1979) y Giddens (1984), podemos afirmar que la estructura es dual. Giddens afirma que la estructura es al mismo tiempo el medio en el que se desarrollan y el resultado de las prácticas que constituyen los sistemas sociales (Giddens, 1981: 27). Por lo tanto, actores y estructuras no son conceptos opuestos sino que cada uno implica la existencia del otro. En la competición cotidiana los actores no tienen capacidad para incidir directamente sobre los factores que definen la estructura. Esta posibilidad solo se da en momentos de cambio revolucionario, que acostumbran a estar acompañados de una movilización lineal por parte de la población. Por esta razón, una de las características que nos permite distinguir cuando un factor es estructural o coyuntural es precisamente esta dificultad de los actores para incidir directamente en él.

Podríamos definir la estructura como el marco en el que se mueven los actores. Es preciso recordar que la estructura marca las constricciones de los actores, pero también sus oportunidades (Giddens, 1976: 161). De este modo, en el juego competitivo, las constricciones para unos serán ventajas para otros. Así, un actor que tenga que ir en contra de determinadas constricciones estructurales tiene un margen de acción limitado, mientras que los que pueden aprovechar las oportunidades tendrán más capacidad de acumulación.

Colin Wight va más allá y presenta dos tradiciones teóricas en el análisis de la estructura, en la primera la estructura es considerada como el medio ambiente en el que se mueven los actores y que genera constricciones y oportunidades, en la segunda se le añaden las representaciones colectivas de los hechos sociales (Wight, 2006: 126). Así, encontramos distintos tipos de constricciones o posibilidades, que pueden proceder de: a) presiones de la población o colectivos capaces de generar relaciones lineales que obliguen a las élites a llevar a cabo algunas ac-

tuaciones o les impidan otras; b) presiones de otras élites, lo que forjará los equilibrios de poder en el sistema; c) presiones de instituciones y normas, como por ejemplo el Estado, leyes constitucionales, costumbres, etc.;⁹ y d) presiones de valores e ideologías, sobre todo en lo que hemos definido como los niveles foucaultiano y gramsciano (régimen de verdad y hegemonía cultural).

Los cambios en la estructura del sistema vienen dados por los cambios en los actores, en los recursos, en las relaciones de poder o en el ámbito de la ideología.

En el primer caso, referido a los actores, los cambios se pueden producir por el aumento o disminución de poder de algunos actores primarios capaces de generar nuevos equilibrios. Por ejemplo, la posición de las élites estatales que controlan la renta exterior, respecto a los dirigentes de las grandes corporaciones del petróleo o respecto a los dirigentes de las instituciones financieras o de los estados que suministran el crédito, no es siempre la misma y oscila de la dependencia a la alianza, en función de su capacidad de acumulación de poder y de la estructura del sistema. Así, tomando como muestra el Estado rentista basado en la exportación de petróleo, observamos cómo el sistema cambió notablemente con el tiempo. Primero, en los años de la descolonización, las élites estatales eran débiles ante las siete grandes corporaciones del petróleo que actuaban como un cártel. Más tarde, en los setenta, las élites estatales que habían nacionalizado los recursos y habían creado la OPEP, ganaron poder y capacidad para desenvolverse en el sistema global. Pero en los años posteriores, con la bajada del precio del petróleo, las presiones del FMI, y la demanda actuando otra vez como un cártel, las élites estatales volvieron a enfrentarse a la crisis y la debilidad. Y en la actualidad vemos que estas élites han recuperado poder, gracias al aumento de los precios de petróleo y a la diversificación de la competencia en la demanda debida a la aparición en escena de las corporaciones chinas. De la dependencia de las élites estatales respecto a las élites corporativas, se pasó así a una relación de alianzas y de competencia, con altibajos, pero mucho más equilibrada. Como comentábamos al analizar los actores, la manifestación más clara de los equilibrios de poder entre actores primarios en la estructura del sistema es la tendencia a la oligarquía o a la poliarquía del mismo. En el mundo árabe, con la excepción del caso libanés, nos encontramos con estructuras con una gran concentración de poder en muy pocas manos.

En el segundo caso, referido a los recursos, el factor de transformación de la estructura del sistema son los cambios de la utilidad de los recursos para la acumulación de poder. El peso de un recurso de poder no es una propiedad intrínseca, sino que depende de la coyuntura de la competición. Recursos válidos en un período pueden ser inútiles en otro y, por tanto, las élites que disponían de ellos se verán desplazadas por las que puedan utilizar los nuevos. Como veremos en los ejemplos del mundo árabe, las variaciones en el precio del petróleo generan aumentos o disminuciones de la capacidad de acumulación a través de la renta o el Estado. O, revisando el pasado, ya hemos comentado como la aparición de los aparatos estatales hizo descender a las élites tribales a una posición dependiente y secundaria. Y, tomando también un ejemplo de la actualidad, es de gran relevancia el enorme peso que adquiere el control de la ideología (antes nacionalista y hoy islamista) como recurso, tanto para los grupos de oposición, como para los propios regímenes.

En el tercer caso, referido a las relaciones, el factor que puede modificar la estructura del sistema es la irrupción en escena de relaciones lineales de poder. Cuando la población se moviliza puede debilitar a algunas élites, pero también puede dar fuerza a aquellas que tengan la capacidad de aprovechar el impulso del movimiento popular. Además, las relaciones lineales pueden llegar a tener consecuencias revolucionarias, logrando incluso modificar las reglas del juego, eliminar a algunas élites y generar otras nuevas, o poner en un primer plano recursos de poder antes no útiles para la competición. Este fenómeno dependerá de la capacidad de concienciación y de movilización de la población o de grandes colectivos. Según Skocpol, las revoluciones sociales se diferencian de otros procesos de transformación por la presencia de dos dinámicas: el cambio estructural de la sociedad con la agitación de clase y las transformaciones sociales y políticas (Skocpol, 1979: 4). En el mundo árabe contemporáneo esto solo se ha dado en las «revueltas del pan» de los años ochenta y noventa, en la resistencia palestina contra la ocupación israelí, y, sobre todo, en la lucha contra el dominio colonial, seguramente el único momento en que la población, junto con algunas élites, fue capaz de desarrollar un movimiento de resistencia lo bastante fuerte como para provocar un cambio estructural.

En el cuarto caso, referido a las representaciones colectivas de los hechos sociales, diferenciamos entre lo que hemos llamado niveles foucaultiano y gramsciano. Según Foucault,

cada sociedad posee su régimen de verdad, su «política general de la verdad»: es decir, define los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar a unos y a otros: las técnicas y los procedimientos que son valorados en orden a la obtención de la verdad, el estatuto de quienes se encargan de decir qué es lo que funciona como verdadero (Foucault, 1999: 53).

Este «régimen de verdad» solo se modifica con el paso del tiempo y la evolución de las propias relaciones sociales, y no puede ser manipulado por parte de las élites a su antojo. Por la misma razón, tampoco pueden establecerse programas definidos de oposición y resistencia contra el «régimen de verdad». Sin embargo, esto no significa que algunas élites no puedan aprovechar este régimen para mejorar su posición en la competición por el poder.

En el nivel definido por Gramsci como «hegemonía cultural», se establece un sistema de creencias universalizado que hace que el interés de un sector determinado sea aceptado como provechoso para toda la sociedad. La capacidad de hacer aceptar los propios intereses como universales permite a las élites establecer la agenda y las prioridades de la sociedad. La hegemonía se establece a partir de una gran coalición de un sector importante de la sociedad, prácticamente de una clase, por lo que tampoco es manipulable, al menos a corto plazo; pero está más definida que el «régimen de verdad» de Foucault y pueden entablarse luchas abiertas para debilitarla o para establecer contrahegemonías.

Los regímenes autocráticos árabes se han visto favorecidos por la fuerza del autoritarismo, en el plano ideológico del «régimen de verdad» foucaultiano. Como comenta Ghassan Salamé, en el mundo árabe y musulmán encontramos una insistencia en el orden y la autoridad que no encontramos en el mundo occidental (Salamé, 1994: 10-11). Esto no significa que en este análisis adoptemos una visión culturalista y unamos nuestra voz a la de aquellos que defienden que el mundo islámico es incompatible con la democracia, pero consideramos que es un elemento que debemos tener en cuenta para analizar los recursos de los que disponen las distintas élites y, sobre todo, los regímenes en el poder. Las élites autoritarias encuentran en esta «verdad» dominante un gran apoyo para justificar su forma de gobierno, y también para debilitar a las voces que reclaman la democratización. En el nivel foucaultiano, encontramos toda

una serie de relaciones sociales, familiares y comunitarias que se apoyan en un autoritarismo asumido por la gran mayoría de la población. El respeto de los jóvenes hacia los ancianos, de los hijos hacia los padres, de los miembros de las tribus a los jeques, de las mujeres a sus maridos, de los alumnos a los maestros, de los ciudadanos a los funcionarios... conlleva un componente de sumisión que juega a favor de las relaciones de poder autoritarias. Paradójicamente, el discurso de los principales opositores, primero desde el nacionalismo y después desde el islamismo, no ha debilitado esta verdad autoritaria, al no ocuparse ni de la democracia ni de la participación de los ciudadanos en el gobierno de sí mismos. Lejos de esto, las élites nacionalistas supieron aprovechar también este autoritarismo para asentarse en el poder cuando tuvieron acceso a él. Sin embargo, hoy los islamistas se encuentran en una posición más contradictoria, pues la principal posibilidad que tendrían de llegar al poder sería derrotando la autocracia e implantando un sistema antiautoritario y democrático que no figura en su agenda. Al no hacer frente a la verdad autoritaria pierden fuerza en su enfrentamiento con los regímenes. Aunque los que más pierden son los demócratas y aquellos sectores de la población que se oponen al autoritarismo, pues los dos discursos dominantes, el de los regímenes y el islamista, coinciden en moverse en el marco de esta verdad autoritaria, con lo que la refuerzan continuamente. Los cambios en este «régimen de verdad» son extremadamente lentos, por lo que la estructura es aquí un factor de continuidad y paralizador muy potente a favor de los regímenes.

Pero, por otro lado, y tal y como comentábamos en el anterior capítulo, la incapacidad de las élites para generar hegemonías culturales en el sentido gramsciano y la debilidad de su legitimidad, son factores de inestabilidad en la estructura de los sistemas árabes.

En otra dimensión del análisis, la estructura de un sistema también estará ligada a los sistemas superiores y a los cambios que se produzcan en ellos. De esta forma, encontramos subsistemas competitivos dentro de los sistemas, y las alianzas de las élites de un subsistema con las élites de un sistema superior serán, a su vez, un frecuente recurso de poder. Por ejemplo, como ya veíamos, la competición por el poder en el seno de una tribu estará determinada en parte por la capacidad de alianza de determinadas élites tribales con las élites que controlan el Estado. O, en un nivel superior, las alianzas de las élites de la Periferia mundial con las élites globales constituirán un recurso de poder para asegurar la posición de las primeras.

En el mundo árabe, la casta dirigente es en gran medida independiente del proceso de producción y de las clases sociales, pero muy dependiente del mundo exterior (Ayubi, 2000: 51). La mundialización de las relaciones de producción dio lugar a unas élites burguesas y políticas que dependen en buena medida de las élites del Centro. Como la acumulación de poder de las élites periféricas en el sistema mundializado está ligada en parte a su función de intermediarias con las élites centrales, el objetivo principal de unas y otras será mantener a estas sociedades en el estadio de premodernidad y, por lo tanto, dependientes de la modernidad desarrollada en el centro del sistema global, paralizando la capacidad modernizadora de la mayoría de estas sociedades predesarrolladas. Esta dependencia y alianza con las élites del Centro se refleja incluso en términos culturales, con una occidentalización mucho mayor de las élites, en contraste con unas clases populares más «orientales».

Conclusión: la Sociología del poder en el mundo árabe actual

Como veremos en los estudios de caso, las estructuras de poder en el mundo árabe presentan una serie de características que dificultan la democratización de la región. En la cúspide de los sistemas encontramos a unas pocas élites primarias que controlan la mayoría de los recursos de poder. Estas élites accedieron al poder después de liberarse del dominio colonial y vencer en la competición por el control de los estados. Desde entonces consiguieron una gran estabilidad, cerrando las puertas a la renovación de las élites desde el exterior del grupo. En la mayoría de los países, aunque no en todos, el núcleo central del poder acostumbra a ser muy homogéneo, tanto en el nivel social como moral. En la práctica totalidad de países árabes el Estado es el recurso básico en la competición por la acumulación diferencial de poder. Quizás, como apuntábamos, solo Líbano y Mauritania escapan a este modelo, al tener los lazos comunitarios o tribales un peso también fundamental. En la mayoría de los casos, además, el poder del Estado se basa en la renta y en la coacción, por lo que la supeditación de los demás actores a aquellos que controlan el Estado es todavía mayor.

Los regímenes han ido adquiriendo con el tiempo un carácter enormemente cerrado y cada vez más centrado en los lazos personales, inclu-

so hereditarios. Esta dinámica, normal en las monarquías, ha tenido lugar incluso en las repúblicas. Las luchas por el control del Estado que se produjeron tras las independencias llevaron al poder en muchos casos a militares o a hombres fuertes del partido que constituían grupos muy cerrados. Una vez en el poder, estos «clanes» aseguraron su permanencia limitando el acceso al poder a las élites que procedían de ámbitos próximos a las élites primarias —el ejército, el partido, la región, la familia, la tribu o la comunidad—. Esto ha provocado que, en la actualidad, en estos países la competencia por el poder en el seno del régimen se plantee principalmente en términos generacionales. Los hijos de las élites que se consolidaron en el poder tras la descolonización disputan ahora el papel primario a la gerontocracia, encontrándonos así con repetidas tensiones entre viejas y nuevas guardias. Esto puede verse plasmado en pequeñas transformaciones en los sistemas, sobre todo en procesos de liberalización económica. Sin embargo, ni las viejas ni las jóvenes élites están interesadas en alternativas al sistema, tan solo buscan ventajas en la competición circular dentro del mismo régimen. Así, la insistencia de las jóvenes guardias en la liberalización económica es producto en muchos casos del control de las viejas guardias sobre la renta y los aparatos de coacción del Estado —Ejército y Mujabarat—, por lo que los jóvenes deben focalizar su interés en otros recursos, como el capital, para ganar presencia. De todas formas, el objetivo para todos ellos continúa siendo controlar el Estado, pues a pesar de las incipientes liberalizaciones económicas, este control es todavía el fundamento del poder en los países árabes.

El Estado es el recurso básico en la competición por la acumulación diferencial de poder en el mundo árabe y también uno de los elementos más importantes en la definición de la estructura del sistema. Los actores árabes se mueven en el marco de las constricciones y las oportunidades que ofrece el Estado. Los recursos de la renta exterior y de la coacción, fundamentales en la mayoría de regímenes árabes, se controlan a través del Estado. Este papel de recurso y factor estructural al mismo tiempo, hace que los demás recursos de poder estén en su casi totalidad ligados de alguna forma u otra a la institución estatal. Los equilibrios de poder están definidos principalmente por la capacidad de los actores de servirse de mecanismos estatales en beneficio de su capacidad de acumulación, y la configuración que ha adoptado el Estado tras las independencias define la estructura del sistema en el cual compiten las élites.

Otra característica muy generalizada de la estructura de los sistemas árabes es la debilidad de la población como actor. Con la excepción del caso palestino, desde las luchas por la independencia, las masas árabes solo han tenido capacidad para actuar de forma reactiva mediante protestas puntuales, en los momentos de crisis económica y de disminución de la renta. En pocas ocasiones ha habido grupos opositores o de resistencia capaces de dirigir estas protestas hacia cambios en los regímenes. En los años sesenta y setenta los nacionalistas y los grupos de izquierda tuvieron cierta capacidad de movilización, que se perdió debido a la dura represión de los regímenes. En los años ochenta y noventa, los islamistas tomaron el relevo llegando también a convertirse en amenaza para las élites en el poder, pero tampoco lograron la transformación de las sociedades. En algunas ocasiones, la conjunción de las protestas populares y la influencia ideológica islamista debilitaron a los regímenes hasta hacer aparecer el fantasma de la derrota. Pero si bien la primera respuesta fueron los cambios cosméticos con algunas medidas liberalizadoras, llegando incluso a la convocatoria de elecciones con participación de la oposición, cuando se temió que esta tenía posibilidades de hacer caer a las élites del régimen, el Ejército y el Mujabarat se convirtieron en el último y efectivo soporte del status quo. Así, de la misma forma que la caída del régimen del sah en Irán fue una advertencia para las autocracias de Oriente Medio y el mundo árabe, la respuesta militar en Argelia lo fue para los grupos islamistas y también sirvió como modelo para los regímenes que no dudaron en usar la represión. Además, la respuesta de Europa y Estados Unidos al golpe de Estado de los militares argelinos contra la victoria electoral de los islamistas, demostró sobradamente a las élites árabes que se les permitiría usar la fuerza ante la posibilidad de acceso al poder de los islamistas. Los discursos en defensa de los Derechos Humanos y la democracia se olvidaban así ante la amenaza a los intereses de los actores globales, y los atentados del 11 de septiembre terminaron de enterrar cualquier presión exterior sobre los regímenes aliados. El caso argelino provocó también cambios en los grupos islamistas de toda la región. En muchos de ellos ganaron fuerza los sectores más interesados en acercarse al poder y en tener un papel de oposición «leal» al régimen, o como máximo aspirando a ser los grupos de vanguardia de algunas protestas, olvidando los discursos de transformación del sistema que habían difundido durante los años ochenta. Los pocos grupos que continúan manteniendo objetivos de transformación se han convertido en mi-

noritarios y, en ocasiones, han adoptado un carácter violento, acercándose a la nebulosa al-Qaeda y alejándose de la población.

Finalmente, como veíamos, en el análisis de la estructura de los sistemas árabes, es necesario tener en cuenta también su posición en el sistema internacional. Al tratarse de sociedades premodernas están situadas todas ellas en la periferia del sistema global. No obstante, no todas tienen el mismo grado de dependencia respecto a las élites primarias del centro. Las élites de los países productores de petróleo tienen un mayor margen de autonomía, sobre todo en las épocas en que suben los precios de la energía. En cambio, las élites que dependen de las rentas producidas por las ayudas exteriores o por la deuda tienen un papel mucho más secundario y la incidencia de las élites exteriores en estos países es mucho mayor. De la misma forma, las élites de los países que tienen menos capacidad de generar rentas exteriores y por tanto el régimen es menos dependiente de la renta, como es el caso marroquí, también tienen más margen de maniobra. Así, vemos que las élites saudíes pueden adquirir en algunos momentos incluso un papel que se acerca al primario en el sistema internacional. Otras, como las argelinas o de otros países con menor capacidad de producción, oscilan entre la autonomía en épocas de bonanza en el precio de la energía, y la dependencia en momentos de crisis —por ejemplo en los años ochenta cuando se vieron obligadas a acudir a los organismos internacionales para hacer frente al problema de la deuda—. Otras élites, como las jordanas, egipcias o palestinas (de Fatah), dependen en gran medida de las ayudas exteriores, por lo que su autonomía en el sistema global es muy reducida, e incluso en asuntos nacionales se ven obligadas a escuchar las directrices que llegan desde los donantes.

Por lo tanto observamos que la configuración de las estructuras de los sistemas árabes tiene graves consecuencias para el desarrollo democrático de estas sociedades. La mayoría de los regímenes han demostrado una gran capacidad de resistencia, tanto ante las reivindicaciones de democratización, como ante los distintos movimientos de oposición. Los momentos de crisis y debilidad de los regímenes en los años ochenta y noventa forzaron a las élites a un maquillaje democrático para su supervivencia, pero en la actualidad queda patente que ninguno de estos cambios logra afectar el control de las élites primarias sobre el Estado y los principales recursos de poder.

Notas

1. Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación «Análisis de las transiciones políticas en el mundo árabe» financiado por la Fundació Cidob, y del proyecto I+D+i financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: «Estabilidad, gobernabilidad y cambio político en Turquía, Oriente Medio y el norte de África: impacto en la política española hacia la región» (CSO2008-06232-C03-02/CPOL), en la Universitat Autònoma de Barcelona. Queremos agradecer también la ayuda recibida desde la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, para realizar una estancia de investigación en el IREMAM (Instituto de Estudios del Mundo Árabe y Musulmán) en Aix-en-Provence. Asimismo, somos deudores de la atenta lectura, correcciones y comentarios de Amaia Bengoetxea y Rosa Velasco.

2. Véanse Izquierdo Brichs, 2007b, 2008; Kemou, 2007.

3. Desde nuestra perspectiva, el hombre no vive permanentemente dominado por el ansia de poder, es el sistema el que genera la pugna en la que los dirigentes deben participar si pretenden permanecer en la jerarquía. Así, el poder como influencia o dominio es solo la chispa que inicia el eterno juego circular. Después, el objetivo prioritario de los actores pasará a ser la competición.

4. Wright Mills, en su clásico *The Power Élite*, se centra principalmente en las élites que controlan el Estado, las corporaciones y el Ejército. No obstante, creemos que la sociología del poder debe analizar la competición por el control de todos los recursos de poder, pues, dependiendo del contexto, recursos como la ideología, la información o la tecnología pueden ser incluso más determinantes (Wright Mills, 2000 [1956]).

5. Aquí nos distanciamos de Veblen, quien centra su estudio de las élites en la distinción entre la «clase ociosa» y el resto de población. Desde nuestro punto de vista la dinámica motora del sistema es la competición entre las élites, y no la distinción respecto al vulgo (Veblen, 1971 [1899]).

6. Bustos y Mañé abundan más en esta cuestión en el capítulo sobre Argelia.

7. Un análisis de los estados rentistas desde la Sociología del poder se puede ver en Izquierdo Brichs, 2007a).

8. Desde la Sociología del poder, no obstante, creemos importante no confundir el juego sistémico con la estructura. El sistema se basa en las relaciones de poder circulares y lineales. Las decisiones de las élites no pueden escapar a la competición por la acumulación diferencial de poder, pues si abandonan la prioridad de la maximización del poder pierden su posición como élites. Sin embargo, esta competición se desarrolla en una estructura que es distinta en cada sistema.

9. Un ejemplo extremo pero muy gráfico de estas presiones lo encontramos en la aceptación de la guerra como una institución legal cuando se hace a través de estados, pero no cuando se implican otras instituciones.

Bibliografía

- Arendt, H. (2005 [1970]), *Sobre la violencia*, Alianza, Madrid.
- Ayubi, N. N. (2000), *Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe*, Bellaterra, Barcelona.
- Badie, B. (1992), *L'État importé. L'occidentalisation de l'ordre politique*, Fayard, París.
- Balandier, G. (1999), *Anthropologie politique*, Quadrige /PUF, París.
- Beblawi, H. y G. Luciani, eds. (1987), *The Rentier State*, Croom Helm, Londres.
- Bhaskar, R. A. (1979), *The Possibility of Naturalism*, Routledge, Londres.
- Brumberg, D. (2002), «The Trap of Liberalized Autocracy», *Journal of Democracy*, 13.
- (2003), «Liberalization versus Democracy. Understanding Arab Political Reform», *Working Papers. Carnegie Endowment for International Peace*, 1-20.
- Brynen, R., B. Korany y P. Noble, eds. (1995), *Political liberalization and democratization in the Arab world*, vol. 1. *Theoretical Perspectives*, Lynne Rienner, Boulder.
- Camau, M. (1971), *La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins*, CNRS, París.
- (1999), «La transitologie à l'épreuve du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord», *Annuaire de l'Afrique du Nord*, XXXVIII.
- Corm, G. (2005), «Entretien. Georges Corm. Le système communautaire et confessionnel s'apparente au totalitarisme», *l'Humanité*.
- Foucault, M. (1999), *Estrategias de poder*, Paidós, Barcelona.
- Galbraith, J. K. (1973), «Power and the Useful Economist», *The American Economic Review*, 63.
- (2004), *La economía del fraude inocente*, Crítica, Barcelona.
- Giddens, A. (1974), «Élites in the British class structure», en P. Stanworth y A. Giddens, eds., *Élites and Power in British society*, Cambridge University Press, Cambridge.
- (1976), *New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of interpretative Sociologies*, Hutchinson, Londres.
- (1981), *A Contemporary Critique of Historical Materialism*, vol. 1. *Power, Property and the State*, Macmillan, Londres.

- (1984), *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*, Polity, Cambridge.
- Harik, I. (1987), «The Origins of the Arab State System», en G. Salamé, ed., *The Foundations of the Arab State*, Croom Helm, Londres-Nueva York-Sidney.
- Huntington, S. (1991), *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma University Press, Oklahoma.
- Inglehart, R. (1977), *The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics*, Princeton University, Press Princeton, N. J.
- Izquierdo Brichs, F. (2007a), «Poder y Estado rentista en el mundo árabe», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 2.
- (2007b), «Poder y transición política en el mundo árabe», *Awraq*, XXIV, pp. 123-166.
- (2008), *Poder y felicidad. Una propuesta de sociología del poder*, La Catarata, Madrid.
- Kemou, A. (2007), *Nasser's National Interest: A «Sociology of Power» Analysis*, Fimam, Altafulla, <http://www.fimam.org/4.htm>.
- Khader, B. (1997), *État, société civile et démocratie dans le monde arabo musulman*, CERMAC, Lovaina.
- Leca, J. (1994), «La démocratisation dans le monde arabe: incertitude, vulnérabilité et légitimité», en G. Salamé, ed., *Démocraties sans démocrates. Politiques d'ouverture dans le monde arabe et islamique*, Fayard, París.
- Machiavelli, N. (1513-1517), *Discourses on the First Decade of Titus Livius*, Project Gutenberg, Florencia, — <http://www.gutenberg.org/files/10827/10827-8.txt>.
- Mannheim, K. (1940), *Man and Society in an Age of Reconstruction*, Routledge, Londres.
- Mañé, A. y C. De la Cámara (2005), «Rusia: ¿hacia una economía petrolero-rentista?», *Revista de Economía Crítica*, 3.
- Martín Muñoz, G. (1999), *El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista*, Bellaterra, Barcelona.
- Marx, K. (1844), *Comments on James Mill, Éléments D'économie Politique*, <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/>.
- Nitzan, J. y S. Bichler (2002), *The global political economy of Israel*, Pluto Press, Londres.
- Norton, A. R. (1993), «The Future of Civil Society in the Middle East», *Middle East Journal*, 47, pp. 205-216.
- , ed. (1995), *Civil Society in the Middle East*, E.J.Brill, Londres.
- O'Donnell, G., P. C. Schmitter y L. Whitehead, eds. (1986), *Transitions from authoritarian rule: Southern Europe*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

- Perthes, V. (2004), *Arab Élités: Negotiating the Politics of Change*, Lynne Rienner Publishers.
- PNUD, Regional Bureau for Arab States (2005), *The Arab human development report 2004. Towards Freedom in the Arab World*, United Nations Publications, Amman.
- Przeworski, A. (1991), *Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rustow, D. A. (1970), «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», *Comparative Politics*, 2, pp. 337-363.
- Salamé, G., ed. (1994), *Démocraties sans démocrates. Politiques d'ouverture dans le monde arabe et islamique*, Fayard, Paris.
- (1996), *Appels d'empire. Ingérences et résistances à l'âge de la mondialisation*, Fayard, Paris.
- Schmitter, P. C. (1999), «Se déplaçant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, «transitologues» et «consolidologues» sont-ils toujours assurés de voyager en toute sécurité?», *Annuaire de l'Afrique du Nord*, XXXVIII, pp. 11-35.
- Skocpol, T. (1979), *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Tilly, C. (1978), *From Mobilization to Revolution*, McGraw-Hill, Nueva York.
- Veblen, T. (1971 [1899]), *Teoría de la clase ociosa*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Vieille, P. (1984), «Le pétrole comme rapport social», *Peuples méditerranéens*, 26.
- Weber, M. (1985), *Ensayos de sociología contemporánea*, Planeta-Agostini, Barcelona.
- Whitley, R. (1974), «The City and Industry: the directors of large companies, their characteristics and connections», en P. Stanworth y A. Giddens, eds., *Élités and Power in British society*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Wight, C. (2006), *Agents, Structures and International Relations. Politics as Ontology*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Wright Mills, C. (2000 [1956]), *The power élite*, Oxford University Press, Nueva York.

2. Argelia: estructura poscolonial de poder y reproducción de élites sin renovación

Rafael Bustos y Aurèlia Mañé

Cartografía de las élites y control de recursos en Argelia

Sería imposible entender cuál es la composición de las élites argelinas y los recursos que controlan esas élites si no comenzáramos explicando la naturaleza de la sociedad y sobre todo del Estado poscolonial argelino. El tipo de colonización que se produjo en Argelia, a diferencia de otros países como Túnez o Marruecos, impidió la formación de cualquier forma autóctona de cohesión social o cultural, a la vez que destruyó los recursos de poder de las élites precoloniales (agricultura y comercio). Las consecuencias de ello fueron tres:

- 1) En Argelia, llegado el momento de la independencia, a diferencia de otros países, los grupos tradicionales (aristocracia rural y burguesía comercial) han desaparecido prácticamente de la lucha por el poder.
- 2) En el ámbito teórico, todos los grupos que compiten por el poder en Argelia tienen características similares (son fruto de la guerra de independencia y están vinculados a la lucha armada).¹ Los demás actores que no optaron por la vía armada han sido marginados (el Movimiento Nacionalista Argelino, MNA, de Messali Hay, la Unión Democrática del Manifiesto Argelino, UDMA de Ben Jedda y Ferhat Abbas, y en menor medida la Asociación de Ulemas). Esto hace que la composición de la élite en Argelia sea atípica, ya que su estructura es la de una élite primaria y dinámica, en el sentido que le da Isabelle Werenfels (2007). La élite argelina está compuesta por facciones que pro-

ceden de un solo —y mismo— grupo, el cual surge en el proceso de formación del Estado argelino. Estas facciones se corresponden con lo que se ha venido a llamar los *clanes del poder argelino*.²

De esta peculiaridad argelina deriva la igualdad y al mismo tiempo la rivalidad entre las facciones o clanes más fuertes, puesto que todos ellos utilizan la misma credencial (la lucha en la guerra de independencia, 1954-1962) para ocupar la cúpula de poder. Como además estas facciones son muy similares en su composición y tienen el mismo acceso a los recursos esenciales, se genera una estructura dinámica dentro de la élite primaria. Sus distintos componentes fraccionales se alternan en la posición privilegiada de mando, como si se tratara de una noria de poder, cuyo movimiento no altera lo esencial del sistema.

- 3) El corolario de los puntos anteriores y el modo en que se desarrolló la guerra de independencia conducen a la tercera consecuencia: el poder recayó en la única entidad argelina que durante los años de la guerra de la independencia (1954-1962) se convirtió en un colectivo organizado, el Estado Mayor del ALN (del Ejército de Liberación Nacional) o Ejército de fronteras, llamado así porque durante los años de la guerra había estado estacionado en las fronteras del país, debido a la superioridad militar francesa.

Por todo ello, se puede afirmar que, desde el inicio, el Estado argelino fue «ocupado» por un colectivo al que no le correspondía este lugar.³ A resultas de lo cual, el principal problema del régimen argelino fue, y ha sido, buscar la fórmula para mantenerse en el poder, es decir, hallar el modo de convertirse en una autoridad legítima. Lo anterior significa, por una parte, que los «ocupantes» del Estado debían responder a las aspiraciones colectivas de los argelinos —alcanzar la independencia y desarrollar el país— y, por otra parte, que debían mostrar a los otros grupos que compiten por el poder que ellos eran los únicos capaces de llevar a cabo esta tarea.

Tras la independencia, la pérdida de vigencia del discurso nacionalista y la necesidad que tenía el régimen de crear la ilusión de unidad, llevó a impulsar un proyecto de sociedad que otorgara un contenido

concreto a la independencia. Este proyecto tenía como eje otra aspiración colectiva —el desarrollo económico del país— y, por ende, lo que se deriva de él, la modernización y el progreso. Los «ocupantes» del Estado argelino se transmutaron en agentes impulsores del desarrollo económico, pero el hecho de haberse definido como tales significaba, por una parte, que debían disponer de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo este proceso y, sobre todo, que presentaban su opción no solo como la única posible, sino como una que solo ellos podían llevar a cabo. Es decir, debían elaborar un discurso legitimador, coherente y creíble, que justificara una ocupación totalmente cuestionable del poder —tanto a los ojos de la población como de sus pares del ejército (otras facciones o clanes). Este discurso solo podía ser económico, ya que tanto la vertiente política como la ideológica eran fácilmente atacables debido a que todos los grupos competidores eran igualmente legítimos.

Esta tarea se llevó a cabo por medio de un «pacto social argelino» cuyo artífice fue Huari Bumedián (1962-1978). Tras poner fin a la inestabilidad del período de Ben Bella,⁴ Bumedián consolidó su régimen gracias a su carisma y por ser capaz, como afirma Roberts (2003), de construir una comunidad política estable. Para ello, dos factores resultaron igualmente fundamentales. Primero, la nacionalización de los hidrocarburos, en 1971, que le proporcionó los recursos necesarios para definir su estrategia sin tener que depender del resto de agentes del país; y segundo, la articulación, quizá única en la historia de Argelia, de un discurso económico coherente con su actuación. El instrumento elegido para poner en práctica este pacto social fue SONATRACH.⁵ La nacionalización de 1971 supuso el establecimiento por parte del Estado de barreras de entrada a las compañías extranjeras, erigiéndose el propio Estado, como representante de la nación argelina, en propietario de SONATRACH. Por lo tanto, el volumen de ingresos del Estado se vio sustancialmente incrementado, al recibir los beneficios que esta empresa obtenía y recaudar la fiscalidad asociada a las actividades petroleras. La propiedad nacional de los hidrocarburos posibilitaba que el Estado realizara una importante política de gasto o de inversiones centralizada. SONATRACH fue definido como el «instrumento de intervención pública.»⁶ De hecho, lo que conferiría centralidad y autonomía a la élite primaria es el control sobre el instrumento de intervención pública, o sea, la explotación del sector de los hidrocarburos.

En este instrumento coexisten al mismo tiempo la fortaleza —porque el Estado no depende de la población para su supervivencia— y la debilidad —porque el Estado depende de la evolución de los precios del crudo en el exterior— del régimen argelino. En otras palabras, la propiedad del sector de los hidrocarburos permite recaudar unos ingresos; la autonomía respecto a la población le otorga un importante margen de maniobra a la hora de definir sus políticas de gasto público, pero al mismo tiempo ese *Estado rentista*⁷ no controla, ni puede asegurarse un volumen de recursos constante y previsible porque las variaciones externas del precio de los hidrocarburos están fuera de su alcance. Por eso, son imprescindibles otros recursos de poder como los recursos coactivos o los que suministran las alianzas con élites secundarias.

Los elementos constitutivos del pacto social argelino fueron tres, indisolublemente unidos entre sí, ya que la quiebra de cualquiera de ellos podía, como sucedió a partir de la presidencia de Benyedid, poner en peligro todo el sistema: a) que el Estado recibiera una sustancial fuente de ingresos del «exterior»; b) que dispusiera de *instituciones distributivas*⁸ (las empresas públicas industriales) para hacer llegar estos ingresos, bajo forma de pagos, transferencias o bienes materiales, al conjunto de la sociedad; y c) que la población se sintiera identificada con el proyecto del Estado.

En los años de Bumedián (1965-1978), la política económica del Estado argelino preveía dos objetivos básicos: lograr el máximo de recursos financieros de los hidrocarburos, y financiar con ellos una edificación masiva de industrias de base. La debilidad de este programa económico era que su función era más política que económica y que, por ello, eran más importantes los resultados en términos de legitimidad que los resultados en términos de desarrollo económico. A pesar de que con los dos primeros Planes Cuatrienales (1970-1977) se destinó entre el 57% y el 61% de los ingresos por hidrocarburos a la industrialización del país⁹ (el mayor esfuerzo de inversión industrial del mundo), el resultado fue la desindustrialización del país. Un año antes de la muerte de Bumedián, al final del segundo Plan Cuatrienal en 1977, el peso de la industria en el PIB argelino, sin contar el sector de los hidrocarburos, era casi cinco puntos inferior al de 1969.¹⁰ En el ámbito estrictamente económico el resultado de esta estrategia fue reforzar todavía más la función financiera de los hidrocarburos, que no solo debían financiar la estrategia de industrialización, sino también sus (no)resultados, es decir, la importación de todo aquello que no se producía, cada vez, más cuantiosa.

La función distributiva de las empresas industriales quedaba vinculada a la obtención de ingresos del petróleo, pues a través de ellas se remuneraban a los factores de producción (la población obrera y asalariada) y se distribuían, gracias al monopolio de la importación, unos bienes adquiridos en el exterior que el sector privado comercializaba. Esto permitió el paulatino, no previsto, enriquecimiento del sector privado. La situación duró hasta mediados de los años ochenta, bajo la presidencia de Chadli Benyedid, cuando el pronunciado descenso de los precios del petróleo, golpeó duramente la línea de flotación de la economía argelina, poniendo en entredicho el pacto social e iniciando la primera rotación en las posiciones de las élites primarias y el desplazamiento de algunas facciones desde lugares centrales a periféricos.

Definición de las élites y de los recursos argelinos

Las élites

Como ha quedado explicado más arriba, la singularidad del caso argelino es que sus élites más poderosas surgen con la creación del Estado independiente, adoptando una estructura de élite primaria dinámica. Argelia no se distingue de otros países árabes por la centralidad del Estado en su desarrollo político. La centralidad del Estado merma en general la autonomía de las élites. En Argelia, en cambio, no existen prácticamente élites al margen del Estado y todas dependen cuanto más de él por la existencia de una sola fuente de recursos financieros, la explotación de hidrocarburos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden clasificar las élites argelinas en cuatro grandes grupos:

- 1) Élites estatales: altos funcionarios del aparato coercitivo (fuerzas armadas y servicios secretos), directivos de SONATRACH, algunos políticos y altos funcionarios especialmente del sector de las finanzas o la energía (tecnócratas) y de la carrera diplomática. De esta «gran familia revolucionaria» también forman parte las asociaciones paraestatales de antiguos combatientes (*Shuhadá* y *Muyahidin*).
- 2) Élites comerciales, «burguesía» tlemçeniana y constantinense

(con o sin lazos familiares en los aparatos del Estado) y «nueva burguesía» de Argel y otras regiones, especialmente en el sector «import-import»¹¹, necesariamente con lazos en los aparatos del Estado.

- 3) Élités surgidas del proceso de industrialización (*industrialistas*) compuestas por gestores de las sociedades nacionales, dirigentes de organizaciones de masas, profesionales e *intelligentsia*.
- 4) Élités locales, especialmente del mundo rural (*walis* o gobernadores, mafias rurales o urbanas, grupos armados dedicados a la extorsión o al contrabando, *qaid*s o notables tribales y algunas autoridades religiosas (*sheijs* de cofradías o *tariqas*).

El cuadro 1 resume la posición de las élites en cuanto a la importancia de los recursos que controlan (élites primarias o secundarias) y a su cercanía circunstancial del centro político de toma de decisiones (élites centrales o periféricas). Este cuadro se ha de leer teniendo en mente que cualquier clasificación de élites, ha de contemplar su naturaleza dinámica y su cambiante distancia del núcleo de toma de decisión. Es como si se tratara de una noria de poder, con facciones dominantes que ocupan el centro, pero que va girando y alternando. Las élites más poderosas ocupan el centro de la noria y por tanto el núcleo de toma de decisión (élites primarias centrales), aunque por el movimiento de alternancia, pueden llegar a convertirse en secundarias (los industrialistas). Las élites más alejadas o periféricas, independientemente de la importancia de sus recursos, basculan o giran en torno a las élites centrales entrando en juegos de alianzas con ellas. Este juego puede hacer que determinadas élites centrales pasen de ser secundarias a ser primarias o viceversa.

El perfil de las élites primarias centrales en Argelia mostraba que hasta 1990 esas élites poseían uno de los siguientes recorridos: la carrera militar, la diplomacia o la tecnocracia,¹² especialmente los especializados en la gestión financiera o técnica de los hidrocarburos (Bustos, 2004). Efectivamente, el núcleo duro o alianza central de las élites argelinas ha estado formado tradicionalmente por sectores de los aparatos coactivos (ejército y servicios secretos),¹³ tecnócratas y altos funcionarios curtidos en el servicio exterior.

CUADRO 1
Clasificación de las élites argelinas

	Élites centrales	Élites periféricas
Élites primarias	Jefes de los aparatos coercitivos, directivos de SONATRACH,* tecnócratas y diplomáticos	Nueva burguesía, burguesía comercial con lazos en el Estado e «Hijos de la Shuhadá» y similares
Élites secundarias	Grupos surgidos bajo el industrialismo	Burguesía sin lazos con el Estado y élites locales (principalmente rurales)

FUENTE: elaboración propia.

* Es discutible si los directivos de SONATRACH se han de incluir o no como élite primaria central. El argumento en contra es que intrínsecamente no pertenecen a lo que se podría denominar «familia revolucionaria». A pesar de ello, todos los presidentes de SONATRACH han sido miembros del centro del poder argelino, y muchos de ellos han sido ministros. Por esta razón, optamos por incluirla como élites primarias centrales.

En estas élites primarias se ha ido integrando una parte de la burguesía comercial,¹⁴ es decir, unas pocas familias de empresarios que históricamente realizaron una «transición» exitosa del período colonial al de la independencia. Algunos habían levantado negocios considerables bajo dominación francesa, otros eran arribistas que aprovecharon la salida de los colonos para hacerse a precios irrisorios con sus negocios, bienes e infraestructura empresarial. Ambos tuvieron la habilidad de conservar y legitimar sus actividades bajo regímenes socialistas y ello en buena parte gracias a alianzas familiares con círculos del poder, militares y civiles (Liabes, 1982). Para ello, contrajeron lazos matrimoniales con oficiales de alta graduación del ejército o de las empresas estatales (Liabes, 1982).

A este sector privado tradicional se añade hoy en día la nueva burguesía argelina, mayormente identificada con el sector «import-import», que ha florecido desde los años ochenta y que tiene notables contactos en la alta administración del Estado. Se trata de una clase de «nuevos ricos» o nueva burguesía, asociada al fenómeno de *penuria*, descrito por Kornai (1984) para el caso de los países de Europa central y oriental. Esa clase, fundamentalmente ostentosa, comienza a crecer en los años ochenta al

calor de las políticas antipenuria y de los incentivos públicos al consumo (*infitah*) y recibe en los sectores populares el apelativo de (*tchi-tchi*), algo así como los pijos. En realidad, es el mismo sector privado al que el socialismo de Bumedián había dejado una pequeña pero muy provechosa parcela de actuación, la intermediación comercial con los productos industriales que las empresas públicas no producían pero importaban. Se trata del *crony capitalism* o capitalismo de amiguetes, descrito por varios autores a propósito de Egipto y de Marruecos (Kienle, 2000 y Catusse, 2006, respectivamente) y que puede aplicarse perfectamente a esta nueva burguesía argelina. Posteriormente, este grupo social se ha ido engrosando con las fortunas surgidas del negocio «import-import». Estos nuevos ricos disponen de los debidos enchufes (*pistons*) en la administración del Estado, que les proporcionan las licencias necesarias de importación y la información privilegiada para lucrarse.

Siendo lo característico del conjunto de las élites de Argelia su gran dependencia del Estado, debemos reseñar que, aunque muy minoritarios, existen algunos sectores de las burguesías comerciales de Tlemçen y de Constantina que se mantuvieron al margen de los aparatos de poder centrales y siguieron sustentándose sobre sus bases habituales de acumulación. En este sentido, siguieron siendo élites regionales, limitadas en su crecimiento y por ello, consideradas élites periféricas secundarias.

Otras élites secundarias son los grupos *industrialistas* y las élites locales, principalmente de tipo rural. Las élites urbanas o *industrialistas*, principalmente concentradas en los servicios del sector público, que no dejó de crecer desde la independencia en todo el mundo árabe (Ayubi, 1988 y 1998), también están ligadas al Estado, por su dependencia de los recursos distribuidos. En este grupo se incluye tanto a los «cuellos blancos» empleados en los servicios públicos, como a la clase obrera surgida al calor de la industrialización, como a los profesionales de distintas ramas, maestros, profesores, periodistas, médicos, ingenieros o abogados. Es importante tener en cuenta que en este país socialista la clase obrera y campesina nunca estuvo debidamente representada en las estructuras políticas del Estado, contrariamente a lo que proclamaba el discurso oficial (Leca y Vatin, 1979). Por eso, el sindicato UGTA siempre estuvo dominado por «cuellos blancos» y lo sigue estando actualmente, mientras que las instancias directivas del FLN nunca llegaron a incorporar porcentajes significativos de obreros ni campesinos. Los escalones del partido fueron copados en su mayoría por técnicos y empleados de mediana formación,

otros «cuellos blancos» (Bustos, 2004: 281). En estos grupos *industrials* incluimos a los intelectuales orgánicos o *intelligentsia* del período socialista, encargados de elaborar la adecuada justificación ideológica o religiosa a los mensajes y formulaciones oficiales y hoy en su mayoría reciclados en los medios de comunicación.

Por último, encontramos dentro de las élites locales la figura del *wali*, el eslabón «descentralizado» de la administración del Estado, en realidad, un delegado del gobierno central en la región dotado de amplios poderes ejecutivos. El *wali* o gobernador es nombrado por el presidente y su nombramiento a menudo recae en algún oficial del ejército. Además, están las figuras de autoridad social como el *qaid* (notable o jefe tribal) y el *sheij* o jefe de la cofradía religiosa o *tariqa* del lugar. Pero estos términos pueden llevar a confusión, si se interpretan como una estricta pervivencia de la sociedad tradicional. Tales figuras han sobrevivido con funciones y naturalezas totalmente modificadas de las originales, y con una autoridad que se ejerce sobre una sociedad transmutada por el efecto acumulado de la colonización, el socialismo y la emigración. Quizá el elemento que más ha modificado esas relaciones de poder locales en los últimos años haya sido el surgimiento de la violencia, un fenómeno duradero que irrumpe y afecta principalmente al mundo rural. No solo afecta a la distribución de recursos coactivos en la sociedad (creación de Grupos Locales de Defensa, GLD), sino que también altera el papel del islam popular o marabúutico, privilegiado por el régimen como aliado en su «lucha» contra los grupos armados islamistas (que son presentados como importación extranjera y herética).

Un fenómeno este de la violencia que entremezclado con la economía depredadora afectará a la futura estructura de élites en Argelia. En efecto, el surgimiento de nuevos grupos armados desde 1990 o la expansión de la economía informal, la precariedad económica y el contrabando (*trabendo*) modifican el reparto de recursos. A su vez, el conflicto interno acelera la privatización del importante sector público argelino, comenzada primero con la apertura del sector de hidrocarburos a las empresas internacionales, y reforzada luego con un plan de ajuste estructural (1994-1999) bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional, cuyas orientaciones desreguladoras se prolongan hasta nuestros días.

La propia violencia del conflicto posibilitó que se realizaran transferencias de propiedad, de manos públicas a privadas y cuando no, de

manos privadas a otras privadas. El cierre de empresas públicas por falta de rentabilidad o su destrucción facilitada por los ataques «terroristas» ha conducido a un trasvase continuo de recursos del sector estatal al privado. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en las fértiles tierras de la Mitiya, donde se produjeron algunas de las más terribles masacres del conflicto (Kalyvas, 1999), pero no es el único. Estos cambios de propiedad, en un futuro podrían modificar la composición de las élites primarias y secundarias. Por ello, no es de extrañar que aparezcan nuevas élites ligadas a la economía informal y delictiva. Mafias, grupos armados más interesados en la delincuencia que en una causa política identificable (Martínez, 1998) y por supuesto redes de contrabando (en las fronteras del país y en el sur). Con todo, es difícil imaginar quiénes o cuáles pueden ser las élites alternativas, puesto que desde 1962 los puestos de poder relevantes han sido ocupados por los «nacionalistas históricos», surgidos todos de la gran familia revolucionaria. Esta realidad es la que nos lleva a dudar de que exista, hoy por hoy, una élite de reemplazo.

Otros recursos (coacción, información, ideología y capital)

Además del Estado ¿cuál es el reparto de recursos entre esas élites? Por otra parte, ¿cuáles son los recursos principales, los de máxima utilidad en términos de acumulación de poder?

a) Recursos coactivos

A pesar de que en los últimos años, al menos hasta el recrudecimiento terrorista de 2007, la situación ha mejorado, el monopolio de los recursos coactivos ha sido seriamente puesto en duda desde 1992. La existencia de un número de guerrillas islamistas y comandos urbanos junto a bandas de delincuentes ha permitido una cierta diseminación de los recursos coactivos y del ejercicio de la violencia. No solo los maquis islamistas y las bandas delictivas han cuestionado el monopolio estatal de la violencia, sino que el propio Estado argelino, siguiendo el ejemplo turco y latinoamericano, ha entregado armas y ha permitido la formación de milicias locales encargadas de la lucha antiislamista, los llamados Grupos Locales de Defensa (GLD). Fueron autorizados legalmente y organizados en 1997 y todavía hoy siguen sin ser desarmados. La readaptación de

su ejército a una lucha de guerrillas para las que no estaba preparado por medio de la adquisición de moderno material militar y una actitud internacional más benevolente con el régimen (especialmente a partir de 2001) han hecho inclinarse la balanza del lado del Estado argelino.

Hoy en día, si bien se vive un rebrote terrorista en condiciones algo distintas —con la nebulosa de al-Qaida en el Magreb y las amenazas contra ciertas corporaciones extranjeras—, la capacidad de supervivencia del régimen parece asegurada.

b) Información

La información es un recurso extremadamente importante en un Estado autoritario, que es opaco por definición. Tradicionalmente los servicios secretos eran actores protagonistas y grandes beneficiarios. Estos heredaron un poder muy importante del período del partido único, cuando controlaban virtualmente todos los sectores de actividad a través de las famosas «células azules», unos documentos visados por los temidos agentes que daban luz verde a la contratación en el sector público (Bustos, 2004). Actualmente, en una economía en proceso de liberalización, pero no de mercado, la información económica adquiere una gran relevancia, muy por encima de la política. El conocimiento de las normas administrativas y de las artimañas burocráticas se convierte en recurso esencial de poder. Permite sortear las trabas aduaneras que afectan a determinadas partidas de productos, a veces retenidas en la aduana durante días sin causa aparente (Hadjadj, 2001). Las comisiones ocultas para conseguir elevadísimos contratos de obras y servicios requieren información confidencial.¹⁵

c) Ideología

Los recursos ideológicos usados por el régimen son más difusos hoy de lo que lo eran durante la *etapa socialista*. Desaparecido el socialismo a la argelina como ideología, mitigado ligeramente el nacionalismo, se acude una y otra vez al viejo discurso modernista-desarrollista (vaciado ya de contenido real). Además, hay un re-tradicionalismo religioso que a partir de los años ochenta y noventa sirve al régimen para apropiarse de parte del discurso islamista y combatirlo. Pero ¿quién detenta estos recursos? La televisión y radio públicas, casi monopolísticas, la prensa oficial

y los órganos del Estado como la Presidencia y el gabinete del jefe del gobierno, pero también el Ministerio de Asuntos Religiosos, que controla los sermones de las mezquitas. La prensa privada, existe ciertamente aunque está lejos de ser independiente, ya que se compone de una miríada de pequeños periódicos detrás de los cuales se esconden empresarios u oficiales del ejército, o alianzas de ambos, que lanzan desde esas tribunas ataques contra uno u otro clan o facción del régimen.

d) Capital

Los recursos económicos, a pesar de las transformaciones económicas acaecidas (fin del socialismo, planes de ajuste estructural, privatizaciones y violencia) siguen estando ligados a la renta, tal y como se describía en la introducción, y son de naturaleza distributiva. De hecho, el peso de los hidrocarburos en el PIB y en los ingresos fiscales es hoy mayor de lo que era en los años ochenta y la tendencia es a seguir aumentando (Mañé, 2006b).

Las cadenas o redes de distribución se han modificado, sin duda, con respecto a las del período socialista. Son ahora más complejas y diversificadas, pero siguen funcionando a partir de la circulación de recursos públicos cuyo principal componente es la fiscalidad petrolera. Tres son los eslabones de esta cadena, en primer lugar las grandes inversiones públicas,¹⁶ en segundo lugar, los circuitos informales engrasados por la fuga de capitales y por último, los subsidios a los antiguos combatientes o sus familiares. Las grandes inversiones ya no se destinan a la creación de un sector industrial sino a infraestructuras y obras públicas.

Los circuitos informales que antes pasaban por el sector privado, en su papel de intermediario entre empresas socialistas y población, se articulan hoy en torno a las grandes y medianas empresas de importación (Hadjadj, 2001). Argelia gracias a los ingresos del petróleo y del gas es uno de los mayores importadores del mundo;¹⁷ su economía depende de la importación.¹⁸ Por otra parte, algunos dividendos de la fuga de capitales que alcanza cifras astronómicas¹⁹ engrasan estos circuitos económicos por medio de inversiones comerciales o especulativas (inmobiliaria).

El último eslabón de la cadena de distribución es a través de los subsidios a los familiares de los mártires y combatientes de la guerra de liberación (*muyahidin* y *shuhadá*) que aún hoy sigue siendo una de las partidas más significativas de los presupuestos argelinos.²⁰ Estos subsi-

dios y otras ayudas públicas, no llegan más que con cuentagotas a muchos combatientes o a sus familiares que subsisten con ingresos muy bajos, pero debido a su enorme volumen acaban derivándose hacia otros sectores informales de la economía.

Ordenando los recursos citados (coactivos, informativos, ideológicos y capital) por su importancia para la acumulación de poder, colocaríamos en primer lugar la renta de los hidrocarburos y —desde los últimos lustros del siglo XX—, casi al mismo nivel, los recursos coactivos a los que está asociada a la persistencia de la violencia política y delictiva en el país.²¹ En esta clasificación, a continuación, seguiría la información, muy ligada a los servicios secretos y a los dudosos negocios privados que hacen punción de los ingresos públicos y las cadenas regulares de distribución de la renta. Finalmente, situaríamos la ideología y los pocos recursos económicos ajenos a los hidrocarburos.

Identificación de los movimientos de protesta, de oposición y de resistencia en Argelia

Tipos de reclamación

Protestas: reclamaciones más o menos espontáneas de rechazo contra la corrupción y el despotismo (frecuentes y dispersas). Se han producido sobre temas como la adjudicación fraudulenta de viviendas protegidas, las subidas incomprensibles y brutales del precio de la bombona de gas butano (en el país del gas) o los excesos represivos de las fuerzas de seguridad, o sobre temas de política internacional como las guerras y bombardeos en Irak, Líbano o Palestina. Las protestas (*émeutes*, en francés) han acompañado la sociedad argelina en los últimos 25 años, comenzando con las protestas de la Qasbah de 1985 y siguiendo por los famosos y trágicos acontecimientos ocurridos en octubre de 1988.

Oposición: la oposición política, tanto legal como al margen de la ley (ilegalizada o no legalizada) es sumamente débil. Los partidos de oposición legales, como el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) o el Movimiento para la Democracia en Argelia, MDA, cuyos líderes (Ait Ahmed y Ben Bella) viven en el extranjero, son minoritarios parlamentariamente y están divididos por luchas internas. El FFS, en todo caso, lleva

tiempo gobernando bastantes municipios de Kabilia. A algunos líderes opositores históricos como Mehri, Ibrahim, Gozali o Hamruch o bien no se les permite legalizar sus partidos (el Wafa de Ibrahim y el Frente Democrático (FD) de Gozali, por ejemplo) o bien se les rechaza su candidatura presidencial (Hamruch e Ibrahim). Otro partido legalizado de oposición es el Partido de los Trabajadores de Luisa Hanun, que a pesar de haber participado en diversos gobiernos mantiene posiciones propias de crítica en algunos aspectos. En cuanto a la oposición ilegalizada, el Frente Islámico de Salvación (FIS) ya no existe como partido, ya que su liderazgo se ha dividido tanto geográfica como políticamente; sus antiguos líderes actúan individualmente.

Resistencias: movilizaciones organizadas contra determinadas políticas o aspectos del régimen. En la historia de la Argelia independiente, las ha habido de tipo democrático y de base étnico-regionalista (Kabília, en las décadas de 1960, 1980 y 2000). En los últimos dos décadas, otras formas de movilización han venido protagonizadas por los colectivos de mujeres a favor de la supresión o modificación del Código de Familia; por los sindicatos «oficiales» contra la privatización; por los sindicatos autónomos a favor de las libertades sindicales y las mejoras salariales; por los familiares de los desaparecidos; por los militantes de derechos humanos y por otros colectivos contra la impunidad de la ley de reconciliación y finalmente, por grupos islamistas asociados a partidos legales (HAMAS-MSP, y MRN-Islah) por cuestiones religiosas contra la modernización del código de familia.

Grupos o movimientos sociales con capacidad de movilización

Sigue en vigor el decreto de estado de excepción de 1991, ampliado en 1993. Por ello, las manifestaciones están en principio prohibidas. Toda reunión está sujeta a autorización oficial, que se da solo en circunstancias restringidas. Las concentraciones oficiales o pro oficiales aparecen sobredimensionadas, frente a las de la oposición y otros grupos sociales. Además, las movilizaciones de grupos islamistas perseguidos (con simpatizantes en la universidad, por ejemplo) simplemente no tienen lugar por razones obvias. Por tanto, es difícil medir con precisión la capacidad real de movilización de los distintos grupos.

Los grupos y movimientos sociales con capacidad de movilización

serían: el antiguo sindicato único, hoy sindicato dominante (Unión General de Trabajadores Argelinos, UGTA); las organizaciones ligadas a los aparatos del Estado como la Organización Nacional de los *Muyahidin* (ONM; antiguos combatientes de la guerra) y los de familiares de los *Shuhadá* o mártires de la guerra²² y otras ONG semificiales; los *'aruch* o plataformas comunales de Kabilia con muchísimos miembros y simpatizantes en la capital, aunque con un poder decreciente; los llamados «sindicatos autónomos» (activos en la educación y ciertos sectores profesionales); los colectivos y asociaciones de la sociedad civil (feministas, militantes por los derechos humanos (LADDH), etc.); las organizaciones caritativas islámicas ligadas a los partidos islamistas legales (MSP-ex Hamas y MRN-Islah) y finalmente, las estructuras tradicionales rurales (las tribus con sus jefes al mando, *qaid*s y las cofradías islámicas o *tariqas*, que varían mucho en su naturaleza oscilando de entidades básicamente locales a entidades casi nacionales cuando no transnacionales). Las *tariqas* están coordinadas por una asociación nacional, que en los últimos tiempos ha actuado cerca del régimen, especialmente dando justificación a la lucha contra los maquis islamistas.

La capacidad de demostración de fuerzas no es la misma, no solo desde el punto de vista de los diferentes recursos que poseen, sino también desde las limitaciones establecidas por el estado de excepción y el acoso que sufren determinados actores (sindicatos autónomos, LADDH, familiares de desaparecidos, estudiantes islamistas, etc.) frente al trato de favor del que se benefician otros (UGTA, ONM, partidos de la coalición presidencial (como el MSP), ONG semi-oficiales, coordinación nacional de *tariqas*, asociaciones de víctimas del terrorismo, etc.). Los «favorecidos» tienen a su disposición no solo estructuras casi institucionales sino también los principales medios de comunicación (televisión pública, la única cadena existente; los canales de radio y parte de la prensa, la de propiedad estatal).

Relaciones circulares y relaciones lineales de los grupos y movimientos sociales

La diferencia principal entre las relaciones lineales y las circulares de poder es que las primeras buscan un *empoderamiento* en derechos para la mejora del bienestar general o de un colectivo en particular, mientras que

las relaciones circulares son promovidas por las élites para la mejora de su posición relativa. En el caso de las movilizaciones lineales, la lucha dura hasta que se consiguen las reformas legales o el reconocimiento del bienestar. Por el contrario, la lucha en las relaciones circulares se define por ser indefinida o permanente.

Se observa, con respecto a esta dinámica, que existen determinados grupos con capacidad de movilización que, por ser próximos al régimen, no entran dentro de ninguna de las categorías definidas anteriormente: de protesta, oposición o resistencia (UGTA, ONM, ONG semipúblicas, etc.).

Los *actores de la protesta*, por su naturaleza espontánea, se conforman y disuelven fácilmente, surgiendo en torno a un barrio, pueblo o grupo de edad (adolescentes y jóvenes), a raíz de un suceso de abuso de poder o injusticia insoportable. El objetivo de las protestas y revueltas es normalmente desagrarar un suceso percibido como *hogra*, es decir, humillante y en ocasiones tratar de remediar una injusticia, aunque las más de las veces expresa un enojo colectivo más escéptico que esperanzado.

Los *actores de oposición tradicionales*, esto es, los partidos políticos de oposición, son incapaces, por razones legales o políticas, de movilizar amplios sectores de la población. Sufren un vaciamiento que afecta a todos los partidos argelinos y además, problemas de liderazgo y fragmentación como consecuencia del exilio de buena parte de los dirigentes y de cierto caudillismo.

Los *actores de la resistencia* (*'aruch*, sindicatos autónomos, feministas, militantes de derechos humanos y en el límite, asociaciones caritativas, asociaciones de víctimas del terrorismo y la UGTA) pueden llegar a defender posturas antitéticas y estar enfrentados, entre sí. Todos pueden en algún momento oponerse a políticas, decisiones o acciones del régimen, ya sean estas las privatizaciones, la represión policial en Kabília, el recorte de libertades sindicales, la impunidad o perdón de los terroristas, el ocultamiento de las desapariciones forzadas o la reforma del código de familia. El mismo movimiento *'aruch*, dividido en dos a raíz de las negociaciones con el gobierno, es sintomático de la dificultad de determinar si los grupos o movimientos se mueven en relaciones circulares o lineales de poder. La cooptación, siendo un arma esencial del régimen, oculta a menudo la verdadera naturaleza de estas relaciones.

Relaciones de competencia y alianza entre las élites e influencia de los movimientos sociales en Argelia

Estructura de las relaciones de competición y alianza en el interior

En este apartado examinamos en qué medida las élites argelinas han experimentado en el curso de los últimos quince años (1992-2007) un proceso de circulación. ¿Qué tipo de circulación, si alguna, se ha producido, por renovación generacional, por cooptación, por ascenso social o por irrupción de la población a través de relaciones lineales de poder (por ej., procesos revolucionarios)? Por otra parte, exploramos la capacidad de la población para avanzar sus demandas y lograr movilidad ascendente satisfaciendo sus reivindicaciones políticas durante este mismo período. ¿Han logrado esas movilizaciones democratizar el sistema o por el contrario han creado nuevas estructuras verticales o jerárquicas? ¿Qué influencia han tenido dichos movimientos sociales en la dinámica de competición y alianza de las élites?

En general, las élites centrales argelinas se han renovado muy poco, teniendo como prueba más palpable la vuelta de los líderes de los años setenta al poder a partir de 1999 (Abdelaziz Buteflika, a la cabeza, pero también el ministro de asuntos exteriores Mohamed Beyaoui, un histórico del bumedianismo, que también ha sido en momentos claves presidente del Tribunal Constitucional o el ya fallecido Mohamed Chérif Messadia, presidente del Senado). Igualmente el parlamento sigue arrojando una media de edad elevada, pese al relativo rejuvenecimiento que se produjo en las elecciones legislativas de 2002 (Werenfels, 2007 y Benyoub, 2002) y en menor medida en las del año 2007 (Bustos, 2007 y Marx, 2007). Este sesgo generacional todavía es mayor si se tiene en cuenta la proporción de jóvenes y niños que durante el mismo período se ha convertido en el segmento más numeroso de la población.²³

La demarcación más estable y al mismo tiempo invisible se da entre facciones de las élites. Una línea divisoria que por tratarse de la acumulación del poder es dinámica y necesariamente variable. Las facciones de la élite se constituyen en clanes, clanes de poder no clanes en sentido antropológico; estos son redes de patronazgo y clientelismo que surgen en torno a una personalidad; a menudo, los clanes siguen ciertas líneas regionales. Ejemplos de ellos son: el histórico clan de Uyda (Oeste) que llevó al poder a Ben Bella, el clan de Zerual-Betchin-Benhamouda (de

Constantina en el Este) y más recientemente el clan de Buteflika-Beljeir (del Oeste, de la región de Tlemcén).

Aunque se han evocado las pugnas entre los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas por la hegemonía del Estado y su control, en Argelia parece más acertado hablar de luchas de clanes que atraviesan dichas instituciones. Por ejemplo, un determinado clan ha de contar no solo con oficiales de alta graduación sino también con jefes de los servicios secretos si quiere acceder a los recursos fundamentales. En realidad, los mismos servicios de espionaje están fragmentados en varias agencias.

La competición entre los distintos clanes obedece a reglas algo complejas que no obstante podemos identificar como tres: la pertenencia a un clan regional o de parentesco, la solidaridad interna de un grupo por una experiencia común fuerte, o la complementariedad o competición en los intereses económicos de la clientela. En su origen, durante y después de la guerra de liberación, los clanes se forman en torno a familias y las alianzas que estas tejen (Liabès, 1982). No obstante, ya en este primer momento, se forman grupos de solidaridad como los DAF (Desertores del Ejército Francés) que se encuentran en el Ejército de Fronteras o los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ALN, en su acrónimo francés) del interior que luchan en el maquis dentro de las fronteras protegidas por los franceses. Igualmente es el caso de los fundadores del MALG (Ministère de l'Armement, des Liaisons générales et des Communications), el servicio de espionaje durante la guerra de independencia. Posteriormente, ya en los años ochenta, surgen nuevos clanes, ligados a los negocios. La esposa del presidente Benyedid, Halima, originaria de Mostaganem (Oeste) pondrá en contacto al oficial Larbi Beljeir (DAF como Benyedid) con un buen número de empresarios y arribistas. Estos clanes harán buenos negocios a lo largo de los años ochenta (Riad el-Fath o los créditos del amigo del hijo de presidente, por ejemplo), que crecerán exponencialmente durante los años noventa y primera década del siglo XXI, al calor del conflicto.

Este conflicto hace visible la disputa entre clanes regionales en el seno de los aparatos del Estado. Desde el año 2004, en que el teniente general Mohamed Lamari pasó a la reserva por enfermedad, el presidente Buteflika ha aprovechado para ir haciendo algunos cambios importantes en el seno del ejército y las Fuerzas Armadas. Estos cambios, que no equivalen —como a veces se comenta— a una prueba de la autonomía del presidente sobre los clanes de poder, producen fricciones y negocia-

ciones entre las diversas facciones regionales. Buteflika ha promovido a puestos importantes, como el de comandante de región militar, a una nueva generación, formada principalmente en las academias militares argelinas (generación ANP —Ejército Nacional Popular—) y no en las grandes academias internacionales como la generación precedente y de los DAF. Además, ha buscado colocar en puestos claves a figuras originarias del Oeste como al teniente general Mohamed Senhadji. Para contrarrestarlo, oficiales del clan del Este han intentado promover a cargos importantes a oficiales de esa zona, como Ahmed Bustila.

En resumen, los factores que explican la división y lucha entre facciones se entremezclan. La procedencia de una misma zona geográfica no implica que un personaje de la élite vaya a pertenecer a un determinado clan regional. Dos personalidades del mismo lugar pueden estar enfrentadas por pertenecer a dos generaciones distintas o haber participado en experiencias que les oponen diametralmente. Es el caso del general Rachid Benyelles y del presidente Buteflika, enemigos jurados y sin embargo, los dos oriundos de Tlemcén. Los grupos de solidaridad experiencial son bastante sólidos, aunque puede haber bajas en los mismos o jerarquías en su interior. Así por ejemplo, dentro de los DAF, no reciben la misma consideración los oficiales con experiencia de combate que los que han estado más bien dedicados a la ingeniería, el análisis o la administración (caso del general Mohamed Tuati, a pesar de su valor como «cerebro militar»).

Por último, queremos referir cómo los intereses económicos de las distintas clientelas pueden llevar al conflicto o a la cooperación. Evidentemente, todos los clanes tienen un interés estructural en mantener el sistema que les permite realizar la acumulación de poder. Ahora bien, en una economía como la argelina de tipo rentista, los intereses de los industriales privados y los de los importadores y distribuidores no son precisamente armónicos. Bien al contrario, muchas de las disputas que se dan entre clanes tienen que ver con el tipo de medidas públicas que se toman y que benefician o perjudican a grandes importadores o grandes industriales. Por esta razón, es lógico ver una cierta complicidad táctica entre clanes que se benefician más de la importación que de la producción, y al revés. Luego, lógicamente, cada uno pugnará por facilitar la importación en su sector, ya sea este, el de la compra de armamento y servicios de seguridad, los medicamentos, los productos de lujo o los de primera necesidad.

Las alianzas de las élites se producen entre facciones o clanes de la élite primaria y distintas élites secundarias. Un buen ejemplo de las oscuras ligazones que unen a unas y otras lo ofrece el caso de ascenso y caída del magnate Abdelmunin Jalifa, quien se enriqueció de la noche a la mañana en los años noventa e igualmente vio destruido su imperio en el mismo corto plazo. Un imperio que llegó a estar compuesto de bancos, cadenas de televisión, aerolíneas, agencias de viaje, etc. Jalifa está en la actualidad detenido en el Reino Unido a la espera de una orden de extradición a Argelia. El colapso del emporio Jalifa habría supuesto según los expertos el mayor desfalco y perjuicio causado al Estado argelino por una empresa privada en toda su historia. De acuerdo con los tribunales de justicia, los negocios del Banco Jalifa (Banque Khalifa) no solo habrían servido para lavar dinero y realizar determinadas préstamos a figuras del poder, sino que además habría sido utilizado por varias instituciones públicas argelinas para crear fondos de pensiones porque ofrecía condiciones más ventajosas que el resto de bancos (Werenfels, 2007: 190).

En otro nivel, las facciones de las élites primarias colaboran y se alían entre sí en determinadas ocasiones, como en la elección presidencial. La presidencia es un cargo del Estado que por su importancia no puede lograrse sin el apoyo de poderosos clanes de las élites primarias. Ahora bien, esto no significa que todos esos clanes deban prestar el mismo apoyo al candidato presidencial. Algunos pueden haberse visto obligados a dar el visto bueno para llegar a una solución colectiva que les permita seguir llevando a cabo su juego de acumulación. Fue el caso de la selección de Abdelaziz Buteflika en 1999. Si bien el apoyo de Larbi Beljeir y su clan fue decisivo, otros oficiales no estaban tan convencidos entre otras razones por el pasado de político ambicioso y difícil de embridar que Buteflika tiene. Es más, pasada la elección informal del presidente, determinados clanes pueden poner en duda lo apropiado de su continuidad y comenzar una lucha de desgaste que traerá la dimisión o la salida del presidente de turno. Esto es precisamente lo que ocurrió con el presidente Liamin Zerual (1994-1999) que acorralado por las presiones y el asesinato de algunos colaboradores cercanos (Benhamuda, entre ellos) anunció la convocatoria de elecciones anticipadas y su renuncia a presentarse a las mismas. Zerual contaba evidentemente con el apoyo claro del clan del general Mohamed Betchin y de la Administración de Clinton en Estados Unidos; sin embargo, determinados acontecimientos, principalmente, el sabotaje (con negociación paralela) de sus iniciativas para

lograr una salida negociada, le convencieron de la inutilidad de dirigir el Estado.²⁴

Un buen ejemplo de las alianzas entre facciones primarias y élites secundarias lo encontramos bajo las presidencias de Abdelaziz Buteflika. Su presidencia se consolidó, a pesar de no haberse iniciado con excesivo sostén de los clanes primarios, gracias a los apoyos internacionales que Buteflika se había granjeado en su exilio dorado trabajando como consejero para empresas del golfo Pérsico establecidas en Europa. Buteflika desconfiaba y lo sigue haciendo de los partidos (incluso del suyo, el FLN) y fue levantando redes no partisanas de apoyo presidencial, las famosas plataformas «populares» que utilizaría tanto en 1999 como en 2004. Esas plataformas están lideradas por élites locales, notables, jefes de tribu y autoridades religiosas rurales. El islam rural representado burocráticamente en la Asociación nacional de *Zawiyas* le ha sido fiel todos estos años, activándose para las campañas electorales a cambio de generosas donaciones y ayudas públicas (Werenfels, 2007). Exteriormente, la presidencia de Buteflika tiene buenos socios en las grandes empresas multinacionales, principalmente americanas y francesas, así como en los gobiernos de los presidentes G. W. Bush y de J. Chirac. Regionalmente, su polo de gravedad es la zona oeste, de la región de Tlemcén y de Tiarret, de donde son originarios por ejemplo, Abdelaziz Beljadem,²⁵ Mohamed Beyaoui, Larbi Beljeir y el propio presidente, Buteflika.²⁶

Relaciones con las élites exteriores

Tradicionalmente han sido dos los pivotes de relaciones exteriores de las élites argelinas con el exterior: el que se ha dado y da, entre las propias élites argelinas, en función de si sus grupos se hallan en el exilio o en el interior del país, y el de la relación con las élites francesas.

Como explica Roberts (2003), una parte de las relaciones con las élites exteriores se ha producido a través de los miembros exiliados de las facciones de poder que habían sido alejadas de él, por haber perdido en la lucha por el control del Estado. Para este autor, la extravención del conflicto faccional a inicios de los noventa en Argelia desemboca en la internacionalización del conflicto argelino. Este cambio viene motivado porque, en los noventa, por primera vez en la historia de la Argelia independiente, es el Estado, y no las facciones en el exilio, quienes buscan

apoyos externos, con el fin de que intervengan —o, al menos, opinen— en la política argelina. Esta internacionalización se traduce en la aparición de tres nuevos grupos de actores en la escena política argelina: a) los estados extranjeros; b) las ONG (derechos humanos, asociaciones de mediación como la Comunidad de San Egidio) y la opinión pública; y especialmente desde la firma del acuerdo con el FMI en 1994; c) los organismos económicos internacionales u otros actores económicos extranjeros. La consecuencia de ello es doble. Por una parte, el punto de vista de actores externos sobre lo que pasa en Argelia comienza a contar y, por ende, los actores argelinos empiezan a preocuparse por mantener y utilizar —con clave interna— esas relaciones. Mientras que por otra, la arena política argelina se internacionaliza y lo que pasa en Argelia entra a formar parte de la agenda internacional. Esto modifica tanto la propia política nacional y el juego de los actores, como la intervención de actores externos en la vida económica y política de Argelia. La culminación de este cambio parece ser la transnacionalización de las redes políticas y económicas argelinas.²⁷

Por razones históricas, las relaciones más fuertes se han dado y se siguen dando con las élites francesas. El entramado es complejo y se produce por la mediación de la comunidad de origen argelino en Francia (ocho millones de argelinos y un millón de binacionales) y por los lazos empresariales que esa comunidad y otros franceses tiene en Argelia, primer mercado de exportación para Francia en África. La importancia de los intereses franceses dentro de la élite argelina ha alimentado en el inconsciente popular la idea del *hizb al-fransa*, o partido de Francia. Durante la época posrevolucionaria, los acusados de pertenecer o enfeudarse al *hizb al-fransa* podían incluso ser perseguidos por la policía política y de espionaje, la Seguridad Militar. Con el tiempo, esta acusación, sobre todo política, se ha convertido en una acusación económica y cultural, que los sectores islamistas han sabido aprovechar muy bien (por ejemplo, el FIS). Va dirigida a todas esas élites que tienen negocios en Francia y que además envían a sus hijos a estudiar allí y llevan por lo demás un tipo de vida europeo y ostentoso (véase, entre otros, Joffé, 1995).

Las relaciones entre Argelia y Francia no han sido fáciles desde la independencia, con asuntos pendientes como las indemnizaciones reclamadas por ciudadanos franceses, la devolución de archivos reclamada por las autoridades argelinas, así como cuestiones más espinosas referidas a la práctica de la tortura durante la guerra o a las masacres de Sétif

(1945) y París (1961) perpetradas contra manifestantes argelinos. La nacionalización de los hidrocarburos decidida en 1971 también creó una situación de crisis bilateral, como lo hizo el cierre de fronteras a los trabajadores argelinos, decidida por Francia en 1973 a causa de la crisis económica. Esto no ha impedido, sin embargo, que continuaran produciéndose importantes relaciones de cooperación técnica, comerciales y hasta militares.²⁸ A partir de los años ochenta, mejoraron notablemente las relaciones entre los dos países, bajo las presidencias respectivas de François Mitterand y de Chadli Benyedid, quienes se entendieron perfectamente en el plano personal. Esta mejoría política trajo también una mejora del clima comercial y económico, con la consecuencia de que el déficit comercial de Argelia con Francia creció enormemente, resultado del crecimiento de las importaciones y de la caída del precio del petróleo y de la devaluación del dólar. Ello obligó a Argelia a endeudarse y, en última instancia, a acudir al FMI.

La posición de Francia y más exactamente de las redes empresariales y financieras que mantienen negocios en Argelia fue importante durante la llamada «primavera argelina» (1988-1992). Parece haber distintas evidencias de que estos sectores franceses no otorgaron al ministro reformador Mulud Hamruch el apoyo necesario para llevar a cabo «sus» reformas. En realidad, las resistencias surgían de ambos lados, puesto que tampoco las empresas del sector público argelino, que disfrutaban de relaciones asentadas con sus socios en Francia, querían ver alterada la situación (Bustos, 2004). Otra señal de descontento con los acontecimientos que se producían en Argelia, especialmente el avance electoral del FIS, vino de los medios de comunicación franceses, que proyectaron una imagen alarmista de la evolución política. Ese clima de opinión retomado por otros medios internacionales, como el *Financial Times*, vía la manipulación del ejército argelino, preparó el ambiente para el golpe de Estado (Bustos, 2004).

Pero quizá, el momento más decisivo de influencia francesa fue en el momento de la anulación del proceso electoral, en enero de 1992. Una decisión como esa no pudo tomarse sin consultar antes e informar a las autoridades francesas. Este fue el objetivo del viaje que Larbi Beljeir realizó a París en enero de 1992, el de consultar y volverse con un visto bueno y una promesa de no injerencia francesa en las decisiones que tomaría la Junta Militar (Naylor, 2000).

Posteriormente, en las presidencias de Zerual y de Buteflika, la pre-

sencia de Estados Unidos ha ido en aumento, primero con la presidencia Clinton (bajo Zeruál) y después con la de G. W. Bush (bajo Buteflika). Esta última alianza o apoyo exterior se consolidará a partir de 2001 y del lanzamiento de la «guerra contra el terrorismo». No obstante, el inicio del incremento de la presencia y de la influencia estadounidense en Argelia puede datarse de principios de los años noventa. Años en los que se promulgó la reforma de la ley de hidrocarburos de 1991 y se adoptó un plan ajuste estructural (1994-1999). Ambos factores llevaron a la apertura de los sectores productivos al exterior. Las empresas petroleras, especialmente Anadarko, con sus filiales logísticas (Halliburton, Bechtel) han realizado los mayores descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos desde esas fechas. Hasta el punto de que desde hace algunos años las inversiones estadounidenses en Argelia ya superan a las europeas (Mañé, 2006a).

Los negocios del gas con España e Italia, por un lado, y los de la industria del petróleo (tecnología), la importación de sémola y otros alimentos y la cooperación militar con Estados Unidos, por otro, son igualmente importantes y afectan notablemente las relaciones de Argelia con esos países. En el caso de España, podemos hablar propiamente de interdependencia (dependencia mutua) (Mañé y Lorca, 2007), mientras que en el de Estados Unidos, se trata de una influencia creciente de ese país en Argelia (importancia reconocida del mercado de gas estadounidense más tecnología petrolífera y cooperación militar), ya que Argelia no puede obviamente condicionar la política estadounidense. Sin embargo, Argelia es influyente en Washington a través de poderosos lobbies muy poco conocidos, por no decir secretos.

El hombre que desde 1999 dirige los designios energéticos de Argelia, el director general de SONATRACH y actualmente ministro de Energía, Chakib Jelil, otro originario de Uyda, ha estudiado ingeniería en Texas y ha estado muy ligado a los grandes consorcios argelo-americanos y contratos como el Valhyd Group, para la producción y distribución del GNL (gas natural licuado), el cual proporciona actualmente a Argelia la mayor partida de sus ingresos de hidrocarburos. La creciente presencia americana en Argelia iniciada en 2001, con la guerra contra el terrorismo, hace que las élites políticas francesas, preocupadas, intenten estrechar al máximo sus lazos con las autoridades argelinas. Valga sino como ejemplo, el viaje de felicitación de Jacques Chirac a Argel en 2004, antes incluso de proclamarse los resultados oficiales definitivos.

Influencia de los movimientos sociales y dinámica global resultante

El régimen argelino dispone gracias a su experiencia de la guerra de independencia (MALG) y después del período del partido único (Seguridad Militar) de extraordinarias capacidades de infiltración, manipulación, provocación y distorsión. La discordante transición argelina no puede entenderse sin incorporar este elemento y en concreto su efecto sobre el principal movimiento organizativo de entonces, el FIS con su Sindicato Islámico del Trabajo (SIT) y su red de organizaciones caritativas. Esas manipulaciones se dieron en diversos momentos de aquel período bajo diversas formas y resultados: en octubre de 1988, en mayo-junio de 1990 y otra vez antes de las elecciones de 1991 (Bustos, 2004). El elemento determinante del bloqueo electoral y del parón de la transición argelina fue la movilización orquestada por el régimen de una serie de organizaciones de masas creadas por el partido único.

El funcionamiento de estos servicios secretos (DRS, a partir de 1990) también se ha hecho visible a partir de la llamada crisis bereber de 2001, en la que se han producido infiltraciones en el movimiento de los *'aruch* conducentes a una división de tendencias y a negociaciones por separado con el régimen. Igualmente durante los primeros años de la década 2000, varios antiguos oficiales de los servicios secretos argelinos (N. Yous en 2000, H. Souaïdia en 2001, H. Aboud en 2002, A. Tigha en 2002²⁹ y M. Samraoui en 2003) fueron denunciando uno tras otro que el DRS había infiltrado los maquis islamistas para crear organizaciones criminales cuyo fin era desacreditar al AIS y a la causa islamista, atribuyéndoles algunos de los más horrendos asesinatos de argelinos y extranjeros.

Desde 1995 y sobre todo desde 1997 asistimos a la cooptación de ciertas élites islamistas (MSP-HAMAS)³⁰ por el régimen, sin que se produzca cambio político real ya que el régimen es el que controla en todo momento la modalidad de esta cooptación (Hamladji, 2002 y Werenfels, 2007). Un buen ejemplo fue la decisión de excluir de la carrera presidencial a Mahfud Nahnah líder del MSP en 1999 y de pedirle, a cambio, que apoyara al candidato institucional Abdelaziz Buteflika. Las consecuencias de aceptar esta propuesta, fueron un claro castigo electoral del MSP en las siguientes elecciones (de 69 a 38 escaños) y una tensión interna dentro del partido.

Una función importante es la que desempeñan las autoridades tra-

dicionales (*qaid*s tribales y notables rurales) en la movilización del voto. Este fenómeno de caciquismo ha sido identificado tanto en las elecciones de 1990 y 1991 (Cherrad, 1992) como en las posteriores de 1997 y 2002 (Djabi, 1998, Hachemaoui, 2003 y 2004). En concreto, el FLN ha demostrado en numerosas citas electorales que puede acudir a ese electorado de las zonas del interior del país. Son feudos que arrojan una y otra vez, sin sorpresas, cómodas victorias electorales para el FLN. Ello también ocurre, en algunos casos, con el RND, si bien este es un partido algo más joven que depende de bases predominantemente urbanas. En este mismo sentido, tampoco hay que olvidar que los partidos Cabiles utilizan recursos parecidos en sus feudos de Kabilia para atraer el voto (Layachi, 2004), o que los candidatos independientes de ciertas zonas (como el Mzab) apelan a criterios de pertenencia religiosa y comunitaria (existencia de comunidades jariyies o ibadíes) para ser elegidos.

No todos los grupos sociales son manipulados o cooptados; por el contrario, las manifestaciones espontáneas o semiespontáneas de protesta son frecuentes en la historia reciente de Argelia. Por su parte, el partido MRN-Islah se ha mantenido relativamente alejado del poder, rechazando distintas invitaciones para formar parte del gobierno, aunque evidentemente su existencia legal se debe al consentimiento del régimen.

El inconveniente para otros movimientos opositores o contestatarios, legales (FFS, LADDH, MDA, etc.) o clandestinos (Movimiento Argelino de Oficiales Libres, MAOL,³¹ por ejemplo) es que para evitar la infiltración y la manipulación deben actuar en secreto, lo que impide o dificulta cualquier movilización u organización de base a gran escala. Por tanto, disminuye ostensiblemente su capacidad de constreñir las estrategias de acumulación de las élites y el propio funcionamiento del sistema político. El caso de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), dividida en dos tendencias, es reveladora de este dilema. Hocine Zehouane, que lidera una de las dos tendencias, se aferra a la presidencia de la organización negándose a seguir los cauces internos de re-elección y aduce como razón para saltarse los mecanismos democráticos que la otra tendencia ha sido infiltrada por el régimen.³²

La estructura del sistema de poder en Argelia

Lo que se ha visto en páginas anteriores muestra que la estructura del sistema de poder en Argelia se caracteriza por tres elementos:

- 1) la existencia de una élite perteneciente a un mismo y único grupo sociohistórico, solo que fraccionada en su proceso de «ocupación» del Estado;
- 2) un recurso principal y muy dominante de acumulación del que derivan los demás (la renta de los hidrocarburos); y
- 3) unas estrategias de competición feroz que incluyen la utilización frecuente de la violencia tanto en relación con facciones competidoras de la élite (eliminación física) como con los grupos sociales en ascenso (infiltración, asesinato, manipulación).

Esa estructura cuenta con una élite primaria, dividida en facciones dinámicas, que luchan por ocupar la cabina, ese lugar desde donde se acciona la noria del poder, se produce la toma de decisiones, y se pueden distribuir o redireccionar los flujos de la renta. Este lugar central no es otro que el de la presidencia. Aunque el presidente es presentado a veces como un árbitro entre facciones de la élite, él mismo no deja de pertenecer a un clan por lo que asume a la vez la función de favorecer y privilegiar su entorno inmediato (el clan de Tlemcén, por ejemplo), eso sí manteniendo ciertos equilibrios con los demás, so pena de crear excesivo descontento en los mismos.

El hecho de ocupar esa posición central en la noria de poder modifica también el acceso de las élites periféricas a los círculos de toma de decisión. Como I. Werenfels ha mostrado (2007), esas élites periféricas pueden pasar, en función de qué actor primario se encuentre en la presidencia, del tercer al segundo círculo de toma de decisiones. También sus recursos pueden aumentar o disminuir en función de esas alianzas. Es decir, que la relevancia tanto en términos de cercanía al poder como de recursos, de los actores periféricos depende de alianzas concertadas con la élite primaria. En el caso de Argelia, se observa una enorme estabilidad en la composición de las élites primarias, de los pasajeros de la noria de poder, ya que como hemos visto todos los grupos se originan de la misma forma hace ahora cuarenta y cinco años. La falta de élites de remplazo consolida esta situación. Al mismo tiempo, la existencia de un único

recurso principal de poder (la explotación de los hidrocarburos) cristaliza la estructura de poder, haciendo los cambios mucho más improbables en la composición de las élites primarias. Por esta misma razón, las élites secundarias no consiguen la mayor parte del tiempo autonomizarse ni entrar en el círculo de las primarias (valga la debilidad del grupo Jalifa).

En momentos como los actuales —en el que el precio del barril de petróleo supera la barrera de los 100 dólares— se produce una rápida acumulación de capital y de poder en Argelia. Por el contrario, cuando cesa el ciclo expansivo de los hidrocarburos y se inicia la recesión se agudizan las tensiones entre facciones. En esos momentos no es raro que proliferen los episodios de recrudescimiento de la violencia. Las tensiones son aún mayores cuando el relevo en la posición privilegiada de la presidencia se plantea con cierta urgencia (enfermedad de Buteflika). Por ello, no es de extrañar que en Argelia periódicamente se produzcan extraños episodios de violencia, cuya única coherencia parece ser la de poner en entredicho la autoridad de tal autoridad política o militar sobre cierta zona. Además, la creación de una cierta inseguridad es aprovechada por compañías privadas de seguridad que hacen el agosto en Argelia,³³ así como por Estados Unidos,³⁴ aunque este no es el único beneficiado, ya que en algunas ocasiones, las amenazas para que ciertas empresas extranjeras abandonen el país han sido rápidamente aprovechadas por compañías de otros países (fundamentalmente de capital chino, mediooriental o indio).

Al margen del uso de la violencia y la coacción, una de las estrategias de las élites para mantenerse en el poder es privatizar controladamente y, sobre todo, reconstruir los mecanismos de distribución de la renta adaptándolos a la nueva situación. Hoy en día, las grandes partidas de gastos son inversiones en obras públicas e infraestructuras (crecimiento exponencial de gastos de inversión en los dos últimos años).³⁵ Otra estrategia, que se produce a partir de mediados de los años ochenta acelerándose en los noventa y siguiendo en la actualidad, es la de la internacionalización de las élites que describe el propio Roberts.

A partir de 1990-1991 y con la anulación de la segunda vuelta de las elecciones, las principales facciones recurren a alianzas internacionales. Ello genera un fenómeno totalmente nuevo en la vida política argelina, que va a alterar completamente la naturaleza de la competición por el poder, ya que se difumina el límite interno-externo de la lucha. Con ello, las disputas argelinas entran a formar parte de la agenda política y eco-

nómica internacional. Cada facción del régimen hace valer sus alianzas internacionales —con el FMI, con Estados Unidos, con Francia, con las grandes empresas extranjeras, los medios de comunicación, las asociaciones de derechos humanos, los servicios secretos extranjeros, etc.— para el logro de fines internos.

Por último, la estrategia basada en una fortísima capacidad de penetrar, romper y cooptar los movimientos sociales, determina que solo puedan actuar con cierta libertad grupos sociales que sean correas de transmisión del régimen o bien grupos de ciudadanos que espontáneamente desencadenan revueltas violentas pero aisladas y sin seguimiento. El resto de grupos de oposición y resistencia, limitados por la clandestinidad, el acoso o el exilio, son incapaces de presionar o forzar al régimen a que emprenda procesos de apertura o liberalización política.

Escenarios de futuro, tendencias hacia la apertura o el cierre

Los cambios en la estructura capaces de incidir en el sistema político pueden deberse a la (des)aparición de los actores (por ejemplo, por la autonomía de élites secundarias que pasan a ser primarias), a cambios en la importancia de un recurso, o finalmente a cambios en las alianzas.

Hay ciertas dudas sobre el papel que pueden desempeñar los nuevos actores estatales en la región, puesto que todo apunta a que su importancia económica irá en aumento. Nos referimos a las empresas públicas y privadas de países como China, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e India. Estas empresas, por una parte, están aprovechando el actual maná petrolífero y las posibilidades de inversión en Argelia. Por otra parte, se posicionan para sacar ventaja de la apertura de la zona de libre comercio con la Unión Europea, inicialmente prevista en 2010. Así si esta zona llega a crearse, los productos exportados desde Argelia y otros países de la zona euromediterránea entrarían en los mercados europeos sin imposición aduanera; algo que está provocando una auténtica carrera para salir en la mejor posición posible. No obstante, hoy en día, no parece que se vaya a producir un relevo en las élites, ya que las condiciones de instalación y concesión para estas empresas siguen siendo fijadas por las élites argelinas. Además, la posible autonomía de las élites secundarias sigue estando condicionada por la renta del petróleo, que por defini-

ción es un recurso centralizado —incluso en el caso de que sea privatizado— y sobre el cual siempre cabe la posibilidad de cerrar el grifo.

Antes que aparecer nuevos recursos, parece más probable que se transformen los ya existentes. Sería el caso de los hidrocarburos, especialmente del gas. Su propiedad podría dejar de ser pública y argelina, aunque esto dependerá de la coyuntura de los precios del petróleo. La tendencia desde 1994 es a la caída de la fiscalidad relativa por barril, es decir, de los ingresos obtenidos por barril, que hoy en día queda camuflada por los elevados precios del crudo y por el incremento en la producción derivado de la proliferación de compañías extranjeras y de zonas de extracción (Mañé, 2006b).

Otro recurso modificado serían las finanzas de los hidrocarburos (los petrodólares), aunque en el caso argelino deberíamos hablar quizá de «gasodólares». Se trata de un recurso que podría convertirse en elemento clave de la política exterior argelina por medio de fondos gigantes de inversión, fondos soberanos. El ejemplo de la Agencia KIO de Kuwait, bien implantada en Estados Unidos y Reino Unido, y su capacidad de influencia³⁶ sobre la opinión pública estadounidense durante la segunda guerra del Golfo (1991) podría ser seguido por la SONATRACH. Un recurso así, de naturaleza centralizada, provocaría nuevas luchas entre las élites argelinas por su control y gestión.

En otro orden de cosas, un problema inmediato relacionado con los recursos será el agotamiento natural de líderes históricos. De hecho, Buteflika es el último de esos líderes históricos, y ningún otro de los candidatos a sucederle goza de semejante legitimidad histórica. Con la desaparición de estos líderes, es probable que se debilite también el discurso nacionalista, modernista-desarrollista, siendo quizá remplazado por un discurso más acorde con la fase actual de la globalización neoliberal, con ciertas dosis de nacionalismo.

Con todo ello, el escenario más probable será el mantenimiento del principal mecanismo de distribución de la renta, algo que en principio impide que aparezcan fuentes económicas y de poder alternativas. Esto podría cambiar, no obstante, si ocurren cualquiera de estas tres cosas: 1) un trasvase excesivo de recursos del sector público al privado o que se vaya de las manos a las autoridades argelinas, 2) un estallido incontrolado de la violencia entre clanes y 3) el establecimiento de alianzas con intereses extranjeros que se vuelvan demasiado poderosas. También es posible que el aumento en el número de actores que se reparten el «pastel»

de la renta haga imposible mantener los mecanismos tradicionales de distribución de la renta, de forma que haga falta bien renovarlos bien sustituirlos por otros. Ese proceso podría crear evidentemente mucha tensión que pondría al sistema político al borde del caos y la guerra entre clanes.

En cuanto a la población y su posibilidad de intervenir como actor político, la evolución dependerá de las grandes masas que entran dentro de la categoría de perceptores de la renta por vía indirecta y se mantienen al margen de las movilizaciones, de momento ganadas por la apatía, el miedo o simplemente más preocupadas por la supervivencia. Hasta ahora no existe un movimiento o grupo capaz de sacar a esas masas a la calle de forma organizada, entre otras cosas porque sigue prohibida una opción populista radical de tipo FIS, pero esta podría ser inventada bajo formas muy distintas. Mientras el ciclo de petróleo siga al alza, la inestabilidad más grande provendrá de la sucesión de Buteflika. En sucesiones como esta, el ejército y los servicios secretos han demostrado poseer gran maestría política, pero si la sucesión viene acompañada de una liberalización política o al menos de una «descompresión», los movimientos sociales podrían tener una oportunidad para hacer valer sus aspiraciones.

Notas

1. Aunque existía una élite tradicional, esta fue, primero, muy erosionada y marginada por el colonizador y, posteriormente, laminada en el proceso de la independencia.

2. Las diferencias entre facciones se deben, como se verá más adelante, a los distintos itinerarios recorridos en el proceso de «ocupación» del Estado.

3. Para una explicación de la constitución del FLN y de la toma del poder por parte del Estado Mayor, véase Harbi (1993).

4. Ben Bella, presidente entre 1962 y 1965, llegó al poder durante la crisis del verano de 1962 al alinearse con la facción de U'da (ciudad marroquí cercana a la frontera con Argelia) en contra del Gobierno provisional establecido en Argel.

5. Siglas de Société Nationale pour le Transport et la Commercialisation des Hydrocarbures. Es la Compañía Nacional de hidrocarburos argelina.

6. SEP: *Rapport Général. Second Plan Quadriennal, 1974-77*, p. 49.

7. Podemos definir un Estado rentista, como aquel que genera economías petrolero-rentistas o dicho de otro modo, cuya gestión del sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo —político— de lograr el máximo posible de

renta del subsuelo para los residentes nacionales. En estas economías se cumplen todas estas condiciones: Primero, la economía es fundamentalmente una exportadora de crudo o recursos naturales sin elaborar. En segundo lugar, los ingresos obtenidos con estas exportaciones son considerados el principal instrumento de intervención pública y esto se traduce en unas políticas de gasto destinadas fundamentalmente a la legitimación del sistema vigente. En tercer lugar, se crea o consolida una economía no productiva, caracterizada por el importante peso del sector de los hidrocarburos, que financia a un también significativo sector servicios, que se nutre o de bienes de consumo importados o de «petrocapitales». Por último, como consecuencia —y no como causa— de todo ello: la evolución de los principales agregados macroeconómicos es función de la evolución de los precios del petróleo en el mercado internacional. Para un debate más profundo sobre esta cuestión, véase Mañé y De la Cámara (2005).

8. Para una explicación más completa de las instituciones distributivas, véase Vandewalle (1996: 210).

9. Fuente: MPAT: *Synthèse du bilan économique et social de la décennie 1967-1978*, 1980.

10. Elaboración propia a partir de ONS, *Statistiques*, 35.

11. El sector «import-import» es una denominación sarcástica que debemos al humor argelino, pero que refleja un auténtico fenómeno social de proliferación de empresas de importación, que tan solo realizan operaciones de importación pero que no exportan nada a cambio, de ahí que se les llame «import-import».

12. En la formación de los tecnócratas argelinos y altos funcionarios de la administración, al igual que en Francia, ha tenido y tiene un papel muy relevante la ENA, École Nationale d'Administration.

13. La importancia de los servicios secretos en el aparato del Estado se remonta a los años de la guerra de independencia en que se crea el MALG, Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales. Muchos de los jefes de los servicios secretos argelinos y algunos destacados personajes de la vida política y económica se formaron en el MALG, Yazid Zerhuni y Kasdi Merbah, entre ellos. Véase en este sentido, Bustos (2004: 156-160), la tesis doctoral de José Luis Gómez Puyuelo (2005) y el artículo de Nourredine Azzouz (2004). Este último evoca un seminario sobre el MALG en el cual se afirmó que tres jefes de gobierno, una veintena de ministros y quince generales salieron de las filas del MALG, los llamados «Boussouf boys», por el nombre del oscuro personaje que fundó la organización, el coronel Abdelhafid Busuf. Este, una vez alcanzada la independencia, se dedicó a los negocios.

14. Emplearemos el término burguesía ya que es el que la mayoría de autores emplean al hablar de este colectivo, aunque es discutible que en Argelia existiera algo parecido a la burguesía de los estados capitalistas.

15. Recuérdese a este respecto las denuncias presentadas por el antiguo primer ministro A. Brahimi en 1990 sobre las supuestas comisiones de las transacciones internacionales, que ascenderían para un período de veinte años a 26.000 millones de dólares, el equivalente de la deuda externa argelina de aquel momento, Bustos (2004: 265 y 401).

16. Gracias al auge de los precios de los hidrocarburos, reaparecen en los últimos tiempos planes de inversiones con reminiscencias de los años setenta. Desde la llegada al poder de Abdelaziz Buteflika (1999) se están llevando a cabo grandes inversiones, como el «plan de relanzamiento económico» y el «plan sur», que incluyen importantes acciones en materia de infraestructuras, con tres ejes: empleo, vivienda y programas de equilibrio territorial. Estos son los «eternos» objetivos de la Argelia independiente. Véase más información sobre estos planes en la página web del gobierno argelino, <http://www.cg.gov.dz/dossiers.htm> (consultado por última vez el 28 de enero de 2008).

17. Argelia ocupaba el puesto 56 en el ránking de países importadores de mercancías en 2005 y su volumen de importaciones creció un 3,18% pasando de 20.357 millones de dólares en 2005 a 21.005 millones en 2006 (Fuente: Organización Mundial del Comercio y Ministerio argelino de Comercio).

18. Los principales renglones de importación son los productos alimentarios básicos (como la sémola, la leche o el cordero), los bienes de equipamiento (agrícolas e industriales), los materiales de construcción y manufacturas. Véase la información estadística actualizada del Ministerio argelino de comercio, accesible en <http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/nots1sem07.pdf>.

19. Según una estimación de Transparency International en su informe anual de 2007, esta fuga ascendería a 500 millones de dólares; véase el mismo y además la noticia de Smail Rouha recogida en el diario *L'Expression* (27-09-2007) titulada «Rapport de transparency international sur la corruption. L'Algérie rétrogradé à la 99e place», accesible en internet en <http://www.l'expressiondz.com> (consultado el 21 de octubre de 2007). Otras fuentes argelinas, como una asociación de cuadros financieros argelinos, la estiman en 900 millones de dólares (Fuente: *blog* de Mohamed Benchicu, ex editor del periódico cerrado en Argelia, *Le Matin*).

20. Véase el Informe de la Ley de Presupuestos 2008 para hacerse una idea del volumen de esta partida, que para este último año ascendió a 133.243.155.000 DA, la cuarta partida más importante y el 8,4% del total del presupuesto de funcionamiento. Información consultable en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (<http://finances-alg.ifrance.com> (consultado el 1 de junio de 2008)).

21. El presupuesto oficial de defensa en 2006, inferior con toda seguridad al real pues no incluye compras de armamentos sino gastos de funcionamiento, fue de 2.800 millones de euros (unos 4.600 millones de dólares). Fuente: Cha-

liand y Rageau, 2007. El monto de los contratos de compra de armamento con Rusia celebrados entre 2006 y 2007 sería de 15.000 millones de dólares, véase el artículo «Nouveau contrat militaire de 7 milliards de dollars», *Le Quotidien d'Oran*, 31 de marzo de 2007.

22. Los familiares de los mártires se integran en dos asociaciones bien distintas, la más importante y poderosa Organización nacional de los hijos de los *Shuhadá* (1989) y la Coordinadora nacional de hijos de los *Shuhadá* (mártires) (1994), ambas pertenecientes a la familia revolucionaria, la última, de menor entidad aunque posee parecidos fines.

23. La población menor de 25 años equivalía al 58,2% del total en 1998, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia, ONS. En 2002, los menores de 15 años eran todavía el 33,5% de la población, *Anuario Internacional CIDOB 2006* (2007: 551).

24. Determinados observadores apuntan también al asesinato del popular cantante kabil Lunes Matub, ocurrido en extrañas circunstancias en 1998, como el detonante de la renuncia del presidente Liamin Zerual.

25. Abdelaziz Beljadem es de una familia de Laguat en las estepas centrales de Argelia, que se instaló en Tiaret (Oeste), por donde ha sido elegido diputado en el parlamento.

26. Proveniente de una familia del oeste del país (Tlemcén) pero residente en Marruecos, donde nació el actual presidente, caso similar al del ministro del interior Yazid Zerhuni.

27. Esta idea de transnacionalización se deduce del escrito de Phertes (2004a) en el que explica que Buteflika ha ampliado su margen de maniobra frente a los «generales» por sus apoyos y relaciones con las compañías financieras internacionales y con los grandes grupos petroleros transnacionales. Véase: EuroMeSCopaper n° 29, «Looking Ahead. Challenges for Middle East Politics and Research», Volker Perthes, coord., *Stiftung Wissenschaft und Politik*, Berlín, abril de 2004: http://www.euromesco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=48&lang=fr.

28. Valga a título de ejemplo, el uso francés de la base atómica de Regan y de la base marítima de Mars el-Kebir, que no fueron retrocedidas a Argelia hasta finales de los años sesenta, en virtud de cláusulas secretas de los Acuerdos de Evión. Por otra parte, los servicios secretos argelinos han mantenido buenas relaciones con sus homólogos franceses de la DST y algunas figuras como Beljeir tienen contactos personales desde antaño.

29. El relato de Abdelkader Tigha fue recogido por un periodista de Libération, Arnaud Dubus y publicado el 23 de diciembre de 2002 (Dubus, 2002).

30. La nueva ley de partidos de 1997 obliga a HAMAS, acrónimo de Movimiento por la Sociedad Islámica a eliminar toda referencia islámica, por lo cuál se convierte en Movimiento por la Sociedad y la Paz, MSP.

31. Grupo disidente del ejército que tiene sede en Madrid. Las siglas MAOL significan Mouvement Algérien des Officiers Libres y su página web es <http://www.anp.org>. Un grupo como este, minoritario y en el exilio, no ha sido incluido entre los actores con capacidad de movilización, del epígrafe precedente.

32. Véase, por ejemplo, la crónica de *El Watan* titulada «Situation inédite au niveau de la LADDH Hocine Zehouane et Mustapha Bouchachi se disputent la présidence» que firma Madjid Makedhi, del 3 de noviembre de 2007 y también en la edición de *El Watan* de 29 de octubre de 2007, consultable en la dirección: www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/laddh_implose.htm.

33. Véase «Terrorist Attacks in Algeria. El Dorado for Western Security Companies» de Bernard Schmid en *Qantara Newsletter*, 5 de octubre de 2007, accesible en <http://www.qantara.de> (consultado el 9 de noviembre de 2007).

34. Estados Unidos ofrece un vasto programa de lucha antiterrorista tanto a los países del Sahel como a los norteafricanos (actualmente, Trans-Sahara Counter Terrorist Initiative, TSCTI).

35. Informe de la ley de presupuestos 2007, consultable en <http://finances-alg.ifrance.com>.

36. Un aspecto frecuentemente olvidado en los análisis de las llamadas economías petroleras es la posible influencia de «el dinero» del petróleo. Sobre esta cuestión, véase Panaspornprasit (2005).

Bibliografía

- Ayubi, N. N. (1988), «Arab Bureaucracies: Expanding Size, Changing Roles», en A. Dawisha y I. W. Zartman, eds., *Beyond Coercion. The Durability of the Arab State*, Croom Helm Ltd, Kent, pp. 14-34.
- (1998), *Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe*, Bellaterra, Barcelona.
- Azzouz, N. (2004), «Le MALG se penche sur sa propre histoire. Mettre les archives à la disposition des chercheurs», *Le Quotidien d'Oran*, 15 de diciembre de 2004, Orán.
- Benyoub, R. (2002), *L'Annuaire politique de l'Algérie*, 4ª ed., 1ª ed. 2001, ANEP, Argel.
- Bustos, R. (2004), *El cambio político en Argelia (1988-1992). Análisis sistémico de una transición discordante*, tesis doctoral, Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, director, S. Petschen. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- (2007), Ficha electoral TEIM. Argelia/Legislativas 2007. Observatorio electoral TEIM, Universidad Autónoma, Madrid, <http://www.uam.es/TEIM>.

- Catusse, M. (2006), «Ordonner, classer, penser la société: les pays arabes au prisme de l'économie politique», en E. Picard, ed., *La politique dans le monde arabe*, Armand Colin, París, pp. 215-238.
- Chaliand, G. y J.-P. Rageau (2007), *Atlas Stratégique*, Complexe, París.
- Cherrad, S.-E. (1992), «Élections municipales et législatives en Algérie. Les scrutins du 12 juin 1990 et du 26 décembre 1991», Laboratoire de Géographie rurale, Université Paul Valéry, Montpellier.
- Djabi, A. (1998), *Al intikhabat, eddawla oua al moujtamaâ* (Elecciones, Estado y sociedad), Casbah Éditions, Argel.
- Dubus, A. (2002), «Les sept moines de Tibehirine enlevés sur ordre d'Alger. Abdelkader Tigha décrit le rôle de la Sécurité militaire et ses liens avec les Groupes islamistes armés», *Libération*, 23 de diciembre de 2002, París.
- Gómez Puyuelo, J. L. (2005), *Ejército y poder político en Argelia (1954-1978)*, tesis doctoral, Departamento de Historia Contemporánea, director, Pedro A. Martínez Lillo, Universidad Autónoma de Madrid.
- Hachemaoui, M. (2003), «La représentation politique en Algérie. Entre médiation clientélaire et prédation», *Revue française de science politique*, 53, 1, París, pp. 35-73.
- (2004), «La dhifa dans le jeu électoral Ksourien», *Naqd. Revue d'études et de critique sociale*, otoño/invierno, 19/20, Argel, pp. 19-26.
- Hadjadj, D. (2001), *Corruption et démocratie en Algérie*, La Dispute/SNEDIT, París.
- Hamladji, N. (2002), *Co-optation, Repression and Authoritarian Regime's Survival: The Case of the Islamist MSP-Hamas in Algeria*, EUI SPS 2002/07, Instituto Universitario Europeo, Florencia.
- Harbi, M. (1993), *Le FLN. Mirage et réalité*, NAQD/ENAL, Argel.
- International Crisis Group (2003), *L'Algérie: Agitation et impasse en Kabylie*, 15, ICG, Bruselas, 10 de junio de 2003.
- Joffé, G. (1995), «Algeria: The Failure of Dialogue», *The Middle East and North Africa Yearbook 1994*, Europa Publications Ltd., Londres, pp. 3-13.
- Kalyvas, S.N. (1999), «Wanton and senseless? The logic of massacres in Algeria», *Rationality and Society*, vol. 11, n° 3, Cornell University, pp. 243-285.
- Kienle, E. (2002), *A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt*, I.B. Tauris, Londres.
- Kornai, J. (1984), *Socialisme et économie de la pénurie*, M. Lavigne (trad.), Economica, París.
- Layachi, A. (2004), «Ethnicité et politique en Algérie. Entre l'inclusion et le particularisme berbère», *Naqd. Revue d'études et de critique sociale*, otoño/invierno, 19/20, Argel, pp. 27-54.
- Leca, J. y J.-C. Vatin (1979), *L'Algérie politique: Institutions et régime*, PUF, París.

- Liabés, D. (1982), «Sur la bourgeoisie privée», *Les Temps Modernes*, nº 432-33, París, pp. 108-131.
- Mañé Estrada, A. (2006a), «La economía política del sector de hidrocarburos en Argelia: elementos estructurales y cambios recientes», *Claves de la economía mundial*, 6ª ed., Madrid.
- (2006b), «Argelia: ¿retorno al nacionalismo energético?», *ARI (Análisis del Real Instituto Elcano)*, Real Instituto Elcano, 19 de septiembre de 2006, Madrid.
- Mañé, A. y A. Lorca (2007), «África del Norte: su importancia geopolítica en el ámbito energético», DT11/2007 del RIE, *Boletín del RIE*, nº 91, Madrid.
- Mañé, A. y C. De la Cámara (2005), «Is Russia drifting toward a rentier economy?», *Eastern European Economics*, vol. 43, nº 5, pp. 49-76.
- Martínez, L. (1998), *La guerre civile en Algérie*. Karthala, París.
- Marx, D. (2007), Ficha electoral TEIM. Argelia/Locales 2007. Observatorio Electoral TEIM, Universidad Autónoma de Madrid, <http://www.uam.es/TEIM>.
- Naylor, P. (2000), *France and Algeria. A History of Decolonization and Transformation*, University of Florida Press, Gainesville.
- Panasornprasit, Ch. (2005), *US-Kuwait Relations, 1961-1992. An uneasy relationship*, Routledge, Londres.
- Perthes, V. (2004a), «Looking Ahead: Challenges for Middle East Politics and Research», *EuroMeSCoPapers*, 29 Abril.
- (2004b), *Arab Élités: Negotiating the Politics of Change*, Lynne Rienner, Boulder, Colorado.
- Roberts, H. (1996), «Doctrinaire Economics and Political Opportunism in the Strategy of Algerian Islamism», en J. Ruedy, ed., *Islamism and Secularism in North Africa*, Macmillan Press Ltd. y Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, Basingstoke, Hampshire, pp. 123-148.
- (2003), *The Battlefield of Algeria (1988-1992)*, *Studies in a Broken Polity*, Verso, Londres.
- Sánchez Andrés, A. (2006), «Relaciones político-económicas entre Rusia y los Países del Norte de África», DT N° 22/2006 del Real Instituto Elcano, *Boletín del RIE*, nº 77, Madrid.
- Temlali, Y. (2003), «La revolte de Kabylie ou l'histoire d'un gachis», *Confluences Méditerranée*, 45, primavera, París.
- Vandewalle, D. (1996), *North Africa. Development and Reform in a Changing Global Economy*, St Martin's Press, Nueva York.
- Werenfels, I. (2007), *Managing Instability in Algeria. Élités and Political Change since 1995*, Routledge, Londres/Nueva York.

¿Adónde va Argelia?: dos «normalizaciones», tres crisis pendientes y dos incógnitas determinantes

Iván Martín

¿Adónde va Argelia? Esa pregunta, formulada ya en el título de un libro publicado en 1992 por Mohamed Budiaf,¹ figura carismática de la guerra de la independencia, asesinado poco después tras ser llamado a ocupar la presidencia del Consejo de Estado, sigue abierta veinte años después. Como si de los trabajos de Sísifo se tratara, el analista se ve confrontado año tras años con las mismas incógnitas, los mismos vectores de inestabilidad, los mismos retos estructurales sin afrontar.²

Argelia cerró 2008 con unas reservas de divisas de más de 130.000 millones de dólares y la perspectiva cierta, tras la reforma constitucional de noviembre de 2008, de la reelección para un tercer mandato de cinco años, hasta 2014, del presidente Abdelaziz Buteflika, confirmada en las elecciones de 9 de abril de 2009 con una victoria por más del 90% de los votos. Se cierra así un ciclo de 20 años que va desde las revueltas populares de 1988, en plena depresión de los precios internacionales de los hidrocarburos que llevó al Estado argelino al borde de la bancarrota ante su incapacidad para pagar la deuda externa y el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de la población. Le siguieron la Constitución de 1989, que reconocía el pluralismo político, y la emergencia del FIS como partido político islamista con perspectivas ciertas de ganar las elecciones, abortada por el golpe de Estado militar de enero de 1992, que sumió a Argelia en una guerra civil que en el siguiente lustro le costaría entre 150.000 y 200.000 muertos y su inclusión entre los posibles estados fallidos de la región. La llegada de Abdelaziz Buteflika como primer presidente civil de la historia del país, en las elecciones de 1999, supuso una doble normalización.

Dos normalizaciones

Normalización en las condiciones de seguridad, que con la Ley de Concordia Civil de 1999 y la Carta Nacional para la Paz y la Reconciliación aprobada en referéndum en 2005 consiguió pasar de una situación de violencia generalizada propia de una guerra civil a una situación de violencia controlada caracterizada por ataques terroristas equiparables a los que sufren otros países, con limitación de víctimas (desde entonces, el número de víctimas no ha superado ningún año el millar) y un número cada vez más reducido de guerrilleros alzados en armas o terroristas. Normalización política también. Normalización interna ante todo, un «proceso de institucionalización» con el progresivo establecimiento de un régimen presidencialista que ha ido concentrando todo el poder en detrimento no solo de los partidos políticos y la sociedad civil, incluidos los otrora poderosos sindicatos, sino incluso del ejército, con elecciones pluralistas periódicas que sirven esencialmente para perpetuar al régimen en el poder. La reciente victoria electoral con un 90% de los votos de Abdelaziz Buteflika, formalmente presentado como «independiente» pero apoyado por los tres partidos más votados, equipara a Argelia con otros regímenes de la región como Túnez o Egipto. Pero normalización externa también, con el fin del embargo moral al que la comunidad internacional había sometido a Argelia, con la plena incorporación de Argelia como socio estratégico a la lucha contra el terrorismo internacional tras los atentados del 11-S y la simbólica firma del Acuerdo de Asociación con la UE en 2002.

Con el aumento de los precios del petróleo experimentado a partir de 1999, que pasaron de 19 dólares el barril a más de 150 dólares en 2008, para volver a caer al entorno de los 50 dólares tras el estallido de la crisis económica global, Argelia completa asimismo un ciclo económico. Lo afronta prácticamente sin deuda externa, con su solvencia financiera internacional plenamente restablecida, pero sin haber resuelto ni uno solo de los desafíos económicos que debe afrontar: la inserción internacional de su economía y la competitividad de sus sectores productivos industriales y agrícolas, la extensión de la economía informal, el contrabando y la corrupción, el establecimiento de una economía de mercado eficiente y la creación de perspectivas de empleo para la mayor generación de jóvenes de toda su historia.³ Desde esta perspectiva, muy bien puede hablarse de la década perdida del desarrollo en Argelia. El

propio Abdelaziz Buteflika reconocía este cambio de ciclo en diciembre de 2008 durante una visita a la provincia de Ghardaia: «debemos hacer frente a una crisis financiera mundial. Tras los años de opulencia, vamos a tener que afrontar un período de vacas flacas que debemos gestionar con prudencia. El Estado debe introducir el rigor en la gestión de los asuntos del país. Hago un llamamiento a los argelinos a apretarse el cinturón y arremangarse». En palabras de una investigadora, «parte de las condiciones que contribuyeron al estallido del conflicto en los noventa siguen vivas a principios del siglo XXI. [...] Las opciones seguidas [...] han contribuido únicamente a reforzar el *statu quo* y quizás tan solo a retrasar nuevos estallidos de violencia islamista»⁴ o social.

Ante este panorama, las perspectivas a medio plazo de Argelia como país, cuando se apresta a celebrar el cincuenta aniversario de su independencia en 2012, no son nada halagüeñas. Su función de estabilidad social y desarrollo dependerá fundamentalmente de cómo se resuelvan tres crisis pendientes y dos incógnitas determinantes para su devenir futuro.

Tres crisis

La primera crisis pendiente es económica. El modelo económico argelino no ha cambiado desde los años noventa: Argelia no ha conseguido superar su dependencia estructural del sector de los hidrocarburos (98% de sus exportaciones, 70% de los ingresos del Estado, 45% del Producto Interior Bruto), mantiene cerrada su frontera con Marruecos y sigue siendo una economía altamente protegida (no es miembro de la OMC, aunque lleva años intentándolo) y dependiente de las importaciones. Sigue siendo básicamente una economía de renta,⁵ aunque las rentas de los hidrocarburos, canalizadas a través del Estado, se han complementado en la última década con las rentas de los ingentes flujos de importación. Su industria es escasamente competitiva y solo el sector de los hidrocarburos es gestionado con criterios comerciales profesionales. De hecho, ni siquiera puede decirse que en Argelia haya consenso social sobre la economía de mercado.

La segunda crisis que se cierne en el horizonte es social. A la falta de renovación de las élites económicas y políticas dominantes que se describe en el capítulo precedente, hay que añadir la falta de perspectivas

y la creciente desafección hacia su país de la mayoría de la población. Las «microrevueltas» populares locales motivadas por cuestiones relacionadas con las condiciones de vida (como el acceso a la vivienda o al empleo público, los cortes de suministro de agua, los abusos de autoridad o los niveles salariales...) se han convertido en un fenómeno de violencia social cotidiana (hasta el punto de que, en 2005, el diario *Le Quotidien d'Oran* decidió nombrar al *Emeutier Inconnu*, al manifestante desconocido, como personaje del año), una expresión directa del creciente malestar social y un mecanismo cada vez más extendido de vehicular las demandas sociales y de interacción entre la población y el Estado. Esta crisis social se ve alimentada por la situación del empleo: más de 1.200.000 desempleados, con tasas de desempleo juvenil que superan el 30% entre los hombres y el 57% entre las mujeres y una dinámica demográfica que obliga a crear más de 300.000 empleos anuales durante los próximos diez a quince años para absorber el crecimiento de la población activa en una economía que registra cerca de un 30% de empleo informal. El salario mínimo, en pleno boom del petróleo, está fijado en 120 euros mensuales. En una reciente encuesta se concluye que la mitad de los jóvenes de sexo masculino entre 15 y 29 años y una de cada tres jóvenes de sexo femenino se planteaban emigrar del país:⁶ la crisis migratoria argelina está aún por estallar, y pasarán años antes de poder desterrar del vocabulario social argelino los términos de *hittista*, *hogra* y *harraga* (respectivamente, «aguantaparedes», jóvenes desocupados que pasan el día en la calle; desprecio del Estado hacia sus ciudadanos, exclusión; y emigrante clandestino que quema sus papeles para no ser identificado). La integración económica y social de los jóvenes y de las mujeres (con una tasa de participación de tan solo el 15,1% de las mujeres en edad de trabajar) será sin lugar a dudas la clave del arco de la cohesión social en Argelia en las próximas décadas. La cuestión bereber, lejos de haber sido resuelta, y la reislamización de amplios sectores de la sociedad y de parte del espacio público son otras tantas variables de la ecuación nacional a tener en cuenta.

La tercera y última crisis pendiente en Argelia es política. Los dos mandatos de Abdelaziz Buteflika han servido para privar de cualquier capacidad de movilización a los partidos políticos, desmovilizar a la sociedad civil y concentrar todo el poder en el Presidente. El descrédito de la clase política, que no se ha renovado desde la Independencia (la generación que hizo la guerra de liberación, entre 1954 y 1962, sigue domi-

nando el panorama político en un país donde más del 60% de la población tiene menos de 30 años), se refleja en la creciente tasa de abstención en las elecciones, que culminó en 2007 con un 35% de participación en las elecciones legislativas (la mayoría de los observadores y la propia prensa independiente argelina coinciden en afirmar que la tasa del 74% de participación anunciada en las elecciones presidenciales de 2009 ha sido «fabricada»). La oposición política o boicotea las elecciones por considerarlas fraudulentas o tiene prohibido participar en ellas (es el caso de los movimientos islamistas, cuyo potencial electoral real tras la experiencia de 1988-1992 y la guerra civil es una de las grandes incógnitas del sistema político argelino). Cualquier intento de articular alternativas desde dentro del propio régimen (como la candidatura del antiguo primer ministro Ali Benflis en 2004) ha sido abortado. Lo que es más grave, los mecanismos de construcción del consenso social han desaparecido en los últimos años, por lo que resulta difícil vislumbrar en el horizonte un proyecto político vertebrador.

Dos incógnitas

Ahora bien, las dos incógnitas que finalmente determinarán el curso de Argelia en los próximos años son exógenas. Una se refiere a la salud de Abdelaziz Buteflika, de 71 años, que en 2005 ya fue operado *in extremis* de una úlcera sangrante en la que algunos creen presentir un cáncer de estómago. La trayectoria de Buteflika se confunde con la historia de la Argelia independiente, y su desaparición supondría desencadenar, más allá de su sucesión, la cuestión pendiente del relevo generacional y de la propia naturaleza del sistema político argelino, poniendo de alguna manera fin al período postindependencia de consolidación del Estado nacional, que ha sido su gran obra vital. La otra incógnita se refiere a los precios internacionales de los hidrocarburos, seguramente la variable más determinante del grado de estabilidad económica, política y social de Argelia. Los ingresos de los hidrocarburos han permitido al Estado argelino aplazar las reformas y la transición de una economía administrada a una economía de mercado durante décadas y ofrecer a su población un espejismo de bienestar material sin perspectivas, y no hay razón para que no siga siendo así.

Notas

1. *Ou va l'Algérie?*, Editions Rahma, 1992.
2. Véase Iván Martín, «¿Adonde va Argelia?», *Nación Árabe*, año XV, n° 46, invierno 2002, pp. 47-59.
3. Véase Iván Martín, «Algeria's Political Economy (1999-2002): An Economic Solution to the Crisis?», *The Journal of North African Studies*, vol. 8, Frank Cass, Londres, 2003, pp. 34-74; traducción castellana: «La política económica en Argelia (1999-2002), ¿hacia una solución económica a la crisis?», Documento de trabajo de la Facultad de CC. Económicas n° 2003-004, Universidad Complutense de Madrid.
4. Véase Laurence Thieux, *Islamismo y democracia en Argelia. Francia y Estados Unidos frente al conflicto*, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Serie TEIM, n° 4, Madrid, 2007.
5. El ejemplo de Argelia como Estado rentista se analiza ampliamente en Ferrán Izquierdo, «Poder y Estado rentista en el mundo árabe», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n° 2, mayo-agosto de 2007.
6. Nacer-Eddine Hammouda, *Le desir de migration chez les jeunes algériens. Analyse micro-économétrique*, CARIM Notes d'analyse et synthèse 2008/42, Instituto Universitario Europeo, Florencia, 2008.

3. Marruecos: la reinención de un sistema autoritario¹

Laura Feliu y M^a Angustias Parejo

Introducción

Una de las grandes cuestiones que ha planteado la literatura académica sobre Marruecos ha sido y es hasta qué punto el país permanece anclado en viejas estructuras políticas de carácter autoritario, en una cultura tradicional asociada con el inmovilismo político, y hasta qué punto el panorama del Marruecos de principios del siglo XXI se asemeja al de los primeros tiempos de la independencia.

Remy Leveau (1993: 50) afirmaba a principios de la década de los noventa: «la estabilidad aparente de las instituciones y los símbolos políticos entre el Marruecos de hoy y aquel de los años sesenta es asombrosa». Muchas cosas han sucedido desde entonces (llegada de la oposición al gobierno, muerte de Hasan II y sustitución por su hijo Mohamed VI) pero, a grandes rasgos, esta afirmación sigue siendo válida en el Marruecos actual. El organigrama institucional permanece prácticamente inalterado y en él la monarquía sigue ocupando el vértice superior con poca oposición en contra. En muchos sentidos incluso podemos afirmar que este control es hoy más completo, ya que tiene menos resistencia de sectores contestatarios. El ejercicio del poder ha cambiado sus formas y métodos: actualmente no resulta necesario el recurso a algunas de las viejas prácticas represivas para conseguir objetivos. La evolución modernizadora, de cambio de cultura política, de sectores que han accedido a una formación superior, de constreñimientos macroeconómicos y condicionantes derivados de la globalización sigue transformando la apariencia del Estado y de la sociedad, pero sin lograr transformar los pilares en los que se sustenta el poder.

Hoy en día la monarquía domina los cuerpos de seguridad, la administración, el poder judicial; fija las reglas del campo económico (del que extrae enormes beneficios económicos de uso privado); y controla el gobierno a través de diferentes mecanismos. Esto no significa que decida sobre todas las cuestiones, pero sí que puede hacerlo y que de hecho la monarquía muestra una voluntad de estar presente en todos los grandes temas. No existen reglas claras de cuando y cómo lo hará, o de acuerdo a qué principios; la arbitrariedad y la falta de transparencia y de mecanismos de control se convierten en características esenciales del sistema.

Cartografía de las élites y control de recursos

Definición de las élites

En la visión sobre las élites presentada en este trabajo consideramos a la monarquía y a su círculo de próximos como el hegemón, mientras que el resto de los actores debe contentarse con el rango de actores secundarios, dependientes del primero y con escasa autonomía funcional. Esta estructura dificulta la constitución de alianzas entre los actores secundarios, al estar estas siempre trianguladas por la insoslayable presencia de la monarquía, y auspicia el predominio de la competición.

La institución monárquica es el principal polo de poder y actor que establece las reglas de juego del campo político-social y religioso. A pesar de esa hegemonía, palacio real y su entorno necesitan de un campo políticosocial plural por varios motivos:

- La competición desde el primer momento de la independencia con un movimiento nacional² que posee también importantes recursos simbólicos y materiales (control de parte de la administración y de los cuerpos de seguridad, discurso político nacionalista articulado, ideología socialista movilizadora, etc.), o posteriormente con el movimiento islamista que intenta apropiarse del importante campo de la legitimidad religiosa obligan a tener en cuenta a otros actores, ante la imposibilidad de una erradicación completa de las fuentes de poder alternativas. Las

fuentes de legitimación de la monarquía se mantienen en su esencia, pero han ido erosionando sus bases.

- Los sucesivos golpes de Estado militares de los años setenta o los atentados de inspiración salafista treinta años más tarde muestran los peligros de un gobierno en solitario, en el primer caso, o la necesidad de seguir ampliando la base política para neutralizar los sectores rebeldes, en el segundo.
- El Estado marroquí carece de fuentes de ingresos importantes y estables que puedan paliar la situación de extrema pobreza en la que vive un segmento importante de la población, y en cambio necesita de recursos para garantizar la paz social.
- El Estado marroquí es fuertemente dependiente del exterior (ayudas, remesas procedentes de la emigración, regímenes comerciales con Europa, etc.). El apoyo exterior que se ha otorgado a la monarquía reposa, especialmente tras el final de la guerra fría pero ya anteriormente, en la proyección de una imagen de Estado plural y liberalizado.

Por todo ello, la monarquía marroquí necesita la formulación de pactos sucesivos con diferentes actores político-sociales y económicos a pesar de su predominio sobre estos. Estos pactos tienen una naturaleza desigual. A través de ellos la corona da forma al sistema político-social, favoreciendo la ascensión de unos segmentos en detrimento de otros; legitimando determinadas políticas, y alejándose de la responsabilidad del fracaso de otras, etc. Estas alianzas han ido variando con el tiempo, y de ellas ha dependido en gran parte la configuración de las élites secundarias.

Las élites primarias: la monarquía y su entorno

En el seno de las élites primarias se encuentra el rey y un reducido grupo de personas (quizás poco más de una veintena) en las que el monarca ha depositado su confianza basada bien en un conocimiento personal que viene de lejos, bien en su probada competencia profesional muchas veces acompañada de una formación en el extranjero, o bien en su control de determinados campos, al ser figuras con experiencia «heredadas» del reinado de Hasan II. El proceso de elitización responde tanto a criterios for-

males como al clientelismo y a las redes familiares. Mohamed VI ha aportado savia nueva al maduro sistema neopatrimonial heredado, renovándolo y vigorizándolo, y sobre todo propiciando un revulsivo generacional en su círculo más próximo.

Este grupo de élites primarias se nutre de: los miembros del gabinete real (especialmente los consejeros reales), los directores de algunos servicios del Estado y de las principales fuerzas de seguridad, algunos ministros delegados, secretarios de Estado o ministros que ocupan ministerios de soberanía (cuyos titulares son elegidos por palacio), y unos pocos gestores empresariales vinculados con los negocios de palacio (Feliu, 2001).

La referencia a la monarquía debe iniciarse con el hecho de que se encuentra por encima de todo ordenamiento legal. Tal y como dispone el artículo 19 de la Constitución «El rey, *Emir al Muminin* [Comendador de los Creyentes, título religioso], representante supremo de la nación, símbolo de su unidad, garante de la perennidad y de la continuidad del Estado, vela por el respeto al islam y de la Constitución, y por la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades». Es el rey quien debe vigilar el cumplimiento de la Constitución y no al contrario, y quien tiene una responsabilidad central en las principales esferas de la vida marroquí.³ La práctica confirma esta visión y se puede afirmar que el rey, además de reinar, gobierna.

Del gabinete real forman parte seis consejeros vinculados directamente con el rey, además de una veintena de encargados de misión cuya jerarquía es fijada por el soberano y de unos 150 colaboradores, muchos de ellos realizando el vínculo entre el gabinete y los diferentes ministerios.⁴ La estructura y funcionamiento de este gabinete se ha mantenido a lo largo de las décadas con algunas modificaciones. En época de Hasan II buena parte de las figuras que lo formaban accedían al gabinete como un intervalo entre dos Ministerios, e incluso a veces significaba ser relegado de la escena pública. Con Mohamed VI sus dimensiones han aumentado; la atribución de funciones es más clara y concreta —aunque sus funciones son cambiantes más allá de lo que establecen los respectivos *dahires* (edicto real)—; tiene una mayor visibilidad pública que debe ir acompañada de un comportamiento discreto; la pertenencia a este círculo representa un momento álgido en la carrera profesional de sus miembros; y es un mecanismo de cooptación de élites tecnócratas alejadas, a diferencia del pasado, de las filas de los partidos políticos. El ga-

binete real sigue siendo el poder en la sombra con una función de control del gobierno, pero sobre todo de dirección de los asuntos más relevantes de la agenda nacional.

Los consejeros reales ocupan una posición privilegiada en el campo político gracias a su relación directa y en muchos casos de amistad personal con el monarca (trabada en el Colegio real al que asisten niños de todo el Reino en lo que quiere ser una muestra de la «sociedad real» marroquí). Entre los representantes de esta categoría debe destacarse a Mohamed Rochdi Chraïbi (formado en el Colegio real), que ejerce oficiosamente de director de gabinete; o Abdelaziz Meziane Belfkih, de gran ascendiente en la elección de ministros, y de directores de las grandes empresas públicas y grandes direcciones de la administración, quizás también de walis y gobernadores, y gestor de grandes operaciones como el puerto Tánger Med y responsable de temas tan diversos como la enseñanza o la cuestión amazig. En menor medida son influyentes Mohamed Moatassim (responsable de la correspondencia del rey; fue ministro y posteriormente pasa a ser wali de la Gran Casablanca), Zuliya Nasri (responsable de asuntos sociales, especialmente de la Fundación Mohamed V para la solidaridad, y muy cercana al rey), André Azulay (una figura clave durante el reinado de Hasan II en cuestiones económicas y que pese a haber perdido peso específico con el actual rey es valorado por su red de contactos internacionales en Estados Unidos, Francia y ahora en España), Abbas Al Jirari (de asuntos religiosos), Omar Kabbaj o Fadel Benyaich.

Pero no todos los hombres más cercanos son consejeros reales, algunas de las figuras más próximas por su relación de amistad trabada en el Colegio real ocupan puestos muy diversos: Fuad Ali Al Himma, durante años el hombre más cercano al rey (pertenece al grupo del Colegio real) y responsable de temas especialmente importantes (desde el Sáhara hasta la seguridad del Estado) dimite de sus cargos y crea el Movimiento de todos los demócratas (MTD) —que se transforma posteriormente con el concurso de otros partidos en el Partido de la autenticidad y la modernidad (PAM)— para presentarse a las elecciones legislativas de septiembre de 2007, en una operación que formalmente está dirigida a «sanear» la vida política y contrarrestar el ascenso islamista. Otros son ministros de soberanía, entre los que destaca la figura de Taieb Fassi Fihri, ministro de Asuntos Exteriores.

A este grupo de élites primarias debe añadirse los responsables de

la seguridad: el Comandante en jefe de la gendarmería real, el general de división Hosni Benslimán a cargo de la seguridad del rey; Mohamed Yassin Mansuri de la Dirección general de estudios y documentación (DGED), amigo personal del rey de los tiempos del Colegio real, primer civil que se ocupa de este servicio de espionaje exterior que depende del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales (FAR)⁵ y que forma parte de las delegaciones marroquíes en acontecimientos diplomáticos de primer orden; Abdellatif Hammouchi de la Dirección general de vigilancia del territorio (DGST o DST, la policía política), que no procede del círculo del rey⁶ o el ministro del Interior, Chakib Benmussa (tecnócrata, había formado parte del comité ejecutivo del grupo ONA).

En el ámbito económico destaca la figura de Mohamed Munir El Mayidi, secretario particular del rey y otro compañero de los tiempos del Colegio real y gestor de los holdings reales (Siger, ONA, SNI, etc.). Otras personalidades del mundo empresarial tendrían relaciones estrechas con palacio real, como Anas Sefriui, con una de las mayores fortunas privadas de Marruecos y que según la prensa sería el hombre de paja del hermano del rey, Mulay Rachid.⁷

Las élites secundarias

Diversos estudios han mostrado la presencia histórica de las grandes familias en la vida política y económica de Marruecos. Ali Benhaddou (1997) describe en su estudio sobre la genealogía de algunas de las principales figuras dirigentes del país, cómo estas proceden de familias (una cincuentena) cuyos miembros ya detentaron puestos de responsabilidad en el período sultanal, más de la mitad centrados en actividades económicas, y el resto figuras letradas o de ascendente religioso (*chorfas* y *ulemas*). Posteriormente las alianzas entre familias nobles, familias comerciantes y de negocios y familias vinculadas a la política crean una compleja red de alianzas y vínculos de naturaleza fundamentalmente endogámica,⁸ solo en parte modificada por la llegada de nuevas figuras empresariales o tecnócratas. Sigue siendo válida la afirmación de Waterbury (1975: 112): «Todos los marroquíes de clases dirigentes nacionales se conocen personalmente. Que sus relaciones sean amistosas u hostiles tiene menos importancia que el hecho de que existan». Estas relaciones conforman la base de las élites secundarias brevemente descritas a continuación.

a) Élités formales

Figuras de segundo rango de las fuerzas armadas y los servicios secretos, y altos funcionarios del aparato coercitivo. Sobre estos cuerpos se debe señalar previamente que la mayor parte de ellos escapan al control parlamentario y del gobierno, y dependen directamente de palacio.

El proceso de construcción nacional comportó, al igual que en otros países, el establecimiento de unos cuerpos de seguridad efectivos, que controlasen el conjunto del territorio bajo el mando de la autoridad central y que garantizaran la unión de la nación alrededor de los principios sagrados. Al igual que sucedió en un primer momento con la administración —integrada por militantes *istiqlalíes*, gracias a la política de marroquinización—, el *Istiqlal* intentó sin éxito hacerse con el dominio de los cuerpos de seguridad, que finalmente quedaron bajo tutela de la monarquía. El ejército fue reestructurado por Mohamed V, y Hasan II siendo todavía príncipe heredero recibió el encargo de dirigir las fuerzas armadas reales (FAR). Bien pronto pasaron también bajo la dirección de Palacio: la seguridad nacional, la gendarmería real, los servicios secretos y las brigadas especiales. El monopolio sobre el uso de la violencia era ya en esos momentos absoluto.

Los sobresaltos de los golpes de Estado militares de principios de los setenta y la traición del que había sido mano derecha del rey, el general Mohamed Ufkir, aconsejaron de nuevo una reestructuración del cuerpo, que pasó a ser gobernado directamente por el monarca, al tiempo que desapareció el Ministerio de Defensa, que fue rebajado a «Administración de la Defensa» dirigida por un secretario general. El inicio de la guerra en el Sáhara Occidental fue providencial al permitir confinar al ejército en los límites meridionales del reino y alejarlo del «Marruecos útil». Además, a diferencia de los vecinos Argelia y Túnez, el importante desarrollo de otros cuerpos de seguridad y policiales permitió restringir el recurso al ejército y mantenerlo bajo vigilancia.

Este ejército sigue siendo hoy en día el gran desconocido, la gran incógnita, un cuerpo sobre el que no se ejerce ningún control democrático y una vía para el enriquecimiento de sus cuadros superiores (como muestra el caso del capitán de aviación Mustafa Adib,⁹ las licencias de pesca concedidas a grandes generales,¹⁰ o los vínculos con el contrabando a través de las islas Canarias).

La gendarmería real (el equivalente a la guardia civil) es un cuerpo

autónomo vinculado al Ejército y supervisado por el monarca que actúa fuera de las grandes ciudades y cuyas funciones se vieron reforzadas tras los golpes de Estado.

Los diferentes cuerpos de inteligencia, la mayor parte de ellos creados tras los golpes de Estado de los años setenta, establecen relaciones complejas entre ellos, ya que se ocupan de asuntos parecidos que van más allá de las prerrogativas iniciales para las que fueron pensados, no tienen fijadas de forma clara sus atribuciones, y el predominio de unos sobre otros depende de quien los dirige en cada momento.

Por su parte, el Ministerio del Interior juega un papel esencial en múltiples ámbitos de la vida pública y privada del país a través de un complejo entramado de direcciones generales y departamentos. El Decreto de 15 de diciembre de 1997 estableció varias direcciones generales en el interior del Ministerio (asuntos internos, seguridad nacional, fuerzas auxiliares —fuerzas de ámbito local bajo el mando de los gobernadores que se ocupaban de los centros de detención secretos— e inspección general de la administración territorial) y, paralelamente a estas, otras direcciones de alcance muy amplio (colectividades locales, gestión del territorio, asuntos rurales, protección civil, cuadros administrativos y técnicos, coordinación de asuntos económicos, administraciones y servicios delegados, asuntos administrativos, asuntos sociales, etc.). Su funcionamiento en la práctica se asemeja al de un mini-gobierno que, debe recordarse, forma parte de los «ministerios de soberanía», es decir, de aquellos cuyos responsables son nombrados directamente por el monarca.¹¹

Instituciones de carácter paraestatal. Consejos y comisiones permanentes o *ad hoc*, Fundaciones e Institutos que gestionan ámbitos concretos de la vida político-social marroquí. Estas instituciones escapan a cualquier control democrático y no encuentran su contrabalanza en otras estructuras democráticas fuertes; el gobierno y parlamento quedan así desprestigiados o arrinconados de forma sutil frente a este entramado de organizaciones a las que se suele presentar como más neutrales, mejor preparadas técnicamente y no contaminadas por el juego político (más egoísta) de los partidos. Algunas de estas entidades (como es el caso de las comisiones reales sobre la mujer, o sobre las elecciones) han sido creadas *ad hoc* para luego desaparecer una vez cumplida su función. Otras como las dedicadas a los derechos humanos (Consejo consultivo de derechos humanos, CCDH), los medios de comunicación (Alta auto-

ridad de la comunicación audiovisual, HACA), la cuestión *amazig* (Instituto real de la cultura *amazig*, IRCAM) o la educación (Consejo superior de enseñanza, CSE) o las diferentes fundaciones reales que poseen recursos enormes tienen una voluntad de permanencia y están vinculadas a palacio a través de sus consejeros (si bien una parte de sus miembros pueden ser elegidos por diferentes instituciones, y en 2008 por primera vez ha habido una revisión del presupuesto del HACA y el CCDH por el gobierno). Su papel ha sido esencial para cooptar a ciertas clases medias de la vieja oposición e incluso a sectores «entristas» del movimiento de derechos humanos, o como pago a ciertos servicios.

El gobierno. La pertenencia al gobierno¹² posibilita el acceso a redes de influencia de relevancia y permite la gestión de ciertos campos siempre que esta no sea cortocircuitada por palacio. A pesar de que tras la reforma de la Constitución de 1996 se ha fortalecido la figura del primer ministro, ya se ha visto que el gobierno ha ido perdiendo prerrogativas frente a todo un entramado de personalidades e instituciones paraestatales que escapan al control democrático. El conflicto entre el gobierno y este «gobierno paralelo» aflora periódicamente sin que ello signifique un cuestionamiento serio de las reglas del juego. Además, una parte de sus miembros queda fuera de la elección popular: los denominados ministerios «de soberanía» (Exteriores, Justicia, Asuntos Islámicos e Interior), cuyos titulares son elegidos directamente por el rey.

Líderes de partidos políticos y élites parlamentarias. Estos tienen acceso a recursos materiales y simbólicos de cierta relevancia pero sin una capacidad de decisión trascendente. En este sector de la élite asistimos a dos procesos distintos: una alta renovación de la élite parlamentaria y una moderada transformación de los órganos directores de los partidos; pese a ello, ambos decursos convergen en la ausencia de un cambio político sustancial, en el seno de la clase política o impulsado por ella, y donde las relaciones entre sus componentes (en el interior de los partidos y entre ellos) son de competencia muy personalizada.

Las altas cotas de renovación del personal parlamentario marroquí¹³ no propician el surgimiento de una clase parlamentaria, homogénea, portadora de estilos de autoridad comunes, capaz de originar un consenso de fines y procedimientos, y de articular, asimismo una cultura institucional propia. El alto grado de renovación menoscaba la auto-

nomía de la institución parlamentaria y no coadyuva a la materialización del proceso democrático. Así pues, estamos ante un parlamento excesivamente abierto y con previsibles dificultades para su institucionalización, afirmación que puede hacerse extensiva desde finales de los noventa a la actualidad.

Por otro lado asistimos a una lenta y pausada regeneración de las altas instancias de dirección de los partidos. Los cambios en las secretarías generales o presidencias se producen en la mayor parte de los casos por desaparición física de sus líderes, en menor medida por agotamiento del ciclo político o defenestración, y de forma excepcional por abandonos voluntarios. En los burós políticos, salvo los vuelcos sin precedentes de 2000 del Partido del Progreso y del Socialismo, PPS (Parejo, 2006b: 178) y de 2001 de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, USFP (Parejo, 2006a: 107) se ha ido produciendo una progresiva ampliación de los órganos de dirección manteniendo una cuota casi compensada de permanencia y renovación. Estos cambios a dosis homeopáticas en una arena partidista cada vez más fragmentada no han supuesto un revulsivo que propicie la emergencia de liderazgos fuertes, con capacidad integradora y con proyectos políticos movilizadores, no han implicado una innovación profunda de la cultura política, estilos y estrategias de acción política de la élite de los partidos.

Esta clase política ha optado desde los años setenta por confraternizar con el régimen en un proceso de pactos que se ha ido ampliando progresivamente.

Élites burocráticas. Estas élites juegan un papel más importante de lo que se les suele suponer, especialmente las surgidas con el proceso de regionalización, con organismos de nuevo cuño como los Consejos regionales —instituciones corporativas con una elección indirecta de sus miembros—,¹⁴ formando un tejido que ha servido para ampliar las bases del régimen. La injerencia del Ministerio del Interior en estos entes locales es muy fuerte gracias a una completa red de gobernadores, caídes o *moqadems* (autoridad local o de barrio). No existe un esquema piramidal coherente sino que se han configurado dos estructuras superpuestas en las que una de ellas (la que representa al Estado central) no deja desarrollarse a la otra (la representada por las autoridades regionales). Aunque es cierto que se ha traspasado a dichos consejos una serie de competencias,¹⁵ estas son muy limitadas y pueden ser controladas en todo momen-

to gracias a mecanismos indirectos (por ejemplo los presupuestos) o a mecanismos como el ejercicio de la tutela (Ojeda, 2002).

b) Élités no formales

Empresarios, élites comerciales y hombres de negocios. El periodista Jalid Jamaï contabilizaba en 1996 unos 3.000 millonarios marroquíes.¹⁶ Esta «burguesía de negocios» está formada por las viejas familias de Fez y de la región sureña de Sus a las que se han añadido nuevos miembros de extracción diversa. El discurso de la privatización, ya formulado con Hasan II, establece que el objetivo es facilitar y engendrar la recomposición del tejido socioeconómico del país sobre la base de una ampliación de la clase media, y con Mohamed VI la creación de una nueva clase empresarial. En realidad, el proceso ha concentrado todavía más el capital y ha beneficiado únicamente a un número muy reducido de inversores, conectado con el poder y con grandes grupos extranjeros. Como afirma Catusse (2000b: 11): «Las privatizaciones han sido la ocasión para los que detentan el poder político (el rey como primer jefe) de distribuir de manera arbitraria y discrecional [...] una serie de privilegios y capitales. No han dado lugar a la emergencia de una nueva categoría de operadores económicos». Esta concentración se ha visto favorecida por la estructura bancaria marroquí, controlada por grandes grupos privados.

La novedad es la llegada de estos empresarios al campo político y su contribución a la economización de la política (los atributos económicos se convierten en legítimos para iniciar una carrera política), con la peculiaridad que en Marruecos, a diferencia de otros países, las grandes familias han llegado a acuerdos para repartirse el mercado. Catusse (2000b: 5) ha estudiado la figura del nuevo empresario liberal como sustento de la monarquía y ha apuntado la hipótesis de que la nueva clase empresarial pueda convertirse en los «defensores del reino» del futuro.

Los medios de comunicación. Prensa y medios audiovisuales constituyen un espacio público con una influencia relevante en relación con las pobres cifras de ventas (prensa) o audiencia (televisiones y radio). En Marruecos existen unas 800 publicaciones de prensa escrita, de las que unas 100 aparecen regularmente. La mayor parte de estas reciben una ayuda estatal indirecta a través de las subvenciones del papel, la imprenta o la

publicidad. Por el contrario la prensa independiente (representada en los últimos años por *le Journal Hebdomadaire*, *Assahifa*, *Al-Ayam*, *Demain*, *Demain Magazine*, *Duman* o *Tel Quel*, muchas de ellas ya desaparecidas) ha sufrido una persecución importante desde la llegada de Mohamed VI al trono, tanto a través de métodos directos (cierres o juicios a sus responsables según el Código de prensa aprobado en mayo de 2002,¹⁷ bloqueo de sus páginas electrónicas, hasta llegar al encarcelamiento), como indirectos (multas millonarias por difamación, presiones a los accionistas, a los distribuidores o a las imprentas, coacción a ciertas empresas para que no se anuncien en estas publicaciones, etc.).

En el campo audiovisual, el inicio de la liberalización de la televisión y la radio no han supuesto por el momento una mayor pluralidad de contenidos, sometidos a la censura oficial y con el veto sistemático a la presencia de figuras «disidentes». La Alta autoridad de la comunicación audiovisual (HACA) encargada del desarrollo y de la liberalización del sector y de la preservación de la independencia de la información es en realidad un organismo altamente dependiente del monarca y su entorno.

El control de los recursos

Coacción. La violencia sigue siendo un recurso. La represión cumple una función concreta dentro del sistema político marroquí: regula la movilidad de los diferentes sectores sociales, marca las fronteras que no se pueden traspasar y evita la formación de brechas en la «unanidad nacional». Existe una voluntad política manifiesta de reprimir. Según el artículo 7 de la Constitución, la divisa del Reino es: «Dios, Patria y Rey». Esta trilogía¹⁸ marca la frontera que separa lo permitido de lo prohibido, la legalidad del terreno de confrontación con el majzén.¹⁹ Ahora bien, la magnitud del castigo no depende tanto de consideraciones ideológicas, o de la temática de que se trate, de si es tabú o no lo es, sino de hasta qué punto se está desafiando la estructura de poder, hasta qué punto se cuestiona la hegemonía de la monarquía y de su entorno inmediato.

El monopolio sobre la violencia ha sido solo parcialmente desafiado por los últimos atentados terroristas cometidos por grupos salafistas yihadistas (atentados de mayo de 2003, de abril de 2007, etc.). Debe recordarse que el gasto en seguridad interna, repartido entre el Ministerio del Interior y, en menor medida, el de Defensa, absorbe el 28,40% de los

presupuestos de Marruecos (mientras que en España los ministerios de Interior y Defensa acaparan, en total, el 11% de los presupuestos generales).²⁰

Información. El control sobre la información es casi absoluto desde las élites primarias, a pesar de la aparente pluralidad de la información. La extensa red de control de la información incluye instancias tan diversas como la agencia oficial de prensa (MAP)²¹ o las representaciones diplomáticas marroquíes en el extranjero. Progresivamente la prensa independiente ha ido perdiendo a sus representantes más emblemáticos.

Ideología. Los recursos anteriores sirven para garantizar el control del campo ideológico por parte de la monarquía y su entorno alrededor de tres pilares: modernización, moderación del discurso religioso y reforma política. Estos tres ejes están estrechamente vinculados entre ellos y se desarrollan en un difícil equilibrio entre el discurso tradicionalista en el que el régimen ha basado históricamente sus apoyos, la necesidad de controlar los actores religiosos extremistas, y las presiones internas y externas hacia una mayor liberalización. El objetivo es conseguir el monopolio en estos ámbitos frente a actores alternativos (movimiento islamista, oposición, movimiento de derechos humanos). Para expandir su discurso e imagen de marca la monarquía se ha servido de diferentes instrumentos. En el campo religioso al Consejo superior de ulemas (único habilitado para emitir fatuas) se ha añadido en septiembre de 2008 el proyecto de crear consejos de ulemas regionales, un consejo de ulemas para la comunidad marroquí en Europa, potenciar las mezquitas bajo el control del Estado y preparar una Carta de los ulemas. El campo de la modernización está vinculado con las reformas económicas y sociales (apertura económica, emancipación de la mujer), y con el proceso de liberalización política (reformas constitucionales y legislativas, alternancia política y transparencia de las elecciones, etc.). La reforma política se circunscribe en realidad a un proceso de liberalización política controlada, en el que la dimensión exterior juega actualmente un papel importante como parte de los compromisos internacionales de Marruecos.

Capital. En un contexto general en el que casi un marroquí de cada cinco vive en situación de pobreza, situación que no ha cambiado a pesar de que el crecimiento de los últimos años se sitúa alrededor del 6%,²² la con-

centración del capital en palacio y su entorno y, secundariamente, en el conjunto de familias al que se ha hecho referencia y que constituyen las élites del país en todos los campos, nos sitúa en espacio socioeconómico caracterizado por la desigualdad distributiva de recursos. La fortuna real²³ está gestionada por dos holdings: Ergis y Singer; el patrimonio incluye importantes participaciones en las empresas Omnium norteafricano (ONA), Dominios agrícolas reales, Primarios, Compañía Cherifiana de textiles y Secam. Este casi monopolio de algunos sectores económicos clave se ha extendido a la banca con la compra de Wafabank. Además se calcula que más del 60% de la actividad de la Bolsa de Casablanca es dinero de palacio.

Identificación de los movimientos de protesta, de oposición y de resistencia

Tipos de reclamación

Protesta. A pesar de la penuria económica y la incapacidad del Estado de otorgar bienestar, se ha podido mantener un nivel de protesta popular (reclamaciones fundamentalmente espontáneas de rechazo contra la corrupción y el despotismo) bajo. Cada década ha tenido sus episodios en forma de revueltas del pan o contra la penuria de vida. La paz social se mantiene gracias a las remesas de los emigrantes, la economía informal y delictiva (contrabando, producción de hachís en el norte) y unas estructuras familiares de solidaridad que se han ido debilitando pero coexisten con otras de nuevo cuño.

Oposición. El concepto de oposición ha evolucionado de forma notable en Marruecos en los últimos años. Lo que durante décadas se configuró como el espacio de la contestación, del cuestionamiento profundo de estructuras, normas y reglas, se ha restringido de forma notable (al menos en su manifestación política formal a través de los partidos) desde finales de los años noventa (López García, 2000a y 2000b; Parejo, 1997b: caps. II y III. y 1999c). La oposición política ha ido reduciendo su espacio en el campo político a favor de una ampliación del consenso alrededor de la figura del Rey y su proyecto «modernizador».

En la arena partidista la explicación más frecuente y que ha dominado en la bibliografía al uso presenta a las formaciones políticas marroquíes distribuidas según su posición frente al poder central y las instituciones. Así adquiere carta de naturaleza la distinción entre partidos afines al régimen alentados o apoyados por la monarquía (también calificados como partidos progubernamentales, promonárquicos, legitimistas, oficialistas o administrativos) y partidos de oposición. Los partidos de oposición (también denominados democráticos, nacionalistas o históricos) son herederos y supervivientes del movimiento nacional, responsable de las movilizaciones que condujeron a la independencia del país. Se distinguen por su lucha inveterada contra la hegemonía política de la monarquía, la defensa de instituciones democráticas y mayores espacios de libertad, produciéndose entre ellos diferencias en cuanto al grado de disidencia respecto al poder establecido. La heterogeneidad del primitivo movimiento nacional la heredaría el *Istiqlal* y sería el magma del que fluirían diversos proyectos políticos y sociales enfrentados. Este magma cristaliza en una serie de fuerzas políticas que han sabido preservar y redefinir su discurso opositor, hasta mediados de los noventa, y han logrado sobrevivir, no sin secuelas, a las oleadas de represión y a las constricciones del régimen autoritario. El núcleo duro de las fuerzas de oposición está formado por los nacionalistas conservadores del *Istiqlal*, los socialdemócratas de la USFP, los socialistas de OADP-PSU y los comunistas del PPS y del FFD. Tras el gobierno Yusufi (1998) y la participación de todos ellos en el ejecutivo (a excepción de la OADP), en el discurso político, la prensa y cierta bibliografía comienzan a denominar a este bloque de partidos como de ex oposición, antigua oposición y nueva mayoría (Parejo, 2006a).

Desde 2002 los islamistas moderados del PJD se convierten en el principal partido de la oposición y la tercera fuerza parlamentaria, con un 9,84% del voto y 42 diputados. Tras las elecciones de 2007 revalidan el título de principal partido de la oposición y mejoran sensiblemente sus posiciones, pasando a ser la primera fuerza electoral y la segunda en el parlamento con un 10,9% de los sufragios y 46 escaños. Sin lograr rebasar el umbral de su plena integración en la arena política aceptándolo como opción de gobierno, la gestión del islamismo por el poder marroquí ha realizado una peculiar travesía a lo largo del tiempo. Desde el evitamiento del problema, negando la existencia política de islamismo; pasando por la agitación de la amenaza islamista contra otros actores y

reforzando la cultura del miedo al islamismo con su conceptualización, en términos de discurso, como riesgo sistémico; para en este último estadio de liberalización, arbitrar la integración del islamismo moderado a dosis homeopáticas observando las reacciones del paciente y del colectivo de próximos.

El PJD desde su legalización en 1996, y tras su presentación por primera vez bajo sus propias siglas, como partido islamista moderado en 2002, ha mostrando una capacidad importante de movilización, basándose en una construcción de sí mismo como partido político «ejemplar».²⁴ Hasta el momento ha optado por una estrategia de diferenciación de los restantes partidos «digamos clásicos» tanto en período electoral (con un discurso político nacional articulado, cercano a los problemas y la cotidianidad de los electores, con una rigurosa selección de sus candidatos y con un rechazo absoluto de la comercialización y monetarización de los sufragios), como en período postelectoral manteniendo un alto nivel de actividad política y no descuidando la fluidez de sus contactos con sus conciudadanos. La posición del PJD, en materia constitucional es muy similar, por no decir casi mimética de los partidos de la antigua oposición, salvo en la especificidad del referencial islámico (también muy presente históricamente en el Istiqlal).

El espacio reivindicativo ha quedado prácticamente confinado a una serie de pequeñas corrientes políticas de extrema izquierda con importantes vínculos con actores sociales,²⁵ a la que debe sumarse el, más nutrido, movimiento islamista radical representado principalmente por Justicia y Espiritualidad (Al Adl wal Ihsán) de Abdeslam Yassín. Este grupo creado a principios de los años setenta ha desafiado directamente la legitimidad religiosa del monarca, al rechazar que se pueda heredar de forma automática el título de *Emir al Muminin*. Esta dimensión contestataria se completa ideológicamente con los componentes clásicos del islamismo político: no violencia, reivindicación de un califato actualizado, de la implantación de la ley islámica, combinados con un discurso anticapitalista y antiimperialista. En 2005 el círculo político que aglutina a los principales líderes políticos del movimiento (siempre bajo el mando incontestado de Yassín) inició un proceso de elaboración de su programa político con un horizonte de tres años que se ha especulado que pretenda servir de base para las elecciones de 2012.

Ante el desafío que representa Justicia y Espiritualidad, el movimiento no ha sido legalizado, y es difícilmente tolerado, alternándose los

episodios de represión y trato más liberal. Son escasos los estudios que han analizado en profundidad al grupo (Tozy, 2000, y véase Darif en Ayadi, Bourqia, Darif, 2005). Las cifras de sus adeptos oscilan entre los 100.000 y medio millón de afiliados, datos que se basan principalmente en fuentes policiales y en estimaciones realizadas en las pocas ocasiones en las que sus miembros se manifiestan públicamente (casi siempre en solidaridad con el pueblo palestino). Sin duda el espacio creciente que ha ido ocupando el islamismo moderado representado por el PJD ha mermado su capacidad de influencia.

Este frente crítico se mueve más allá del circuito institucional-representativo, y actúa a través de una serie de redes, coordinadoras, plataformas, grupos y colectivos de la sociedad civil cuyas actividades son puntualmente recogidas por la prensa independiente. Su posición crítica se materializa sobre todo en una demanda de abrogación o reforma en profundidad de la actual Constitución, es decir, de la conversión de una monarquía considerada absolutista en una monarquía verdaderamente democrática.²⁶ En el caso de los sectores islamistas radicales, esta cuestión está presente, si bien tiene igual protagonismo que otras, como la legitimidad religiosa del Comendador de los Creyentes. Estos grupos optan —ya sea por principios, por estrategia o por necesidad— por no integrarse plenamente en el campo político.

Resistencia. Marruecos cuenta con una activa y nutrida sociedad civil organizada y movilizadora alrededor de reivindicaciones que abarcan una gama muy completa de asuntos: derechos humanos en general, mejora de la situación de la mujer, reivindicación identitaria *amazig*, inserción de los diplomados en paro, desarrollo del medio rural o respeto del medio ambiente. Las asociaciones, plataformas, redes o movimientos de discurso reivindicativo han tenido un impacto significativo en el campo político-social marroquí.

Por último, compartiendo rasgos de la oposición y de la resistencia pero sin que pueda identificarse con ninguna de ellas situaríamos el salafismo yihadista marroquí, representado por diferentes grupos que desde la clandestinidad se han manifestado preferentemente a través del uso de estrategias terroristas.²⁷ Su origen puede vincularse ideológicamente al islamismo político que hizo uso de la violencia en los años sesenta y setenta, pero sobre todo a los grupos que se crean bajo el impulso de aque-

llos que participaron como muyahidines o pasaron por campos de entrenamiento en Afganistán (las autoridades marroquíes reconocían en 2004 que solo conocían el paradero de 200 de los 600 marroquíes que se sabe estuvieron en Asia Central).

Grupos o movimientos sociales con capacidad de movilización

Durante los años cincuenta hasta mediados de los ochenta los sindicatos tuvieron un protagonismo esencial en las reivindicaciones de carácter político y social en Marruecos (Ayache, 1997; Benhlal, 1984; López García, 1989). A finales de los años ochenta y especialmente en los noventa, los grupos con mayor capacidad de movilización en el espacio reivindicativo son asociaciones de derechos humanos centradas en el ámbito de los derechos civiles y políticos que tuvieron su origen (una primera generación) en los años setenta estrechamente vinculadas y dependientes de los partidos políticos de oposición. Estas organizaciones viven aisladas en su medio, con pocos fondos, centrándose en acciones circunscritas a los problemas más apremiantes de la militancia en la oposición, llevando a cabo una labor de denuncia muy rudimentaria. Beben de una doble herencia política: El ideario político de los partidos surgidos del movimiento nacional y el de los movimientos de extrema izquierda más radicales, marxismo-leninismo y sectores revolucionarios.

En los años noventa, una segunda generación de asociaciones representa un salto cualitativo en la lucha por los derechos civiles y políticos hacia una mayor profesionalización e independencia. Ello implica una serie de cambios decisivos en el origen y la gestión de los recursos, pues cada vez son más importantes los procedentes de donantes externos. Desde el punto de vista ideológico, la reivindicación de derechos civiles y políticos, ligada al ideal democrático, se tiene que convertir en la pieza clave que sitúe a la relación entre poder y súbditos en su justo lugar, y regenere un ambiente político corrupto.

Estos grupos se han transformado posteriormente (tercera generación) debido a la profundización en algunos de los rasgos que ya se apuntaban en la segunda generación. Su mayor profesionalización va acompañada de la voluntad de contribuir en la definición y aplicación de las políticas públicas (Feliu, 2004 y 2006). Se confirma así la adquisición y asimilación de un nuevo lenguaje altamente jurídico, muy técnico, una

jerga algo aséptica que aleja la carga política de la acción y la equipara a la realizada en otras muchas partes del planeta.

En este punto los diferentes miembros del movimiento deben escoger entre dos estrategias de contenido y consecuencias dispares: el «en-trismo» que supone la colaboración con el régimen (lo que contribuye a ofrecer una imagen de credibilidad y honorabilidad de las autoridades) desde la creencia que es posible la reforma del sistema desde dentro y, por otra parte, el rechazo de la opción integradora, la negativa a aceptar cualquier tipo de cooptación. A pesar de estas divergencias, la división del movimiento se ha podido evitar hasta el momento gracias a una cierta cultura de la consulta y la cooperación que se ha afianzado desde los años noventa.

Relaciones de competencia y alianza entre las élites e influencia de los movimientos sociales

Estructura de las relaciones de competición y alianza en el interior: los pactos como estrategia de supervivencia y adaptación del autoritarismo

La continuidad de la clase dirigente²⁸ tras la independencia se afirma en Marruecos de forma más clara que en ninguno de sus vecinos del Magreb. La independencia plantea para la clase política el problema de la modernización del país. Hasta 1956 la burguesía, la monarquía y el proletariado se habían unido para obtener del colonizador las mayores cotas de independencia; empero, existían ya rivalidades entre ellos para asegurarse el control de la futura edificación nacional. Los notables rurales y los campesinos se vieron separados del juego político nacional a causa de su colaboración supuesta o real con el protectorado. Al comienzo, la burguesía tenía un lugar privilegiado controlando la burocracia y la administración. Pero sus proyectos de modernización inquietaban al campesinado; ello unido a errores de cálculo político, posibilitó que el rey no desperdiciase la posibilidad de resituarse en el centro del sistema al mostrarse el único intermediario posible entre el mundo rural y la burguesía nacional.

El *Istiqlal* personifica al movimiento nacional haciendo que, du-

rante algún tiempo, estos dos nombres se fundan en una misma realidad. Se crea en 1943 por élites ilustradas urbanas para movilizar al pueblo marroquí en torno a la reivindicación de la independencia (*istiqlal*). La independencia supone un triunfo compartido del que el monarca se beneficia en mayor medida como interlocutor privilegiado del gobierno francés. Por último otras fuerzas del mundo rural reclaman su protagonismo en el reparto del poder.

Los dirigentes marroquíes son conscientes a la vez de la necesidad de transformar el país y de su propia impotencia. Aislados frente a las masas rurales y el proletariado urbano, esta élite intenta hacer un bloque compacto para mantener el statu quo del cual la monarquía y el islam son sus bases.

El rey en ciertos momentos tuvo deseos de ser el impulsor de una corriente de modernización, pero pronto fue consciente que ello entrañaría procesos que no podría controlar. Así la legitimidad monárquica restablece la honorabilidad de los notables tradicionales aliándose con ellos.

El soberano comprende pronto la importancia del dominio del mundo rural, por ello frena los esfuerzos del *Istiqlal* en este sentido. Relanza las asambleas locales haciendo de ellas un marco territorial en el que preservar las solidaridades étnicas sobre las cuales reposaba el régimen anterior.²⁹

Desde el punto de vista teórico, haciendo uso del utillaje analítico de Izquierdo (2007), tan solo en esta primera etapa de 1956-1960, con ciertas salvedades, podríamos hablar de un escenario de concurrencia de élites primarias que compiten por el poder pertrechadas cada una de distintos recursos simbólicos y materiales. Tras los sesenta asistimos a un deslizamiento progresivo hacia un sistema hegemónico, en el que la monarquía y su círculo de próximos sería el hegemón, mientras que el resto de los actores serían secundarios con escasa autonomía funcional y tremendas dificultades para fraguar alianzas entre ellos ya que estas relaciones estarían trianguladas por la insoslayable presencia de la monarquía.

Desde esta posición privilegiada y dominante la monarquía ha articulado distintos pactos políticos en respuesta a la evolución económica-social para mantener el control sobre el poder y los recursos materiales. En las distintas etapas ha intentado reunir en torno a su proyecto político un consenso en el cuerpo social; ha asumido un proyecto económico de desarrollo controlado, propulsando una modernidad universalizante que

hace del *majzen* el despertador de una sociedad civil con dificultades para emerger; ha impuesto una cultura política dominada por la tradición, pero dotada de un poder que trasciende lo local y le permite enfrentarse a situaciones cambiantes. La combinación de esos tres factores enumerados, revisados y redefinidos en función de nuevas mutaciones, permite al régimen concebir pactos político-sociales que le proporcionan la posibilidad de endogenizar los nuevos datos de la evolución político-social sin contradecirse y de aceptar reformas sin por ello condenarse.

Desde el punto de vista analítico tres grandes pactos o alianzas, con sus consiguientes fórmulas políticas,³⁰ han construido la arquitectura política marroquí: uno en los sesenta, otro a mediados de los setenta y otro en los noventa que abundando en su carácter inclusivo pervive en nuestros días.

El pacto político de los sesenta

La monarquía marroquí entendió en épocas tempranas que una de las condiciones de su supervivencia dependería de su política prudente y solícita respecto al mundo rural. Así se explica su alianza con las élites tradicionales (los notables rurales, la feudalidad) y el ejército, su control de la red de administración local y su firmeza frente al proletariado urbano (Marais, 1969: 1181-1184).

En los primeros años de construcción del nuevo Estado el monarca da la impresión de querer limitar las transformaciones de la sociedad de forma que no se trastocuen los equilibrios entre grupos. Los técnicos de clase media que en otros lugares animan los partidos únicos o los movimientos militares aceptan adherirse a la política regia, siguiendo el ejemplo de una burguesía entrenada desde largo tiempo en este género de compromisos con el *majzen*. Este hecho permite a la monarquía reconstruir su alianza con los notables rurales, con los grandes terratenientes sin perder los apoyos de la burguesía urbana asustada por el ascenso del proletariado.³¹ El movimiento nacional y sobre todo el *Istiqlal* son los grandes perdedores políticos a quienes se les compensa manteniendo su estatus económico de burguesía comerciante y notables de ciudad.

A partir de 1960 las élites locales constituyen el centro de gravedad del sistema en beneficio de la monarquía. De esta forma la monarquía re-

nuncia a cambios profundos para mantener su poder. Esta dependencia de las élites locales ha entrañado un inmovilismo de pesadas consecuencias en el dominio agrario, la administración, la educación, la política exterior y propició un proyecto económico muy conservador para no molestar los intereses de los grandes terratenientes.

El pacto político de los setenta

Si en el primer período de la independencia la alianza fundamental restaura el poder de los notables de la feudalidad, en este segundo momento se intentan calmar las expectativas de una burguesía ascendente articulando un pacto político con la tecnoburocracia y las clases medias. La tímida apertura del sistema autoritario de mediados de los setenta escenifica el cierre del estado de excepción,³² cuyas secuelas represivas seguirán dando dolorosos coletazos en las siguientes décadas.

En el ámbito económico la traducción de ese pacto se plasma en una política económica más dinámica y más voluntarista. Las estrategias durante la fase de 1973-1977 pasan por una mayor distribución de tierras,³³ la marroquinización³⁴ y la expansión del sector público. Con posterioridad, la dramatización de la crisis en 1983 acusa una mayor presencia del Fondo Monetario Internacional, propicia un retroceso del Estado y la expansión del liberalismo (Ben Ali, 1991: 64-72). La retirada del Estado de la economía tiene elevados costes sociales: congelación casi sistemática de los salarios, aumento del precio de los productos de primera necesidad, paro y, lo que es más grave, la exclusión de las clases desheredadas que pueden encontrar en el integrismo la ideología que cimiente su descontento. El poder deviene su propio legitimador y para autofortalecerse se apropia de los recursos y símbolos del campo religioso (Tozy, 2000). Con la privatización inicia una estrategia destinada a proceder a una redistribución del poder económico. Con este reparto se intentaría «dar suerte a hombres nuevos» y se operaría a favor de la clase media en el seno de la cual conviven tecnócratas y mángers. Sin embargo eso no significa que el hegemon prescinda de antiguos apoyos, sino más bien que diversifica y jerarquiza la naturaleza de los mismos.

El pacto de los noventa

En los ochenta Leveau mantenía que pese a haberse producido innumerables cambios en el tejido social estos no habían encontrado traducción institucional y que el régimen se seguía apoyando en el mundo rural, aunque había diversificado notablemente sus respaldos. Ben Ali (1991) cree que la sociedad en continuo cambio sí ha propiciado respuestas del régimen político, que se han traducido en un cambio de los pactos sociales de la monarquía con el fin de preservar su continuidad como maestro del juego. Este autor observa un retroceso del mundo rural y un crecimiento rápido de la urbanización, el declive de las élites tradicionales (Brahimi, 1992; Bras, 1991 y Sehimi, 1991), la continuada emergencia de la tecnoburocracia y clases medias y la exclusión masiva, como se ha visto, de amplias capas de la población. Puede parecer que estas transformaciones no afectan a la esencia del poder, pero contrariamente a las apariencias que hacen de este un régimen fijo, poco propicio al cambio «ha sabido endogenizar los nuevos aportes que constituyen la condición esencial a toda evolución moderna; [...] ha mostrado su capacidad para renovar su base social y los medios necesarios para el control y la subordinación de la sociedad» (Ben Ali, 1991: 51).

Las élites primarias reaccionan ante las presiones políticas internas y externas,³⁵ así profundizan en el proceso de liberalización económica (adopción de la ley sobre las privatizaciones de las empresas públicas en 1990, negociación de los acuerdos de asociación preferente con la Unión Europea firmados en 1996, etc.) e inician una liberalización política cuyo pistoletazo de salida serían las dos reformas constitucionales acaecidas en 1992 y 1996 (Parejo, 2008).

La liberalización almohadillará la reformulación de las alianzas de los setenta en un pacto inclusivo y gradual en el que se diversifican los actores que lo suscriben. Los titulares del pacto son la tecnoburocracia, los nuevos agricultores, unas clases medias reforzadas (con una recuperación de la élite de la oposición), los empresarios³⁶ y con posterioridad se incorpora a las élites emergentes de los movimientos más musculados de la sociedad civil.

La novedad del pacto político de la liberalización es el ofrecimiento a la oposición de asumir tareas de gobierno, una tentativa que se frustra en 1993 y que culmina en 1998 con el gobierno de Yusufi. Desde entonces los partidos de la antigua oposición³⁷ han profundizado en esta

línea de compromiso institucional participando en el gobierno de Yettú (2002) y en el actual de El Fassi (2007).

Relaciones con las élites exteriores

El destino y estabilidad del régimen están indisociablemente ligados al devenir de sus relaciones con Estados Unidos, Francia, España, y secundariamente con los organismos internacionales (BM o FMI) o las monarquías petrolíferas. El vínculo se ha puesto en evidencia en una serie de asuntos en los que se sustenta la continuidad del régimen (inversiones, exportación de productos, demanda de préstamos, etc.). El anclaje de los lazos con la ribera norte del Mediterráneo y el mundo occidental en general a través de la opción por una economía liberal convierte a Marruecos en un país con una gran dependencia en el ámbito económico. El intento de retardar el estallido de las crisis internas que acosan al régimen y asegurar su continuidad frente a las amenazas percibidas (explosiones sociales, entorno regional inestable, radicalización de los sectores salafistas del islam político, pérdida del Sáhara Occidental, etc.) es uno de los motivos que han impulsado las nuevas políticas económicas. Si en los años setenta se buscó fundamentalmente el apoyo en las monarquías petroleras, desde los años ochenta es el mundo occidental quien sostiene el peso principal del edificio económico (Leveau, 1987: 32). Marruecos se presenta estrechamente ligado a los avatares de la economía internacional. El modelo económico elegido agudiza su dependencia, poniendo énfasis en las exportaciones dirigidas al mercado europeo (la producción puede considerarse más determinada por la demanda externa que por la interna) y la búsqueda de financiación e inversiones extranjeras. El recurso al endeudamiento y al patrocinio de los organismos financieros internacionales hipoteca las posibles vías de salida de la economía marroquí.

Los cambios en el contexto político y económico, nacional e internacional, han provocado sin duda dinámicas difícilmente controlables por los decisores políticos. Los principales organismos financieros internacionales (Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional), las grandes potencias del centro del sistema (acuerdo de asociación con la UE de noviembre de 1995) o grandes actores económicos como las empresas transnacionales (Vivendi en el caso del sector de la comunicación) influ-

yen en la toma de decisiones a escala nacional. Estas políticas ya no solo son impuestas por los estados del norte sino que siguen una lógica macroeconómica difícil de controlar. Son factores, sin duda, que ejercen cierta influencia sobre la cultura clientelista del país, que no por ello desaparece sino que debe seguir otros canales.

Por todo ello las relaciones con las élites exteriores es fundamental, principalmente con Francia (apoyo decisivo al nuevo monarca del anterior presidente Chirac, que ha sido reafirmado por su sucesor Sarkozy) y Estados Unidos (acuerdo de libre comercio de 2006), pero de forma creciente con España (a pesar del período de crisis durante el segundo mandato del PP, la alianza privilegiada se ha mantenido en todo su esplendor retórico durante las presidencias de J. L. Zapatero). Los dos países europeos han resultado claves para que Marruecos se haya convertido en el principal beneficiario de las ayudas de la UE a su entorno inmediato o que se le otorgue en octubre de 2008 un estatuto avanzado en sus relaciones con la Unión.³⁸

La estructura del sistema de poder: del autoritarismo semicompetitivo al autoritarismo competitivo

El sistema político marroquí desde la independencia ha pasado por diferentes fases: desde un cierto liberalismo autoritario, durante casi la primera década de la independencia; pasando por un autoritarismo represivo, que presenta su cara más cruel desde principios de los setenta iniciando los dolorosos «años de plomo»;³⁹ con posterioridad, desde mediados de los setenta se produce una muy limitada apertura del régimen que sigue acompañada de la inevitable represión inherente a todo sistema autoritario pero avanzando hacia un autoritarismo semicompetitivo; este proceso incremental de reformas, con sus avances y retrocesos desemboca en el lento tránsito hacia un autoritarismo competitivo de las dos últimas décadas.

En el controvertido proceso de liberalización marroquí,⁴⁰ iniciado bajo la égida de Hasan II, se podría localizar el *terminus a quo* en el movimiento de reformas que se plasma en la constituciones de 1992 y 1996. Tras ellas se produce de un lado, una cascada legislativa en distintos ámbitos que intenta materializar esos nuevos aires liberalizadores y de otro,

un nuevo clima político marcado por la esperanza y cierto optimismo. Desde el punto de vista analítico en este proceso de liberalización se detectan dos fases: a la primera le incumbe la responsabilidad de ser el origen del mismo proceso y en ella confluyen las presiones internas de largo recorrido generadas por la oposición y la sociedad civil y las presiones internacionales, fundamentalmente del movimiento de derechos humanos transnacional que presiona a su vez sobre Estados Unidos, Francia y la Unión Europea para que contesten y cuestionen al poder marroquí (Feliu, 1996: caps. V-VI); la segunda viene dada por la reacción y respuesta del régimen abriendo la veda reformista y activando el campo político, permitiendo el acceso del islamismo político moderado a la arena política y electoral y reclamando una mayor presencia y compromiso institucional de la oposición. Pero, lo que importa no es, solamente, que desde palacio se exprese la voluntad de cambiar (lo cual puede ser interpretado como una nueva maniobra para asegurar la supremacía monárquica y, con ella, el control del cambio), sino la forma en que este anuncio es percibido en el campo político por las élites secundarias. Es decir, lo primordial es que «el propósito liberalizador debe ser lo suficientemente creíble como para provocar un cambio en la estrategia de los demás actores» (O'Donnell y Schmitter, 1988: 26).

No sabemos hasta qué punto la oposición se cree el proceso liberalizador de la década de los noventa, o simplemente ha comprendido que no hay otra alternativa que aceptar una hipotética transición que depende en gran medida de la voluntad real (Boudahrain, 1999: 164-244). En cualquier caso los vientos liberalizadores sí provocan un cierto cambio en su estrategia. La oposición profundiza y refuerza su línea de «aprovechamiento de los márgenes democráticos». Abandona la confrontación frontal y apuesta por el consenso, tal y como se demuestra en un sí casi-unánime al referéndum de 1996 y en la asunción de responsabilidades de gobierno desde 1998. Desde entonces prescinde de blandir la necesidad de reforma constitucional como un arma política; se va debilitando sensiblemente su fuerza de negociación política y asume y reproduce el discurso político de la «transición democrática».

El escenario que se pergeña en la nueva era de Mohamed VI es otro, sobre todo por lo que respecta al protagonista estelar: la monarquía. Es un diagnóstico aceptado afirmar la indefinición del proyecto político (Desrues, 2006) que emana del discurso del joven soberano. Su difusa y desdibujada propuesta navega en las procelosas aguas del «nuevo con-

cepto de autoridad» (1999), pasando por los intentos de perfilar un modelo de «democracia específicamente marroquí» (2001), para recalar en el reciente puerto de «una monarquía ciudadana» (2005) donde propone un «nuevo pacto político y social» para incorporar a su programa a actores económicos y a sectores más dinámicos de la sociedad civil. Más que un nuevo pacto político, asistimos a la reformulación de un nuevo pacto social que garantice la continuidad del orden político establecido tal y como viene sucediendo desde los diversos pactos sociales articulados desde principios de los sesenta. Sin entrar a valorar la causa de esa imprecisión programática,⁴¹ lo cierto es que el producto de esa peculiar política pública de diseño mediático-discursivo es muy rentable para la monarquía, de este modo mantiene la hegemonía del campo político, controla férreamente el proceso de liberalización distorsionándolo y reconstruyéndolo de tal forma que obstaculiza una democratización que pondría en peligro su estatus. Mohamed VI y el círculo de élites primarias no solo no han cedido poder formal, material o económico, sino que han invadido y colonizado nuevos espacios en las instituciones convencionales y han reforzado desmesuradamente un entramado institucional paralelo.

Casi la totalidad de la élite y los partidos de oposición, al menos públicamente, desconcertados ante una lógica que prescinde de la negociación política, declinan su capacidad de enjuiciar críticamente la actuación monárquica, como si tras la sucesión fueran garantes de la estabilidad del país; rebajan sensiblemente su listón reivindicativo; eluden las presiones directas o frontales sobre el régimen; se dejan llevar por la inercia del juego sistémico, autolimitando su capacidad de iniciativa, prescripción y provocación. Parece que, bien por agotamiento, bien por pragmatismo, carecen de la valentía de proponer ningún escenario ni proyecto alternativo. Tras décadas de hacer de la reforma constitucional una condición de la acción política, la oposición se refugia en el consenso y concentra todas sus energías en las reformas políticas. Los límites de esta estrategia reformista de segundo rango se han puesto de manifiesto en los dos penúltimos gobiernos (tanto en el de Yusufi, como en el de Jettú) capidismos y maniatados por la omnipresencia real.

Siendo consciente de todo ello, la oposición tal vez esté esgrimiendo la carta de presentarse como oposición no maximalista, «oposición de su majestad» y no «oposición contra su majestad», para lentamente arrancar una paulatina transferencia de poder. Tal vez por eso eluda sus-

citar un debate abierto sobre la reforma constitucional, la asamblea constituyente y la separación de poderes en unas condiciones muy desventajosas para ella en la relación de fuerzas. Ahora bien, los riesgos de esa posición de «compromiso» mantenida mucho tiempo, y sin que se produzcan resultados políticos tangibles de mejoras entre la población, podrían confinarle en una relación circular de poder, que le alejaría de sus bases y de ciertos sectores de su inteligencia y, lo que es más peligroso, aumentaría aún más la fosa que la separa de los marroquíes de a pie.

Estos mimbres dibujan el tránsito de un autoritarismo semicompetitivo a un autoritarismo competitivo⁴² o electoral. Al matizar y calificar a Marruecos como alumno aventajado del autoritarismo competitivo subrayamos la existencia de ciertos déficit en la articulación de las cuatro arenas de contestación democrática que Levitsky y Way (2002: 54-57) proponen en su sistematización del concepto. En la arena electoral marroquí las elecciones se celebran con regularidad desde 1997, desde los comicios de 1993 se observa una tendencia incremental de mayor libertad y transparencia, pero las condiciones jurídico-políticas en las que se desarrollan los procesos electorales impiden que cualquier partido político consiga una mayoría electoral y parlamentaria fuerte⁴³ y aún persisten actores políticos excluidos de la competición electoral. En la arena legislativa el parlamento es débil, falta de autonomía, con una alta fragmentación partidista, sobre todo tras las elecciones de 2002. La elevada atomización partidista y la omnipresencia de la monarquía diluyen y desdibujan las nociones de gobierno y oposición parlamentaria y dificultan la visualización de cualquier conflicto entre ambos. La arena judicial dista mucho de un poder judicial independiente que vele por el cumplimiento del Estado de derecho. Finalmente, en la arena mediática sí ha surgido una prensa independiente que juega a fondo su papel, forzando los límites del proceso liberalizador, y que ha sido y es duramente perseguida por ello.

En la última década hasaniana el funcionamiento de esta autocracia liberalizada (Brumberg, 2003) se caracterizó, de un lado, por una cierta apertura en la cúspide decisional visibilizada en un proceso de negociación política y comunicación permanente con las fuerzas políticas y sus líderes; de otro lado, por un control de la base de la pirámide a través de la ingeniería electoral y la inclusión/exclusión de los actores en el campo político regulada a través el binomio represión-cooptación.

La novedad fundamental que introduce la transición monárquica es

que Mohamed VI parece que está invirtiendo el funcionamiento del antiguo autoritarismo. Este nuevo autoritarismo se caracterizaría por dos procesos simultáneos: uno de reforzamiento y concentración en la cúspide autoritaria prescindiendo deliberadamente de la importancia de las formas y la negociación con las distintas formaciones políticas; el otro de ampliación en la base de la pirámide de la dimensión competitiva de los procesos electorales. De esta forma la dimensión electoral se ha fortalecido sensiblemente, la represión se ha reducido, se han ampliado los actores y los márgenes de la competición electoral, y de forma paralela se ha revitalizado la dimensión autoritaria. El nuevo rostro del autoritarismo renueva la función de cooptación y de reparto de bienes privados que ya venían realizando las instituciones estatales convencionales y crea nuevas agencias de elitización a través de entramados institucionales paralelos (comisiones y consejos) que eluden o marginan a las instituciones formales de poder y reducen y aíslan en círculos muy estrechos la capacidad de decisión y ejecución política. Estos círculos de élites primarias se encuentran ante la paradoja de impulsar cambios que afectarían directamente a sus privilegiadas posiciones de poder.

Un previsible escenario de futuro es la continuidad en la evolución del autoritarismo abundando en su vertiente competitiva y modernizada. Su mayor reto se abre en el campo de la gestión eficiente de políticas públicas que recuperen la confianza del marroquí como ciudadano y como elector. En la actualidad los mayores riesgos sistémicos percibidos por el poder atañen a la complicada cuestión social y sus previsibles estallidos y la espada de Damocles de la amenaza terrorista. Aun así, *rebus sic stantibus*, el autoritarismo marroquí goza de buena salud, así que probablemente asistiremos a una evolución calculada a dosis homeopáticas para adecuarse a la evolución sociopolítica interna, a los referentes internacionales, las puntuales exigencias norteamericanas y las suaves presiones de las políticas europeas (vecindad, proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo, etc.).

Notas

1. Este trabajo se enmarca en los proyectos: «Observatorio político España-Magreb: liberalización política y migraciones», SEC 2005-08867-C03-02, fi-

nanciado por el Ministerio de Educación, cuya investigadora principal es M^a Angustias Parejo y «Análisis de las transiciones políticas en el mundo árabe», auspiciado por la Fundación CIDOB y dirigido por Ferran Izquierdo.

2. Una lectura estricta y restrictiva nos llevaría a considerar el movimiento nacional como una estructura que se formó en el marco de la lucha por la independencia a partir de tres fuerzas principales: la resistencia, el ejército de liberación (ALN), la central sindical Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) y el partido del *Istiqlal* (Parejo, 1999a: 150).

3. El monarca puede proclamar el estado de excepción y retomar la totalidad de poderes (art. 35 de la Constitución), disolver las dos cámaras (art. 27), y elige 5 de los 9 miembros del Consejo superior de la magistratura, institución que preside, entre otras prerrogativas.

4. *Tel Quel*, n^o 339 (20-26 de septiembre de 2008), p. 3.

5. Las FAR se crearon oficialmente en mayo de 1956 y tuvieron en Mohamed V su comandante supremo y en Hasan II su jefe de Estado Mayor. En 1960 lo que quedaba del Ejército de Liberación Marroquí se integró a estas Fuerzas. Gran parte de los oficiales marroquíes más próximos a Hasan II se habían formado en el Ejército colonial francés, como es el caso de los generales Ufkir o Amezián.

6. La DST es un servicio autónomo creado en 1973 al que se atribuye la mayor parte de las desapariciones políticas de los años de plomo. La conexión entre los diferentes cuerpos estaría ejemplificada por su antiguo director, H. Laâ-nigri, que había sido segundo de Kadiri en la DGED y cuyo cuerpo de origen es la Gendarmería, mientras que un hijo suyo es, desde hace poco tiempo, encargado de misión en Palacio.

7. *Tel Quel*, n^o 342 (11-17 de octubre de 2008), p. 46.

8. En el intrincado mundo de las relaciones entre élites marroquíes resulta revelador comprobar que el general H. Benslimán, el secretario general del ex partido comunista marroquí (PPS), Ismail Aloui, y Saad Hassar, secretario de Estado de Interior son todos ellos sobrinos del ex líder del partido islamista moderado PJD, el doctor Jatib. Otro de los ejemplos más citados es de la familia El Fassi que cuenta con decenas de miembros ilustres (el ministro de Asuntos Exteriores Taieb Fassi Fihri es sobrino del actual primer ministro, Abbas El Fassi).

9. El capitán Adib acusó en noviembre de 1999 a sus superiores de corrupción a través de las páginas del periódico *Le Monde*. En febrero de 2000 fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, condena que fue invalidada por el Tribunal Supremo de Rabat. En octubre del mismo año el Tribunal Militar de Rabat lo condenó a dos años y medio de prisión firme por «ofensa al Ejército».

10. La revista *Économie & Enterprises* publicó una noticia sobre los negocios pesqueros del general H. Benslimán, jefe de la gendarmería real, y del lu-

garteniente general A. El Kadiri, antiguo responsable de la DGED, como propietarios de la sociedad Kaben Pesca (Ka por Kadiri y Ben por Benslimán) poseedora de cuatro licencias de pesca para exportar a España. En 2003 se deshicieron de la empresa. Otro general encargado de la «zona sur» (Sáhara), A. Bennani, posee la compañía Royal F que posee 19 licencias de pesca. Ciertas informaciones aseguran que estas empresas podrían beneficiarse de los subsidios pagados por la UE (1.000 millones de DH anuales) en compensación por el faeno de barcos europeos.

11. Entrevista a Abdellatif Aguenouch en *Le Quotidien du Maroc*, 27 de noviembre de 2000.

12. El Messaoudi analiza en sus trabajos los ministros desde la independencia hasta el del gobierno Yusufi (El Messaoudi, 1999 y 2003).

13. Nos referimos explícitamente al período 1977-1993, pues no tenemos constancia de estudios de renovación y supervivencia parlamentaria posteriores a esa fecha.

14. Estos Consejos los integran representantes elegidos de las colectividades locales, miembros de las Cámaras profesionales y de los sindicatos, y parlamentarios escogidos en el marco de la región. Los presidentes de las asambleas prefecturales y provinciales participan con un papel consultivo.

15. Sobre el papel las competencias pueden parecer relevantes, pero se ven limitadas a aspectos muy concretos. Entre ellas puede destacarse la votación del presupuesto, algunas competencias en educación, patrimonio o sanidad.

16. *L'Opinion* (3 de enero de 1996), p. 8.

17. El nuevo Código prevé penas de 3 a 5 años (antes eran de 5 a 20) por difamación al rey o a su familia. Así pues, un periodista puede ir a prisión por un escrito. Por otra parte, el gobierno puede prohibir una publicación (art. 29) si esta atenta contra el islam, la monarquía, la integridad territorial o el orden público, un amplio abanico que se puede prestar a interpretaciones muy diversas. La prohibición debe justificarse y pasar por los tribunales, y ya no es únicamente un acto administrativo.

18. El artículo 108 de la Constitución establece que aquello que atañe a la monarquía y a la religión no puede ser objeto de revisión constitucional.

19. El *majzen* es un concepto que suele aparecer en cierta bibliografía sobre Marruecos y de uso corriente en la cultura política marroquí. A fines del siglo XIX el *majzen* indica el gobierno marroquí tal y como se constituye a partir de las distintas dinastías cherifianas (saaditas y alauitas). Tras la independencia, en pleno siglo XX, el *majzen* pierde su uso oficial pero persiste en la vida sociopolítica. Actualmente se puede aprehender como estructura, como práctica de gobierno y como un conjunto de instituciones. Este «viejo nombre mágico» responde a la estructura del poder político marroquí conformado por dos círculos: uno, representa al sistema tradicional encarnado por el sultán, *cherif*, *Emir al*

Muminin; otro, al sistema moderno vertebrado en torno a un rey jefe de Estado que reina y gobierna. Como forma de ejercer el poder, el *majzen* designa una manera de componer el aparato administrativo, de dirigir a los sujetos que lo nutren, se trata de una proyección de la familia y de la autoridad patriarcal sobre la organización estatal; es el rostro visible del neopatrimonialismo. El *majzen* alude también a una realidad institucional, en la que tienen cabida tanto las instituciones depositarias del poder formal, como el entramado paralelo de estructuras dotadas de poder material, ambas constituyen el armazón del sistema autoritario (Parejo, 1999b: 260 y 2004: 102-103).

20. *El País* (17/11/2007).

21. La propia sección octava de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce, en su sentencia de enero de 2008 en un caso por difamación interpuesto por dos periodistas de la agencia contra el entonces periodista de *El Mundo* Alí Lmrabet, que la MAP colabora con los servicios secretos marroquíes y que personas estrechamente relacionadas con la DGED son nombradas al frente de la MAP.

22. En 1984 se contabilizaban en Marruecos dos millones de hogares clasificados como «pobres» y los expertos del Banco Mundial cifraron en 5,6 millones los efectivos de esta categoría. El nivel de consumo del 10% de los hogares más pauperizados se situaba en 1,9% de los gastos totales para el conjunto del país, mientras que el 10% de los hogares más ricos realizaban un gasto del 30,9% del porcentaje total del país (Djillali, 1991: 496). Según el informe sobre desarrollo humano en Marruecos elaborado en 2006 (AAVV, 2006) el índice de pobreza en Marruecos, es decir, con menos de 6 dirhams para comer por día y menos de 11 para vivir, según los datos de la Dirección de Estadística ha pasado del 21,1% a mediados de los años ochenta, a 13,1% en 1990-91, 19% en 1988-89 y a 17,8% en 2000-01.

23. Esta temática ya fue objeto de un polémico libro de Mohamed Diouri (1992).

24. Busca fidelidades partidistas a través de una política constante en el tiempo basada en la proximidad y de una fuerte coherencia discursiva, disciplina interna, comportamiento irreprochable y trabajo concienzudo de sus diputados (Fernández, 2007: 27).

25. Vía democrática (Ennahy addimoqrata) de Abdalá Al Harrif, el Partido de la vanguardia democrática y socialista (PADS, At-talia) de Abderrahmán Benameur y Ahmed Benyellún; Fidelidad a la democracia y Izquierda socialista unificada (GSU) que es el resultado de la unificación de diferentes corrientes de la extrema izquierda.

26. Esta demanda incluye la creación de un marco constitucional que tenga legitimidad popular (una constituyente elegida o una conferencia nacional), un texto que garantice la separación de poderes, y la responsabilidad del Ejecutivo.

27. El principal atentado se produjo en mayo de 2003 en Casablanca a través de cinco ataques simultáneos que causaron la muerte a 45 personas, cuatro de ellas españolas. Más recientemente debe destacarse los atentados de marzo y abril de 2007 en los que cuatro yihadistas se autoinmolaron.

28. Por este término se entiende en esta ocasión la burguesía representada en el momento de la independencia por el *Istiqlal*. La continuidad de esta clase se observa en todos los regímenes que se han sucedido desde hace un siglo (desde el XIX) en Marruecos (Marais, 1969: 1172).

29. Sobre el control del mundo rural bajo el Protectorado y la política indígena véase Leveau (1985: 11-19).

30. Parejo (2004) ha propuesto en un trabajo anterior una operativización del concepto de fórmula política construyéndolo en torno a cinco variables: los principios del régimen, la representatividad, las contrapartidas de libertad para los actores, los excluidos del sistema y los límites del proceso.

31. Sobre la reconstrucción de esa alianza véase «La reconstruction du système des élites locales», la primera parte de la conocida obra de Leveau (1985: 7-100).

32. El 7 de junio de 1965 por la noche, Hasan II hace público un decreto en el que proclama el estado de excepción amparándose en su interpretación del art. 35 de la Constitución. Las razones que explican esa decisión son por un lado, su descontento con el desarrollo de la primera experiencia parlamentaria (1963-1965), en la que no logró fraguar una mayoría lealista coherente, que apoyase la acción del gobierno y la política del rey y en la que la oposición (con un peso similar a las fuerzas promonárquicas) utilizó la cámara de representantes como tribuna política, desplegando al máximo sus posibilidades constitucionales para hostigar al gobierno y presionar a palacio. Por otro lado, la negativa de los partidos de oposición a participar en un gobierno de unidad nacional, propuesta lanzada por la monarquía en abril, tras la gestión represiva de las huelgas de marzo, que se iniciaron en Casablanca y que prendieron la mecha por las ciudades más importantes del país. Hasan II asume la presidencia del primer gobierno del quinquenio de excepción (1965-1967), disuelve las cámaras, margina a los partidos políticos, reprime a la oposición e intenta despolitizar la vida pública. Es un período marcado por una cierta tradicionalización y por una concentración total del poder en manos del soberano y donde se confían responsabilidades crecientes al ejército. La revisión constitucional de 1970, refrendada el 24 de julio, se presenta oficialmente como el fin del estado de excepción, aunque más bien supone su constitucionalización.

33. Tras los golpes militares de 10 de junio de 1971 y 16 de agosto de 1972 se acelera la distribución de tierras, produciéndose hasta 1976 un volumen de reparto diez veces superior al que se había llevado a cabo entre 1956 y 1970, unas 400.000 hectáreas (Martínez Castellanos, 1992).

34. La marroquinización favoreció una concentración financiera en beneficio de altos funcionarios de la administración, responsables del Estado y ciertas familias marroquíes. Unas 36 familias capitalistas controlaban 220 millones de *dirhams*, alrededor del 64% de los capitales que había afectado la marroquinización (Ben Alí, 1991: 62; Saadi 1989: 67). Para Raki (1981), la marroquinización suponía una reducción del espacio sociopolítico del capital agrario, y por consiguiente, un cuestionamiento del estatus privilegiado de la burguesía agraria.

35. En el primer caso hay demandas de largo recorrido generadas por la oposición (Parejo, 1999 c: 286-288) y la incipiente sociedad civil (Pérez, 2006a y 2006b) a través de sus dos manifestaciones más musculadas: el movimiento de derechos humanos (Feliu, 2004 y 2006; Pérez, 2003) y el movimiento de mujeres (Pérez 2006c y 2007; Ramírez, 2004). En el segundo tipo de injerencias se dan cita influencias más evanescentes y menos nítidas provocadas por la oleada de democratización posterior a la caída del muro de Berlín y junto a ellas influencias más corpóreas y detectables, resultado de la percepción conminatoria por parte del poder marroquí de las políticas y acciones exteriores de Estados Unidos y Francia (Feliu, 1996: caps. V-VI).

36. Esta categoría, en el contexto de liberalización económica, es promovida y ensalzada tanto en el discurso académico como el discurso político dominante como los «héroes modernos» del Marruecos económico y sobre todo político. Los empresarios ilustrados son presentados como la vanguardia del cambio, cuya acción no puede reportar más que beneficios al bienestar de la colectividad (Catusse, 2002: 116).

37. Tanto en los gobiernos de Yettú, como en el de El Farsi, están presentes USFP, PI y PPS.

38. El estatuto avanzado implica intensificar la cooperación política y en materia de seguridad, la preparación de un acuerdo de libre comercio global y ambicioso, la integración progresiva de Marruecos en diversas políticas sectoriales de la UE y un mayor nivel de intercambios entre las respectivas sociedades.

39. Esta expresión sirve para denominar las décadas más sangrientas del reinado de Hasan II (básicamente los años sesenta, setenta y ochenta) durante los cuales desaparecieron miles de personas (la mayor parte de ellas militantes saharauis, pero también opositores políticos), se utilizaron centros de detención secretos y se practicó la tortura de forma sistemática.

40. Por liberalización entendemos un proceso de ampliación y de redefinición de derechos. «Hemos denominado liberalización al proceso de redefinir y ampliar los derechos [...]. Entendemos por liberalización el proceso en el que se vuelven efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros» (O'Donnell y Schmitter, 1988: 20).

41. Si es debida a la falta de rumbo a seguir, la aparición de obstáculos en

forma de amenazas o por el contrario responde a una calculada planificación para mantener la hegemonía política, controlar férreamente el proceso de liberalización y obstaculizar una democratización que pondría en peligro su estatus.

42. Levitsky y Way acuñan el concepto de autoritarismo competitivo para dar cuenta de una determinada categoría de regímenes que conjugan los recursos democráticos, entre ellos las elecciones, con la pervivencia de formas de poder autoritario (Levitsky y Way, 2002: 51). En el caso marroquí se produce el tránsito de un autoritarismo semicompetitivo (Nohlen, 1981: 574-575) a uno competitivo.

43. Las primeras fuerzas políticas en los tres últimos parlamentos han obtenido escasos porcentajes de representación, en 1992 la USFP logró el 17,5%, en 2002 los socialistas descendieron a un 15,25%, en 2007 el PI cuenta con un 16%.

Bibliografía

- AA.VV. (2006), *Cinquante ans de développement humain au Maroc & perspectives 2025*, Rabat <http://www.rdh50.ma/>.
- Ayache, A. (1997), *Etudes d'Histoire sociale marocaine*, Okad: Al Asas, Rabat.
- Ayadi, Mohammed, Rahma Bourqia y Mohammed. Darif (2005), *État, monarchie et religion*, Fondation Abderrahim Bouabid – FAB, Rabat.
- Ben Ali, Dris (1991), «Changement de pacte social et continuité de l'ordre politique au Maroc», *Changements politiques au Maghreb*, CNRS, París, pp. 51-72.
- Benhaddou, Ali (1997), *Maroc: Les élites du Royaume. Essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc*, L'Harmattan, París.
- Benhlal, M. (1984), «Le syndicat comme enjeu politique au Maroc (1955-1981)», *Annuaire de l'Afrique du Nord 1982*, CNRS, París, pp. 217-258.
- Bennani-Chraïbi, Mounia (2004), «Représenter et mobiliser dans l'élection législative au Maroc», en M. Bennani-Chraïbi, M. Catusse y J.C. Santucci, *Scènes et coulisses de l'élection au Maroc. Les législatives 2002*, IREMAM, Karthala, pp. 15-53.
- Boudahrain, Abdellah (1999), *Le nouveau Maroc politique quel avenir?*, Société d'Édition et Diffusion al Madariss, Casablanca.
- Brahimi, Mustapha (1992), «Grandeur et décadence des élites rurales», en Noureddine el Aoufi, dir., *La société civile au Maroc*, Smer, Rabat.
- Bras, Jean Philippe (1991), «À la recherche des élites locales», en Ali Sedjari, dir., *État, espace et pouvoir local*, Guessous, Rabat.
- Brumberg, Daniel (2003), «Liberalization versus Democracy, Understanding Arab Political Reform», *Working Papers. Carnegie Endowment for International Peace*, n° 37.

- Catusse, Myriam (2000a), «Économie des élections au Maroc», *Maghreb-Machrek*, n° 168, pp. 51-66.
- (2000b), «Les entrepreneurs marocains, nouveaux défenseurs du Trône?: Sur la construction sociale et politique d'une catégorie libérale», *Congres de l'AISP, Québec, Le Maghreb entre Globalisation et Démocratisation. Le Maroc comme modèle*.
- (2002), «Il faut gérer la chose publique come une entreprise...», en Ali Sedjari, dir., *Élites, gouvernance et gestion du changement*, L'Harmattan, GRET, Rabat, pp. 113-142.
- Desrués, Thierry (2006), «Maroc. Chronique politique 2004: De la monarchie exécutive ou les apories de la rente géostratégique», *L'Année du Maghreb 2004*, CNRS, París, pp. 243-273.
- Diouri, M. (1992), *A qui appartient le Maroc?* (prefacio de M. Ahmed Rami), L'Harmattan, París [hay trad. cast.: *¿A quién pertenece Marruecos?*, Libros Límite, Barcelona, 1992].
- Djillali, Liabès (1991), «Précarisation croissante et aggravation des inégalités sociales», en C. Lacoste e I. Lacoste, dirs., *L'État du Maghreb*, La Découverte, París, pp. 494-97.
- El Messaoudi, Amina (1999), *Les ministres dans le système politique marocain*, tesis doctoral de la Facultad de Derecho, Universidad de Rabat.
- (2003), «Les ministres de Hassan II. Continuité ou renouvellement?», en Noureddine Sraïeb, dir., *Annciennes et nouvelles élites du Maghreb*, INAS, CÉRÈS Y ÉDISUD, Aix-en-Provence, pp. 139-148.
- Feliu, Laura (1996), *La influència del sistema internacional sobre la situació dels drets humans al Marroc (1981-1994)*, tesis doctoral Facultat de Ciències Politiques i Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona.
- (2001), «Fellahs, cadíes, militantes y ministros en Marruecos» en Mariano Aguirre y Mabel González, coords., *Políticas mundiales, tendencias peligrosas. Claves sobre la realidad internacional. Anuario CIP 2001*, Fundación Hogar del Empleado, Icaria, Barcelona, pp. 213-236.
- (2004), *El jardín secreto. Los defensores de los derechos humanos en Marruecos*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid.
- (2005), «El frente de rechazo y las elecciones legislativas de 2002: Espacio político y marginalidad en Marruecos», en Amina El Messaoudi y Joan Vintó, coords., *Elecciones, partidos y Gobierno en Marruecos*, IEMED, Institut de Dret Públic, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 38-63.
- (2006), «El movimiento de derechos humanos marroquí. Desafíos y riesgos ante un contexto nacional e internacional en cambio», en Carmelo Pérez, ed., *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 239-265.
- (2007), «Balance provisional de la Instancia Equidad y Reconciliación»,

- Anuario del Mediterráneo. Med. 2006*, IEMed., CIDOB, Barcelona, pp. 125-127.
- Fernández, Irene (2007), *Le PJD et la politique étrangère du Maroc. Entre l'idéologie et le pragmatisme*, Documentos Mediterráneos, 7 CIDOB, Barcelona.
- Gellner, Ernest (1986), *La sociedad musulmana*, FCE, México.
- Ibarra, P., S. Martí y R. Gomà, coords. (2003), *Creadores de democracia radical*, Icaria, Barcelona.
- Izquierdo, Ferran (2007), «Poder y transición política en el Mundo Árabe», *Awraq*, n° 24.
- Jamâi, Aboubakr, Younes Alami y Fahd Iraqui (2005), «Combien vous coûte la monarchie?», *Le Journal Hebdomadaire*, n° 230, 12 al 18 de noviembre, pp. 22-27.
- Jordán, Javier (2005), «El terrorismo yihadista en España», *Yihadmonitor*, marzo <http://www.athenaintelligence.org/otraspublis/terrorismoYihadista.pdf>.
- Leveau, Remy (1985), *Le fellah marocain défenseur du Trône*, PFNSP, París.
- (1987), «Stabilité du pouvoir monarchique et financement de la dette», *Maghreb-Machrek, Monde Arabe*, n° 118, octubre-diciembre, pp. 5-19.
- (1993), *Le sabre et le turban: l'avenir du Maghreb*, François Bourin, París.
- Levitsky, S. y L.A. Way (2002), «Elections without democracy. The rise to competitive authoritarianism», *Journal of Democracy*, vol. 13, n° 2, pp. 51-65.
- López García, Bernabé (1989), *Política y movimientos sociales en el Magreb*, CIS, Siglo XXI, Madrid.
- (2000a), *Marruecos en trance: Nuevo Rey, nuevo siglo, ¿nuevo régimen?*, Biblioteca Nueva, Madrid.
- (2000b), *Marruecos político. Cuarenta años de procesos electorales (1960-2000)*, CIS, Madrid.
- Marais, Octave (1964), «La classe dirigeante au Maroc», *Revue Française de Science Politique*, vol. XIV, n° 4, pp. 709-737.
- (1969), «Les relations entre la monarchie et la classe dirigeante au Maroc», *Revue Française de Science Politique*, vol. XIX, n° 6, pp. 1172-1186.
- Martínez Castellanos, Antonio Javier (1992), *Aspectos generales de la política agraria marroquí. El desarrollo de la agricultura dentro del proceso de planificación económico y social de Marruecos independiente*, memoria de licenciatura del Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada.
- Nohlen, Dieter (1981), *Sistemas electorales del mundo*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe C. Schmitter (1988), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, vol. 4 *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Paidós, Buenos Aires, Barcelona, México.
- Ojeda, Raquel (2002), «El proceso de regionalización en Marruecos», *Revista de Fomento Social*, n° 225, enero-marzo, pp. 151-173.

- (2003), «Les élites locales face à la décentralisation», en Nouredine Sraïeb, dir., *Anciennes et nouvelles élites du Maghreb*, INAS, CÉRÈS Y ÉDISUD, Aix-en-Provence, pp. 167-183.
- Parejo, M^a Angustias (1997a), «Límites al estado neopatrimonial en Marruecos. Nuevas dinámicas y recomposición de las relaciones clientelares», en Thierry Desrues y Eduardo Moyano, coord., *Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas*, CSIC/IESA, Córdoba, pp. 35-52.
- (1997b), *Las élites políticas marroquíes: los parlamentarios (1977-1993)*, tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad de Granada.
- (1999a), «Génesis del sistema de partidos políticos en Marruecos», *Revista Internacional de Sociología*, n^o 23, pp. 145-170.
- (1999b), *Las élites políticas marroquíes: los parlamentarios (1977-1993)*, AEI, Madrid.
- (1999c), «El proceso electoral como indicador privilegiado de la transición tutelada en Marruecos», *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, n^o 48, pp. 271-296.
- (2004), «Principio y fin de siglo en clave política: alternancia, sucesión e islamismo político en Marruecos», en Carmelo Pérez, ed., *El mundo árabe e islámico ante los retos del futuro*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 99-122.
- (2006a), «Los pesos pesados del maltrecho sistema de partidos políticos en Marruecos: PI y USFP», en Carmelo Pérez, ed., *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 69-113.
- (2006b), «La larga andadura de los comunistas marroquíes en la arena política marroquí», *Historia Contemporánea*, vol. (I), n^o 32, pp. 161-186.
- (2008), «Los sonoros silencios sobre la reforma constitucional en Marruecos», en M^a Angustias Parejo, coord., *Los procesos electorales como elemento democratizador en el Magreb*, Bellaterra, Barcelona (en prensa).
- Pérez, Carmelo (2003), «El movimiento de derechos humanos en Marruecos: sociedad civil por la paz», en Carmelo Pérez y Francisco A. Muñoz, eds., *Experiencias de Paz en el Mediterráneo*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 349-378.
- , ed. (2006a), *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*, Editorial Universidad de Granada, Granada.
- (2006b), «Sociedad civil y transición democrática en Marruecos» en Carmelo Pérez, ed., *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 9-23.
- (2006c), «Mujeres marroquíes ante la reforma de la *Mudawana*: cambio so-

- cial y referente cultural», en Carmelo Pérez, ed., *Sociedad civil, derechos humanos y democracia en Marruecos*, Editorial Universidad de Granada, Granada, pp. 69-113.
- (2007), «Mujeres, cambio social e identidad en el mundo árabe: el caso de Marruecos», *El Mediterráneo, ¿confrontación o encuentro?*, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 135-156.
- Ramírez, Ángeles (2004), «¿Oriente es Oriente? Feminismo e islamismo en Marruecos», *Revista Internacional de Sociología*, n° 39, pp. 9-33.
- Raki, Mohamed (1981), «État, capital agraire et impérialisme», *Al Asas*, pp. 19-24.
- Saadi, Mohamed Saïd (1989), *Les groupes financiers au Maroc*, Okad, Rabat.
- Sehimi, Mustapha (1991), «Les élites locales entre “tribalisme” et majzen», en Ali Sedjari, dir., *État, espace et pouvoir local*, Guessous, Rabat.
- Szmulka, Inmaculada (2008), «La fragmentación en Marruecos: análisis de la oferta partidista y el sistema electoral», *Revista Española de Ciencia Política* (en prensa).
- Tozy, Mohamed (2000), *Monarquía e islam político en Marruecos*, Bellaterra, Barcelona.
- Waterbury, John (1975), *Le Commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite*, PUF, París.

Marruecos: el régimen y los fusibles

Bernabé López García

Hay una imagen demasiado extendida que identifica Marruecos y su régimen con un sistema unipersonal en el que el Rey es el centro y actor único todopoderoso. De «Monarquía feudal» se le califica, sin que este concepto termine por cuadrar a esa realidad *composite* que definiera Paul Pascon hace ya cuarenta años¹ y que ha evolucionado a ritmos contradictorios desde entonces.

Nadie puede negar que institucional y constitucionalmente el Rey en Marruecos es el «único fusible», por utilizar una oportuna expresión de Felipe González que define con claridad la organización de un sistema político cargado de riesgos. El Rey se arroga el privilegio legislativo, tiene la última palabra en las iniciativas a tomar, preside los consejos de ministros, nombra por *dahir* los altos cargos, controla directamente todo un sistema de Consejos Reales Consultivos que le sirven para la gestión de temas concretos de vital importancia (como los derechos humanos, la educación, la emigración...), impulsa a través de fundaciones paraestatales proyectos sociales y promueve inversiones locales o regionales en función de un calendario propio y al margen de la política gubernamental. Con sus Consejeros Reales² cuenta con un equipo paralelo que hace concurrencia al gobierno componiendo una suerte de gabinete en la sombra.

Naturalmente en un sistema así el Rey capitaliza los éxitos concretos³ pero también acumula todos los riesgos, responsabilizado de la gestión del día a día y abocando a los demás integrantes del sistema a una elusión de la responsabilidad que termina siendo paralizante a todos los niveles: un primer ministro impotente, unos ministros convertidos en meros gestores, una administración bicéfala en donde prima la cadena de

delegación de poder que proviene del Rey a través de un omnipotente Ministerio del Interior que tutela todos los servicios administrativos regionales, provinciales y locales a través de los walis o gobernadores.

Dos ejemplos de los riesgos de un sistema como este: Uno, la gestión del terremoto de Alhucemas en febrero de 2004. La voluntad de darle primacía al Rey en la acción humanitaria tras el seísmo, combinada con problemas securitarios para el traslado del monarca a la zona siniestrada y el temor a asumir iniciativas y responsabilidades por parte de las autoridades locales, provocaron un conflicto entre la población, las autoridades y los organismos de ayuda internacional que dificultaron enormemente su labor.⁴ Otro, la larga ausencia del monarca durante todo el primer semestre de 2008. Los ministros, bajo la presidencia del primer ministro, se han reunido entre tanto casi semanalmente en Consejos de Gobierno, en los que han aprobado numerosos proyectos de ley que no han podido pasar al Parlamento por requerir el aval del Consejo de Ministros que debe ser presidido por el Rey y no se ha reunido entre el 13 de diciembre de 2007 y principios de julio de 2008. En su larga ausencia, todo ha debido esperar, incluida una ley de reestructuración de las competencias municipales, cuando apenas falta un año para la celebración de las elecciones locales.

Es ahí donde radica el nudo gordiano del bloqueo del sistema político.

En diversos discursos reales, en particular en el del Trono de julio de 2008, se insiste en la responsabilidad de los partidos políticos en el desarrollo del país y se vierten sobre ellos veladas acusaciones de ser los causantes de las carencias y los bloqueos del sistema. Marruecos cuenta con un amplio abanico de formaciones políticas, unas históricas y con arraigos en la sociedad y otras más coyunturales, entre las que destacan algunos partidos impulsados desde el poder, que cuentan también con un amplio clientelismo. El resultado es un panorama muy atomizado política y geográficamente en el que ninguno ha logrado nunca imponerse. Pero en donde estos actores, por secundarios que puedan parecer, cuentan como comparsas necesarios, como aguafiestas imprescindibles o como copartícipes de la farsa, participando en el reparto del botín. Algunos de los acontecimientos de más trascendencia en la reciente historia de Marruecos, para bien y para mal, como la marroquinización de 1973 y la Marcha Verde han tenido como impulsor de fondo al trabajo sordo de los partidos más nacionalistas e históricos.

Una cuestión aparte es si los partidos, al menos los que más han contado en el más de medio siglo de historia independiente del país, han sabido estar a la altura de las circunstancias o han respondido tan solo a los intereses particulares de su élite dirigente. La realidad es que, como demuestran algunas encuestas, apenas un 3% de la población se reconoce en los partidos políticos.⁵

En 2005 se aprobó una ley de partidos que trataba de poner orden en el campo político obligándoles a unas reglas de comportamiento democrático. Pero la ley no pudo acabar con la descredibilidad de los partidos, convertidos en apéndices secundarios del sistema. Las elecciones de septiembre de 2007 mostraron, una vez más, el despego de los electores hacia ellos. Pero sin la menor duda, sobre todo por la inutilidad a la que el sistema los condena.

Convertidos en chivos expiatorios del régimen, el hombre más próximo al rey, Fuad Alí El Himma, antiguo compañero de estudios del Colegio Real y ministro delegado de Interior, en realidad el número dos del régimen, inició en agosto de 2007 una operación de acoso, derribo y sustitución de los partidos. Dimitiendo de sus funciones, se presentó como independiente a las elecciones de un mes más tarde en su región de origen (Rehamna), acaparando el 72% de los votos y reduciendo a la nada a los partidos oficialistas, que habían ganado tradicionalmente las elecciones en su circunscripción.⁶ En el nuevo Parlamento, El Himma aglutinó tras de sí a un número importante (y calculado) de diputados, procedentes de pequeños partidos, para hacerse con un nutrido grupo parlamentario que le aupó a la presidencia de la Comisión de Exteriores y Asuntos Religiosos y lanzó la idea de un Movimiento de Todos los Demócratas, con la pretensión de retar a los partidos a un ejercicio de clarificación. Como primer paso se produjo un drenaje hacia su movimiento de personalidades políticas de distinta coloración, vinculadas algunas a partidos y otras no, que apoyaron su iniciativa. Más tarde se concretó ya la idea de constitución de un nuevo partido político, el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, fruto de la fusión de los cinco partidos que se habían aglutinado en el grupo parlamentario (Al Ahd, PND, Alianza para las Libertades, Partido del Medio Ambiente y el Desarrollo y Partido de las Iniciativas Ciudadanas para el Desarrollo).

Dos comentarios sobre esta operación. El primero es que no parece una iniciativa novedosa sino la repetición por cuarta vez en la historia del Marruecos independiente del proyecto de creación de un partido real, que

mantenga la hegemonía en el sistema del actor principal. Todas las anteriores han terminado en fracaso. La primera, ante las primeras elecciones legislativas de 1963, el ministro del Interior, cercano a Hasan II, Ahmed Reda Guedira, procedió a la creación de un Frente para la Defensa de las Instituciones Constitucionales (FDIC) para hacer frente al potente movimiento nacionalista escindido en Istiqlal y UNFP. La operación terminó en empate y dos años después el FDIC se rompió por las luchas internas de los diversos elementos integrados en él. La segunda fue una operación concebida para desacreditar a los partidos, potenciando a las personalidades independientes en los comicios de junio de 1977. Con esos independientes, elegidos con el apoyo descarado de la administración, se recompuso el Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI) animado por el Primer Ministro de la época, Ahmed Osman, cuñado de Hasan II. La operación fracasó una vez más por querellas intestinas que dieron lugar a la escisión del PND, perdiendo el RNI la mayoría gubernamental. La tercera experiencia la planteó ante las elecciones municipales de 1983, en pleno reajuste estructural, el también primer ministro Maati Buabid, que constituyó la Unión Constitucional (UC). Aunque logró hacerse a duras penas con el mayor número de concejales, obtuvo menos votos que el Istiqlal. Un año más tarde, en las legislativas de 1984, logró superar a los demás partidos en votos y escaños pero se limitó a obtener un cuarto de los votos de la cámara.

Con el tiempo, el RNI y la UC se convirtieron en dos partidos más del atomizado panorama político marroquí.

Lo más probable es que el partido de Fuad Alí El Himma también se convierta en un partido más, con posibilidades de reunir unos cuantos concejales o diputados más que los demás, pero incapaz de constituir mayorías estables en las corporaciones o, en su caso, en el Parlamento. La experiencia local de Rehamna no es extrapolable a todo el país. Aunque desacreditados y débiles, los partidos cuentan con su clientelismo y pese a que el aval real pueda animar a algunas decenas de millares de votantes a favor de la nueva formación, en espera de dádivas oficiales para su región, no conseguirá imponerse sobre toda la maquinaria partidaria ni sobre una apatía generalizada que procede de la ausencia de fe en el sistema. Instrumento coyuntural de afirmación de la primacía del monarca en el sistema (el éxito de la experiencia está cifrado en el apoyo real que se le supone a su promotor), no promoverá ningún cambio sino que prolongará el *statu quo*.

El problema no está en los partidos, sino en el papel que desempeñan en el sistema. Y mientras este no cambie, dando protagonismo real a los partidos y poniendo límites a los poderes del Rey, no habrá cambio en Marruecos. Sin olvidar que hay otros terrenos que también exigen una «separación nítida» entre monarquía y Estado como es el terreno de las relaciones económicas y financieras, como señalaban Rémy Leveau y Mounia Bennani Chraïbi,⁷ para hacer posible el cambio en el país. Pero cambios de tanta envergadura exigen una verdadera refundación de Marruecos.

Notas

1. Ver en <http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim4/pascon.htm> su artículo publicado en *Lamalif* en 1967.

2. Los «Guardianes del Templo», en expresión de la revista *Le Journal hebdomadaire* del 26 de abril-2 de mayo de 2008: «Les 40 nouvelles stars du Makhzen».

3. El más evidente, a ojos occidentales, fue la modificación de la *Mudawana*, la ley que regula el estatuto de la familia y de la mujer.

4. Véase Ángela Suárez Collado, *El terremoto que cambió el destino de Alhucemas. De la crisis humanitaria al desenclave y desarrollo del Rif*, en <http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/tesinas.htm>, Memoria de DEA curso 2007/08.

5. Según la «Encuesta sobre los valores» del Informe del Cincuentenario de 2006, solo el 13% de la población se declaraba satisfecho con la acción de los partidos y apenas un 1% de los jóvenes se encontraba adherido a un partido.

6. El más votado de los partidos solo obtuvo un 15%. Con todo, teniendo en cuenta que la abstención en su circunscripción fue incluso un 5% mayor que en 2002 (58% frente al 53% anterior), la cifra real de sus votantes fue tan solo del 27,4% de los inscritos.

7. En «Maroc 1996: institutions, économie, société», *Acteurs et espaces politiques au Maroc et en Tunisie*, Les travaux du Centre Marc Bloch, Cahier 8, Berlín, noviembre de 1996.

4. *E pur si muove?* Lógicas del poder y proceso de transición en la República Islámica de Mauritania

Raquel Ojeda García y Alberto López Bargados

Introducción

La República Islámica de Mauritania, que alcanzó la independencia de Francia en 1960, ha experimentado uno de los procesos de transición democrática más interesantes del contexto árabe y africano. Tras décadas de regímenes autoritarios, un golpe de Estado militar, ocurrido el 3 de agosto de 2005, llevó al poder a un colectivo de militares aglutinados bajo las siglas del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD), dirigido por el coronel Ely ould Mohamed Vall. Aunque en principio las declaraciones aperturistas de los golpistas contasen con el escepticismo de la comunidad internacional, el cumplimiento riguroso del proceso de transición en sus distintas fases, culminado con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 25 de marzo de 2007, obligó a un cambio de sentido en dicha comunidad, que pasó progresivamente a apoyar un proceso que finalizó con éxito con la victoria y proclamación de Sidi ould Cheikh Abdallahí como nuevo Presidente de la república. Ante una experiencia de transición juzgada por diversos observadores como ejemplar, y prácticamente como inédita en el contexto del mundo árabe y musulmán, en el presente capítulo nos interesamos esencialmente por las transformaciones que han afectado a lo largo de dicho proceso a las élites mauritanas y a su particular forma de gestionar el poder, con el objeto de analizar si la lógica que domina tales relaciones ha sido puesta verdaderamente en cuestión por el proceso de transición. Asimismo, prestamos atención a algunos de los problemas que el gobierno salido de las urnas debía afrontar, incluyendo en última instancia la sorprendente oleada de actos terroristas que el país ha sufrido desde finales de

2007, y que sin duda va a condicionar la agenda de la comunidad internacional en un país altamente satelizado como Mauritania.

Las élites mauritanas: radiografía de la gestión poscolonial del poder

Nuestro objetivo en este epígrafe es delimitar las élites primarias y secundarias en Mauritania, los recursos de poder que intentan conquistar y/o acumular, así como las relaciones existentes entre ellas. Para ello el primer paso que debemos dar es recordar, de forma muy breve, la influencia de la potencia colonial sobre la estructura política, social y económica del país.

En Mauritania, un país lastrado desde la independencia de Francia en 1960 por una diversidad cultural que ha resultado un foco constante de problemas, las élites económicas y políticas parecen, salvo excepciones, escapar a las complejidades de ese mosaico étnico. Es cierto que desde la independencia se han producido una serie de reajustes en el grupo selecto que maneja los resortes económicos y políticos del país, pero se trata en general de movimientos tácticos que no han amenazado los privilegios de un colectivo bastante homogéneo desde el punto de vista étnico. Con muy pocas excepciones, los *notables* mauritanos pertenecen a la etnia *bidan*.

Los *bidan* constituyen el grupo mayoritario del país, y se dividen en tribus o *qabilas* que remontan su origen a las invasiones árabes y beréberes del territorio. Esa asociación con el pasado árabe se expresa sin ir más lejos en su lengua vernácula, el *hassaniyya*, una forma dialectal del árabe que se difundió desde los siglos XIII y XIV, con el apogeo de las rutas comerciales transaharianas (Norris, 1986), y que se impuso definitivamente sobre las lenguas beréberes y subsaharianas a partir del siglo XVII (Taylor, 2000). La condición de nómadas y comerciantes que caracterizaba a buena parte de las tribus *bidan* hasta las sequías de las décadas de 1970 y 1980 trajo consigo, no solo la consolidación de una vasta red mercantil que se extendió por todo el África Occidental, sino también la expansión del islam desde enclaves magrebíes, religión que los *bidan* hicieron suya y en cuya enseñanza y difusión se especializaron algunas tribus, conocidas como *zwaya* (López Bargados, 2003). Precisamente, la

colonización francesa extrajo los primeros cuadros administrativos de esas tribus *zwaya* —y principalmente de grupos subsaharianos tales como los *wolof* o los *pulaar*, mucho más aculturados—, y fueron ellos quienes, con Mokhtar ould Daddah a la cabeza, gestionaron la independencia del país. Los restantes grupos étnicos que componen la población mauritana, tales como los *wolof*, *pulaar* (*peul* y *toucouleur*), *soninké* y *bambara*, promocionados durante los últimos años de la colonización como cuadros de una administración que tenía a San Luis del Senegal como capital, fueron progresivamente marginados desde 1960, perdiendo sus posiciones en el poder en provecho de las élites *bidan* de origen *zwaya*. A medida que el dominio *bidan* se consolidó, el retrato de los miembros de la élite se simplificó, hasta hacerse monótono: hombres, casi siempre representantes de las grandes tribus *zwaya* del país, con una posición estratégica en términos de parentesco —es decir, pertenecientes a los linajes más nobles de esas tribus—, con cierta experiencia en cargos de responsabilidad en diversos gobiernos y amparados en la red de parientes y de clientes para hacer valer sus intereses en la decisión por un puesto en la administración, en la concesión de una obra o en la resolución de un negocio.

Por tanto, según estas afirmaciones, podemos concluir que las élites primarias en Mauritania están compuestas por un grupo bastante homogéneo de fracciones tribales y familias pertenecientes a la etnia mayoritaria, los *bidan*. Es así como los nombres de tribus como *Awlad Bu Sbaa*, *Smassid*, *Ida u Ali*, *Kunta*, etc., se hallan en boca de todos los mauritanos cuando tratan de explicar una decisión política o económica tomada desde la administración. Durante el casi medio siglo de independencia se ha producido, como hemos señalado, algún reajuste importante: si durante el régimen de Ould Daddah las tribus del oeste mauritano (la región de Trarza), y principalmente los *Awlad Abyairi*, a la que pertenecía el propio presidente, se vieron favorecidas por el poder, el largo régimen de Taya fue en su día calificado de «Estado-Smassid», en referencia a su propia *qabila* (Marchesin 1992), mientras que el proceso de transición pilotado por Ely ould Mohamed Vall ha servido para que los *Awlad Bu Sbaa* hayan aumentado si cabe su influencia en el país. Podría creerse, como en alguna ocasión ha señalado Ould Ahmed Salem (2000), que la referencia tribal constituye simplemente un artificio del lenguaje, una suerte de muletilla destinada a hacer culturalmente comprensibles acciones guiadas por el mero interés estratégico de los actores. Sin embargo,

en Mauritania, la lógica tribal y su corolario, esto es, la existencia de redes clientelares dirigidas por esos notables y compuestas por una mezcla heterogénea de parientes pobres, antiguos esclavos y afines de otras tribus y etnias deseosos de promoción, constituye un fenómeno estructurante de las tomas de decisión en los campos político y económico, y los actores son plenamente conscientes de esa variable cuando actúan sobre dichos campos. Ciertamente, las facciones en liza no son tan homogéneas como podría creerse a la luz de un análisis preliminar (Marchesin, 1992), y no pueden medirse sobre la vara de un componente tribal único y exclusivo, pero el factor tribal juega permanentemente sus bazas sobre la arena política, y los equilibrios que debe llevar a cabo el gobierno para satisfacer las demandas de los distintos grupos y regiones son, a veces, prueba de una verdadera destreza distributiva.

Las relaciones que se establecen entre las élites primarias y entre estas y las secundarias se articulan en torno a estos mecanismos: el parentesco, a través de la tribu, fracción, linaje o familia, y el clientelismo, que teje otro tipo de redes más heterogéneas —aunque a menudo se solapan con las relaciones de parentesco—, gracias a un reparto de recursos y prebendas.

En ese sentido, la reducción progresiva de la lógica distributiva como resultado de la represión, el desentendimiento y el simple desgaste fruto del ejercicio del poder, explican mejor que cualquier otra variable la conjunción de intereses que dieron al traste con el gobierno de Ould Taya tras veintiún años en el poder. A medida que pasaron los años, la coalición de intereses vertebrada en torno al presidente Ould Taya, que inicialmente era imponente, fue perdiendo componentes hasta que, en los últimos años, una pequeña camarilla se enquistó contra viento y marea en favor de intereses tan restringidos que, por decirlo así, el gobierno cayó como una fruta madura. Ciertamente, los problemas con los que el gobierno tenía que lidiar eran graves y numerosos: una oposición democrática maniatada y reprimida; el *affaire* de los refugiados en Senegal y Malí, y por extensión el llamado *passif humanitaire*, del que Ould Taya fue directamente responsable entre el período 1989-1991; la amenaza, esencialmente retórica, del islamismo... Sin embargo, nada de eso fue determinante. Como en los dramas clásicos, la conjura provino del lado de los más allegados.

El mantenimiento o el cambio de unas tribus o familias en el selecto círculo de las élites primarias no se realizan solo gracias a las relacio-

nes de parentesco o clientelares, sino que la coacción es otro de los mecanismos decisivos. Desde la deposición del primer presidente de la república, Mokhtar ould Daddah, en 1978, los militares han intervenido sistemáticamente en la escena política mauritana. La sucesión de golpes acaecida entre 1978 y 1984, que concluyó con la toma del poder por parte de Ould Taya, el intento frustrado de golpe en 2003, el exitoso de 2005, e incluso la reciente convulsión de verano de 2008: el protagonismo en la dinámica de la política mauritana corresponde casi sin excepciones a los cuarteles. Son los propios militares quienes han marcado los cambios de las principales tribus *bidan* en el poder. Sus intentos por controlar los recursos de poder y acumularlos les han conducido al esfuerzo por controlar las principales estructuras del Estado, como resorte fundamental en ese proceso de control y acumulación de los recursos.

Este panorama nos conduce a observar que las relaciones de poder más frecuentes entre las élites primarias son de tipo circular, es decir, no existe una finalidad o un objetivo que las mueva. Más allá de las proclamas retóricas de la necesidad de sacar al país de la extrema pobreza o los intentos de apertura y democratización promovidos desde el ejército y con mecanismos violentos y coactivos, la única pretensión de estas élites ha sido la de la acumulación de los recursos. No ha existido ningún gran proyecto (nacionalismo, desarrollismo, panarabismo, islamismo o liberalismo) que haya sido capaz de unir a las élites primarias, a las secundarias y a la ciudadanía hacia una meta común.

Las élites secundarias podemos encontrarlas en los pocos espacios dejados por el monopolio político y económico ejercido por algunas fracciones tribales y familias *bidan*. Estos resquicios o margen de maniobra es el que aprovechan las restantes etnias del país, con algunas de cuyas familias (especialmente entre los *pulaar*) mantienen relaciones estrechas y antiguas. También los procesos electorales convocados regularmente desde los intentos de apertura formal del Estado en 1991 bajo el régimen de Ould Taya, van a desempeñar un papel fundamental para la entrada en escena de otros actores. Una vía indispensable para capitalizar el voto con ocasión de los procesos electorales y dar así sentido a la propia actividad faccional es asegurarse la fidelidad de los *harratin* de las familias respectivas. Los *harratin*, colectivo heterogéneo que reúne a los descendientes de esclavos o a quienes se les otorga ese estatus, y que guardan lazos de clientelismo con las familias de sus antiguos señores, constituyen una parte muy importante de la demografía del país —probablemen-

te en torno a un tercio de la población total—, y su cooptación en las campañas electorales se convierte así en una dimensión clave de la acción política con la que los líderes de facción pueden utilizar para apostar por un cargo u otro. Aunque en años recientes se ha tratado de articular un discurso político y cultural propio desde medios *harratin* (López Bargados, 2001), lo cierto es que hasta el momento su fidelidad a las tribus *bidan* en las que se adscriben como clientes —y a las que, *de facto*, pertenecen, aunque ocupen posiciones estatutarias bajas— ha constituido una herramienta política de primer orden en la intensa actividad faccional que en Mauritania se despliega en torno al poder y sus réditos.

Por último, en este epígrafe nos vamos a detener en los recursos de los que intentan abastecerse las élites primarias. En primer lugar, debemos señalar al Estado. Pero si alguna institución, asociada con el Estado supone un elemento clave, tal y como hemos analizado hasta ahora, es el ejército, puesto que gracias a él se ha accedido, de forma sistemática, al dominio del resto de instituciones estatales e incluso al control del capital privado. En especial, la comandancia del batallón de la Seguridad Presidencial ha significado, en los últimos años, tanto la máxima recompensa de los más fieles servidores presidenciales como la plataforma desde la cual derribarlos. Es el caso de Mohamed Ould Abdelaziz instigador y miembro del CMJD en el 2005 y, cabeza visible también del golpe de Estado del 6 de agosto de 2008, como presidente del Alto Consejo de Estado que rige los destinos del país en la actualidad.

El neopatrimonialismo que, según diversos observadores, parece caracterizar al Estado mauritano no constituye en modo alguno una excepción en el escenario de los estados poscoloniales del África Subsahariana. Jean-François Bayart (1999) ha demostrado convincentemente que esa pulsión autoritaria y depredadora está extendida por buena parte del continente. Por supuesto, los observadores están en lo cierto cuando afirman que esa pulsión entronca con las lógicas distributivas de las autoridades tradicionales y en general con el acentuado personalismo de las relaciones políticas en el África poscolonial, pero tampoco debemos llevarnos a engaño en este punto. La naturaleza criminal del Estado poscolonial africano no es una suerte de rémora implacable de las tradiciones africanas más ancestrales que la colonización fue incapaz de extirpar, sino más bien el colofón al tiempo paródico y trágico de una acción colonial devastadora.

Ahora bien, una de las principales características del Estado posco-

lonial es, si se quiere, la extrema ductilidad ideológica de sus promotores, ductilidad que se halla en directa relación con la progresiva debilidad institucional promovida por los organismos internacionales, en particular el Banco Mundial y el FMI. Si, en efecto, a la lógica filibustera del «reparto del botín» propia de regímenes institucionales fuertemente personalistas le añadimos el desmantelamiento sistemático del célebre Estado africano hipertrofiado del que se hablaba en la década de 1980, promovido por los diversos Planes de Ajuste Estructural, la creciente precariedad de las arcas de los estados africanos ha obligado a acentuar la rapacidad de unas élites cada vez más incapaces de satisfacer las demandas habituales, y asimismo a depurar sus instrumentos ideológicos con vistas a la maximización de sus recursos.

Abdel Wedoudould Cheikh (2006: 39), también se refiere a la existencia de un neopatrimonialismo depredador, criminal del Estado poscolonial mauritano: cuando las élites no pueden controlar la población a través del reparto de recursos escasos, como consecuencia del estancamiento o retroceso de la «holgura organizacional», estas tienden a ejercer la violencia sobre la población y sobre las otras facciones de poder que pretenden un cuestionamiento del *statu quo*. Precisamente, cuando las élites recurren de modo sistemático a la violencia (incluso con milicias privadas) es cuando el Estado no puede ejercer ningún control y, de esta forma, desaparece estrictamente como objeto de estudio (Bratton y Chang, 2006: 1061). Levine (1999: 721), por su parte, señala que la «holgura organizacional consiste en los pagos que se dan a los miembros de la coalición, por encima de los que se requiere estrictamente para mantener la organización». Esta escasez en los recursos «amortiguadores» de la incertidumbre, que recompensan la lealtad y la cooperación, desafía la actuación tanto de los sistemas administrativos como de las instituciones políticas. El hecho es que, sin crecimiento económico y con un número mayor y más diverso de demandas, la administración de las organizaciones públicas se convierte, obviamente, en un asunto muy difícil.

Por ello, es preciso tener presente las particulares condiciones en que se ha gestado y gestionado el poder en Mauritania desde su independencia de Francia. A diferencia de sus vecinos septentrionales, y en particular de Argelia o Libia, Mauritania ha carecido hasta bien hace poco tiempo de rentas petrolíferas que pudieran otorgar autonomía de manobra a las élites políticas del país. Como veremos más adelante, las extracciones recientes, realizadas *off-shore*, han defraudado ya en los pri-

meros meses las expectativas depositadas por las élites mauritanas. De ese modo, en un país altamente satelizado y que dispone de pocos recursos, la ayuda internacional, ya sea mediante proyectos locales de desarrollo o a través de diversas líneas de crédito concedidas en respuesta al cumplimiento de criterios más o menos estrictos de responsabilización y transparencia, constituye una de las aportaciones más importantes del PIB mauritano, y por lo tanto un recurso de primer orden del que el Estado mauritano y sus élites no pueden prescindir. En un contexto semejante, resulta tentador postular que la deriva autoritaria del régimen de Ould Taya había colocado al país en un atolladero económico y político del que el golpe militar y las promesas de democratización lo sacaron paulatinamente. Sin embargo, esa interpretación se revela errónea si tenemos presente que la ayuda internacional no disminuyó de modo ostensible hasta después del golpe. En otras palabras, a pesar de su indiscutible deriva autoritaria, el régimen de Ould Taya contó hasta el final con el favor tácito de los principales *bayeurs de fonds*, satisfechos como es habitual con la estabilidad política y las oportunidades comerciales que ofrecía el dictador (Jourde, 2007: 497).

Las facciones o *lobbies*, grupos de naturaleza inestable atravesados por las relaciones de parentesco y de afinidad (matrimoniales), y en las que el factor tribal asume un papel determinante (fracciones enteras de una misma tribu pueden seguir las consignas emanadas del líder faccional), son las que monopolizan la concesión de los principales cargos de la administración (ministeriales, dirección de puertos, aduanas, etc.), así como la gestión de las principales empresas públicas y privadas, mediante los apoyos que prestan eventualmente al «sultán» (Ould Cheikh *dixit*) de turno, quien por su parte ofrece las prebendas necesarias con el fin de garantizarse el apoyo de la facción en cuestión. Es así como las modestas industrias extractivas (petróleo, hierro, cobre), los bancos, las empresas de importación y la flota pesquera caen en manos de un reducido grupo de personas con un perfil familiar bien definido, que cualquier mauritano puede recitar de manera casi automática. Aquel banco pertenece a tal tribu, aquella empresa es de tal familia, esa concesión de gasolineras está en manos de tal pariente de un ministro... Cuando menos como forma de organizar y dar sentido a una acción política definida por la inestabilidad, la lógica tribal aparece en primera línea argumentativa cuando los propios mauritanos tratan de explicar(se) una realidad compleja y esquiva como pocas.

Los movimientos de oposición y protesta

A pesar de su voluntad acaparadora, las élites no son las únicas protagonistas de la tragedia del Estado africano poscolonial. Así, a diferencia de las representaciones convencionales de un Estado africano autoritario cuya acción se ejerce con mayor o menor presión sobre una población al tiempo ajena y víctima de las decisiones de su administración, Mbembe (2001: 103) ha puesto de manifiesto que las lógicas de acción política en el África contemporánea son transversales, y que la misma confusión y flexibilidad ideológica de las élites se transmite, aun con menor intensidad, al resto de la población, en un efecto de *mimesis* en el que las proclamas a la democratización van unidas, sin solución de continuidad, con los actos de rapiña o la gestualidad autoritaria. En este sentido, las contradicciones que percibimos los observadores occidentales en los modos de acción política africanos son fruto de una cierta distorsión de la perspectiva que aplicamos sobre un campo político que entiende como complementarias lógicas que nos resultan imposibles de conjugar.

Ahora bien, el resultado de esa mezcla de códigos y valores en un contexto de profunda escasez no puede ser otro que extravagante y excesivo: la «pluralidad caótica» con la que Mbembe (2001: 128-129) describe la acción política en el África contemporánea hace de la gestión del poder una simulación consentida a la que, sin embargo, los actores se dedican con verdadero empeño. En efecto, como ha señalado con agudeza Ould Ahmed Salem (1999: 132), los actores se aprestan a participar en el *juego* político empleando todas las artimañas posibles sin que ello ponga en duda su confianza colectiva en la legitimidad de la partida; en esa suerte de suspensión generalizada del orden legal que todo el mundo practica con más o menos ahínco, el cumplimiento estricto de la ley se interpreta como un signo de incompetencia particularmente peligroso en la medida que las jugadas emprendidas por las élites primarias y secundarias no les afectan únicamente a ellas, sino también a la red clientelar que se ha tejido a su alrededor. En esa situación, el manejo diestro de las artes del engaño, la vulneración de los compromisos adquiridos ante la población o los dobles discursos no son objeto de una particular estigmatización, como se demuestra en el caso de las prácticas corruptas, ampliamente satanizadas en los discursos públicos y, no obstante, aplicadas con tesón en los modos de gestión privados. La «economía moral de la corrupción» es, tal y como aventuraba Olivier de Sardan (1996: 111), una

práctica transversal que parece marcada por el efecto de mimesis al que nos hemos referido con anterioridad.

Por su parte, los partidos políticos en Mauritania no se dividen en función de las distinciones clásicas (ideológico o nacionalista-centrista). Durante el régimen de Ould Taya, cada partido había ocupado su propio lugar en el campo político en función de su oposición o no a dicho régimen, aunque proliferase el llamado «nomadismo político», es decir, la naturalidad con la que se practicaba el transfuguismo de una organización a otra, y en términos generales del bloque de la oposición hacia el bloque presidencial.

En la oposición podemos señalar la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), encabezada por Ahmed Ould Daddah, hermano del primer presidente de Mauritania. Sus orígenes remontan a los años ochenta, en donde encontramos al Frente de Resistencia para la Unidad, la Independencia y la Democracia (FRUIDEM) (Ould Mohamedou, 2007: 330).

En octubre de 2000 se disolvió la UFD/EN (UFD Ère Nouvelle), el principal partido de la oposición bajo la acusación de promover revueltas populares (dentro de su política pro palestina y en contra de las relaciones de Mauritania con Israel). El arresto sin cargos para después ser liberado, no ha sido algo que le haya ocurrido de forma esporádica a su líder, Ahmed Ould Daddah, sino que ha sido una práctica continua desde 1992 (Clausen, 2000-2001: 110). Tampoco ha sido la única vez que le ocurriera a un líder político, como el caso de la detención de Ould Haidallah, candidato a las elecciones presidenciales de 2003. Fue la segunda vez que se disuelve un partido legalmente constituido y reconocido. El primero fue el PAN (o Attali'a) en 1999. La disolución de la UFD/EN no afectó a la otra rama en la que se escindió el partido en 1998, la liderada por Ould Maouloud y Mohamed Ould Bedreddine, que al final pasó a llamarse Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) en noviembre de 2000, ante la oposición de la rama de Ould Daddah de que esta escisión guardara el nombre del partido original. La disolución oficial de la UFD/EN dio como resultado que sus miembros fundaran un nuevo partido, la Reunión de las Fuerzas Democráticas (RFD) en 2001. La oposición, en 1995, consiguió reorganizarse en coalición en un bloque denominado Frente de los Partidos de la Oposición (FPO), constituido por los cinco partidos más importantes de la oposición: UFD-EN, AC, APP, Attali'a y el Frente Popular (este último ingresó en 1998) (Mint Ainina, 2000-2001: 349).

Tras la destitución de Ould Taya como consecuencia del golpe de

Estado militar de 2005, parecieron recuperarse las formas clásicas —ideológicas— de organización en el campo político mauritano, pero tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en marzo de 2007, esa deriva se ha revelado un espejismo, y se ha asistido nuevamente a la conformación de una mayoría presidencial con vocación de partido único.

Uno de los logros de la modesta pero activa sociedad civil de la capital ha sido el exigir el cumplimiento de la promesa electoral realizada por el candidato Sidi ould Cheikh Abdallahi, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en marzo de 2007. Si hubo una situación, durante el 2007, que invitase a un mayor optimismo fue precisamente la gestión del llamado dossier del *passif humanitaire*. El gobierno salido de las urnas trató de ser fiel a los compromisos contraídos y puso en marcha un paquete de medidas destinadas al retorno de los refugiados negro-mauritanos, peul y toucouleur en su mayoría, que vivían en el exilio de Senegal desde la oleada de represión que el ejército mauritano, dominado por la etnia *bidan*, abatió sobre esas comunidades entre 1989 y 1991. La intervención de algunas de las principales organizaciones de derechos humanos (AMDH y SOS-Esclaves) en la resolución del proceso, y la buena disposición de las partes en litigio, el gobierno mauritano, de un lado, y los diversos representantes del exilio, del otro, han permitido que dichos refugiados retornen paulatinamente al país del que habían sido expulsados. La Agence Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (ANAIR), de común acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha procedido al realojo de un primer contingente de 101 personas durante el mes de febrero de 2008, pero el proceso se vislumbra lento y trabajoso, tanto por la complejidad de los procesos de identificación como, sobre todo, por las dificultades de inserción de los refugiados y por la incertidumbre que envuelve la cuestión de las indemnizaciones que los refugiados deberán, en buena lógica, recibir.

Estructura del sistema de poder en Mauritania

En este apartado vamos a abordar la relación existente entre la construcción del Estado y la consolidación del régimen en Mauritania. Para Bratton y Chang (2006: 1061) esta relación es recíproca y necesaria puesto

que no se puede dar un régimen democrático en un Estado débil. Por tanto, no tiene mucho interés andar en debates sobre qué es lo primero, la construcción del Estado o, por el contrario, la consolidación del régimen democrático, sino que se trata de procesos indisociables.

Ante esta relación que se da entre la construcción del Estado y la consolidación del régimen se nos abren dos opciones. La primera es la que Bratton y Chang denominan como círculo virtuoso. La democratización introduce instituciones que unen los ciudadanos al Estado, mientras que el Estado incrementa sus capacidades para mejorar el bienestar de los ciudadanos y, por tanto, refuerza la democracia. Pero también, se puede producir un círculo vicioso, en el que los líderes políticos no responden a las demandas de los ciudadanos y estos retiran su apoyo al incipiente Estado. La espiral agrava la decadencia del Estado con la corrupción de las élites lo cual contribuye al incremento del desorden (Bratton y Chang, 2006: 1063).

El planteamiento de esta obra colectiva parte del presupuesto de que el Estado es un recurso en manos de las élites primarias y que, por tanto, no constituye un actor por sí mismo. También lo podríamos traducir del siguiente modo: el Estado no es considerado como una variable independiente y, por tanto, su constitución, funcionamiento, así como las reglas del juego que lo vertebran, no serían decisivas ni influirían en los actores, en el caso que nos ocupa, las élites primarias y secundarias. Sin embargo, nuestro planteamiento central no parte de este presupuesto; en realidad, consideramos que puede resultar enriquecedora una perspectiva que intente analizar si efectivamente el proceso de construcción del Estado en Mauritania sirve para asentar la democracia en el sistema político y, por el contrario, si la democratización iniciada con los procesos electorales y las distintas reformas institucionales y normativas llevadas a cabo durante el período de transición pueden contribuir a la mejora y consolidación del Estado. Se trata, en definitiva, de comprobar si el Estado «se mueve», aunque eso nos obligue a cuestionar, al menos provisionalmente, que el Estado sea un mero recurso en manos de los actores, y nos lleve a formularnos la siguiente pregunta, ¿cómo afectan las soluciones institucionales a los procesos de negociación política?

En este sentido, las posiciones defendidas por un especialista conocedor de Mauritania como el sociólogo Abdel Wedoud ould Cheikh, alertan contra un excesivo optimismo. Ould Cheikh sostiene que en Mauritania predomina una forma peculiar de autoritarismo, el denominado

«sultanismo», que está relacionado con la herencia árabo-musulmana de Mauritania y con la manera en que en esa área cultural se construye y representa la autoridad política (Ould Cheikh, 2006: 29).

Para establecer el análisis en el que se relaciona la construcción del Estado con la consolidación de los regímenes políticos (obviamente el que nos interesa es el democrático), debemos comenzar por delimitar cada uno de los conceptos y los indicadores que vamos a utilizar para cada uno de ellos. Cuando hablamos de Estado nos referimos a las estructuras y por regímenes, a los procesos. La pretensión última de este planteamiento es preguntarnos por la existencia de las condiciones mínimas para que se dé un régimen democrático. Estos requisitos podemos resumirlos en tres grandes bloques: uno de carácter económico, la existencia de unos mínimos indicadores económicos que indiquen estabilidad, cierto crecimiento y un reparto equilibrado de la riqueza; un segundo requisito de carácter identitario, que muestre la generación de un cierto sentimiento de identidad nacional; y en fin, un último criterio que debemos tener en cuenta, y que es esencial, a saber, la existencia de un Estado de derecho, es decir, un marco normativo adoptado y aceptado por la mayoría de los ciudadanos que establece las reglas del juego institucional plural.

El Estado está conformado por las estructuras políticas y por las instituciones administrativas. Especialmente, en sus inicios, se le identificaba con las instituciones para la coerción, como el ejército y la policía, y las cortes, además de las burocracias gobernadas por normas legales. El régimen, por su parte, es considerado como los procesos, como las reglas del juego político que determinan quién puede tomar una decisión y cómo. La caracterización de los regímenes se mueve entre dos extremos, la democracia y el autoritarismo. Entre estos dos modelos se abre un abanico de casos en los que podemos encontrar reglas del juego, mecanismos y procedimientos de uno u otro modelo. Un régimen democrático, como analizaremos más adelante, viene definido por la existencia de un Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la satisfacción de las demandas de los ciudadanos, el control de la corrupción, y la articulación de la lógica institucional sobre los valores constitucionales.

Probablemente hablar de democracia en África es forzar mucho los términos, puesto que solo cinco países (Botswana, Cabo Verde, Mauricio, Namibia y Sudáfrica), con el 7% de la población de todo el continente, pueden ser calificados de democracias liberales según los indica-

dores utilizados por el Banco Mundial en sus informes sobre gobernanza, es decir, regímenes que respetan las libertades civiles y políticas. En una clasificación establecida en función del mayor a menor grado de democracia de un régimen político dado, podemos establecer las siguientes categorías: democracia liberal, democracia electoral, autocracia liberalizada y autocracias no reformadas. Las democracias electorales respetan unos mínimos preceptos de las democracias, tales como la elección por sufragio universal de los poderes legislativo y ejecutivo, pero en ellas no siempre está asegurado el ejercicio de las libertades civiles y políticas. La forma de organización política estatal más común en África es la denominada autocracia liberalizada. Este tipo de régimen suele producirse tras la promulgación de ciertas reformas que garantizan la supervivencia de regímenes basados en sistemas de partido único o en los militares. Sus líderes convocan elecciones y prometen cambios, pero mantienen un férreo control sobre los asuntos públicos, y no permiten la libertad de prensa, ni el desarrollo de organizaciones cívicas, mientras los partidos políticos ven limitado su campo de acción a causa de la frecuente encarcelación de sus máximos dirigentes. Por último, las autocracias no reformadas son aquellos sistemas en los que no existe ni siquiera la preocupación por revestir de cierta legitimidad al régimen mediante la convocatoria de elecciones más o menos competitivas. Los líderes llegan al poder de forma hereditaria (Swazilandia), a través de insurgencias armadas (Eritrea o Ruanda), o bien a través de elecciones en las que gran parte del electorado queda excluido (Sudán). Estos países se suelen caracterizar por hallarse inmersos en conflictos armados internos (Bratton y Chang 2006: 1065).

En cuanto a la caracterización de los estados en África podemos utilizar una serie de indicadores que son los utilizados por el Instituto del Banco Mundial (World Bank Institut's). Las cinco principales características señaladas son: la estabilidad política, la efectividad del Estado, la calidad reguladora, el gobierno de las leyes y el control de la corrupción. Veamos lo que implica cada una de estas características para poder más tarde aplicarlas al caso de Mauritania. La estabilidad política se refiere al orden público entendido como la ausencia de violencia contra el propio régimen (desde el interior con el riesgo de insurgencias, como desde el exterior, con la existencia del terrorismo internacional). La efectividad del gobierno es considerada como la calidad de la prestación de los servicios públicos y el grado de competencia e independencia de los fun-

cionarios. La calidad reguladora del Estado se mide en función de la capacidad de construir las infraestructuras necesarias para garantizar el funcionamiento del mercado y el desarrollo de políticas económicas. El gobierno de las leyes, por otro lado, es una característica que evalúa el grado de criminalidad, la fortaleza del sistema judicial y el grado de cumplimiento del orden jurídico. Por último, el control de la corrupción refleja la extensión de la utilización de los puestos oficiales para conseguir beneficios privados.

A estas cinco características podemos añadirle tres dimensiones que nos permitan evaluar el grado de consolidación de un Estado. Estas tres dimensiones son: el ámbito, la capacidad y la legitimidad del Estado.

El primer concepto que vamos a delimitar es el del ámbito del Estado. Este hace referencia a la presencia del Estado en todo el territorio, a través de las infraestructuras económicas (electricidad, agua, alcantarillado, etc), las políticas (estación de policía, correos, destacamento del ejército), así como las sociales (enseñanza, sanidad). En los países africanos, una de las notas características es la enorme diferencia entre el mundo urbano y el rural en cuanto a la presencia del Estado y su administración. La segunda dimensión, la capacidad del Estado, se refiere a si el gasto de los recursos públicos se realiza en cumplimiento de las tareas encomendadas y en función de los objetivos establecidos. Estas tareas obviamente están pensadas para resolver los problemas de los ciudadanos y satisfacer sus demandas. Estas dos dimensiones, ámbito y capacidad, están estrechamente vinculadas a la siguiente, la legitimidad del Estado. Esta última dimensión hace referencia al grado de asentimiento que los ciudadanos muestran ante el poder del Estado y las normas que emanan de sus élites (Bratton y Chang, 2006: 1076). En el continente africano en general, y en Mauritania en particular, la escasa confianza que preside las relaciones entre las élites y el resto de la población, unido al contexto general de escasez que sobrevuela sobre todo tipo de relaciones —políticas o de otro orden— explica que la mayor parte de ciudadanos asuman ese poder obedeciendo criterios de estricto beneficio personal, y no en función de consideraciones ideológicas más o menos fundamentadas. En efecto, uno de los rasgos de las sucesivas campañas electorales sucedidas en Mauritania desde 1992 en adelante es la profunda desideologización de la mayor parte de candidatos en liza, en consonancia con el personalismo que preside el campo político en contextos marcados por el autoritarismo competitivo. Las alianzas, rupturas y demás gestualidad de

los grandes líderes de partidos políticos no se interpretan, ni siquiera en los medios de comunicación, a la luz de virajes ideológicos y compromisos programáticos, sino explícitamente en términos de peso, influencia y contrapartidas en forma de cargos. En este sentido, por seguir el razonamiento de Bratton y Chang (2006), nos hallamos ante un ejemplo casi paradigmático de «gobierno de los hombres».

El gobierno de las leyes es importante para democratizar (o planteado de forma contraria, los ciudadanos perciben que las violaciones al gobierno de la ley son las que más corroen a la democracia), porque es una característica de los estados, pero también un requisito para la democratización, puesto que está asociado a principios tales como las libertades civiles, el consentimiento voluntario al gobierno y la obligación de dar respuestas, de ser responsable políticamente (*accountability*), y esto es lo que la distingue con respecto al gobierno de los hombres (Bratton y Chang, 2006: 1078).

A la luz de estas consideraciones, Mauritania puede ser considerado como un Estado fuerte, si tenemos en cuenta los estándares africanos y lo analizamos desde una perspectiva comparada con aquellos. Mauritania, por tanto, entraría en la categoría de regímenes denominados autocracia liberalizada hegemónica (Bratton y Chang, 2006: 1072), ya que las promesas y los intentos de reformas iniciadas por Ould Taya en la década de 1990, no tuvieron como intención última la democratización del régimen, sino únicamente su supervivencia.

Finalmente, podemos afirmar que para que un régimen pueda ser calificado como democrático es preciso que estén implantadas las estructuras estatales, es decir, que la ley y el orden prevalezcan, el respeto a los derechos humanos quede garantizado, se dé satisfacción a las demandas de los ciudadanos, la corrupción esté controlada y que la lógica institucional esté basada en los valores constitucionales. En función de este planteamiento, en el que quedan imbricadas la consolidación del régimen democrático y la construcción del Estado, vamos a analizar la situación actual de Mauritania tras el golpe de Estado de agosto de 2005 y el período de transición hasta mayo de 2008, para concluir en el traspaso de poderes por parte del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia al presidente Sidi Ould Cheikh Abdallhi y el Parlamento electos.

Si el gobierno de las leyes es la primera condición tanto de la conformación del Estado como de la consolidación democrática, para el caso mauritano podemos afirmar que el proceso de transición hizo un enorme

esfuerzo en este sentido. No solo los distintos procesos electorales convocados desde junio de 2006, con el referéndum para la reforma constitucional, hasta la celebración de las presidenciales en marzo de 2007, sino con el esfuerzo por mejorar las instituciones políticas. En primer lugar, cabe destacar que las distintas convocatorias electorales se organizaron y celebraron de una forma exitosa. La principal conclusión que se puede obtener tras las elecciones presidenciales (las últimas celebradas), es que las elecciones respetaron los principios de libertad, fueron limpias, transparentes, y asimismo se acató la voluntad de los ciudadanos trasladando fielmente los votos hacia el reparto de escaños o el nombramiento de los candidatos ganadores. En segundo lugar, en cuanto a las reformas institucionales, que se inscribieron también en el mismo proceso de transición, podemos destacar la creación del Comité Interministerial encargado de la Transición (cuya misión era supervisar, impulsar, programar y seguir el proceso para la instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación), la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la Alta Autoridad para la Prensa y el Audiovisual (HAPA) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE). Con esta enumeración pretendemos poner de manifiesto el interés y la voluntad de la junta militar de iniciar un proceso de cambio en el que estuvieran presentes instituciones capaces de gestionar estas transformaciones dentro de una lógica más consensuada.

De todas estas instituciones, la que ha desempeñado un papel más crucial y ha superado la evaluación ha sido la CENI. Es cierto que ha contado con un importante apoyo internacional por parte de la Unión Europea y de la Unión Africana, pero parece innegable que, a pesar de algunas deficiencias iniciales, ha sido capaz de poner en marcha el complejo mecanismo de unas elecciones (municipales, generales y presidenciales, así como el referéndum) en un tiempo récord y empezando casi desde cero, puesto que tuvo que formar a los observadores nacionales, organizar los colegios, distribuir las tarjetas de votantes, e implementar todas las exigencias de la UE para garantizar la transparencia y la limpieza de las elecciones. Por último, en lo relativo a las reformas de carácter normativo, podemos destacar, en primera instancia, la aprobación de la reforma constitucional en un referéndum celebrado el 25 de junio de 2006, y que contó con una alta tasa de participación (más del 76%). Además, se elaboraron una serie de documentos de carácter interministerial sobre los siguientes aspectos: la buena gobernanza y la democrati-

zación, la reforma de la justicia y la administración, así como la reforma sobre la legislación de la prensa. En julio de 2006, precisamente, se aprobó la nueva legislación sobre la libertad de prensa, si bien persiste el monopolio estatal sobre la televisión y la radio.

Como decimos, este esfuerzo por instaurar el gobierno de las leyes y por mejorar las estructuras estatales así como su legislación quedó patente durante el período de transición. Sin embargo, esta primera condición para hablar de democracia y de consolidación del Estado puede ser matizada si lo relacionamos con la dimensión del ámbito del Estado, a la que habíamos definido como la capacidad de implantación de la institución estatal sobre la totalidad del territorio bajo su jurisdicción. La celebración de las elecciones ha ayudado a promocionar la presencia del Estado en el territorio y garantizar la representatividad de los ciudadanos que habitan las zonas más alejadas. Pero si echamos la vista atrás en el tiempo y ampliamos nuestra perspectiva más allá de los procesos electorales podemos observar cómo las sucesivas sequías de las décadas de 1970 y 1980 contribuyeron, más que cualquier otro proceso, a aumentar notablemente la implantación de las administraciones del Estado en el territorio mauritano. En efecto, en diversas ocasiones, Villasante-de Beauvais (1991, 1998) y Leservoisier (1994) han demostrado que el impacto de esas prolongadas sequías fue determinante en el proceso de sedentarización masivo seguido por la población mauritana en Nouakchott y las ciudades de la llamada *Route de l'Espoir* (que une la capital con el extremo oriental del país), sedentarización que permitió a muchos ciudadanos entrar en contacto por vez primera con los diversos representantes del Estado. Por otra parte, la gestión de la ayuda alimentaria internacional durante esos períodos, gestionada por las administraciones mauritanas, intensificó aún más una implantación que hasta entonces era, en la mayor parte de los casos, simplemente nominal. En cualquier caso, tal y como hemos señalado con anterioridad, el proceso de consolidación del Estado no ha comportado la relegación del orden tribal a la marginalidad política, sino todo lo contrario.

En estos últimos años, la comuna se ha convertido en un feudo tribal. Ante el posible descontrol, a partir de 1997 el entonces presidente de la República, Maauya ould Sid'Ahmed Taya, reaccionó. Aceptó en definitiva la organización tribal como un modo legítimo de acción en la arena política moderna, pero en cambio rechazó la intervención de otras identidades primordiales en la vida política, en particular la etnia. El sis-

tema tribal, omnipresente entre la población árabo-beréber (*bidan*), grupo étnico dominante en el país, había estado sumamente activo en la escena política prácticamente desde la Independencia en 1960, aunque ciertamente se mantuviera en la clandestinidad durante el régimen de Ould Daddah, de carácter centralista y modernizador. Sin embargo, los sucesivos regímenes militares acaecidos entre 1978 y 1984, y sobre todo la llegada al poder de Ould Taya en 1984, supusieron una actualización de los códigos tribales, cuyo léxico pasó desde entonces a formar parte del lenguaje político mauritano (López Bargados, 1999, 2005). En todo caso, la lógica aplicada por Ould Taya desde su ascenso al poder es transparente: si permitió la conversión de la tribu (*qabila*) en un actor político clave fue justamente porque esa forma de organización estaba esencialmente presente en medios *bidan*, mientras que la población negro-mauritana (wolof, toucouleur, peul y soninké) estaba por el contrario organizada en etnias. El rechazo de toda forma de organización política basada en el regionalismo, la identidad étnica o la confesión religiosa, rechazo sancionado por la reciente Constitución del 25 de junio de 2006 (López Bargados, 2007), va en este sentido: impedir la conformación de partidos políticos de composición étnica y cerrar el paso a los movimientos islamistas, al tiempo que se soslaya el peso ejercido por las lealtades tribales *bidan*.

Durante el régimen de Ould Taya, fue precisamente la combinación del tribalismo político con el autoritarismo, característico por otra parte de la mayor parte de sistemas políticos africanos, lo que provocó la deriva inexorable del régimen multipartidista salido de la reforma constitucional de 1991 hacia una suerte de monopartidismo *de facto*, hecho señalado por multitud de observadores (Ould Ahmed Salem, 2004; Ould Cheikh, 2006). En efecto, a pesar de la organización puntual de las elecciones presidenciales, senatoriales y legislativas, la constante manipulación de los comicios a favor del partido oficialista, el PRDS, y la constatación de que la única manera de extraer un beneficio directo en forma de cargo consistía en sumarse a la mayoría presidencial, provocó que la élite política mauritana se decantase paulatinamente por esa opción, reduciendo cada vez más los apoyos ofrecidos a la oposición. Es, en definitiva, la victoria del *homo manducans* del que hablase Bayart (1996): las declaraciones de apoyo sin condiciones al régimen, las adhesiones inquebrantables al líder, proliferaron en un contexto de depredación del aparato del Estado que hacía y hace aparecer a quienes se mantienen fir-

mes ante la tentación como unos incapaces que no merecen la confianza que en ellos deposita su red clientelar.

En este sentido, la creación, tras las elecciones presidenciales de marzo de 2007, del Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo, que aglutina los políticos independientes alrededor de una mayoría presidencial, la de Sidi ould Cheikh Abdallahi, cada vez más amplia, hacía entrever la puesta en marcha de esa misma lógica que dotó de estabilidad al régimen de Ould Taya durante veinte años: la constitución, en torno al hombre fuerte, de una élite política sumisa cuya lealtad se cimenta sobre la depredación común del aparato del Estado, y que acaba por convertir las fuerzas de oposición en simples etiquetas carentes de influencia. El pluralismo político devenido simulacro se consuma cuando constatamos que las estrategias predatorias en el seno de la administración no son únicamente toleradas, sino en cierto modo consagradas por el uso y el pragmatismo de una población que hace de esos *homo manducans* una suerte de héroes populares, encarnación misma del éxito social. Es así que se ponen en juego esquemas simbólicos que «feminizan» al hombre íntegro y respetuoso con la ley, tachándolo de incompetente, mientras se enfatiza la extrema virilidad y prestigio que se asocia a quien manipula la ley en su provecho y el de sus allegados (Ould Ahmed Salem, 2001).

La segunda condición que habíamos propuesto en nuestro análisis sobre la relación de la construcción del Estado y la consolidación democrática es el respeto de los derechos humanos. En Mauritania, esta es la gran asignatura pendiente. Durante el período de transición y tras negociaciones con los líderes de la oposición, incluidos los exiliados, se encarceló a los presos de carácter político. Sin embargo, la gran lacra de Mauritania es lo que se denomina las secuelas de la dominación extrema. La esclavitud está formalmente abolida desde 1959, aunque en 1981 se volviese a legislar sobre esta materia y en los últimos meses se hayan introducido diversas medidas judiciales destinadas a favorecer la aplicación de un marco sancionador que hasta el momento había sido poco menos que papel mojado. Estos esfuerzos reiterados por prohibir la esclavitud, y especialmente los desplegados durante el régimen de Ould Taya para negar su existencia, nos demuestran que la esclavitud, o al menos sus efectos sobre las relaciones estatutarias entre las personas, constituyen todavía una problemática cuyos efectos están lejos de desaparecer en Mauritania (Bensaâd, 2006: 12).

La tercera característica para la implantación de una democracia y

un Estado consolidados, el grado de satisfacción por parte de los poderes públicos de las demandas de los ciudadanos, podemos relacionarla con la dimensión de la legitimidad y también con la de la capacidad del Estado para prestar esos servicios de una forma eficiente. La satisfacción de las demandas queda siempre menos cuestionada en el ámbito rural que en el urbano, a pesar de que el primero esté mucho peor abastecido. Las ciudades, en general, suelen ser más críticas hacia los poderes públicos, a pesar de gozar de la mayor parte de servicios públicos que se pueden encontrar en Mauritania. Pero lo que nos interesa resaltar a la hora de hablar de satisfacción de los ciudadanos es distinguir entre la legitimidad institucional y la legitimidad por resultados. La primera se refiere a la aceptación de la autoridad del Estado porque se asumen unos valores socialmente aceptados, mientras que la legitimidad por resultados justifica la autoridad y el respeto al poder por los productos que genera, por los rendimientos que ofrece a los ciudadanos.

Mauritania, tras el período de transición, es un caso en el que se puede comprobar cómo ha prevalecido la legitimidad institucional sobre la de los rendimientos; es justamente eso lo que ha permitido la apertura de un período (2005-2008), en donde se han podido realizar los cambios normativos e institucionales que señalábamos al principio, así como el traspaso de poder desde la junta militar a las instituciones representativas electas. La destitución de Ould Taya por los propios militares, el compromiso de estos de llevar a cabo un proceso de transición hacia la democracia y el cumplimiento de sus promesas (reformas institucionales, no presentarse a las elecciones y retirarse de la política, ceder el poder a quien lo ganase limpiamente en las urnas), es lo que ha permitido reforzar la legitimidad institucional del Estado y del régimen. La organización de las distintas elecciones y la participación de diferentes instituciones públicas en su desarrollo han puesto de manifiesto la capacidad de los empleados públicos para poner en marcha la compleja maquinaria electoral. Por primera vez, no se había caído en el círculo vicioso que perjudicaba la consolidación democrática, en el que las promesas de apertura y cambio, finalmente, quedaban en papel mojado (como ya ocurrió, tras la tercera ola de democratización, en la década de 1990, con los proyectos aperturistas de Ould Taya). En cualquier caso, los méritos del proceso de consolidación democrática quedaban en entredicho para el grueso de la población ya que no percibían de manera ostensible los beneficios de los cambios institucionales. Más allá de las promesas de una mejora

del nivel de vida derivada de las rentas petrolíferas, promesas que ya se han revelado injustificadas ante la modestia de la producción de los yacimientos mauritanos, lo que los mauritanos sufrían hasta el momento como fruto de la consolidación del proceso democrático era un aumento generalizado de los precios de los bienes de primera necesidad y la recuperación de las prácticas cotidianas de extorsión. En esas condiciones, resulta lógico que los ciudadanos se interroguen sobre la necesidad de un proceso epidérmico de renovación de las élites sin reflejo en la llamada economía real. La condición fantasmagórica del proceso de transición y consolidación democrática es percibida con crudeza y realismo por parte de la mayoría del pueblo mauritano: como una manera de conservar el control del poder por parte de unas élites que renegocian su posición, mediante una acumulación de legitimidad, ante los principales actores del sistema internacional.

La última característica, que nos interesa resaltar y que está relacionada también con la capacidad del Estado como dimensión fundamental de este, es el control de la corrupción. Este es un tema correoso en el que se hace difícil dar una respuesta única. Cuando se les pregunta a los mauritanos sobre su relación con los poderes públicos, rara es la ocasión en que no reconocen que están obligados a hacer algún regalo o prebenda para la obtención de un permiso, un documento o la resolución de un acto que, por un lado, es una obligación para el funcionario, y por otro, un derecho para los ciudadanos. La corrupción es un fenómeno generalizado en las instituciones públicas mauritanas, y además sigue formando parte de los grandes objetivos de la mejora de la gobernanza por el propio país y también por instituciones internacionales como el Banco Mundial. No obstante, la profunda operatividad de la «economía moral de la corrupción» y la ductilidad de un sistema político espectacularizado y marcado por una discrepancia flagrante entre las constricciones internacionales que obligan a defender unas políticas que la realidad cotidiana exige incumplir sistemáticamente, auguran dificultades para todo intento de poner freno a unas prácticas que, de modo general, la sociedad no estigmatiza (Blundo, 2007).

Por tanto, nuestra conclusión es que en el período de transición (2005-2008), se mostró la capacidad institucional y la voluntad política del Estado para consolidar el régimen democrático (especialmente a través de los procesos electorales), y la construcción de un Estado de derecho y que se pusieron las bases normativas e institucionales para que esto

fuera una realidad. Otra cuestión ha sido el escaso calado de estas reformas en la vertebración social y política del país y el grado de seguimiento que tuvieron estas medidas por el gobierno de Ould Zeidane y por el presidente de la República depuesto, Ould Cheikh Abdallahi, a pesar de que gozaban de toda la legitimidad pues acababan de ser elegidos, respetando los cánones liberales de la democracia representativa.

Epílogo

En el momento en que se cierra este capítulo, un nuevo golpe de Estado ha sacudido Mauritania. El 6 de agosto de 2008, un sector importante del ejército, comandado por el general Mohammed ould Abdelaziz, verdadero hombre fuerte del país, impulsor principal del anterior golpe de Estado que llevó al despliegue de un proceso de transición democrática considerado modélico, y miembro de la misma tribu *bidan* que Ely ould Mohamed Vall, los *Awlad Bu Sbaa*, ha arrestado al presidente Sidi ould Cheikh Abdallahi, al primer ministro Yahya Ould Ahmed Waghf, y ha puesto fin, no sabemos si de manera definitiva, al régimen constitucional. Una vez más la lógica poscolonial, la pugna faccional en el seno de las élites y las adscripciones tribales y familiares parecen imponerse a la teórica impersonalidad de unas instituciones emanadas de un proceso que, en Mauritania, resulta tan abstracto como extraño. De nuevo, el sultán parece haber dado un golpe de autoridad para ejercer su mando sobre el país. Aunque en estos momentos es incierto el desenlace de tales acontecimientos, el nuevo *putsch* militar nos invita a reflexionar sobre la naturaleza espectral de los llamados «procesos democráticos» en el continente africano y sobre las dificultades que las élites primarias mauritanas encuentran para desenvolverse en una lógica política que en definitiva es exógena e hipócrita, pues viene impuesta por una comunidad internacional más preocupada por la salvaguarda de sus intereses nacionales que por las garantías reales de que el cambio político sea irreversible o, cuando menos, profundo. Como puede deducirse de los hechos ocurridos estos días, en la República Islámica de Mauritania, el movimiento parece ser, como decía el sabio Parménides, una mera ilusión.

Bibliografía

- Bayart, Jean-François (1996), *L'illusion identitaire*, Fayard, París.
- (1999), *El Estado en África: la política del vientre*, Bellaterra, Barcelona.
- Bayart, J.-F., P. Geschiere y F. Nyamnjoh (2001), «Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique», *Critique Internationale*, n° 10 (1), pp. 177-194.
- Bensaâd, Ali (2006), «Mauritanie, territoire de marges et de liens», *Maghreb-Machrek*, n° 189, otoño, pp. 7-28.
- Bisson, Vincent (2006), «Ville et pouvoir en Mauritanie: un instrument politique pour intégrer l'État tribal», *L'Année du Maghreb, 2005-2006*, pp. 337-348.
- Blundo, Giorgio (2007), «Graisser la barbe». *Mécanismes et logiques de la corruption en Mauritanie*, Nota de síntesis, Delegación de la Comisión Europea en Mauritania.
- Bratton, Michael y Eric Chang (2006), «State Building and Democratization in Sub-Saharan Africa: Forwards, Backwards, or Together?», *Comparative Political Studies*, vol. 39, n° 9, pp. 1059-1083.
- Ceuppens, B. y P. Geschiere (2005), «Autochtony: local or global? New modes in the struggle over citizenship in Africa and Europe», *Annual review of anthropology*, vol. 34, pp. 385-407.
- Clausen, Ursel (2000-2001), «Chronique 2000: Une politique de censure et de répression permanente de l'opposition», *Annuaire de l'Afrique du Nord*, vol. XXXIX, pp. 309-344.
- Comité interministériel chargé de la bonne gouvernance (2006), *Rapport définitif*, República Islámica de Mauritania, noviembre de 2005, www.mauritanie.mr/fr/RapportsCM/bonneGouvernance.pdf.
- Comité interministériel chargé du processus de transition démocratique (2005), *Rapport définitif*, República Islámica de Mauritania, noviembre de 2005, www.mauritanie.mr/fr/RapportsCM/rapport-definitif-transition.pdf.
- Commission nationale consultative pour la reforme de la presse et de l'audiovisuel (2006), *Rapport Général provisoire et Annexes*, Nuakchott, marzo de 2006. www.mauritanie.mr/fr/RapportsCM/rapportfinalCommissionenfrancais.pdf
- Département économique et social. FAO (2004), Rapport spécial. Mission FAO/PAM évaluation des récoltes et des disponibilités alimentaires en Mauritanie, axée plus particulièrement sur les pertes dues aux criquets pèlerins, <http://www.fao.org/docrep/007/j3970j3970f00.htm>. (consultado el 18 de agosto de 2006).
- Destremau, Blandine y Philippe Tanguy (2006), «Projet de régularisation et création d'un marché foncier à Nouakchott, Mauritanie: Que sont les pauvres devenus?», *Maghreb-Machrek*, n° 189, otoño, pp. 111-124.
- Hochman, Dafna (2007), «Divergent Democratization: The Paths of Tunisia,

- Morocco and Mauritania», *Middle East Policy*, vol. XIV, n° 4, invierno, pp. 67-83.
- Jourde, Cédric (2007), «The International Relations of Small Neoauthoritarian States: Islamism, Warlordism, and the Framing of Stability», *International Studies Quarterly*, n° 51, pp. 481-503.
- Leservoisier, Olivier (1994), *La question foncière en Mauritanie*, L'Harmattan, París.
- Levine, Charles, H. (1999), «La decadencia de las organizaciones y la Administración de recortes», en Jay Shafritz y Albert Hyde, *Clásicos de la Administración pública*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Lonsdale, J. (2000), «Etnicidad moral y tribalismo político», *Nova Africa*, n° 8, pp. 37-58.
- López Bargados, Alberto (1999), «La tribu ante los dilemas de la modernización. La democracia como factor de retribalización en Mauritania», *Studia Africana*, n° 10, pp. 9-22.
- (2001), «Ni blanco ni negro, sino gris. Los proyectos emancipatorios del colectivo hrâtín en la sociedad mauritana contemporánea», en D. Marre y M. Nash, eds., *Multiculturalismos y género*, Bellaterra, Barcelona, pp. 195-218.
 - (2003), *Arenas coloniales. Los Awlad Dalim ante la colonización franco-española del Sáhara*, Bellaterra, Barcelona.
 - (2005), «Primos públicos y ancestros privados. Consideraciones sobre la noción de «tribu» en la sociedad mauritana contemporánea», en A. Roca, ed., *La revolución pendiente. El cambio político en el África negra*, Publicacions de la Universitat de Lleida, pp. 213-236.
 - (2007), «Mauritania, ¿en marcha hacia la democracia? Variaciones sobre una transición espectral», en F. Iniesta, ed., *La frontera ambigua. Tradición y democracia en África*, Bellaterra, Barcelona, pp. 95-126.
- Marchesin, Philippe (1992), *Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie*, Karthala, París.
- Maxted, Julia (2006), «Exploitation of Energy Resources in Africa and the Consequences for Minority Rights», *Journal of Developing Societies*, n° 22 (1), pp. 29-37.
- Mbembe, Achille (2001), *On the postcolony*, University of California Press, Berkeley.
- Mint Ainina, Hindou (2000-2001), «Chronique 2001: La politique de censure des parties de l'opposition se consolide et le thème tabou de l'esclavage est devant de la scène politique», *Annuaire de l'Afrique du Nord*, vol. XXXIX, pp. 343-362.
- Mission d'observation elettorale. Union Européenne (MOE UE), Rapport final. Elections municipales, législatives 2006 et présidentielles 2007. Nouackchott marzo de 2007, http://www.eueommauritania.org/mauritania/MOE%

- 20UE%20Mauritanie_07_rapport%20final.pdf (consultado el 30 de junio de 2007).
- Mozaffar, Shaheen y James Scarrit (2005), «The Puzzle of African Party Systems», *Party Politics*, vol. 11, n° 4, pp. 399-421.
- Norris, H. T. (1986), *The Arab Conquest of the Western Sahara*, Librairie du Liban, Beirut.
- Olivier de Sardan, J.-P. (1996), «L'économie morale de la corruption en Afrique», *Politique Africaine*, n° 63, octobre, pp. 97-116.
- Ould Ahmed Salem, Zekeria (1999), «La démocratisation en Mauritanie, une "illusion" post-coloniale?», *Politique Africaine*, n° 75, pp. 131-146.
- (2000), «Une «illusion bien fondée»: la centralité de la mobilisation tribale dans l'action politique en Mauritanie», *L'Ouest Saharien*, vol. 2, pp. 127-156.
- (2001), ««Tcheb-tchib» et compagnie. Lexique de la survie et figures de la réussite en Mauritanie», *Politique africaine*, n° 82, pp. 78-100.
- (2004), «La démocratisation au concret», en Z. Ahmed Salem, dir., *Les trajectoires d'un État-frontière. Espaces, évolution politique et transformations sociales en Mauritanie*, CODESRIA, Dakar, pp. 301-331.
- Ould Cheikh, Abdel Wedoud (2006), «Les habits neufs du Sultan. Sur le pouvoir et ses (re)sources en Mauritanie», *Maghreb-Machrek*, n° 189, otoño, pp. 29-52.
- Ould Mohamedou, Mohammad-Mahmoud (2007), «Nouvelle production de sens en Mauritania: le coup d'État du 3 août 2005 et sa signification», *L'Année du Maghreb*, pp. 315-332.
- Taylor, Raymond (2000), «Statut, médiation et ambiguïté ethnique en Mauritanie précoloniale (xix^{ème} siècle). Le cas des Ahl al-Gibla et des Ahl Gannâr», en M. Villasante-de Beauvais, dir., *Groupes Serviles au Sahara. Approche Comparative à partir du cas des Arabophones de Mauritanie*, CNRS, Paris, pp. 83-95.
- Ulfelder, Jay (2005), «Contentious Collective Action and the Breakdown of Authoritarian Regimes», *International Political Science Review*, vol. 26, n° 3, pp. 311-334.
- Villasante-de Beauvais, Mariella (1991), «Hiérarchies statutaires et conflits fonciers dans l'Assaba contemporain», *Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée*, vols. 59-60, pp. 181-210.
- Villasante-de Beauvais, Mariella (1998), *Parenté et politique en Mauritanie*, L'Harmattan, Paris.

Los retos de Mauritania

Miguel Hernando de Larramendi

Mauritania, situado en la periferia del mundo árabe, actúa como país bisagra entre el Magreb y el África Subsahariana. Desde que Francia le concedió la independencia en 1960 el Estado mauritano ha tenido que hacer frente a la fragilidad de su estructura socioeconómica, así como a un entorno regional que inicialmente consideró su independencia como una maniobra del colonizador francés para preservar sus intereses económicos, en un territorio que durante mucho tiempo había formado parte del África Occidental Francesa (AOF).

La denominación oficial del Estado —República Islámica de Mauritania— refleja la voluntad de subrayar explícitamente el principal rasgo integrador de una población numéricamente reducida —3,1 millones de habitantes, pero étnicamente diversa—. El 70% de sus habitantes son arabobereberes, tradicionalmente pastores nómadas y comerciantes, y el 30% restante negromauritanos de varias etnias —toutcouleurs, peuhls, wolofs, soninké— tradicionalmente sedentarios a orillas del río Senegal. Las diferencias entre la comunidad arabobereber, que ha monopolizado los centros de decisión política desde la independencia, y las diferentes etnias africanas han sido recurrentes en temas como la educación y la política de arabización, la orientación exterior del Estado —hacia el mundo árabe o hacia el África Subsahariana— o la distribución de los recursos económicos. Las nuevas tierras irrigadas en la orilla del río Senegal tras la construcción de presas reguladoras de su cauce constituyeron, por ejemplo, el detonante de los violentos enfrentamientos en 1989 entre la población arabobereber y negroafricana en Mauritania y Senegal. El retorno y reinserción de los refugiados negro mauritanos que viven en Senegal desde la represión llevada a cabo por el ejército mauritano —cues-

tión conocida como el *passif humanitaire*— es una cuestión cuya solución definitiva es compleja pero necesaria para reforzar la integración nacional.

A este débil grado de integración nacional se une la escasez de recursos económicos de un país extenso pero fundamentalmente desértico. La economía mauritana se basa en la explotación y exportación de recursos naturales como el mineral de hierro y cobre, la pesca y desde febrero de 2006 el petróleo. Las expectativas generadas por la puesta en explotación de los yacimientos de petróleo no se han visto satisfechas hasta el momento aunque está previsto que los ingresos netos procedentes del petróleo se sitúen aproximadamente en un 3% de promedio del PIB no petrolero para dispararse a partir de 2012 alcanzando un 10% del PIB no petrolero. A estos recursos se une la ayuda extranjera que desde 1974 ha supuesto de media una quinta parte del PIB. La gestión de estos recursos se realiza a través de un sistema controlado por un número reducido de élites que aprovechan las redes de parentesco para reproducir un sistema clientelar que dificulta la creación de riqueza y alimenta la corrupción. El proceso de consolidación del Estado mauritano no ha supuesto la desaparición del sistema tribal, el cual sigue siendo un actor clave para comprender las dinámicas políticas, económicas y sociales del país.

La fragilidad del Estado mauritano ha contribuido a reforzar su satelización en el espacio regional. El Estado mauritano, que no fue reconocido hasta finales de los años sesenta ni por Marruecos ni por gran parte de los países árabes, concentró sus esfuerzos bajo el impulso de su primer presidente, Mokhtar ould Dadah, en intentar obtener el reconocimiento de la sociedad internacional. En su frontera norte el hecho de que Marruecos reivindicara Mauritania como parte integrante de su territorio, contribuyó a que la política exterior mauritana estuviera centrada en intentar crear un Estado tapón que le separara geográficamente de Marruecos. Es en este contexto geopolítico donde hay que insertar la sorprendente alianza entre los hasta entonces antagonistas —Marruecos y Mauritania— para repartirse el Sáhara Occidental tras la retirada española del territorio en febrero de 1976. Con la anexión de Río de Oro, la zona sur del antiguo Sáhara español, el régimen mauritano aspiraba a reforzar su seguridad. El desencadenamiento del conflicto armado y el hecho de que el Frente Polisario concentrase entre 1976 y 1978 sus acciones militares sobre Mauritania, más vulnerable que Marruecos, agudizó las contradicciones internas entre la mayoritaria comunidad arabobereber

—próxima cultural, lingüística y étnicamente a la población del Sáhara Occidental— y la comunidad negro-mauritana indiferente ante un oneroso conflicto que amenazaba con poner en peligro los inestables equilibrios del Estado, obligando al régimen mauritano a buscar el apoyo militar de Francia y Marruecos para hacer frente a los ataques del Frente Polisario. Tras el derrocamiento del presidente Ould Dadah y la retirada de Río de Oro en 1979, los sucesivos gobiernos mauritanos pese a sus diferentes orientaciones ideológicas y afinidades regionales han coincidido en la defensa de una neutralidad en un conflicto del que Mauritania no se siente parte.

Las relaciones con el régimen iraquí de Saddam Husayn durante la invasión de Kuwait en 1990 situaron al régimen de Ould Taya en una posición de aislamiento internacional, en un contexto en el que las tensiones interétnicas se agudizaban en el país. El viraje internacional de Ould Taya mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y el apoyo a la «guerra contra el terrorismo» en el noroeste de África lanzada por la Administración de Bush, alteraron de nuevo el equilibrio geopolítico siendo uno de los factores que aceleraron la caída del gobierno de Ould Taya en 2005.

La vida política mauritana ha ido acompañada desde el derrocamiento de Ould Daddah por un proceso de militarización acentuado durante los gobiernos de Ould Taya (1984-2005). La combinación entre autoritarismo y tribalismo político ha caracterizado este período dificultando la consolidación de la interesante experiencia que el país ha vivido entre 2007 y 2008 tras la elección democrática del presidente Ould Cheij Abdellahi.

Cincuenta años después de su independencia Mauritania afronta importantes desafíos. Entre estos retos se encuentra el reforzamiento de la cohesión social, la reducción de la pobreza y la creación de mecanismos de reparto del poder económico y la representación política entre los diversos grupos étnicos y culturales como condiciones necesarias para afrontar, con éxito, los desafíos de la democratización y el desarrollo.

5. El Egipto contemporáneo, entre reformas y continuidad

*Athina Kemou y Bárbara Azaola**

La historia del Egipto moderno está íntimamente ligada a la construcción del Estado egipcio. Según diversos historiadores, la llegada de Muhammad Ali como gobernador del sultán otomano en 1805 puede ser considerada como el nacimiento del «Estado moderno» en Egipto.¹ En ese momento es cuando comenzó a crearse un aparato de Estado que impulsó la reforma del ejército y de la administración en un proceso en el que Ayubi sitúa la génesis de la idea de «egipcianidad» a través de la institución del Estado (Ayubi, 1998). Desde finales del siglo XIX, y a pesar de las limitaciones impuestas por la dominación colonial, ha existido una tradición de vida parlamentaria que ha ayudado a perfilar el paisaje político contemporáneo egipcio. Tras la independencia del país en 1922 el proyecto liberal continuó hasta el golpe militar de los Oficiales Libres en 1952.

Egipto ha sido cuna de tres grandes ideologías que han tenido una gran influencia en el mundo arabomusulmán: el islamismo, el panarabismo y el liberalismo (Martín Muñoz, 2006: 4). De la experiencia liberal egipcia se pasó a un nacionalismo árabe representado en Naser a partir del pacto de Bagdad. El ideario se fue transformando en un nacionalismo solidario con movimientos de liberación árabes, que llevó a unir pero al mismo tiempo a dividir profundamente el mundo árabe (Kemou, 2007).

A mediados de los setenta, bajo el mandato de Sadat, se produjo la transformación de un régimen de partido único a un sistema pluripartidista limitado. Este cambio político se produjo al tiempo que se aplicaba

* Quisiéramos agradecer las informaciones y comentarios aportados por Amira Howeid, Ibrahim El-Houdaiby, Wael Khalil, Basel Ramsis y Lorenzo Gabrielli.

su política de puertas abiertas, *infitah* (apertura), una orientación económica que defendía el aumento de las exportaciones, la inversión extranjera, el papel del sector privado y la liberalización del comercio. La confluencia entre las dos orientaciones políticas, socialismo y liberalismo, produjo la emergencia de una élite que integró a la mayor parte de la élite burocrática, de los oficiales y la burguesía urbana del incipiente sector privado.

Con la toma de poder de Hosni Mubarak, en 1981, el multipartidismo de fachada se mantuvo así como las políticas económicas liberales, más aceleradas todavía, pero sin dar paso a una apertura del sistema. El régimen sigue controlando la mayor parte de los recursos de poder y los procesos de acumulación a pesar del descontento popular y de la retórica internacional por una democratización del país.

Los fundamentos de las élites

En el Egipto contemporáneo existen dos élites primarias principales: por un lado, Mubarak y sus aliados que constituyen el régimen y que controlan, directa o indirectamente, la casi totalidad de los recursos de poder egipcios; por otro, la organización de los Hermanos Musulmanes que controla el discurso ideológico-religioso. El resto de los actores mantiene un papel secundario en la escena egipcia y representa a las élites secundarias, ya que sus capacidades de poder no son autónomas sino que están determinadas por sus relaciones con las élites primarias.

Es importante subrayar que la clasificación de las élites que viene a continuación no significa que estas controlen, completa o exclusivamente, un determinado recurso, sino que esta división quiere subrayar la principal fuente de poder de cada una de las élites.

El Régimen Mubarak

El campo político egipcio está dominado por las élites vinculadas al Partido Nacional Democrático (PND). Este partido, presidido por el Presidente de la República, Hosni Mubarak, es el heredero directo de la Unión Socialista Árabe (USA), partido único creado por Naser en 1962 en el

que se integraron los diversos sectores que apoyaron el golpe de los Oficiales Libres en 1952.

El proceso de reformas iniciado por Sadat a mediados de los setenta se tradujo en la reconversión de la Unión Socialista Árabe, que aunque cambió su nombre por el del PND continuó siendo la fuerza política dominante en un escenario pluripartidista. Tras la llegada al poder de Hosni Mubarak en 1981, el proceso de cambios en el partido continuó. A las élites vinculadas al poder, burócratas de Estado, cuerpos de seguridad y altos oficiales del ejército, se han incorporado nuevos actores procedentes de la burguesía nacida al calor de las reformas liberalizadoras del *infitah*.

La principal fuente de poder de Mubarak y sus aliados se encuentra en el control del aparato estatal. El poder ejecutivo y legislativo está monopolizado por el presidente gracias a un sistema presidencial centralizado y a una ley de emergencia que entró en vigor tras el asesinato del presidente Sadat en 1981 y que en 2008 todavía no ha sido derogada. Por otra parte, la Ley 66/1943, enmendada por la Ley 35/1984, declara la independencia del poder judicial, estableciendo sin embargo una serie de restricciones.² En paralelo, el PND controla las dos cámaras del parlamento egipcio, la Asamblea del Pueblo (*Maylis Al-Sha'ab*) y la Asamblea Consultiva (*Maylis Al-Shura*), aunque desde finales de los años setenta ha habido otros grupos políticos con representación parlamentaria.

El control sobre la administración se ha visto favorecido por una política de expansión del empleo público que se inició durante el nasserismo y permitió la incorporación al mercado laboral de nuevos licenciados que tenían asegurado un puesto de trabajo en la administración al concluir sus estudios universitarios.³ Para la puesta en marcha de esta política fue creado en 1962 el Ministerio de Mano de Obra e Inmigración. Aunque esa garantía desapareció *de facto* en 1990, en un país con una tasa de paro elevada —entre el 10% y el 20% dependiendo de las fuentes—, y donde la pobreza afecta al 43,8% de sus habitantes, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la posibilidad de conseguir un trabajo, sobre todo en el sector público, continúa siendo un privilegio.

Así, el régimen de Mubarak se apoya, para mantener una relativa tranquilidad social y cierto control del pueblo, en los funcionarios y sus redes familiares, así como en el ejército. A pesar de las presiones de los organismos financieros internacionales, se mantiene un sistema de subvenciones a productos alimentarios de primera necesidad como otro de

los instrumentos del régimen para evitar movilizaciones sociales. Entre 1981 y 1997 el porcentaje del gasto público destinado a estas subvenciones descendió del 13,9% al 5,6%. Tales prácticas, sin embargo, se han convertido en un handicap para el régimen egipcio, ya que este no es capaz de anular las subvenciones sin arriesgar su supervivencia.

El impulso de las recetas impuestas por parte de las instituciones de Bretton Woods y la política de reformas económicas del *infitah*, impulsada por el Presidente Sadat, tuvieron como consecuencia la emergencia de nuevos actores económicos vinculados al sector privado. Sadat primero y Mubarak después, han intentado ejercer su control sobre esta nueva élite económica cuya importancia ha aumentado considerablemente al abrigo de las políticas de privatización. En esta dirección se enmarca la adopción, en los años noventa, de una ley orientada a los hombres de negocios que les ha permitido presentar sus candidaturas a las elecciones legislativas sin necesidad de estar adscritos a ningún partido político. Ello ha hecho crecer el número de empresarios en el Parlamento egipcio de 7 en 1984 a 71 en 2000 (Said Aly, 2005).

El intento de liberalizar el mercado egipcio, acelerado en los años noventa, no supuso la desaparición total de las empresas públicas. Egipto asiste a un constante crecimiento de la burocratización.⁴ Mubarak, consciente de la importancia que para la estabilidad del régimen tiene el control sobre el sector público, ha sido capaz de combinar políticas liberalizadoras impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la preservación de un sector público todavía importante aunque ha ido reduciendo sus dimensiones en los últimos años. El sector público sigue teniendo peso relevante en algunos sectores de la economía egipcia como en parte del sector industrial, el agrícola, el petrolífero o la construcción. Por su parte, la política de privatizaciones hizo crecer enormemente el peso del sector privado en la economía egipcia, que en 2000 suponía el 73%.

Esas dinámicas, burocratización y liberalización, dieron como resultado la convivencia de dos sistemas paralelos: uno que se refiere a la gran maquinaria del Estado, otro a sectores del capital privado. De tal manera, la frontera entre los dos sectores queda ambigua, algo que determina una relación estrecha entre las respectivas élites, visto que la prosperidad de las élites económicas del capital privado depende de sus buenas relaciones con el régimen político.

Otro recurso del que se ha servido el régimen de Mubarak ha sido la gestión y distribución clientelar de la ayuda procedente del exterior, principalmente estadounidense y de los países del Golfo. Egipto es el segundo receptor de ayuda estadounidense después de Israel, mucha de ella militar.

El control de la prensa y de los principales medios de comunicación ha sido utilizado por el régimen desde el período naserista como herramienta para asegurar el control de la sociedad. La televisión y la radio egipcias son en su casi totalidad de titularidad estatal. Sin embargo, el monopolio de la información visual se rompió en Egipto con la introducción del canal vía satélite Al Jazeera en la década de los noventa. Este canal, financiado por el emir y la familia real de Qatar, fue ganando espacio en el sector audiovisual, no solo egipcio sino de todo el mundo árabe, y ha sido considerado como la primera televisión «libre» en el mundo árabe por sus programas de debates abiertos a temas políticos y sociales (Guaaybess, 2005).

Los cambios introducidos por Al Jazeera alarmaron a los gobiernos árabes, que ante la ineficacia de unas medidas nacionales para luchar frente a un medio transnacional, se reunieron en el marco de Liga Árabe, en febrero de 2008 en El Cairo, para coordinar sus acciones ante el «peligro» de la información emitida por esta cadena. Los 22 ministros de Comunicación reunidos, con la excepción del libanés y el qatarí, adoptaron un protocolo según el cual las cadenas no pueden «ofender a los líderes, ni los símbolos nacionales o religiosos» ni «atentar contra la paz nacional, la unidad nacional, el orden público o los valores tradicionales».⁵

En un intento por recuperar la audiencia perdida por el canal panárabe, Mubarak lanzó en 1998 el primer satélite árabe propio, el *Nilesat 101*, que se amplió a *Nilesat 102* en 2000 y que en 2007 emite cerca de 400 canales. A las cadenas por satélite hay que añadir los canales privados aparecidos en 2001, como Dream TV —perteneciente al empresario Ahmed Bahgat y participada por la Unión de Radio y Televisión Egipcias URTE—, Al Mehwar —cuyo capital pertenece a un conglomerado de hombres de negocios— o Rotana, que han conseguido esquivar cierto control gubernamental.

Respecto a la prensa escrita, desde la época de Naser el régimen siempre ha ejercido un fuerte control sobre ella. A pesar de la pluralidad de la prensa escrita, el régimen de Mubarak no ha dudado en recurrir a

distintos tipos de tácticas para asegurarse el control de la información, desde aplicar la legislación que permite el encarcelamiento de periodistas por difamar al presidente y su familia, a imponer la censura sobre temas considerados tabú y el cierre de periódicos por «atentar contra la paz social» o «poner en peligro la seguridad nacional», amparándose en la ley de emergencia.

La educación es otro de los recursos utilizados por el régimen para reforzar su control sobre la sociedad egipcia. Egipto fue uno de los países árabes pioneros en el desarrollo de una infraestructura universitaria moderna, y a comienzos del siglo XXI es uno de los países de ingresos medios que más ha aumentado el número de estudiantes de enseñanza superior. La universidad egipcia ha sido un espacio de movilización y contestación política que el régimen siempre ha buscado tener bajo control. Sus aulas y pasillos constituyen un buen reflejo del clima político que se vive a escala nacional (Azaola, 2007a). La titularidad pública de todos los centros educativos durante el período naserista, garantizando la gratuidad a todos los niveles de la enseñanza, se vio afectada con la aparición de escuelas y universidades privadas, estas últimas bajo el mandato de Mubarak.⁶ Con la creación de diez nuevas universidades privadas durante la última década, se ha intentado satisfacer la demanda de cuadros por parte del sector privado.

Las élites políticas

El proceso de apertura política iniciado por Sadat a partir de 1976 se vio acompañado de la legalización de ciertos partidos tradicionales que habían sido prohibidos bajo el naserismo, como el *Wafd*, así como de otras fuerzas políticas de tendencia liberal o de izquierdas. En 2008 existen en Egipto, además del PND, 23 partidos legalizados, de los cuales solo una parte ha tenido representación parlamentaria.⁷

Los partidos políticos tradicionales no tienen peso significativo en la sociedad egipcia y su función es más bien simbólica, justificativa de un sistema pluripartidista. Existen partidos de oposición de distintas tendencias que han logrado contar con representación parlamentaria, como el Partido Naserista Democrático, el izquierdista Tayammu y los partidos de tendencia liberal como el tradicional Neo Wafd o el creado en 2004, Al Ghad.

Estos partidos políticos legalizados cuentan con sus propios órganos de prensa, que constituyen una herramienta relativamente útil para difundir su ideología entre la población, teniendo en cuenta que la impresión y la difusión de estos periódicos se hacen con subvenciones del Estado, hecho que restringe aun más la capacidad de «oposición» al régimen. El periódico *Al Wafd* es el más vendido de entre estos, aunque solo llegue al 3,4% de la población. Otra prensa de partidos la configuran *Al Ahaly*, del partido Tayammu, *Al Araby*, del partido naserista o *Al-Shaab*, del Partido del Trabajo, que desde 1998 se edita solo en formato electrónico tras haber sido cerrada por el régimen la edición en papel.

Junto a los partidos legalizados existen otras fuerzas políticas, toleradas o reprimidas según la coyuntura. Las restricciones impuestas por la ley que regula la formación de partidos políticos en el país, unido a la falta de apoyo popular de los partidos políticos tradicionales, han creado las condiciones para que surjan nuevas formaciones que muchas veces representan coaliciones «atípicas» entre diferentes grupos de oposición.

La organización de los Hermanos Musulmanes (Al-Ikhwan al-Muslimun)⁸ representa la principal fuerza de oposición en la escena política egipcia. Su principal recurso de movilización se encuentra en una ideología religiosa moderada, que le proporciona un importante respaldo popular. Al mismo tiempo, disfruta de una relativa base económica, obtenida de sus seguidores en el país y en menor medida de fondos procedentes del exterior. Dicha capacidad económica permite a la hermandad financiar una intensa labor social con las clases más desfavorecidas.

Su dilatada implantación desde los años veinte ha permitido a los Hermanos Musulmanes estar presentes en casi todos los ámbitos de la vida del país. Algunos de sus seguidores forman parte del ejército, de la burocracia del Estado y del mundo empresarial, como es el caso de Yussef Nada, fundador del banco islámico Al Taqwa en 1988.

Las élites económicas

Egipto se considera también «la madre de la liberalización árabe» con una trayectoria de reformas económicas liberales iniciadas con el *infitah*, cuyo objetivo era ampliar las bases sociales de apoyo al régimen.

Bajo el mandato de Mubarak el sector privado ha ido ganando cada vez más peso. Sin embargo, el aparato estatal mantiene un papel desta-

cado en la economía egipcia. El proceso de liberalización es controlado por el régimen y está diseñado de tal forma que intenta no crear fricciones con los intereses de las élites estatales. Gracias a esta combinación, el régimen ha sido capaz de aplicar las reformas económicas preconizadas por los organismos financieros internacionales y de preservar, al mismo tiempo, su control sobre la distribución de los recursos.

La mayor parte de los actores del sector privado mantiene estrechas relaciones con el régimen. Algunos empresarios, además de contar con un fuerte poder económico, disfrutan del privilegio de formar parte del *establishment* político como miembros del Parlamento. El ejemplo de Osman Ahmed Osman, «el hombre que construyó la presa de Asuán», personifica la simbiosis entre el sector privado y el público a través de la compañía Arab Contractors.

El sector empresarial egipcio se agrupa en torno a diferentes organizaciones, como la Asociación de Empresarios de Egipto, la Federación de Cámaras de Comercio Egipcias y las Cámaras de Comercio Extranjeras en Egipto (americana, británica, alemana, francesa). Al margen de estas organizaciones corporativas se han creado otras estructuras mixtas conectadas con el exterior, que desempeñan un papel menos formalizado pero igualmente relevante, a través de un contacto directo con la cúpula del régimen. Algunos de los grandes empresarios tienen acceso directo a Mubarak a través del Consejo Presidencial Egipcio Americano, órgano consultivo establecido en 1995 para «profundizar en los negocios del sector privado entre Estados Unidos y Egipto, y en la apertura económica del país». Este órgano está formado por treinta de los principales hombres de negocios de ambos países con intereses en Egipto, designados por el propio Mubarak (Momani, 2003). En 2001, este Consejo se reestructuró y pasó a denominarse «Consejo de Negocios Egipcio Americano». En julio de 1997, Mubarak hizo nombrar como portavoz del Consejo a su hijo Gamal, asegurándose de esta forma un mayor control sobre este importante segmento del sector privado (Galal y Lawrence, 1998).

El sector turístico ha sido otro de los ámbitos económicos en los que el sector privado ha demostrado un mayor dinamismo. Pese al estancamiento que conoció en la década de los noventa como consecuencia de los ataques terroristas de grupos islamistas radicales, está conociendo un momento de expansión tal y como muestran las cifras: en 2007 el país había sido visitado por casi diez millones de personas que dejaron en el país más de ocho billones de dólares.⁹

Las élites religiosas

Según la Constitución de 1971, vigente hoy en día, el islam es la religión del Estado egipcio, aunque el mismo texto reconoce la libertad de creencia y de culto.¹⁰ Los coptos constituyen la comunidad religiosa minoritaria más importante del país. Dependiendo de las fuentes, su número oscilaría entre el 5% y el 10% de la población.¹¹

Respecto a la comunidad musulmana, los ulemas oficiales son el Gran Muftí de Egipto, responsable de regular la emisión de fetuas oficiales a través de la institución de Dar al Ifta, y el *Shayj* de la mezquita de Al Azhar, la mayor autoridad religiosa del país (Arigita, 2006: 18-28). En 2008 estos cargos los ocupan, respectivamente, el *Shayj* Ali Gomaa y el *Shayj* Mohammed Sayed Tantawi. Estas dos instituciones religiosas, junto al Ministerio de Bienes Religiosos (*Awqaf*), dependen del gobierno que se encarga, además, de designar a sus máximos representantes.

La importancia de la mezquita-universidad de Al Azhar¹² como centro del saber musulmán sunní y la irradiación de sus alumnos por todo el mundo islámico, facilitan la creación de redes de cooperación entre las élites religiosas de diversos países musulmanes y también ayudan a mantener una cierta unidad doctrinal con los musulmanes instalados en países no islámicos.

Progresistas o conservadores, los ulemas mantienen su influencia en el país gracias a la ideología religiosa que van desarrollando, más o menos acomodaticia al poder político, así como por su capacidad de influir religiosamente en otras poblaciones. En época de Naser, a través de la Ley n° 103 de 1961, la mezquita-universidad quedó bajo control del Estado, convirtiendo a los ulemas en funcionarios a su servicio. Desde entonces la estrecha colaboración entre el islam institucional y el régimen no ha cesado.

En el campo político religioso existen, junto al islam moderado, grupos de tendencia radical, entre los que destacan Al Gamat al Islamiya y Al Yihad. Ambos comparten un discurso religioso radical y han recurrido al uso de la violencia, sobre todo durante la década de 1990. La importante presencia de grupos islamistas en la sociedad egipcia y sus relaciones con organizaciones extranjeras de ideología similar, han favorecido su infiltración en distintos sectores del Estado, como el ejército (Azarva, 2007: 8).

Estos grupos reciben su apoyo por parte de jóvenes instruidos, que

suelen vivir en la periferia de las grandes ciudades y que no han contado con oportunidades de movilidad social, beneficiándose poco de las reformas económicas liberalizadoras adoptadas por el régimen (Ayubi, 2006: 264).¹³

Al abrigo de la globalización han surgido en los últimos años nuevas formas de predicación. En Egipto se ha asistido al nacimiento de un nuevo tipo de autoridad religiosa que no cuenta ni con la formación tradicional de los ulemas de Al Azhar, ni queda bajo su control. Tal es el caso del predicador egipcio Amr Khaled. Licenciado en Empresariales, se ha servido de los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías, Internet y canales de televisión vía satélite, para transmitir su mensaje religioso en un estilo «moderno». Intenta de esta forma atraer a una nueva burguesía surgida con el proceso de privatizaciones de los años noventa del pasado siglo.

Respecto a la comunidad copta, está representada oficialmente por el papa Shenouda III desde 1971. Tras las malas relaciones mantenidas con el presidente Sadat, desde mediados de los ochenta su relación con el régimen de Mubarak ha sido más conciliadora, manteniendo un discurso de consenso con los representantes del islam oficial. Según ha ido ganando peso el islam político, los coptos han tendido a replegarse en el ámbito económico y a desengancharse de la escena política donde han contado con un acceso limitado a los puestos de responsabilidad.¹⁴ Los coptos están excluidos de los altos mandos del ejército, de la policía, de los servicios secretos y de la magistratura. Si a nivel político e institucional están infra-representados, en el ámbito de los negocios, por el contrario, no cuentan con ninguna cortapisa. Uno de los ejemplos más evidentes es el de la familia Sawiris y su grupo de empresas Orascom.¹⁵

Las élites militares

La importancia del ejército en Egipto, tanto en el imaginario como en términos reales, hunde sus raíces en la época de Muhammad Ali. El peso significativo que tiene esta institución queda demostrado, entre otros, por el hecho de que los cuatro últimos presidentes han procedido del ámbito militar. Una parte importante de los fondos públicos se destina a gastos militares: solo en 2006 fueron aproximadamente de 2,7 billones de dólares (2,7% del PNB).¹⁶

La firma de los tratados de paz con Israel en 1979, su principal «enemigo» exterior, no conllevó una reducción de la capacidad militar y replanteó el papel del ejército ante la amenaza de los grupos islamistas radicales. Sus funciones se orientaron, cada vez más, hacia la seguridad interior. Junto a esta función securitaria, el ejército ha desempeñado funciones civiles: combatir el analfabetismo en las zonas periféricas desérticas, suministrar agua potable y medicamentos a las poblaciones beduinas o mediar en casos de reclamación de tierras (Ayubi, 2006: 272-5).

Tal y como sucedió durante el gobierno de Sadat, bajo el mandato de Mubarak se ha permitido que, en paralelo, el ejército participe activamente en el sector económico. Existe una industria militar desarrollada, la segunda más importante en la región después de Israel, que cuenta con estrechas relaciones con empresas norteamericanas, como General Motors.

El papel del pueblo: entre relaciones lineales y relaciones clientelares

Como hemos señalado anteriormente, desde finales de los años setenta existe en Egipto un sistema pluripartidista impulsado por el presidente Sadat al final de su mandato que ha continuado bajo su sucesor, Hosni Mubarak. En 2008, cohabitan 24 partidos políticos legalizados, incluidos partidos de oposición tanto de izquierda (Tayammu, Partido Naserista) como de tendencia liberal (Neo-Wafd, Al Ghad), con escasa, si no nula, representación parlamentaria.

Frente a esta fachada pluripartidista, la contestación al régimen se concentra, sin embargo, en actores de oposición política que no disfrutan de un estatus legal. Es el caso, en primer lugar, de la organización islamista de los Hermanos Musulmanes, que a pesar de no estar reconocida legalmente como partido político, concurre a las elecciones en coalición con otros partidos —con el Wafd en 1984, y con el Partido del Trabajo y el Partido Liberal en 1987— o sus miembros como candidatos independientes.¹⁷ En la cita electoral de noviembre/diciembre de 2005 obtuvieron 88 de los 454 escaños que conforman el Parlamento, convirtiéndose así en la principal fuerza de oposición, sin que por ello haya cesado, por parte del régimen, la campaña de acoso y persecución de sus miembros y

principales dirigentes que están siendo juzgados ante tribunales militares.¹⁸ Por otro lado, se encuentran los actores de oposición al régimen de Mubarak, con menor peso y más reducidos, como los representantes del grupo Kifaya (¡Basta!, en español), surgido en 2004 y compuesto por un conglomerado de activistas políticos de diferentes tendencias, así como de miembros de la sociedad civil.

Aunque, sin duda, el hecho que más condiciona desde hace 27 años la vida política del país es la aplicación de la ley de estado de excepción. Según el artículo 148 de la Constitución egipcia de 1971 —actualmente en vigor con enmiendas en 1980, 2005 y 2007— el presidente puede declarar el estado de excepción para un período determinado de tiempo y cualquier renovación posterior ha de ser aprobada por el Parlamento. Inicialmente, la renovación se aprobaba cada año y después ha ido variando entre cada dos y tres años.¹⁹

Esta ley otorga al régimen un amplio poder para imponer restricciones a la libertad de asamblea, movimiento o residencia. Le concede la potestad de arrestar y detener a sospechosos, o a aquellos que estime «peligrosos», así como registrar individuos y lugares sin necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello ha posibilitado a las autoridades impedir la celebración de cualquier asamblea que no obtuviera su visto bueno y llevar a cabo numerosas detenciones, sobre todo de miembros de los Hermanos Musulmanes. Amparándose en la ley de estado de excepción, el régimen prohíbe manifestaciones en la calle, incluso las convocadas por partidos políticos legalizados, que tampoco obtienen la autorización para celebrar mítines en espacios públicos, ni siquiera en períodos electorales. A lo largo de los años, estas medidas, entre otras, han constreñido el papel de los partidos políticos legalizados, que han sentido de manera constante la amenaza de traspasar los límites de la ley, lo que finalmente les ha convertido en inexistentes para la mayoría de la población.

Esta situación que podríamos calificar de «pluralismo autoritario» (Hernando de Larramendi, 2000) ha permitido la emergencia de otros grupos de oposición política no legalizados. Además de los ya existentes Hermanos Musulmanes, en los últimos diez años, y más concretamente desde 2000, la actividad política en Egipto volvió a la calle a raíz de las manifestaciones convocadas en apoyo a la segunda Intifada palestina. Las autoridades no intentaron detenerlas ya que el motivo de las mismas era la causa palestina.

La cuestión Palestina y la ocupación de Irak han sido temas de los que se han servido las fuerzas de oposición para aumentar su visibilidad pública. La impopularidad de la posición oficial del régimen manteniendo relaciones diplomáticas con Israel —iniciadas por Sadat en 1977 y culminadas con la firma del tratado de paz entre ambos países en 1979— y a pesar de los avatares del proceso negociador, ha obligado al régimen a cultivar una posición de cierta tolerancia en lo relativo a este tema. El rechazo a la «normalización» con el Estado de Israel, denominado *Tat-bia*, alcanza no solo a las fuerzas de oposición antes mencionadas sino que se extiende a amplios sectores de las élites políticas e intelectuales vinculadas al régimen.

El rechazo social al mantenimiento de relaciones con Israel y la política de estrecha vinculación con Estados Unidos, obliga al régimen a tolerar manifestaciones públicas y actos de protesta para que actúen como válvula de escape. Algo similar ocurrió tras la invasión norteamericana de Irak en 2003. En aquella ocasión el régimen de Mubarak, que se demarcó del proyecto democratizador del «Gran Oriente Medio»²⁰ pero que no quería romper sus lazos con Estados Unidos, permitió que la opinión pública expresara su rechazo a la ocupación (Azaola, 2005).

Esta tolerancia del régimen ha sido aprovechada por los diferentes actores de la oposición, tanto por los Hermanos Musulmanes como por otros grupos que emergían al hilo de los acontecimientos. El aumento de las protestas a favor de la Intifada de 2000 llevó a la creación del «Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada Palestina», que fue atrayendo a diferentes sectores de la sociedad civil y a activistas políticos que progresivamente formaron los núcleos de los movimientos de protesta egipcios contra la guerra de Irak.

Las protestas contra la guerra de Irak contribuyeron considerablemente a reavivar el debate sobre la democracia, traspasando las organizaciones e instituciones que tradicionalmente habían tratado este tema. La actividad política pareció volver a la calle y los grupos que promovían no estaban legalizados. Sus integrantes eran mayoritariamente de tendencia socialista, marxista y naserista, a los que posteriormente se unieron los Hermanos Musulmanes (Azaola, 2008: 151).

La multitudinaria manifestación, parcialmente tolerada por las autoridades, que tuvo lugar en El Cairo el 20 de marzo de 2003 al iniciarse el ataque norteamericano a Irak, sirvió de detonante y llevó al surgimiento de la plataforma «Movimiento 20 de Marzo», cuya prioridad se

resumía en su lema de lucha contra el despotismo y las dictaduras. Sus fundadores eran intelectuales y activistas de izquierdas que exigían la liberación de Irak, pero también la liberación de Egipto de la corrupción. Año y medio después, el 9 de septiembre de 2004, con vistas a afrontar las citas electorales de 2005 —presidenciales en septiembre y legislativas en noviembre—, y ante la más que probable renovación de Mubarak como candidato a la presidencia de la República, inició su campaña de protesta una nueva plataforma, «Campaña Popular por el Cambio», creada en torno a otras iniciativas y organizaciones como el «Movimiento 20 de Marzo», el Partido Comunista y los Hermanos Musulmanes, el pequeño partido clandestino de tendencia naserista, Al-Karama, la organización no gubernamental «Centro Legal Hicham Mubarak», así como 15 grupos y organizaciones de la sociedad civil que firmaron un comunicado que llevaba por título: «No a la renovación, no a una sucesión hereditaria, sí a elecciones presidenciales».

Vinculada a esa nueva plataforma surgió el grupo que más repercusión ha tenido desde que convocara su primera manifestación, en diciembre de 2004, bajo el lema que posteriormente ha dado nombre al movimiento, *Kifaya*. Se trata del «Movimiento Egipcio por el Cambio». Este grupo, que reclama el final del mandato de Mubarak, del monopolio del Partido Nacional Democrático y de la ley de estado de excepción, está compuesto por activistas políticos de diferentes tendencias —marxistas, liberales, islamistas, naseristas—, así como distintos representantes de la sociedad civil. Se denominan a sí mismos «movimiento», y no partido, y declaran querer concienciar políticamente a la mayoría del pueblo egipcio.

De esta forma surgió *Kifaya*, como resultado de las manifestaciones por la causa palestina y contra la guerra de Irak que acabaron convirtiéndose en movilizaciones anti-Mubarak. A partir de ese momento el campo asociativo egipcio vivió una vuelta a la politización, surgiendo nuevas plataformas de protesta desde la sociedad civil que reclamaban un cambio democrático en el país y el fin del gobierno de Hosni Mubarak. Se crearon diferentes grupos de oposición a imitación del de *Kifaya* desde distintos sectores de la sociedad egipcia, incluidos elementos del aparato del Estado como la judicatura. En 2005, jueces reformistas acusaron a otros vinculados al régimen de fraude electoral.²¹ Por ello fueron procesados dos de estos jueces independientes. Para expresar su rechazo a las interferencias del gobierno en la judicatura fue creado el movimiento

«Jueces por el cambio». De igual forma se constituyeron «Profesores por el cambio», «Estudiantes por el cambio», «Médicos...», «Periodistas...», «Ingenieros...» y surgió simultáneamente el mundo de la *blogosfera* egipcia.

Otro factor desencadenado por los atentados terroristas del 11-S, fue el inicio de la Freedom Agenda para Oriente Medio por parte de la Administración de Bush. La respuesta egipcia ante las presiones norteamericanas fue la de simular dar algunos pasos hacia un proceso de reforma política que se tradujo en una apertura en el discurso del poder político y concretamente en la dirección del partido del gobierno, el PND (Ben Nefissa, 2004-2005: 59-78). Con anterioridad, el debate en torno a la democracia había estado monopolizado por los actores de la oposición política.

Al hallarse Egipto en el punto de mira de la Administración norteamericana y su proyecto democratizador en la zona de Oriente Medio, las autoridades permitieron la salida al mercado de numerosos periódicos de capital privado que de manera gradual fueron aumentando sus críticas y lanzando campañas contra Mubarak y su hijo Gamal, cuyas ambiciones presidenciales comenzaban a ser evidentes.

Los actores de oposición que acabamos de mencionar actúan principalmente a través de estos periódicos y de los nuevos canales que ofrece la red. La oposición legalizada se sirve de la tradicional prensa de partidos, y los actores de oposición no legalizada actúan principalmente a través de los nuevos periódicos de capital privado.²² Internet ha tenido un papel fundamental para la transmisión de información y como campo de oposición, renovando el activismo político. Un ejemplo ha sido el auge de los *blogs* con contenido político y reivindicativo de todas las tendencias, desde izquierdistas a islamistas.²³ Los correos electrónicos y los mensajes a móviles también han servido de cadena de transmisión de las convocatorias, o para informar sobre la detención de activistas.

Ciertas cadenas de televisión por satélite, como la qatarí Al Jazeera, han promovido determinados programas de debate político en los que actores de la oposición han disfrutado de un espacio de expresión, difícil de obtener en las cadenas estatales. También han programado reportajes sobre los nuevos actores de la oposición egipcia como *Kifaya* o sobre el papel desempeñado por los *bloggers* egipcios. Aunque la oficina en El Cairo ha de equilibrar siempre estas intervenciones de la oposición con representantes gubernamentales para cuidar sus relaciones con las autoridades egipcias.

Otro sector que ha vuelto a las movilizaciones ha sido el de los trabajadores. Se calcula que el número de protestas demandando incrementos salariales, así como el derecho de sindicación independiente, ha superado las 350 a mediados de 2007.²⁴ Significativas han sido las protestas y huelgas llevadas a cabo por los trabajadores del sector textil de Mahalla Al Kubra, en la zona del Delta, iniciadas en diciembre de 2006 y que llevaron a la huelga a más de 20.000 trabajadores. El régimen tuvo que ceder a sus reivindicaciones para evitar la generalización y radicalización de las protestas.²⁵ También han secundado las huelgas los trabajadores de la industria cementera, funcionarios, maestros, carteros y maquinistas y se ha creado una agrupación de apoyo sindical denominada «Comité de Solidaridad Obrera». Estas protestas suponen un desafío a los sindicatos oficiales, como la Federación General de Sindicatos (Beinin y el-Hamalawy, 2007; Beinin, 2007).

Sin embargo, la población no se ha visto ampliamente involucrada, ni representada por estas voces de la oposición que parecen haber perdido el miedo a la hora de criticar la corrupción del régimen, o los planes de sucesión de Gamal Mubarak, traspasando lo que se denominaba «línea roja». El grupo *Kifaya* ha recibido críticas y ha sido tachado de demasiado «elitista» por el origen intelectual de sus dirigentes y por no haber sabido canalizar el descontento del pueblo.

Es cierto que a lo largo de 2006 *Kifaya* ha ido perdiendo poder de convocatoria y ha reducido sus actividades públicas debido, entre otros factores, a sus diferencias internas y a los intentos por parte de las autoridades de detener su principal acción: manifestarse sin autorización previa. La heterogeneidad que le daba fuerza en sus orígenes se ha transformado en fuente de conflictos. Debido a este malestar, se produjo una renovación en la dirección a comienzos de 2007, sustituyendo al carismático Georges Ishaq por el escritor y profesor universitario, Abdel Wahab El Messiri, que en compensación, procedía de las filas islamistas del movimiento (Ben Nefissa, 2007: 198-199). También han surgido conflictos de tipo generacional con el grupo de «Jóvenes por el cambio», que se han centrado, básicamente, en la forma en la que debían desarrollarse sus movilizaciones: tipos de lemas, lugares de convocatoria. A pesar del desgaste, existe todavía cierto espíritu de disidencia y de desafío en la sociedad egipcia, en parte gracias a su impulso.

Desde la década de 1990, se ha desarrollado en Egipto un importante tejido de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) vinculadas a

diferentes sectores de la sociedad. En 2005 alcanzaban las 17.000, aunque una amplia mayoría existe sobre el papel o lleva a cabo proyectos muy minoritarios (Abd Al Fatah, 2004). Dentro del amplio abanico de organizaciones no gubernamentales que funcionan en Egipto, los grupos de defensa de derechos humanos han sufrido un fuerte control bajo el mandato de Mubarak a través de un restrictivo marco legislativo.²⁶ Las ONG también han sido utilizadas por formaciones políticas opositoras como instrumento para contrarrestar los límites de acción política impuestos por el estado de excepción (Ferrié, 2003).

Los únicos actores que podrían canalizar el descontento de la población, debido a su tejido asociativo, además de por su faceta política, son los Hermanos Musulmanes, aunque entre sus dirigentes existe el miedo a enfrentarse a las masas no organizadas. Ellos mismos constituyen, a la vez que oposición, una élite política en el ámbito, por ejemplo, de los colegios profesionales. A pesar de las restricciones aplicadas por parte del régimen, que no quiere dejar estos espacios al alcance de los sectores islamistas, vencen en la mayoría de ellos cuando logran saltarse los impedimentos legales, siendo los más votados por estar mejor organizados y no ser corruptos. A pesar de colocar a estos colegios bajo secuestro judicial, como en el caso de los Ingenieros, las autoridades no pueden controlar que se celebren elecciones, ni el resultado de las mismas, sobre todo en aquellos colegios donde los Hermanos Musulmanes son fuertes, como es el caso del Colegio de Médicos, donde la mayoría del comité ejecutivo está compuesto por miembros de la organización islamista (Kienle, 2000: 84-87).

La población carece de un partido, organización o sindicato que canalice su descontento. Por lo que recurre a las protestas esporádicas, a originar enfrentamientos interreligiosos entre coptos y musulmanes y a provocar el caos público de forma no organizada, lo que está contribuyendo a un aumento de la violencia y a un sentimiento generalizado de inseguridad.

Las tensiones en la vieja y la nueva guardia, y el islam político

El régimen egipcio encabezado por el presidente desde el golpe de Estado de 1952, se basa en las relaciones de cooperación entre oficiales y

unas élites «civiles» que pertenecen tanto al sector estatal como al capital privado. A los apoyos que recibe el régimen por parte del ejército, de las viejas élites vinculadas al Estado y del sector económico, se añade la nueva alianza tejida por Mubarak con una «nueva guardia». Esta nueva guardia está formada por importantes empresarios y una nueva generación de tecnócratas que han alcanzado carteras ministeriales en los últimos gabinetes. Esta alianza se basa en el intercambio de favores económicos por respaldo político con el objetivo de preservar la estabilidad político-económica del régimen.

Esta tendencia renovadora dentro el régimen surge a raíz del clima de incertidumbre creado en torno a la sucesión de Mubarak. Los rumores surgidos acerca de la mala salud del presidente junto al vacío que supone la no existencia de un Vicepresidente, que según el sistema institucionalizado tras la muerte de Naser es quien pasa a ser candidato único a Presidente de la República, ha acentuado el clima de competición intrarégimen. En 2002, fue creado un nuevo órgano dentro del partido, la «Secretaría Política» o «Comité de Políticas», a la cabeza del cual Mubarak, presidente del partido, situó a su hijo Gamal. Bajo su dirección se engloban cerca de 150 jóvenes economistas, hombres de negocios y académicos cercanos a Gamal, procedentes de las élites económicas, culturales y científicas del país, así como académicos sin bagaje político. Su objetivo consistiría en «liderar» la transformación del PND desde un partido «patrocinado» por el Estado y dirigido por la vieja guardia, a un partido moderno y controlado por tecnócratas (El Ghobashy, 2003).

Gamal Mubarak pertenece a esta «*alliance for profits*», en términos de Waterbury (1994: 27), que apuestan por un proceso de liberalización económica a través de reformas estructurales que aumenten el poder del sector privado. En sus discursos introducen grandes planes nacionales, como el desarrollo de la energía nuclear y la supuesta independencia de la tutela norteamericana. Para reforzar las buenas relaciones del régimen con este sector empresarial, en los gabinetes ministeriales formados a partir de 2004, Mubarak ha incluido a tecnócratas y políticos de clara orientación económica, como Youssef Boutros-Ghali (Finanzas), Rachid Mohamed Rachid (Industria y Comercio) y Mahmoud Mohieldin (Inversiones).²⁷

El intento de Hosni Mubarak por traspasar sus funciones —*Tawriz al Sulta*— a su hijo, ha encontrado resistencia por parte de los miembros de la vieja guardia que ve amenazada su posición en el régimen. A la vie-

ja guardia pertenecen tanto miembros adscritos al PND, como militares vinculados al poder y parte de la élite estatal más conservadora. Esta vieja guardia tiene a uno de sus máximos representantes en el general Omar Suleiman,²⁸ un hombre con el que hay que contar, director de los Servicios Egipcios de Inteligencia (Mujabarat) y mano derecha del presidente, que intenta preservar el papel de los militares en la escena política (Springborg y Sfakianakis, 2001: 58).

Algunos autores consideran que el ejército es una institución semi-autónoma respecto al control del Estado (Ayubi, 2006: 271). La autonomía que ha ido ganando el ejército ha suscitado temores dentro del régimen ante el riesgo de que una institución vital para su mantenimiento pudiera escapar a su control. Aunque Mubarak está estrechamente conectado con el aparato militar, en el que se formó y desarrolló su carrera hasta ser nombrado Vicepresidente del país en 1975, incidentes con mandos militares, como el de Abu Ghazala,²⁹ le han obligado a prestar una creciente atención hacia las actividades del ejército. Su respuesta se dirige en dos direcciones: por un lado, intenta mantener satisfechos a los oficiales otorgándoles ciertos privilegios económicos; por otro, limita sus derechos políticos e intenta crear una estructura jerarquizada que minimice el riesgo de un posible golpe por parte de los militares de rango medio. Paralelamente, se aplica una estructura de tipo soviético con rotaciones frecuentes de los oficiales, y con un control personal de Mubarak sobre todas las promociones desde el rango de brigadier (Droz-Vincent, 1999: 18).

Sin embargo, las estrategias de Mubarak para mantener bajo su control al ejército no han impedido la división de intereses entre «nueva» y «vieja» guardia. Como lo subraya Walker,³⁰ en el caso de la sucesión de Gamal «toda la estructura militar y de seguridad podría fácilmente perder sus privilegios, su trato especial y sus beneficios para retirarse».

La competición entre los dos grupos y su intento de preservar y/o incrementar sus capacidades de poder implicó la búsqueda de respaldo de Washington, aunque sus preferencias por Gamal u Omar no son unánimes. En octubre de 2007, Suleiman realizó un viaje a Estados Unidos con el pretexto oficial de mantener conversaciones sobre la seguridad de la frontera con Gaza. Para algunos observadores,³¹ la razón de esta visita perseguía normalizar las relaciones bilaterales entre Washington y El Cairo, después de la cancelación de 200 millones de dólares de ayuda militar como represalia por no haber controlado el tráfico de armas en la

frontera con Gaza y no haber facilitado la puesta en libertad del fundador del partido liberal Al Ghad, Ayman Nour, encarcelado desde 2006. Aunque el viaje de Suleiman tenía probablemente el objetivo de lograr el apoyo de sectores políticos y económicos estadounidenses en su competición con el hijo de Mubarak. También los miembros de la nueva guardia han aprovechado viajes a Estados Unidos para, más allá de la agenda oficial, mantener contactos reservados con miembros de la Administración de Bush.

Ante la agudización de estas tensiones, Mubarak ha intentado tranquilizar a ambos sectores descartando reproducir un modelo de República hereditaria como en Siria: «No somos una monarquía. Somos la República de Egipto [...] No somos Siria y Gamal Mubarak no será el próximo presidente de Egipto».³²

Junto a la competición intrarrégimen, uno de los espacios de donde procede más presión es el religioso. El régimen, para contrarrestar la amenaza de los Hermanos Musulmanes, mantiene relaciones de alianza con los ulemas oficiales, reforzadas con el nombramiento en 1996 del *Shayj* Mohammed Sayed Tantawi como gran autoridad de la institución religiosa (Kodmani, 2005). Las relaciones entre el régimen y los ulemas son complejas y oscilan entre la interdependencia y la competición. Esta alianza ofrece legitimidad religiosa al régimen, ya que estos se presentan como los legítimos defensores del islam, recibiendo a cambio un importante respaldo político-económico.

Paralelamente se ha tejido una alianza entre los ulemas y los Hermanos Musulmanes en un intento por preservar la autonomía de Al Azhar. Esta alianza, informal pero poderosa, entre ciertos ulemas y miembros de los Hermanos Musulmanes está presente en la institución del Frente de Ulemas de Al Azhar.³³

Respecto a las relaciones entre el régimen y los Hermanos Musulmanes, tanto Naser, como Sadat y Mubarak han llevado a cabo una política que ha combinado el palo y la zanahoria que no ha impedido la colaboración en diferentes momentos con la organización. A los Hermanos Musulmanes, la cooperación con el régimen les ha permitido tener mayor presencia en la escena política. Por otro lado, la organización ofrece al Presidente y sus aliados una oposición moderada de la que el régimen se sirve para reforzar sus credenciales pluralistas. La colaboración con el régimen ha generado fricciones dentro de la organización y puede haber contribuido a deteriorar su credibilidad ante la población. Muhammad

Mahdi Akif tomó las riendas de la organización en 2004, y un año después anunció su apoyo, de una manera sutil, a la candidatura de Mubarak para un quinto mandato, argumentando que el Corán obliga a los musulmanes a obedecer a su líder. Estas declaraciones provocaron divisiones dentro de la organización (El Amrani, 2005).

Ante la necesidad de recibir un mayor apoyo por parte de las élites y el pueblo, los Hermanos Musulmanes se vieron obligados a dar un giro a su discurso religioso y a su lema «El islam es la solución». Potenciando los puntos de encuentro con otros sectores ideológicamente antagónicos, su atención se centra en temas políticos-seculares como la limitación del número de los mandatos presidenciales permitidos, la reducción de los poderes del jefe del Estado, el levantamiento del estado de excepción o la liberación de los más de 20.000 detenidos políticos en las cárceles egipcias.

Los Hermanos Musulmanes mantienen estrechas relaciones con Arabia Saudí que se remontan a los tiempos de Naser. La organización también mantiene canales de comunicación con Estados Unidos. Aunque oficialmente no existen, el peso que la organización tiene en la sociedad egipcia impide que la Administración de Estados Unidos pueda evitarlos ante un escenario sucesorio marcado por la incertidumbre.³⁴

Los grupos islamistas de tendencia radical, como Gamaat al Islamiya y Yihad, mantienen relaciones de rivalidad no solo con el régimen, sino también con los Hermanos Musulmanes, a los que consideran traidores por su colaboración con el régimen. La rivalidad con los Hermanos Musulmanes se centra en su competición por el control del campo religioso. La moderación del discurso por parte de los Hermanos Musulmanes ha tenido un coste en términos de apoyo por parte de los sectores más conservadores, algunos de los cuales han acabado aproximándose a los grupos más radicales.

Los grupos radicales habrían recibido apoyo desde la península Arábiga para alcanzar su objetivo de expandir el mensaje islamista por la región. Las acciones violentas de estos grupos dentro del país tuvieron impacto en la economía egipcia de los años noventa al estar dirigidas contra objetivos turísticos, afectando a intereses económicos controlados por Mubarak y sus aliados. El riesgo de nuevos ataques terroristas fue utilizado por el régimen como coartada para restringir las libertades sociopolíticas intensificando el arsenal de medidas coercitivas. Mubarak ha tenido algunos éxitos consiguiendo que algunos de los líderes de Gamat

al-Islamiya renunciaseen públicamente desde la cárcel al uso de la violencia. La contrapartida ofrecida por el régimen fue la liberación de algunos líderes y miembros de la organización.

La existencia de una oposición no secular en Egipto, obliga al régimen a una relativa colaboración con partidos políticos laicos. El partido Neo-Wafd, donde se integran miembros de la comunidad copta, pertenece a ese grupo de partidos que coopera con sectores del PND. El partido ofrece al régimen una relativamente «fiel» oposición secular y añade un perfil democrático a la escena política egipcia, a cambio de un trato privilegiado por parte del régimen. Así mismo, el Neo-Wafd recibe apoyo económico-político por parte de grupos coptos estadounidenses. Algo parecido ocurre con el partido Al Ghad.

Las relaciones entre grupos moderados de la comunidad musulmana y copta no han sido hostiles a lo largo del tiempo. Sin embargo, la prohibición de formar partidos políticos de base religiosa, oficialmente para la protección de la minoría copta pero más bien para evitar una mayor acumulación de poder de los Hermanos Musulmanes, generó fricciones entre las dos comunidades.

Respecto a las alianzas con el exterior, Mubarak forma parte de ese grupo de jefes de Estado árabes que aprovechan la coyuntura internacional de la llamada «guerra contra el terrorismo» lanzada por la Administración estadounidense tras el 11 de septiembre de 2001, para debilitar a sus rivales y asegurar su posición hegemónica en el sistema. Las relaciones con Estados Unidos a nivel económico, político y militar a cambio de una fidelidad egipcia, pueden considerarse como un recurso adicional de poder a disposición del régimen frente a sus competidores. Desde los Acuerdos de Camp David en 1979, El Cairo ha recibido unos sesenta mil millones de dólares en ayuda militar y económica.³⁵ La ayuda estadounidense hacia El Cairo está estrechamente vinculada a los intereses norteamericanos en la región de Oriente Medio, es decir, garantizar la existencia de un polo árabe moderado hacia Israel y permitir el control de las principales reservas energéticas del mundo (Álvarez-Ossorio e Izquierdo, 2005).

Sin embargo, el nuevo contexto regional tras la invasión de Irak en 2003, las críticas de Mubarak al proyecto del «Gran Oriente Medio» y la competición dentro del partido por la sucesión, crearon dudas sobre el apoyo norteamericano.

Las relaciones de cooperación con Tel Aviv³⁶ garantizan a Mubarak

su «amistad» con Washington y descartan la posibilidad de un «ambiente hostil» que pondría en peligro el equilibrio regional. La situación de paz con su principal «enemigo exterior» en la región, refuerza las funciones civiles del ejército egipcio. Del lado israelí, la cooperación con Mubarak mejora su imagen internacional y descarta la posibilidad de una crisis en su frontera sur tras la retirada del ejército israelí de Gaza en agosto de 2005 tras 38 años de ocupación.

Tal como señala Izquierdo (2005: 60), «Palestina y el conflicto árabe-israelí se convirtieron en el núcleo de las relaciones interárabes y del mundo árabe hacia el exterior». De tal manera, los Acuerdos de Camp David, junto a otra serie de factores, derivaron en la exclusión oficial de El Cairo de las organizaciones intra-árabes. El reingreso de Egipto en la Liga Árabe, en 1989, le ha permitido desempeñar el papel de mediador en diferentes asuntos problemáticos de la región (Siria, Líbano, Israel-Palestina). A pesar de los esfuerzos de El Cairo por recuperar parte de su prestigio como centro de los «círculos» árabe y musulmán, Mubarak y sus aliados no lograron imponer su voluntad en la mesa de negociación árabe. Su limitada influencia en la región se debe, entre otras razones, a su visible dependencia hacia Washington que, no obstante, no esconde sus preferencias por el establecimiento de una hegemonía regional saudí.

Sin embargo, existe una cooperación entre Mubarak y las élites gubernamentales árabe-musulmanas «moderadas» que forman parte del denominado «eje del bien», según el discurso estadounidense, a causa de su coincidencia en preservar el *status quo* tanto dentro de sus regímenes, como en la región.

Las dinámicas centrípeta y centrífuga

Egipto, desde el golpe de Estado de los Oficiales Libres en 1952, conoce una acumulación asimétrica de poder en manos de una reducida élite. Pese a su renovación, existe una continuidad en cuanto al núcleo duro y a los procesos de reclutamiento de las élites.

El régimen Mubarak controla el Estado, los aparatos de coerción y las principales maquinarias de producción de creencias. Al mismo tiempo, disfruta de un importante apoyo político-económico por parte de la Administración norteamericana y su poder económico, como vimos, está

asegurado por un sistema fuertemente clientelista que impone a los sectores privados estrechas relaciones con el régimen.

La larga existencia del autoritarismo, en paralelo al modelo patriarcal de la sociedad egipcia, producen y reproducen una postura de sumisión y de aceptación del dominio tanto de la sociedad como de las élites. La imposición de los intereses del régimen como algo provechoso para toda la sociedad le permite controlar la ideología y así mantener e institucionalizar un sistema autocrático, donde las libertades personales se sacrifican en nombre de la seguridad y de la estabilidad social.

Mubarak y sus aliados controlan, ya sea de manera directa o indirectamente, la casi totalidad de los recursos de poder gracias principalmente a su control del Estado. Esto les permite disponer de un poder estructural que les proporciona la capacidad de diseñar las reglas del juego, tanto ideológicas como materiales, a partir de las cuales tiene que moverse el resto de las élites egipcias.

Sin embargo, algunas fuentes de poder escapan al dominio del régimen. La oposición política no legalizada, encabezada por los Hermanos Musulmanes, controla mayoritariamente el recurso de la ideología a nivel secundario, el discurso político-religioso, capaz de movilizar a una parte significativa de la sociedad egipcia. Pero ese control no le permite acumular capacidades de poder para competir con el régimen, hecho que se debe a una serie de razones. En primer lugar, hay una enorme diferencia cualitativa y cuantitativa entre el poder del régimen y el de los Hermanos Musulmanes. Por otra parte, la ideología, en su sentido más amplio, tanto nacional como extra-nacional, favorece la preservación del régimen actual donde los Hermanos han de seguir unas pautas de actuación ya determinadas.

Además, a esos dos factores se ha de añadir la relativa debilidad que caracteriza las relaciones entre la Hermandad y el pueblo, basadas parcialmente en prácticas de clientelismo, donde la organización ofrece funciones de Estado de bienestar *low cost* a cambio de apoyo público y social. Por último, hay que considerar una probable exageración del peso de la organización por parte del régimen para conseguir un mayor apoyo internacional bajo el miedo del establecimiento de un régimen religioso contrario a los intereses occidentales.

La importancia secundaria de la población, en cuanto recurso de poder, resulta de la fuerte represión ejercida en el país. La larga imposición del estado de excepción, junto a una serie de leyes y de prácticas

que impiden las reclamaciones sociales, limita fuertemente su papel. De ese modo, se restringe su capacidad de establecer relaciones lineales y de establecerse como actor. El pueblo se ve entonces atrapado en unas relaciones de dar-recibir entre el régimen (oferta de trabajo en el sector público y ejército o subsidios de alimentación) y los distintos grupos de oposición. Como lo subraya Izquierdo: «En el caso de los estados rentistas,³⁷ una vez se ha conseguido el dominio sobre el recurso que genera la renta, la relación con la ciudadanía ya no es de recaudación sino de distribución, lo que debilita la capacidad de negociación del pueblo y por tanto el poder de las élites es mayor y más autoritario» (2007: 4).

Así, las relaciones entre pueblo y régimen están caracterizadas por la personalización de la autoridad (Hinnebusch 1985: 227). A todos esos factores hay que añadir que la posibilidad de emancipación del pueblo se restringe, ya sea por la información que recibe o por la manipulación ideológica.

El proceso de apertura democrática, anulado tras el referéndum de 2007, y el gradual empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, han impulsado una mayor movilización del pueblo egipcio. Las huelgas en sectores económicos concretos y las manifestaciones que se realizaron en los últimos años en Egipto, se podrían traducir en un relativo «despertar» del pueblo, permitido por la introducción de información independiente accesible gracias a las nuevas tecnologías. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta el uso que el régimen ha hecho del pueblo frente a, por ejemplo, ciertos imperativos norteamericanos. El discurso de democratización de los países de la región que obligaba a Mubarak a abrir el sistema autocrático, implicó una estrategia por parte del régimen de usar el descontento popular para su propio beneficio. Por ello, las primeras manifestaciones toleradas bajo Mubarak, salvo en el caso de la segunda Intifada, fueron contra la invasión de Irak. El régimen también ha intentado controlar a la sociedad civil impulsando la creación de ONG vinculadas al aparato del Estado.³⁸

La represión que conoce la sociedad egipcia, no solo a nivel físico, lleva a un desinterés general ante la aparente imposibilidad de cambio. A eso se tiene que añadir las divisiones internas de los movimientos políticos no legalizados, ya frágiles en términos de poder y con unas posibilidades de actuación limitadas, y el desprecio general hacia la oposición legalizada.

De ese modo, el pueblo egipcio no consigue establecer unas rela-

ciones lineales e imponerse como actor. Las reclamaciones populares están más conectadas con problemas cotidianos de supervivencia (la vivienda, las mejoras salariales, la preservación de subvenciones de los productos básicos, las privatizaciones), y temas árabes y/o musulmanes (Irak, Palestina), que con demandas políticas, en sentido estricto, como demuestra la limitada participación del pueblo en acciones políticas (referéndum, elecciones, manifestaciones). Esa paradoja, es decir la concretización de unas demandas sin la capacidad de llevarlas a cabo se debe probablemente a la falta de organización de la sociedad «civil», resultante tanto de las restricciones legales como pragmáticas, relativas a la ausencia de una vanguardia capaz de movilizar la frustración general, así como a la pasividad y a la desesperanza del pueblo.

Del análisis precedente resulta evidente que un desafío al que se enfrenta el régimen es su propia fragmentación por las tensiones entre la vieja y nueva guardias. La importancia del recurso Estado en la sociedad egipcia y la dependencia de los demás recursos respecto al Estado imponen a las dos partes una simbiosis obligatoria para poder mantener su papel hegemónico. Así se evidencia la creación de dos élites primarias capaces cada una de ellas de luchar intensamente por una ulterior acumulación diferencial de poder. Sin embargo, parece que una fragmentación absoluta costaría a las dos partes la pérdida del papel hegemónico, lo que reduciría su capacidad relativa en términos de poder frente a los competidores terceros.

Por un lado, Gamal y sus aliados, que aunque dispongan de importantes recursos de poder no consiguen imponer sus reglas, como se evidencia por el no-nombramiento oficial del hijo Mubarak como sucesor del padre. Al mismo tiempo, la marcha atrás que se produjo con el referéndum de marzo de 2007 y el incremento de los gastos dirigidos hacia sectores conectados con la maquinaria de represión, demuestran la incapacidad de la «nueva guardia» de triunfar. Por otro lado, Suleiman y la vieja guardia, que controlan sobre todo el ámbito militar, tampoco se ven capaces de desconectarse de la tutela Mubarak.

Esta situación impone un marco de negociación entre los dos, donde las demás élites no consiguen cambiar el juego y no se transforman en un recurso de poder adicional a disposición de los dos. La centralidad del recurso Estado en la sociedad egipcia genera una fuerte dependencia de las élites secundarias hacia el régimen, hecho que elimina la posibilidad de desconexión de sus capacidades de poder. Así, se ven atrapados en un

modelo hegemónico que, sin una relativa apertura del sistema, no presenta salidas. En el ápice de la jerarquía, los principales actores intentan evitar una bipolarización de la estructura de poder manteniendo una cohesión entre ellos, intentando mantener su exclusividad en cuanto élite hegemónica. Consecuentemente, las élites secundarias se ven obligadas a apoyar ese proceso con el fin de mantenerse en los círculos de poder.

En ese equilibrio, la necesidad de la Administración norteamericana de mantener regímenes estables en Oriente Medio juega un papel importante, especialmente después del fracaso de sus políticas en la región. El posicionamiento de Washington es clave en el momento de la sucesión de Mubarak. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, las preferencias estadounidenses no son unánimes, algo que perturba aún más la situación.

¿Autoritarismo multipartidista o multipartidismo autoritario?

La evolución política de Egipto depende de la forma en que se gestione la incertidumbre ante la sucesión de Mubarak. Los diferentes actores internos y externos siguen con atención esta situación decisiva para la evolución de Egipto en los próximos años.

Si Hosni Mubarak se apartase de la carrera presidencial a favor de su hijo Gamal, algo sobre lo que se especula pero que no parece tan evidente por lo menos mientras Mubarak siga vivo, este heredaría los privilegios y la hegemonía del poder de la que disfruta su padre. El principal impedimento podría surgir de la vieja guardia del PND, o del ejército que rechazase que el presidente de la República no procediera del ámbito militar, como sus antecesores. De momento, el ejército parece mantenerse en silencio en cuanto a cuestiones políticas, dejando a miembros del partido la función de gobernar. Sin embargo, dentro de los cuadros del ejército existe una figura de la que se especula como posible sucesor que es la de Omar Suleiman, director de los Servicios de Inteligencia egipcios y que posee el rango de general. Comparte con Mubarak la misma orientación *vis á vis* Israel y Estados Unidos, aunque sigue siendo bastante desconocido para la mayor parte de los egipcios a pesar de haber tenido en los últimos años una discreta función de mediador entre facciones palestinas.³⁹ La dificultad reside en su no pertenencia al PND, por lo que de-

bería renunciar a su cargo militar y ocupar, durante al menos un año, un alto puesto dentro de las filas del partido antes de poder ser candidato oficial a la Presidencia de la República.⁴⁰

La organización de los Hermanos Musulmanes parece tener cerradas las puertas a un aumento de su influencia en el espacio político oficial. Las 34 enmiendas constitucionales ratificadas en referéndum el 26 de marzo de 2007 parecen estar dirigidas a alcanzar este objetivo. La enmienda al artículo 5, por ejemplo, hace referencia a la prohibición de cualquier actividad política, así como a la formación de partidos políticos, de base religiosa. Este nuevo marco restrictivo podría debilitar la posición de aquellos sectores de los Hermanos Musulmanes partidarios de aceptar las reglas del juego político institucionalizado reforzando a los sectores más radicales.

Otros actores hipermediatizados como Kifaya, que han recurrido coyunturalmente a sectores ideológicamente enfrentados, tendrán que demostrar su capacidad para resolver sus problemas internos a través de un proyecto político definido que canalice las expectativas de la sociedad egipcia.

En el plano económico, Egipto cuenta con niveles de crecimiento que podrían valorarse como muy positivos desde una perspectiva macroeconómica. Se ha alcanzado una inflación del 4,5%, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido a un 7,5%, han aumentado las inversiones directas extranjeras, se ha reducido a menos del 8% del PIB el déficit presupuestario, y también se ha producido un aumento de las exportaciones. Sin embargo, el 20% de los egipcios vive con menos de un dólar al día y el porcentaje de paro, superior al 10%, va en aumento.⁴¹ Egipto presenta un sistema económico y social a dos velocidades: por un lado, una minoría tiene acceso a los servicios más competentes y se reparte los frutos del crecimiento económico, por otro, la educación, la sanidad y unas condiciones de vida dignas resultan inalcanzables para la mayoría de la población. La situación económica en Egipto se ha deteriorado profundamente. En julio de 2006, se produjo una subida de precios en dos sectores considerados hasta entonces como intocables: la gasolina y el transporte público subieron un 30%.

El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, hace que los análisis de prospectiva no descarten el riesgo de que este malestar pueda derivar en revueltas sociales como las ocurridas en enero de 1977. Con una policía concentrada en proteger al régimen,

los asaltos y robos con violencia hacia las clases más pudientes se producen cada vez con mayor frecuencia generando un clima de inseguridad ciudadana.

El factor económico, por lo tanto, adquiere igual o más importancia que el político a la hora de determinar quién heredará el complicado y turbio legado de Hosni Mubarak. Más allá de en quién recaiga la sucesión, existen problemas estructurales que sitúan cualquier opción ante un marco de inestabilidad. La frustración y desesperación de millones de egipcios que viven bajo el umbral de la pobreza, y que paulatinamente se están haciendo oír a través de protestas y huelgas en distintos sectores de la sociedad, son un indicativo de que el futuro de Egipto no va estar necesariamente determinado solo por quien sea su próximo presidente, sino también por la capacidad de las nuevas iniciativas políticas populares para construir un movimiento social para el cambio.

Otro riesgo señalado por ciertos analistas es cómo gestionará, sea quién sea el futuro presidente, la creciente dependencia económica extranjera, especialmente de Estados Unidos, en un proceso de privatizaciones que no deja de ir en aumento⁴² y ante una opinión pública que mira con recelo la estrecha vinculación del régimen con la Administración norteamericana.

Notas

1. Acerca del papel modernizador de Mohammed Ali, Corm (2003) y Ortega (1997).

2. Según el artículo 9/4, el ministro de Justicia tiene la última palabra en la asignación o renovación de los términos de los jueces en los Tribunales de Apelación. La misma ley (art. 78), establece la existencia de un departamento de inspección judicial dentro del Ministerio de Justicia para controlar las actuaciones de los jueces, sus promociones y sus traslados, bajo el control del ministro (Gohar, 2006: 13).

3. Se trata del Decreto 425/1962 que pasó a ser Ley 85/1973. Bronsveld (1981) y Birdsall y O'Connell (1999).

4. Ayubi calcula dicho crecimiento adoptando cuatro criterios: el aumento del número de las unidades administrativas, el crecimiento del número de funcionarios, aumento de los gastos ordinarios públicos y el aumento de los salarios de los funcionarios (2006: 289-328).

5. *El País*, 15 de febrero de 2008 (http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cerrojazo/paises/arabes/televisiones/Jazeera/elpepuint/20080215elpepiint_12/Tes).

6. Según la Ley nº 101/1992, las universidades privadas egipcias tienen que ser fundadas por decreto presidencial tras su aprobación en Consejo de Ministros, y más de la mitad de su capital ha de ser egipcio (Azaola, 2007a: 261).

7. Listado de los partidos políticos egipcios legalizados hasta 2007 www.idsc.gov.eg/ContactDirectory/ahzapDirectory.asp.

8. Sobre los Hermanos Musulmanes existe una muy amplia bibliografía. Indicativamente se puede consultar Carré (1982) y Kepel (2002).

9. Información obtenida de Oxford Business Group 20/9/07.

10. Según el artículo 40: «Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tienen los mismos derechos y deberes públicos sin discriminación de sexo, origen étnico, lengua, religión o creencia». El artículo 46 dice: «El Estado debe garantizar la libertad de creencia y la libertad de ejercer prácticas religiosas».

11. Según datos oficiales de 2007 los coptos serían 3,5 de un total de 70 millones de egipcios. Según Ayad (2002: 54) el 10% del total de la población egipcia.

12. Sobre Al Azhar véanse Zeghlal (1997); Martín Muñoz (1999); Arigita (2006).

13. Un ejemplo de la influencia que el sector más fundamentalista de estos grupos puede tener en la sociedad egipcia fue el caso del profesor de Estudios Árabes e Islámicos, Nasr Hamed Abu Zaid. En 1995, un tribunal egipcio le acusó de apóstata por sus escritos sobre el islam, obligándole a divorciarse de su mujer, ya que «una musulmana no puede contraer matrimonio con un apóstata». El grupo Al Yihad apoyó el veredicto y amenazó de muerte a Abu Zaid apoyándose en la jurisprudencia islámica, *sharia*. Abu Zaid y su mujer se exiliaron en Holanda. La orden de divorcio fue posteriormente suspendida pero se mantiene la declaración de apostasía. Otros ejemplos pueden verse en Arigita (2001-2005).

14. Tras las elecciones legislativas de 2005, Mubarak eligió a cuatro diputados coptos, tres mujeres y un hombre, de los diez escaños que asigna el presidente. En el gabinete formado tras dichas elecciones fueron nombrados dos ministros coptos y por primera vez en tres décadas fue asignado por Mubarak un gobernador copto en la provincia de Quena, con numerosa población copta. (Azaola, 2007b).

15. Este grupo comenzó en los negocios de la construcción, continuó en el campo del turismo y ahora invierte en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios, creando una de las compañías de telefonía móvil (Telecom) más potente de Egipto y con presencia en otros países árabes.

16. SIPRI Military Expenditure Database http://first.sipri.org/non_first/

milex.php Sobre la capacidad armamentística del Ejército egipcio véanse Azarva (2007) y Droz-Vincent (1999).

17. Puede consultarse una tabla con la participación de grupos islamistas en las elecciones de diferentes países árabes, incluido Egipto, en: www.carnegie-endowment.org/files/islam_elections_chart.pdf.

18. Según la ONG *Human Rights Watch*, más de 1.000 miembros de los Hermanos Musulmanes habían sido detenidos entre marzo de 2006 y marzo de 2007. En junio de 2007 permanecían arrestados alrededor de 800.

19. Mubarak ha ido prorrogando dicha ley desde 1981 a través de la resolución temporal n° 560/1981, justificando su aplicación en la necesidad de combatir el terrorismo. En 2005, influido también por el contexto internacional y la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente norteamericano Georges W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Mubarak prometió durante la campaña electoral sustituir la ley de estado de excepción por una ley antiterrorista más específica (Brown, Dunne y Hamzawy, 2007: 2).

20. El término «Gran Oriente Medio» fue acuñado por la Administración estadounidense para designar una región no contigua que abarca el mundo árabe más Irán, Turquía, Israel, Pakistán y Afganistán.

21. Sobre la inclusión de los jueces en las plataformas de oposición, véase Hawthorne y Nasr (2006).

22. Son los casos de los diarios *Al Dustur*, *Al Badeel*, *Al Karama*, *Al Masry al-Youm*, *Nahdet Misr*, *El Wasat*, *Al Osbou*, y de los semanarios *Al Fajr* o *Sawt al-Umma*.

23. Algunos ejemplos: <http://baheyya.blogspot.com/>; www.egybloggers.com/; www.manalaa.net/ (Premio Reporteros Sin Fronteras de la Deutsche Welle 2005); <http://misrdigital.blogspot.com/>; <http://arabist.net/>; <http://arabist.net/ara-bawy/>; <http://ihoudaiby.blogspot.com/>; <http://ana-ikhwan.blogspot.com/>.

24. Véanse Casa Árabe (2007) y Al-Shoubaki (2007).

25. Véase el seguimiento de los acontecimientos desde el *blog*: <http://arabist.net/>. Véase Beinin (2007).

26. La ley que regulaba la creación y funcionamiento de las ONG era la n° 32 de 1964. Dicha ley puede consultarse en Ben Nefissa (1991: 124-132). La ley fue modificada y pasó a ser la n° 84 de 2002 que puede consultarse en www.egypt.gov.eg/english/laws/ngo/index.asp.

27. Incluso Gamal Mubarak ha contraído matrimonio con Khadiya El Gammal, hija de uno de los magnates de la construcción del país, Mahmoud El Gammal.

28. Omar Suleiman no pertenece oficialmente al PND aunque su papel equivale al de un ministro sin cartera que asiste a los Consejos de Ministros. Su eventual candidatura para presidente del país le obligaría a dimitir de su cargo como director de los Servicios de Inteligencia Egipcios, para ocupar un alto car-

go dentro del partido al menos durante un año antes de las elecciones presidenciales.

29. El general Abu Ghazala se convirtió en un importante desafío para Mubarak hasta 1989, cuando fue acusado de intentar hacer contrabando de material militar. Anteriormente ocurrió el suceso de Amer y Naser (Kemou, 2007).

30. Edward S. Walker Jr. fue embajador estadounidense en Egipto e Israel. Citado en AA. VV. (2006).

31. <http://weekly.ahram.org.eg/index.htm> consultada el 10/10/07.

32. Palabras pronunciadas en enero de 2004 (Remnick, 2004).

33. Creada en 1946 como una ONG para velar por los intereses sociales de los ulemas y de sus familias, institucionalmente no forma parte de Al Azhar aunque en los años noventa ganó importancia al convertirse en un órgano importante de emisión de fetuas (Kodmani, 2005: 7).

34. Algunos diputados islamistas, como el portavoz de los Hermanos Musulmanes en el Parlamento, Al-Katatni, han mantenido encuentros privados con políticos demócratas como Steny Hoyer Véase «A separate meeting?», *Al Ahram Weekly*, mayo-junio de 2007 <http://weekly.ahram.org.eg/2007/847/eg2.htm>.

35. Egipto, con una contribución de 30.000 tropas y la apertura de su espacio aéreo, aseguró la cooperación árabe a Estados Unidos en la guerra de Golfo de 1990-1991. A cambio, Washington perdonó 7,1 millones de dólares de la deuda egipcia, y eliminó el 50% de su deuda externa por parte del Club de París (Ezzedine, 1999).

36. Para una visión histórica de las relaciones entre Cairo y Tel Aviv véase Kemou (2008).

37. A pesar de que Egipto no forma parte de los «petroestados» la renta se distribuye en un modo similar donde el Estado es el principal distribuidor de la riqueza (Pappe, 2005: 53).

38. Es el caso del «Centro de Apoyo a las ONG Egipcias», registrada como ONG egipcia e inaugurada en febrero de 2005. Es el resultado de un proyecto gestionado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) para el período 2000-2005 y patrocinado por el Ministerio de Asuntos Sociales egipcio. www.egyptngosupport.org/default.aspx.

39. Véase sobre el papel de Suleiman en dichas reuniones, la noticia «Hamas: Egipto se pronuncia», BBC Mundo.com, 6 de febrero de 2006. http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/international/newsid_4672000/4672456.stm.

40. Véase «An unanswered question: Who follows Mubarak?», *New York Times*, 1 de noviembre de 2007.

41. Véanse los anexos del *Arab Human Development Report 2005* (PNUD).

42. Véase Casa Árabe (2007), «Nuevas privatizaciones de bancos en

Egipto», *Boletín de Economía y Negocios*, año 1, n° 3, p. 8; «Battle of the bank», *Al Ahrām Weekly*, 2-8 de agosto de 2007.

Bibliografía

- AA. VV. (2006), «The Future of Egypt. Panel Discussion», *The Middle East Review of International Affairs (MERIA)*, vol. 10, n° 2, junio, <http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue2/jv10no2a3.html>.
- Abd Al Fatah, N., ed. (2004), *al-Munadamat al-Ahliyya al-Arabiyya wa-l-Hukumiyya*, Markaz al-Dirasat al-Siyasiyya wa-l-Istratiyya, al-Qahira.
- Al-Shoubaki (2007), «New Social Forms of Protests: Reality takes its Revenge», *ARI Newsletter*, <http://www.arab-reform.net/>.
- Álvarez Ossorio, I. y F. Izquierdo Brichs (2005), *¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí*, Los libros de la Catarata, Madrid.
- Arigita, E. (2001-2005), «Islam y cambio social: autoridad religiosa y opinión pública en el Egipto contemporáneo», *Awraq*, n° XXII, AECEI, 2001-2005, Madrid, pp. 326-350.
- (2006), *El islam institucional en el Egipto contemporáneo*, Universidad de Granada, Granada.
- Ayad, C (2002), *Géopolitique de l'Égypte*, Éditions Complexe, Bruselas.
- Ayubi, N. (1998), *Política y sociedad en Oriente Próximo*, Bellaterra, Barcelona.
- (2006), *Over-stating the Arab State. Politics and Society in the Middle East*, I.B. Tauris & Co Ltd, Nueva York.
- Azaola, B. (2005), «Egipto ante la sucesión de Mubarak: oposición política y emergencia de nuevos actores», en F. Izquierdo Brichs y T. Desrués, coords., *Actas del Primer congreso del Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM)* (Bellaterra-Barcelona 17-19 de marzo de 2005), Fimam, Barcelona, <http://www.fimam.org/Barbara%20Azaola.pdf>.
- (2007a), *La universidad como campo de acción sociopolítica en el Norte de África: el caso de Egipto*, Servicio Publicaciones Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, CD-ROM.
- (2007b), «La gestión de la diversidad étnica y religiosa en el Egipto contemporáneo», en C. De Cueto y A. Sid Ahmed, coords., *Droits Humains et Diversité ethnoculturelle dans l'espace euroméditerranéen: réalités et perspectives*, PUBLISUD, París.
- (2008), *Historia del Egipto contemporáneo*, Los libros de la Catarata, Madrid.
- Azarva, J. (2007), «From cold peace to cold war? The significance of Egypt's mi-

- litary buildup», *Middle East Review of International Affairs*, vol. 11, n° 1, <http://meria.idc.ac.il/>.
- Beinin, J. (2007), «The Militancy of Mahalla al-Kubra», *Middle East Report Online*, 24 de septiembre, <http://www.merip.org/mero/mero092907.html>.
- Beinin, J. y H. El-Hamalawy (2007), «Egyptian Textile Workers Confront the New Economic Order», *Middle East Report Online*, 25 de marzo, <http://www.merip.org/mero/mero032507.html>.
- Ben Nefissa, S. (1991), «L'Etat Egyptien et le monde associatif a travers les textes juridiques (introduction et problématique)», *Egypte / Monde Arabe*, n° 8, 4° trim., El Cairo, pp. 124-132.
- (2004-2005), «Le déblocage du débat démocratique en Égypte, legs nassérien et poids du secteur privé», en Jean-Yves Moisseron, dir., *L'Égypte: mondialisation et démocratisation, Maghreb-Machrek*, n° 182, invierno, pp. 59-78.
- (2007), «Egipto político en 2006: estacionamiento de la movilización democrática y confirmación del escenario de la sucesión hereditaria», *Anuario del Mediterráneo Med 2007*, IMEd, Fundación CIDOB, Barcelona, pp. 198-201.
- Birdsall, N. y L. O'Connell (1999), «Putting Education to Work in Egypt», *Carnegie Paper*, n° 5, agosto, <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=685>.
- Bronsveld, J. (1981), «Education et emploi: le produit du système éducatif et ses débouchés en Égypte», *Dimensions sociales de l'enseignement en Égypte*, Seminario CNRSC, CEDEJ y CEROAC, 11-13 de mayo de 1980, CEDEJ, El Cairo, pp. 175-209.
- Brown, N., M. Dunne y A. Hamzawy (2007), «Egypt's controversial constitutional amendments», Carnegie Endowment for International Peace, marzo, <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=19075&prog=zgp&proj=zdrl,zme>.
- Carré, O., ed. (1982), *L'Islam et l'état dans le monde d'aujourd'hui*, PUF, París.
- Casa Árabe (2007), «Los trabajadores egipcios reclaman derechos y aumentos de salario», *Boletín de Economía y Negocios*, año 1, n° 3.
- Corm, G. (2003), *Le Proche-Orient éclaté, 1956-2003*, Gallimard, París.
- Droz-Vincent, P. (1999), «Le militaire et le politique en Égypte», *Monde arabe Maghreb-Machreq*, n° 162, julio-septiembre, pp.16-35.
- El Amrani, I. (2005), «Controlled Reform in Egypt: Neither Reformist nor Controlled», *Middle East Report Online*, n° 15, diciembre MERIP, <http://www.merip.org/mero/mero121505.html>.
- El Ghobashy, M. (2003), «Egypt's summer of discontent», *Middle East Report Online*, 18 de septiembre, MERIP <http://www.merip.org/mero/mero091803.html>.
- Ezzedine, F. (1999), «Mubarak in Washington Assessing the US-Egyptian Bila-

- teral Relationship», *Middle East Report Online*, 30 de junio, MERIP, <http://www.merip.org/mero/mero063099.html>.
- Ferrié, J. N. (2003), «Les limites d'une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord», *Maghreb-Machrek*, n° 175, primavera, pp. 13-33.
- Galal, A. y R. Lawrence, eds. (1998), *Building Bridges: An Egypt-U.S. Free Trade Agreement*, Brookings Institution Press, Washington.
- Gohar, N. (2006), «Political Participation within the Egyptian Context», documento presentado en *Seventh Mediterranean Social and Political Research Meeting, Florence and Montecatini Terme 22-26 March 2006*, organizado por Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute.
- Guaaybess, T. (2005), *Télévisions arabes sur orbite. Un système médiatique en mutation (1960-2004)*, CNRS éditions, París.
- Hawthorne, A. y H. Nasr (2006), «Egypt: Judges win Public Support but not Government Concessions», *Arab Reform Bulletin*, vol. 4, n° 4, mayo.
- Hernando de Larramendi, M. (2000), «Argelia, Túnez, Mauritania y Libia durante los años noventa: entre el pluralismo autoritario y el ocaso de las masas», *Cuadernos de estrategia*, n° 106, Madrid, pp. 107-156.
- Hinnebusch, R. (1985), *Egyptian Politics under Sadat. The post-populist development of an authoritarian-modernizing state*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Izquierdo, F. (2005), *Guerra y agua: conflicto político y carestía de agua en Palestina*, Araganey, Santiago de Compostela.
- (2007), «Poder y estado rentista en el mundo Árabe», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n° 2, mayo-agosto, http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim%202/Ferran_Izquierdo_art.htm.
- Kemou, A. (2007), *Nasser's National Interest. A «Sociology of Power» Analysis*, Fimam, Altafulla, <http://www.fimam.org/4.htm>.
- (2008), «From Cairo to Tel Aviv: Nasser's differential accumulation of power and its impact on the relations between Egypt and Israel», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, n° 5, mayo-agosto, <http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/Revista/reim5/pdfs/04-AKemou.pdf>.
- Kepel, G. (2002), *La Yihad. Expansión y decline del islamismo*, Ediciones Península, Barcelona.
- Kienle, E. (2000), *A grand delusion. Democracy and Economic reform in Egypt*, I. B. Tauris Publishers, Londres/NuevaYork.
- Kodmani, B. (2005), «The dangers of political exclusion: Egypt's Islamist Problem», *Democracy and Rule of Law Project, Carnegie Endowment for International Peace*, Carnegie papers, n° 63, Washington, D. C.
- Martín Muñoz, G. (1999), *El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista*, Bellaterra, Barcelona.

- (2006), «Egipte en el món Àrabe. Un Lideratge amb Alts i Baixos», *DCIDOB, Egipte, encaix en transició*, n° 97, Fundació CIDOB, Barcelona, pp. 4-7.
- Momani, B. (2003), «Promoting economic liberalization in Egypt: from U.S. foreign aid to trade and investment», *MERIA Journal*, vol. 7, n° 3, septiembre, <http://meria.idc.ac.il/journal/2003/issue3/jv7n3a6.html>.
- Ortega Gálvez, M. (1997), «Una experiencia modernizadora en la periferia: Las reformas del Egipto de Muhammad Ali (1805-1848)», *Scripta Nova*, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, n° 8, 1 de octubre.
- Pappe, I. (2005), *The Modern Middle East*, Routledge, Londres.
- PNUD (2005), *Arab Human Development Report 2005*.
- Remnick, D. (2004), «Going Nowhere. In Mubarak's Egypt, democracy is an idea whose time has not yet come», *The New Yorker*, 12 de julio, http://www.newyorker.com/archive/2004/07/12/040712fa_fact1.
- Said Aly, A.M. (2005), «Egipto y democracia», *Vanguardia Dossier*, n° 15, abril/junio, pp. 96-105.
- Springborg R. y J. Sfakianakis (2001), «The Military's Role in Presidential Succession, en May Chartouni-Dubarry, ed., *Armée et nation en Egypte: pouvoir politique, pouvoir militaire*, Ifri, n° 31, febrero, pp. 57-72.
- Waterbury *Democracy Without Democrats: Politics of liberalization in the Arab and Muslim World*, IB Tauris, Londres pp. 23-47.
- Zeghlal, M. (1997), *Los guardianes del islam, los intelectuales tradicionales y el reto de la modernidad*, Ediciones Bellaterra, Barcelona.

Egipto, de ayer a hoy

Gema Martín Muñoz

Egipto ha ocupado una relevante centralidad en la era contemporánea árabe a través de su liderazgo (epicentro de grandes hitos políticos), su fuerza creativa e intelectual y su valor estratégico.

En Egipto nacieron y/o se desarrollaron las grandes corrientes del pensamiento político contemporáneo árabe: el liberal, el islamista (Hermanos Musulmanes) y el socialista. Fue en Egipto donde surgieron los primeros partidos políticos del mundo árabe (el P. Nacional, Asociación del Joven Egipto), donde se pusieron en práctica las primeras instituciones representativas (Maylis al-Shura del jedive Isma`il) y donde la Monarquía, la proclamación de la República y el nacionalismo panarabista fueron experiencias de gran influencia regional.

Es el país más poblado del mundo árabe (74 millones) y en 2025 será probablemente, tras Turquía, el que cuente con la mayor población de todo el Mediterráneo. Al estar situado en un cruce de caminos entre dos continentes y tres mares (Mediterráneo, mar Rojo y océano Índico) y contar con el canal de Suez como vía navegable de gran relevancia estratégica, es un punto geográfico clave para el aprovisionamiento petrolero de Europa y la mediación en cualquier conflicto regional e internacional. Su ejército es también el más numeroso del mundo árabe (supera el medio millón de soldados) y el más experimentado de toda la región desde el siglo XIX, lo que le ha valido ser la principal fuerza militar en la región.

Esa acumulación de factores, le capacitó durante todo el siglo XX, tanto para «promover la revuelta» contra Occidente (nacionalización del canal de Suez en 1956, alianza estratégica con la URSS en 1960), como para ser su aval en la región (alianza con Estados Unidos desde mediados de los setenta, firma de los acuerdos de Camp David en 1978, participa-

ción militar en la guerra del Golfo de 1991), dotándole de un gran valor añadido en el orden internacional.

Pero la guerra del Golfo en 1991 no solo fue el escenario a partir del cual se reestructuró el orden internacional monopolar sino también el de la región árabe. En los meses que trascurrieron desde agosto de 1990 a marzo de 1991 se resquebrajaron todos los sistemas de alianza interárabes, se manifestaron sin disimulo los antagonismos locales, salieron a la luz los enormes problemas de legitimidad popular de los regímenes árabes y se desvelaron las «inconfesables» dependencias con Estados Unidos. Por primera vez la mayor parte del mundo árabe se encontraba alineado en el mismo lado que Israel, a la vez que todas las organizaciones interestatales árabes mostraron su ineficacia. Es decir, el orden supraestatal árabe quedaba definitivamente desmembrado. El éxito de Egipto en 1961 impidiendo la invasión iraquí de Kuwait, se mutaba en fracaso y ponía de manifiesto la dimensión del cambio que este país y su región habían experimentado. El entorno árabe como sistema regional conjunto había dejado de existir, acentuándose la política individual y bilateral por parte de cada Estado.

Unido a esto, Estados Unidos ha reforzado desde entonces su control político sobre los regímenes árabes, dado que el nuevo orden les garantiza el apoyo de Washington para sobrevivir en el gobierno siempre que asuman el proyecto estratégico estadounidense, acepten sus parámetros de la «guerra contra el terrorismo» y no «promuevan la revuelta». Estas circunstancias han favorecido una situación de gran dependencia de las élites gobernantes con respecto a la superpotencia para mantener su poder, quedando muy reducido el margen de maniobra en el que pueda desarrollarse un liderazgo local con capacidad para cohesionar la región en torno a intereses comunes y estables. Dicho de otra manera, ha tenido lugar un proceso de debilitamiento del liderazgo local a favor del liderazgo exterior.

En consecuencia, ese nuevo marco regional e internacional ha desfavorecido la capacidad de liderazgo regional árabe de Egipto y ha engendrado una dinámica de autoritarismo observable en la reforma de la Constitución, en el acoso a la principal oposición, los Hermanos Musulmanes, y en el último proceso electoral de las municipales de mayo de 2008. A manera de ejemplo, de los más de 5.000 candidatos que presentaron los Hermanos Musulmanes, solo 21 fueron admitidos; y de los 4.000 que presentaban los otros partidos de oposición (1.700 el partido

liberal de al-Wafd, 600 el partido de izquierdas al-Tagammu' y 700 el también liberal al-Gad) solo 1.200 consiguieron registrarse. Incluso en las filas del partido gubernamental, Partido Nacional Democrático (PND), hubo conflictos entre distintos pretendientes a las candidaturas (y finalmente 600 dimitieron), lo que se interpretó como parte de las tensiones que viven las diferentes familias políticas del partido desde hace un tiempo ante la futura sucesión del presidente de la República. La tentación de Hosni Mubarak de erigir como sucesor a su propio hijo Gamal no cuenta con el consenso de todos.

El cisma entre sociedad y gobierno se va ampliando en el país del Nilo y junto a la esfera política, la social también se va crispando (huelgas y manifestaciones del sector de trabajadores en la industria del textil, denuncias de los defensores de derechos humanos, presiones sobre la prensa más independiente). En conclusión, un sistema político con grandes dificultades para emanar legitimidad entre su población y desarrollar un liderazgo regional capaz de definir sus propios intereses.

6. Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo

Eduard Soler i Lecha y Luciano Zaccara

Introducción

Dos imágenes coexisten sobre el sistema político saudí. A veces se muestra el reino como un país monolítico, en el que impera la rigidez en las costumbres y un régimen autoritario en que el poder se concentra en las manos de la familia real sin que se atisbe una alternativa de gobierno creíble. Otros han caracterizado la situación actual como si los cimientos de la Casa Real estuvieran tambaleándose y como si desde el 11 de septiembre, la caída de los al-Saud y el cambio de régimen fueran inevitables. Ninguna de las dos imágenes refleja con exactitud la realidad del reino: ni es tan precaria la posición actual de la Casa Real, ni es cierto que no existan movimientos de oposición y que no se produzcan cambios en el país.

Este capítulo se inicia con un recorrido histórico que muestra cómo se formó el actual Estado de Arabia Saudí y las élites que lo componen, abordando también la cuestión de si en este país existe una única élite o diversas élites en competición. Seguidamente se analizan los movimientos de oposición, señalando que los movimientos panarabistas e izquierdistas son hoy mucho menos importantes que en décadas anteriores y que actualmente esta posición ha sido ocupada por el islamismo radical y, en menor medida, por movimientos liberales de distinto signo y por grupos excluidos de los principales círculos de poder como la población chíf. Hecho lo cual analizaremos los procesos que se han producido recientemente de acomodación, apertura o represión por parte de distintas instancias gubernamentales sobre estos movimientos de oposición. Ello nos permitirá describir cómo se está configurando la estructura de poder en Arabia Saudí y qué escenarios de futuro podemos intuir.

Cartografía de la formación de las élites y de su control de los recursos de poder

Definición y formación de las élites

Élites centrales

El Estado de Arabia Saudí surgió formalmente en 1932, tras la unificación de los reinos de Najd y Hiyaz, como resultado de un proceso de expansión territorial iniciado por Abd al-Aziz ibn Saud en el centro de la península Arábiga. Partiendo en 1902 desde Riad se logró unificar así las cuatro regiones principales del reino; Najd, en el centro; Hasa, en el este; Hiyaz, al oeste, donde se encuentran La Meca y Medina, y Asir, en el sur, en la frontera con Yemen. En medio de un contexto geográfico tribal, la necesidad de contar con un grupo militar permanente y fiable que no estuviera atado a las costumbres y lealtades tribales obligó a Abd al-Aziz a crear en 1912 un grupo de élite denominado *Ijwan*. Aunque provenían de origen beduino y nómada, los *Ijwan* fueron sedentarizados en asentamientos agrícolas, entrenados militarmente e instruidos en el wahabismo,¹ la secta islámica a la que pertenecía Abd al-Aziz, y se convirtieron en un grupo ultra tradicionalista, que con los años llegó a convertirse en poderosa arma que conquistó para el futuro monarca todo el territorio peninsular, y puso en jaque a los reinos hachemíes de Transjordania e Irak. Pero su poder militar y su conservadurismo se convirtieron en una amenaza incluso para el propio rey. Su oposición a la relación con Gran Bretaña y a la introducción de ciertos avances tecnológicos como el telégrafo y el teléfono los enfrentó a Abd al-Aziz y en 1926 se rebelaron, iniciándose una campaña militar contra los *Ijwan* hasta someterlos, encarcelarlos o exterminarlos (Niblock, 2006: 32; Less, 2006: 38). Los miembros que no participaron en la rebelión y los que fueron sometidos y reeducados formaron parte de la Guardia Nacional, el cuerpo militar que se encarga de la protección de la familia real y los lugares sagrados de La Meca y Medina.

La formación y consolidación de las élites primarias en Arabia Saudí se ha dado de manera simultánea con ese proceso de creación del Reino. Las conquistas militares realizadas entre los años veinte y treinta fueron seguidas de diversos mecanismos de cooptación de las diferentes élites regionales y de alianzas por parte de los Saud. Estos mecanismos

permitían en primer lugar, la legitimación del dominio saudí sobre el territorio conquistado, y en segundo lugar, la creación de una incipiente burocracia estatal con recursos financieros suficientes para desempeñar sus funciones.

Este proceso simultáneo de consolidación de la élite central y el Estado saudí se ha dado según Ménoret (2004: 121) gracias a tres alianzas sucesivas concretadas por los Saud.

En primer lugar, una alianza entre la familia al-Saud y las diferentes tribus locales con el objetivo de poner fin al sistema tribal para reemplazarlo por un nuevo sistema de lealtades hacia la casa Saud. Estas alianzas se fraguaban a través de los matrimonios con mujeres de cada una de las tribus aliadas o conquistadas. La práctica eliminación de los *Ijwan* en 1929, quienes siendo de origen tribal sirvieron para someter al resto de las tribus de la península, marcó el fin del sistema tribal y el triunfo del nuevo sistema.

En segundo lugar, tras la toma del Hiyaz, la alianza de los al-Saud con la oligarquía político-militar del Najd y los gremios de La Meca y Medina, que vivían de la renta de la peregrinación —*Hayy*— y recogían para el tesoro real la multitud de tasas, derechos de aduana e impuestos que constituyeron la piedra angular del presupuesto del Estado hasta mediados de los cincuenta.

En tercer lugar, la alianza fundacional de una administración moderna, que reunió a los al Saud y a los grandes mercaderes de Yidda, en Hiyaz.

La alianza en la que se basó el poder saudí hasta los años setenta no fue por lo tanto de naturaleza tribal, ni tampoco religiosa, ya que el poder religioso fue supeditado al poder real desde la unificación de la península, sino en la alianza con los comerciantes del Hiyaz. El capitalismo urbano y la oligarquía supratribal estructuraron la forma original del moderno Estado saudí.

En estas alianzas los matrimonios de la familia saudí tenían como objetivo la superación del sistema tribal, para controlar lo esencial del poder político-militar en manos de una única familia. Familia y Estado se confunden por lo tanto como un objetivo buscado por la élite primaria para la acumulación originaria de poder y la consolidación de la unidad territorial. Esta interpretación de Ménoret ubica a los matrimonios del rey Abd al Aziz dentro de la estrategia de consolidación de la élite más allá del hecho tribal en sí mismo, fortaleciendo los lazos de lealtad esta-

tal de las élites secundarias (nobleza tribal y clases comerciantes) y la élite religiosa.

En otras palabras, los matrimonios sirvieron para remarcar la subordinación de la nobleza del Najd e Hiyaz a la casa Saud, no su destrucción ni su despojo absoluto de poder político y económico, sino su pertenencia a una nueva red de patrocinio real, a la nueva élite estatal bajo la autoridad y control absoluto del rey Abd al-Aziz y su descendencia. La identificación entre el nuevo Estado saudí y la familia real estaba detrás de esta estrategia de dominación, que buscaba superar tanto el hecho tribal como la propia justificación religiosa que dio origen a la alianza inicial entre Abd al-Wahhab y Abd al-Aziz Ibn Saud a fines del siglo XVIII. La utilización de la rígida doctrina wahabí como fundamento legal del nuevo reino ayudó también a debilitar las bases jurídicas de la solidaridad y unidad tribal, reforzando los lazos estatales y con los al-Saud.

Abd al-Aziz era consciente de que la violenta historia de sucesiones vivida en la familia Saud desde 1744 sería un problema a resolver para garantizar la supervivencia de la línea sucesoria que controlaría el flamante Estado. Posteriormente el mismo rey gestionaría dentro de la élite, la aparición de un grupo diferenciado formado por su propia línea de descendencia, que aún hoy perdura en la jefatura del Estado, en detrimento de sus hermanos y sobrinos, si bien, como mencionaremos más adelante, debido a la natural desaparición de su descendencia primaria, se han establecido recientemente mecanismos institucionalizados de sucesión monárquica para garantizar la continuidad del linaje principal saudí.

Así, Abd al-Aziz ubicó a sus hijos en los principales puestos relacionados con la seguridad y defensa del reino y la Casa Real. A su hijo Fahd en el Ministerio de Defensa, a Musa en la Guardia Real, a Jalid en la Guardia Nacional y a Saad en la Guardia Especial. Con posterioridad a su desaparición en 1953, los que han sucedido en la jefatura del reino a Ibn Saud han sido sus hijos, Saud (1953-1964); Faisal (1964-1975); Jalid (1975-1982), Fahd (1982-2005) y Abdallah (2005-). Estos hijos han sido concebidos por cinco madres distintas, pertenecientes a las élites tribales subordinadas. En un caso, Faisal, la madre pertenecía a la familia al-Shaikh Abd al-Wahhab, lo que reflejaba la continuidad de la alianza inicial al-Saud—al-Wahhab. El príncipe heredero, Sultán, es hermano de padre y madre del rey Fahd, y forma parte de lo que se conoce como los «siete sudairfes», en referencia a los siete hijos de la madre sudairf que controlaban los principales puestos de gobierno durante las décadas de

1970 y 1980 Entre ellos también se encuentran los príncipes Turki, ex ministro de defensa y aviación, y Salman, gobernador de Riad.

Actualmente sobreviven casi una veintena de hijos del fundador del Estado saudí, el último de ellos nacido en 1945. Las diversas disputas entre los hijos de las diecisiete esposas de Abd al-Aziz han ocasionado numerosos enfrentamientos por los derechos sucesorios. Por ello, en los años noventa, y luego del establecimiento de la Ley Fundamental de 1992, que creó la base legal para la designación de herederos, se comenzó un debate sobre la institucionalización de un proceso de selección de los monarcas y herederos al trono para garantizar la continuidad de la casa Saud, y dentro de ella, las ramas principales.

Este proceso culminó en diciembre de 2007, con el establecimiento de la Comisión Bay'a por parte del rey Abdallah. La comisión está formada por 35 hijos y nietos del fundador del Estado Abd al-Aziz Ibn Saud, y la ley que regula su funcionamiento establece entre sus principales responsabilidades la selección del príncipe heredero y la redacción de procedimientos en previsión de diversas eventualidades como la muerte, enfermedad o incapacidad del monarca o del príncipe heredero o de ambos simultáneamente. También se establece en la ley que la Comisión Bay'a puede llegar a asumir el gobierno de manera provisional en caso de desaparición o incapacidad simultánea del rey y el príncipe, con el objetivo de permitir una continuidad en las autoridades del Estado (Al Badi, 2008: 4).

Este mecanismo es, en definitiva, la clave para el traspaso del poder desde la primera a la segunda generación heredera de Abd al-Aziz, manteniendo a la élite vinculada a la familia real en el control de todos los recursos del Estado, por un sistema poco común en un gobierno monárquico hereditario. El establecimiento de este mecanismo «democrático» entre la propia élite parece ser la única vía para eliminar futuras disputas sucesorias, garantizando una ampliación del proceso de toma de decisiones dentro de la élite central, teniendo en cuenta los diversos reclamos de apertura política y las protestas que deslegitiman la autoridad de los Saud.

En términos cuantitativos, la élite central saudí está formada por los miembros de la familia real, pero la cuantificación de los mismos es objeto de discusión entre los estudiosos y analistas del tema. Mientras que para algunos medios de prensa² y analistas la cantidad ronda los 7.000 u 8.000 miembros (Kéchichian, 2008), para otros la cifra llega a 25.000.³

La falta de acuerdo en las cifras queda reflejada en el artículo de Simon Henderson (2004: 2) quien sitúa en 5.000 la cantidad de príncipes, y en cerca de 25.000 la suma de las familias incluyendo princesas y cónyuges no reales, pero reconociendo que «podrían ser incluso el doble, porque no hay estadísticas». En lo que sí concuerda la mayoría de la literatura es en la cantidad de miembros de la familia real influyentes en las políticas del Estado saudí. La suma ronda entre 100 y 200 miembros, entre los que se incluyen los hijos y nietos de Ibn Saud.

Élites religiosas

La alianza que se formó entre el reformador Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) y Muhammad Ibn Saud, gobernante de Dariya, en 1744, estableció la base sociopolítica para la creación de un emirato con legitimidad religiosa en la península Arábiga, si bien no llegó a consolidarse hasta entrado el siglo XX. A la vez que sirvió como mecanismo simbiótico entre la expansión del dominio militar de los Saud y religioso de la secta wahabí, esta alianza significó la división del trabajo intraélite en el futuro Estado saudí. Mientras que los descendientes de Ibn Saud se encargarían del control de los asuntos principales del Estado, la defensa y seguridad y la economía, los descendientes de al-Wahhab se encargarían de los asuntos religiosos, la justicia y la educación. Esta división no siempre ha sido equitativa ni satisfactoria para la clase clerical, que en numerosas ocasiones ha llegado a cuestionar las decisiones, incluso la legitimidad, de la familia gobernante. Teniendo en cuenta también que la cantidad de descendientes del fundador del Estado saudí, Abd al-Aziz, fueron muy superiores a los descendientes de al-Wahhab, que por lo general no han sido tan prolíficos, las diferencias cuantitativas generadas a lo largo del siglo XX han sido considerables.

Desde la creación del Estado en 1932 un consejo de entre diez y quince jueces religiosos de Najd y Hiyaz, entre ellos muchos descendientes de al-Wahhab, presididos oficiosamente por el Mufti de Riad, asesoraban al rey Abd al-Aziz sobre los asuntos religiosos, pero no rendían cuenta al monarca, sino al Mufti, quien también era independiente de la corona. Pero esta situación cambió definitivamente en 1971, cuando el rey Faisal anunció la creación del Consejo de los Ulemas. Por primera vez un foro permanente fue creado para servir al rey en sus futuras

necesidades de autorización y aprobación religiosa (Bligh, 1985: 39). Anteriormente a la creación del Consejo se habían producido algunos enfrentamientos entre los ulemas y los monarcas saudíes relacionados, entre otros, con temas como la introducción de innovaciones tecnológicas en el reino, la modernización del ejército o la construcción de centrales de radio, que no eran aprobados por los religiosos. La ocasión más conflictiva ocurrió en 1963, cuando sin aprobación previa por parte de los ulemas el rey Faisal autorizó el establecimiento de estaciones de televisión en Yedda y Riad. Los ulemas tomaron las calles en protestas que se saldaron con la muerte de un príncipe saudí, sobrino de Faisal (Bligh, 1985: 41).

La creación del Consejo, por lo tanto, sirvió para encausar y disciplinar a los ulemas, que terminaron por subordinarse definitivamente a la autoridad del Estado, eliminando la relación simbiótica que habían desarrollado desde el siglo XVIII. Ya con anterioridad, el proceso de toma de decisiones en Arabia Saudí estuvo concentrado en dos círculos concéntricos: el primero formado por los príncipes mayores (el rey, el príncipe heredero, el primer ministro), y el segundo formado por el Consejo de Ministros. Los ulemas, ya sea que formaran parte del Consejo o no, no estarían representados en el primer círculo, pero en cada consejo de ministros desde 1960 ha habido al menos un par de ulemas, y de entre ellos los más destacados han pertenecido a la familia de al-Wahhab.

Durante muchos años, ninguna de las carteras ministeriales importantes ha estado manejada por un religioso. Ningún miembro de los ulemas ha servido como primer ministro, o ministro de asuntos exteriores, economía, defensa, aviación, salud, interior, comunicaciones, petróleo, etc. Los ulemas saudíes han ocupado, en cambio, los cargos de educación, educación superior y justicia en diversos períodos de la historia saudí. En otras palabras, los ulemas dentro del gobierno continuaron su línea de actividad, pero con un reducido margen de maniobra ya que dependían del primer ministro.

La designación del primer ministro de Justicia es un ejemplo de esta subordinación y dependencia de la élite religiosa respecto de la élite central del Estado saudí. Shaykh Muhammad al-Harkan, que reemplazó al gran Mufti tras su muerte en 1969, fue designado ministro en 1970, por decreto real de Faisal, quien no designó un sucesor del Mufti, creando en cambio el ministerio y asignándole la responsabilidad definitiva de la interpretación de la Sharia, que anteriormente era una prerrogativa del

Mufti. Esto situó la interpretación fuera del sistema religioso para trasladarlo al sistema político, al otorgar la responsabilidad al ministerio que reportaba a la más alta autoridad del Estado, al contrario del Mufti, que era independiente (Bligh, 1985: 44).

Así pues, la subordinación de la élite religiosa dio lugar a la creación de un *establishment* religioso estatal, compuesto por los siguientes grupos:

- El Consejo de los Ulemas: Emite fatuas sobre los temas públicos más importantes. Establecido en 1971 y presidido por el gran Mufti, está situado en la cúspide de la pirámide religiosa saudí, siendo la última instancia en interpretación de la Sharia.
- El Comité Permanente para la Opinión Legal y la Investigación Científica: Este comité es responsable de investigar, suministrar recomendaciones jurídicas y proveer apoyo burocrático al Consejo de los Ulemas.
- La oficina del Gran Mufti: quien es simultáneamente el jefe de los dos cuerpos anteriores.
- El Consejo Supremo de Asuntos Islámicos y el Consejo de Guía y Misión Islámica: ambos creados en 1994. El ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Islámicos y Guía Islámica están respectivamente nominados para dirigir estos consejos. Ellos son responsables de la orientación de los saudíes en el extranjero, del comportamiento moral y de las conductas adecuadas de los funcionarios de mezquitas (Bachar *et al.* 2006: 15).

Estos consejos fueron un intento más de regular las mezquitas y por ende sortear la autoridad de los ulemas no controlados por el Estado. La docena de ulemas que son miembros de estos organismos son los más influyentes del sector religioso. Junto a ellos, hay miles de ulemas menos importantes que ostentan diversos puestos en agencias gubernamentales como son:

- El Ministerio de Asuntos Islámicos, Instrucción Islámica y Plegaria.
- El Comité de control de lo lícito y lo ilícito, conocido como Mutawiya, que se encarga de hacer cumplir las fatuas y castigar a quienes no cumplan con sus obligaciones religiosas.

- La Liga Musulmana Mundial, agencia gubernamental dedicada para expandir las doctrinas wahabitas entre los otros estados musulmanes.
- El Consejo Superior de Qadis.
- Los muftis de las grandes mezquitas de La Meca y Medina.
- Las cortes de Sharia.
- Imams de mezquitas.
- Las universidades islámicas, que están subordinadas al Ministerio de Educación y tienen que seguir las instrucciones del Mufti.
- El Ministerio de Educación.

Los ulemas y sus familias suman entre 7.000 y 10.000 personas, de las cuales 30 o 40 tienen influencia política. Se observa, además, que desde el establecimiento del Estado Saudí, los ulemas provenientes del Najd reemplazaron gradualmente a los provenientes del Hiyaz en puestos claves (Bachar *et al.*, 2006: 15), y los descendientes de Ibn Saud fueron desplazando a los descendientes de al-Wahhab (Bligh, 1985: 38).

Élites comerciales y burocráticas

El surgimiento y consolidación de las élites burocráticas y comerciales en Arabia Saudí se produjo de manera simultánea con la creación del Estado y con el proceso de identificación del Estado con la familia Saud (Ménoret, 2004: 110). De esta manera ambas élites quedaron subordinadas al Estado-familia, y por lo tanto fueron subsidiarias, clientas y proveedoras de un Estado que, desde su creación, subsistió con un modelo rentista de economía.

Este modelo de Estado rentista ya existía antes de la aparición del petróleo en 1938. En las décadas de 1920 y 1930, la mayor parte de los ingresos del incipiente Estado saudí procedían del impuesto religioso —*zakat*—.

El *zakat* pagado en efectivo debía basarse en el precio medio del ganado. Sobre los productos agrícolas se imponían otros tributos, calculados al 5% de las cosechas cultivadas en tierras de regadío y al 10% de secano. El oro y la plata estaban gravados al 2,5% de su precio. Además de estos tributos,

Abd al-Aziz impuso un 8% de derechos arancelarios en Hasa e Hiyaz. Asimismo hizo obligatorio el pago de *yizga* (un impuesto islámico que gravaba a los no musulmanes). Este incluía a los chifes de Hasa y a los comerciantes no musulmanes, sobre todo cristianos e hindúes (Al-Rasheed, 2003: 124).

Con la toma del Hiyaz, la raíz financiera del Estado saudí pasó a centrarse en la constitución de un Estado moderno y centralizado en torno a una administración fiscal eficaz amparada en una tecnocracia eficiente y en el flujo del dinero proveniente de lo que generaba la peregrinación a La Meca y el comercio del Hiyaz y de las provincias orientales, que se convirtieron en la fuente principal de ingresos del Estado.

La llegada del petróleo solo profundizó ese mecanismo presupuestario de Estado rentista, que se reforzó en 1943 con el acuerdo de préstamo-arriendo firmado con Estados Unidos, que otorgó unos ingresos muy superiores a los recibidos hasta el momento, lo que acrecentó la dependencia de las élites del Estado. Y a su vez, «los ingresos del petróleo permitieron la consolidación de una familia real cohesionada, unida ahora por unos intereses económicos efectivos en vez de por unos vagos lazos genealógicos y de sangre» (al-Rasheed, 2003: 125). El petróleo permitió también al Estado saudí desarrollar una relación particular con su sociedad. Durante décadas la base de esta relación ha sido la provisión de bienes y servicios a la sociedad por parte del Estado con la sola expectativa de lealtad política a cambio (Gause III, 2002: 202). De esta manera ha surgido una especie de clase contratista que ha dependido del Estado tanto para su desarrollo y supervivencia interna como para su proyección internacional.

En cuanto a las clases burocráticas, durante los años treinta, el Ministerio de Asuntos Exteriores se apoyó inicialmente en comerciantes saudíes en el extranjero, miembros de familias del Najd e Hiyaz dedicadas al comercio, con un papel destacado en creación de empresas y casas comerciales en puertos y ciudades extranjeras. Provenían de las familias de los Mandil, los Nafisi, los Faisán y los Gosaybi, que formaban parte de las comunidades hadar de Najd, Hasa e Hiyaz (Al Rasheed, 2003: 124). Con el crecimiento de la burocracia estatal en años posteriores, estas familias se convirtieron en el núcleo del funcionariado saudí.

Otra de las consecuencias del pacto bienes y servicios por lealtad, es la referente a la seguridad interna. El pacto social entre los ciudadanos

saudíes y el Estado incluía la defensa de aquellos por este, sin requerirles servicio militar. Arabia Saudí es el único país importante en Oriente Medio que no tiene servicio militar. Las razones esgrimidas para ello pueden ser variadas, la existencia de identidades regionales irresueltas y la desconfianza en un ejército poco leal a la corona, la excesiva confianza en los pactos militares con el extranjero para garantizar la estabilidad del régimen, etc. (Gausse III, 2002: 202).

Los recursos controlados por la élite

El Estado

Como se ha visto en el apartado anterior, la simultaneidad en el proceso de creación del Reino de Arabia Saudí y la consolidación de la élite gobernante, ha llevado a la práctica identificación entre la familia al-Saud y el Estado, desdibujándose prácticamente las diferencias entre lo uno y lo otro. Esto hace que el recurso Estado esté totalmente controlado por la élite central, es decir, la familia real y su círculo inmediato, y que todos los recursos derivados de él, el capital, la coacción, la ideología y la información, estén igualmente controlados por la élite central.

El saudí es un Estado rentista por excelencia. Cumple las condiciones descritas por Mañé y Cámara: una economía basada en la exportación de petróleo sin elaborar; intervención pública del gobierno basada en los ingresos obtenidos de la exportación; políticas presupuestarias principalmente de gasto y con el objetivo de legitimar el régimen; economía no productiva y basada en la renta petrolífera que mantiene al sector servicios y las importaciones; y dependencia directa de la economía respecto de los precios del petróleo (Mañé y Cámara, 2005). Sin menospreciar la importancia de las rentas del petróleo, cabe señalar que, como explicamos anteriormente, el rentismo saudí ya existía antes de su conversión a la economía petrolífera, en función de la existencia de la renta producida por la peregrinación a La Meca. Sin embargo, la llegada del petróleo agudizó el proceso de concentración de la renta en el Estado, y por lo tanto también de concentración de la renta en la élite central, favoreciendo los mecanismos redistributivos internos. Esta redistribución se hacía primero entre los miembros de la propia familia real, luego entre los miembros de las élites tribales que forman parte de la élite fundacio-

nal del Estado saudí, las élites religiosas, comerciales y militares, a través de diversos mecanismos clientelares, pero principalmente con la generación de puestos directivos y administrativos en el Estado. El aparato del Estado ha adquirido por lo tanto unas dimensiones enormes, que solo es posible de mantener gracias a la ingente cantidad de recursos financieros que se concentran en él gracias a la renta petrolera.

Como se ha mencionado con anterioridad, el proceso simultáneo de consolidación de la élite y de creación del Estado saudí, ha hecho de este último un recurso básico en el control del poder de la élite central pero también para la compensación hacia aquellos grupos periféricos que no controlan ni el aparato del Estado ni la renta petrolera, con el objetivo de evitar su competición por el poder (Izquierdo, 2007).

Capital

Existen tres aspectos relevantes a tener en cuenta con relación al control del recurso capital por parte de las élites saudíes: los recursos directos de la renta petrolera; los recursos financieros derivados de la misma que se conocen como fondos soberanos; y los recursos financieros particulares de cada miembro de la élite.

En cuanto a los recursos directos del petróleo, la compañía petrolera ARAMCO —Arab American Company— fue creada a través de un acuerdo entre el gobierno saudí y la Standard Oil de California en 1933, para exploración y explotación petrolera en la provincia oriental, que recién comenzaría a ser rentable a partir de 1938. En los años cincuenta se logró un acuerdo para compartir los ingresos por la explotación petrolera por partes iguales (50/50). En 1973 el gobierno saudí había adquirido el 25% de la compañía, llegando a poseer el 60% de la propiedad en 1974 y al control completo en 1980. Desde ese momento y hasta hoy, el control financiero de ARAMCO pertenece al Estado saudí, produciendo más del 95% del petróleo saudí. El petróleo representa más del 90% de las exportaciones del país y cerca del 75% de los ingresos estatales. El superávit en la balanza comercial saudí es de cerca de 80.000 millones de dólares al año. El control del recurso capital por parte de la élite es, por lo tanto, absoluto.

Especial relevancia tienen los fondos soberanos de inversión en esta afirmación, sobre todo en cuanto a la capacidad de influencia que la

utilización de estos fondos provenientes de la renta petrolera tiene en otros estados y economías a escala mundial. Los fondos soberanos son aquellos activos financieros controlados por el Estado en países cuya renta (principalmente derivada de la exportación de petróleo) ha permitido un superávit susceptible de convertirse en un fuerte capital de inversión en economías de otros países, principalmente desarrolladas que garanticen una rentabilidad.

El comportamiento de estos fondos de inversión ha suscitado una gran polémica, como en el caso saudí y de otros países petroleros del golfo Pérsico, en los que el Estado se confunde con la propiedad de una familia o una élite. Se pretendió sin éxito establecer un código de conducta inversora para evitar una excesiva influencia económico-política sobre las coyunturas de decisión en los países receptores de esas inversiones, sobre todo teniendo en cuenta la escasa transparencia en la información que brindan sobre inversiones, producción petrolera e ingresos del Estado los poseedores de estos fondos soberanos.⁴ En el caso saudí, la recientemente creada Agencia Monetaria saudí es la que controla el flujo de este fondo, pero sin que existan informes exhaustivos sobre su funcionamiento.

En cuanto a los recursos financieros particulares de cada miembro de la élite, Arabia Saudí es quizás el ejemplo más notable de enriquecimiento personal de los miembros de la familia real, no solo a costa de los recursos del Estado directamente, sino también utilizando al Estado como mecanismo para generar nuevos ingresos financieros. Entre estos últimos se encuentran la política de socios autóctonos necesaria para cualquier no saudí que quiera hacer negocios de cualquier tipo en Arabia Saudí. La misma evita que los no saudíes puedan controlar algún aspecto productivo o comercial del país, y permite que los socios autóctonos obtengan un porcentaje de la renta generada por la actividad productiva o comercial del socio no saudí. El otro mecanismo de enriquecimiento personal ha sido a través de las actividades personales de cada miembro de la Casa Real, generalmente en puestos diplomáticos o administrativos clave, en bancos, bienes raíces o actividades de importación/exportación en el extranjero. Esto ha convertido a muchos miembros de la Casa Real en multimillonarios con autonomía respecto a los otros recursos de capital antes mencionados.

La coacción

Si bien la guerra del Golfo de 1991 demostró la imposibilidad de las fuerzas armadas saudíes en defender su propio territorio sin colaboración externa, la seguridad interna ha estado perfectamente garantizada desde los mismos comienzos del reinado de la casa Saud. Los numerosos incidentes internos que pusieron en cuestión la autoridad de la monarquía, como la ocupación de la Gran Mezquita de La Meca en 1979, fueron sofocados rápida y violentamente por las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, hay que remarcar que la evolución del gasto militar desde la década de 1990 hasta la actualidad ha sido notablemente mayor que cualquiera de los países de la región, incluyendo al Irak de Saddam Hussein y al régimen iraní.

Los principales recursos de coacción de que dispone la élite dominante para garantizar su estabilidad en el poder se pueden dividir en Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad interna. Las Fuerzas Armadas están compuestas por cinco ramas:

- Real Ejército de Tierra Saudí, compuesto por más de 300.000 soldados y con una capacidad operativa muy superior a la de cualquiera de los estados vecinos.
- Real Armada Saudí, compuesta por alrededor de 12.000 oficiales, incluyendo a 1.200 marines. Las principales bases están en Yedda, en el mar Rojo y en Jubail, en el golfo Pérsico.
- Real Fuerza Aérea Saudí, segunda en capacidad de fuego y de despliegue en la región después de la israelí, gracias a los acuerdos privilegiados de suministros de aviones F-15 estadounidenses y Tornado británicos.
- Real Defensa Aérea Saudí, desde 1981 cuerpo independiente del Ejército.
- Guardia Nacional, fuerza compuesta por 125.000, entre ellos una milicia tribal de 25.000 miembros. Sirve tanto de fuerza de defensa ante amenazas externas como internas. Entre las responsabilidades internas se encuentra la protección de los lugares sagrados de La Meca y Medina, siendo quienes protagonizaron el sangriento enfrentamiento para liberar la Gran Mezquita de La Meca en 1979, que se saldó con más de 400 muertos. La Guardia Nacional es quien se encarga de la protección de la

Casa Real saudí, por lo que está dirigida por un alto miembro de la dinastía saudí.

Las fuerzas de seguridad interna están compuestas por los cuerpos policiales entre los que también existe una policía religiosa (*Muwahhidi*) así como las temidas investigaciones generales (*Al-mabhith al-amma*). Para hacerse una idea de la magnitud y presencia en la vida diaria de los cuerpos policiales basta comentar que el Ministerio del Interior es el principal proveedor de empleo del reino (500.000 trabajadores). De entre las fuerzas de seguridad interna debe destacarse la importancia estratégica de la Dirección General de Inteligencia (Mujabarat), creada en 1957 con apoyo logístico de la CIA estadounidense. Al encargarse principalmente de las operaciones de inteligencia necesarias para la eliminación de las amenazas internas al régimen saudí, ha estado dirigida siempre por miembros importantes de la familia real, siendo desde 2005 el príncipe Muqam bin Abd al-Aziz, el director general de la Mujabarat con rango ministerial.

Todas estas ramas de las fuerzas armadas y de seguridad han estado y están controladas y dirigidas por miembros de la cúpula de la élite central saudí, lo que debería garantizar una absoluta lealtad a la familia real y eliminar cualquier posibilidad de cuestionamiento interno del aparato militar. No obstante, informaciones recientes parecen indicar que entre los 172 supuestos «terroristas» arrestados el 27 de abril de 2007 había muchos individuos con amplias conexiones con el estamento militar (Yamani, 2008: 150).

Ideología

Como quedó expresado anteriormente, la alianza inicial entre Abd al-Aziz y al-Wahhab, continuada luego con la creación del Consejo de Ulemas y la subordinación de la élite religiosa al Estado saudí, trajo aparejada la monopolización de la ideología religiosa por parte de la élite central. Y esto ha servido tanto para la justificación de los actos de gobierno hacia el interior como hacia el exterior. Los reyes Faisal, Jalid y Fahd han argumentado durante sus mandatos que el primer principio de la política exterior saudí es la solidaridad islámica. El islam ha sido el más antiguo rasgo distintivo de la política exterior saudí, no estrictamen-

te en el sentido de promoción de los intereses del islam y de los países islámicos, sino en el sentido de la promoción de los intereses del régimen saudí entre los países árabes e islámicos (Piscatori, 1983: 33).

La justificación para esta política exterior basada en el islam radicaba no solo en la legitimación religiosa del régimen saudí por la secta wahabí, sino más que nada en la ostentación del control y protección de los lugares sagrados de La Meca y Medina, de donde fueron expulsados los anteriores protectores, los hachemíes. Estos, a pesar de su derrota, habían conseguido hacerse con el control de Transjordania e Irak (hasta 1958), y seguían representando una amenaza para la estabilidad de la casa Saud en forma de reclamo de soberanía religiosa sobre ambas ciudades. Por lo tanto, el recurso ideológico era también un recurso defensivo del reino y la familia real.

En este sentido, el *Hajj* o peregrinación anual a La Meca, ha sido utilizado como recurso no solo de capital sino también como recurso ideológico. El Ministerio del *Hajj* es quien establece las cuotas de peregrinos por países, lo que en numerosas ocasiones, como a partir de la ruptura de relaciones con Irán en 1987, fue utilizado como mecanismo de presión y negociación externa por parte del régimen saudí. Este recurso ideológico sirvió también para enfrentarse a las críticas del régimen iraní establecido a partir de 1979, que llamaba al derrocamiento de la monarquía y a la liberación de los lugares sagrados.

La élite saudí ha invertido grandes sumas de dinero en instituciones islámicas alrededor del mundo y en gobiernos de países islámicos para justificar la existencia de una política exterior islámica. Desde la subida de los precios del petróleo en 1973, que otorgó al Estado saudí una liquidez monetaria desconocida hasta entonces, el gobierno se ha dedicado a desarrollar una política de cooperación económica, a través de donaciones y créditos al resto de la *umma* islámica. Había cuatro clases de receptores de las ayudas saudíes: en primer lugar, instituciones islámicas formales, que recibían regularmente cuotas del gobierno saudí y otras contribuciones voluntarias; en segundo lugar, los gobiernos de los estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI); en tercer lugar, las asociaciones islámicas o proyectos de diverso tipo a desarrollar en países islámicos; en cuarto lugar, las asociaciones islámicas o proyectos de diverso tipo a desarrollar en países no islámicos (Piscatori, 1983: 47-48).

En el ámbito interno, el control del recurso ideológico estuvo prin-

principalmente a cargo del clero wahabí. Las instituciones y organismos anteriormente reseñados, creados a lo largo de las últimas décadas de existencia del reino saudí, han servido no solo para organizar al clero bajo el mandato de la élite saudí, sino también para garantizar el control directo de la ideología. El clero controla no solo el sistema judicial sino también la educación, a través de su aprobación de los contenidos escolares y el control de las universidades islámicas de La Meca, Medina y Riad. También influyen en el adoctrinamiento de los militares y tienen un importante control sobre los contenidos de publicaciones, estaciones de radio e Internet (Yamani, 2008: 146-147).

Información

Las ya mencionadas revueltas que se vivieron en los años sesenta con el establecimiento de estaciones de televisión muestran que las cuestiones vinculadas a la creación, difusión y control de la información siempre han sido una cuestión polémica en este país. En 1962 se creó el Ministerio de Información, que ha controlado desde entonces la apertura de periódicos y la información que en ellos se transmitía. Igualmente significativa fue la creación de la Agencia Saudí de Noticias (SNA) en 1970 y el control sobre la radio y la televisión saudíes, tanto a través del monopolio de la información como a través de la censura previa (Champion, 2005: 260-262).

No obstante, el régimen saudí no ha podido luchar de forma suficientemente efectiva sobre dos fenómenos. El primero es la información proporcionada por medios escritos y audiovisuales árabes residentes en extranjero. Entre estos debemos diferenciar medios abiertamente opositores como Radio al-Tajdeed y otros de carácter generalista como *Al Quds Al-Arabi* en Londres pero también la cadena qatarí Al Jazeera que difunden regularmente informaciones poco satisfactorias a ojos de la Casa Real saudí. De hecho, esta última cadena fue prohibida en 2003. El segundo es la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, y la aparición de páginas web críticas con el régimen así como la más reciente aparición del fenómeno de los foros y los *blogs*.

A través de los medios informativos con sede en el extranjero y, sobre todo, de las nuevas tecnologías, se han hecho oír severas críticas a la Casa Real, cuestionando la gestión diaria del país y su falta de atención a

las necesidades de determinados colectivos, pero también poniendo en duda la legitimidad y continuidad del régimen. En palabras de Madawi al-Rasheed (2005: 190) estos nuevos espacios virtuales han dado salida a una otrora mayoría silenciosa compuesta por «una población joven políticamente frustrada, socialmente marginada y privada económicamente».

El régimen ha intentado contrarrestar estos fenómenos a través del arma comercial (el control de la publicidad), promoviendo la aparición de medios de comunicación rivales (establecimiento de *al-Arabiya* en 2003, con sede en Dubai pero con capital saudí) y controlando tanto el acceso a Internet como la información a la que puede accederse desde territorio saudí, a través de la prohibición del uso de antenas parabólicas. Sin embargo, en la era de la globalización el esfuerzo por controlar la información es una tarea cada vez más ardua para el régimen.

Los grupos de prensa más importantes de Arabia Saudí siguen estando total o parcialmente controlados por miembros directos de la élite. *Al-Sharq al-Awsat* está controlado por el grupo editorial propiedad del príncipe Salmán, gobernador de Riad; *al-Hayat* por el grupo propiedad del príncipe Jalid ben Sultán y *al-Watan*, por el perteneciente al príncipe Jalid ben Faisal, entre otros. Y lo que es más importante, a pesar de la existencia de medios de prensa privados su existencia depende de la aprobación por decreto real de su funcionamiento y directores. Igualmente sucede con la televisión, que depende en su totalidad del Ministerio de Cultura e Información (García Suárez, 2007: 26).

Movimientos de resistencia, oposición y descontento popular

Tipos de oposición

Actualmente la oposición, tolerada en algunos casos, perseguida en muchos otros, se concentra básicamente en manos islamistas suníes aunque también podemos identificar corrientes liberales críticas con el régimen así como movimientos más o menos organizados de colectivos que han estado apartados de los principales resortes de poder, especialmente entre la población chií. En la década de los cincuenta y sesenta también existían grupos de oposición vinculados a movimientos izquierdistas y nacionalistas, la inmensa mayoría de índole panarabistas. A mediados

del siglo xx estos grupos protagonizaron huelgas y articularon movimientos sociales en las provincias orientales (Lacroix, 2005: 37). No obstante, estos grupos entraron en un pronunciado declive y ninguno de los más de diez grupos de esta índole sigue hoy en activo. Sus antiguos miembros, especialmente los intelectuales, se han integrado, mayoritariamente, en corrientes de tipo liberal.

Como decíamos, el grueso de la oposición en Arabia Saudí está representado por grupos de inspiración islamista. A pesar de que el Gobierno del país y en particular la Casa Real aparezcan en el interior del país y más allá de sus fronteras, como guardianes de los santos lugares del islam y como principales valedores de la ortodoxia islámica, basada en este caso en los principios y prácticas wahabitas, distintos grupos de inspiración islamista se han ido consolidando, especialmente a partir de los noventa, como el principal flanco de oposición a los al-Saud. Como en el resto del mundo árabe, el islamismo político ganó fuerza como movimiento ideológico de masas, coincidiendo con el debilitamiento de los movimientos panarabistas y socialistas a partir de los setenta y, sobre todo, durante la década de los noventa.

Entre los factores que explican el fortalecimiento de la oposición islamista durante esos años cabe destacar, por un lado, la crisis económica derivada de la bajada de los precios del crudo que repercutieron en un drástico empeoramiento de las condiciones de vida del ciudadano medio saudí. En esas circunstancias, se redoblaron las críticas hacia la corrupción y dispendio de la familia real. Por otro lado, la invasión iraquí de Kuwait en 1991 acabó comportando que Arabia Saudí confiara parte de la defensa del país a tropas extranjeras (sobre todo estadounidenses) instaladas en su territorio. Esta manifestación de dependencia, para unos, o profanación del territorio sagrado, para otros, acabó dando alas a los movimientos islamistas de distinto corte (Sager, 2005: 234-236).

Como en el resto del mundo árabe, el islamismo político no es un fenómeno homogéneo en este país, ni por sus bases sociales, ni por su concepción ideológica, ni por sus objetivos, ni por los medios para conseguir estos, ni por el grado de cercanía u oposición al régimen. Podemos diferenciar tres grupos distintos: las corrientes más radicales, takfiristas o yihadistas; los grupos más moderados que se engloban en lo que se conoce como sahwismo; y, finalmente, los corrientes calificados como «islamo-liberales».

Las acciones del primer grupo, dentro y fuera del país, son las que

han conseguido una mayor repercusión. De hecho, el elemento más característico de los grupos takfiristas y yihadistas es la expresión de su radicalismo a través de métodos violentos.

Entre los integrantes de estos grupos, englobados en su mayoría en el conglomerado transnacional de Al Qaeda, se halla un alto número de ciudadanos saudíes. No obstante, antes de la aparición de esta red terrorista, otros grupos salafistas como el liderado por Juhayman al-Utaybi ya habían recurrido a la violencia (asalto de la mezquita de La Meca en 1979). Estos grupos se han centrado en una clara denuncia de la política interior y la política exterior de los países árabes, y Arabia Saudí no ha sido una excepción. Como explica Mamoun Fandy (1999: 230) la articulación global-local ha sido una constante en la oposición saudí al régimen.

Una de las manifestaciones más impactantes del fenómeno terrorista tuvo lugar con los atentados de Riad en 1995, y Jobar en 1996, que se asociaron tanto a maniobras extranjeras (en concreto de Teherán aunque este hecho no se demostró) como a ciudadanos saudíes ligados al Comité para la Defensa de los Derechos Legítimos (CDDL). Este grupo disidente, creado por Mohammed al-Massari y por Saad al-Fagih en 1993, y reestablecido en 1994 en Londres, no está formalmente considerado un grupo terrorista pero tiene probados lazos con grupos que sí lo son. Lo mismo sucede con el Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (MIRA) fundado en 1996 por el propio al-Fagih. La CDDL y el MIRA son, junto con Al Qaeda, el principal exponente de la oposición takfirista al régimen de los Saud.

En cuanto a la red Al Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden, cabe señalar que negaron una implicación en los atentados de Riad y Jobar aunque sí afirmaron compartir el mensaje de estos atentados, en concreto, la necesidad de que las tropas estadounidenses abandonaran el «sagrado territorio saudí» (Champion, 2003: 235-237). En cambio, sí que reivindicaron los atentados contra intereses norteamericanos en África Oriental así como los del 11 de setiembre. Estos atentados hicieron aún más evidente la compleja (y paradójica) relación entre el poder saudí y los grupos yihadistas. Aunque Al Qaeda sea un grupo de oposición al régimen saudí, a partir de septiembre de 2001 se redoblaron las críticas por la complicidad de algunos elementos del poder con estos movimientos terroristas, vertiéndose acusaciones respecto a cómo algunos sectores de la Casa Real habrían fortalecido estos movimientos siempre y cuando ex-

portaran la yihad hacia otros países pero no en Arabia Saudí (Meijer, 2005: 274).

Junto a estos sectores yihadistas, encontramos a grupos más moderados del islamismo saudí que pueden, igualmente, calificarse como movimientos de oposición. La diferencia es que mientras que la oposición moderada solicita cambios pero no cuestiona la legitimidad del régimen, los sectores yihadistas, takfiristas y neosalafistas sí lo hacen. Mientras que los sectores de oposición moderados están implantados en la administración pública o en las universidades, los neosalafistas se concentran en el sector privado ya que, en palabras de Stéphane Lacroix (2005: 39) llegan a considerar pecaminoso trabajar para el Estado.

Entre los sectores moderados y que se presentan a sí mismos como una oposición leal encontramos algunos sectores del movimiento Sahwa al-Islamiyah (despertar islámico). Sahwa es un movimiento que se consolidó en los años sesenta y que se caracteriza por la combinación de la perspectiva wahabita de los temas sociales y culturales con un modelo de activismo político más parecido a los Hermanos Musulmanes. En los años noventa, algunos líderes de Sahwa como Salman al-Auda y Safar-al-Hawali solicitaron por vías diversas que el gobierno llevara a cabo reformas en campos que abarcaban desde el papel de los ulema, a la economía y las finanzas pasando por la política exterior, el ejército o el sistema judicial (Fandy, 1999: 50-60). Ante tales demandas el gobierno saudí reaccionó duramente, encarcelando a algunos de los dirigentes de Sahwa y confirmando que no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo de oposición, por más leal que esta afirmara ser.

Entrados ya en el siglo XXI podemos observar cómo algunos sectores de Sahwa empezaron a mostrarse más críticos tanto con el sistema político saudí como con el pensamiento wahabita clásico y a solicitar reformas democráticas. Según Stéphane Lacroix (2005: 35-36) esto favoreció que se conformara una plataforma política anti-wahabita, nacionalista y democrática que este autor califica como corriente «islamo-liberal» y que han constituido, como veremos más adelante, uno de los núcleos del movimiento peticionista (demandas reiteradas de reforma del régimen).

Aunque los movimientos islamistas suníes son los que han conseguido mayor eco en sus protestas, algunos sectores sociales poco representados en las prioridades de estos han hecho oír sus voces para mostrar su disconformidad. Uno de esos casos es el de las mujeres y uno de los

más célebres incidentes sucedió cuando una cincuentena de ellas protestaron en Riad conduciendo sus coches para denunciar la legislación que les impide conducir (Fandy, 1999: 49). Estos movimientos, más o menos organizados, se unen a otros grupos integrados por miembros de clases medias, que abogan por una modernización del régimen menos dependiente de los preceptos de la ley islámica y con un claro espíritu democrático. Al igual que los sectores «islamo-liberales» también se han significado por las recientes demandas expresadas a la familia real para que el país lleve a cabo reformas modernizadoras.

El otro gran grupo de oposición está integrado por la minoría chií que representa entre el 10% al 15% de la población, aunque las estadísticas en este sentido son poco fiables. Los chiíes duodecimanos viven en su gran mayoría en Qatif y al Hasa, y en menor medida en Damman, La Meca y Medina, y los chiíes ismailíes, cerca de 100.000, cerca de la frontera con Yemen.

Por su ubicación geográfica en las áreas de explotación petrolera, los chiíes llegaron a ocupar hasta el 60% de los puestos de trabajo en ARAMCO y, sin embargo, fueron objeto de discriminación hasta hace pocos años. La doctrina wahabí imperante en Arabia Saudí ha considerado herética a la rama chií del islam, persiguiendo la práctica del rito durante los distintos períodos de reinado saudí desde el siglo XVIII. A esta discriminación religiosa se sumaba el hecho de que la mayoría de los habitantes de la provincia oriental eran granjeros y campesinos, y por lo tanto con un bajo estatus social. Tampoco eran admitidos en el ejército ni como trabajadores en las instituciones nacionales. Se les prohibía durante años el ejercicio de la ashura, e incluso se llegaron a emitir fatuas en época de Faisal, que condenaban la chía (al-Rasheed, 2003: 197).

La llegada de la explotación petrolera, a la que los chiíes aportarían la mano de obra semi y no cualificada, no traería aparejadas mejoras de ningún tipo. Y el Estado no habría impedido que las diferencias sociales entre las élites y las clases periféricas se ampliaran hasta entrada la década de 1980.

Pero esta situación empezó a cambiar a raíz de un hecho externo: la revolución Islámica de Irán en 1979. Los chiíes saldrían a las calles a reclamar la libertad de sus prácticas religiosas, siendo severamente reprimidos por la Guardia Nacional. Las manifestaciones y huelgas se repitieron durante 1980 en las ciudades de Qatif y Hasa, y empezaron a

tomar forma las agrupaciones políticas, ilegales, que organizaban las protestas y elevaban las reclamaciones de la comunidad chií. El apoyo brindado por el gobierno iraní, en su disputa regional por el liderazgo y la deslegitimación del régimen, fue muy importante en la formación de una nueva generación de líderes y de partidos y asociaciones políticas chiíes.

Las estructuras políticas chiíes saudíes se pueden dividir en cuatro grupos, de acuerdo al informe elaborado por el International Crisis Group (2005: 7):

- 1) Movimiento reformista chií: la más poderosa y popular de las redes político-religiosas liderada por activistas que ayudaron a transformar la autoridad política y religiosa chií a fines de los años setenta, compartiendo experiencias de oposición al régimen saudí con otros grupos árabes.
- 2) Hezbolá Saudí /Seguidores de la Línea del Imam: el más grande de los grupos islamistas, fundado en 1987 por varios clérigos chiíes saudíes. Reconocen el predominio del *Velayat-e faqih*, la institución política por excelencia creada por el Ayatollah Jomeini, y están liderados por clérigos provenientes de la provincia oriental
- 3) Tradicionalistas y detractores: es el más pequeño de los grupos chiíes, compuesto por clérigos independientes que juegan un papel marginal en el movimiento chií.
- 4) Chiíes liberales: relativamente minoritarios dentro de la comunidad chií y menos organizados que los islamistas, y aunque algunos personajes puedan tener reputación personal, solo tienen una influencia marginal.

Tal como se decía en la introducción observamos que lejos de lo que pudiera parecer, el mapa político, ideológico y confesional en Arabia Saudí no es homogéneo y que existen en el país movimientos que, con mayor o menor intensidad, cuestionan la legitimidad o las políticas del régimen saudí. Veamos ahora qué respuestas se han dado desde el Estado a las distintas modalidades de críticas y demandas provenientes de los sectores de oposición.

Tipos de demandas y respuestas de las autoridades

De entre todas las acciones de la oposición y de los grupos marginados de las estructuras de poder debemos diferenciar; en primer lugar, entre protestas violentas y pacíficas, en segundo lugar, entre protestas que cuestionan la legitimidad del régimen y de la Casa Real y las que solicitan cambios en la acción de gobierno pero sin cambiar el régimen; en tercer lugar, entre protestas que solicitan al régimen una lectura menos rigorista del islam y las que, por el contrario, consideran que el régimen y el comportamiento de las élites se desvía de la ortodoxia religiosa; y, finalmente, entre las demandas vinculadas a necesidades específicas de un colectivo particular y las demandas que afectan al conjunto de la población. A la luz de estas distinciones podemos distinguir tres tipos de demandas y observaremos la distinta reacción del Estado hacia cada uno de estos fenómenos.

La primera corresponde a las demandas expresadas a través de actividades terroristas. La retahíla de atentados que se han producido en suelo saudí o fuera de él por terroristas saudíes, vinculados en los setenta a grupos salafistas y, en la actualidad al conglomerado de Al Qaeda no se reclaman de ningún colectivo específico sino del conjunto de la población, cuestionan la legitimidad del régimen, optan por métodos violentos y critican al régimen por apartarse de la religión.

Aunque durante la segunda mitad del siglo pasado estos movimientos fueron tolerados por el régimen saudí, especialmente cuando actuaban en el exterior, a raíz de los atentados de Jobar pero, sobre todo, de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno ha endurecido la represión de grupos que han contestado abiertamente la familia real y que han utilizado métodos violentos. A lo largo de los últimos años, el gobierno saudí ha redoblado la lucha contra estos movimientos tanto con medios policiales como cortando sus fuentes de financiación (Sager, 2005: 253-254).

Bien distinta ha sido la reacción del gobierno saudí ante las demandas que se han canalizado por métodos pacíficos y que, en vez de cuestionar abiertamente la legitimidad del régimen, han solicitado la puesta en marcha de reformas o que han expresado demandas de colectivos específicos (chiíes, mujeres, provinciales, etc.). El peticionismo ha sido la manera por la que los sectores menos radicales de la oposición al régimen han hecho sentir estas reclamaciones. A principios de los noventa, dis-

tintos grupos de intelectuales, entre los que había desde ulemas hasta individuos de formación occidental, elevaron distintas cartas abiertas a los gobernantes pidiendo una mejor gobernanza y más transparencia. Entre estas destacan la «petición de reforma» en 1990, la petición de los moderados en 1991 y, sobre todo, el «Memorandum of Advice» de 1992, firmado mayoritariamente por personalidades islamistas. Este memorando solicitaba, entre otros, el Estado de derecho, la representación política y el respeto de los derechos humanos (todo según la Sharia) así como un refuerzo del control de las instituciones religiosas sobre el Estado y la sociedad (Internacional Crisis Group, 2004).

Tras el 11 de septiembre puede observarse una revitalización del fenómeno peticionista. En algunos casos se trató de demandas de corte ideológico, sobre todo liberal como en la carta *Una visión sobre el presente y el futuro de la Nación* de enero de 2003, o con una fuerte sensibilidad territorial, como la carta del Pueblo de Najran titulada *Una patria para todos y todos por la patria*.⁵

De entre todas estas demandas es necesario señalar la especificidad de las provenientes de la comunidad chií. Durante la década de los noventa ya se había producido un cierto acercamiento entre líderes chiíes y la familia real. Una primera señal de acercamiento se produjo en 1993, tras la guerra de Irak y como consecuencia de la presión externa por liberalizar el régimen. El rey Fahd invitó a varios líderes chiíes a Yedda para realizar una reunión formal. A cambio de finalizar la oposición al régimen y a la familia saudí desde el extranjero, el gobierno liberó a prisioneros políticos detenidos desde los años ochenta, permitiendo regresar a centenares de exiliados chiíes, restituyéndoles sus pasaportes y derechos de viajar, entrar y salir del país. Pero más importante aún fue la garantía de respeto de sus derechos religiosos y sociales, sobre todo en el ámbito educativo (International Crisis Group, 2005: 4).

Durante el año 2003, la comunidad chií aprovechó la repercusión internacional de las guerras de Afganistán e Irak y el descrédito de la monarquía saudí para iniciar una serie de reclamos a las autoridades saudíes. En abril elaboraron una petición al gobierno llamada «Socios en una nación». Los 450 hombres y mujeres chiíes firmantes reafirmaban la lealtad chií al Estado y pedían el fin de las tendencias sectarias fanáticas que alimentaban el odio.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, en septiembre del mismo año más de 300 saudíes (50 mujeres), entre suníes y chiíes firma-

ron otra petición llamada «En defensa de la nación», y en diciembre del mismo año, otra titulada «una petición al liderazgo y la población: reforma constitucional primero» donde firmarían tanto islamistas suníes, liberales y chiíes (Kapiszewski, 2006: 465-466). Como veremos más adelante, la peculiar situación nacional e internacional en que se encontraba el reino en aquel momento obligó al gobierno a hacer algunas señales de apertura.

El gobierno respondió de forma ambivalente al conjunto de demandas que a través de estas cartas abiertas se le dirigían, tanto desde colectivos específicos como el chií como desde conglomerados que representaban a buena parte de la población. Si observamos, en primer lugar, las demandas y respuestas de los años noventa constatamos, por un lado, que el régimen mostró cierta apertura promulgando la Ley Básica de la Gobernanza en 1992 y creando el Consejo Consultivo (Majlis al-Shura) como suerte de Parlamento sin poderes legislativos ni de control. No obstante, el régimen no titubeó al sancionar a los elementos más contestatarios dentro de este movimiento, con represalias de todo tipo incluyendo la encarcelación de algunos opositores (Glosemeyer, 2005: 222; Fandy, 1999). En algún caso, como el de Abdallah al-Hudhaif, opositor suní, se ha llegado a ejecutar una condena a muerte en 1995. No solo eso sino que el régimen saudí afirmó que ese sería el destino de cualquier otra persona que infrinja la religión o ponga en peligro la seguridad del país (Champion, 2005: 280-281).

La misma pauta se reproduce entrado el siglo XXI. Tras el 11 de septiembre y más aún con el desarrollo de actividades en su propio territorio, el régimen saudí temió que fuerzas extranjeras utilizaran los elementos descontentos dentro del país en su contra. Más que nunca antes, los gobernantes vieron la necesidad de apoyarse en una gran variedad de grupos sociales que anteriormente habían tenido un papel escaso en la salvaguarda del Estado (Glosemeyer, 2005: 224).

Fue entonces cuando se establecieron una serie de medidas paliativas. En primer lugar, el gobierno lanzó un proceso de «Diálogo nacional» en varias sesiones de debate. La primera sesión tuvo lugar en junio de 2003 y reunió a líderes de varias corrientes islámicas y sectas: ulemas pertenecientes al *establishment*, predicadores salafíes, clérigos chiíes y sufíes. La segunda sesión tuvo lugar en La Meca en diciembre de 2003. Se llamó «Extremismo y moderación, una visión comprensiva», y reunió a más de 60 intelectuales, clérigos, empresarios y, por primera vez, a 10

mujeres. La tercera sesión tuvo lugar en Medina en junio de 2004 y estuvo dedicada a los derechos y deberes de la mujer (Kapiszewski, 2006: 467). Según Iris Glosemeyer (2005: 227) con la convocatoria de estos diálogos nacionales, Abdallah rompió tres líneas de demarcación (la de género, la sectaria y la regional) y tuvo que hacer frente a las críticas de algunos sectores conservadores que desaprobaban que se discutiera abiertamente de los derechos de la mujer así como de otros sectores centralistas que veían con desconfianza que los diálogos nacionales fueran itinerantes.

Otra de las medidas tomadas por las autoridades fue el establecimiento de una Asociación Nacional de Derechos Humanos en 2004, compuesta por 41 miembros, entre los cuales tres mujeres, y encabezada por Abdallah Ibn Saleh al-Obaid, ex secretario general de la Liga Musulmana Mundial y miembro del Consejo Consultivo. Uno de los temas más polémicos a los que debía enfrentarse esta asociación es el grado de colaboración con entidades como *Human Rights Watch* o *Amnistía Internacional*, por citar dos ejemplos.

Y en respuesta a las demandas de apertura democrática, respaldadas por las presiones de Estados Unidos, se realizaron por primera vez elecciones municipales. La mitad de los miembros de los 178 consejos municipales fueron elegidos por la población masculina mayor de 18 años, previo registro en el censo electoral, y sin que se permitiera la participación de partidos políticos. La participación en estas elecciones fue muy baja, excepto en las regiones de mayoría chií. Los resultados favorecieron a los islamistas y a los candidatos chiíes.

Como en los noventa, junto a este proceso de tímidas reformas, el régimen no dudó en utilizar otros métodos para reaccionar ante quienes sí cuestionaban su legitimidad. Los líderes opositores que habían intentado convocar manifestaciones fueron amenazados de ser encarcelados si abogaban por una monarquía constitucional y once de ellos así lo fueron en marzo de 2004 aunque el rey Abdallah permitió su liberación en 2005.

Aun manteniendo el carácter autoritario y coercitivo del régimen todo parece indicar que la llegada al trono del príncipe Abdallah ha implicado una acentuación de los procesos de reforma política, limitados eso sí. Como afirma Mai Yamani (2008: 144) la estrategia de Abdallah es la descompresión política o, en otras palabras, hacer suficientes concesiones para apaciguar a la población y atenuar la presión para la reforma. Abdallah parece querer construir una alianza centrista que pueda conse-

guir un compromiso entre las demandas de mayor diversidad y la homogeneidad saudí.

Relaciones de competencia y de alianza entre élites y la influencia de movimientos de oposición y resistencia

Como hemos ido viendo, la casa de los Saud optó por cooptar a posibles élites que pudieran aspirar a entrar en competencia y reprimir duramente a aquellos sectores que pusieran en duda su legitimidad y se opusieran frontalmente a la Casa Real. Dentro de este esquema, la Casa Real ha preservado un sistema de consulta tradicional (*majlis*) que permitiera al rey y otros miembros de la corte aparecer como «patrones y patriarcas benevolentes», en que se pudiera persuadir de la bondad de la acción de gobierno a los representantes de colectivos importantes pero en que siempre acabara predominando la voluntad de la Casa Real (Champion, 2005: 288).

En páginas anteriores hemos constatado que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo algunas reformas en el sistema político para dar respuesta a algunas de las demandas que se realizaban tanto desde el interior como desde el exterior del país. Como acabamos de constatar, no estamos ante un proceso de democratización, ni tan siquiera ante una liberalización política. Sin embargo tanto la creación del Consejo Consultivo como la celebración de elecciones municipales evidencian la necesidad de recomponer las alianzas entre las élites y los sectores que, sin cuestionar la legitimidad del régimen, desean reformas progresivas. Veamos ahora como se han estructurado las relaciones de competición y alianza, tanto en el interior como en el exterior.

Estructura de relaciones de competición y alianza en el interior

Dentro de un grupo reducido de personas pertenecientes a la élite que gobierna el país se establecen complejas alianzas y relaciones de competición. Como explica Glosemeyer (2005: 218-219) nos encontraremos, a menudo, con agencias gubernamentales que son dirigidas por un miembro de la Casa Real pero que tienen como segundo en la línea di-

rectiva a un representante de una rama rival. También nos encontraremos que, en numerosas ocasiones, un determinado príncipe detiene intereses privados allá donde un miembro rival de la familia real ocupa una posición pública.

No obstante, ha sido la gestión de la delicada cuestión sucesoria, que tan violentos episodios causó en el pasado, lo que mejor evidencia la complejidad de las alianzas entre los distintos miembros de la élite saudí. Como hemos visto anteriormente, han hecho falta 75 años, desde la creación del Estado saudí en 1932 hasta el establecimiento de la Comisión Bay'a en diciembre de 2007 para ver la consolidación de un mecanismo formal de sucesión. La prolífica descendencia del fundador del Estado ha sido un factor generador de disputas entre los propios hermanos de padre, hasta el punto de generar un golpe palaciego, si bien no violento, por parte de Jalid a su hermano Faisal, mientras este viajaba fuera del país por motivos de salud.

Según Kéchichian (2008: 249) existen tres criterios para establecer el estatuto de cada miembro de la familia real dentro de la escala de autoridad familiar: mayor edad; linaje maternal y hermandad completa de padre y madre. Estos criterios por sí solos no explican el funcionamiento total de la élite central, sino combinados en un análisis temporal desde la creación del Estado hasta la actualidad. Sin embargo, la ya mencionada prolífica descendencia tanto de Abd al Aziz como de algunos de sus hijos, ha hecho que a menudo algunos de sus nietos sean mayores que alguno hijos del fundador, y lo mismo con relación a los bisnietos, lo que ha puesto en entredicho el criterio de mayor edad, que ha primado hasta ahora en la designación de los monarcas saudíes. Teniendo en cuenta lo antedicho, Kéchichian (2008: 245) divide a la familia Saud en tres grupos políticamente relevantes con relación al futuro institucional del país: los hijos, los sobrinos y los nietos de Abd al-Aziz. Entre los mismos se producen alianzas de diverso tipo: padres e hijos en contra de otros padres e hijos; los hijos de una misma madre; los hermanos de madre y padre, como en el caso de los «siete sudairíes»; nietos contra hijos del fundador; etc. En ocasiones estas alianzas han servido para apoyar a un candidato a la monarquía en contra de otro, por lo que resultan fundamentales para asegurar la continuidad dinástica en el control del Estado saudí.

Según Glosemeyer (2005: 221), ahora podemos observar un considerable cambio de actitud en la gestión de las relaciones de poder en el

país. Si durante los noventa, se aplicó la divisa de «divide y vencerás» que tan positivos resultados ha proporcionado a distintos regímenes árabes, entrado el siglo XXI parece que prime más la estrategia de «unámonos y sobrevivamos». A ello ha contribuido la fuerza cada vez más importante de los movimientos de oposición así como las presiones del exterior. Como veremos a continuación, el debilitamiento de las relaciones de confianza entre Arabia Saudí y Estados Unidos se encuentra en el centro de este replanteamiento.

Por otro lado, observamos que el proceso de «saudización» de la mano de obra, comenzada a mediados de los años noventa, era una política tendiente a lograr esa supervivencia no solo de la economía nacional en crisis, por el desempleo y el bajo precio del petróleo, sino también del propio linaje real. Con una familia tan extendida, los «príncipes ociosos» en un país con desempleo y crisis económica podrían alentar a cambios radicales en la dirigencia del país, ante lo cual la rama principal de los gobernantes pretenden blindarse.

La comisión Bay'a, por lo tanto, no solo representa ese mecanismo de sucesión y de mantenimiento de la dinastía en el poder, sino también una manera de involucrar a todos los sectores de la dinastía en la toma de la decisión fundamental del reino: la elección de los próximos monarcas.

Las relaciones entre la élite gobernante, por lo tanto se dan dentro de estos mecanismos formales y semiformales, como la Comisión Bay'a, el Consejo de Ministros, el Consejo Consultivo (creado en 1992) y el Consejo de los Ulemas.

Relaciones con las élites exteriores

El régimen saudí ha combinado un fuerte aislamiento respecto a Occidente en el campo ideológico, cultural y social con unos fuertes lazos estratégicos con el exterior, especialmente con el gobierno de Estados Unidos y, en mucha menor medida, con los países europeos.⁶ Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue eclipsando económica, política y militarmente al Reino Unido en el Golfo y específicamente en Arabia Saudí. No obstante, el Reino Unido sigue siendo la base de los principales movimientos de oposición en el exilio y, por consiguiente, Riad tiene motivos para querer mantener excelentes relaciones con el gobierno y las fuerzas de seguridad británicas

Desde entonces, los miembros de la Casa Real, así como los principales hombres de negocios del país tienen lazos intensos con Estados Unidos, donde tienen importantes intereses económicos en forma de inversiones multimillonarias. No obstante, esta relación va más allá de las relaciones económicas, ya que Estados Unidos es visto como un, sino el principal, garante de la seguridad exterior de Arabia Saudí y como uno de los puntales que ha permitido el mantenimiento del régimen actual.

Como explica Rachel Bronson (2005: 372-374) suele describirse esa relación como el intercambio de petróleo por seguridad. Aun siendo eso cierto no puede limitarse a ese binomio sino que debe tenerse en cuenta la estructura del sistema internacional en que estas relaciones se inscriben.⁷ Otros autores, como Craig Unger (2004) ahondan en las relaciones entre la familia Bush y los Al Saud para explicar la complejidad de las relaciones de dependencia entre ambas «dinastías».

Con todo, las relaciones americano-saudíes han sufrido altibajos. A lo largo de las últimas décadas tres fenómenos sucedidos fuera de territorio saudí han marcado estas relaciones. El primero fue la invasión iraquí de Kuwait y posterior guerra del Golfo. Este episodio tuvo un fuerte impacto para Arabia Saudí, tanto en el plano internacional como en el nacional. La llegada de tropas americanas a territorio saudí selló de nuevo la alianza entre la Casa Real y el gobierno de Estados Unidos pero, simultáneamente, contribuyó a enturbiar la imagen de los dirigentes saudíes entre los sectores más religiosos de su población. Estos veían en la presencia norteamericana en su territorio una violación de una tierra sagrada para el islam.

El segundo fenómeno fueron los atentados del 11 de septiembre. En un primer momento pareció que la alianza con Estados Unidos estaba en la cuerda floja. La prensa estadounidense e internacional subrayó la gran presencia de ciudadanos saudíes en Al Qaeda y se acusó a este país de haber instigado la creación o fortalecimiento de grupos yihadistas en distintos países musulmanes, empezando por Afganistán. Empezaron también a complicarse los procedimientos de entrada de ciudadanos saudíes e incluso aparecieron informaciones sobre los supuestos planes de Estados Unidos de dividir Arabia Saudí en distintos estados más pequeños dentro de un plan para crear un nuevo Oriente Medio. Ante esta situación el gobierno saudí se vio obligado a hacer algunos gestos de acercamiento a Washington como, por ejemplo, la presentación de la propuesta de paz saudí para el conflicto árabe-israelí (Kostiner, 2005: 363) o intensi-

ficar su cooperación en la lucha antiterrorista (Bronson, 2005: 391-396). Además, en el plano nacional el deterioro de las relaciones con Estados Unidos obligó a abrir el diálogo con sectores más amplios de la población para afianzar los cimientos del régimen (Glosemeyer, 2005: 224).

El tercer factor ha sido el fortalecimiento de lo que comúnmente se denomina el «creciente chíí» en Oriente Medio. La ocupación norteamericana de Irak ha comportado, paradójicamente, la emergencia de Irán como una potencia regional que, además de Irak, ejerce cada vez más influencia en el Líbano (a través de Hezbolá), en Palestina (a través de Hamas) y en Siria (gracias a la alianza entre Bashar al-Asad y el gobierno iraní). En ese contexto, Arabia Saudí se ha convertido en una de las piezas de lo que desde Washington suele denominarse «países árabes moderados» entre los cuales también se encuentran Jordania y Egipto. Esta situación ha permitido dejar en un segundo plano las suspicacias despertadas tras el 11 de septiembre y, en la actualidad, las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos vuelven a ser excelentes.

Así pues, en la actualidad los lazos de (inter)dependencia entre las élites saudíes y las élites del hegemon del sistema internacional, Estados Unidos, que hunden sus raíces tanto en consideraciones de tipo económico como estratégico, vuelven a hacerse evidentes. Aunque estas relaciones proporcionen a la Casa Real saudí cobertura internacional y seguridad respecto a los países de su entorno, no es menos cierto que las deslegitima a ojos de una opinión pública cada vez más contraria a las políticas de Estados Unidos en la región y especialmente respecto a Irak y Palestina.

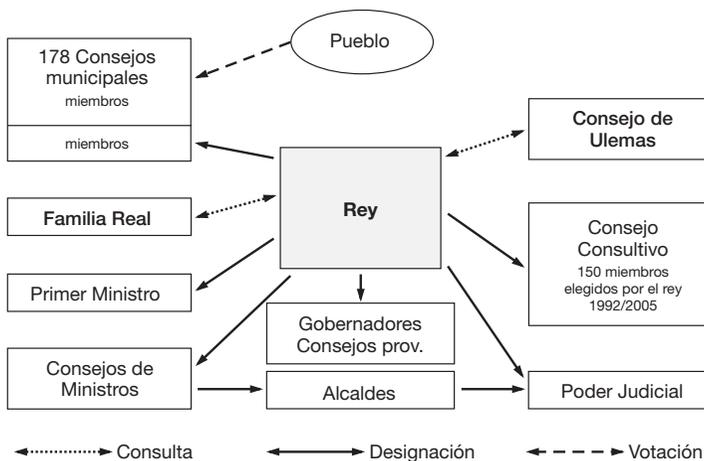
La estructura del sistema de poder

Como explica Madawi al-Rasheed (2005: 189) a menudo se ha descrito la estructura de poder dentro de la familia real saudí como una confrontación entre el clan de los Sudairi (el ya fallecido rey Fahd, Nayif, Sultan, Salman, Ahmad, Turki y Abd al-Rahman), por un lado, y, por el otro, el clan del entonces príncipe heredero y hoy monarca, Abdallah. No obstante, según esta autora la realidad se asemeja más a la suma de cinco círculos de poder que tenían, en su centro, a miembros destacados de la Casa Real: 1) el de los hijos del del rey Fahd, a través de sus hijos y especialmente de Abd al-Aziz; 2) el del actual rey Abdallah, 3) el del mi-

nistro del interior, Nayif; 4) el del Ministro de Defensa, Sultán, y 5) el del gobernador de Riad, Salman. Estos personajes se han distribuido los principales cargos del Estado, principalmente lo referente a seguridad y defensa, política petrolera y económica del país, logrando una identificación casi total entre estructura del poder y estructura del Estado.

Como resultado, se obtiene la estructura de poder en Arabia Saudí que refleja el cuadro 1, en donde el Rey ocupa el lugar central del esquema, rodeado de los demás organismos estatales, a través de la constante participación de los miembros de la élite central, la élite religiosa y las élites comerciales-burocráticas. El Consejo Consultivo, formado por 150 miembros designados por el Rey, es una clara muestra de los componentes más destacados de todas estas élites, entre los que se encuentran miembros de las familias Qahtani, Sharif, Sudairi, etc. En resumen, «el Estado saudí continúa viéndose como un Estado de personalidades en vez de un Estado de instituciones. A pesar de la creación de prestigiosas instituciones como el Consejo de Ministros, el Consejo Consultivo o la proliferación de burocracias regionales, el proceso de toma de decisiones a alto nivel continúa siendo la prerrogativa de un puñado de príncipes» (Al-Rasheed, 2005: 199).

CUADRO 1
Estructura de poder en Arabia Saudí



Escenarios de futuro

Como se decía al empezar este capítulo, en los últimos años se han generado dos imágenes sobre el sistema político saudí: una lo describe como un sistema de estructuras tambaleantes que no tardará en sucumbir ante presiones internas y externas, y otra como un sistema con un control total de los resortes políticos, económicos y sociales, que ha conseguido reprimir los movimientos de oposición y que no parece dispuesto a entrar en ningún proceso de cambio sustancial. ¿Hacia cuál de estos escenarios se encamina el futuro de Arabia Saudí?

Dependerá sobre todo de la habilidad del rey Abdallah y de quién algún día le sustituya por continuar acomodando las demandas de los sectores moderados pero reformistas de la población. También estará condicionado por la evolución de la situación económica mundial y, en especial, por el mantenimiento de un precio alto del crudo que permita mantener el actual sistema rentista. A largo plazo, no obstante, también dependerá de la habilidad de los gobernantes saudíes por diversificar las fuentes de riqueza del reino ya que sino se exponen a crisis cíclicas o, en caso de agotamiento de los recursos energéticos, a una crisis de carácter estructural. Finalmente, también estará marcado por las relaciones que mantenga la Casa Real con la Administración norteamericana.

Parte de la literatura se ha arriesgado a hacer previsiones sobre la evolución del régimen político saudí. Iris Glosemeyer (2005: 232-233) dibuja tres posibles escenarios. Uno en que, de forma progresiva, se avanza hacia una liberalización política tras constatar que el mantenimiento del sistema actual es insostenible. En ese escenario, las reformas, que no siempre son bien acogidas por la población, serían llevadas a cabo por instituciones políticas y no por la familia real que preservaría así su legitimidad a ojos de la población. Un caso menos positivo estaría marcado por un fracaso del Estado caracterizado por una creciente falta de cohesión dentro de la familia real, un aumento de las protestas violentas, en algunos casos de corte separatista e incluso con posibilidad de intervención exterior. Un tercer escenario se caracterizaría por el mantenimiento del ritmo actual de reforma política, que tarde o temprano debería revisar el Consejo de los Ulemas, que permitiría el acceso a los puestos de responsabilidad a una nueva generación de gobernantes pero en que las élites actuales mantendría el control de los resortes del Estado, siguiendo el modelo de otras autocracias liberales del mundo árabe. De

hecho, como afirman Aarts y Nonemann (2005: 451) existe un amplio consenso en la literatura acerca del hecho que las monarquías árabes están mejor preparadas que los regímenes republicanos de partido único para avanzar hacia modelos de «autocracias liberalizadas».

Mai Yamani, por su parte, señaló en un artículo aparecido en ocasión de la muerte del rey Fahd que a la luz de la gerontocracia imperante en el país y el conservadurismo de buena parte de los príncipes herederos, todo parecía indicar que el país habría llegado tarde a encontrar un líder reformista. Según Yamani esta situación parece anunciar que el reino se dirige hacia una inexorable decadencia política.⁸

En términos parecidos se expresa Abdulaziz O. Sager (2005: 257-259) al afirmar que el *statu quo* actual no es sostenible ya que las nuevas generaciones saudíes empiezan a criticar abiertamente la falta de empleo, la corrupción o la ausencia de libertad de expresión y que este malestar encuentra, gracias a las nuevas tecnologías, una mayor impacto. Según este autor, a pesar de las resistencias de las autoridades religiosas, de líderes tribales o de miembros de la familia real, la reedición de un nuevo contrato social entre gobernantes y ciudadanos es el único escenario que evitará un choque violento.

Para Fatiha Dazi-Héni (2006: 96) la clase dirigente saudí puede optar por reconstruir su legitimidad cooptando a una élite liberal e islamista pero también a antiguos disidentes, entre los cuales algunos salafistas, para combatir los actos de violencia en el país. Según esta autora, si se produce una apertura política que deje a la sociedad civil un papel de intermediario, el proceso de reforma «desde arriba» podría ofrecer una alternativa duradera a la crisis de legitimidad del régimen. Por lo contrario, si la población no se ve representada por la élite estas reformas solo servirían para ganar algo de tiempo.

En suma, parece haber un amplio consenso en la constatación de que los dirigentes saudíes deberán calibrar en los próximos años hasta dónde están dispuestos a ceder algunos de sus privilegios o compartirlos con franjas más amplias de la población. La intensidad y profundidad de estas reformas dependerá, no obstante, del grado de movilización de la oposición, de la capacidad de esta por superar divisiones y unirse en la reclamación de sus demandas así como de factores externos antes mencionados: el grado de cordialidad en las relaciones con Estados Unidos así como la evolución de la economía mundial, especialmente con relación al precio del crudo.

Si este proceso de apertura política, por limitada y progresiva que sea, no se pone en marcha, si no se da una respuesta razonable a las demandas de grupos específicos, puede producirse un escenario de confrontación abierta, incluso violenta. Este escenario puede poner en jaque los intereses de una élite que, a través de un control absoluto de los resortes de poder y de la cooptación de sectores anteriormente ajenos a los círculos de poder, ha mantenido casi inalterables sus privilegios.

En cualquier caso, es inverosímil que los dirigentes saudíes puedan prescindir, a medio plazo, de los dos elementos de legitimación que le han permitido asegurar su supremacía: la religión y el petróleo. Por consiguiente, un posible proceso de reforma política solo podrá ser extremadamente gradual en lo religioso, difícilmente se apartará del rigorismo wahabita y tampoco podrá prescindir de las rentas del petróleo. Ya hemos visto que los mecanismos sucesorios han reforzado la cohesión de la élite central, que se muestra como la más homogénea en cuanto a intereses y origen y la más concentrada de todas las que se tratan en la presente obra colectiva. El uso de la coacción y la represión de las demandas de grupos sociales o políticos opositores no se plantean por lo tanto como el único mecanismo de mantenimiento de la élite en el poder, aunque en caso de necesidad, su uso estaría garantizado.

Notas

1. Movimiento reformista islámico creado por Muhammad ibn Abd al-Wahhab en el Najd a principios del siglo XVIII. Denunciaban la perversión del islam y la decadencia de las sociedades musulmanas hasta el estado de la ignorancia (*jahiliya*) que caracterizaba la península Arábiga antes de la llegada del islam. Al-Wahhab predicaba el retorno a la unicidad de Dios (*tawhid*) y a las prácticas religiosas ancestrales, dejando de lado el legado de interpretación jurídica y teológica elaborada durante siglos para centrarse exclusivamente en el Corán y la Sunna. Esto implicaba la erradicación de todas las formas de islam popular, incluyendo el sufismo y el chiismo.

2. «A legitimacy crisis for the Saudi leadership: The royal family must reform to survive», Amin Saikal, en *International Herald Tribune*, 28 de junio de 2004, disponible en: http://www.iht.com/articles/2004/06/28/edsaikal_ed3_.php y «House of Saud looks close to collapse», David Leigh y Richard Norton-Tay-

lor, en *The Guardian*, 21 de noviembre de 2001, disponible en: <http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/21/afghanistan.socialsciences>.

3. Véase «Saudi succession follows tradition», en *Al Jazeera*, 3 de agosto de 2005, disponible en: <http://english.aljazeera.net/English/archive/archive?ArchiveId=13794>.

4. Véase Fred Halliday: «Fondos soberanos», en *La Vanguardia*, 23 de marzo de 2008.

5. Región fronteriza con Yemen, escasamente poblada, de mayoría de confesión chiíes ismailíes y que durante largos años no pudo ser controlada por la casa de los al-Saud.

6. Sobre las relaciones entre Arabia Saudí y Europa véase Nonneman (2001).

7. Esta autora señala que es el contexto de guerra fría lo que determina el acercamiento entre saudíes y norteamericanos y que será el fin de la guerra fría lo que ponga en jaque esa relación tras el 11 de septiembre.

8. Mai Yamani, «The death of King Fahd», *Project Syndicate*, agosto 2005.

Bibliografía

- Aarts, Paul y Nonneman, Gerd (2005), «A triple nexus: ideology, economy, foreign policy and the outlook for the Saudi polity», en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 433-455.
- Al Badi, Awadh (2008), «Institutionalising Hereditary Succession in Saudi Arabia's Political Governance System: The Allegiance Commission», *Arab Reform Brief*, n° 20, Arab Reform Initiative.
- Al Rasheed, Madawi (2003), *Historia de Arabia Saudí*, Cambridge University Press, Madrid.
- (2005), «Circles of power: royals and society in Saudi Arabia», en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 185-203.
- Bachar, Shmuel, Shmuel Bar, Rachel Machtiger y Fair Minzili (2006), «Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia and Jordan», *Research Monographs on the Muslim World*, Series n° 1, Paper n° 4, Hudson Institute, Washington.
- Bligh, Alexander (1985), «The Saudi religious élite (ulama) as participant in the political system of the Kingdom», *International Journal of Middle East Studies*, vol. 17, n° 1, pp. 37-50.

- Bronson, Rachel (2005), «Understanding US-Saudi relations», en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 372-398.
- Champion, Daryil (2003), *The Paradoxical Kingdom, Saudi Arabia and Momentum of Reform*, Columbia University Press, Nueva York.
- Dazi-Héni, Fatiha (2006), *Monarchies et sociétés d'Arabie, le temps des confrontations*, Sciences Po, París.
- Fandy, Mamoun (1999), *Saudi Arabia and the Politics of Dissent*, Palgrave, Nueva York.
- García Suárez, Pablo (2007), «La prensa en Arabia Saudí», *Hesperia Culturas del Mediterráneo*, Madrid, año III, vol. III, nº 8.
- Gause III, F. Gregory (2002), «The Foreign Policy of Saudi Arabia», en Raymond Hinnebusch y Anoushiravan Ehteshami, *The Foreign Policies of Middle East States*, Lynne Rienner Publishers, Boulder Londres.
- Glosemeyer, Iris (2005), «Checks, balances and transformation in the Saudi Political System» en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 214-233.
- Henderson, Simon (2004), «The Saudi Royal Family: What Is Going On?», Hudson Institute Speeches and Transcripts, disponible en: <http://www.hudson.org/>.
- International Crisis Group (2004), «Can Saudi Arabia reform itself?», *Middle East Report*, nº 28, Riad/Amman/Bruselas.
- International Crisis Group (2005), «The Shiite Question in Saudi Arabia», en *Middle East Report* Nº 45, Riyadh/Ammán/Brussels.
- Izquierdo Brichs, Ferran (2007), «Poder y estado rentista en el mundo árabe», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, nº 2, Universidad Autónoma de Madrid, mayo-agosto.
- Kapiszewski, Andrzej (2006), «Saudi Arabia. Steps toward Democratization or Reconfiguration of Authoritarianism», *Journal of Asian and African Studies*, vol. 41, nº 459, Londres.
- Kéchichian, Joseph (2008), *Power and Succession in Arab Monarchies*, Lynne Rienner Publishers, Boulder-Londres.
- Kostiner, Joseph (2005), «Coping with Regional Challenges: A Case Study of Crown Prince Abdullah's Peace Initiative», en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York.
- Lacroix, Stéphane (2005), «Islam-Liberal politics in Saudi Arabia» en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 35-56.
- Less, Brian (2006), «The al-Saud Family and the Future of Saudi Arabia» *Jour-*

- nal of the Royal Society of Asian Affairs*, vol. XXXVI, n° 1, Routledge, Londres.
- Mañé, Aurèlia y Carmen De la Cámara (2005), «Rusia: ¿hacia una economía petrolero-rentista?», *Revista de Economía Crítica*, n° 3.
- Meijer, Roel (2005), «The “cycle of contention” and the limits of terrorism in Saudi Arabia» en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 271-311.
- Ménoret, Pascal (2004), *Arabia Saudí. El reino de las ficciones*, Edicions Bellaterra, Barcelona.
- Niblock, Tim (2006), *Saudi Arabia, Power Legitimacy and Survival*, Routledge, Londres-Nueva York.
- Nonneman, Gerd (2001), «Saudi-European Relations 1902-2001: A pragmatic quest for relative autonomy» *International Affairs*, vol. 77, n° 3.
- Piscatori, James P. (1983), «Islamic values and National Interest: The Foreign Policy of Saudi Arabia», en Adeed Dawisha, ed., *Islam in foreign policy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sager, Abdulaziz O. (2005), «Political opposition in Saudi Arabia» en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 234-270.
- Steinberg, Guido (2005), «The wahabbi Ulama and the Saudi State: 1745-to the Present» en Paul Aarts y Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance: political economy, society, foreign affairs*, New York University Press, Nueva York, pp. 11-34.
- Unger, Craig (2004), *House of Bush, House of Saud: The Secret Relationship Between the World's Two Most Powerful Dynasties*, Scribner, Nueva York.
- Yamani, Mai (2008), «The Two Faces of Saudi Arabia», *Survival*, vol. 50, n° 1, Institute for International and Strategic Studies, Londres, pp. 143-156.

Los futuros de Arabia Saudí

Fred Halliday

El artículo presentado por Eduard Soler y Luciano Zaccara expone, con admirable claridad, el buen uso de las fuentes y el control analítico de la formación histórica, el desarrollo y el carácter contemporáneo del Estado saudí. A la vez que presentan el cambio que está experimentando Arabia Saudí, debido tanto a presiones internas como a un contexto regional e internacional cambiante, también ponen de manifiesto la capacidad coercitiva y distributiva del Estado y especialmente la coherencia de las élites del país. Por todo esto, la fragmentación del Reino de Arabia Saudí y la caída del régimen parecen improbables a corto plazo.

Arabia Saudí, por sus orígenes específicos, el aura religiosa que proyecta y la falta de información precisa, es considerado un país difícil, cuando no imposible, de analizar según los parámetros de las ciencias sociales y políticas. Sin embargo, por muy paradójico que resulte, Arabia Saudí puede comprenderse mejor si la comparamos, salvando las distancias, con otro Estado de Oriente Medio igualmente controvertido e ideológicamente polémico: Israel. Poderlos comparar de forma significativa puede incomodar tanto a partidarios como a detractores de ambos países. No obstante, a pesar de las diferencias, los dos estados de Oriente Medio más controvertidos e incomprensidos tienen mucho en común.

En primer lugar, con relación a sus orígenes históricos. Los aproximados 25 estados de Oriente Medio pueden clasificarse en cuatro categorías generales. Unos pocos son estados cuyo origen se remonta miles de años y que han mantenido una cierta continuidad. Son tres: Irán, Egipto y Yemen. Un segundo grupo son aquellos con continuidad durante cientos de años, como Omán, Turquía, Túnez y Marruecos. La mayoría de estados corresponden a una segunda categoría: aquellos que son re-

sultado de la delimitación colonial, en el Norte de África y alrededor de la península Arábiga, en las décadas precedentes a la Primera Guerra Mundial, y aquellos que son consecuencia de la derrota otomana tras la Primera Guerra Mundial en el «oriente» árabe.

Dos estados, sin embargo, quedan fuera de la categorización anterior y son resultado no, como les gusta proclamar, de un legado ancestral o tradicional ni de la delimitación colonial sino de los actos de reivindicación militar y de la construcción del Estado tras la retirada de las colonias después de los conflictos mundiales. Por un lado, Arabia Saudí, creado tras la derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial y su retirada de la península Arábiga y por el otro, Israel, establecido, ante la oposición árabe, con el abandono de los británicos de Palestina en 1948.

Sus diferentes caracteres políticos, vida social y economía son sobradamente evidentes. Pero no es poco lo que Israel y Arabia Saudí tienen en común. Ambos reivindican que su legitimidad proviene de una mezcla de motivos políticos, a la vez como estados y como custodios de lugares considerados universales y sagrados. Ambos tienen fronteras en disputa. Los sistemas políticos de Arabia Saudí e Israel combinan una supuesta lealtad a un mandato divino milenarista con implicaciones inmediatas para el Estado. Ambos países son grandes aliados de Estados Unidos, aunque han resistido a la presión norteamericana cuando les ha convenido. Han sido acusados de ser creaciones, «herramientas» y «agentes» de los grandes poderes aun cuando las evidencias demuestran que en ambos casos —Arabia Saudí en su alzamiento con el poder en 1900 y el movimiento sionista en el mismo período— quienes fomentaban el Estado eran fuerzas autónomas que utilizaron a los poderes exteriores en beneficio propio. Ambos, irónicamente, fueron apoyados por la URSS, como importantes fuerzas antiimperialistas antes de ser apoyados, o incluso reconocidos, por los poderes occidentales (en el caso de Israel solo fue cuestión de horas). Sobre todo, la literatura y el debate público sobre ellos les han hecho a ambos un flaco favor, fomentado por su demanda de reconocimiento de su particularidad, su carga divina y su vocación moral superior.

La predominancia de polémica y el ensalzamiento en el análisis de los dos estados empieza a cambiar. Poco a poco, académicos y periodistas pueden escribir sobre estos países como, cada vez más, parecidos a los demás. En una palabra: «normales», donde «normal» significa poder plantearse las mismas preguntas que con otros países, ya sea con relación

al funcionamiento de la economía, a la distribución del poder político, a la toma de decisiones en materia de política exterior o a la relación entre la simbología religiosa y la *raison d'état*. «Normal» también significa no percibir el desacuerdo con la versión oficial, o aquella promovida oficialmente —el sentimiento sionista de la Diáspora o la fidelidad entre los musulmanes del mundo respectivamente— como algo que amenace el futuro del país en sí mismo. Por encima de todo, independientemente de la naturaleza de su origen y la inherente excepcionalidad de sus justificaciones, se trata de estados modernos producto del proceso de la construcción de Estado así como de los procesos internacionales del siglo pasado y sujetos a las mismas presiones, internas y externas, que cualquier otro Estado de la región.

En el caso de Arabia Saudí, los análisis y la calidad de lo que sobre él se ha escrito han evolucionado considerablemente durante la última década. Mientras que hace solo unos años había pocos estudios académicos o periodísticos rigurosos sobre el país, todos elaborados por observadores extranjeros como Richard Johns, Helen Lackner y Nadaf Safran, ahora disponemos de un número de documentos que explican el funcionamiento del país y que informan a la vez que sirven para normalizar esta situación. Probablemente el precursor fue el ruso, experto en asuntos árabes, Alexei Vassiliev en su libro *The History of Saudi Arabia*. El científico social francés Pascal Ménoret, en su obra *The Saudi Enigma*, basada en los dos años que vivió en el país, y el economista político británico Tim Niblock en su reciente *The Economy of Saudi Arabia* también han colaborado en la mejora la situación. Dos mujeres, con conexiones saudíes, han hecho también mucho para remediar el desconocimiento del pasado: Mai Yamani en sus dos obras (*Changed Identities. The Challenge of a New Generation in Saudi Arabia* y *Cradle of Islam. The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity*) y Madawi Al-Rasheed (*Contesting the Saudi State. Islamic Voices from a new Generation*) han aportado en sus estudios sobre la Arabia Saudí contemporánea tanto un análisis rico en detalles como un convincente juicio general.

El camino hacia la «normalización» informativa también se percibe en la literatura. En el caso de Arabia Saudí, existe la monumental trilogía de Abdul Rahman Munif, *Ciudades de Sal*, una narración épica en la línea de las historias europeas del siglo XIX sobre los orígenes y primeros años del Reino Saudí. El poeta saudí, embajador y ministro, Ghazi al-Ghosaibi, también ha escrito numerosas reveladoras y evocativas nove-

las y cuentos cortos, incluidos algunos sobre la corrupción y el papel de la «sobornocracia». Y, aunque a algunos les pueda parecer imposible en una sociedad aparentemente tan cerrada, también hay literatura escrita por mujeres saudíes, que, como mínimo, acercarán al lector a la normalidad, con sus luces y sus sombras, de la sociedad saudí (*Voices of Change*. Cuentos cortos escritos por escritoras saudíes).

El precio, y el esperado resultado, de esta normalización es, evidentemente, que ahora sabemos más acerca de los engranajes de Arabia Saudí y de sus tensiones y problemas internos que hace unas décadas. El acceso a la información y el equilibrio analítico se hacen patentes en el artículo de Eduard Soler y Luciano Zaccara en esta obra. Las rentas del petróleo y la propaganda del Estado islámico no logran resolver los problemas del país o aislar a su población. Hay un evidente descontento general entre los jóvenes saudíes, algunos simpatizantes de Al Qaeda o, si más no, de la idea de un Estado más conservador. Otros abrazan valores más occidentales y su estilo de vida. Como describió recientemente el observador Steve Coll en su obra *The Bin Ladens*, un fascinante estudio de la élite saudí, la sociedad saudí se muestra dividida entre una tendencia *jihadista* y otra de tipo «Hard Rock Café», con matices entre ambos extremos. Al mismo tiempo, el éxito del Estado saudí en el uso de los ingresos provenientes del petróleo para aumentar la calidad de vida e integrar a las distintas provincias del país, evidente en la década de los 1970 y los 1980, se ha visto ahora reducido. Por ello, la identidad regional y sus aspiraciones, especialmente en Hijaz, han aparecido en escena. La existencia de esta oposición, así como de numerosas tensiones económicas y sociales, no implica la fragmentación o la desaparición del Estado. Cabría añadir que, debido a las probables consecuencias que acarrearía su desaparición, tampoco sería conveniente que esto sucediera.

7. La república hereditaria Siria: el fracaso de una transición

Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán

El blindaje de las élites sirias

El régimen sirio, de carácter autoritario y personalista, se mantiene en gran medida por la solidez de la alianza entre el Partido Árabe Socialista Baaz, que gobierna el país desde 1963, y las Fuerzas Armadas, que detentan el poder desde 1966; ambos están sustentados por un desmesurado aparato burocrático y una sólida oligarquía político-económica. Aunque habitualmente se suele destacar la sobrerrepresentación del elemento alawí en las esferas de poder (pese a que es tan solo el 12% de la población), lo cierto es que buena parte de los puestos de mando están copados por árabes musulmanes sunníes (cerca del 65% de la población). Como se expondrá más adelante, la verdadera naturaleza del sistema de poder sirio no reposa tanto en factores confesionales, ideológicos o regionalistas como clánico-familiares, ya que es en la familia —nuclear y extendida— de los Asad y toda su red de alianzas estratégicas donde debe buscarse la esencia de aquella.

Dicha alianza percibió que tras la muerte de Hafez al-Asad, el 10 de junio de 2000, se jugaba su propia supervivencia y por ello cerró filas en torno a su hijo Bashar. Esto fue debido, en primer lugar, a que había sido designado y auspiciado por su padre pero, además, se trataba del único candidato coherente en términos de continuidad política. Con todo, el candidato ideal de Hafez era su primogénito Basel; sin embargo, la muerte repentina de este en accidente de tráfico en 1994 hizo que la estancia de estudios de Bashar en Londres se interrumpiera de manera abrupta para encaramarle como sucesor.

El compromiso de Hafez con su hijo viene refrendado por el modo

en que fueron relegados aquellos miembros del séquito militar y securitario que expresaron reticencias sobre la idoneidad de Bashar. Ali Haydar, al mando de las Fuerzas Especiales, tuvo que abandonar su cargo en 1994, poco después de conocerse la designación de Bashar como heredero.¹ Adnán Majluf, jefe de la Guardia Presidencial, fue destituido en 1995, se supone que por un «encontronazo» con Bashar. Y otro tanto cabe decir de numerosos militares y políticos de primera línea que no expresaron entusiasmo notorio ante la decisión de Hafez de conceder la prioridad absoluta a Bashar y a su círculo de allegados, entre los que destacaba su cuñado Asef Shawkat, repudiado entonces por buena parte de lo que ha dado en llamarse la *vieja guardia* y hoy en día caído en desgracia.

A la vista de algunos de sus comportamientos políticos, pervive la impresión de que Bashar no contaba con las credenciales ni con la experiencia necesarias para asumir el mando (Amirah Fernández, 2000: 137-138) y que solo la irrefragable voluntad de su padre y el compromiso inequívoco del propio Bashar de no trastocar el statu quo oligárquico existente propiciaron su entronización al frente de la nueva *yumrukiya* (palabra resultante de la combinación de *yumruhiya* y *malkiya*, república y monarquía en árabe). Incluso antes de su elección como candidato presidencial, el Baaz eligió a Bashar como su nuevo secretario general y las Fuerzas Armadas le nombraron comandante en jefe. Para posibilitar su elección, la Constitución siria fue modificada para rebajar la edad mínima presidenciable de 40 a 34 (la edad de Bashar en aquel entonces).

Distribución de poder en el seno de las élites primarias y secundarias

Según la conocida definición del investigador británico Patrick Seale, Hafez al-Asad era «the only pole holding the tent». Dejando a un lado el posible componente de exageración que tal afirmación pueda llevar implícita, no cabe duda de que el sistema político sirio actual es el resultado de un artificio político ideado por *el león de Damasco*. Él fue quien asentó las bases del sistema en el interior, cimentado en el control del Estado de todos los aspectos de la vida pública y privada de la población, desde la férrea supervisión de la seguridad nacional por parte de los ser-

vicios de inteligencia hasta la llamada estatalización o predominio de las empresas e intereses públicos. Él fue, asimismo, el artífice de la política exterior, asentada sobre los pilares del panarabismo, el militarismo y una noción peculiar del secularismo que, en el fondo, no difiere mucho de lo aplicado por otros gobiernos panarabistas de la época.

El origen mismo de los Asad revela, como veremos más adelante con el ejército, la transformación sufrida por la oligarquía tradicional. Perteneciente al clan de los Kalbiya, tribu Raslán,² Hafez vio en la opción militar, lo mismo que otros tantos jóvenes de las regiones deprimidas del oeste del país: una oportunidad atractiva para medrar. La militarización de la vida política a partir del golpe baazista-castrense de 1966 supuso el ascenso definitivo de esta nueva jerarquía, de origen humilde y rural por lo general, es decir, ajena a las oligarquías urbanas de Alepo, Damasco o Hama, y la consagración de las Fuerzas Armadas como plataforma óptima, en combinación con la inevitable afiliación al Baaz, hacia los puestos de relevancia. La biografía de Hafez al-Asad ilustra además que el control de los servicios de inteligencia ha sido una de sus máximas preocupaciones: primero, desde 1969, convertido en ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor y único supervisor de tales servicios, para armar su golpe rectificatorio de 1970; segundo, para apuntalar su dominio omnímodo y permitir, a través de la multiplicación y fortalecimiento de los diversos estamentos dedicados al espionaje militar, el control absoluto de todo cuanto ocurría y, a la vez, neutralizar las diferentes secciones al mantener un aparente equilibrio de influencias y prebendas entre todos y cada uno de los altos mandos.

La estrategia de Hafez al-Asad entre 1970 y 2000 se aposentó en un concepto ubicuo y maquiavélico de la acción de gobierno: además de presidir la República, el Baaz y las Fuerzas Armadas, ideó una cadena de mando que empezaba y terminaba en su persona, esto es, que los máximos responsables del ejército y los diversos servicios de inteligencia dependían directamente de él. Solo a él rendían cuentas y solo de él recibían órdenes, sin mediar cadena de transmisión alguna (ministros, jefes de Estado Mayor, vicepresidentes, secretarios u oficiales de enlace). Esto evitaba una coordinación directa entre los subordinados y, por lo tanto, favorecía un clima de desconfianza en las altas esferas, al tiempo que reforzaba los vínculos de lealtad hacia el líder supremo. Esta estrategia, como se verá después, fue fundamental para garantizar la perduración del régimen, sobre todo en el episodio de la revuelta encabezada por el «her-

manísimo» Rifaat y el enfrentamiento entre las diversas secciones de la denominada «guardia pretoriana». Para mayor seguridad, los puestos más relevantes quedaban reservados a los familiares directos, hermanos e hijos en primer lugar, primos y sobrinos en segundo lugar, y personas de reconocida solvencia convertidas en familiares políticos. Más aún, para evitar traiciones, algunos máximos dirigentes tenían a su cargo ayudantes que mantenían un canal directo con la Presidencia.

Este monopolio de los recursos de poder debía conjugarse con una alianza estratégica con la plutocracia siria. De ahí nació la connivencia de los Asad con cierta burguesía urbana y rural, connivencia que se mantiene hoy en día. Con el tiempo, no obstante, los allegados reconvertidos en brigadas y generales o altos mandos del partido adquirieron unas copiosas riquezas que los convirtieron en magnates que ya no precisaban de alianzas económicas externas para asegurar su posición; si acaso, buscaban colaboraciones puntuales para extender sus negocios. En el fondo, se trata de un recurso más de retroalimentación en el seno de la élite primaria: el elemento de preponderancia política se convierte en una empresa dentro de un sistema que permite el ascenso vertiginoso de nuevas fortunas y emporios. De este modo, el responsable-empresario precisa de un entramado político e institucional que vele por sus intereses; y el único garante de la permanencia de tal mecanismo no puede ser otro que el máximo dirigente. De ahí, que la continuidad de los nuevos intereses creados dependiese de la hegemonía del líder. Un elemento más que explica su condición de imprescindible.

Por lo tanto, la asadización de Siria deparó el ascenso de una élite familiar reconvertida primero en militar, con el fin de acceder a los puestos claves de la inteligencia y las Fuerzas Armadas y, después, en un foco de magnetismo empresarial que haría del Estado su principal baluarte. De hecho, siempre que Asad quería postular a uno de sus hijos o allegados les hacía ascender de forma vertiginosa en la pirámide castrense aun careciendo de formación militar. Esta situación, ya en la era de Bashar, ha permitido que el círculo familiar más cercano haya adquirido una mayor independencia con respecto al patriarca, que carece por otra parte de los mecanismos de control y el ascendente de su padre, pero que, sin embargo, sigue constituyendo el engarce que mantiene el circuito interconectado.

Dentro del ámbito familiar más reducido de los Asad hay que diferenciar dos grandes ramas. En primer lugar, la formada por los hijos y

hermanos de Hafez al-Asad. Este binomio hijos-hermanos ha dejado paso, debido a las tiranteces fraternales entre Hafez por un lado y Rifaat y Yamil³ por otro, a un núcleo duro formado por los hijos, Bashar y Maher en la actualidad. En segundo lugar, la compuesta por los primos maternos y, en menor medida, paternos. Destacan aquí los Majluf (hijos de los hermanos de la madre de Bashar), el gran eje secundario dentro del gran bloque Asad, y los Shalish (hijos de la tía paterna de Bashar).

Los Asad, los Majluf y los Shalish conforman la tríada básica de la denominada «mafia gobernante» —tildados también como los *zu'ran* (bribones)—, sustentada a su vez en una plataforma de colaboradores cercanos y familiares que mantienen una relación de intercambio político y comercial con el primer círculo de poder. En la estructura familiar de los Asad, la figura de Asef Shawkat tiene un protagonismo peculiar. Es el único miembro influyente de la familia que «no está ahí» por nacimiento sino por el matrimonio con Bushra, hermana de Bashar. Se dice que fue el mismo Hafez quien postuló a Asef dentro de la familia, sobre todo tras la muerte de Basel, enemigo acérrimo del que acabaría siendo cuñado de Bashar, y le encomendó la tarea de proteger y apoyar a Bashar tras su muerte. Puede ser que Hafez viera en Shawkat, un hombre de origen humilde que, como él, hizo su carrera en el ejército, la capacidad de maniobra y la ambición que creía necesarias para Bashar. Shawkat tejó asimismo su propia red de clientelismos y contactos dentro del ejército; y sus familiares, del mismo modo, han medrado a su sombra para establecer emporios propios, a imagen y semejanza de los hijos de los Majluf, los Shalish o —fuera del estricto ámbito familiar— los Jad-dam, Tlas, Bahyat Suleiman y compañía, aunque su estrella parece haber declinado.

La aritmética del poder en la Siria de Bashar

Consciente de la necesidad de afianzar su posición y de rodearse de un grupo de colaboradores de absoluta confianza, Bashar emprendió una modernización de las estructuras administrativas y gubernamentales con el propósito aparente de desplazar gradualmente del poder a la *vieja guardia* y colocar en su lugar a una *nueva guardia*. El nuevo presidente cambió a los directores de todos los periódicos estatales, a los pocos meses hizo lo propio con todos los gobernadores provinciales y el aparato

regional del Baaz y en los dos primeros años reemplazó a dos de cada tres altos cargos políticos, administrativos y militares (Perthes, 2004a: 9). Sin embargo, esta *nueva guardia*, formada en buena parte por una pléyade de tecnócratas y economistas formados, como el propio Bashar, en el extranjero, no incluía el número suficiente de altos oficiales con peso efectivo real dentro de las Fuerzas Armadas como para asegurar un relevo integral del núcleo duro del estamento militar que, en todo caso, permanecía fiel a las directrices de su padre.⁴ Debe también tenerse en cuenta, como subraya Perthes, que a pesar de que la *nueva guardia* es más moderna y más joven, «esto no indica necesariamente que tenga una agenda alternativa a la de sus antecesores o a la de aquellos a los que busca reemplazar» (2004a: 11).

En líneas generales, puede decirse que el meollo de la élite primaria siria se conforma en torno a Bashar, sus familiares más cercanos y un selecto grupo de colaboradores de su padre, con el sempiterno ministro de Exteriores Faruq al-Sharaa en lugar señero. Por supuesto, los cargos de mayor responsabilidad han sido concedidos a personas de la máxima confianza, ya sean miembros del clan Asad o no, desde la vicepresidencia a los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, el Secretario General adjunto y el Comando Regional del Baaz y las Inteligencias (Mujabarat) General y Militar y el Estado Mayor, entre otros (Perthes, 2004b: 90).⁵

No obstante, la principal diferencia con respecto a la etapa de su padre, radica en que el ejercicio de poder en la Siria actual, por lo menos hasta la retirada de Líbano, se basa en un tándem y no una única persona. El primer factor es, por supuesto, el propio Bashar; el segundo es o era (por razones que se explicarán en el apartado final) Asef Shawkat, que aporta a Bashar la capacidad de control de los estamentos militares de la que el presidente, formado fuera del ámbito castrense, carece. Para algunos, la Presidencia siria devino a partir de 2000 una simbiosis entre Bashar, y su legitimidad política derivada de la designación paterna, y Asef Shawkat, garante de la estabilidad de los aparatos militares y de seguridad (VIC, 2000). La teoría de que la cúpula del país está compuesta por un tándem o binomio no declarado que aglutina los dos poderes, el político y el militar-securitario parece, a la vista de la actuación del presidente, más que plausible. El motivo de debate viene dado, si acaso, por la identidad del segundo componente: ¿Asef Shawkat o Maher al-Asad, hermano de Bashar?⁶ Maher ha terminado copando puestos de relevancia

en el aparato de seguridad y es, para muchos, el verdadero hombre en la sombra del régimen, especialmente tras la caída de Asef.

Debido al interés prestado por el nuevo presidente a las reformas económicas, el círculo de colaboradores se ha ampliado para englobar a una nómina de tecnócratas, agrupados en torno al Ministerio de Economía (cuya jefatura recayó entre 2001 y 2004 en economistas de renombre como Gassan al-Rifai y Amir Hosni Lotfi) y el presidente mismo. Se fortalece así la figura del «consejero presidencial» con nombres que, en algún caso, van a despertar suspicacias entre los colaboradores habituales de Hafez. Nabil Sukkar, un economista formado en Estados Unidos y partidario de un proceso de privatización genuinamente sirio es uno de ellos. Tan imprescindible como Sukkar, para los planes presidenciales, resultaba Ayman Abd al-Nur, ingeniero muy activo en el campo de la comunicación vía Internet y cercano colaborador de Bashar.

Otros empresarios del séquito presidencial, alguno de ellos fundadores de servicios de asesoría sobre procesos de privatización, surgieron del llamado Grupo de los 18, formado por asesores de reconocido prestigio: Riyad al-Abrash o, en otro orden, Samir Seifan o Sami al-Khiami.⁷ La designación de tales tecnócratas, ajenos al Partido Baaz y el esquema clásico de representación política, para puestos ministeriales de primer y segundo orden, ha supuesto una de las mayores innovaciones de Bashar. Si bien es cierto que este sector tecnócrata no participa en la toma de decisiones estratégicas, más allá del expediente económico, sí debe concederse que participan de forma cada vez más activa en los planteamientos del presidente.⁸ Ahora bien, la esencia de este grupo primario sigue recayendo en los familiares más cercanos al presidente y los oficiales y políticos veteranos que supervisaron el relevo de padre a hijo.

Estas élites primarias se sustentan, como no podía ser menos, en una tupida red de alianzas con familias adineradas y potentadas, de terratenientes de Damasco y las grandes ciudades del interior. En algunos casos, se trata de simples transacciones político-económicas en las que ambas partes obtienen un rédito: los grandes y medianos capitales obtienen cobertura para sus negocios y los personajes del régimen, liquidez y prestigio social. Por poner un ejemplo, Asma al-Ajras, la esposa de Bashar, que está adquiriendo —y con ella su círculo más cercano— un progresivo protagonismo en la escena nacional, pertenece a una familia de rancio abolengo de Homs, urbe sunní por excelencia (Leverett, 2005: 74-75).⁹ En el curso de los últimos años, la primera dama siria se ha erigido

en la presidenta de siete organizaciones no gubernamentales sirias, entre ellas Shabab, Mawred y Firdos, dedicadas respectivamente a la juventud, la mujer y al desarrollo rural (Heydemann, 2007: 8).

En fin, por debajo de estas élites primarias, con sus correspondientes basamentos económicos y sociales, se halla un conglomerado de élites secundarias, representadas principalmente por secretarios y asesores de ministerios, oficiales de segundo grado, altos y medios dirigentes del Baaz, gobernadores y responsables regionales y locales de los servicios de inteligencia. Estos componen el grueso militante y más activo del sistema y son los que, en realidad, mantienen el control directo sobre la población. Han de ser consideradas secundarias porque tienen un rango de subsidiariedad con respecto a las primarias y dependen de las decisiones estratégicas adoptadas por estas; pero, al mismo tiempo, adquieren una importancia excepcional puesto que son ellas las que soportan y garantizan la continuidad del sistema. No en balde, fueron estas élites secundarias las que sufrieron primero y solventaron después el desafío de los Hermanos Musulmanes (HHMM) a principios de los años ochenta.

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas son las auténticas protagonistas de la vida política desde el primer golpe baazí de 1963. El sistema de gobierno actual emana de un golpe militar y en el curso de las cuatro últimas décadas, las Fuerzas Armadas han acumulado un poder prácticamente ilimitado, lo que les ha permitido destinar una parte significativa del presupuesto nacional a gastos armamentísticos con el propósito de alcanzar una supuesta «paridad militar» con Israel. Este impulso armamentístico, sustentado en un porcentaje del PIB cercano o superior al 6%, fue especialmente visible durante la década de los ochenta, aunque el final de la guerra fría y el desmoronamiento soviético dejaron a las Fuerzas Armadas sin su máximo valedor. A partir de entonces, reorientó sus esfuerzos a alcanzar una «paridad estratégica» (Cobban, 1991 y Ma'oz, 1995), opción que tras la salida de las tropas sirias de Líbano en 2005 parece finalmente descartada.

La cúpula del ejército constituye el pilar fundamental del sistema político, si bien no son los máximos responsables de las unidades armadas los que detentan y administran esta influencia política, sino los su-

pervisores de los servicios de inteligencia o la guardia pretoriana adscritos al mismo. De hecho, los mandos con mayor ascendente dentro de las Fuerzas Armadas ocupan o han ocupado puestos de relevancia en determinadas secciones de la inteligencia militar y la guardia pretoriana; y nada tiene de particular, dentro de la lógica clásica del sistema orquestado por los Asad, que el círculo familiar dominante, ya con Rifaat en tiempos de su hermano Hafez, ya con Asef Shawkat recientemente, haya desempeñado una función de primer orden en este ámbito. Por esta razón, pensamos que, por encima incluso del mismo Estado Mayor y el ministerio de Defensa, es en los servicios de inteligencia y la guardia pretoriana donde radica el verdadero peso del elemento castrense. La valoración del alcance del ejército como generador de componentes de élites primarias ha de resaltarse en el siguiente apartado, sobre los servicios secretos y las fuerzas de élite, si bien ahora conviene apuntar una serie de características del estamento militar que, en líneas generales, sirven para ilustrar el arrumbamiento sufrido por ciertas élites tradicionales.

La transformación radical sufrida por las Fuerzas Armadas sirias tiene su origen en las medidas emprendidas por el Protectorado francés para fomentar el ingreso de las minorías nacionales (alawíes, drusos, armenios, etc.) en las tropas coloniales. Nacen así las *Troupes Spéciales* que supusieron el embrión del ejército sirio (Bou Nacklie, 1993). Quizás se ha exagerado el protagonismo de estas tropas étnico-confesionales en la represión de las corrientes anticolonialistas, supuestamente árabes y sunníes, o su verdadera importancia en el llamado asalto alawí a la cúpula militar. Puede que la razón última de la incorporación masiva de elementos rurales y de confesiones minoritarias radique en el hecho de que el ejército aportaba oportunidades laborales y que las clases altas no tuvieran interés en el enrolamiento de sus vástagos (Batatu, 1981). Sí es cierto, en cualquier caso, que la carrera militar se ha convertido, desde la década de los cincuenta del siglo pasado hasta hoy, en un mecanismo válido para que el sistema clásico establezca un filtro con el que regular el medro de los elementos afines.

Debido a que la auténtica finalidad de las Fuerzas Armadas es la de asegurar la perduración del sistema frente a los peligros de *involución interna*, son los servicios de inteligencia los que constituyen, también, el nervio central del ejército. La preponderancia de estos servicios durante la ocupación siria de Líbano así lo confirma, lo mismo que el hecho de que los cuerpos y secciones autónomas adscritas a familiares y hombres

de confianza de los Asad, no están sujetos a la jerarquía del Estado Mayor o el ministerio de Defensa; o que quienes presiden estas dos últimas instancias sean, por lo general, referentes menores del poder. Resáltese que Mustafa Tlas (ministro de Defensa) o Hikmat al-Shihabi y sus sucesores, Ali Aslán y Hasan Turkmani (los dos últimos jefes del Estado Mayor) no pertenecen al clan Asad.

La guardia pretoriana: los destacamentos militares especiales

Con el nombre de guardia pretoriana se designa a una pléyade de unidades militares, equipadas y adiestradas a conciencia, destacadas en torno a la capital, centro neurálgico del sistema político. Constituyen el verdadero garante de la estabilidad del sistema diseñado por Asad y su misión consiste en, por un lado, controlar a las Fuerzas Armadas (a través de sus eficaces servicios de inteligencia propios) y, por otro, sofocar cualquier intento de rebelión interna. En cierto sentido, puede decirse que conforman un ejército de élite autónomo dentro de las Fuerzas Armadas. A continuación, pasamos a exponer las unidades más relevantes y su relación con la cúpula del poder, representado por los Asad:¹⁰

La Guardia Republicana. Con cerca de 10.000 efectivos es la encargada de velar por la seguridad del presidente y la que disfruta de un mayor margen de acción en la capital. Siguiendo la tónica habitual, la dirección de esta unidad, creada en 1976 tras una serie de acciones cometidas por facciones palestinas opuestas a la intervención siria en Líbano, se reservó a un pariente de los Asad, Adnán Majluf, primo de la mujer de Hafez al-Asad, relevado posteriormente en 1995 por Ali Mahmud Hasan. La configuración de estas tropas denota, asimismo, otra de las pautas de acción que han presidido el diseño de la guardia pretoriana, a saber, la cuidadosa elección de oficiales de lealtad inquebrantable al régimen y su gratificación con prebendas y privilegios. Ya que esta filiación ha seguido, por lo general, pautas marcadas por el parentesco o la pertenencia a clanes y regiones bien definidas, la cúpula de todos estos servicios está copada por militares alawíes, ya sean miembros del entorno familiar de los Asad o de sectores muy identificados con estos. Sin embargo, como ya se ha avanzado, no han sido los criterios estrictos de pertenencia confesional los que han definido esta relación sino la coincidencia de inte-

reses. Asimismo, el propio Bashar y su hermano Maher se han formado en estas unidades, y el primero puso buen cuidado en designar a colaboradores directos suyos al llegar al poder, en puestos de mando, caso del general Abd al-Fatah al-Qudsi, jefe de la sección de seguridad de la Guardia Republicana. Con posterioridad, Ali Mahmud Hasan fue relevado del mando y sustituido por Dhu-l-Himma Shalish, primo paterno de Bashar. Con el tiempo, la figura emergente de la familia Asad, Maher, ha terminado por convertirse en el máximo dirigente de este cuerpo.

Las Fuerzas Especiales. Compuestas por entre 10.000 y 15.000 efectivos, se encuentra desplegada en los alrededores de Damasco, aunque alguna unidad ha sido desplegada de forma circunstancial en zonas estratégicas dentro del país (puerto de Tartus) y Líbano (Trípoli). Basada en los comandos de élite, cuenta con efectivos de aire y fue constituida antes del ascenso de Hafez al-Asad en 1970. Su comandante fue Ali Haydar, sustituido en 1994 por Ali Habib, general que dirigió el contingente sirio que participó en la guerra del Golfo de 1991 en el seno de la coalición internacional que desalojó al ejército iraquí de Kuwait.

La Tercera División Armada. Asignada al general Shafiq Fayyad en 1978, tiene sus bases en el perímetro de Damasco. Fayyad pertenece al primer círculo familiar en su condición de primo materno de Hafez al-Asad, al igual que Adnan Asad, primo paterno, nombrado en 1973 comandante de las Brigadas de Lucha, cuerpo menor formado por unos 5.000 efectivos, frente a la «coalición tribal» representada por Ali Mahmud Hasan o Ali Haydar. Este último, con sus Fuerzas Especiales, y la Tercera División Armada de Fayyad fueron determinantes a la hora de abortar la intentona de Rifaat al-Asad, quien al mando de las Brigadas de Defensa, el cuerpo militar más poderoso y experimentado de su tiempo, protagonista de la represión de la revuelta islamista de los años ochenta, intentó ocupar la capital en 1983 para derrocar a Hafez. En ese año, la estrategia ideada por Hafez —unidades de élite autónomas y autosuficientes— dio el resultado esperado, ya que Rifaat, a pesar de su ascendente y protagonismo dentro del sistema, no consiguió vencer la resistencia del resto de cuerpos.

La Cuarta División Armada. Nace como continuación de las Brigadas de Defensa de Rifaat al-Asad, defenestradas tras la intentona golpista. No

obstante, la formidable capacidad operativa de las Brigadas fue recortada con la exclusión de su servicio de inteligencia y unidades aéreas. En 2000, fecha de la entronización de Bashar, contaba con cerca de 20.000 hombres y estaba dirigida por Hikmat Ibrahim, vinculado a la familia Asad.

Los servicios de inteligencia militares y de seguridad

Los servicios de inteligencia (Mujabarat) ocupan un papel central a la hora de garantizar la supervivencia del régimen. Su principal tarea es frenar cualquier eventual amenaza y extirpar cualquier brote de disidencia que amenace a los Asad. En cierto sentido han logrado su objetivo, porque Siria ha vivido casi cuatro décadas de estabilidad, lo que contrasta con el período previo a la llegada de Hafez al-Asad al poder, cuando una veintena de golpes y contragolpes militares se sucedieron entre 1946 y 1963. Esta estabilidad política ha tenido un elevado coste, puesto que los derechos humanos han sido violados de manera sistemática y cualquier disidencia se ha extirpado de raíz.

El término *mujabarat* lleva implícitamente aparejada la noción de temor y omnipresencia. La permanencia de las leyes de emergencia y su protagonismo en la vida pública —el acceso o promoción en la empresa pública requiere informes previos de los mujabarat que, además, poseen una extensa red de informadores en todo el país— les confiere un poder excepcional. Además, la peculiar imbricación de estas secciones con los Asad y el núcleo de las élites primarias hacen de ellas, junto con la guardia pretoriana, el pilar del sistema clánico imperante en Siria. También, los puestos de relevancia dentro de los mujabarat se reparten entre allegados a la gran familia y, generalmente, militares de lealtad impoluta que, además, mantienen relaciones de afinidad regional, clánica o de intereses con la cúpula del mando en Damasco. Ninguno de los sectores de la sociedad es inmune a la acción de los mujabarat, ni tan siquiera los alawíes, aunque hay tres que han quedado más expuestos: los Hermanos Musulmanes, partidarios de un Estado islámico; los activistas kurdos, cuyas demandas en torno a su especificidad cultural son vistas como un primer paso hacia el separatismo; y, por último, la sociedad civil, que exige una profunda liberalización política y el fin de las leyes marciales.

La preponderancia de estos servicios es consecuencia directa de las

leyes excepcionales de emergencia implantadas hace más de cuarenta y cinco años, convertidas ya en consuetudinarias gracias, entre otros pre-textos, al estado de guerra con Israel. La aplicación estricta de estas leyes «justifica» la omnipresencia del aparato de seguridad militar y policial, que restringe a su gusto la libertad de reunión, vela por la censura en todos sus órdenes y es responsable del allanamiento de moradas, así como del encarcelamiento e interrogatorio de sospechosos y su enjuiciamiento sumario.¹¹ Como no podía ser menos, alguna de las prerrogativas concedidas al estamento de seguridad, sobre todo militar, ha favorecido el enriquecimiento de sus mandos.

La posibilidad de confiscar bienes muebles e inmuebles da lugar a exacciones que, en ocasiones, tienen que ver con oscuros intereses inmobiliarios, no tan lejanos en esencia de las posibles macroespeculaciones que se esconden tras grandes proyectos urbanísticos.¹² Precisamente, una de las reclamaciones de las organizaciones de derechos humanos sirias es la del fin de la injerencia de los servicios de seguridad en la Justicia. Estos servicios no solo actúan al margen de cualquier fiscalización judicial, puesto que tienen potestad para emitir acusaciones y enjuiciar, sino que sirven para supervisar el comportamiento de los estamentos militares. Desde un punto de vista legal, la efectividad del cuerpo judicial, por no decir su independencia, queda completamente en entredicho, ya que «el poder real está en manos de los servicios secretos, a quienes los jueces prestan única atención».¹³ La pervivencia del estado de excepción da lugar a numerosos casos en los que los elementos «sospechosos» pueden ser privados de su pasaporte o se les impide la salida del país en virtud de una orden — que no suele ir razonada más que con acusaciones genéricas — de los servicios de seguridad, sin intervención judicial alguna.

Más aún, la estanqueidad entre unos cuerpos y otros origina que, en ocasiones, dos o más departamentos emitan informes vinculantes contra una misma persona sin la menor coordinación. Más grave aún es el secretismo y confusión que rodean el paradero de numerosos activistas reclusos en centros de detención. Algunas cárceles y centros de detención dependen de la Inteligencia Militar, caso de al-Adawai, Halbuni o Qabun; otras de la Seguridad Política — Abu Rumana — o de las Fuerzas Especiales, la Inteligencia de las Fuerzas Aéreas u otras. Por otro lado, la actividad de estos servicios es notoria y completamente independiente en el exterior: los casos de secuestro e intentos de asesinato son numerosos, no solo en Líbano durante la guerra civil (1975-1990) y la etapa de tute-

la siria (*al-wisaya al-suriyya*) hasta 2005 —y, posteriormente, la supuesta implicación en los crímenes de políticos y periodistas libaneses—, sino en la misma Europa: baste citar el asesinato de Salah Bitar, uno de los ideólogos del Baaz, en París en 1980, o Bayan al-Attar, esposa de Isam al-Attar, líder de los HHMM, en Alemania en 1981.

Los servicios de inteligencia se dividen en cuatro secciones, que comparten un modus operandi similar al de los grupos pretorianos: autonomía e independencia entre sí aunque, en muchas ocasiones, las facultades y competencias sean las mismas, y conexión directa con la jefatura del Estado (MEIB: 2000). Una estructura que invita a pensar que varios de estos servicios están pensados tanto para reforzar la seguridad del régimen frente a enemigos exteriores como para evitar que ninguno de ellos pueda desestabilizarlo desde dentro. Esto es, sirven para controlar a la sociedad en su conjunto pero también para controlarse los unos a los otros (Batatu, 1999: 240). Podemos dividir a los mujabarat en:

Directorio de la Seguridad Política. Se centra en recabar información sobre posibles actividades de grupos y partidos políticos no tolerados por el régimen, así como de las actividades «sospechosas» de extranjeros en suelo sirio. Está encargado de evaluar y censurar las publicaciones y medios audiovisuales. Desde 1987, el máximo responsable es el mayor Adnán Badr Hasan.

Directorio de la Seguridad General. Es el más importante de todos los servicios de inteligencia civil, dispone de tres ramas con funciones diferenciadas que, como ya se ha avanzado, comparten competencias con otros servicios, sobre todo el de Seguridad Política. Su máximo responsable ha sido siempre un militar: lo era el general Bashir al-Nayyar, depuesto en 1998 por corrupción —eufemismo que esconde una supuesta desafección respecto al sistema o la desconfianza respecto a su verdadera lealtad— y lo fue su sucesor, Ali Huri. Con la llegada de Bashar, uno de sus hombres de confianza, Bahyat Suleimán, accedió al control de su rama principal: la Seguridad Interna; sin embargo, el nombramiento de Shawkat en 2005 como comandante de la Inteligencia Militar provocó el arrumbamiento de Suleimán, al que se tiene por enemigo acérrimo de Shawkat. Otra rama, la de Seguridad Externa, se dedica a labores de espionaje y control fuera de Siria, y se supone que la primacía de la misma recaía en el máximo responsable de la Inteligencia Militar en Líbano

(MEIB, 2000), Gazi Kanaán primero y Rustum Gazale después, mientras que la tercera, la División Palestina, supervisa las actividades de la comunidad palestina. Más que en ningún otro servicio, es muy complicado determinar el verdadero margen de acción del responsable de la Seguridad General en su conjunto y hasta qué punto la división externa se superpone a la interna y viceversa.

Inteligencia Militar. Supervisa o supervisaba las acciones militares y la coordinación de las Fuerzas Armadas en el exterior, principalmente en Líbano, así como las relaciones con grupos armados libaneses, palestinos y turcos que mantienen o mantenían buenas relaciones con Siria. Puesto que se trata del principal servicio de inteligencia militar, el hombre fuerte de estos mujabarat ha tendido a ser considerado uno de los máximos responsables de la estabilidad del sistema en su conjunto. El dirigente histórico de esta sección, Ali Duba, fue relegado de su cargo en 2000. Su puesto lo ocupó en primera instancia Hasan Jalil, otro general, si bien Asef Shawkat, se hizo cargo de ella en 2005. Shawkat había sido el brazo derecho de Bashar en los mujabarat hasta que pasó a ocupar una posición de relevancia pública.

Inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Sus competencias van más allá de su implicación con las tropas de aire, puesto que han desempeñado una función determinante en la represión de los movimientos islamistas en los años setenta y ochenta y la campaña contra grupos de menor importancia como el Partido de la Liberación en los noventa (MEIB: 2000). Los servicios secretos occidentales imputan a esta sección diversos atentados o intentos de atentado en el exterior y sus agentes están comisionados en embajadas y oficinas de las Líneas Aéreas Sirias. Durante el gobierno de Hafez al-Asad, el cual, recordemos, se formó en las Fuerzas Aéreas, el hombre fuerte de esta sección fue Muhammad al-Juli y, con posterioridad, se designó al general Ibrahim Hueyi.

El Partido Baaz

El ascenso de Hafez al-Asad provocó el progresivo retraimiento del Baaz, nacido en 1947, cuyos máximos dirigentes, a pesar de presentarse como rasgo distintivo del sistema político sirio, no forman parte, en esen-

cia y exceptuando a los mandos más allegados a los Asad, de la élite primaria. En cualquier caso, la toma de decisiones en el seno del Baaz está supeditada a las prioridades del círculo de poder cercano a la Presidencia y los congresos, aunque sirvan de conducto oficial de las directrices generales del régimen, no dejan de aportar una cobertura institucional.

En la década de los setenta, el Baaz se convirtió en un instrumento de movilización social, aunque en la actualidad más bien ejerce la labor de control de la sociedad. Hoy está integrado dentro de una alianza denominada el Frente Nacional Progresista, que aglutina a los grupos afines al régimen. En el X Congreso del Partido Baaz, celebrado en junio de 2005, Bashar alentó una renovación generacional de sus cuadros, aunque sin cuestionar su condición de «líder de la sociedad», recogida en el artículo 8 de la Constitución y considerada por muchos como el principal obstáculo para la emergencia de un sistema multipartidista. En su discurso, Bashar hizo referencia, con inusual franqueza, a algunos de los principales retos internos que debería afrontar en su Presidencia: «Afrontamos numerosas dificultades debido a la debilidad de nuestra estructura administrativa, a la falta de personal cualificado y a la acumulación crónica de estos problemas».¹⁴ En todo caso, «la modernización del proyecto social del Baaz» reclamada por Bashar no supondría un cambio radical, ya que «su ideario y programa siguen vigentes y responden a los intereses del pueblo y la nación».

Recursos de control e intercambio de prebendas

La cohesión de un mecanismo, restringido y elitista, que funciona de manera compacta y con una serie de objetivos compartidos, es una de las características principales del sistema sirio. El concepto de lealtad está sujeto no solo a consideraciones familiares y tribales y a la identificación con un proyecto cuya destrucción implica la desaparición de los privilegios adquiridos, sino también con una regulación estricta de las prebendas e intercambios admitidos por la Jefatura. En este sentido, el Estado se convierte en garante de los derechos omnímodos de la élite primaria, que mantiene en su mano el dominio de todos los sectores políticos y económicos.

En líneas generales, digamos que, aquí, el principio de cohesión ha

girado en torno a la concesión de monopolios empresariales o la notable libertad de acción permitida a los miembros de la casta dirigente en campos diversos. Para ello se han utilizado los principales recursos susceptibles de generar ingresos (el petróleo, sobre todo) y los mecanismos legislativos excepcionales. Por lo que hace al ámbito petrolífero, siempre ha existido la impresión en círculos populares de que la familia Asad dispone de una cuenta secreta para las ganancias no declarables de la explotación del oro negro. Según algunas fuentes, el petróleo ha servido para recompensar, también, a diversos sectores de la guardia pretoriana y, en concreto, a la republicana (MEIB: 2000). El sector turístico ha servido para que prohombres del régimen hayan instaurado cadenas de hoteles y complejos urbanísticos en la costa mediterránea, caso de los tíos y primos de Bashar. En cuanto a los monopolios, representan la evidencia de que la ley y las normativas sirias están a disposición de las élites primarias, sobre todo en lo concerniente a la exención de impuestos a la importación y la exportación, tan gravosos y desalentadores por lo general: a una sección de los Asad ha correspondido el del tabaco; Rami Majluf,¹⁵ el gran empresario joven de Siria, disfruta de las contratas exclusivas del mercado libre (aeropuertos), el inalámbrico y el cemento y ha extendido su red de intereses empresariales por dominios tan diversos como el hotelero, transportes y los medios de comunicación tanto de prensa escrita como en Internet (Leverett, 2005: 83-84). Su riqueza está estimada en billones de dólares y, según algunas fuentes, en Siria no se puede hacer negocios sin su anuencia (Nkem Ifejika: 2007).

En otros casos, la impunidad con la que el sistema ampara las corruptelas y los «pelotazos» empresariales fraudulentos ha permitido el medro de individuos y sectores emparentados o coaligados con los altos cargos. La corrupción y el dinero fácil han sido uno de los instrumentos habituales para sellar alianzas coyunturales entre los clanes principales de las élites primarias. De este modo, los Jaddam y adláteres han conseguido pingües beneficios en el sector de la alimentación; los Tlas, en el sector de la informática. Las empresas mixtas o limitadas, dirigidas en ocasiones por testaferros, también han causado furor: Ziyad Shawkat, hijo del primer matrimonio de Asef Shawkat (antes de contraer segundas nupcias con Bushra al-Asad) ha conseguido grandes éxitos comerciales a través de las inmobiliarias y la importación de coches;¹⁶ los Shalish utilizaron SES, dedicada en apariencia al sector de repuestos mecánicos, para hacer operaciones de dudosa legalidad en el exterior, entre ellas la

venta de armamento a Irak durante los años de embargo y la falsificación de cédulas de exportación. Por cierto, la importación oficiosa de petróleo iraquí dentro del programa «petróleo por alimentos», ha permitido la creación de empresas-tapaderas regentadas por símbolos emergentes de la élite primaria. Del mismo modo, el contrabando, mayormente entre Líbano y Siria, así como el tráfico de drogas y armas, han aportado fuentes de ingreso extra a ciertos gerifaltes del estamento militar.

Estructura económica y política de mercado

El ascenso al poder de Bashar al-Asad desató todo tipo de cábalas en torno al fin del autoritarismo y la reforma del régimen sirio, la mayor parte de ellas sin sustento real. Desde un primer momento, el aparato burocrático, tachado de «torpe, poco transparente, ineficiente y desdeñoso», cuando no proclive «al soborno y la extorsión» (Perthes, 2004a: 23-24), acaparó la atención de Bashar, cuyos proyectos modernizadores pretendían, o así se decía, cortar de raíz cualquier sombra de corrupción. En esta misma línea, el nuevo presidente respaldó el establecimiento de un Instituto Nacional de Administración que sigue el modelo y cuenta con la colaboración de la École Nationale d'Administration francesa. Todo esto, junto a la incorporación al equipo de Bashar de un nutrido grupo de economistas, certificó la prioridad concedida por el presidente a los proyectos de reforma económica, más aún tras el fracaso definitivo de las tímidas reformas políticas.

Ya se ha dicho que el verdadero vértice del sistema está compuesto por un núcleo oligárquico orquestado en torno al clan de los Asad y allegados. Pero, al mismo tiempo, existe una élite económica «histórica», predominantemente sunní pero también cristiana, que mantiene buenas relaciones con el régimen. Una puntualización importante es que Hafez al-Asad, al contrario de lo que ocurrió en el Egipto de Naser, nunca estableció un Estado completamente socialista y dio «una gran flexibilidad al sector privado dominado por la élite económica y comercial urbana sunní, especialmente en Damasco» (Perthes, 1995: 58). De hecho, el golpe rectificatorio de Asad contra su compañero de armas, Salah Yadid, en 1970, tenía entre sus objetivos principales poner coto al «radicalismo colectivista» de este y apaciguar a la oligarquía financiera y terrateniente del país, sobre todo en Damasco.

El proceso de liberalización económica registró un impulso considerable en 1991 con la aprobación de la Ley nº 10, que otorgó incentivos fiscales a los inversores privados nacionales y extranjeros. Con la llegada de Bashar al-Asad al poder esta tendencia se prosiguió, de tal manera que parece haberse iniciado un proceso de transformación desde «el estatismo a la economía de mercado» (Perthes, 2004a: 5). En este sentido, el elemento fundamental de la relación entre el régimen de los Asad y determinadas élites económicas del interior se basa en un acuerdo tácito de simbiosis: el poder aporta cobertura legal y política a las oligarquías afines y estas aseguran un respaldo financiero y empresarial que, en el seno de la comunidad sunní, tiene el añadido beneficioso, para el grupo militar dirigente, de contrarrestar el auge de tendencias opositoras vigorosas que pongan en jaque la estabilidad. A todo esto, debe decirse que el marbete simplista y simplificador que propende a motejar, en los estudios al uso, el sistema de gobierno en Siria como alawí suele obviar que cierta plutocracia sunní apoyó de forma decidida a Hafez al-Asad en sus años de gobierno, en contra incluso de los Hermanos Musulmanes y su órdago «revolucionario» de los años ochenta, la mayor amenaza a la que ha debido hacer frente el régimen en toda su historia. Hoy por hoy, esta alianza de intereses se ve reforzada por enlaces matrimoniales y proyectos empresariales conjuntos entablados por las nuevas generaciones del clan Asad y familias políticas y militares adláteres, por un lado, y los herederos de algunas de las fortunas más relevantes del país o de determinadas regiones por otro.

En el apartado dedicado a las élites primarias y los recursos de poder se ha hecho mención a la emergencia dentro de aquella de un grupo dirigente, que monopoliza los puestos de mando en el seno del ejército, los servicios secretos y el Baaz y que, con el paso del tiempo y gracias a la permisividad del sistema, ha amasado fortunas considerables. Es precisamente la corrupción el principal condicionante de la economía y el factor que garantiza la estabilidad del sistema, basado en el intercambio de prebendas pero, a la par, entorpece cualquier proceso de reforma. En palabras de un ex ministro de economía de la era Bashar, la burocracia y la corrupción son los principales impedimentos de la inversión exterior (Raphaeli, 2007: 6). Una transformación radical del panorama actual en cuanto a transparencia y liberalización podría socavar el sustento de poder de las élites y suponer una amenaza para sus privilegios (Taheri, 2002). De forma paradójica respecto a los supuestos fundamentos socialistas del sistema político, los miembros del clan Asad disponen de una

libertad de acción y decisión en las áreas de producción y comercialización administradas por ellos que las convierten en una especie de coto privado, con sus propias normas propias de un «minimercado liberalizado», más allá del alcance de un Estado cuyas leyes y mecanismos de control y coerción atenazan a la sociedad en su conjunto.

En efecto, el Estado rige los mecanismos de producción y distribución e impone unos requisitos, tanto en la esfera pública como la privada, que favorecen el fortalecimiento de los cánceres crónicos de la economía siria, desde el burocratismo hasta la rigidez estructural y la corrupción. Uno de los componentes básicos de la revitalización económica del país debería haberse centrado en la promoción de la inversión privada e institucional, mayormente internacional o procedente de patrimonios sirios puestos en el exterior. Esta, tras la llegada de Bashar a la Presidencia, mostró cierto interés en el asunto, pero la inestabilidad política de la región, agudizada tras la salida de sus tropas sirias de Líbano y la ocupación americana de Irak, unida a las sanciones estadounidenses y la polémica en torno al plan nuclear de Irán —aliada de Siria—, ha supuesto un obstáculo considerable.

Con todo, los principales escollos son internos y tienen que ver con la naturaleza misma de la economía local. A pesar de las mejoras introducidas a la hora de eliminar ciertos monopolios y reducir el total de productos vetados a la importación, según el FMI, la siria es una de las regulaciones del mundo más restrictivas en materia de comercio (FMI, 2006: 43). Además, los aranceles son caros y los trámites lentos, por no hablar de las «mordidas» que encarecen cualquier transacción. Por esta razón y otras, Siria suele aparecer en las listas al uso sobre la falta de libertad económica, así como en los vectores que permiten certificar la facilidad para hacer negocios en un país. En cuanto a la corrupción, algunos índices como el de Transparencia Internacional sitúan a Siria en el grupo de países más corruptos.

El ámbito bancario, tenido generalmente por uno de los que más se han desarrollado desde la implantación de las reformas, adolece asimismo de esta tendencia general al estancamiento, a pesar de las innovaciones que se han introducido en los últimos años. El primer banco privado, en cumplimiento de la Ley n° 8 de 2002, se estableció en 2004; después vendrían otros, de capital libanés, saudí y jordano. Pero, una vez más, la falta de un criterio claro sobre el objeto final de las reformas y la lentitud con la que se aplican han paralizado el proceso.

En cuanto al sector petrolífero, la continuada demanda interna y la disminución de las reservas hacen suponer que la principal fuente de divisas de la economía siria está en declive. De hecho, únicamente el repunte de los precios ha permitido amortiguar un descenso en la producción, evidente entre 2000 y 2005, período en el que la misma pasó de 518.000 a 405.000 barriles diarios. También, la cuota del petróleo dentro de las exportaciones se ha reducido de forma notoria: de un contrastado 70,3% en 2002 a un previsto de 48,3% en 2008 (Economist Intelligence Unit, 2007). Además se considera que para 2020, las reservas del país estarán muy mermaidas, hecho que supondría un duro golpe para la economía siria, pero también para el sistema clánico, que lo emplea como medio de financiación y generación de prebendas. Ante la ralentización petrolífera, la agricultura ha vuelto a adquirir un papel destacable, debido entre otras cosas a la implantación de nuevas técnicas de regadío en el norte.

A ello debe añadirse la crisis económica siria desde la entrada en el siglo XXI. Casi uno de cada tres sirios vive hoy en día bajo el umbral de la pobreza y la economía (con un crecimiento del 2,4% anual) es incapaz de absorber a las 300.000 personas que cada año intentan incorporarse al mercado laboral (lo que hace que la tasa de desempleo supere ya el 20% según datos oficiosos; el gobierno solo reconoce un 10%). Por otro lado, las oportunidades laborales no dejan de ser precarias y cientos de miles de ciudadanos siguen trabajando para el Estado con salarios ínfimos y en ocupaciones innecesarias. La entrada de 1.500.000 refugiados iraquíes, que huyen de la violencia sectaria y de la destrucción del país iniciada tras la invasión americana, es una fardo más en la ya demasiado pesada carga que soporta Siria. En cuanto a la situación social, el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas situaba a Siria en el puesto 107 de un total de 177 (UNDP, 2006). El descenso evidente del rendimiento de la enseñanza y los servicios básicos tiene su explicación en el elefantismo de los presupuestos asignados a la «seguridad nacional» y la crisis pertinaz que padece el país.

Activismo y movilización política en Siria

En la actualidad, la prioridad absoluta de las élites dirigentes sirias es la lucha por la supervivencia, que identifican con el mantenimiento del ré-

gimen. La población, por el contrario, reclama reformas radicales, tanto en el terreno político como económico. Como apunta Steven Heydemann existe una «fatiga popular con la retórica del régimen y con el culto a la personalidad en el que está arraigado» (1999: 2).

La oposición política, organizada en los exilios europeo y norteamericano, presenta desde hace décadas una pluralidad de intereses y estrategias que han impedido por lo general la forja de un frente unificado. Las rivalidades entre las diversas élites que controlan el rumbo de las principales corrientes opositoras y la ausencia de un programa básico han permitido que el régimen sirio, al contrario de lo que ocurriera con el Baaz de Saddam Husein, haya podido neutralizar la acción propagandística de aquellas. Además, como no existe un consenso entre los principales grupos de la oposición en lo concerniente a la estrategia de acoso orquestada por Washington —consenso que sí se dio entre los líderes islamistas (chíes) y federalistas (kurdos) iraquíes—, la implicación de la disidencia política en la campaña contra Damasco es más bien limitada.

Por lo que respecta a la oposición en el interior está encabezada por una sociedad civil con un margen de maniobra sumamente limitado debido a las consabidas cortapisas impuestas en el pasado por el régimen sirio, dinámicas que fueron reforzadas por Bashar al-Asad tras acceder a la Presidencia, después del breve lapso aperturista. Ningún partido político que no esté integrado en el Frente Nacional Progresista puede tomar parte en las elecciones, a las que si pueden concurrir candidatos independientes (a los que se les reservan 83 de los 250 escaños de la Asamblea Popular), siempre que no traspasen las «líneas rojas» fijadas por el régimen.

Las posibilidades de una agitación popular en el interior son más bien remotas. Puede haber turbulencias de mayor o menor intensidad en regiones especialmente conflictivas, como algunas provincias de mayoría kurda o del interior árabe sunní, pero, en cualquier caso, los servicios de seguridad y el ejército disfrutaban aún de una capacidad de represión y control absolutos. Además, las peculiaridades confesionales, étnicas y regionales del país complican, al imión con la inexistencia de canales que permitan la participación y organización sociopolítica, la aparición de una corriente de oposición compacta. Pudiera ser que una presión continua ejercida desde el exterior debilitara al régimen lo suficiente como para provocar el auge de una disidencia interna vigorosa; sin embargo, las coordinadas geoestratégicas internacionales no parecen redundar en

la línea de desestabilizar el sistema sirio para provocar un cambio radical que, en definitiva, podría resultar desastroso para los intereses de quienes supuestamente lo desean (Washington y Tel Aviv).

Los Hermanos Musulmanes sirios

Como en el resto de países del entorno, los sectores islamistas han ido ganando peso en el curso de las últimas décadas como consecuencia del fracaso del Estado nacionalista y secular (Álvarez-Ossorio, 2008). En Siria, no obstante, no han sido considerados una «oposición leal», como sí ocurrió en Jordania en los ochenta, sino que han sido perseguidos, marcando la masacre de Hama en 1982, el hito de dicha persecución (Badaro, 1987).

El pulso entre los HHMM y las Fuerzas Armadas y aparatos de seguridad acabaría saldándose con su derrota a principios de los ochenta. El principal ideólogo de la Hermandad siria era Sa'id Hawwa, quien en su obra *Yund Allah: zaqafatan wa ajlaqan (El ejército de Dios: cultura y moral)*, dibujó los contornos de la lucha sin cuartel contra el régimen bazista:

La mayor parte de los países musulmanes han pasado a ser dirigidos por incrédulos, proselitistas, profanos y ateos. [...] Es obligación de todos los musulmanes emprender una campaña de purificación generalizada destinada a eliminarlos y restablecer el orden. Esto no ocurrirá sino por medio de un *yihad* que elimine del territorio musulmán, sin compasión ni piedad, las incrédulas sectas ocultistas [los alawíes], los bahaíes y los qadiríes, así como los partidos no creyentes como los comunistas y los nacionalistas *yahilíes*; así como a quienes reclaman una separación entre Estado y religión, [...] hasta purificar la tierra del islam (Hawwa, 1968).

Los HHMM sirios están constituidos en modo similar al de otras ramas árabes de la organización, cuyo núcleo se encuentra en Egipto. Disponen de un guía y un consejo consultivo y, en tiempos en que se enfrentaron *manu militari* al ejército, de un aparato militar que en más de una ocasión mantuvo fuertes divergencias con la dirección política. En líneas generales, los cuadros y cargos del movimiento se nutren de ciudadanos sunníes de clase media, procedentes de los centros urbanos, mayormente Alepo, Hama y Homs, y el entorno rural de estas. Implicados en profesiones li-

berales y la enseñanza media y universitaria, un porcentaje no desdeñable pertenece a familias tradicionales afectadas por las transformaciones socioeconómicas sufridas por Siria a lo largo de las últimas décadas, en materia de reformas agrarias o de redistribución de los ejes vectores de predominio económico y comercial —casi siempre en beneficio de Damasco.

Los HHMM han contado con el apoyo de sectores pudientes, urbanos y terratenientes, que hacen responsable al régimen actual de una involución económica y productiva que ha dañado de forma notable las estructuras económicas tradicionales. Además, y aquí han ido de la mano de los círculos religiosos militantes, las supuestas tendencias secularistas radicales del Baaz y lo que se considera oligopolio injustificable de la comunidad alawí les han aportado, junto con la represión brutal de los cuerpos de seguridad, un sustento reivindicativo. A pesar de su fracaso militar en los ochenta y la enajenación de los sectores más moderados y secularistas —y también, de una porción significativa de las élites económicas— de la comunidad sunní, los HHMM han sido el único factor político interno que ha puesto en peligro el monopolio del estamento político-militar sirio.

Aunque es cierto que en el curso de los últimos años se ha liberado a más de 600 presos políticos y permitido el retorno de algunos islamistas exiliados, también lo es que sus actividades se encuentran estrictamente prohibidas y que la pertenencia a los HHMM sigue estando penada con la pena capital, todo ello a pesar de que, tras al ascenso de Bashar al poder, los HHMM renunciaron a la violencia y llegaron a proponer a Bashar un acuerdo político para promover la democratización del país.¹⁷ En opinión de Ali Sadr al-Din al-Bayanuni, guía supremo de los HHMM sirios desde 1996, «el régimen sirio intenta amedrentar a Occidente con nuestras actividades, afirmando que cualquier cambio favorecerá el ascenso al poder de los islamistas. Esto es, evidentemente, una exageración destinada a impedir cualquier cambio significativo dentro del país».

El Frente de Salvación Nacional

En los últimos años se ha asistido a un curioso matrimonio de conveniencia entre los HHMM sirios y el ex vicepresidente `Abd al-Halim Jad-dam, asentado en París. En febrero de 2006 formaron el Frente de Salva-

ción Nacional (FSN), un año después de que Jaddam, uno de los referentes de la *vieja guardia* baazista, abandonara su cargo de vicepresidente y denunciara la corrupción del régimen que él mismo contribuyó a consolidar. La salida de Jaddam constituye el desencadenante de las luchas de poder suscitadas tras la llegada de Bashar. Por supuesto, Jaddam no ha dejado de sostener desde su exilio que la razón principal de su movimiento fue la denuncia del autoritarismo y la falacia del reformismo de Bashar.

El experimento del FSN no ha llegado a calar entre la población siria, que recela de los repentinos anhelos reformistas de quien fuera mano derecha del difunto Hafez al-Asad y, también, de un proyecto islamista que podría poner en peligro a la Siria secular. A pesar de los esfuerzos mediáticos de al-Bayanuni, líder de los HHMM, no se ha podido convencer a los escépticos del compromiso con la alternancia y el pluripartidismo del grupo. Tampoco ha quedado demasiado claro si la iniciativa de los HHMM de entablar alianzas con opositores de credenciales más que dudosas o, a lo máximo, de muy escasa implantación en el interior, responde a un oportunismo táctico.

Lo cierto es que la connivencia con disidentes como Jaddam, al igual que experiencias anteriores en frentes ampliados con «opositores» del nivel de Amin Hafez o Rifaat al-Asad o ramas escindidas del Baaz, promueven la impresión, entre la población, de que la oposición no deja de ser un reflejo de los tics del régimen, a saber, una amalgama de intereses que responden a las prioridades restringidas de unas élites desplazadas que en el fondo reclaman su cuota de poder en el sistema y no una reestructuración radical del mismo.

Los contactos de los HHMM con estos sectores escindidos han agudizado las tensiones en el seno de los islamistas, que ya estaban divididos antes de la Presidencia de Bashar en varios bandos, máxime tras el anuncio de una sección, los HHMM Combatientes, de no seguir los primeros postulados «pacifistas» de Bayanuni sobre el nuevo período Bashar (Gutiérrez de Terán, 2003: 158-159).

Por último, el FSN tampoco se ha librado de las acusaciones de sectarismo con las que se suele acusar al poder sirio, solo que en este caso han ido en la dirección contraria. La ausencia de alawíes entre los responsables de la secretaría de la alianza ha llevado a algunos a hablar de «prosunnismo anti alawí».¹⁸

La sociedad civil siria: la Declaración de Damasco

La ausencia de una alternativa viable es evidente después de más de cuatro décadas de control absoluto de un país en el que se ha extendido un complejo atávico a cualquier tipo de activismo político antigubernamental. Como resultado de la represión, la oposición ha sido diezmada. Como apunta Bassam Haddad, «el frente nacional es, precisamente, el frente en el que el régimen se ha mostrado, desde siempre, más vulnerable. Esta vulnerabilidad es en parte autogenerada y se deriva en gran medida de la estrategia de supervivencia del régimen, que consiste en impedir la consolidación de una fuerza social como centro alternativo de poder» (2005).

Por esta razón fue la sociedad civil, y no los inexistentes partidos políticos democráticos, la principal responsable de la «primavera siria», en el curso de la cual se demandó la apertura del régimen y la necesidad de acometer reformas profundas. El 27 de septiembre de 2000 apareció el Manifiesto de los 99, firmado por el mismo número de intelectuales sirios, entre ellos figuras de la talla de Burhan Ghalyun, Sadiq al-Azm, Michel Kilo, Abd al-Rahman Munif, Adonis o Haidar Haidar. Este manifiesto, inusual en el mundo árabe, constataba que «ninguna reforma, ya sea económica, administrativa o judicial, traerá la seguridad y la estabilidad si no es acompañada con las deseadas reformas políticas». ¹⁹ Dicho manifiesto demandaba

el fin del estado de emergencia y de la ley marcial aplicada desde 1963; el perdón para todos los detenidos políticos y los perseguidos por sus ideas políticas y el retorno de todos los deportados y exiliados; el gobierno de la ley y la libertad de reunión, de prensa y de expresión; la liberación de la vida pública de las leyes, limitaciones y otras formas de vigilancia, permitiendo a los ciudadanos expresarse en un marco de armonía social.

La «primavera siria» dejó paso, en 2001, al «otoño sirio». En el curso de dicho movimiento reactivo se condenaron a diferentes penas de prisión a algunos de los principales miembros de la sociedad civil, entre ellos Walid al-Bunni y Kamal al-Labwani y también a los diputados independientes Mamun al-Homsi y Riad Sayf, mientras que se prohibió a otras personas salir del país, como a Ridwan Ziyade (director del Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos) o Zuhayr al-Atasi (director del

Foro Yamal al-Atasi para el Diálogo Democrático). Intelectuales que habían destacado en la organización de foros de debate, como Nabil Sulayman, fueron objeto de agresiones y diversas formas de acoso; el conocido periodista Nizar Nayuf, que había sido condenado en la época de Hafez al-Asad a nueve años de cárcel por pertenecer a una organización de derechos humanos, fue víctima de un extraño secuestro (Gutiérrez de Terán, 2001: 38-41).²⁰ El propio director del diario oficialista *al-Zawra*, Mahmud Salama, fue destituido tras reclamar un mayor pluralismo político. Por su parte, el comunista Riad al-Turk, el Nelson Mandela sirio —liberado en 1998 tras sufrir 17 años de cárcel— declaraba a la prensa internacional en vísperas del referéndum sobre la Presidencia de Bashar que el proceso en su conjunto era una «farsa».

En un abierto desafío, la sociedad civil incidió en sus llamamientos reformistas el 16 de octubre de 2005 cuando hizo pública la Declaración de Damasco, mucho más ambiciosa que el Manifiesto de los 99, en la cual se reclamaba el establecimiento de un gobierno plenamente democrático, la supresión de la ley marcial y la plena igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su etnia.²¹ La declaración era el resultado de los esfuerzos del opositor Michel Kilo, detenido en mayo de 2006 y liberado en octubre del mismo año, de unificar a las principales fuerzas políticas, incluidos los HHMM, con cuyo líder se reunió en Marruecos previamente y con quien acordó un programa basado en la no violencia, la democracia, unidad opositora y cambio político (Landis y Pace, 2006: 55).

El factor kurdo

De entre los grupos étnicos que conforman la población siria, el actor kurdo (alrededor del 10% de la población) es el que se encuentra en una situación más delicada. En el curso de los últimos años, los líderes kurdos sirios han intensificado sus relaciones con el Kurdistán iraquí, que posee una amplia autonomía dentro del Estado federal y que podría llegar a convertirse en un modelo a seguir. En la actualidad ninguno de los doce partidos kurdos sirios es legal, a pesar de que se limitan a reclamar el respeto de la especificidad cultural kurda y de los derechos humanos sin emplear la violencia ni demandar la independencia.

El ascenso al poder de Bashar al-Asad en 2000 despertó grandes

expectativas. De hecho, Bashar fue el primer presidente sirio que visitó el Hasake kurdo en 2002, pero las esperanzas de una naturalización de los kurdos denominados «extranjeros» y «no registrados» (en total, unas 250.000 personas) no han llegado a materializarse a pesar de las continuas alusiones al asunto en los discursos presidenciales. Es más, la represión de activistas kurdos se han intensificado, especialmente tras los disturbios del Qamishle en marzo de 2004 en los que 40 kurdos perdieron la vida, otros 400 resultaron heridos y unas 2.000 personas fueron detenidas. Algunos de ellos fueron condenados tras ser acusados de «pertenecer a grupos que intentaban debilitar la conciencia nacionalista» e «incitar a la guerra civil y a la lucha sectaria».

Las implicaciones nacionales del gran juego americano

Aunque, con el objeto de asentar su autoridad, Bashar se concentró en los primeros momentos de su presidencia en los asuntos nacionales, pronto se vio obligado a modificar el orden de sus prioridades, entre otras razones por una serie de drásticos cambios en la región que afectaron de manera especial a Siria y que obligaron al régimen a replantear el calado de las reformas. El estallido de la Intifada del Aqsa palestina en 2000, la victoria electoral del «halcón» Ariel Sharon en 2001, la invasión de Irak en 2003, la resolución 1.559 que exigía la evacuación siria de Líbano en 2004, la consiguiente retirada de 2005 tras el asesinato de Hariri, la guerra entre Israel y Hezbolá en 2006, el bombardeo israelí de Deyr el Zor en 2007 y el asesinato en Damasco de Imad Mugniye, jefe militar de Hezbolá, en 2008, muestran a las claras las dificultades de un régimen en una región en pleno proceso de reconfiguración.

Tras la invasión de Irak, la Administración de Bush adoptó un perfil mucho más intervencionista en Siria. Las presiones ejercidas partían del sector neoconservador que no se da por satisfecho con el cambio de régimen en Irak y pretende redibujar el Oriente Próximo en su conjunto (Zunes, 2004). La Ley de Responsabilidad Siria, ratificada por el presidente George W. Bush en diciembre de 2003, acusaba a Damasco de apoyar al terrorismo internacional (por medio de su respaldo a organizaciones como Hezbolá y Hamas) y desestabilizar la región a través de la ocupación militar de Líbano (de modo ilustrativo, llevaba el añadido de

Restauración de la Soberanía Libanesa). En consecuencia, prohibía la exportación de productos estadounidenses, así como las inversiones de empresas norteamericanas en dicho país.

Las sanciones estadounidenses a empresas y particulares sospechosos de sostener el terrorismo internacional (connivencia con la resistencia iraquí, apoyo a ciertos grupos palestinos o desestabilización de Líbano, por ejemplo) han servido para debilitar a determinados prohombres del régimen sirio. Los efectos reales de tales sanciones (prohibición de comercio con las empresas estadounidenses, congelación de cuentas en Estados Unidos, etc.) son más que relativas en el plano material, pero tienen una significación internacional: tizna al sancionado para cualquier transacción económica, política y diplomática y lo obliga a no salir del país o a hacerlo con una gran prevención. En consecuencia, restringe el halo de poder e influencia del afectado e impide que desarrolle la mayor facultad que otorga el sistema sirio actual a sus miembros de primera clase: libertad omnímoda de movimientos dentro de las coordenadas generales impuestas.

Desde determinado punto de vista, puede decirse que las restricciones económicas impuestas por la Hacienda estadounidense han ido en la línea de socavar la influencia de sectores muy concretos. En este sentido, podría decirse que la política exterior de Washington no persigue tanto descabalar el sistema sirio como eliminar a aquellos actores que podrían descompensarlo y poner en un grave aprieto la perduración de Bashar. Por ejemplo, las sanciones aplicadas en junio de 2005 a dos de los referentes de la familia Shalísh (hijos de la tía paterna de Bashar) condujo al arrumbamiento de Dhul Himma Shalísh, jefe de la Guardia Republicana, y su sobrino, acusados de utilizar la empresa SES para financiar a la insurgencia iraquí. La acusación sirvió, por lo pronto, para fomentar los rumores de una posible destitución de Dhul Himma (*Ajbar al-Sharq*: julio de 2005).²² Otro tanto puede decirse de las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro a Nasif Jayr Bek, vicepresidente para Asuntos de Seguridad, y, sobre todo, Hafez Majluf, uno de los elementos centrales de la élite primaria. El porqué: el supuesto apoyo de ambos a los intentos de sabotaje del proceso democrático en Líbano (*al-Quds al-Arabi*, 8 de noviembre de 2007), traducido en un decidido sostén a grupos como Hezbolá. Este estigma ha servido, asimismo, para debilitar a Hafez, uno de los pilares de los Majluf y fuente recurrente, como ya se ha dicho, de complicaciones para Bashar.

El caso más notable de personalidad afectada por las acusaciones formales estadounidenses es Asef Shawkat, implicado en el marasmo político libanés (*al-Nahar*: 19 de enero de 2006). La hasta entonces exitosa carrera de Shawkat ha quedado, al menos por el momento, trunca, como evidencia su detención administrativa. Previamente se había designado a un militar de plena confianza, Ali Yunis, como número dos de la inteligencia militar, con el encargo de informar directamente al palacio presidencial de sus movimientos. Otra muestra de la previsible caída de Shawkat es la reivindicación pública por parte de Bashar de Buhyat Sulaymán, uno de los «clásicos» de la inteligencia siria y enemigo confeso del «cuñadísimo» (*Shafaf Suriya*, 15 de marzo de 2007)

En fin, si se tratase de interpretar la tendencia sancionadora de Estados Unidos en un sentido maquiavélico podría deducirse que las imputaciones en cuestión tienen como objetivo reforzar por un lado la autoridad de Bashar y, por otro, eliminar cualquier injerencia en los dos expedientes que el régimen de Washington considera que Damasco debe abstenerse de manipular: Líbano e Irak. Por supuesto, esta percepción encerraría la suposición de que Bashar no es el verdadero responsable de las pretendidas exacciones de la élite en el poder y que él y su cohorte más cercana pueden ser, de algún modo, reconducidos. Esta es una opinión mantenida por diversos sectores políticos y periodísticos occidentales, que consideran que los círculos más contumazmente corruptos dentro de la esfera de poder impiden el empeño reformista de Bashar. Para algunos, como Patrick Seale, el problema radica, como en tiempos de Hafez con Rifaat, en el hermano, Maher en este caso, partidario de la línea dura de injerencia continua en Líbano e Irak, y en los sectores más reacios a las reformas (*al-Hayat*, 28 de octubre de 2005). En resumen, si los intentos de Bashar de crear una fisura en la oligarquía tradicional a través de la inclusión de un equipo de tecnócratas en el gobierno eran sinceros, hay que decir que las disposiciones estadounidenses, especialmente contra los Majluf, los Shalish y Asef Shawkat pueden ser de cierta ayuda, sobre todo para la figura de Abdel Allah Dardari, viceprimer ministro para Asuntos Económicos y rostro emergente del nuevo sistema. La normalización de relaciones entre Damasco y París, escenificada en la presentación de la Unión Mediterránea, podría ser una evidencia de que Bashar ha decidido romper, quizás de manera definitiva, con los sectores duros del régimen.

Empero, la razón principal del acoso estadounidense a Damasco se

debe a la alianza estratégica establecida entre ella y Teherán. El grupo dirigente iraní ha encontrado en el círculo de poder de los Asad un asidero para su política regional y la salvaguardia de intereses comunes. Suele afirmarse que el componente ideológico y doctrinal de tal alianza pasa por el hecho de que ambas élites son chieffs (duodecimana la iraní, septimana la alawí), pero la razón principal no deja de residir en la necesidad mutua de contrarrestar una ofensiva estadounidense que persigue la hegemonía global en Oriente Medio (Ehteshami y Hinnebusch, 1997: 87-115). La Administración de Bush es plenamente consciente de que la aplicación exitosa de sus planes bélicos respecto a Irán pasa por una desconexión siria de Teherán. Por razones que tienen que ver con la propia salvaguardia del grupo dirigente, Damasco se resiste a aceptar estas condiciones por considerar que le dejarían sin el menor margen de maniobra y socavarían los resortes legitimadores que han conformado sus principales señas de identidad tanto en el interior como en el exterior.

Los documentos condenatorios emitidos por la Administración de Bush dejan en un segundo término, por ahora, la represión política y la conculcación sistemática de los derechos humanos y se centran en la necesidad de que Damasco asuma la política exterior de Washington. De esta manera, se transmite el mensaje de que las élites sirias pueden mantenerse en el poder sin mayores contratiempos externos si cumplen, lo mismo que los grupos dirigentes de «naciones amigas» como las monarquías del Golfo, Egipto o Jordania, una serie de requisitos.

Por lo tanto cabe pensar que más que derribar a Bashar al-Asad, la Administración de Bush intentará reorientar la política de Damasco, algo similar a lo logrado en su día con el líder libio Muammar al-Gadafi, quien fue rehabilitado por la comunidad internacional tras saldar las cuentas pendientes por el atentado de Lockerbie (Álvarez-Ossorio, 2006: 44). Esta reorientación ha de tener dos coordenadas básicas. En primer lugar, desligar a Damasco de su alianza firme con Teherán, cosa que, a tenor de las declaraciones y actuaciones de los dirigentes sirios e iraníes, se antoja improbable en el momento presente. En este sentido, debe resaltarse que los estamentos militares iraníes han hecho explícita su disposición a defender a Siria ante un hipotético ataque israelí. En segundo lugar, conseguir un acuerdo de paz con Israel en términos favorables al régimen de Tel Aviv, en especial en lo concerniente a la solución del expediente de los Altos del Golán y desactivar el amparo del que disfrutaban en Damasco las organizaciones palestinas contrarias al proceso de paz.

Todavía es pronto para discernir si la apertura de un canal de negociación con Israel, con la mediación turca, tendrá el efecto deseado en el sentido de desvincular a Damasco de Teherán —objetivo primordial de la Administración de Bush.

Notas

1. El arrumbamiento de Haydar tiene una especial significación porque él fue —se verá después— uno de los militares que abortaron la intentona golpista de Rifaat al-Asad a mediados de los ochenta.

2. Los alawíes se dividen en cuatro grandes clanes o confederaciones de tribus. el más extenso sea quizás el de los Kalbiya, afincados en la zona de Qardaha. Véase Samir Abdu (2007: 29-32).

3. Rifaat atesoró una formidable riqueza, generada, al igual que otros grandes símbolos del sistema, por el comercio y las prebendas ilícitas —su patrimonio se estimaba en 1999 en unos 3.000 millones de dólares (Sales, 1999). Después, cuando cayó en desgracia por orquestar un supuesto golpe de Estado contra Hafez en 1983, recaló en una vida de lujo en Europa (Marbella y la costa francesa en concreto), sin dejar de censurar de vez en cuando a los Asad a través de sus medios de comunicación. Los hijos de Rifaat y de otro hermano de Hafez, Yamil, han deparado otros quebraderos de cabeza a Bashar, debido, en especial, a la tendencia al lujo desaforado y la absoluta impunidad con la que han actuado en sus feudos de la costa de Lataquia y Tartús; o, también, a sus excesos en el extranjero.

4. Opinión extendida entre numerosos analistas (entre ellos Gambill, 2000). La retirada «ominosa» del ejército sirio de Líbano en 2005 originó tiranfeces notorias en el seno de la cúpula militar y política de Damasco, parte de la cual consideraba que Bashar no había gestionado bien la crisis. En cualquier caso, la actuación de aquel después del asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq al-Hariri y el aumento de la presión internacional certifica que la prioridad de su acción política ha sido la de salvaguardar los intereses generales de las élites gobernantes y el régimen que los sustenta.

5. Perthes incluye en este selecto grupo de colaboradores al primer ministro; sin embargo, sobre el terreno, el grado de implicación real de este en la toma de decisiones es muy limitado.

6. El apartado 96 del borrador del Informe Mehliis, encargado de aclarar el magnicidio de Hariri, apuntaba tanto a Maher al-Asad como a Asef Shawkat como supuestos autores intelectuales. El informe final, tal y como fue refrendado por el Consejo de Seguridad, suprimió dicha mención.

7. Para hacerse una idea de conjunto sobre el cortejo de asesores económicos de Bashar, véase Leverett (2005: 71-74).

8. Perthes estima que los tecnócratas afines a Bashar componen un grupo secundario, ya que su participación es nula en cuestiones de seguridad nacional o política exterior (2004b: 90-91). Sin embargo, su protagonismo excepcional en el expediente económico los convierten, a nuestro parecer, en elementos relevantes.

9. El matrimonio de Bashar con un miembro de la familia Ajras tiene una importancia especial porque se celebró en 2001, siendo aquél presidente ya, y en contra de la voluntad de su madre. Asma nació y estudió en Gran Bretaña, donde llegó a ser especialista en el sector de inversión bancaria.

10. Para esta información nos basamos, especialmente, en el informe sobre «Syria's Praetorian Guards», *Middle East Intelligence Bulletin*, 5 de agosto de 2000 (consultado el 27 de noviembre de 2007), http://www.meib.org/articles/0008_s2.htm y en datos aparecidos en la prensa árabe. Debido al secretismo oficial que suele rodear la identidad de estos dirigentes, sobre todo de la inteligencia, y la tupida red de cargos y atribuciones en su seno, que dificulta la tarea de saber *quién controla de verdad* cada sección, es complicado aventurar nombres concretos. Del mismo modo, los sirios, por lo general, desconocen la identidad de tales responsables; además, para salvaguardar su integridad personal, prefieren no abordar el asunto en público.

11. Las potestades otorgadas por la Ley Marcial nº 2 del 8 de marzo de 1963 pueden verse en la página de The Syrian Human Rights Committee (consultada el 23 de noviembre de 2007) www.shrc.org.uk/data/asp/d7/1107.aspx o en <http://web.amnesty.org/library/index/engmde240162004>.

12. Estos proyectos, que han abundado en la región original del clan Asad, Lataquia y alrededores, afectan también a Damasco y otras urbes donde se ha procedido a demoler construcciones ilegales y barrios de infraviviendas, para promover planes urbanísticos administrados por prohombres del régimen. Uno de los casos más polémicos es la programada «modernización» (construcción de complejos comerciales y centros turísticos) del barrio viejo de Damasco que puede deparar la destrucción de zocos, tiendas y edificios de gran valor artístico e histórico, con el objetivo no declarado, según los críticos, de encubrir un nuevo negocio ilícito por parte de la cúpula en el poder. Véase el artículo del escritor sirio exiliado Subhi Hudaidi, «Awaa dibaa al-Sham» («El aullido de las fieras de Siria»), *al-Quds al-'Arabi*, 19 de marzo de 2007.

13. Declaraciones del abogado y presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Siria (HRAS), Haitham Maleh. (consultado el 20 de noviembre de 2007) http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-62/i.html.

14. *Al-Hayat*, 7 de junio de 2005.

15. De Rami Majluf, por citar un ejemplo, se cuenta que irrumpió una vez,

vía telefónica, en un consejo de ministros para amenazar al ministro de Información, Muhsin Bilal, con «tirar de la manta de sus corruptelas particulares» si no anulaba una orden de confiscación de una de sus revistas. El ministro en cuestión, cuyos años de latrocinio se remiten, según denuncia la oposición, a su época de embajador en España, dio marcha atrás a su decisión.

16. Ziyad Shawkat conforma junto con Rami Majluf y Mayd Buhyat Su-leiman la tríada de hijos ilustres reconvertidos en empresarios de éxito.

17. Las líneas programáticas de los Hermanos Musulmanes sirios y su «Proyecto político para la Siria del futuro» aparecen en su página www.ikh-wansyria.com/index.php.

18. Véanse los argumentos de Bayanuni y Jaddam para contrarrestar esta acusación en <http://www.freesyria.com/NSFpressconference/6-6-06> (consultado el 12 de enero de 2008).

19. *Al-Hayat*, 27 de septiembre de 2000.

20. Cuando se produjo el secuestro de Nayuf, la familia de este dirigió un mensaje a Bashar para que procurase la liberación de aquel y pusiera coto a los desmanes de los servicios de inteligencia. El propio Nayuf, había alabado los propósitos reformistas de Bashar, que consideraba sinceros, tras insistir en que era el núcleo duro del régimen, lo mismo que con Hafez, el que impedía cualquier avance democrático.

21. Puede consultarse en el blog Syrian Comment del académico norteamericano Joshua Landis: <http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/syriablog/2005/11/damascus-declaration-in-english.htm>.

22. Citado por Joshua Landis en su *SyriaCommet.com*, <http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/syriablog/2005/07/syria-news-round> (consultado el 23 de noviembre de 2007).

Bibliografía

- Abdu, Samir (2007), «al-alawiyuna fi Suriya. Nashatuhum, tatawwurhum, ta`daduhum», Hasan Malas li-l-Nashr, Damasco.
- Álvarez-Ossorio, Ignacio (2006), «Siria en el Rubicón», *Política Exterior*, n° 109, pp. 39-44.
- (2008), «El movimiento islamista en Siria», *Política Exterior*, n° 124.
- Amirah Fernández, Haizam (2000), «Siria, tras al-Asad. Nuevo liderazgo, viejos retos», *Nación Árabe*, n° 42, Madrid, pp. 137-138.
- Badaro, Samer A. (1987), «The Islamic Revolution of Syria (1978-1982). Class Relation, Sectarianism and Social-Political Culture in a National Progressive State», tesis doctoral, The Ohio State University.

- Batatu, Hanna (1981), «Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling Military Group», *The Middle East Journal*, vol. 35.
- (1999), *Syria Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notable, and their Politics*, Princeton University Press, Princeton.
- Bou Nacklie (1993), «Les Troupes Spéciales: Religious and Ethnic Recruitment, 1916-1946», *Middle East*, n° 25.
- Cobban, Helena (1991), *The Superpowers and the Syrian-Israeli Conflict*, Praeger Publishers, Washington.
- Economist Intelligence Unit (2007), *Country Report: Syria*, enero.
- Ehteshami, Anoushiravan y Raymond A. Hinnebusch (1997), *Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated regional System*, Routledge, Londres.
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2006), «Syria Arab Republic Selected Issues», *FMI Country Report*, n° 06/295, agosto p. 11.
- Gambill, Gary C. (2000), «The Assad Family and the Succession in Syria», *Middle East Intelligence Bulletin*, vol. 2, n° 6.
- Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Ignacio (2001), «Siria y Líbano, a la espera. Un año de mandato de Bashar al-Asad», *Nación Árabe*, n° 45, Madrid, pp. 38-41.
- (2003), *Estado y confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y Líbano. Religión, taifa y representatividad*, Cantarabia/UAM, Madrid.
- Haddad, Bassam (2005), «Abandonado a su propia suerte: cómo el régimen sirio se ha encajonado en sí mismo», Documento de Trabajo n° 44, Real Instituto Elcano.
- Hawwa, Sa'id (1968), *Yund Allah: zaqafatan wa ajlaqan*, Beirut.
- Heydemann, Steven (1999), *Authoritarianism in Syria. Institutions and Social Conflict. 1946-1970*, Cornell University Press, Nueva York.
- (2007), «Upgrading Authoritarianism in the Arab World», *Saban Center for Middle East Policy at Brookings Institution, Analysis Paper*, n° 13, octubre, <http://www.brookings.edu/~media/Files/rc/papers/2007/10arabworld/10arabworld.pdf>.
- Hinnebusch, Raymond A. (2004), «Syria after the Iraq War: Between the Neo-Con Offensive and International Reform», *DOI-Focus*, n° 14, Deutsches Orient-Institut, Hamburgo.
- Ifekija, Nkem (5-6-2007), «Who's who: Syria's top ten political power-brokers. Research», *Newstatesman*, www.newstatesman.com/200606050021 (consultado el 20-11-2007).
- Landis, Joshua y John Pace (2006), «The Syrian Opposition», *The Washington Quarterly*, n° 30.
- Leverett, Flynt (2005), *Inheriting Syria. Bashar's Trial by Fire*, Brookings Institution Press, Washington D.C.
- Ma'oz, Moshe (1995), *Syria and Israel: From War to Peace-Making*, Oxford University Press, Oxford.

- MEIB (Middle East Intelligence Bulletin) (2000), «Syria's Praetorian Guards», 5 de agosto (consultado el 27 de noviembre de 2007), http://www.meib.org/articles/0008_s2.htm.
- Perthes, Volker (1995), *The Political Economy of Syria under Assad*, I.B. Tauris, Londres.
- (2004a), *Syria under Bashar al-Asad: Modernisation and the Limits of Change*, Routledge, Londres.
- (2004b), «Syria: Difficult Inheritance», en V. Perthes, V., ed., *Arab Élités. Negotiating the Politics of Change*, Boulder, Londres.
- Raphaëli, Nemrod (2007), «Syria's Fragile Economy», *Meria*, vol. 11, n° 2, article 4/8, junio, pp. 1-17.
- Sales, Ferrán (1999), «Hafez al-Asad ordenó el ataque contra el palacio de su hermano», *El País*, 31 de octubre de 1999, p. 11.
- Strindberg, Anders (2003), «La disparatada política de EEUU hacia Siria: palo sin zanahoria», http://www.nodo50.org/csca/nuscelanea/siria-eeuu_11-08-03.html.
- Taheri, Amir (2002), «An alternative Syrian Voice: Meet Nabil Sukkar», *National Review Online*, diciembre, n° 2.
- UNDP (2006), «Syria: Human Development Report 2006», http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country-fact?sheets/cty_fs_SYR.html.
- VIC (Virtual Information Center) (2000), <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sy.html>.
- Zunes, Stephen S. (2004), «US Policy Towards Syria and the Triumph of Neconservatism», *Middle East Policy*, vol. IX, n° 1.

¿Hacia dónde se dirige Siria?

Salam Kawakibi

Durante los últimos años, los periodistas occidentales y algunos analistas «fiables» venían prediciendo el fin del sistema sirio y la casi desaparición de sus dirigentes. Indudablemente, las sanciones americanas y el boicót diplomático sirvieron para reforzar estas opiniones.

Es innegable que Siria, además de enfrentarse a una crisis estructural creciente en su interior, ha sufrido también una cierta hostilidad por parte de la comunidad internacional y regional. Para algunos, el origen de esta situación parecía guardar relación en gran medida con el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005, del que muchos responsabilizan a Siria. Pero la verdadera causa es mucho más compleja y se remonta a fechas anteriores al atentado. Resulta evidente que su alianza estratégica con Irán desde principios de los ochenta, su apoyo «condicional» a los llamados «movimientos de resistencia» para unos y «terroristas» para otros en Líbano y Palestina, su «juego» en la escena iraquí y la «intransigente» postura en las reivindicaciones territoriales a Israel forman una buena parte de la lista de los motivos en los que se fundamenta la actitud de la comunidad internacional, representada sobre todo por punto de vista norteamericano posterior al 11-S.

Pero olvidamos dos factores muy evidentes y que al parecer carecen de importancia para aquellos que pretenden representar la voluntad internacional. Se trata de la economía y las libertades sociales, que representan aquí un olvido voluntario. La liberalización de la economía siria satisface ampliamente tanto a las multinacionales como a los fondos soberanos del Golfo. Los derechos humanos, por su parte, parecen ser en este país, como en otros muchos, un pretexto cuya importancia puede relativizarse en función de las diferentes circunstancias atenuantes.

En el año 2008 observamos como Europa vuelve a interesarse por Siria y le entreabre sus puertas. Esto sucede tras la elección de un nuevo presidente en el Líbano y la reanudación, sorprendente para algunos, de las negociaciones de paz con el Estado hebreo. En este contexto, ¿qué futuro le aguarda a este pequeño país de enorme peso regional?

En el ámbito nacional

La economía del país experimenta un desarrollo en el sentido liberal del término. Siria ha emprendido cambios radicales en su sistema económico hasta el punto de estar convirtiéndose en una economía extremadamente liberal, apoyada por la creación de cientos de nuevas leyes¹ para transformar el sector. Esta «apertura» casi anárquica crece de forma paralela al aumento de la corrupción, la brecha entre las clases sociales y una verdadera crisis social cuyas consecuencias serán visibles en poco tiempo. Con un crecimiento notable pero únicamente en el ámbito macroeconómico, la economía diaria y la mayoría de la sociedad siria no se ven beneficiadas en absoluto. Pero lo cierto es que, excepto en contadas ocasiones, la población nunca ha constituido una preocupación para ninguno de los diferentes gobiernos de las últimas décadas. El proceso económico, por su parte, promete evolucionar y los inversores de toda clase acuden a la llamada del prometedor mercado sirio. Aunque el sector de la industria interesa a algunos, los más atractivos son sin duda el turismo y la construcción. Cada vez más inversores del Golfo, la mayoría no saudíes, operan en estos sectores que avanzan hacia una práctica especulativa pura y dura. El futuro económico está por lo tanto asegurado en el sentido liberal, sin que la política social, que se degrada al margen de este proceso, tenga sobre este ninguna influencia.

Quizá sea necesario hacer hincapié en la separación entre el liberalismo económico y su homónimo político, pues la literatura política insiste en su inevitable paralelismo. No es este, sin embargo, el caso de Siria a corto ni medio plazo, pues los dirigentes no parecen ver de momento ninguna necesidad al respecto. Podría darse una apertura política controlada y orquestada de un modo altamente mediático, como ya ocurrió a finales de los noventa. Ello favorecería la aparición de nuevos actores que asocien sus «compromisos» económicos con alguna forma de implicación pública en el escenario político. Lo que a su vez se traduci-

ría en más diputados «independientes» en el Parlamento, y la aparición de más medios de comunicación «privados» y nuevas asociaciones.

La sociedad civil, por su parte, continuará desarrollándose mediante tres fórmulas muy propias de la cultura política en la Siria contemporánea. En primer lugar, las Organizaciones Realmente Gubernamentales que funcionan mediante subvenciones estatales y europeas, y centran sus actividades en torno al desarrollo y la asistencia social. En segundo lugar, la sociedad civil de los cócteles que se mueve en torno a las embajadas y los centros culturales extranjeros, y parece atraer a los proveedores de fondos debido a su *look* y a su comportamiento, aunque no resulte representativa de la realidad del país. Por último, la «verdadera» sociedad civil que experimenta, y experimentará, grandes dificultades para encontrar un espacio de actuación dentro de este entramado. En lo referente a los derechos humanos, es probable que al terminar las actuales crisis regionales, la seguridad que adquiera el gobierno le conduzca a disminuir las restricciones, los arrestos, las condenas y las acusaciones de conspiración con algunos de sus enemigos.

En el ámbito exterior

Existen perspectivas de mejora para las relaciones con Europa y Estados Unidos. El comportamiento que se espera de la futura Administración norteamericana resulta tranquilizador para Siria. Por su parte, el proceso de negociación con Israel proseguirá, pero sin que ello signifique alcanzar resultados inmediatos, ya que por una parte está condicionado por la inestabilidad política israelí y por otra por la existencia de una verdadera voluntad por parte de Israel de resolver este asunto, con todo lo que ello implica en relación con su retirada de los territorios ocupados y la cuestión de los refugiados palestinos. Pero, Siria tampoco tiene prisa por llevar a cabo estas negociaciones, aunque por razones muy diferentes.

Por otro lado, Siria continuará su acercamiento a Turquía en el ámbito político pero también, y sobre todo, en el ámbito económico. Esto no dependerá únicamente de la buena voluntad del partido AKP,² pues también podría ocurrir con un sucesor menos orientado hacia Oriente que los islamistas moderados. Los estrategas turcos han visto que la dimensión regional de su patria debe primar sobre sus ambiciones europeas, sin que por ello hayan abandonado sus reivindicaciones de adhesión a la Unión Europea. En este contexto, las relaciones con Irán representan una carta

fuerte tanto en el juego regional como internacional, a la que Siria no renunciará tan fácilmente.

En lo que respecta a Irán, la alianza parece más compleja y estable. Sin embargo, podría verse remodelada dependiendo de la evolución interna de este país. La apertura europea hacia Siria no debería perseguir «ingenuamente» alejar a Damasco de Teherán, sino más bien al contrario, en un sentido pragmático. Es decir, Siria podría desempeñar un papel apaciguador y asumir la función de moderador de confianza en los espinosos asuntos que enfrentan a Europa e Irán. De este modo, las relaciones privilegiadas de Siria con Irán continuarán mientras el contexto regional siga albergando tensiones.

A modo de conclusión

La Siria de mañana constituirá una reaparición casi eterna en la escena política regional. Las apuestas sobre su «derrota» y su marginalización han fracasado. Es el momento de analizar esta sociedad con todas sus contradicciones, sus bazas y sus defectos, para poder comprender mejor su peso y su papel en el futuro. El país resistirá sin duda a los cambios estructurales, pero es muy probable también que acepte hacerse algunas «operaciones estéticas» que le aporten una nueva apariencia, con los cambios que ello conlleva en el comportamiento tanto exterior como interno. Si se reconocen sus intereses regionales, Siria podrá sentirse segura y realizar reformas que, aunque tímidas, aportarán un soplo de aire fresco a la sociedad que soporta un enorme peso desde hace generaciones.

Así, la resolución del conflicto árabe-israelí, la solución a la crisis nuclear de Irán, la puesta en marcha de una política de desarrollo sostenible en la región y la distribución de la riqueza de una forma más equitativa podrán ayudar a superar muchos problemas en Siria, incluyendo el de garantizar un futuro mejor para sus ciudadanos.

Notas

1. Más de mil durante los últimos cuatro años.
2. El partido Justicia y Desarrollo, actualmente en el poder en Turquía

8. Élités, poder y cambio político en el Líbano de la II República

Amaia Goenaga y Elvira Sánchez

Introducción histórica

En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido acordaron dividirse Oriente Medio en dos zonas bajo su control. Así, el Acuerdo Sykes-Picot, posteriormente avalado por la Sociedad de Naciones, dio a Francia el dominio del territorio que comprende las actuales Siria y Líbano. En 1920, el general francés Gouraud firmó el Decreto 318, que materializó lo que en su día se llamó el Gran Líbano, es decir el Líbano actual. El país recibió una Constitución en 1926, una carta otorgada por la potencia mandataria que definía al país como una república presidencialista de corte francés. La Carta Magna también dio un marco legal al reparto de los principales puestos de la administración, del Estado y del ejército entre los notables de las comunidades confesionales más importantes del país y consolidó la preeminencia política de la comunidad maronita.

Líbano declaró su independencia en plena Segunda Guerra Mundial, el 26 de noviembre de 1941, aunque Francia no reconocería al nuevo Estado hasta finales de 1943. Tras este reconocimiento, los entonces presidente y primer ministro de la república, Bichara Khoury y Riad Solh respectivamente, introdujeron al país en un nuevo marco institucional y sociopolítico, gracias a un compromiso no escrito conocido como el Pacto Nacional. El Pacto reafirmaba la independencia del Líbano respecto a Francia, pero también respecto a cualquier otro país árabe de la región, en referencia a las pretensiones de unión con Siria que seguía manteniendo una buena parte de la población musulmana, y consolidaba el confesionalismo del Estado y de sus instituciones: la Presidencia queda-

ba en manos de la comunidad maronita y la comunidad sunní recibía la Jefatura del Gobierno. Poco después, en 1947, la comunidad shíí, que seguía sin ser reconocida como una comunidad confesional,¹ obtuvo la Presidencia del Parlamento. En cuanto al Parlamento, también se estructuró en función de criterios confesionales: la cámara, que por entonces contaba con 55 escaños, quedó dividida en 6 a 5 para cristianos y musulmanes respectivamente, asegurando una mayoría cristiana en el legislativo.

En 1958 el país tuvo que hacer frente al primer desequilibrio del sistema, que dio lugar al estallido de la que se ha llamado la «primera guerra civil libanesa». Una lucha por el poder político y económico en el interior, mediatizada por el convulso contexto regional e internacional, que acabó en un enfrentamiento armado. Tras la guerra, una nueva reforma constitucional, facilitaba el nombramiento del general Fouad Chehab (1958-1964) como presidente de la República, siendo el primer militar de la historia en acceder al cargo. Su gestión, marcada por el protagonismo de los servicios de inteligencia y el ejército, propició sin embargo un desarrollo del Estado y las instituciones libanesas sin precedentes. A partir de mediados de los sesenta la «modernidad» comenzó a llegar a regiones antes abandonadas del país; se produjo un espectacular desarrollo económico y se ayudó a la integración de sectores y regiones olvidadas por el Estado. En definitiva, se pusieron las bases para una serie de cambios realmente profundos en el sistema. Tanto que algunas de las consecuencias siguen siendo palpables hoy día. De hecho, junto con esos avances, en la década de los sesenta comienza a macerar el caldo de cultivo de la guerra civil, que estalló en 1975. Son múltiples las causas que llevaron al país a la guerra, y van mucho más allá del enfrentamiento confesional o del espectacular aumento de la población palestina en el país, pero su análisis excede el propósito de este trabajo.

Tras quince años de conflictos se produjo una serie de cambios más o menos importantes en el seno de la élite política. En 1989 los Acuerdos de Paz de Taif dieron paso al período conocido como la II República, que se extiende hasta nuestros días. Estos acuerdos firmados por el grueso de las élites libanesas, a excepción de algunos líderes cristianos, y con el respaldo de la comunidad internacional pusieron las bases para un período de estabilidad que se alargaría hasta finales de 2004. A grandes rasgos, Taif ratifica los pilares del Estado libanés tal y como se establecieron en 1943. Líbano siguió siendo una República Parlamentaria, y se aseguró la vigencia de un sistema socioeconómico liberal.² En lo que res-

pecta al tema confesional, los Acuerdos mantuvieron las contradicciones que emanaban del Pacto Nacional de 1943, ya que dió continuidad a la fragmentación del poder, siguiendo con la lógica del reparto confesional de los cargos políticos e institucionales. El éxito de Taif residió en el hecho de haber conciliado los intereses de facciones dispares: los Acuerdos permitieron que la élite miliciana de la guerra pueda integrarse en un Estado en paz sin sufrir demasiadas pérdidas con el cambio, en el entendimiento de que eran actores que de otro modo hubieran quedado al margen de la escena política y hubieran dificultado el restablecimiento de una paz duradera. Por otro lado, esta realidad dificultaba la concentración de poder político en manos de pocos actores, facilitando el dominio de Siria sobre la clase política libanesa. Con todo, como veremos más adelante, a finales de la década de los noventa, el primer ministro Rafik Hariri consiguió romper esta lógica gracias a una cuidada estrategia dirigida a extender su poder en varios frentes, marcando el principio del fin de la *pax siria*.

El asesinato de Hariri en febrero de 2005 provocó una oleada de movilizaciones sin precedentes, liderada por la oposición antisiria. Mientras, otro sector de la élite política respondía con igual contundencia. Ante la avalancha de acontecimientos, el 8 de marzo de 2005, Hezbolá, Amal y otros partidos prosirios, convocaron una multitudinaria manifestación, para expresar su rechazo al creciente intervencionismo occidental. La respuesta de la oposición no se hizo esperar, el 14 de marzo, cientos de miles de personas volvían a inundar las calles de Beirut, para exigir la salida definitiva del ejército sirio. Este es el origen de la denominación 14 de marzo (14-M) y 8 de marzo (8-M) de las dos alianzas enfrentadas en la actualidad.

Identificación de las élites y sus recursos

El análisis de las élites libanesas resulta tan necesario como complejo. Desde su existencia como Estado independiente, Líbano es un país con una estructura sociopolítica propicia a la aparición de múltiples espacios de influencia. El confesionalismo político y la marcada personalidad de las distintas regiones que lo conforman, entre otros factores, hacen de Líbano un país con una alta fragmentación del poder, lo que significa que

está gestionado por un importante número de élites. Sin embargo, esto mismo hace que resulte poco esclarecedor realizar un trabajo de síntesis como el que requeriría este capítulo, razón por la que acotaremos nuestro análisis a la II República.

Por motivos metodológicos, en este primer apartado realizaremos un análisis de las élites libanesas en función de los ámbitos de influencia en los que se desenvuelven. Simplificando, durante la II República estos espacios pueden ser de dos tipos. Por un lado, los ámbitos donde se forman las élites, que son, básicamente, el espacio territorial regional directamente unido a la pertenencia familiar, el liderazgo confesional —laico y religioso—, las finanzas y la guerra. Y, por otro lado, el ámbito político-institucional, al que solo acceden aquellos que despuntan en los ámbitos anteriormente mencionados. No obstante, debemos aclarar que estos espacios son totalmente transversales y están claramente interrelacionados. Así, en el escalafón más alto de élite política libanesa nadie o casi nadie es solo un político, ya que los intereses de la clase política libanesa se extienden a varios ámbitos al mismo tiempo, lo que hace que en algunos casos resulte complicado definir la naturaleza del poder de ciertos actores.

La élite económico-financiera de Líbano: los Hariri

Líbano siempre ha sido un referente del comercio y las finanzas en la región y, especialmente a partir del siglo XIX, este tipo de actividades generó la aparición de élites con ambiciones políticas claras. En este sentido, muchos de los grandes nombres de la política libanesa del siglo XX provienen precisamente de los citados ámbitos.

Tras la firma de los Acuerdos de Taif, una de las prioridades de la «nueva» clase dirigente fue la recomposición de la economía nacional según el modelo liberal tradicional en el país. Una paz duradera exigía una política económica capaz de ofrecer a los líderes milicianos, y a sus clientes, un escenario de paz que les resultara tanto o más rentable que la guerra (Dibeh, 2005).³ El hombre que asumió esta responsabilidad fue Rafik Hariri. Sus éxitos económicos le permitieron incorporar a los centros de poder del país a una nueva élite fiel a su persona, mientras se aseguraba el apoyo de la mayoría de los grandes líderes nacionales del momento. Así, Hariri se convirtió pronto en el hombre más influyente del Líbano.

Este sunní de origen humilde hizo fortuna e importantes contactos en Arabia Saudí durante los años setenta del pasado siglo. A su regreso a Líbano, Hariri consiguió atraer la atención de los círculos económicos y políticos más importantes del país, gracias a sus aportaciones y actividades relacionadas con la mejora de las infraestructuras públicas. Cuando acabó el conflicto, Hariri había cooptado ya a gran parte de las élites emergentes de la guerra, y en 1993 fue nombrado primer ministro. El poder político le permitió idear un megaproyecto de reconstrucción, definitivo en la consolidación de su red clientelar y de su autoridad en general, a través del reparto de contratos de construcción de infraestructuras, compraventa de favores, cesiones de empresas públicas, etc. En esta línea, las grandes directrices de la política macroeconómica de los gobiernos de Hariri se trazaron pensando en la recaudación del capital necesario para la puesta en marcha de dichos proyectos de reconstrucción. A grandes rasgos, se optó por atraer capital de la banca y de los mercados financieros internacionales, mediante la emisión de deuda pública y eurobonos a altísimas tasas de interés. Esto hizo que el sector bancario libanés volviera a vivir una nueva edad de oro⁴ y que la banca, personificada en la Asociación de Banqueros Libaneses (ABL), reemergiera como uno de los centros de poder más importantes del país en este período.⁵

La política económico-financiera de Hariri también está directamente relacionada con sus alianzas internacionales. Su principal aliado externo fue siempre la familia real saudí, con la que entabló una estrecha amistad en los setenta. En la última etapa de la guerra civil, Hariri asumió el papel de intermediario de los saudíes en las negociaciones con Siria, y tras ser nombrado primer ministro se convirtió en principal garante de sus intereses en Líbano. Arabia Saudí es el país que más dinero invierte en Líbano. Las grandes fortunas del petróleo depositan allí su dinero atraídas por las extraordinarias condiciones que ofrece el sector bancario, y que durante años también ofreció el sector inmobiliario. Para garantizar sus inversiones económicas, y políticas, durante los últimos dieciséis años el gobierno saudí ha cuidado de la estabilidad monetaria y financiera del país, inyectando grandes cantidades de capital en el Banco Central Libanés. Por otro lado, la preeminencia política de Hariri ha permitido al gobierno saudí intervenir directamente en el devenir político del país.

El otro gran protector internacional de Rafik Hariri fue el gobierno francés. Hariri y el expresidente Jacques Chirac mantuvieron durante

años una estrecha amistad personal que repercutió directamente sobre las relaciones bilaterales de ambos países. Francia apoyó desde un principio la *pax siria* impuesta con la II República, abandonando su secular política de apoyo a las élites maronitas tradicionales.⁶ No obstante, Francia fue uno de los países más combativos con Siria cuando desde Damasco comenzó a cuestionarse la autoridad de Hariri.

En lo que respecta a su relación con Siria, Hariri supo ganarse el favor de la cúpula militar y de seguridad del régimen y contó con el apoyo de gran parte de la burguesía sunní del país vecino. Estas alianzas le permitieron ejercer sus labores como primer ministro con relativa libertad, especialmente en los temas de política económica. Además de lo dicho, la red de apoyos internacionales del magnate se extendía también a otros países del Golfo, al Banco Mundial, y a toda Europa.

Otro recurso importante en el ascenso y consolidación de Hariri fue su imperio mediático. Además de ser el propietario de *Futur TV* y el diario *Al-Mustaqbal*, las joyas de este imperio, Rafik se hizo con el 40% de las acciones del influyente diario *An-Nahar*, el rotativo de mayor tirada del país, y adquirió parte de la televisión pública del país, la LBCI.⁷ No conforme con ello, durante los noventa Hariri utilizó su posición política para controlar los recursos mediáticos de otros actores nacionales, a través de la promulgación de leyes restrictivas, como las de control de la información promulgadas en 1994 y 1996.⁸

Ya de forma tardía, Hariri sucumbió a la tentación de la baza comunitaria. En 1998 Damasco impuso el nombramiento de Emile Lahoud como presidente, contra la voluntad de Hariri y de su entorno, y el primer ministro dimitió. Su cargo pasó a manos de Salim Hoss. En este contexto, Hariri perdió cierta capacidad de influencia y decidió explotar su imagen de líder comunitario, un recurso al que no había recurrido hasta el momento de forma explícita. En el camino, el líder sunní cooptó al Mufítí de la República y se acercó a los islamistas sunníes, relativamente fuertes en el norte del país. El éxito de Hariri fue abrumador, tal y como pusieron de manifiesto los resultados electorales del año 2000. Hariri volvería a presidir el gobierno hasta septiembre de 2004, cuando dimitió tras la renovación del mandato de Lahoud como jefe de Estado.

Rafik fue asesinado en 2005, y sus recursos los gestionan ahora sus herederos. Saad Hariri, primogénito de Rafik, lidera el grupo parlamentario creado por su padre, al-Mustaqbal. Sin embargo, y a pesar de que todo apunta a que en un futuro no muy lejano este hombre pudiera ser

primer ministro, durante sus primeros años en política su labor ha sido relativamente discreta, al menos de cara a los medios. Saad es sobre todo un hombre de negocios, responsable de la gestión del imperio económico y financiero creado por su padre. Mientras tanto, la cara más visible en la gestión del legado político del magnate sunní es la de Fuad Siniora, nombrado primer ministro en 2005. Este hombre había sido durante muchos años el colaborador más cercano del fallecido Hariri y su ministro de finanzas durante los años noventa. Siniora goza de la confianza de todos los aliados nacionales e internacionales de Rafik, y es absolutamente continuista en sus políticas.

La élite tradicional: grandes familias, liderazgo regional y comunitario

El proceso de formación del Líbano como entidad política supuso la suma de varios territorios con una personalidad muy marcada. Desde por lo menos los siglos XI y XII las diferentes zonas que conforman el país han estado dominadas por familias de notables locales, que, estando bajo la autoridad de los poderes exteriores de turno, gestionaban su territorio con cierta autonomía a modo de señores feudales o jefes tribales (Salibi, 1990). En el siglo XIX, el Líbano comenzó a estructurarse como entidad política en medio de profundos cambios socioeconómicos y políticos. No obstante, muchas de esas familias se adaptaron al nuevo contexto y perpetuaron su poder en las nuevas instituciones. Mientras, esos mismos cambios propiciaron el ascenso de nuevas familias, que sin embargo asumieron los usos de los notables tradicionales (Hamzeh, Makdisi, 2000). Así, la existencia de regiones controladas por familias de notables a través de lógicas de tipo clientelar sigue siendo una realidad en pleno siglo XXI.

Evidentemente este binomio territorio/familia interactúa constantemente con el factor comunitario y religioso. Este último se consolidó como elemento clave en la acumulación de poder político cuando a finales del siglo XIX se dio representatividad política e institucional a algunas comunidades religiosas. Esto ayudaría a la instrumentalización de la pertenencia confesional para la obtención de réditos políticos. En definitiva, pertenencia religiosa, pertenencia territorial y pertenencia familiar son factores determinantes para la identificación y el análisis del comportamiento de las élites libanesas. En este sentido, son muchos los líderes na-

cionales que tras llegar a la cima desde ámbitos como el económico consiguen perpetuar su liderazgo gracias a la revalorización de estos tres elementos, y con los años se acaban convirtiendo en notables tradicionales o *zuama*.

La élite drusa tradicional: los Yumblatt

La familia Yumblat viene destacando en la escena sociopolítica de la región desde el siglo XVI. No obstante, su estatus actual es consecuencia directa de la trayectoria de Kamal Yumblat (1917-1977), político, intelectual y fundador del Partido Socialista Progresista (PSP), que hoy lidera su hijo Walid.

Como otras muchas, la familia Yumblat extiende su autoridad a varios espacios al mismo tiempo: el ámbito regional, el comunitario, el político y, aunque es un ámbito más desconocido, también tiene importantes intereses económicos. En el ámbito comunitario y regional, los Yumblat han destacado por ser grandes terratenientes y señores feudales de las zonas de mayor concentración de población drusa, siempre bien relacionados con los poderes externos de turno. No obstante, la comunidad drusa siempre ha estado dividida y, desde el siglo XIX, los Yumblat se han disputado la preeminencia sobre la comunidad con la familia Arslan. Sin embargo, a lo largo del siglo XX el potencial sociopolítico e intelectual de Kamal Yumblat en la escena nacional puso a la familia Yumblat en cabeza. Tras el asesinato de Kamal, su heredero, Walid, aparecía como un líder notablemente más débil. No obstante, durante la guerra civil se hizo con el favor de Siria utilizando su milicia en defensa de los intereses de Damasco.⁹ Con la paz, Walid se situó en la primera línea política, pudiendo fortalecer su autoridad dentro la comunidad.

En lo referente a la dimensión territorial de su poder, tradicionalmente el feudo de los Yumblat es el Chuf, una *qada* (pequeña circunscripción electoral) de la región de Monte Líbano donde se da la más alta concentración de drusos de todo el país. No obstante, Walid ha conseguido extender su influencia a toda la región, pues a finales de los años noventa, con una gran parte de los líderes cristianos en el exilio, Yumblat se ganó el favor de parte de la comunidad cristiana de la zona. Esto le situó en competencia directa con actores como el cristiano maronita Michel Aoun, fuerte en otras regiones de la montaña libanesa.

Centrándonos en su papel político-institucional, se granjeó un puesto en la primera línea política de la II República gracias a su trayectoria durante la guerra civil. Tras los Acuerdos de Taif siguió al abrigo de Damasco y se situó muy cerca de Rafik Hariri. Fue ministro de desplazados entre 1992 y 1998, lo que le sirvió para el fortalecimiento de su estatus a varios niveles. Por un lado, obtuvo recursos para el fortalecimiento de sus redes clientelares, y a la vez, gracias a su actuación, promocionó su liderazgo en toda la región de la montaña, a la que se destinó el grueso del capital y proyectos desarrollados por dicho ministerio. No obstante, en 1998, a las puertas de una grave crisis financiera del Estado, el gobierno de Hariri decidió reducir los fondos del ministerio, lo que provocó una ruptura temporal de su alianza con Yumblat. Unos meses después, el nombramiento de Emile Lahoud como Presidente supuso la ruptura definitiva de Walid con el sistema tutelado por Siria. El líder druso dimitió de su cargo e inició un proceso de acercamiento hacia la oposición antisiria.

Finalmente habría que apuntar que los Yumblat gozan de un importante patrimonio económico, con intereses en sectores como la construcción y los hidrocarburos.¹⁰

La élite cristiana tradicional: el sector pro sirio

Los Acuerdos de Taif no supusieron la desaparición de los líderes cristianos de la primera línea política. Siria contó con el apoyo de un buen puñado de líderes cristianos de gran tradición en la política libanesa. Y casualmente muchos de ellos estuvieron al frente de algunos departamentos del aparato de coerción del Estado.

En 1990, conseguir una paz duradera pasaba por devolver al Estado el monopolio de la fuerza. Si bien no se consiguió del todo,¹¹ se procedió a la disolución de las milicias integrando a un importante número de milicianos en las filas de las reconstruidas Fuerzas Armadas Libanesas (FAL).¹² Los programas de entrenamiento y de adoctrinamiento de ese nuevo ejército quedaron bajo la responsabilidad de Siria y de sus más leales colaboradores en el Líbano. Uno de los actores clave en esta nueva etapa fue Emile Lahoud. Los Lahoud, originarios de la región del Ment, son una familia de larga tradición en la montaña libanesa, muy unida al ejército libanés desde su creación. Emile optó por la carrera mi-

litar siguiendo los pasos de su padre, hasta llegar a ser comandante en jefe de las FAL (cargo reservado a la comunidad maronita) en 1989. Así, fue uno de los responsables de la reunificación y reforma de la institución. Lahoud gozaba de un gran prestigio, incluso entre varios círculos maronitas opuestos a la tutela siria. Ocupó el cargo hasta 1998, cuando pasó a ocupar la presidencia a petición expresa de Hafez al-Assad, quien trataba así de fortalecer la institución presidencial frente al primer ministro. Su investidura desató un auténtico terremoto político, provocando la dimisión inmediata de importantes nombres de la política nacional como Walid Jumblat y el propio Hariri.

Su sustituto a la cabeza del ejército fue uno de sus hombres de confianza, Michel Suleiman, quien apoyaría a Lahoud casi hasta el final de su mandato en noviembre de 2007. Aún en febrero de 2006, con la escena sociopolítica libanesa claramente dividida entre «prosirios» y «antisirios», Suleiman declaraba públicamente que el principal enemigo del Líbano seguía siendo Israel y que apoyaría sin reservas a Siria y a los palestinos, y reconocía abiertamente el envío de armas del ejército a Hezbolá (*L'Orient le Jour*, 14 de febrero de 2006). No obstante, a medida que la división política se ha ido acentuando en el país, entre mediados de 2006 y 2007, Suleiman ha sabido mantenerse, y mantener a las FAL, al margen de la confrontación política, preservando la imagen del Ejército como símbolo nacional. Gracias a ello, Suleiman fue propuesto como candidato a la presidencia del país tras la marcha de Lahoud, siendo el único actor capaz de generar consenso entre gobierno y oposición. Basándose en la trayectoria del general, en primera instancia esta elección fue vista como una victoria del sector pro sirio.¹³ No obstante, su investidura como presidente del país en mayo de 2008 le ha proporcionado una imagen de mediador neutral entre los dos grandes campos de la escena política libanesa.

Otro elemento clave en la relación entre la cúpula militar y de seguridad de Siria y la élite política libanesa ha sido el Ministerio del Interior, que se convirtió en un centro de poder importantísimo durante los noventa. Desde aquí se controlaba el Servicio de Seguridad del Estado. Los servicios de inteligencia libaneses, junto con la inteligencia militar siria, fueron probablemente los instrumentos de control sociopolítico más importantes del régimen, responsables de descabezar cualquier tipo de contestación al sistema. En 1990, la cartera ministerial pasó a manos de Michael Murr (grecoortodoxo) quien recibió el cargo como premio a

su fidelidad a Damasco durante la guerra. Murr permaneció en este puesto hasta 2000, año en que fue sustituido por su hijo Elie. Cuando en 2005 Elie Murr abandonó esta cartera para hacerse cargo del Ministerio de Defensa, Interior pasó a manos de Suleiman Frangieh,¹⁴ amigo personal de Hafez al-Assad.

Los Murr constituyen una de esas familias que con el tiempo ha asumido el papel de familia notable al estilo tradicional, con especial relevancia en la región de Ment. Es una de esas familias que habiendo entrado en política desde el mundo de los negocios inmobiliarios y de la mano de otros actores como Pierre Gemayel, han estado presentes en la escena política libanesa de forma ininterrumpida, al menos desde los años sesenta.

Durante la guerra y a pesar de sus alianzas iniciales, Murr, al igual que otros muchos, acabó posicionándose del lado de Siria. A partir de ahí ha sido uno de los más importantes miembros del sector prosirio, hasta 2008. Tras la crisis presidencial desatada tras el fin del mandato de Lahoud, Murr, que había concurrido a las elecciones de 2005 en alianza con Michel Aoun, se ha ido alejando de sus antiguos aliados.

Por tanto, tanto Lahoud como Murr han sido importantes aliados de Damasco, y gestores del principal instrumento de control sirio de Líbano durante años, el aparato de coerción del Estado, salvo en el caso de la Fuerza de Seguridad Interna (FSI), normalmente en la esfera de influencia de los Hariri. En consecuencia, la retirada siria en 2005 redujo su capacidad de influencia de forma considerable. Tras las elecciones de junio de 2005 el nuevo gobierno, mayoritariamente antisirio, procedió a depurar las principales agencias de seguridad, golpeando de nuevo al sector prosirio. No obstante, el nuevo ejecutivo no ha sido capaz de imponer su autoridad en este ámbito. En realidad todo este aparato, especialmente en el caso del ejército, está dividido en esferas de influencia, como el resto del país, y el control de estos recursos es otro motivo de confrontación.

La élite cristiana tradicional: el sector antisirio

En este apartado haremos referencia a las grandes familias cristianas de tradición prooccidental, que han controlado el ámbito político-institucional durante el siglo XX, y que siguen estando presentes en la escena sociopolítica libanesa. No obstante, su capacidad de influencia se ha visto

claramente mermada tras el fin de la guerra. Nos referimos a los Edde, los Khoury, los Chamoun o los Gemayel.

Los Edde y los Khoury fueron los grandes protagonistas de la escena política en los años treinta y cuarenta del siglo XX, siempre enfrentados por la Presidencia. Los Edde, comenzaron a despuntar en la escena política libanesa en el siglo XIX de la mano de Francia, de la que siempre fueron grandes aliados. Los Khoury por su parte, entraron en política a través del mundo de los negocios y de la banca, como principales defensores de la independencia, pero fueron perdiendo influencia de forma paulatina desde que en 1952 Bichara Khoury¹⁵ abandonara la Presidencia salpicado por los escándalos de corrupción de su familia. Precisamente, en 1952 el nombramiento presidencial de Camille Chamoun¹⁶ supuso la emergencia y consolidación de esa familia en el olimpo maronita.

Tras la guerra de 1958 y la presidencia del general Fuad Chehab (1958-64), la vida política del país comenzó a desarrollarse en torno a nuevos parámetros, al menos formales. Los partidos de masas y los liderazgos de carácter populista se fueron imponiendo a la política tradicional de notables, especialmente a finales de los sesenta. En este contexto, nuevas familias, como los Gemayel, compartirán protagonismo con los líderes tradicionales, capaces de adaptarse a la nueva lógica. Así, el trío Gemayel/Edde/Chamoun conformó uno de los principales centros de poder del país a finales de los sesenta. Un poder que siguieron manteniendo durante las primeras fases de la guerra. No obstante, la muerte del carismático Bashir Gemayel (en 1982) se tradujo en un debilitamiento paulatino de este sector de la élite maronita, que pasó a estar definitivamente al margen del sistema en cuanto Siria se hizo con el control del país. Todas estas familias se integraron en la oposición a Siria, y en 2001 entraron a formar parte de la plataforma de oposición cristiana del Cornet Chehwan.¹⁷ Tras la retirada siria, volvieron a la arena política, como ministros o como parlamentarios, y siguen liderando sus clanes y regiones como notables. No obstante, su estatus es ahora menor al que tuvieron en otro tiempo, debido al alejamiento de las instituciones y a la superioridad actual de las élites sunníes y shiíes. De hecho, han perdido autoridad incluso en el ámbito comunitario, donde se han impuesto los líderes milicianos, fuertes al final de la guerra.

La élite tradicional sunní

La comunidad sunní ha sido la más importante a lo largo de los años noventa gracias a la talla de sus representantes políticos. No obstante, la inserción de las élites sunníes en la primera línea política ha sido un proceso largo. Aunque siempre formaron una élite económica con mucha influencia en las ciudades costeras más importantes del país, políticamente permanecieron a la sombra de la élite maronita. Los Acuerdos de Taif, sin embargo, dieron paso a un aumento de las prerrogativas del Primer Ministro (cargo reservado a la comunidad sunní), y a una mejora de la representación política de la comunidad. Con todo, la élite tradicional sunní volvía a quedar relegada del primer plano político, y en cierto modo también económico, como consecuencia del fulgurante ascenso de una nueva élite liderada por Rafik Hariri. Este patrimonializó gran parte de las parcelas de la administración y las instituciones asignadas a la comunidad sunní, y su política privilegió al sector bancario e inmobiliario, propiciando un cierto deterioro del sector mercantil. Un sector fundamental de la economía nacional hasta el momento, tradicionalmente controlado, al menos en parte, por las élites sunníes tradicionales (Atallah, 2000).¹⁸ Con el tiempo, Hariri consiguió cooptar a un sector de esta élite. Sin embargo, sigue existiendo un sector, integrado por gente como Salim Hoss, primer ministro en cinco ocasiones, que aún se resiste al poder de los Hariri. Así, durante su último mandato (1998-2000), Hoss intentó neutralizar algunos de los principales apoyos de Hariri con muy poco éxito.¹⁹ En realidad, la competición dentro de esta comunidad es tan sumamente desigual que apenas se ha hecho notar.

Con todo, en los últimos meses, la deriva de Hezbolá está provocando variaciones en el discurso de este sector. Probablemente, si ven peligrar el estatus institucional de la Sunna, acabarán haciendo frente común con los Hariri, al menos temporalmente.

Liderazgo religioso: el patriarca Nashralá Boutros Sfeir

La adscripción religiosa en Líbano determina el estatuto personal del individuo y las comunidades religiosas reconocidas por el Estado tienen una jerarquía religiosa oficial que, salvo en el caso maronita, están adscritas al Estado. Esto convierte a los más altos líderes religiosos en ele-

mentos importantes del sistema sociopolítico libanés. No obstante, su situación de dependencia respecto a las instituciones políticas convierte a este tipo de élites en recursos en manos de los líderes políticos de cada comunidad, salvo en el caso maronita.²⁰ El patriarca maronita y toda la jerarquía de esta rama del catolicismo están sometidos a la autoridad del Papado de Roma. No dependen del Estado libanés, lo cual les da una independencia de la que no gozan otros líderes religiosos. En contrapartida, el Vaticano cuenta con un importante canal de intervención en los asuntos propios del Líbano. Ha sido así desde que en 1510 el papa León X reconociera a los maronitas como la rama oriental del catolicismo. A cambio, su unión con Roma ha proporcionado a la Iglesia maronita protección, autoridad y, en definitiva, una capacidad de maniobra de la que no han gozado los líderes de otras confesiones. Así, hoy en día el líder religioso oficial más importante del país es probablemente el patriarca Nashralá Boutros Sfeir.

Sin embargo, la autoridad de la jerarquía religiosa maronita ha sido en muchos casos un elemento desestabilizador para la comunidad, ya que puede entrar en competencia con las élites laicas de la comunidad. En el caso del patriarca actual, su relación con las élites es irregular. En líneas generales, los líderes de la comunidad tratan de mantener una buena relación con su líder espiritual, puesto que goza de una autoridad moral y un reconocimiento social muy importante en el seno de una comunidad fuertemente dividida políticamente. Este estatus es el resultado de su militancia contra la presencia siria durante la década de los noventa, en un contexto en el que gran parte de la comunidad se sentía agraviada como consecuencia del aislamiento en que se encontraban sus grandes líderes comunitarios.²¹ No obstante, ese liderazgo le puso en competencia directa con algunos actores en la diáspora, especialmente con Michel Aoun, con quien sigue manteniendo relaciones relativamente tensas tras el regreso de este último en 2005. Así, Sfeir muestra una clara simpatía por el sector antisirio, mientras Aoun no duda en criticar el intervencionismo político del patriarca.

Los señores de la guerra

La lógica miliciana característica de la guerra civil libanesa propició la aparición de nuevos líderes convertidos en políticos al final del conflicto.

Algunos, como Nabib Berri, pasaron a formar parte de la élite política nacional. Otros, sin embargo, fueron apartados de ese círculo como consecuencia de sus diferencias con el régimen de Damasco. No obstante, los más importantes han vuelto a la política tras la retirada siria en 2005.

Nabib Berri

Nabib Berri es presidente del Parlamento libanés desde 1992 (cargo reservado a la comunidad shií), líder del partido Amal, hombre de negocios y máximo valedor de la burguesía shií en Líbano. Cuando Berri accedió a la dirección de Amal, en 1980, la organización era la expresión político-religiosa y militar de un movimiento de reivindicación importantísimo, que se desarrolló en el seno de la comunidad shií desde principios de los setenta.²² No obstante, Berri abandonó la vertiente reivindicativa del movimiento y aprovechó el contexto de guerra para convertir a Amal en una milicia más, al abrigo de Siria. Esto le reportó importantes réditos políticos, ya que en 1984 fue nombrado Director del Ministerio de Estado para la Reconstrucción del Sur. Tras el conflicto, Amal adoptó los usos y costumbres de los partidos libaneses tradicionales y se convirtió en una organización que trabaja al servicio de su líder.

En esta línea, Berri entró en la II República como el líder comunitario más importante de la Shia, contando con el apoyo de las autoridades religiosas oficiales de la comunidad. No obstante, desde finales de los años noventa la creciente autoridad de Hezbolá ha ido reduciendo su capacidad de liderazgo social. A pesar de ello, Berri y su partido han seguido gozando de una posición de privilegio gracias a una densa red clientelar que se retroalimenta de los recursos institucionales que Berri controla desde su cargo de presidente del Parlamento.

Samir Geagea

Geagea es un líder proveniente de una familia humilde que consiguió entrar en la arena política gracias a su trayectoria durante la guerra. En 1985 asumió la dirección de las Fuerzas Libanesas (FL),²³ tras desbancar a la familia Gemayel y enfrentarse a otro líder importante de la organización, Elie Hobeika.

A pesar de haber firmado los Acuerdos de Taif, la evidente pérdida de influencia de la comunidad maronita en el nuevo contexto le llevó a cuestionar el *statu quo*, lo que provocó su expulsión del sistema. En 1994 fue encarcelado por el asesinato de Dani Chamoun (en 1990) y las FL pasaron a la clandestinidad. No obstante, su procesamiento ayudó a mantener vivo su movimiento, mediante una densa red de asociaciones de solidaridad con el detenido. En 2005 fue amnistiado y volvió a la política de la mano del 14-M.

Actualmente Geagea cuenta con el apoyo de un sector importante de la comunidad maronita. En líneas generales se trata del sector más rural y tradicional, con especial relevancia en el norte del país, en la zona del Becharre. En el ámbito territorial, compite con los Murr o los Frangieh y cuenta con el apoyo de familias como los Khoury o los Keyruz (*Al-Hayat*, 11-12 de abril de 2006). No obstante, su principal enemigo es Michel Aoun, con quien compite por la preeminencia dentro del conjunto de la comunidad.²⁴ Durante la segunda mitad de la pasada década ambos líderes colaboraron como opositores al sistema. Al igual que Aoun, durante este período el entorno de Geagea estuvo muy bien conectado con todo tipo de movimientos reivindicativos de corte social, y mantuvo a las asociaciones estudiantiles como vanguardia de su estrategia. Sin embargo, cuando volvieron al juego político, la competición entre ambos se disparó. En el ámbito nacional, como ya hemos dicho, el líder de las FL es miembro activo del 14-M, sin embargo juega un papel relativamente secundario a la sombra de los líderes sunnís.

Michel Aoun

Michel Aoun es un señor de la guerra atípico, ya que no lideró ninguna milicia, llevó a cabo su propia guerra desde las filas del ejército, que comandaba. Fue nombrado Comandante en Jefe de las FAL en 1984, y tras ganarse la fidelidad de un sector importante de sus tropas por encima de divisiones sectarias, en 1988 nombró un gobierno militar provisional, dirigido por él mismo, con la pretensión de asumir conjuntamente los poderes propios del presidente y del jefe de Gobierno.²⁵ Esta acción fue contestada por la mayoría de grupos políticos y por Siria, y en 1990, tras ser derrotado militarmente, tuvo que huir a Francia, donde permaneció hasta la primavera de 2005. Con todo, Aoun ha sido capaz de mantener

una importante red de apoyo a escala nacional e internacional. Desde París, el líder maronita articuló una red transnacional de asociaciones destinadas sobre todo a denunciar el dominio de Siria sobre el Líbano, con apoyos muy importantes en países como Francia y Estados Unidos, lugares donde se concentran sectores importantes de la diáspora maronita. En el interior, la participación de su organización en todo tipo de causas de corte social y reivindicativo durante los noventa, le sirvió para mantener su influencia en el país.²⁶ Así, lejos de ver su posición debilitada, Aoun fue creciendo durante este período, y en 2005 volvió a su país como un héroe, con la clara pretensión de hacerse con la Presidencia. Sus resultados en las elecciones fueron espectaculares, a pesar de concurrir a ellas en alianza con importantes nombres del sector prosirio. Más adelante, en febrero de 2006 se integró plenamente en el 8-M tras firmar un acuerdo con Hezbolá. No obstante, no ha podido colmar sus ambiciones presidenciales, ya que en el ámbito nacional los intereses de Aoun están supeditados a los de los grandes líderes musulmanes.

Hezbolá

Un análisis global de las relaciones de poder en el Líbano actual exige un análisis individualizado de Hezbolá. A lo largo de la II República esta organización se ha constituido como un centro de poder en sí mismo, y en la actualidad aquellos que controlan la organización shií pueden ser considerados como una nueva élite nacional, que interactúa y compite con el resto de actores que venimos estudiando a lo largo de estas páginas.

Hezbolá se constituyó oficialmente en 1985 como un grupo fuertemente ideologizado y dogmático. Con el tiempo, sin embargo, su pragmatismo y una estudiadísima estrategia social, electoral y de propaganda han conseguido convertir a este grupo antisistema en un actor clave del país (y de la región). La importancia de Hezbolá está directamente relacionada con su capacidad militar, intacta tras el fin de la guerra, que constituye un recurso muy potente del que la organización nunca ha querido prescindir. En este sentido, una de las prioridades de la organización fue la de legitimar la existencia de su brazo armado ante la opinión pública, presentando a sus milicias como un elemento de resistencia nacional frente a la ocupación israelí en el sur del país (entre 1978 y 2000). Así durante la segunda mitad de los años noventa la organización consi-

guió que un amplio sector de la población, y no exclusivamente la comunidad shií, considerara el papel de la resistencia como fundamental.

En segundo lugar, Hezbolá se presentó como el principal grupo de oposición o reivindicación dentro del sistema. Es decir, sin cuestionar el papel de Siria, mantuvo un discurso político dirigido a los grupos sociales más perjudicados por el modelo económico vigente, intentando capitalizar las reivindicaciones sociales de amplios grupos de población. Hezbolá consiguió así diluir su imagen de organización radical sectaria, al menos durante un tiempo. Del mismo modo, la ausencia de Estado permitió a Hezbolá postularse como la principal organización asistencial en las regiones de mayoría shií, lo que se ha traducido en fidelidad incondicional de sus habitantes.²⁷ En tercer lugar, especialmente a partir del año 2000, Hezbolá recurrió a la propaganda como parte importante de su estrategia. En este sentido al-Manar, la cadena de televisión de la organización, que emite vía satélite para toda la región, se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la organización.

Internamente, la formación shií también ha sufrido importantes cambios, orquestados por su actual secretario general, Hassan Nashralá. Desde que llegó al cargo en 1992, el clérigo shií trabajó para supeditar la compleja estructura de la organización a su persona. En aquellos años la dependencia de Hezbolá respecto Irán era muy alta, y el organigrama de la organización muy complejo. Las primeras decisiones de Nashralá al frente de la organización estuvieron encaminadas a reducir la autoridad de los grandes clérigos que controlaban el Consejo Supremo, el órgano más importante de la organización por aquel entonces. Para ello, reubicó a algunas personas en órganos inferiores y reestructuró el Consejo con gente más joven proveniente de los brazos armados de la organización. En poco tiempo, Nashralá consiguió ser el líder religioso más importante del partido y se ganó la fidelidad del brazo militar de la organización, sector que también colocó bajo su supervisión directa (International Crisis Group, 2003). Ya en la segunda mitad de los noventa, Nashralá redefinió el papel de los servicios de inteligencia internos, creando las primeras células especializadas para la seguridad y el control de los altos cargos de la organización (Martín, 2006). Por otro lado, diversificó las fuentes de financiación del partido para ganar independencia, y, ya en 2001, tomó el control directo del aparato de propaganda de la organización. En definitiva, el líder shií consiguió estructurar la organización de forma piramidal en torno a su persona.

Respecto a la relación de Hezbolá con sus aliados regionales, debemos diferenciar claramente la naturaleza de la relación que mantiene con Siria de la que mantiene con Irán. La relación entre Siria y Hezbolá responde a una alianza basada en la existencia de ciertos intereses concretos que ambos actores comparten, pero es erróneo pensar que Hezbolá trabaja a las órdenes de Damasco. De hecho, esta relación fue más bien distante durante la primera mitad de la década de los noventa. Siria tuvo que aceptar el estatus especial de Hezbolá por la presión de Irán. No obstante, en los últimos años de vida de Hafez al-Assad la relación mejoró, y se consolidó con Bashar. La relación entre la organización e Irán es, obviamente, mucho más estrecha e interdependiente de la que mantiene con Siria. Sin embargo, esta también ha evolucionado a medida que la organización se ha ido fortaleciendo internamente. Si a principios de los noventa Hezbolá estaba controlada y supeditada a la voluntad de ciertos centros de poder en Irán, actualmente tiene entidad por sí misma, y esta relación, aunque estrecha, es más equilibrada.²⁸ Hezbolá tiene ambiciones propias, y si bien la organización no actúa sin el beneplácito de Irán, también creemos incorrecto afirmar que todas las acciones de la organización se deciden en Teherán. En definitiva, sin negar la existencia de relaciones estrechas e intereses comunes con sus aliados regionales, Hezbolá es una organización con ambiciones propias en su país y en la región.

A partir de 2005 Hezbolá ha dado un paso más, ya que ahora ambiciona claramente un espacio propio en el ámbito político institucional. Hasta 2005, y a pesar de concurrir a las elecciones, la organización shíi se había negado sistemáticamente a formar parte del gobierno. En 2005, sin embargo, con un nuevo escenario político, el partido dio un salto cualitativo en su estrategia política y, tras una ambiciosa campaña electoral en la que volvió al discurso sectario abandonado durante años, obtuvo catorce escaños y consiguió poner a dos de sus hombres en el gobierno.²⁹

Identificación de los movimientos de resistencia

En Líbano resulta realmente excesivo hablar de movimientos de resistencia y mucho menos de oposición política al margen de las élites, al menos durante la II República. Líbano es un país con una gran tradición

asociativa, pero la mayor parte de estas asociaciones son de carácter asistencial, cultural, profesional, económico o de reivindicación de derechos de colectivos muy específicos. Por otro lado, normalmente, las asociaciones más importantes entran dentro de la esfera de influencia de algún líder o bloque político, o reproducen internamente las rivalidades que se producen en el ámbito sociopolítico. Así, normalmente no se llegan a articular movimientos de reivindicación capaces de influir en las políticas del gobierno. No obstante, a finales de la década de los noventa se dieron una serie de movimientos, liderados por lo que Karam Karam llama Asociaciones Civiles, que merece la pena mencionar aquí (2007: 92-99). Se trata de un pequeño pero importante grupo de asociaciones que durante los noventa se centró en la reivindicación de ciertos derechos cívicos, rompiendo con las lógicas sectarias habituales, dando lugar a los movimientos sociales más importantes de esa época en Líbano. Nos referimos al movimiento por las elecciones municipales, que en 1998 condujo a la convocatoria de los primeros comicios locales en 30 años. Y también a las grandes, aunque menos exitosas, movilizaciones en favor de la legalización del matrimonio civil o la reducción de la mayoría de edad a los dieciocho años. A partir del año 2000, sin embargo, circunstancias como la muerte de Hafez al-Assad, el fortalecimiento de la oposición y la retirada israelí, abrieron un período de mayor permisividad política. Así, asuntos como la presencia de Siria en el país comenzaron a ganar protagonismo en detrimento de lo estrictamente social y el movimiento se diluyó.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar las reivindicaciones sindicales a mediados de los años noventa. Por aquel entonces la Confederación General de Trabajadores (CGT) se atrevió a cuestionar el modelo económico del ejecutivo de Hariri. Aunque nunca llegaron a postularse como una amenaza seria, debemos tener en cuenta que atacar el modelo económico vigente suponía cuestionar la distribución del poder en el país. Tras años de dura represión gubernamental, que no hacían más que fortalecer el movimiento, el ejecutivo consiguió acabar con el problema a través de medios más sutiles: en 1997, la organización sindical celebró elecciones internas y el ejecutivo consiguió que la nueva dirección pasara a manos de miembros cercanos al gobierno (Baroudi, 1998).

En otro ámbito, durante los noventa también proliferaron algunos movimientos antisistema. Nos referimos a grupos islamistas sunníes como Jama'a Islamiya o Harakat Tawhid Islami, ambos importantes en la

región de Trípoli, donde alcanzaron cierta notoriedad, especialmente los primeros (Hamzeh, 2000). No obstante, a partir del año 2000, Hariri consiguió cooptar a algunos de estos grupos, en su intento por erigirse en líder de la Sunna libanesa, consiguiendo al tiempo rebajar el tono de su discurso y su activismo. En los últimos años, la muerte de Hariri y el miedo al ascenso shií, junto con el deterioro de la situación en Irak y Afganistán, han provocado un aumento importante de la actividad de estos grupos en el Líbano. Con todo, parece que actualmente los grupos islamistas más importantes siguen estando controlados por los Hariri, o al menos se mueven en su órbita de influencia³⁰ (International Crisis Group, 2005; Abdel-Latif 2008).

Obviamente en los últimos quince años Líbano ha conocido otros movimientos importantes de oposición política y de contestación al sistema, pero han sido movimientos orquestados desde las élites marginadas, como son los casos de Michel Aoun o Samir Geagea.

En definitiva la articulación del sistema libanés dificulta mucho la aparición de movimientos de contestación al poder. Se dan movimientos de protesta, y en menor medida de reivindicación, pero en ningún caso de oposición política. Este tipo de oposición se establece siempre entre élites. De hecho, cuando un determinado grupo consigue articular un movimiento de reivindicación con entidad, acaba siendo cooptado por algún miembro o sector de la élite y se convierte en un recurso en manos de esta. En 2005, Líbano conoció las movilizaciones sociales más importantes de su historia, con la implicación de las asociaciones civiles y reivindicativas más importantes del país, pero esa explosión fue orquestada por las élites político-comunitarias de principio a fin, tanto en el caso del 14-M como en el del 8-M.

Relaciones de competencia y alianza entre élites

En Líbano, la existencia de espacios de influencia segmentados y su interacción con la estructura político-institucional del país obliga a cada actor a plantear sus estrategias y alianzas a varios niveles al mismo tiempo. Como ya hemos mencionado, hay un espacio de poder principal, el político-institucional, en el que todo actor tratará de entrar, y hay varios ámbitos secundarios en los que cada actor trata de imponerse para poder

entrar en ese espacio principal. Todo ésto hace que las alianzas entre las élites sean relativamente débiles y coyunturales, con consecuencias directas sobre la estabilidad política del país. En este sentido, resulta complejo establecer pautas estructurales de comportamiento de las élites, y nos obliga a centrar nuestro análisis en momentos concretos.

En el Líbano de la II República, al menos en apariencia, el elemento que articula el sistema de alianzas es el posicionamiento de cada actor respecto a Siria. Así, encontramos dos grandes bloques, 14-M y 8-M, en torno a los que se posicionan, con mayor o menor grado de implicación, la gran mayoría de actores socioeconómicos y políticos del país.

Sin embargo, tras esta división simplista se esconde un cúmulo de intereses individuales, sectoriales o comunitarios realmente complejos. En 1989, los Acuerdos de Taif debían poner las bases de un modelo de Estado en el que tuvieran cabida los intereses de facciones de poder con intereses dispares, por lo que con el final de la guerra se imponía en Líbano un sistema caracterizado, entre otras cosas, por una fuerte fragmentación del poder.³¹ No obstante, mantener una situación de equilibrio resulta complicado si asumimos que las élites en cualquier ámbito actúan movidas por un deseo de acumular poder. Entre 1990 y 1998 el equilibrio fue posible gracias a la presencia siria y su papel de árbitro aceptado por grandes potencias internacionales, como Estados Unidos y Francia, o regionales, como Arabia Saudí. Durante esos años, a excepción de Hezbolá, todos los actores que entraron a formar parte del sistema conformaban una especie de gran coalición. A pesar de algunas diferencias puntuales, esos actores se comportaban como aliados, unidos frente a aquellos que cuestionaban al orden establecido, las más de las veces haciendo uso del aparato de coerción del Estado. En consecuencia, hasta la segunda mitad de los noventa, actores como Michel Aoun apenas tuvieron margen de maniobra en el interior del país. A finales de la década, sin embargo, las rivalidades dentro del sistema se agudizaron y ni siquiera Damasco pudo frenar la tendencia de ciertos actores a la acumulación de recursos. El ascenso de Rafik Hariri se convertiría en una amenaza para Siria y para una serie de actores nacionales en situación de inferioridad con respecto al magnate sunní. Así, la percepción de que el estatus alcanzado por Hariri era un peligro para la autoridad de Hafez al-Assad y sus afines, en un momento en el que el futuro del régimen sirio generaba mucha incertidumbre, abrió una brecha en el modelo de consenso establecido en 1989. Assad trató de contrarrestar el creciente poder de Hariri nombrando Pre-

sidente a un hombre fuerte, Emile Lahoud, Comandante en Jefe de las FAL, y asegurándose el favor de Hezbolá y de las élites que controlaban los medios de coerción del Estado, únicas con recursos suficientes para hacer frente al imparable ascenso de Hariri.

Esta decisión dio paso a un proceso de reestructuración del sistema a través de la reconfiguración de las alianzas. La primera evidencia de ello fue el salto a la oposición de Walid Yumblat. Hariri dimitió, pero no rompería con el sistema hasta finales de 2004, cuando Bashar al-Assad impuso la reelección de Lahoud. A partir de ese momento, Hariri se colocó al frente de la oposición, una decisión en la que arrastró tras de sí a los sectores económicos más importantes del país y a Francia, Arabia Saudí y Estados Unidos. Por tanto la actual estructura de alianzas comenzó a gestarse a partir de 1998 y quedó definida a finales de 2004: en un lado, el grupo liderado por Rafik Hariri, la élite político-económica del país, con el respaldo de Occidente y los países del Golfo, y unido a los movimientos de oposición que hasta el momento se habían mantenido fuera del sistema. Frente a ellos, un segundo grupo conducido por Hezbolá, Berri y Lahoud (al que más tarde se unirá Michel Aoun), que contaba con importantes medios de coerción y con el apoyo de Bashar al-Assad e Irán. A partir de ahí, el país se ha visto inmerso en un proceso de polarización que ha llevado a la mayoría de actores sociopolíticos a posicionarse en torno esos dos grupos.

En el 14-M, la familia Hariri trataría de seguir manteniendo su supremacía y un modelo liberal de Estado que necesitaba el apoyo político y económico de las monarquías del Golfo y Occidente, y que vería sus intereses amenazados cuando desde Siria se intentó minar la capacidad de actuación de Rafik Hariri. Para este sector, la retirada siria fue un logro, pero la evolución ascendente de Hezbolá, en particular, y de la comunidad shíí, en general, siguen siendo una amenaza, ya que el potencial demográfico shíí podría poner en cuestión la distribución del poder político-institucional. El sistema político libanés se estructura en torno a una distribución del poder estática establecida en los años cuarenta en torno al peso demográfico que entonces tenían las diferentes comunidades.³² Así, el sistema político depende de la existencia de un cierto equilibrio entre las partes que lo conforman, el crecimiento excesivo de una de esas partes podría desestructurar todo el sistema. Además, el ascenso de la Shia no es exclusivamente demográfico, ya que su presencia es cada vez mayor en las altas esferas económicas, políticas y militares del país. Pa-

ralelamente, el poder creciente de Hezbolá limita cada vez más la autoridad de los Hariri, que ven como toda decisión que se toma en el país requiere ya del consentimiento de la organización chít.

Los principales aliados nacionales de los Hariri son, por un lado, Walid Yumblat, especialmente preocupado por el ascenso shít y un posible cambio en la distribución del poder, que indudablemente le perjudicaría a él y a la comunidad drusa, que goza de una cuota de representación institucional muy superior a su peso demográfico. Por otro lado, la Asociación de Banqueros Libaneses (ABL) está interesada en la continuidad del modelo económico actual. Junto a Yumblatt y la ABL se posiciona un grupo de líderes cristianos, de los que destacan el Cornet Chehwan y Geagea, y algún líder musulmán de importancia menor.

En el otro extremo del espectro político se sitúa el 8-M, integrado por diversos grupos. Por una parte, Hezbolá que, en los últimos años, trata de ampliar sus recursos y consolidar su autoridad en nuevos espacios a los que no había prestado atención hasta 2005, especialmente dentro del Estado. Los continuos ataques que la organización ha recibido desde varios flancos nacionales e internacionales³³ mientras su prestigio ha ido creciendo en el seno de la Shia, especialmente a partir de la guerra con Israel de julio de 2006. De hecho, el gran respaldo social recibido tras este conflicto dio a Hezbolá el margen de actuación necesario para llevar a cabo iniciativas como el boicot que paralizó la actividad institucional del país entre noviembre de 2006 y mayo de 2008.

El principal aliado interno de Hezbolá es Amal. Ambas organizaciones se enfrentaron en los ochenta y siguieron manteniendo relaciones relativamente tensas a principios de los noventa. Hasta 1998, Siria puso ciertos límites a la organización islamista favoreciendo a Berri, en un contexto en el que, además, Hezbolá no parecía tener ningún interés en las instituciones. Pero esa situación comenzó a cambiar a finales de la década y se consolidó tras la llegada de Bashar al-Assad al poder. En lugar de competir, Berri optó por aliarse con Hezbolá y sacar provecho de su potencial sociopolítico y militar. Tras 2005, con Hezbolá ambicionando parcelas del espacio político-institucional, Berri ha seguido manteniendo la alianza, pese a que ello signifique la pérdida de ciertos espacios que tradicionalmente controlaba. En realidad Berri no tiene otra opción, no podría enfrentarse a la organización en ningún ámbito, ni siquiera en términos electorales. En el caso de Aoun, el tercer nombre del 8-M, se trata de una alianza que no carece de lógica si atendemos a las ambicio-

nes del ex general maronita, quien no hubiera dispuesto de espacio suficiente en el 14-M, donde ya existía en 2005 una nutrida representación cristiano-maronita. Sin embargo, su ambición por alcanzar la Presidencia sigue sin verse colmada, lo que denota que su posición está limitada por los intereses de Hezbolá. Junto a estos actores destacan en el 8M algunos líderes sunníes como los Karamé o Hoss, al menos por el momento, los drusos Arslan, siempre opuestos a los Yumblat, y el Partido Socialista Nacionalista Sirio (PSNS).

No obstante, debemos tener en cuenta que ambas alianzas —14-M y 8-M— son débiles. Las relaciones en el interior de estos grupos son absolutamente coyunturales, y en el momento en que alguno de los actores que conforman cada uno de estos grupos vea que sus intereses personales peligran lo abandonará. En este sentido, las elecciones legislativas de la primavera de 2009 pueden constituir la primera prueba de ello, especialmente si tenemos en cuenta que las estrategias de estas alianzas no se han constituido en torno a la existencia de intereses concretos y compartidos, sino contra enemigos comunes. Presumiblemente en un contexto electoral cada actor se centrará en sus propios intereses más allá del grupo.

La estructura del sistema de poder

El sistema de poder libanés es sumamente complejo y está formado por varios espacios de poder diferentes y, a la vez, entrelazados, generando élites de naturaleza diversa que compiten por entrar o por ejercer cierta influencia sobre el espacio político-institucional.

El espacio secundario más importante es el comunitario, como consecuencia del modelo político-institucional vigente —el espacio principal— que se articula en torno a un sistema de cuotas confesionales. Cada comunidad confesional tiene asignados un número determinado de cargos y puestos públicos y un determinado acceso a las instituciones en función de criterios demográficos.³⁴ Por tanto, el liderazgo comunitario se traduce, o se puede traducir, en influencia política, lo que convierte a la comunidad confesional en un recurso de poder para sus élites, y al espacio comunitario en un ámbito propicio para la aparición de rivalidades.

Son dos los factores que determinan el grado de competitividad en

el seno de una misma comunidad. Por un lado, el tipo de liderazgo: en los casos en los que encontramos un líder con una autoridad muy superior a la del resto, la competitividad interna disminuye; es lo que sucede en el caso de la comunidad sunní, en la que los Hariri se imponen sin discusión. Por otro lado, tanto la percepción de una amenaza común para el conjunto de la comunidad como la posibilidad de obtener mayor representatividad político-institucional para el total de la comunidad crean un entorno favorable para la colaboración entre las élites de una misma comunidad frente al resto. Esta es una de las razones por las que Amal y Hezbolá han optado por aunar fuerzas en lugar de competir.

Las distintas regiones que conforman el país son también un escenario de competitividad interna, en parte como consecuencia del sistema electoral libanés. Por un lado, ya hemos dicho que Líbano cuenta con un sistema político basado en la existencia de cuotas confesionales. Ello significa que los escaños del Parlamento se reparten entre las diferentes comunidades «institucionalizadas», y al mismo tiempo cada circunscripción electoral (*muhafazat* o distritos y *qadas* o subdistritos) tiene asignados un número determinado de escaños. Por tanto, un número fijo de diputados, según criterios basados en el reparto confesional, ha de ser elegido en cada distrito y subdistrito electoral, con independencia de la procedencia confesional de los electores que residen en el mismo. En este sentido, el tamaño y la distribución de las circunscripciones se convierten en elementos clave para el resultado electoral. No obstante, tanto el número de escaños como el número y tamaño de las circunscripciones varía en función de la ley electoral en vigor. En consecuencia, dicha ley es un elemento importantísimo en el juego de poder y se convierte en centro del debate y la negociación política cuando se han de celebrar elecciones.³⁵

Cada circunscripción electoral es un espacio idóneo para la aparición de relaciones concurrenciales entre los principales líderes de cada región. Uno de los recursos legales más utilizados en esta competición es la formación de alianzas electorales, normalmente coyunturales. Dado el número fijo de candidatos según criterios confesionales para cada *qada*, las coaliciones electorales han de combinar necesariamente personas de diferentes confesiones. Así, en períodos preelectorales podemos observar alianzas como la que establecieron Amal, Hezbolá, Yumblat y Hariri en 2005. Las listas electorales son un instrumento muy útil para ciertas élites, las más poderosas normalmente, puesto que garantizan la obtención

de escaños en circunscripciones donde de otra forma no obtendrían representación.

Finalmente, como venimos repitiendo a lo largo de todo el capítulo, todo gira en torno al ámbito político-institucional. La cúspide del escalafón institucional libanés la conforma la llamada Troika formada por el presidente de la República (maronita), el primer ministro (sunní) y el presidente del Parlamento (shíí) y consagrada en el Pacto Nacional de 1943. Los Acuerdos de Taif redistribuyeron los poderes de estos tres cargos con la intención de reducir la hegemonía de la Presidencia a favor del primer ministro y el Consejo de Ministros; también reformaron la composición y potenciaron el papel del Parlamento.³⁶

Al margen de la autoridad política que reportan estos cargos e instituciones, el valor del Estado, especialmente en el caso de la Troika y los ministerios, está en que es una importante fuente de recursos para quien lo gestiona. La gestión de dinero público y el control de puestos en la administración —nombramiento de funcionarios de mayor nivel— ayudan al fortalecimiento de las redes clientelares y de fidelidad, que son en última instancia las que determinan la autoridad real de un actor (Jammal, 2005; Hamzeh, 2001). En este sentido, el sistema político libanés se ha articulado de tal forma que genera, y además sostiene en el tiempo, espacios de influencia institucional adscritos a un mismo líder.³⁷ Así, es muy habitual ver como los cargos político-institucionales pasan de padres a hijos o a miembros de una misma familia.

El Parlamento, por su parte, es un eslabón clave en la cadena de fidelidades de los grandes líderes del país, y, a su vez, una vía de acceso a las instituciones para las élites provenientes de los ámbitos secundarios. En lo referente a la II República, se podría decir que el ámbito mejor conectado con esta institución ha sido el económico-financiero.

En suma, el sistema de poder libanés se compone de varios espacios de poder distintos pero interconectados, tanto de forma horizontal como de forma vertical, que las élites tratan de controlar de forma simultánea. El poder de cada actor es mayor cuantos más espacios domina, lo que significa que hay una jerarquización de las élites. En este sentido, destacan quienes extienden sus redes de influencia a varios espacios al mismo tiempo y, además, controlan una importante cuota del espacio político-institucional. Son lo que podríamos denominar élites primarias. Actualmente estas élites primarias están claramente enfrentadas; por un lado, la vanguardia del 14-M, con el tándem Hariri/Siniora, Yumblat, la

ABL y el sector financiero, apoyados por los países del Golfo, Francia y Estados Unidos; por otro, los líderes del 8-M, Hassan Nashralá y Berri, con el apoyo de Irán y Siria.

Tras ellos encontramos a un importante grupo de actores con recursos más limitados que calificaremos de élites secundarias. Son actores que, si bien tienen un espacio en el ámbito político-institucional, permanecen a la sombra de las élites primarias. A partir del año 2005 este grupo lo conforman diversos actores. Por un lado, las familias cristianas tradicionales, que con el tiempo han dejado de ocupar el centro político. Algunas quedaron marginadas a principios de los años noventa por su oposición a Siria; otras salieron en 2005 por todo lo contrario, ya que al basar su posición en la alianza con Damasco, han perdido capacidad de influencia tras la retirada siria. En el caso de los líderes cristianos que emergieron tras la guerra, y a pesar de la euforia que despertó su regreso al país en 2005, la evolución de los acontecimientos demuestra que están a la sombra de los grandes líderes musulmanes, incluso Michel Aoun, probablemente la figura política más destacable en el orbe cristiano. En el caso del nuevo presidente, Michel Suleiman, su trayectoria en el ejército parece avalarle como líder capaz de tratar de igual a igual con los grandes, pero es prematuro afirmar sus capacidades en el futuro. Aún dentro de esta élite secundaria encontramos también a la mayoría de familias sunnies tradicionales y a los Arslan entre los drusos. Esta élite se posiciona en la escena política nacional en función de intereses y rivalidades que se generan y desarrollan en los espacios secundarios, normalmente comunitarios o territoriales. No obstante, la cultura política libanesa y la extrema fragmentación del poder obligan a las élites primarias a negociar continuamente entre ellas y con las élites secundarias. Ningún actor puede imponer absolutamente su criterio al resto, por lo que la toma de cualquier decisión requiere la búsqueda de apoyos y pactos de forma sistemática.

Finalmente, la estructura clientelar de la sociedad libanesa hace que además de esas élites secundarias encontremos élites de tercer y cuarto grado, e incluso más allá, puesto que el poder de cada líder se articula de forma piramidal. Así, cada líder nacional, pudiendo pertenecer a las élites primarias o secundarias, está rodeado por una serie de actores que forman el primer escalafón de su red clientelar, que a su vez tiene más gente a su servicio, etc. En este sentido, la estructura de poder en Líbano está formada por unos catorce líderes que poseen su propia esfera de influencia articulada de forma piramidal, hasta llegar al ciudadano de a pie.

Ello no significa que ejerzan un control directo sobre todas las esferas de poder, en muchos casos extienden su influencia a través de diversos mecanismos de cooptación. Los grandes líderes suman a su red de fidelidades a élites locales, regionales, asociaciones de todo tipo, etc. que son las que en última instancia están en contacto con el ciudadano. Lo que diferencia a las élites primarias de las secundarias es que las redes de influencia de los primeros son mucho más extensas e importantes que las de estos últimos.

Previsiones de futuro

El devenir del Líbano está sujeto a multitud de variables, por lo que es arriesgado realizar previsiones de futuro. Sin embargo, la evolución del país en el pasado inmediato y la conflictiva situación regional hacen suponer que la inestabilidad no va a desaparecer a medio plazo. De hecho, es probable que la crisis del modelo confesional, al menos en su vertiente político-institucional, se vea agravada como consecuencia de la evolución social y demográfica de la comunidad shíi. Recordemos una vez más que el confesionalismo político libanés se estructura en torno a unos criterios demográficos que no se corresponden con la realidad actual. Es cierto que tras la guerra se realizó un cierto reajuste en el reparto de cuotas confesionales, pero ese reajuste sigue sin corresponderse con la realidad demográfica del país. Al mismo tiempo, la Shía está liderada por Hezbolá, una organización con una influencia nacional y regional creciente. Sobre esta base, es plausible que, a medio plazo, esta comunidad reivindique mayores cuotas de poder en el ámbito político-institucional, lo cual aboca a la inestabilidad.

El ascenso de la Shia podría devolver a los líderes cristianos parte del protagonismo perdido. Como ya hemos visto, la pugna principal por el poder se desarrolla entre los grandes líderes shíes y sunníes, lo que convierte a los líderes cristianos, especialmente a los maronitas, en piezas clave para la formación de futuras alianzas y el mantenimiento de la estabilidad. Esta tendencia se ha constatado ya con la firma de los acuerdos de Doha en mayo de 2008 y con la formación del Gobierno de Unidad Nacional en julio de 2008, en los que los líderes maronitas han obtenido algunas concesiones relativamente importantes. A su vez, esta tendencia

está generando problemas con líderes como Yumblat, jefe de una minoría clave en la formación de alianzas.

Por otro lado, si bien no nos es posible conocer la amplitud exacta del fenómeno, ya es obvio que los grandes líderes del país están reconstruyendo sus milicias, como bien ha mostrado el enfrentamiento entre Hezbolá y los hombres de Hariri y Yumblat a principios de mayo de 2008.³⁸ La superioridad militar de la organización shíí ha sido aplastante, lo cual no ha hecho más que animar el proceso de rearme del resto de facciones. Dada la historia del país, este es un factor de inestabilidad extremadamente peligroso que habrá que tener muy en cuenta en el futuro.

Además, debemos considerar también la evolución general de la región. Las élites libanesas tienden a buscar apoyos en el exterior para garantizar su posición en el interior del país de forma sistemática. Es otro recurso secular en la competición por el poder. Esto convierte al país en un escenario especialmente sensible a lo que acontece en su entorno, por lo que temas como la política estadounidense hacia Irán o la relación de Israel con sus vecinos serán cruciales para el futuro del país. Evidentemente, hay otros factores que tienen una importancia relativa, como los conflictos internos dentro de la comunidad maronita, la política israelí hacia el país, el problema palestino, la creciente presencia de grupos salafistas, etc., y todos ellos pueden contribuir a incrementar o disminuir tensiones en momentos puntuales. Sin embargo, seguramente la clave del futuro del Líbano está en el camino que seguirán las élites político-religiosas shííes tanto en el país como en la región en general, y en la percepción que Occidente y la Sunna tengan respecto a esa evolución.

Notas

1. La comunidad chií alcanza la categoría de comunidad confesional con el decreto legislativo del 16 de diciembre de 1967, Ley nº 27/67.

2. Destaca el reconocimiento explícito y la reafirmación de la arabidad del Líbano. Fue una matización especialmente negativa para la comunidad maronita, o para el discurso «maronitista» tradicional, que siempre ha intentado presentar al Líbano como un puente entre Oriente y Occidente.

3. Entre 1975 y 1990 las milicias obtuvieron unos beneficios que rondaron los 14,5 billones de dólares anuales (Harris, 1997: 294).

4. No obstante, este planteamiento está en el origen de muchos de los grandes problemas estructurales que sufre la economía libanesa desde la segunda mitad de la década de los noventa.

5. Los Hariri tienen importantes intereses en el sector, incluso son propietarios de la Banque de la Méditerranée.

6. En 1992, Chirac realizó un viaje a Beirut en el que pidió públicamente la participación de la comunidad cristiana en las elecciones legislativas que el país celebraba por primera vez en muchos años, mientras que los principales líderes cristianos pedían la abstención.

7. Por otro lado se le conoce una importante participación en varias cadenas televisivas del Golfo como Zen TV (Emiratos Árabes) y en la primera cadena de emisión vía satélite de Dubai, la MBC (González de Quijano 2002).

8. *The Lebanon Report*, «The Media Law: Switching off the competition», nº 3, 1996 [en línea] http://www.lcps-lebanon.org/pub/tlr/96/fall96/media_law.html.

9. A pesar de que siempre se ha especulado con la autoría siria del asesinato de su padre.

10. Entre otras cosas Walid es el principal accionista de la empresa de cementos, SIBLINE. Un sector muy rentable durante los años dorados de la reconstrucción. Por otro lado, está directamente ligado a la sociedad CODIGO responsable de la distribución de gasolina en el país. <http://www.1stlebanon.net/actufr/archives/resultat.php?id=445&debut=12> [visto el 3/1/2006].

11. Hezbolá, el Ejército del Sur de Líbano y algunos grupos palestinos en los campos de refugiados siguieron armados.

12. El Ejército libanés es un ejército débil, que también se ve afectado por las divisiones socioconfesionales y las pugnas entre élites, al igual que el resto de la sociedad libanesa. No obstante, es también un medio para ascender social y políticamente, lo que ha permitido la entrada en primera línea política a muchos de sus altos mandos. Son varios los comandantes en jefe de las FAL que han sido jefes de Estado, lo cual no significa que el Ejército tenga un papel importante en los procesos de toma de decisiones políticas. En realidad, más que poder en sí mismo, el Ejército es otro recurso más.

13. «Lebanese Skeptikal Deal For New Gov. Will Fly» <http://joshualan-dis.com/blog/?p=548> (consultado el 7 de enero de 2008).

14. Los Frangieh son una familia de gran tradición en la política libanesa. Notables de la región nortea de Zgorta, siempre se han mantenido muy cercanos a Damasco a pesar de ser cristianos.

15. Khoury fue el presidente de la independencia y autor oficial del Pacto Nacional junto con su primer ministro Riad Solh. Es un pacto no escrito que recoge los fundamentos del actual sistema sociopolítico libanés.

16. Debemos tener en cuenta que la Presidencia en este período era, clara-

mente, el cargo más importante del Estado, ya que sus poderes eran netamente superiores a los de la Presidencia actual.

17. Siguiendo la estela de sus líderes religiosos en abril de 2001, un grupo de personalidades maronitas formó una asociación bajo el nombre de Cornet Chehwan, con objeto de implementar la estrategia de la oposición en el interior del país. El nombre se debe al monasterio en el que se celebró la reunión fundadora de la asociación.

18. Algunas familias grecoortodoxas en ciudades como Beirut también han desempeñado un importante papel dentro del sector mercantil. Hariri proviene de una humilde familia de Zaida.

19. Otras de las familias suníes que se ha opuesto al magnate sunní han sido los Karamé de Trípoli, los Solh de Beirut, los Salam, etc. (Harris, 1997).

20. En el caso de algunas confesiones como la shíí, existen además actores religiosos que actúan al margen de las instituciones oficiales, y que gozan de una autoridad moral muy importante que les permite extender su influencia a la arena política.

21. A pesar de haber firmado los Acuerdos de Taif, en 1992 Sfeir decidió apoyar el boicot electoral liderado por la oposición cristiana en el exilio. A partir de ahí, el patriarca y sus obispos fueron la columna vertebral de la oposición en el interior del país.

22. Amal surgió en 1975, como brazo armado del Movimiento de los Desheredados creado y liderado por el clérigo shíí Musa Sadr, desaparecido en Libia en 1978.

23. Las FL fueron en origen una agrupación de distintas milicias cristianas creada en 1976 bajo la dirección de Camille Chamoun y Bachir Gemayel. Se convirtió en la milicia cristiana más importante del país con 20.000 hombres al final de la guerra.

24. Aoun y Geagea protagonizaron el último episodio de la guerra civil. Entre 1988 y 1990 las FL, con el apoyo de Siria, se enfrentaron al sector del Ejército liderado por Aoun. Aoun fue derrotado.

25. A lo largo de la guerra el Ejército se desintegró en varias ocasiones. En 1988 las FAL estaban divididas en dos, un sector liderado por Aoun, que no reconocía a las autoridades políticas leales a Siria y otro liderado por Emile Lahoud, a las órdenes del Gobierno oficial liderado por Salim Hoss.

26. A partir de 1996, la vanguardia de su movimiento fueron las asociaciones estudiantiles adscritas al movimiento. Denunciaban sobre todo el control de Siria sobre el país, y consiguieron gran visibilidad gracias a la dureza con la que el Gobierno reprimía todos sus actos públicos.

27. La comunidad shíí se concentra básicamente en el sur de Beirut, en el sur del país y en el valle de la Bekaa, al oeste del país. Son algunas de las zonas más deprimidas del país.

28. Hezbolá sigue recibiendo financiación de Irán, pero las cantidades han disminuido considerablemente con respecto a la primera mitad de los noventa. No obstante, tras la guerra de julio en 2006 se produjo un nuevo repunte en el envío de dinero y armas (Martín, 2006).

29. Al mismo tiempo, radicalizó su discurso en la calle, y el recurso a la movilización de sus bases se convirtió en algo recurrente.

30. Además, en 2007, la coyuntura nacional y regional ha propiciado la proliferación de nuevos grupúsculos de corte salafista antisistema y cercanos a al-Qaeda, pero se trata de una nebulosa de organizaciones difíciles de identificar.

31. En realidad, este es un elemento estructural del sistema libanés, pero tras la guerra se acentuó ligeramente mediante una redistribución de poder entre los principales cargos del Estado.

32. Aunque se reajustó ligeramente al final de la guerra. El único censo oficial realizado en Líbano es de 1932.

33. Especialmente tras la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de septiembre de 2004, que obliga al desarme de todos los grupos armados del Líbano. Desde su aprobación, el tema del desarme de Hezbolá es un debate abierto.

34. No obstante, la representación confesional se interpreta de manera restrictiva, ya que solo 11 de los 19 grupos confesionales con estatuto reconocido disponen de una cuota de poder en las instituciones.

35. La Constitución libanesa, redactada en 1926, no recoge la ley electoral, aunque en el artículo 34 de la misma se emplaza al Parlamento a establecer una ley electoral estable. Sin embargo, esta nunca se ha fijado de forma definitiva, va cambiando según el interés de las élites en el poder. La actual ley electoral, aprobada en 2000, establece cinco divisiones administrativas o *muhafazat*.

36. El Parlamento actual está formado por 128 diputados, 64 musulmanes y 64 cristianos, y dentro de cada uno de estos grandes grupos los escaños se reparten entre las comunidades confesionales institucionalizadas (siete cristianas y cuatro musulmanas).

37. Por ejemplo, el Ministerio de Agua y Electricidad estuvo bajo la órbita de Nabib Berri hasta 2005. El Ministerio de Finanzas sigue estando controlado por los Hariri; el Ministerio de Trabajo estuvo continuamente adscrito al PSNS durante los años de presencia siria, etc.

38. El 5 de mayo de 2008 el Gobierno decidió dismantelar la red de seguridad de Hezbolá en el aeropuerto de Beirut, a lo que Hezbolá respondió cortando los accesos al aeropuerto y tomando varios barrios sunnies de Beirut. La tensión se extendió por varias regiones de la montaña, la Bekaa y Trípoli. Oficialmente los enfrentamientos cesaron el día 14, después de que el Gobierno revocara su decisión inicial, con un balance final de unos 60 muertos. En las zonas de la Bekaa y Trípoli se siguieron produciendo enfrentamientos en el mes de agosto.

Bibliografía

- Abdel-Latif, O. (2008), «Lebanon's sunni islamism. A growing force», *Carnegie Papers*, nº 6, enero 2008, Washington, D.C. [en línea], http://www.carnegie-endowment.org/files/CMEC6_abdellatif_lebanon_final.pdf.
- Atallah, S. (2000), «Lebanon case study No. 5 Business associations and the state: achievements and constraints», Lebanese Center for Policy Studies (Proyecto: Civil Society and Governance: Moving Forward), sin publicar, disponible en: <http://www.ids.ac.uk/ids/civsoc/final/lebanon/leb1.html>.
- Baroudi, S. (1998), «Economic conflict in postwar Lebanon: State-labor relations between 1992 and 1997», *Middle Eastern Journal*, vol. 52, nº 4.
- (2000a), «Business associations and the representation of business interests in post-war Lebanon: the case of the association of lebanese industrialists», *Middle Eastern Studies*, vol.36 nº 3, pp. 23-52.
- (2000b), «Sectarianism and business associations in postwar Lebanon», *Arab Studies Quaterly*, vol.22, nº 4.
- Dibeh, G. (2005), «The political economy of postwar reconstruction in Lebanon», *Research Paper*, nº 2005/44, United Nations University [en línea], <http://www.wider.unu.edu/publications/rps/rps2005/rp2005-44.pdf>.
- Goenaga, A. (2008), *Élites y relaciones de poder en el Líbano de la II República*, tesina para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, FIMAM, Al-tafulla, <http://www.fimam.org/4.htm>.
- González de Quijano, Y. (2002), «La révolution de l'information arabe aura-t-elle lieu?», *Politique Étrangère*, nº 1 [en línea], http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_1_02_Gonzalez_Quijano.pdf.
- Gutiérrez de Terán, I. (2003), *Estado y confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y Líbano. Religión, taifa y representatividad*, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid/Editorial CantArabia, Madrid.
- Hamzeh, N. (2000), «Lebanon's Islamists and local politics: a new reality», *Third World Quarterly*, vol. 21, nº 5, pp. 739-759.
- (2001), «Clientalism, Lebanon: roots and trends», *Middle Eastern Studies*, vol. 37, nº 3.
- Harris, W. (1997), *Faces of Lebanon: sects, wars and global extensions*, Marcus Winer, Princeton.
- Hudson, M. (1999), «Lebanon after Ta'ef: another reform opportunity lost?», *Arab Studies Quaterly*, vol. 21, nº 1.
- International Crisis Group (2003), «Hizbollah: rebel without a cause?», nº 7 [en línea], http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A401070_30072003.pdf.
- (2005), «Lebanon: managing the gathering storm», nº 48, diciembre [en línea] http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_

- africa/arab_israeli_conflict/lebanon/48_lebanon_managing_the_gathering_storm.pdf.
- Jammal, K. (2005), *Les liens de la bureaucratie libanaise avec le monde communautaire*, L'Harmattan, París.
- Karam, K. (2007), *Le mouvement civil au Liban: Revendications, protestations et mobilisations associatives dans l'après-guerre*, Karthala, París.
- Makdisi, U. (2000), *The Culture of Sectarisme: Community, History, and Violence in the Nineteenth Century*, University of California Press, Berkeley.
- Martín, J. (2006), *Hizbulah, el brazo armado de Dios*, La Catarata, Madrid.
- Messarra, A. (2002), «Le Liban: Un cas fondateur de la théorie consensuelle de gouvernement», *Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey*, n° 013, pp. 121-156.
- Perthes, V. (1997), «Myths and money. Four years of Hariri and Lebanon's preparation for new Middle East», *Middle East Report*, n° 203.
- Rabbath, E. (1986), *La formation historique du Liban politique et constitutionnel: essai de synthèse*, Publications de l'Université Libanaise, Beirut.
- Ranstorp, M. (1994), «Hizbollah's command leadership: Its structure, decision-making and relationship with iranian clergy and institutions», *Terrorism and Political Violence*, vol. 6, n° 3 pp. 303-339.
- (1998), «The strategy and tactics of Hizballah's current "Lebanonization process"», *Mediterranean Politics*, vol. 3, n° 1, pp. 103-134.
- Salibi, K. (1990), *A house of many mansions. The history of Lebanon reconsidered*, University of California Press, Los Ángeles.
- Sánchez Mateos, Elvira (1995), *El uso de la fuerza militar como mecanismo disuasorio en el tratamiento de las crisis en Oriente Medio: los casos de las intervenciones estadounidenses en Líbano (1982-1984) y en la Guerra Irán-Irak (1987-1988)*, tesis doctoral, Departamento de Ciencia Política y Derecho Público, Universidad Autónoma de Barcelona.
- (1997), «Líbano y las relaciones sirio-israelíes: un análisis de Líbano como microcosmos de Oriente Medio», *Afers Internacionals*, n° 34-35, pp. 171-190.

Líbano: ¿Una paz duradera?

George E. Irani

A lo largo de su breve historia, Líbano, mosaico de 17 comunidades religiosas, cristianas y musulmanas, ha sido el campo de batalla favorito de intereses regionales y globales contrapuestos. Actualmente, Líbano está inmerso en una nueva guerra fría que enfrenta, por un lado a la Administración de Bush y sus aliados europeos y árabes y, por otro, a la República Islámica de Irán, que ha emergido como importante poder hegemónico abarcando de Teherán a Beirut. En la búsqueda de su supremacía regional, Irán cuenta con el apoyo del régimen sirio de Bashar al Assad y sus aliados Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica.

En este texto intentaré imaginar y desgranar el posible futuro del país de los Cedros para los próximos años.

A principios de mayo de 2008, en Líbano se declaró una gran huelga de trabajadores en la que los seguidores de Hezbolá quemaron ruedas y dispararon contra las facciones políticas rivales y el ejército libanés. Estos acontecimientos sucedieron en medio de acusaciones abiertas por parte del gobierno libanés de que la milicia nacionalista religiosa chií había establecido una red telefónica propia en las áreas bajo su control, contraviniendo frontalmente la legislación libanesa. El gobierno encabezado por Fuad Siniora exigió a Hezbolá el desmantelamiento de la red, a lo que este contestó que esta formaba parte de su lucha contra Israel.

Los enfrentamientos en Líbano se extendieron por varias áreas del país, incluidos Beirut, las montañas de Shouf y Trípoli, la mayor ciudad del norte del país, provocando la muerte a más de 80 libaneses y un gran perjuicio económico.

El reciente estallido de violencia en Líbano nos enseña a la fuerza,

una vez más, una lección elemental: ninguna facción libanesa, por muy poderosa que sea militarmente, puede imponerse sobre el resto del país. Esto es lo que ha aprendido Hezbolá, partido político y milicia apoyada por Irán. Los cabecillas iraníes de Hezbolá aconsejaron moderación a la milicia chií y que se abstuviera de acabar con el *statu quo* en Líbano. Además, la credibilidad de Hezbolá se había visto afectada cuando empuñaron las armas, las mismas que utilizan en su lucha contra Israel, contra sus conciudadanos libaneses.

A pesar de lograr un éxito limitado al forzar al gobierno a revocar sus últimas decisiones, Hezbolá se vio enfrentado a la dura oposición armada de la comunidad drusa en Monte Líbano y de las milicias suníes salafistas en el norte del país. De esta última batalla, suníes y drusos han emergido más unidos, especialmente los drusos, mientras que los suníes de Trípoli y Beirut se han radicalizado.

Líbano fue rescatado del borde de una guerra civil por los esfuerzos de los pequeños estados del golfo Pérsico y Qatar.

Qatar ha tenido un papel muy importante a pesar de su tamaño. El liderazgo qatarí ha sido muy activo en diversos frentes: la reconciliación de Siria y Arabia Saudí, la consolidación de las relaciones con Israel, la mediación en el actual conflicto de Yemen y la celebración de la conferencia de paz sobre Líbano.

El emir de Qatar convino en reunir a las principales facciones libanesas y de nuevo negoció una solución para los problemas esenciales que afectaban al sistema político libanés. El 21 de mayo de 2008, representantes de la mayoritaria coalición pro-occidental, conocida como «14 de marzo», alcanzaron un acuerdo con la coalición opositora pro siria, también conocida como «8 de marzo».

Para los libaneses, el acuerdo del Doha sobre Líbano es una especie de victoria a corto plazo. El liderazgo qatarí manejó con destreza sus relaciones regionales y globales para lograr este acuerdo. Indudablemente, Qatar ha llenado el vacío dejado por la ausencia de la Administración de Bush, que se limitó a hacer declaraciones pidiendo calma en Líbano. Por lo que respecta a la UE, especialmente Francia, Italia y España, decidieron tener un papel secundario, preocupados por las tropas desplegadas bajo el paraguas de la FINUL.

Los cuatro pactos principales alcanzados en el Acuerdo de Doha:

1. El Parlamento Libanés acepta nombrar al comandante del Ejér-

cito, el general Michel Suleiman, presidente de Líbano, elegido el 25 de mayo.

2. Formar un gobierno de unidad nacional de 30 miembros, incluyendo miembros de la coalición gobernante y de la oposición. En este punto, Hezbolá y sus aliados han logrado su objetivo, obteniendo el poder de veto sobre las principales decisiones gubernamentales.
3. Derogar la actual ley electoral y adoptar la ley anterior a 1960, que dividía Líbano en pequeños distritos electorales.
4. Las partes reunidas en Doha han acordado no recurrir a las armas para lograr objetivos políticos. Para la mayoría, esta es una victoria ya que la cuestión de las armas de Hezbolá deberá tratarse más adelante.
5. El recientemente elegido presidente iniciará un diálogo nacional para abordar los principales escollos a los que se enfrenta Líbano.

La estabilidad de Líbano pende de la solución de aquellos asuntos que podrían desencadenar en conflicto: 1) las armas de Hezbolá y su desarme. La Resolución 1559 llama al desarme de todas las milicias de Líbano; 2) la turbulenta relación de Líbano con el régimen sirio. Líbano pide a Damasco respeto a su soberanía y un acuerdo que reconozca unas fronteras definitivas para ambos países; 3) la seguridad en los campos de refugiados palestinos; 4) el cese de las hostilidades entre Hezbolá e Israel, que todavía debe convertirse en un alto al fuego permanente; y, 5) la creación por parte de las Naciones Unidas de un tribunal internacional que juzgue a los acusados del asesinato del primer ministro Rafiq al Hariri el 14 de febrero y de otros personajes libaneses antisirios.

Este es un gran trabajo para un pequeño país como Líbano. El futuro de Líbano depende de compromisos regionales y globales, que incluyen el programa nuclear iraní, el futuro de Irak y la resolución del conflicto palestino-israelí. Desgraciadamente, es difícil prever una solución para estos conflictos, enraizados y persistentes. En los próximos años, Beirut volverá a ser, por desgracia, el campo de batalla favorito de los letales juegos de las naciones.

9. Palestina: élites y poder bajo ocupación

Salvador Martínez Más y Javier Travín

En 2008 Israel ha celebrado su 60 aniversario.¹ Este cumpleaños, como todos los que ha festejado el Estado israelí, se ha visto ensombrecido por el triste aniversario que acompaña las conmemoraciones del establecimiento de la patria de los israelíes: *al-Nakba*.² Este término árabe nombra el exilio de los palestinos tras la primera guerra israelo-árabe de 1948.³ En los últimos 60 años, el movimiento nacional palestino ha impedido el olvido del drama que acompañó a la creación de Israel. Sin embargo, el nacionalismo palestino sigue lejos de poder crear un Estado que albergue a la nación palestina. De hecho, los palestinos han vivido los últimos seis decenios bajo el control de terceros estados: Jordania y Egipto, entre 1948 y 1967 y, tras la guerra de los Seis Días, Israel.

Junto al incesante proceso de colonización⁴ que acompaña al control y la ocupación israelí se desarrolla el impedimento de la libre circulación de personas en los territorios palestinos a través de los puntos de control militar que Israel mantiene en Cisjordania. En 2008, y pese a la promesa de crear un Estado palestino antes de 2009 hecha en la Conferencia Internacional de Annapolis, se cuentan cerca de medio millar de estos *check-points* (Waugh, 2008). Además, el muro de cemento⁵ en construcción que separa a Israel de Cisjordania establece dificultades en la conexión de las poblaciones palestinas. Los mapas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados de Palestina⁶ dan cuenta de las dimensiones de la colonización y de las dificultades de movilidad existentes en los territorios palestinos. Observándolos se constata que las bases físicas, económicas y humanas de un Estado palestino están extinguiéndose (Debray, 2007).

Una nación sin Estado

El análisis del poder en los Territorios Ocupados parte de otras dos constataciones. Se trata de dos características específicas de la realidad palestina: la ausencia de Estado y la demanda popular de liberación del territorio.

En los territorios palestinos no existe un Estado. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) carece del reconocimiento internacional como Estado independiente. Sometida a la ocupación israelí, la ANP no posee los atributos propios de un Estado soberano. Los acuerdos israelo-palestinos de Oslo I y II, firmados en septiembre de 1993 y de 1995, establecieron la autonomía palestina y fijaron el modo en que esta se erigiría. Además, precisaron las competencias⁷ de una autoridad temporal de autonomía que debería haberse disuelto cinco años después de su creación en favor de la construcción de un Estado palestino.

La ANP solo ha ejercido su jurisdicción en las «zonas A»⁸ establecidas en Oslo II, que se identifican con las principales ciudades de Cisjordania: Yenín, Nablús, Qalquilia, Ramala, Belén y parte de Hebrón.⁹ Estas ciudades representan el 3% del territorio de Cisjordania y el 20% de la población de los Territorios Ocupados. Las identificadas por Oslo II como «zonas B», en las que la seguridad es una competencia de Israel, incluyen 450 aglomeraciones urbanas y poblaciones rurales. Constituyen un 27% de la superficie de los Territorios Ocupados y en ella vive el 70% de la población palestina. Por último, las «zonas C», que permanecen bajo control israelí, representan casi tres cuartas partes del territorio palestino. Por ello, es evidente que los acuerdos de Oslo supusieron la creación de un mosaico de zonas de control y un solapado de jurisdicciones que viola la integridad de Cisjordania y su relación con la Franja de Gaza (Farsoun y Aruri, 2006: 251). De acuerdo con esta observación, Jean-François Legrain, mantiene que la «autonomía palestina permaneció sometida» a Israel, que «conserva la responsabilidad de la seguridad exterior de las zonas autónomas y de los asuntos exteriores» (Legrain, 2002: 43). Bajo la perspectiva de este estudio, la importancia de la ANP reside en que, aún sin constituir una entidad estatal, es uno de los principales recursos que permite a las élites palestinas la acumulación de poder en su búsqueda de la hegemonía. Por tanto, la ANP es una «institución-recursos» que dota de medios a quienes la controlan.

La ausencia de Estado implica que predomine la exigencia de la li-

beración de la tierra ocupada por Israel en las relaciones lineales que establece la población palestina con sus líderes. Prueba de la fuerza con que la población exige a las élites respuestas a sus aspiraciones de emancipación es que todo movimiento nacionalista palestino pretende, al menos en su retórica, la liberación de los Territorios Ocupados. Desde *al-Nakba*, «tres movimientos palestinos han surgido como manifestaciones del nacionalismo», asegura Helga Baumgarten (Baumgarten, 2005: 26), señalando al panarabista Movimiento de Nacionalistas Árabes (MNA), al Movimiento de Liberación Nacional de Palestina (Fatah), y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El primer grupo se identifica con las reclamaciones de liberación de Palestina que tuvieron lugar durante los años cincuenta y sesenta. Figuras como George Habash, fundador del Frente Popular por la Liberación de Palestina (FPLP), y su estrecho colaborador, Wadie Haddad, o Nayif Hawatma, el creador del Frente Democrático por la Liberación de Palestina (FDLP), compartieron sus primeros momentos de militancia en el MNA. No obstante, estas facciones, fundadas, respectivamente, en 1967 y 1969, se diferencian ideológicamente del MNA. Para los militantes de este movimiento la unidad árabe es la condición *sine qua non* para la liberación de Palestina. Por su parte, la razón de ser del FPLP y del FDLP es la liberación de Palestina a través de una organización no vinculada a ninguna fuerza política árabe. Este hecho es relevante porque en las dos décadas posteriores a *al-Nakba* la representación de los intereses palestinos fue asumida por las naciones árabes (Izquierdo, 2005a: 36).

Fue Fatah, y no el FPLP o el FDLP, la organización que arrebató el protagonismo al MNA. Fundado en Kuwait en 1959 por un grupo de ingenieros, matemáticos y profesores formados en El Cairo y Alejandría, entre quienes se encontraban Yasser Arafat, Kalil al-Wazir y Salah Khalaf, el eslogan de Fatah es «la liberación de Palestina es el camino hacia la unidad árabe» (Baumgarten, 2005: 31). Desde que se pusiera al frente de la Organización por la Liberación de Palestina (OLP) en febrero de 1969 hasta la muerte de Arafat en noviembre de 2004, Fatah ha ocupado el primer plano de la escena política palestina. En los últimos años esta situación ha cambiado con la emergencia de Hamás,¹⁰ el principal partido del Consejo Legislativo Palestino (CLP) tras las elecciones legislativas de 2006. Hamás plantea al pueblo palestino que «el islam es la solución y la alternativa». Esos son los términos del primer comunicado emitido por Hamás el 14 de diciembre de 1987 (Hroub, 2000: 265). En-

tre los miembros de la oficina política de la Hermandad Musulmana en la ciudad de Gaza que redactaron ese texto se encontraban el jeque Ahmed Yassin y Abelaziz Rantissi, asesinados por Israel en 2004.

Existe otra relación lineal entre la población y las élites que puede adquirir una relevancia similar a la de la lucha por la liberación de los Territorios Ocupados: la exigencia de la mejora del nivel de vida. Esta demanda se dirige a Israel, que debe cumplir sus deberes como potencia ocupante, pero también interpela a las élites palestinas, especialmente, desde que existe la ANP. Por consiguiente, las prioridades de la Presidencia palestina son «la mejora del nivel de vida y la negociación» con Israel, según Elías Sanbar¹¹ (Martínez, 2006).

Junto a las relaciones lineales, las élites palestinas establecen entre sí otras relaciones de tipo circular. Estas relaciones circulares resultan de la búsqueda de las élites de una mayor proporción de recursos de poder. Más adelante plantaremos que, en los Territorios Ocupados, las relaciones circulares están condicionadas por las élites externas, especialmente por las israelíes, las poseedoras de los principales recursos de poder.

Élites y recursos

Identificar las élites de una sociedad sin Estado y sometida a una ocupación militar, como es el caso de la sociedad palestina, supone enfrentarse a la elevada movilidad existente entre los diferentes grupos que la componen. Así, el sistema de poder en las sociedades sin aparato estatal no es un ámbito exclusivo de las élites políticas. Según André Elías y Abraham Yogeve, «en una sociedad en lucha, un líder sindical hoy puede convertirse en una figura nacional mañana» (Elías y Yogeve, 1999: 414). Esta «sociedad en lucha» presenta lo que Bernard Sabella denomina «estructura social abierta» (Sabella, 1996: 240). Gracias a esta idea de apertura se comprende la dimensión múltiple del comportamiento de las élites palestinas. Estas no actúan en solo un espacio, ya sea político, ideológico, económico o social, sino que, como veremos, tienden a manifestarse en esas esferas de manera simultánea.

En su posición de liderazgo, las élites acumulan poder a través del control de distintos recursos. A continuación abordamos las élites palestinas por orden de relevancia en el sistema de poder. Primero presentare-

mos a las élites que actúan a través de una acción eminentemente política —Fatah, la OLP y Hamas— y después, evocaremos la importancia de dos familias —Masri y Shoman— de especial relevancia a nivel económico. En segundo lugar, tendremos en cuenta otras élites tradicionalmente relevantes en la sociedad palestina.

Élites primarias

Fatah-OLP

El proceso de formación y renovación de élites en los Territorios Ocupados de Palestina se ha visto profundamente afectado en función de tres actores: Jordania, Israel y la OLP (Legrain, 1996). Este último resulta de especial importancia dado su lugar preeminente como estructura política bajo la cual han operado las principales figuras del nacionalismo palestino. Desde su creación por la Liga Árabe bajo los auspicios de Gamal Abdel Nasser en la Cumbre de El Cairo en 1964, la OLP dirigió al movimiento nacionalista palestino como una institución de representación de todos los palestinos, incluidos los del exilio.

La derrota de los ejércitos árabes en junio de 1967 aumentó el peso de la OLP en los Territorios Ocupados frente al peso histórico de las élites tradicionales¹² ligadas a la corona hachemí. Aun así, estas élites desempeñaron un papel esencial por aquel entonces, al participar en los encuentros sobre la instauración de una autonomía y al contribuir en la creación del Consejo Supremo Islámico (CSI) y del Alto Comité de Orientación Nacional. Ambas instituciones tuvieron una existencia efímera pero fueron pioneras en la articulación de la actividad política de los palestinos del interior y en la creación de alianzas entre todos los sectores de la sociedad (Álvarez-Ossorio, 2001: 50).

Fatah se aupó como agrupación mayoritaria y más influyente de la OLP al hacerse con el control de dicha organización en 1969. Con una ideología basada en la liberación de Palestina y defendiendo la creación de un Estado palestino, Fatah se sirvió de una estrategia de guerrilla en los años sesenta y setenta. En noviembre de 1974, Yasser Arafat intervino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas e hizo de la OLP la única representante de los palestinos en el mundo. Cargada de esta legitimidad, la organización «gobernó» el movimiento nacional palestino y

la lucha contra Israel. Para tales cometidos la OLP se sirvió de sus tres órganos: el Comité Ejecutivo, el Comité Central y el Consejo Nacional de Palestina (CNP).

La consolidación de Fatah en el liderazgo de la OLP generó nuevas vías de reclutamiento de élites. El nuevo elitismo que surge con la OLP es una combinación entre viejos y modernos estándares de reclutamiento al que se acopló buena parte de la élite tradicional. En esta nueva formación de líderes, luchar en el movimiento de liberación era una condición necesaria, aunque no suficiente, para formar parte de la élite. Las élites tradicionales, que solo podían deliberar a nivel regional, fueron cooptadas por la OLP y más adelante por la ANP. Fue una cooptación por simbiosis. Para la OLP y la ANP estas familias eran indispensables porque garantizaban el control sobre la población local. Por su parte, los notables precisaban de las dos instituciones para renovar y «nacionalizar» su papel en el sistema político y en la estructura social palestina.

El comportamiento de los palestinos en las elecciones legislativas de 1996 acompañó esta dinámica y supuso en gran medida la renovación de la relevancia de las figuras clánicas. Legrain señala así la presencia de notables palestinos en el CLP:

Mientras la sociedad del norte de Cisjordania, como la de Nablús, ha manifestado una cierta continuidad en su fidelidad clánica [...], las poblaciones del centro, especialmente en Jerusalén, han roto con su pasado. En el norte, los Masri, Jarrar, Chaka y Kilani obtuvieron escaños en el Consejo. Sin embargo, los Abd Al-Hadi han desaparecido como los Duwaykat, Nimr y los Tuqam. En la región de Hebrón, los Natcha, Qawasma, Machal y Amru también ocupan escaños en la Cámara de Gaza pero los Jabari, Muhtasi y Tamimi están ausentes. En Jericó/Abu Dis, un Ariqat está presente, al igual que un Barguzi de Ramala, pues esas familias han ocupado un puesto tradicional de *chaykh al-nahiyya* (Legrain, 1996).

Esta cita muestra cómo la sociedad palestina está presa de los localismos. Este hecho acentúa la realidad descrita por Ahmad S. Khalidi: «la orientación y estructura de la sociedad palestina no difiere de las sociedades árabes que la rodean» por lo que continúa regida por «comportamientos de tradición rural motivados por diferencias locales y tribales» (Khalidi, 1996: 23). Sin embargo, habida cuenta de que hubo notables que no encontraron representación en el CLP, debemos matizar a Khalidi, señalando uno de los nuevos parámetros que entraron en juego en la elección de

los diputados: la vinculación a Fatah. Esta es la mejor garantía del voto de la comunidad local. De ahí que podamos hablar de una élite de nuevo cuño, vinculada a la OLP, esencialmente a Fatah, designada única representante del pueblo palestino, dotada de los atributos para negociar con Israel y en una relación con los notables locales de los Territorios Ocupados en la que la ANP les dota de legitimidad democrática e, incluso, permite su pervivencia (Legrain, 1996).

Arafat tuvo en cuenta la realidad social palestina a la hora de gobernar. De ello dio cuenta su gestión del poder y que parte de su primer gabinete estuviera compuesto por notables. Los más destacados de ese gabinete fueron: Frei Abou Middin, cuadro de Fatah y miembro de un clan beduino procedente de Bersheeba, a quien se adjudicó el Ministerio de Justicia; Zakaria al-Agha, ministro de Vivienda procedente de Jan Younis; Elias Freij, cristiano ortodoxo miembro de una de las familias más importantes de Belén; y el que fuera ministro de las Colectividades Locales además de negociador palestino, Saeb Erekat, procedente de Jericó. En ese primer gabinete, compuesto por 20 personalidades, once afiliados a Fatah, seis independientes, dos de la Unión Democrática Palestina (Fida)¹³ y uno del Frente de Liberación de Palestina (FLP);¹⁴ nueve responsables procedían de la diáspora (Picadou, 2003: 340). Cuatro de ellos, Yasser Arafat, Nabil Chat, Ahmed Qureia y Mohammed Said Nakhibi,¹⁵ ocuparon los cargos clave de la nueva administración.

La estructura burocrática en que se fue convirtiendo la ANP se caracterizó por ser una institución que ha pervivido gracias al apoyo financiero de los donantes internacionales. En este sentido, una de las principales particularidades de la economía de renta se ha manifestado en la autoridad de autonomía: la existencia de un sector público que recibe recursos financieros del exterior y los utiliza para adquirir poder político y económico (Naquib, 2000: 599). La importancia de los recursos financieros venidos del exterior habla por sí sola. En 2004, un palestino recibía, de media, 505 dólares al año en concepto de ayuda internacional mientras que un africano contaba con 27 dólares.

La pérdida del apoyo popular experimentada por Fatah se explica en parte por el uso que se ha dado a estos recursos económicos. La gestión de Arafat hizo de la ANP «una organización fallida y corrupta» a los ojos de gran parte de la población palestina (Smith, 2007: 531). En 2005, Transparency International situó a la ANP entre los cincuenta estados más corruptos del mundo.¹⁶ Para ejemplificar la corrupción de la ANP,

cabe recordar el caso que implicó a Ahmed Qureia, el último primer ministro de Fatah. Su empresa de producción de hormigón, «Al-Quds», vendió partidas de ese material a empresas israelíes para la realización de la «Barrera de Seguridad» (Forgione, 2004: 9).

La progresiva pérdida de apoyo y legitimidad *vis-à-vis* de la población palestina que ha venido experimentando Fatah no solo se justifica por su práctica política. De hecho, Hamas ha fundamentado su crítica a Fatah en la «traición» de los intereses nacionales del pueblo palestino (Roy, 2000: 79). Esa traición es la renuncia de la lucha armada de Fatah que dio acceso a la OLP a una negociación sobre la creación de un Estado palestino. La renuncia es coherente con el objetivo de la ideología nacionalista palestina que aspira a un Estado y no contradice el cómo establecerlo: llevando la iniciativa en la acción y haciendo hincapié en la identidad nacional (Baumgarten, 2005: 44). El abandono de las armas presupone un cambio ideológico que se puede plantear en forma de recorrido: de la liberación de toda Palestina a través del enfrentamiento armado a la independencia de un Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza a través de la diplomacia (Farsoun y Zacharia, 1997: 191). Este recorrido se realizó en las dos décadas anteriores a los acuerdos de Oslo gracias a los debates desarrollados en el seno de la OLP. Sin embargo, el consenso en la estrategia de la OLP no se correspondió con los pasos de Arafat hacia la negociación a principios de los años noventa. Para los islamistas y la oposición a Fatah en el seno de la OLP el *rais* concedió demasiado firmando esos acuerdos (Hroub, 2003: 131). Es más, la firma de los acuerdos de Oslo supuso que la OLP se transformara en una organización incapaz de hacer política e indistinguible de la administración palestina de los territorios autónomos (Farsoun y Zacharia, 1997: 199).

El estallido de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, marca un proceso de diferenciación dentro de Fatah en el que se observa quienes se mantienen fieles a la estrategia de la negociación y quienes, renunciando de esta, prefieren retomar el camino de la lucha armada. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, se identifica tanto con la primera de las opciones estratégicas que esta es una de sus señas de identidad política. Frente a esta posición se encuentra la de quienes optaron por la militarización del segundo levantamiento palestino. Es el caso de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una organización formada por diferentes grupos armados que surgió como un acto de rebeldía de cuadros y militantes de Fatah y miembros de los servicios de seguridad palestinos.

Marwan Barguzi es una de las figuras prominentes de Fatah desde el comienzo de la primera Intifada.¹⁷ Él se ha caracterizado por defender una estrategia diferente a las dos anteriores. Barguzi plantea una «legítima resistencia» que se opone a los ataques en el interior del territorio de Israel pero contempla los ataques contra las tropas israelíes que se encuentran en territorio palestino. Este posicionamiento, sensible a la exigencia de la población de liberar el territorio, ha incrementado su popularidad. Esta también se ha alimentado de su situación como condenado a cinco cadenas perpetuas en Israel. De hecho, los hay que lo comparan con Nelson Mandela. En Barguzi también se ha visto una figura capaz de renovar a Fatah. Sin embargo, él y sus seguidores han formado parte de una corriente crítica con la dirección del partido presidencial que todavía tiene pendiente prosperar.

Hamás

El verdadero fracaso de la OLP y de Fatah es el no haber podido crear un Estado pese a las concesiones realizadas (Gresh y Vidal, 2003: 418). Este hecho es crucial para comprender el alza de una ideología como la de Hamás, que no encontrándose en el paraguas de la OLP, ha tomado el relevo de las reivindicaciones nacionalistas. El énfasis en la resistencia frente a la ocupación (Baumgarten, 2005: 44) es uno de los elementos clave de la ideología de Hamás. A través de su brazo armado, las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, Hamás ha llegado a protagonizar escaladas de violencia mediatizadas a nivel internacional como «crímenes contra la humanidad» (HRW, 2002: 45). Sea como fuere, Hamás ha maximizado el uso de la violencia en el marco de la segunda Intifada, al menos, hasta la firma del «período de calma» —*tadhiya*— al que se comprometió en 2005. A partir de este momento, Hamás se ha caracterizado por desarrollar una mayor actividad política, defendiendo la democracia y denunciando las prácticas corruptas de la ANP. Esta estrategia ha sido clave para su éxito electoral (Izquierdo, 2005b: 28).

La entrada de Hamás en la escena política palestina es anterior a sus recientes éxitos electorales. La Hermandad Musulmana, la organización predecesora de Hamás, ya había competido con las otras fuerzas nacionalistas en elecciones estudiantiles. Aun así, Hamás, y no su ascendiente, puso fin al monopolio ideológico y político de la OLP. Gracias a

Hamas se ha confirmado la generación de un nuevo espacio de reclutamiento de élites. La victoria de Hamas en las elecciones de 2006 es la más importante plasmación institucional de estas nuevas élites, un fenómeno antecedido por los resultados de las elecciones municipales de 2005.

Hamas ha aprovechado políticamente la disminución del apoyo a Fatah gracias a su pragmatismo. En las elecciones municipales de 2005, Hamas se alió con el FPLP para poder auparse en el poder local. Gracias a esas alianzas, Hamas se hizo con el control de las ciudades de Belén y Beit Furik. Hassan Youssef, cuadro de Hamas en Cisjordania, explicó así esta decisión: «queremos buscar puntos comunes con todas las fuerzas políticas» (Court y Den Hond, 2006). El pragmatismo de Hamas también se ha manifestado al gobernar en las 28 localidades que controla desde 2005 de manera «casi tan aburrida» como sus predecesores (ICG, 2006: 10). Capaz de alcanzar el poder en los Territorios Ocupados sin que ello signifique la instauración de un «Hamastán», la práctica política de Hamas se ha visto minada por el boicot que los donantes internacionales impusieron al gobierno de la ANP tras su victoria en las elecciones legislativas.

Hamas se ha transformado en una organización integrante del círculo de élites de los Territorios Ocupados a partir de la asistencia social. Con su actividad asistencial, la Hermandad Musulmana de Palestina pretendía reorientar a la población hacia el islam. Gracias a la creación de infraestructuras como el Centro Islámico de Gaza (fundado en 1973 por el jeque Ahmed Yassin) la Hermandad Musulmana arraigó en los Territorios Ocupados pese a que su presencia en Palestina data de 1946,¹⁸ año en que abrió su primera oficina en Jerusalén de la mano del jeque Jarrar (Hroub, 2000: 15). El Centro Islámico de Gaza se estableció como una mezquita, pero también regentaba una clínica, un club deportivo, una guardería, un espacio para la celebración de festividades islámicas, un centro para las actividades de la mujer y un comité de *zakat*.¹⁹ Desde su surgimiento, Hamas contó con esta y otras infraestructuras además de las que fue creando gracias a una financiación basada en donaciones de organizaciones benéficas distribuidas en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.²⁰

La relación que guardan Hamas y Fatah con el islam es distinta. De hecho, la principal diferencia entre Hamas y Fatah se observa en que la liberación de Palestina no está en lo más profundo de la identidad del pri-

mero de los movimientos. Lo que está en el centro de Hamas es el islam, un recurso disponible aun cuando Palestina permanece ocupada (Le-grain, 2002: 46). Hamas nació como una organización desprendida de la Hermandad Musulmana en busca de un campo de acción político y armado en el que hacer frente a la ocupación israelí sin que ello significase el fin de las actividades en el ámbito social. La creación de Hamas respondió a la voluntad de los líderes de la Hermandad Musulmana de estar presentes en la primera línea del levantamiento de 1987. Así, el primer comunicado de Hamas fue emitido apenas una semana después del accidente de tráfico que originó los enfrentamientos de la primera Intifada. Ibrahim Al Yazuri, miembro fundador de Hamas, reconoce que en aquellos días había «fuertes presiones de nuestros hermanos que urgían una revuelta contra la ocupación» (Chehab, 2007: 56). Es más, la fundación de Hamas tuvo lugar en un contexto marcado por las acciones de la Yihad Islámica.²¹ Resultante de una escisión en el seno de la Hermandad Musulmana a principios en los años ochenta, la Yihad Islámica había protagonizado acciones contra Israel y ciudadanos israelíes a los que la opinión pública palestina prestó atención por su espectacularidad.²² Ante el perfil alto que presentaba la organización en la víspera de la primera Intifada, el comité general de la Hermandad Musulmana en Gaza se reunió a principios de diciembre de 1987 para dar a conocer un nuevo movimiento: Hamas.

Familias Masri y Shoman²³

La familia Masri proviene de la ciudad cisjordana de Nablús. Aún en 2005 y pese a la grave crisis que vive la economía palestina desde el comienzo de la segunda Intifada, *The Financial Times* constataba en esta ciudad la existencia «de una clase de palestinos, muchos de ellos educados en el extranjero, que continúa invirtiendo y expresando optimismo sobre su futuro económico» (Devi, 2005). A la cabeza de esa clase social se encuentra la familia Masri, cuya fortuna data de la Edad Media (Inbari, 1996). Sin embargo, el reciente éxito económico que ha registrado esta familia se asocia a la venta de materiales de equipo de uno de sus miembros, Sabih Masri, al ejército estadounidense durante la primera guerra del Golfo. Sabih Masri y su primo, Munib Masri, son los mayores inversores en los Territorios Ocupados. El segundo dirige la Compañía

de Desarrollo e Inversión Palestina (PADICO). Formado a finales de 1993 con la implicación de Ahmed Qureia, PADICO es el conglomerado empresarial que más puestos de trabajo mantiene en los Territorios Ocupados después de la ANP al dar trabajo a unas 35.000 personas. Por su parte, Sabih Masri está al frente de la Corporación Palestina de Telecomunicaciones (PALTEL).

PADICO ha gozado de un trato de favor en la adjudicación de obras públicas y en la privatización de servicios que han realizado las instituciones de autonomía. Pese a las denuncias que ha recibido el *modus operandi* de la ANP por parte de otras personalidades de la economía palestina y los recelos que han podido despertar los dirigentes de PADICO y PALTEL por ser provenientes del exterior de los Territorios Ocupados,²⁴ el conglomerado está omnipresente en la economía palestina. Los Masri dieron un buen recibimiento a los acuerdos de Oslo. Su firma significó una oportunidad económica que, a la luz de la pervivencia de PADICO como primer actor privado en los Territorios Ocupados, ha resultado provechosa.

La familia Shoman también es importante desde el punto de vista económico. Sus orígenes se encuentran en Beit Hanina, localidad cercana a Jerusalén. Los Shoman están adscritos a las fortunas palestinas desde el éxito económico de Abdul Hameed Shoman en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Gracias a él, en 1930, la familia fundó el Banco Árabe en Jerusalén. Hoy es una de las principales instituciones bancarias de Oriente Medio. Su sede central se encuentra en Amán desde que tomara las riendas de la empresa Abdel Majid Shoman, hijo de Abdul Hameed. A pesar de las dudas de los Shoman sobre la capacidad de Arafat de crear una democracia palestina con una atmósfera favorable para las actividades económicas, el Banco Árabe reabrió desde 1994 las ocho sucursales que la institución financiera poseía antes de 1967 en Cisjordania y la Franja de Gaza. Luego abrió nuevas sucursales en las zonas autónomas de manera que, con el paso de los años, los Shoman han sido considerados por la ANP como unos «servidores de la economía nacional» (BBC, 2005). Es más, de Abdel Majid se ha hablado como un «Rothschild reclutado» por Arafat pues el Banco Árabe es el depositario del Tesoro de la ANP (Orme Jr., 2000). Tras la muerte de Abdel Majid, en 2005, la dirección del banco recayó en manos de Adel Hamed Shoman, representante de la tercera generación de la familia Shoman al frente del Banco Árabe y, por consiguiente, de la primera fortuna palestina (Malik, 2008).

Es necesario recordar la precariedad del control de los recursos económicos que mantienen estos y otros actores de la economía palestina debido a los condicionantes que impone la ocupación. El sector privado israelí controla la mayoría de los recursos económicos palestinos, desde el abastecimiento y suministro de electricidad, agua y combustible hasta el comercio de alimentos. En los momentos de mayor conflictividad, cuando se endurecen los controles sobre los Territorios Ocupados y se complica la ya de por sí difícil movilidad y acceso de personas y mercancías, quienes sufren mayores pérdidas son las empresas israelíes, que se ven obligadas a anular los suministros a los territorios palestinos. Evidentemente, esta situación también perjudica a las élites palestinas que negocian con las élites israelíes.

Pero no es la violencia del conflicto la responsable de la crisis económica que viven los palestinos. La violencia es, según Fadle M. Naquib, «una manifestación del descontento frente a la degradación provocada por la política israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza» (Naquib, 2000: 599). Así, parece difícil dudar de que la política de reclusión y separación impuesta a los Territorios Ocupados desde marzo de 1993 sea el principal motivo de la crisis económica palestina. Desde el comienzo de la segunda Intifada y, más aún, tras la victoria de Hamas en las elecciones de 2006, esta política se ha endurecido hasta el punto de que, actualmente, la economía en la Franja de Gaza corre el riesgo de sufrir un colapso sin precedentes.

La ocupación ha implicado que Israel use los territorios palestinos como yacimiento de mano de obra. Más de 120.000 palestinos —un tercio de la fuerza de trabajo— trabajaban en Israel en 1986. Esa cifra, desde principios de los años noventa y, especialmente, tras la instauración de la ANP se ha visto reducida. Entre 1992 y 1995, la reducción del número de palestinos autorizados a trabajar en Israel pasó de 120.000 a 30.000. Tras la segunda Intifada, la desconexión de Israel de la mano de obra palestina se dejaba notar en el mercado laboral palestino desde el primer año del levantamiento. En 2001, la mitad de la población activa palestina no tenía trabajo. En junio de 2004, el gobierno israelí aseguró que a partir de 2008 no habría palestinos trabajando en su territorio. Pero este extremo no se confirma. En 2006, entre 55.000 y 64.000 ciudadanos de Cisjordania trabajaban en Israel.

Con la firma y aplicación de los acuerdos de Oslo, las relaciones de dependencia a las que está sujeta la economía palestina respecto de la eco-

nomía israelí se han mantenido aunque se han manifestado de forma diferente. De ahí que Naquib concluya: «La noción de *separación política e integración económica*, popularizada tras la firma de la Declaración de Principios, en 1993, ha probado ser una contradicción sinónimo de *separación política nominal y control económico real*» (Naquib, 2000: 613).

Por consiguiente, a pesar de que los principales actores de la economía palestina controlan el recurso «capital», dicho control está determinado por los vaivenes del conflicto y las constricciones que imponen las élites israelíes.

Élites secundarias

En la época del Mandato Británico, las élites tradicionales se identificaron con un nacionalismo embrionario panarabista —cuyo origen data de los últimos años del Imperio Otomano— y formaron alianzas para preservar su liderazgo. Entre 1948 y 1967 serían en su mayoría cooptadas por Jordania, y luego se adscribieron mayoritariamente a la OLP. Con el establecimiento de la ANP, se produjeron las condiciones para que estas élites tradicionales y los capitales palestinos expatriados vieran oportunidades de negocio y crearan organismos para aprovecharlas. Es el caso de la Unión Industrial Textil, la Unión Industrial de la Alimentación y de asociaciones empresariales, como Paltrade (*Palestine Trade Center*), la Federación de Cámaras de Comercio e Industria o la Compañía de Inversión Árabe Palestina. Estas instituciones contribuyeron, junto a la ANP, al desarrollo económico palestino.

Este desarrollo se ha venido a menos en los últimos años. Las constricciones económicas, en cuya aplicación han llegado a participar los gobiernos y organizaciones internacionales que tradicionalmente han financiado la ANP, han supuesto que, en 2007, el 80% de la población de la Franja de Gaza y el 46% de la población cisjordana viva bajo el nivel de la pobreza.²⁵ Los actores que socorren a la población son, en buena medida, las ONG. Numerosas en todos los ámbitos —salud, agricultura, ganadería, educación, cultura, activismo de género, defensa de los derechos humanos, pacifismo etc.— gran parte de ellas están afiliadas a la red de ONG que desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina junto a Naciones Unidas. Esta red está compuesta por unas 1.000 organizaciones que desarrollan actividades humanitarias en Cisjordania y en la

Franja de Gaza con el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.²⁶

Las ONG han sufrido una reciente e importante transformación. Tras el comienzo de la segunda Intifada, en lugar de *actores*, señalan Sari Hanafi y Linda Tabari, son *espectadores* (Hanafi y Tabari, 2002: 17). Aunque durante el primer levantamiento palestino, entre diciembre de 1987 y octubre de 1991, las ONG palestinas lograron formar parte de la movilización popular, ahora ya no ocupan un papel de conexión entre diferentes sectores de la sociedad de manera que puedan articularlos en virtud de las ideas vehiculadas en la primera Intifada.

Desde la aplicación de los acuerdos de Oslo, las fuentes de ayuda a las ONG pasaron a ser principalmente europeas y norteamericanas, lo que implicó la entrada de nuevos criterios de financiación y de nuevas condiciones de distribución de las ayudas. Esto ha hecho del sector humanitario una «industria de la ayuda» internacional (Hanafi y Tabari, 2002: 20). Así, quienes fueron durante los años setenta y ochenta activistas de ONG ahora componen una nueva «élite globalizada» que se caracteriza por su alineamiento con los paradigmas internacionales de desarrollo, su profesionalidad, su no vinculación con el movimiento nacional y su creencia en el proceso de paz con Israel.

En el centro de la movilización: Hamas y Fatah

Los resultados de las elecciones legislativas de enero de 2006 manifiestan la actual capacidad de movilización de los principales movimientos palestinos. De los 132 escaños en juego, 74 cayeron en manos de los candidatos miembros de Hamas, mientras que los de Fatah se hicieron con 45. Ambos movimientos presentan las listas de candidatos que más votos recibieron.²⁷ Las dos listas sumaron alrededor del 80% de los sufragios. La preponderancia movilizadora de Fatah y Hamas también se observa si se presta atención a la distancia que les separa en materia de escaños de las otras formaciones que obtuvieron representación en el CLP. El FPLP se hizo con tres escaños mientras que la alianza entre el FDLP, Partido del Pueblo Palestino (PPP)²⁸ y Fida obtuvo dos representantes.²⁹ Los centristas de la «Tercera Vía»³⁰ y «Palestina Independiente»³¹ lograron, respectivamente, dos escaños.³²

La tarea de autocrítica que realizó Marwan Barguzi durante los meses previos a los comicios de 2006 al frente de «El Futuro», la organización que formó disgregándose de Fatah, ha podido contribuir a reforzar el discurso electoral de Hamas sobre la corrupción del partido presidencial. En todo caso, la capacidad movilizadora de Barguzi no encontró una respuesta unánime en el aparato de Fatah. Acusado de querer dividir al partido presidencial, Barguzi acabó integrando la campaña electoral de Fatah, partido con el que se identifica pese a sus críticas.³³ Esta operación política es la segunda de este tipo que protagoniza Barguzi. De hecho, se mostró como posible candidato a las elecciones presidenciales palestinas de 2005 en las que se impuso Mahmoud Abbas. Sin embargo, acabó por abandonar su carrera electoral en favor de la «unidad palestina», expresión que hace alusión, en realidad, a la unidad de Fatah.

Tras el fracaso electoral de Fatah en los comicios de 2006 se observa la ausencia de resultados del proceso de paz. Este, en ninguna de sus formas, ha respondido a la voluntad de emancipación de la población palestina. Así, los esfuerzos negociadores y los acuerdos firmados con Israel no han satisfecho las reivindicaciones nacionales. Teniendo este hecho en cuenta, podemos comprender el alza de los movimientos palestinos que se reivindican del islam. Según Pamela Ann Smith: «Durante los períodos en los que el liderazgo del movimiento nacionalista o de los partidos árabes se ha desacreditado, los movimientos islamistas reformadores han visto aumentar de manera considerable el apoyo con el que cuentan» (Ann Smith, 1984:188).

Esta circunstancia también puede llegar a perjudicar a Hamas dado el apoyo de la población que están ganando otros grupos eminentemente religiosos. Desde que Hamas se hiciera con el poder por la fuerza en la Franja de Gaza en junio de 2007, las sectas religiosas parecen haber ganado adeptos, si uno cree las escasas informaciones que traen consigo los pocos profesionales de la información que acuden a ese territorio palestino (Issacharoff, 2008). Otras organizaciones islamistas más estructuradas que estas sectas, como puede ser la Yihad Islámica, también son capaces de movilizar a la población.

Si damos la espalda a manifestaciones, por ahora minoritarias, y observamos los indicadores de opinión pública, se constata la adhesión mayoritaria de los palestinos a Fatah o a Hamas. Según Jamil Hilal, entre 1996 y 2006, el apoyo de la opinión pública a Hamas no ha dejado de crecer, mientras que el apoyo a Fatah se ha visto reducido (Hilal, 2006:

6). La justificación que hace Hilal de este fenómeno coincide con lo expuesto por Smith: «la disminución del apoyo popular a Fatah y el incremento del apoyo a Hamas puede ser atribuido en gran medida al *impasse* político frente al proyecto nacional palestino y la creciente desafección respecto de la ANP» (Hilal, 2006: 8). La hostilidad que ha despertado Fatah, asegura Hilal, también se debe a la corrupción que ha minado la institución de autonomía, un fenómeno que Hamas ha explotado con fines electoralistas (Denoeux, 2005: 124).

En el siguiente apartado, la observación de las relaciones entre las élites nos permitirá aclarar este fenómeno y dar cuenta de que un Fatah debilitado y un Hamas en auge intentarían, en vano, ser las fuerzas hegemónicas de un sistema político que algunos han calificado de «bipartidista».

Relaciones entre élites

Las demandas de liberar la tierra y de mejorar el nivel de vida en los Territorios Ocupados han llevado a las élites a establecer alianzas entre sí que, probablemente, no serían efectivas en otras circunstancias. Hasta Hamas y Fatah han llegado a protagonizar este tipo de alianzas. La materializada con el acuerdo de La Meca, firmado en febrero de 2007, pudo suponer el establecimiento de las bases para un nuevo sistema de gobierno. Ese texto preveía la integración de Hamas en la OLP y la inclusión de la Fuerza Ejecutiva³⁴ en la estructura de la ANP (Agha y Malley, 2007). Sin embargo, el acuerdo no aportó estabilidad al gobierno. En consecuencia, no se ha podido apreciar que Hamas y Fatah puedan compartir el poder en una cohabitación en la que Gobierno y Presidencia estén controlados por movimientos distintos. Así, la lógica de alianzas entre élites ha saltado por los aires en los Territorios Ocupados y la lucha por el poder político y el control de la ANP ha derivado en el enfrentamiento. Una manifestación clara de este enfrentamiento es la toma del poder en la Franja de Gaza realizada por Hamas.

Lo ocurrido en la Franja Gaza no debe llevar a equívocos. En realidad, el aumento de la coacción ha sido la estrategia de Fatah. Para perpetuarse en su posición al frente de la ANP, Fatah ha ido aumentando el tamaño de las fuerzas de seguridad desde la creación de la institución de

autonomía. Las fuerzas de seguridad se componen en la actualidad de unas 70.000 personas. El número es tan importante como que representa prácticamente la mitad de los empleados de la autoridad de autonomía.³⁵ Esta proporción también se explica gracias a la voluntad de la ANP de responder a las exigencias «antiterroristas» israelíes e internacionales.

Tras anunciarse la creación de la Fuerza Ejecutiva, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, declaró ilegal esa unidad y aumentó la coacción y el inmovilismo, llevando al borde de la guerra civil al pueblo palestino. La lógica del presidente se justifica por las presiones de las élites externas, que no reconocen a los actores islamistas y apoyan a quienes han controlado tradicionalmente la institución-recurso. Se pretende así reforzar a Fatah e impedir que Hamas se haga con el control del Gobierno de la ANP. Esta es la contribución de las élites externas para que el conflicto inter-palestino se siga caracterizando por «la competición y la tensión» (Hroub, 2000: 115).

La virulencia del conflicto inter-palestino se explica gracias a la represión israelí. En marzo de 2002, según el que fuera primer ministro israelí, Ariel Sharon, Yasser Arafat estaba al frente de una «coalición terrorista»³⁶ a la que Israel declaró la guerra. La ANP fue la primera en sufrir las consecuencias de la versión israelí de la «guerra contra el terrorismo» de Estados Unidos. Los efectos de la ofensiva, que implicó ataques contra los edificios oficiales de la ANP,³⁷ terminaron por reducir aún más la capacidad de gobierno de la autoridad de autonomía. Por tanto, Fatah no pudo controlar a su sector decidido a responder militarmente a Israel. De ahí el surgimiento de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa o los Comités de Resistencia Popular.³⁸ La situación de precariedad que se instaló en los Territorios Ocupados tras el comienzo de la segunda Intifada anticipó parte de las consecuencias de la muerte de Arafat en noviembre de 2004. Con su desaparición se agotó un sistema político en el que el *rais* pudo controlar a los actores palestinos. Según Legrain, Arafat ha sido «el único que supo» controlar los «localismos», un hecho cuya relevancia reside en que «el localismo», que se identifica con «los señores de la guerra», constituye «la principal fuente de movilización» (Legrain, 2002: 47). Estas apreciaciones explican cómo sin Arafat ha podido reinar el caos. Sin él, ya no hay líder capaz de contener a los clanes y grupos armados en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Otras figuras palestinas no vinculadas a las artes de la guerra también han visto crecer la relevancia de su acción. Es el caso de Munib

Masri. La buena relación que ha marcado la alianza de los Masri con la ANP no es ajena a la cercanía con la que la familia se ha relacionado con la autoridad palestina. Así, Maher Masri, también primo de Sabih y Munib, es la personalidad que más años ha estado al frente del Ministerio de Economía de la ANP, por lo que, junto a Muhammad Rashid, el que fuera consejero económico de Arafat, es uno de los principales responsables de las decisiones económicas que ha tomado la autoridad de autonomía (Lakind y Carmon, 1999). Otro Masri, pariente lejano de Munib, Hani Masri, ha sido el hombre de confianza de Arafat en Washington. Como dirigente de PADICO, Munib ha cultivado un perfil de filántropo además de hombre capaz de acceder a la dirección de la ANP. De hecho, se le llegó a ver como posible primer ministro de un gobierno de unión formado por Hamas y Fatah. Sin embargo, tras haberse demostrado que la alianza entre los dos movimientos es casi imposible, en noviembre de 2007, Munib Masri creó el Foro Palestino, una organización política centrista. La incursión en política de quien representa la quinta fortuna palestina puede interpretarse como el deseo de rentabilizar la voluntad de reconciliación existente entre la amplia mayoría de los palestinos (Prusher, 2008). En todo caso, su aparición en la vida política responde a una relación lineal nueva surgida entre la población y las élites palestinas. En esa relación lineal, la población solicita la reconciliación entre Hamas y Fatah: la promesa del Foro Palestino.

Se puede hacer un paralelismo entre la buena relación de los Masri con los líderes de Fatah y la ANP y las relaciones que Hamas ha mantenido con otras figuras de la economía palestina. Mazen Sinokrot, hombre de negocios de la ciudad de Ramala y presidente del Sinokrot Global Group, es un reconocido islamista sin afiliación política. Sin embargo, aceptó su nombramiento como ministro de Economía en marzo de 2006, cargo que ejerció hasta la formación del gobierno de unidad nacional presentado un año después de acceder a esa cartera.

Hamas y las familias de notables, ya sean de Cisjordania o de la Franja de Gaza, comparten el estar a favor del uso del derecho consuetudinario, los códigos sociales conservadores, además de oponerse a la tendencia de la ANP a monopolizar la violencia. Aun así, desde que Hamas se hizo con el poder en la Franja de Gaza, este movimiento actúa con prudencia *vis-à-vis* de estas familias, pues también son numerosas las que son fieles a Fatah (ICR, 2006). «Nuestra relación es de comprensión mutua», resume el que fuera ministro del Interior del gobierno de Hamas

y persona al cargo de la misma cartera en el ejecutivo de la Franja de Gaza, Siad Siyam (MNA, 2008).

Si abandonamos la perspectiva clásica y nos concentramos en la relación de las élites palestinas con las del exterior al sistema de poder palestino, constatamos que tanto Fatah como Hamas están sometidas a las constricciones que las élites externas pueden aplicar sobre los Territorios Ocupados. La dependencia de los recursos políticos y económicos venidos del exterior es una característica que comparten la ANP y la OLP. Se puede apuntar que la primera continúa aplicando un sistema institucionalizado previamente por la segunda y cuya principal diferencia reside en la identidad de los donantes.

La OLP encontró sus fuentes de financiación en los países árabes, en los impuestos que pagaban los palestinos que se encontraban en los estados de la península arábiga cuyos gobiernos estaban representados en la OLP, en las contribuciones privadas de palestinos exiliados y en gestos solidarios con la causa palestina (Farsoun y Zacharia, 1997: 188). Pero el posicionamiento de Arafat a favor de Sadam Hussein en la guerra del Golfo de 1991 supuso el fin de las ayudas de las monarquías exportadoras de petróleo. Los dirigentes de la OLP hubiesen deseado que Sadam Hussein solucionase la cuestión palestina pero ese fue un deseo que se convirtió en tragedia porque, como consecuencia de ese posicionamiento, perdieron el apoyo de los países del Golfo y quedaron aislados internacionalmente (Gresh y Vidal, 2003: 415). La consecuencia fue el ahogo en la bancarrota (Farsoun y Zacharia, 1997: 208).

La dependencia de la ANP de las élites externas se ha puesto de manifiesto una vez más tras la decisión de los donantes internacionales de no apoyar financieramente a los gobiernos que contengan representantes de Hamas. Al mismo tiempo en que Hamas accedió al gobierno de la ANP, el nuevo gabinete quedó incapacitado dada la negativa de los donantes internacionales a seguir inyectando recursos financieros en las arcas gubernamentales tal y como venían haciendo. De hecho, el Cuarteto por Oriente Medio —la suma de las Naciones Unidas, Estados Unidos, la UE y Rusia— condicionó su apoyo al gobierno islamista. Este no contaría con los fondos de ayuda presupuestaria que le venían siendo concedidos a menos que Hamas renunciara a la violencia y reconociera a Israel y los acuerdos firmados entre palestinos e israelíes. Hamas no aceptó estas condiciones porque ello hubiese significado «traicionarse» como lo hizo otrora Fatah. La decisión implicó el cese de la ayuda financiera prove-

niente de los representados en el Cuarteto, de la Comisión Europea, de los 25 estados miembros de la UE, Noruega y Japón (Schmid, 2006: 499). Por su parte, Israel aplicó los mismos condicionantes a Hamas y dejó de transferir los impuestos que recaba y que debe hacer llegar a las arcas palestinas tal y como establece el Protocolo de París.³⁹

La formación del fracasado Gobierno de unidad nacional no aligeró el boicót internacional. Solo en junio de 2007, tras la vuelta de Fatah a la dirección de todo el ejecutivo de una ANP cuya jurisdicción se reduce a lo poco que controla de Cisjordania, se han dado las circunstancias para que el gobierno palestino cuente con el apoyo político y económico del exterior. Esta situación refleja, por un lado, la fuerte dependencia de la élite palestina respecto de las élites externas y, por otro, cómo las relaciones que establece una parte de las élites palestinas con las élites externas son un recurso clave.

Un poder bipolarizado y dependiente

Desde 1948, la sociedad palestina ha sido fracturada y fragmentada. En 2005, de los 10,1 millones de palestinos, 7,3 millones vivían fuera de Cisjordania y de la Franja de Gaza, donde la suma de la población alcanzaba los 3,8 millones de personas (Farsoun y Aruri, 2006: 110 y 111).⁴⁰ En Israel, los palestinos con pasaporte israelí superaban el millón de personas. Los palestinos refugiados en Jordania, Siria, y el Líbano⁴¹ eran casi 4 millones mientras que más de un millón vivían dispersos por todo el mundo. Estas cifras dan cuenta de una *desterritorialización* de la población palestina que comenzó incluso antes de *al-Nakba* pero que no impidió la construcción de una identidad nacional.

Con la firma de los acuerdos de Oslo, tres procesos interconectados comenzaron a desarrollarse: el proceso de paz, el proceso de reconstrucción nacional palestino y el proceso de construcción de una democracia. Estos procesos, que debieron implementarse de manera complementaria, fueron implementados de forma secuencial, priorizando un proceso de paz que, con el tiempo, ha demostrado sus límites y su incapacidad de generar resultados. Oficialmente, el objetivo común de esos tres procesos era la plasmación de un Estado pero todos han estado supeditados al cumplimiento de objetivos a corto plazo como puede ser el fin de la vio-

lencia. La construcción de las instituciones de autonomía palestina y la creación de los aparatos de seguridad desembocaron en el autoritarismo de la ANP. Pese a la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, se avanzó en la reconstrucción nacional palestina y en la lucha contra el «terrorismo», demostrando la buena voluntad de los palestinos en el proceso de paz.

Sin embargo, los acuerdos de Oslo han desembocado en una realidad que podría ser la que estuviera descrita en una —para las élites israelíes— «versión mejorada» de esos acuerdos. Hablamos de «versión mejorada» porque, en virtud de la seguridad de los ciudadanos israelíes, la ocupación persiste del mismo modo que la presencia de puntos de control militar en Cisjordania y la construcción del «Muro del Apartheid». Esta situación condiciona fuertemente a la estructura de poder palestina.

Los imperativos de las élites externas —israelíes, estadounidenses, europeas y las del resto de donantes internacionales— han condicionado la estructura de poder palestina, incidiendo sobre las élites de los Territorios Ocupados y los recursos que controlan. Como los principales recursos de poder no se encuentran en manos palestinas, sino israelíes, son las élites de Israel las que tienen mayor control sobre el sistema político palestino.

El resto de élites externas también ocupa una posición de control sobre las élites palestinas. La relevancia de la capacidad de control de los actores internacionales sobre las élites palestinas se manifiesta de manera particularmente clara al mantener financiera y políticamente la ANP y a Fatah. Así, las élites palestinas descritas a lo largo de este trabajo deben ser catalogadas como dependientes del control de las élites externas. Por ello, uno de los principales recursos con que cuentan las élites palestinas es su poder de alianza con las élites externas.

Durante gran parte de su historia, desde 1964 hasta la creación de la autoridad de autonomía, la estructura del sistema de poder palestino contó con una OLP que monopolizó la arena política e ideológica y ejerció un papel hegemónico. En los albores de la década de los años noventa, la estructura del sistema de poder palestino se configuró, en función de las alianzas entre las élites externas y las élites palestinas, como un sistema político hegemónico que dio nacimiento a la ANP. La OLP fue el catalizador de todas las demandas palestinas y el aglutinante de la gran mayoría de las fuerzas políticas e ideológicas. Las élites asociadas a esta organización se beneficiaron de los recursos de poder que provienen de

las élites externas y se instalaron en la cúspide del sistema de poder político palestino. Estas élites palestinas han manejado el recurso máspreciado de los existentes en los Territorios Ocupados: la ANP.

Sin embargo, ante los escasos avances hacia la construcción del Estado y en materia socioeconómica, la ANP y Fatah perdieron legitimidad, situación que se agudizó al estallar la segunda Intifada. En el marco de este segundo levantamiento, ha tenido lugar la fractura de la estructura hegemónica de poder. Esta ruptura se debe a la irrupción política de Hamas. Las élites que se identifican con este movimiento basan su capacidad de acumulación de poder en el apoyo de la población y en la utilización del recurso islam. Su principal desventaja es el boicot internacional al que están sometidas. Una situación diametralmente opuesta a la de Fatah.

Tras la fractura del sistema hegemónico de la OLP que liderara Fatah, la estructura del poder está bipolarizada. La existencia de dos gobiernos, uno bajo control de Fatah y otro en manos de Hamas, respectivamente, en Cisjordania y la Franja de Gaza, es la expresión de la dividida estructura del sistema de poder palestino. La evolución más reciente del poder en Palestina sugiere que las relaciones lineales de poder, que siempre habían primado entre la población y las élites, han sido relegadas a un segundo plano dado que las relaciones circulares entre Hamas y Fatah condicionan la estabilidad en los Territorios Ocupados. Estas relaciones circulares están marcadas por la conflictividad. Tanto es así que la violencia protagonizada por las milicias de Fatah y Hamas, otros actores palestinos⁴² e Israel, ha hecho de 2006 un año en el que se han registrado tantas violaciones de los derechos humanos como no ocurría desde 1967 (PCHR, 2007: 7). La agresión israelí a la Franja de Gaza en enero de 2009 añadiría un nuevo hito en la violencia sufrida por la población palestina.

Mientras la hegemonía de Hamas en la Franja de Gaza parece haberse instalado tanto como la de Fatah en Cisjordania, en el lado israelí, tampoco reina una situación estable. La agresión israelí a la Franja de Gaza en enero de 2009 añadiría un nuevo hito en la violencia sufrida por la población palestina. Con Ariel Sharon como primer ministro, el gobierno israelí desarrolló su agenda de manera unilateral.⁴³ La ausencia de limitaciones en la aplicación de esa agenda tiene mucho que ver con que Estados Unidos, antes de los atentados del 11-S, practicara una política de «mínima implicación» en el conflicto palestino-israelí (Mansour, 2002: 12). Tras los atentados del World Trade Center, la búsqueda estadounidense de una resolución al conflicto israelo-palestino se realizó a

través de la introducción de cambios de regímenes políticos en lo que la Casa Blanca llamó «Gran Oriente Medio» en general y, en concreto, a través de las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Con Estados Unidos intentando llevar «la solución» a Jerusalén pasando antes por Kabul y Bagdad, se aplicaron los ejemplos más claros del unilateralismo israelí: la «Barrera de Seguridad» y el «Plan de Desconexión» de la Franja de Gaza.

Cuando Kadima, el partido creado por Sharon a finales de 2005 y cuyo liderazgo asumió Ehud Olmert desde principios de 2006 hasta septiembre de 2008, se impuso en las elecciones generales israelíes, se podía prever que esa política unilateral continuaría (Elon, 2006). Pero los resultados de aquellos comicios obligaron a realizar alianzas políticas poco estables. Además, la mala gestión de la última ofensiva contra el Líbano y los escándalos que ha sufrido la élite gobernante israelí han instalado al país, según Hussein Agha y Robert Malley, en una «indecisión fuera de lo común» (Agha y Malley, 2007).

En este contexto, Estados Unidos se esfuerza en acercar posiciones entre israelíes y palestinos. «Es la hora del establecimiento de un Estado palestino», dicen en la Casa Blanca (Waked, 2007). Sin embargo, la creación de un Estado palestino es un escenario irrealizable pese a que la Administración de Bush insistía en que la entidad estatal palestina sería una realidad antes de 2009.

Escenarios de futuro: ¿División sin vuelta atrás?

Pese a la celebración de la Conferencia de Annapolis a finales de 2007, en la que el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, relanzaron las negociaciones de paz, la idea de un Estado palestino producto de la negociación sigue sin resultar creíble. Mientras la ocupación continúe es poco factible que se avance en el proceso de paz porque el incesante incremento de las colonias israelíes en territorio palestino, la persistencia de los controles militares en Cisjordania y de la judaización de Jerusalén dificultan un acercamiento honesto entre las partes.

A estos factores cuyo origen radica en las élites israelíes, se suma la profunda división de las élites palestinas. Además, en Israel, los go-

biernos parecen predestinados a tener una vida corta y a estar sujetos a la voluntad de los pequeños partidos de la Knesset (Agha y Malley, 2007). Por consiguiente, resulta improbable que los líderes israelíes y palestinos puedan imponer un acuerdo a sus ciudadanos.

La inexistencia de una dinámica en Israel que conduzca hacia una salida negociada al conflicto agrava la situación en los Territorios Ocupados puesto que son las élites israelíes las que controlan en mayor medida los recursos y la estructura de poder palestina. La inexistencia de una auténtica política de paz israelí hacia los palestinos condena a estos últimos a la precariedad política, económica y social.

Los esfuerzos por crear un Estado palestino antes de 2009 no han tenido en cuenta el papel crucial de Hamas que advirtiera en 1998 el título de un artículo de Khalil Shikaki: «Peace now or Hamas later» (Shikaki, 1998). Ante el cada vez mayor peso de Hamas en la escena política palestina, las élites externas persisten en su apoyo a Fatah. Este apoyo podría traducirse en que el sistema político palestino vuelva a ser un sistema hegemónico si Fatah optimiza su relación privilegiada con las élites externas. Sin embargo, este modelo solo puede aplicarse a Cisjordania, habida cuenta de que la Franja de Gaza está controlada por Hamas. Esta situación podría convertirse en estructural si sigue sin reconocerse el papel de los islamistas en los Territorios Ocupados. Si la apuesta por Fatah de las élites externas no fructifica, la opinión según la cual la ANP debería disolverse para que Israel se haga cargo de una vez por todas de las responsabilidades que debe ejercer como potencia ocupante podría ganar un mayor número de adeptos. Esta eventualidad amenazaría la posición de Fatah en el sistema de poder palestino (Awkal, 2007).

La situación actual de los Territorios Ocupados podría derivar en un conflicto civil. Este escenario debe valorarse pues, según Ziad Abu-Amr, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de unidad nacional: «dos hermanos, si están encerrados en una cueva y no tienen nada para comer, pueden matarse por una migaja de pan». No obstante, aunque los años 2006 y 2007 hayan estado marcados por la violencia entre Fatah y Hamas, tanto el presidente Abbas como Ismael Haniyeh⁴⁴ han manifestado que la guerra civil es una «línea roja» imposible de cruzar.

La hipótesis de la perpetuación de la división palestina, tanto en el plano geográfico como político y económico, puede dar como resultado la continuidad de la estrategia inmovilista que protagonizan Fatah y Hamas. Pese a todo, en Hamas conocen las dificultades que afrontan en la

Franja de Gaza y los hay que aseguran que su administración en ese territorio es «temporal». Sea o no así, el sistema político palestino no tiende hacia una mayor democratización sino hacia la coacción. De ahí que las élites palestinas en el poder limiten los derechos y libertades tal y como dan cuenta las ONG pro derechos humanos (AIR, 2007).

Notas

1. Damos las gracias a Ferran Izquierdo por sus comentarios y seguimiento realizados durante la elaboración de este capítulo; a Eduard Soler por haber facilitado nuestra investigación e integración en el grupo de investigadores de la Fundación CIDOB. Agradecemos también a dicha institución la oportunidad que nos brinda de colaborar en el debate sobre cuestiones próximo-orientales. Por último, agradecemos a Jean-François Legrain las orientaciones que aportó al presente estudio durante el seminario «Poder y regímenes políticos en el mundo árabe actual» celebrado en Barcelona, en la Fundación CIDOB, los días 7 y 8 de abril de 2008.

2. «La catástrofe».

3. Tras el conflicto de 1948, unos 470.000 palestinos se refugiaron en Cisjordania, bajo control jordano, y en la Franja de Gaza, bajo control egipcio. Otros 350.000 hicieron lo propio en el Líbano, Siria y Jordania. Actualmente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), creada en 1949, procura servicios sanitarios, educativos, sociales y de emergencia a 4,4 millones de palestinos.

4. Si bien el plan israelí de desconexión de la Franja de Gaza del verano de 2005 supuso el fin de la presencia de unos 8.000 colonos en ese territorio, la colonización en Cisjordania no ha dejado de crecer. En enero de 2007, el Ministerio del Interior israelí daba cuenta de que la cifra de colonos en tierra palestina alcanzaba las 282.000 personas, una cifra que no tenía en cuenta las colonias de Jerusalén oriental, donde residían en 2005, 184.047 ciudadanos israelíes, según la Oficina Central de Estadística de Israel.

5. La «Barrera de Seguridad», según el Ministerio de Defensa Israelí, o «Muro del Apartheid», como se llama en los Territorios Ocupados, comenzó su construcción en 2002. El 4 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró «ilegal» la construcción de esta infraestructura de ocho metros de altura.

6. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Ocupados de Palestina: http://www.ochaopt.org/?module=displaysection§ion_id=96&static=0&format=html (Consultado 26/5/2008).

7. Educación, Cultura, Salud, Seguridad Social, Impuestos directos y Turismo.

8. A esas zonas se añaden, según fijó Oslo I, Jericó, en Cisjordania, y el 62% del territorio de la Franja de Gaza.

9. La división de Hebrón, en dos zonas, H-1, «zona A», y H-2, «zona B», resulta de la firma, en enero de 1997, del acuerdo que acabó con el repliegue israelí de esta ciudad.

10. Sobre Hamas, véase López Alonso (2007) y Travín (2007).

11. Embajador palestino en la UNESCO.

12. Con la expresión «élite tradicional» nos referimos al conjunto de familias de notables palestinos. Estas familias estuvieron amparadas y legitimadas desde la época del Imperio otomano por la sociedad local y por las autoridades centrales de Estambul. Hasta 1948, disfrutaron de una situación privilegiada por su relación con los lugares santos.

13. La Unión Democrática Palestina, fue creada por Yasser Abed Rabbu, tras escindirse del FDLP en 1993.

14. El ministro de Trabajo, Samir Goshe, fue el representante de esta formación refundada en 1977. Su fundación, en 1959, se realizó en torno al líder izquierdista Ahmed Jibril, cofundador del FPLP en 1967. Jibril se desvinculó del FPLP y fundó, en 1968, el Frente Popular por la Liberación de Palestina-Comando General (FPLP-GC).

15. Respectivamente, presidente y ministro del Interior, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Economía y ministro de Finanzas.

16. Corruption Perception Index 2005. *www.transparency.org* (Consulta de 26 de mayo de 2007).

17. Nació en 1959 y creció en Kafr Kbur, una población situada a proximidad de Ramala. Pertenece al clan palestino de los Barguzi, cuya otra figura emblemática en política es Mustafá Barguzi.

18. La Hermandad Musulmana, ya estaba presente en Palestina en 1943 a través de la Sociedad Makarem de Jerusalén.

19. «Limosna».

20. Las ayudas provenientes de los países del golfo Pérsico se han registrado hasta finales de los años noventa. Las ayudas provenientes de organizaciones caritativas basadas en Estados Unidos, Canadá, Japón y la UE fueron prohibidas cuando esos actores incluyeron a Hamas en sus listas de organizaciones terroristas. Fuentes diplomáticas citadas en la prensa israelí mencionan a Irán como un Estado que financia a este movimiento palestino, facilitando entre 20 y 30 millones de dólares al año.

21. Fundada oficialmente en 1986 por el jeque Abel Aziz Awda y Fathi Shikaki. El primero fue deportado al Líbano en 1988 y el segundo fue asesinado por Israel en 1995. En la actualidad, Ramadan Abdullah Shallah, el secre-

tario general de la organización, está al frente de una dirección instalada en Damasco.

22. El asesinato de dos taxistas israelíes en octubre de 1986, la evasión de seis detenidos miembros de la organización de la prisión central de Gaza en mayo de 1987 además de varios ataques contra el ejército israelí.

23. No abordaremos en este apartado la capacidad de acción económica de la ANP a través de las figuras que controlan algunos de los monopolios palestinos. A nuestro entender, ha quedado claro que el control de la ANP permite el acceso al recurso de la renta.

24. Sabih y Munib hicieron carrera en el sector energético en distintos países del golfo Pérsico antes de volver a los Territorios Ocupados.

25. CIA, *The World Factbook*, 2008. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (consultado el 26 de mayo de 2008).

26. Nota informativa de la División de los Derechos de los Palestinos (septiembre de 2002), *Las Naciones Unidas y las actividades de las ONG sobre la cuestión Palestina*.

27. Los candidatos de Hamas se presentaron en la lista «Cambio y Reforma». Los candidatos de Fatah lo hicieron en la lista del «Movimiento Fatah».

28. Formación política fundada estando Cisjordania bajo control jordano con el nombre de Partido Comunista Palestino. En 1982 se refundó bajo el nombre que responde a la siglas PPP. Aún hoy, el PPP se considera una extensión del movimiento comunista en Palestina nacido a mediados de los años veinte.

29. Los candidatos de los tres partidos participaron bajo la lista «la Alternativa».

30. Formación creada en diciembre de 2005 por iniciativa de la activista y ex portavoz palestina entre 1991 y 1993, Hanan Ashrawi, y del que fuera ministro de Finanzas entre 2002 y 2005, Salam Fayyad. Este último ocupa el cargo de jefe de Gobierno desde que fuera nombrado primer ministro por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en junio de 2007.

31. Formación creada entorno a la figura de Mustafá Barguzi, quien ejerce como secretario general de la organización. Barguzi fue el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de enero de 2005.

32. Otros candidatos independientes se repartieron los cuatro escaños restantes.

33. Ya en 1997, en calidad de diputado del CLP, Barguzi planteó una moción de censura contra el ejecutivo tras darse a conocer un escándalo de corrupción en el que estaba involucrado Yasser Arafat.

34. Nombre de la unidad de las fuerzas de seguridad palestinas creada en abril de 2006 por el ministro del Interior palestino en el Gobierno de Hamas, Siad Siyam.

35. Palestinian Academic Society For The Study of Internationals Affairs,

«Facts and Figures: Government», p. 311. *www.passia.org* (consultado 25 de mayo de 2008).

36. Los términos son del primer ministro israelí en su mensaje a la nación del 31 de marzo de 2002.

37. La acción más significativa fue el asedio a la Muqata, la sede de la ANP, entre marzo y abril de 2002.

38. Agrupación de varias facciones palestinas cuyos miembros aparecen a menudo descritos como militantes «desencantados» de Fatah y Hamas.

39. De este modo, Israel privó al gobierno de Hamas de 55 millones de dólares cada uno de los meses en los que este movimiento estuvo al frente del gabinete gubernamental palestino. Esa cifra representa más del 60% del total de 85 millones de dólares mensuales que componen los recursos propios de la ANP.

40. Datos extraídos de los porcentajes de la población palestina publicados en 2005 por la Oficina Central Palestina para la Estadística que reproducen Farsoun y Aruri.

41. Las cifras sobre el número de refugiados en esos países son, respectivamente, 2,96, 0,464 y 0,42 millones.

42. Como son los grupos que integran los Comités de Resistencia Popular o el Ejército del Islam.

43. Sobre el unilateralismo israelí véase De Crousaz (2005).

44. Dirigente de Hamas y decano desde 1993 de la Universidad Islámica de Gaza. Trabajó entre 1997 y 2004 como asistente del jeque Ahmed Yassin. Fue elegido primer ministro de los dos primeros gobiernos formados tras las elecciones de 2006. Ocupa el mismo cargo en el ejecutivo constituido en junio de 2007 en la Franja de Gaza.

Bibliografía

- Abu-Amr, Ziad (1994), *Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza*, Indiana University Press, Bloomington y Indianapolis.
- Agha, Hussein y Robert Malley (2007), «The Road from Mecca», *The New York Review of Books*, vol. 54, n° 8, 10 de mayo de 2007.
- Álvarez-Ossorio, Ignacio (2001), *El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la Segunda Intifada*, Los Libros de la Catarata, Madrid.
- , ed. (2003), *Informe sobre el conflicto de Palestina. De los acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta*, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid.
- Álvarez-Ossorio, Ignacio y Ferran Izquierdo (2005 [2007]), *¿Por qué ha fracasado la Paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí*, Los Libros de la Catarata, Madrid.

- Amnesty International Report (AIR) (2007), «Occupied Palestinian Territories: Torn apart by factional strife», octubre, Londres.
- Ann Smith, Pamela (1984), *Palestine and the Palestinians: 1876-1983*, Croom Helm, Londres y Sidney.
- Awkal, Talal (2007), «Problems of Fragmentation», *Middle East Mirror*, 10 de agosto de 2007.
- Baumgarten, Helga (2005), «The three faces/phases of Palestinian Nationalism: 1945-2005», *Journal of Palestine Studies*, vol. 34, n° 4, verano, pp. 25-48.
- BBC Monitoring Middle East (2005), «Palestinian PM renews calls for unity government», 6 de julio de 2005.
- Chehab, Zaki (2007), *Inside Hamas*, Nation Books, Nueva York.
- Court, Mireille y Chris Den Hond (2006), «Deux interviews: Ahmet Saadat; Hassan Youssef», *Informations-Actualités, Association France Palestine Solidarité*, 26 de septiembre de 2006.
- De Crousaz, Pascal (2005), «Le facteur démographique dans la détermination par Israël de ses frontières», *A Contrario*, vol.3, n° 2, pp. 66-98.
- Debray, Régis (2007), «Nota de misión diplomática a las autoridades francesas», 15 de enero de 2007, reproducida en Régis Debray «Pour une cure de Vérité au Proche.Orient», *Le Monde Diplomatique*, agosto de 2007.
- Denoeux, Guilain (2005), «The Politics of Corruption in Palestine: Evidence form recent public Opinion Polls», *Middle East Policy Journal*, otoño, pp.119-135.
- Devi, Sharmila (2005), «Investors in Palestinian stock market benefit from peace process: A decline in violence has sent the market soaring this year, but structural problems remain in the economy», *The Financial Times*, 14 de mayo de 2005.
- Elias, André y Abraham Yogev (1999), «Élite Formation under occupation: The internal stratification of Palestinian élites in the West Bank and Gaza Strip», *British Journal of Sociology*, vol. 50, n° 3, septiembre, pp. 397-418.
- Elon, Amos (2006), «What does Olmert want?», *The New York Review of Books*, vol. 53, n° 11, 22 de junio de 2006.
- Farsoun, Sabih y Christina Zacharia (1997), *Palestine and the Palestinians*, Westview, Colorado.
- Farsoun, Sabih y Nasser Aruri (2006), *Palestine and the Palestinians*, Westview, Colorado.
- Forgione, Fabio (2004), «The Chaos of the corruption. Challenges for the improvement of the Palestinian society», *The Palestinian Human Rigths Monitoring Group*, octubre.
- Gresh, Alain y Dominique Vidal (1996 [2003]), *Les 100 clés du Proche-Orient*, Hachette Littératures, París.
- Hanafi, Sari y Linda Tabari (2002), «The New Globalized Élite», *Jerusalem Quarterly*, n° 24, septiembre, pp. 13-32.

- Hilal, Jamil (2006), « Hamas Rise as Charted in the Polls: 1994-2005 », *The Journal of Palestine Studies*, vol. 35, n° 3, primavera, pp. 6-19.
- Hroub, Khaled (2000), *Hamas: Political Thought and Practice*, Institute for Palestine Studies, Washington, D.C.
- Human Right Watch (2002), *Suicide Bombing Attacks Against Israeli Civilians*, Nueva York, Londres, Washington, D.C., Bruselas.
- Inbari, Pinhas y Jerusalem Post Staff (1996), « Looking for Arafat Rothschild », *The Jerusalem Post*, 3 de enero de 1996.
- International Crisis Group (2006), Middle East Report, n° 49, « Enter Hamas: The Challenges of political integration », Bruselas.
- Issacharoff, Avi (2008), « Hamas worried about rise in support for religious sects », *Haaretz*, 30 de junio de 2008.
- Izquierdo, Ferran (2005a), *Guerra y agua: Conflicto político y carestía de agua en Palestina*, Fundación Araguaney, Santiago de Compostela.
- (2005b), « Política e islamismo: una aproximación a las distintas teorías del islam político », *Nova África*, n° 16, Barcelona, enero, pp. 21-32.
- Khalidi, Ahmad (1996), « The Palestinians' first excursion into democracy », *Journal of Palestine Studies*, vol. 25, n° 4, verano, pp.20-28.
- Lakind, Stacey y Yigal Carmon (1999), « The PA Economy », *The Middle East Media Research*, 7 de enero de 1999.
- Legrain, Jean François (1996), « Autonomie palestinienne: la politique des néo-notables », *Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée* (REMM), n° 81-82, 1996/3-4, pp. 153-206.
- (1999), *Les Palestiniens du quotidien. Les élections de l'autonomie (janvier 1996)*, Centre d'Études et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain (CERMOC), Collection « Les Cahiers du CERMOC », n° 22, Beirut.
- (2002), « Le fantôme d'Arafat », *Critique Internationale*, n° 16, julio de 2002, pp. 40-48.
- López Alonso, Carmen (2007), *Hamas: La marcha hacia el poder*, Libros de la Catarata, Madrid.
- Maan News Agency (MAN) (2008), « Hamas interior minister acknowledges «mistakes» in ruling Gaza », 23 de junio de 2008.
- Malik, Talal (2008), « Power 100: The World most powerful Arabs », *Arabian-bussiness.com*, 30 de marzo de 2008.
- Mansour, Camille (2002), « The Impact of 11 of September on the Israeli-Palestinian Conflict », *Journal of Palestine Studies*, vol. 31, n° 2, invierno, pp. 5-18.
- Martínez, Salvador (2006), « Elías Sanbar: La ocupación israelí ha conseguido rebelar a los palestinos contra la paz », *El Siglo de Europa*, n° 696, del 22 al 28 de mayo de 2006.
- Naquib, Fadle (2000), « Aspects économiques du processus de paix », *Revue du Tiers Monde*, n° 163, julio-septiembre, pp. 597-620.

- Orme Jr., William (2000), «For Palestinians, O Little Town of Business Plans», *The New York Times*, 10 de mayo de 2000.
- PCHR The Palestinian Center for Human Rights, (2007), «Enough Violation: Annual Report 2006», Gaza City.
- Picadou, Nadine (2003 [1997]), *Les Palestiniens. Un siècle d'histoire*, Éditions Complexe, Bruselas.
- Prusher, Ilen R. (2008), «One Palestinian Billionaire's Vision of unity», *The Christian Science Monitor*, 29 de febrero de 2008.
- Roy, Olivier (2000/2001), «Les mouvements islamistes en recherche d'identité», *La Revue Internationale et Stratégique*, n° 40, invierno, pp. 77-85.
- Sabella, Bernard (1996), «Political trends and the New Élite in Palestine», *Pas-sia Workshop*, 4 de noviembre de 1996, pp. 233-242.
- Schmid, Dorothée (2006), «Palestine: la problématique de l'aide», *Politique Étrangère*, otoño, pp. 491-503.
- Shikaki, Khalil (1998), «Peace Now or Hamas Later», *Foreign Affairs*, julio-agosto.
- Smith, Charles (2007), *Palestine and the Arab-Israeli Conflict. A history with documents*, Bedford & St. Martin, Boston.
- Travín, Javier (2007), *La división de los palestinos: nacionalismo laico vs. nacionalismo islamista, dos proyectos políticos en pugna*, FIMAM, Altafulla, <http://www.fimam.org/4.htm>.
- Waked, Ali (2007), «Rice: It's time for a Palestinian State», *Yediot Ahronot*, 15 de octubre de 2007.
- Waugh, Louisa (2008), «Living in Gaza», *London Review of Books*, 29 de mayo de 2008.

¿Qué futuro le espera a Palestina?

Jean-François Legrain

Ante la ausencia de cualquier avance en las negociaciones bilaterales entre Israel y Palestina, la población de Cisjordania y la franja de Gaza continúan pagando en la actualidad por el rechazo del presidente de la Autoridad Palestina de autonomía (AP), Mahmud Abbas, y su movimiento Fatah, el ejecutivo israelí y la comunidad internacional a permitir al movimiento islamista Hamás ejercer el gobierno obtenido en las elecciones al Consejo Legislativo de autonomía de enero de 2006. Tras contribuir durante los años 2006 y 2007 a transformar el caos ya existente en un principio de guerra civil entre grupos enfrentados, estos actores han participado, cada uno en su medida, en la deconstrucción de los mecanismos instaurados durante los últimos treinta años para la defensa, tanto política como identitaria, de la «palestinidad». Así, sesenta años después de la *nakba* (expulsión de la mayoría de los palestinos del territorio que se convertiría en Israel), y cuarenta años después de la ocupación militar de Cisjordania y Gaza, los palestinos se encuentran con las consecuencias del fracaso del proyecto de liberación y construcción de un Estado lanzado por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), algo que marcará sin duda los años venideros.

La construcción nacional

Los orígenes de la construcción de la identidad palestina se remontan a los últimos años del imperio otomano, aunque en términos de identidad más árabe que propiamente palestina en aquella época. La guerra de 1967, que supuso el fin del sueño panarabista del naserismo entonces do-

minante, fue el verdadero detonador de un doble fenómeno que podemos calificar como «palestinización» y que conforma la base de la construcción nacional palestina contemporánea. Por un lado, la «palestinización» de la identidad, con incidencia en la consigna política a través de reivindicación de la soberanía nacional para una tierra convertida en territorio e identificada como palestina, y no solamente como árabe. Por otro, la palestinización del ámbito político y militar, con la aparición de los palestinos como actores autónomos en la escena árabe, evolución que se traduce institucionalmente por la toma de control de la OLP por parte del Fatah de Yaser Arafat y la transformación de esta, de simple organización instrumentalizada por los estados árabes, a marco de construcción y expresión de la unidad nacional. En ambos casos, la OLP fue la estructura abanderada del proyecto y la responsable de llevarla a cabo.

El incumplimiento del compromiso internacional

Lejos de representar una simple etapa hacia la independencia y la constitución de un Estado, la Autoridad de Provisional de Autonomía Palestina, creada en 1994, se transformó *de facto* en un no Estado permanente, debido a la falta de compromiso real de la comunidad internacional para aplicar su propia legalidad. De hecho, al negarse a poner los medios para alcanzar la prioridad que había establecido —la coexistencia pacífica entre dos estados en el territorio de la Palestina del mandato Británico—, y al haber practicado un alineamiento *de facto* con el hecho consumado israelí, la comunidad internacional es la mayor responsable de este fracaso.

Desde principios de los años noventa, al terminar la segunda guerra del Golfo y en vísperas del hundimiento de la Unión Soviética, Estados Unidos supieron imponer al mundo gran parte de las exigencias israelíes. Al renunciar a convocar una conferencia internacional bajo la tutela de las Naciones Unidas —organismo dotado de mecanismos vinculantes—, y basándose en «el conjunto de sus resoluciones sobre la cuestión», la comunidad internacional aceptó entonces prestar su apoyo en simples foros bilaterales apadrinados por Estados Unidos y por la Unión Soviética (aunque solo oficialmente). Las negociaciones multilaterales, por su parte, estaban limitadas a las cuestiones que no implicaban la soberanía, las fronteras o el final del estado de guerra, ámbitos exclusivamente reser-

vados a la negociación bilateral. En estricta continuidad con la conferencia de Madrid de 1991 y las diferentes negociaciones israelo-palestinas surgidas del acuerdo de Oslo de 1993, la conferencia de Annapolis de 2007 y la actual Hoja de Ruta internacional, centran las negociaciones en la legalidad internacional (la restitución de los territorios ocupados por la fuerza, los derechos de los refugiados, etc.), pero continúan exentas de todo compromiso u obligación, y Estados Unidos y sus socios no son más que meros facilitadores. Asimismo, y por medio de una hábil utilización de las políticas inauguradas tras el 11-S en el marco de la «guerra contra el terrorismo» dirigida por Estados Unidos y sus aliados, el ex primer ministro israelí Ariel Sharon supo hacer del «proceso de paz», a semejanza de su retirada unilateral de la franja de Gaza en 2005, el medio para evitar un verdadero proceso político de fondo con los palestinos.

La desmembración

En este contexto, los diferentes procesos de «palestinización», al no haber podido desembocar en la construcción de un Estado independiente, se encuentran hoy enfrentados a dinámicas que podríamos calificar a su vez, aunque de manera algo inexacta, de «despalestinización» en el ámbito tanto político como identitario.

El fracaso de la liberalización y del proyecto de Estado tienen como causa directa la «despalestinización» de la política, provocada a su vez por el recurso cada vez más frecuente a la mediación de los países árabes para intentar resolver las tensiones internas en Palestina. En estos últimos años, Egipto ostenta el primer puesto en el palmarés de las negociaciones. Este, habiendo convocado reuniones interpalestinas en repetidas ocasiones, actúa a la vez como mediador y como emisario de Israel. Arabia Saudí, Qatar, Yemen también han cumplido este papel en ocasiones. Apartada de su papel tanto por Egipto como por Arabia Saudí (sin olvidar a Estados Unidos), y desprovista de toda proximidad con la AP de Mahmud Abbas, Siria encuentra dificultades para hacer de la hospitalidad ofrecida al liderazgo de Hamas y la Yihad Islámica en el exterior, una baza poderosa en el juego regional e internacional.

Además de la falta de entendimiento sobre el programa político y

su aplicación, los palestinos tienen que hacer frente a un retorno de las políticas de patronazgo: el presidente Mahmud Abbas con Arabia Saudí, y el primer ministro dimisionario Haniyya con Qatar (sin olvidar el papel del propio Irán, aunque este se sobrestime a menudo por razones de competencia política).

Así, el acuerdo nacional y la resolución del conflicto árabo-israelí quedan casi totalmente al margen de la influencia de los palestinos, y Palestina se convierte en la caja de resonancia de los intereses contradictorios de los países árabes, como sucedió antes de 1967 con la OLP de la Liga Árabe, y en los años setenta y a principios de los ochenta con algunas organizaciones de guerrilla, simples instrumentos de los estados de la región. Estos fenómenos de «despalestinización» se ven reforzados además por el sueño israelí (e internacional) del retorno de Gaza a Egipto, y de Cisjordania a la Jordania hachemí, sin necesidad de solucionar la cuestión nacional palestina.

Por otro lado, la «despalestinización» afecta también, en algunos casos, a la propia identidad. El recurso a las mediaciones árabes no ha supuesto el retorno a los ideales del panarabismo y la arabidad eterna, aunque el sentimiento de pertenencia a un conjunto árabe (y musulmán) se ve reavivado. No obstante, la reaparición de ciertas referencias islámicas en algunos discursos se produce en detrimento de la *palestinidad*. A diferencia de Hamás, e incluso de la Yihad Islámica, que conservan en cierta medida la herencia nacionalista de la OLP, hoy algunos grupos más o menos importantes parecen querer difuminar, e incluso negar, la *palestinidad*; unos valiéndose del *takfir*, y otros del pietismo *anacional* o anti-nacional. El *takfirismo* consiste en considerar al musulmán no practicante como persona infiel (*kâfir*). Esta ideología dicta dos modos de actuar. Bien alejarse de la sociedad impía (realizar la «hégira como hizo Mahoma dejando La Meca para ir a Medina) formando contrasociedades piadosas, como fue el caso en Egipto de los setenta con la «Sociedad de los musulmanes» (más conocida por el apodo de *Takfir wa Hijra*). O bien eliminar al impío físicamente, como hacen, por ejemplo, los grupos que se proclaman integrantes de Al-Qaeda.

Conclusión

Así, además de hacer frente al fracaso del proyecto de liberación y la construcción de un Estado, los palestinos se encuentran con el obstáculo de una cierta desarticulación del vínculo nacional, dificultad que no hará más que prolongarse sin un compromiso internacional que rompa con la dinámica actual.

El electorado ha tomado medidas, dejando claro cuál es su movimiento predilecto y el cometido que le encomendaba. En las elecciones de 2006, los electores confiaron a Hamás la misión de luchar contra la corrupción, la anarquía y el caos de seguridad reinantes, para que destruyera instituciones «sanas», y evitar así la guerra civil. También esperaba que el movimiento reafirmara la reivindicación de liberación nacional, el retorno de los refugiados y la liberación de los prisioneros, pues las concesiones realizadas por Fatah en los años anteriores no habían dado resultados positivos. Pero estas demandas del electorado palestino a Hamás no son las mismas que las dirigidas tradicionalmente a los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional contemplan la recuperación del territorio como el fundamento de su acción y la unidad nacional, más allá de la dispersión geográfica, aunque la desilusión territorial surgida de la aplicación de Oslo, hizo lógicamente tambalear su empresa ante la sociedad palestina. Entonces, Hamás aparecía como su único heredero legítimo, lo que permitió al movimiento integrar más fácilmente el patriotismo, islamizando sus referentes al mismo tiempo que se unía a la lucha armada, para después desempeñar un papel predominante en este campo.

Ante la imposibilidad de recuperar el territorio y con un vínculo social amenazado por el aumento de la anarquía y el caos en la seguridad pública, el referente religioso podía funcionar como un recurso eficaz. Convirtiendo a Palestina no solo en la fuente de la identidad sino también en su terreno de expansión, el movimiento islamista, avalado por su vasto tejido asociativo, caritativo y de culto, podía presentarse como la respuesta «natural» a la desintegración social y a la ausencia de liberación nacional. Pero es el retorno a la religión, más que la lucha armada, lo que aparece en la literatura de Hamás como expresión privilegiada de la yihad, y la organización no ha hecho nunca de sus operaciones militares una estrategia de liberación. El islam se convierte aquí en la base de la identidad tanto del individuo como de la sociedad, y al ser fácilmente ac-

cesible, permite la reconstrucción inmediata de la unidad del grupo, sin que esta esté condicionada por la previa devolución del territorio. Además, en un contexto de intervenciones exteriores permanentes, una de las cuales es la ocupación militar, el islam se presenta como el último muro defensivo, pero también como el último reducto de soberanía palestina. Así, tomándose de forma muy pragmática la imposibilidad actual de alcanzar la liberación nacional, el electorado dio la espalda a quienes había encomendado esta tarea y encargó a Hamás la construcción de las instituciones que le permitirían gestionar la espera de la liberación, así como terminar con los males de la corrupción y la violencia interna. Si bien es cierto que Palestina sigue siendo claramente el objetivo, también representa el marco y el límite del combate de Hamás, a diferencia de los movimientos yihadistas internacionalistas.

Ni partido político en el sentido estricto del término, ni movimiento de liberación nacional, Hamás considera su discurso sobre el carácter islámico de Palestina como un elemento central de su misión, basada en una concepción concreta del islam. Su transformación de una asociación de movilización religiosa a un «casi partido» constituye un elemento propio de la democracia que viven los territorios ocupados, con sus particularidades según cada época, sus fallos y sus límites, resultado de la ocupación y el peso de la historia. Iniciada mucho antes de la instauración de la autonomía, esta evolución obedece a una coherencia interna, y resulta más bien ilusorio creer que una ingerencia exterior, que además obedece a una política dictada por Estados Unidos e Israel, pueda obligar al movimiento a una modificación de su doctrina, pues su lectura del Corán y la tradición musulmana le prohíben otorgar formalmente (*de jure*) ninguna legitimidad a un Estado judío surgido de la pérdida de una tierra islámica en la que vivía un pueblo musulmán. Sin embargo, podrían aceptarse una tregua y una coexistencia (*de facto*) ilimitadas en el tiempo, ya que no implicarían el reconocimiento de la legitimidad de lo ilegítimo; y de hecho es lo que habría que hacer si fuera por el bien de la sociedad.

10. Jordania: la supervivencia de la monarquía

Géraldine Barré y Luigi Masciulli

Transición y apertura política: veinte años después

La llegada al trono del joven príncipe Abdalá bin Husein bin Talal en febrero de 1999 simbolizaba la aparición de una nueva generación en el poder y la posibilidad de cambio. La nominación del monarca trajo consigo una nueva dinámica en el sistema de reclutamiento de élites políticas significativas. Sin embargo, la realidad a la que tendría que enfrentarse el soberano sería similar a la de su padre: un país desprovisto de recursos naturales y afectado directamente en el ámbito político, económico y demográfico por los conflictos regionales.

Desde que el país fuera creado por Gran Bretaña en 1921 con el nombre de Transjordania, con la monarquía como elemento central de la estructura política, el reino hachemí ha sabido hacer frente a numerosos episodios de inestabilidad. La guerra de 1948 contra Israel, la anexión de Cisjordania y Jerusalén este tras la guerra, el asesinato del rey Abdalá I en 1951, las turbulencias del nacionalismo panarabista de los años cincuenta, la posterior pérdida de Cisjordania durante la guerra de los seis días en junio de 1967 y los sangrientos enfrentamientos entre las tropas reales y los nacionalistas palestinos durante el Septiembre Negro de 1970. En este contexto y con el fin de preservar el control de la vida política, el rey Husein instaura la ley marcial, primero en 1957 —durante diecinueve meses—, y después en 1967 —durante dos décadas—, prohibiendo los partidos y privando al país de toda actividad política.¹ Durante estos años, la monarquía se beneficia económicamente sobre todo del apoyo de los ricos vecinos productores de petróleo. Sin embargo, la posterior crisis del petróleo de los años ochenta pone fin a este respaldo.

Como respuesta a una situación económica difícil, a la que se sumaron el estallido de la Primera Intifada en los Territorios Ocupados Palestinos, el enfado y la creciente tensión popular provocaron numerosas manifestaciones en todo el país. Presionado por el descontento social, el rey Hussein puso fin al Estado de excepción y activó una serie de medidas para favorecer el proceso de apertura política. Sin embargo, al analizar los hechos se observa claramente que dichas medidas fueron diseñadas para permitir la longevidad política de las élites sin alterar las estructuras fundamentales del poder gobernante.

A partir de este análisis, Glenn E. Robinson creó el concepto de «democracia defensiva», según el cual el régimen desarrolla y dirige con habilidad un procedimiento que le permite proteger a las principales élites de los círculos más cercanos a palacio (Robinson, 1998). Así, vemos que las iniciativas de apertura están condicionadas por los intereses del régimen, que no duda en dar marcha atrás cuando ve que la oposición gana demasiado terreno y puede convertirse en una amenaza.

Cartografía de las élites y el control de los recursos de poder

La estructura de poder del régimen jordano se caracteriza por su estabilidad, pues sus élites no han conocido ningún cambio significativo a lo largo de la historia del país. Las élites primarias que manejan los recursos políticos y económicos y, en consecuencia, controlan el mencionado proceso de liberalización, tienen un único objetivo: el mantenimiento del régimen y sus privilegios. La élite primaria está dirigida exclusivamente por el rey y la completan:

- La élite gubernamental: un grupo de altos decisores políticos, entre los que solo un restringido número posee el grado de influencia necesario para tener un papel clave en el juego político nacional.
- El aparato militar y de seguridad, columna vertebral de la dinastía, imprescindible si la legitimación fracasa.

La dirección y las decisiones adoptadas por estas élites primarias condicionan también la existencia y el grado de influencia de otras élites que

podemos definir como secundarias, por su vulnerabilidad y su dependencia de las élites primarias. Entre ellas encontramos:

- La élite tribal, que depende de la redistribución de la renta, y se ve amenazada por las tendencias económicas liberales implementadas por Abdalá II desde su llegada al poder.
- La élite económica que, a la inversa, tiene la esperanza de lograr un lugar de inversión en el sector privado, que hasta el momento era limitado.

En las siguientes páginas, intentaremos definir la posición de cada una de estas élites y los recursos que pueden controlar. Analizaremos cómo protegen su estatus las élites primarias y cuáles pueden ser los efectos de este nuevo espacio económico creado por el proceso de liberalización.

Las élites primarias

El rey Abdalá II y los recursos de la monarquía

En el sistema político jordano, la figura del rey representa la máxima fuente de poder y legitimidad. Abdalá, al igual que sus predecesores, controla todas las decisiones estratégicas, políticas y económicas del país, y supervisa con especial atención las cuestiones de política exterior y seguridad nacional. Además, como es propio de los sistemas dominados por relaciones de corte patrimonial, el monarca se reserva el derecho de arbitrar los casos de interés político y social del país (Bank y Shlumberger, 2004), lo que le permite detentar la máxima autoridad política. El rey no debe rendir cuentas ante nadie, pues la monarquía disfruta, desde su creación, de una base de apoyo interno que supo formar ofreciendo empleos y favores a ciertos grupos, principalmente compuestos por los líderes tribales. Cristianos, circasianos y chechenos completan esta base de apoyo que la monarquía ha logrado mediante una estrategia de búsqueda de ayudas económicas en el exterior que cumplen la función de renta externa.

Así, capitalizando este apoyo y estos recursos económicos, los diferentes monarcas de Jordania han sido capaces de controlar unilateralmente la vía política del país. Aunque la constitución de 1952 declara

que Jordania es una monarquía constitucional, el rey elige al primer ministro, quien a su vez designará a los demás ministros, pero siempre con la aprobación o el consejo del monarca. Asimismo, tiene poderes para vetar las propuestas de ley e, incluso, disolver el parlamento. Además es él quien decide cuándo tienen que tener lugar las elecciones a la Cámara Baja, pudiendo así aplazar las elecciones según las circunstancias nacionales o regionales. También se encarga de designar a todos los miembros del Senado, así como a su presidente. Por último, el rey es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y preside la Corte Real, que funciona de forma paralela al gobierno, sirviéndole así de contrapeso, pero sin estar sometida al control o la vigilancia de ninguna otra institución (Denoeux *et al.*, 2003: 21-22).

Los desafíos de la monarquía jordana

Como mencionábamos anteriormente, Jordania es un país pobre en recursos naturales. La mayor parte de su reducido territorio es desértico y sufre serios problemas de agua. No tiene petróleo y en el 2006 la agricultura representaba tan solo el 2,68% del PIB. Además, como se ha visto a menudo, su situación geográfica le hace vulnerable ante las tensiones geopolíticas de la región. Estos conflictos regionales también tienen consecuencias en los flujos migratorios del país, donde la población carece de cohesión étnica o religiosa.

En este contexto, la monarquía, inicialmente dependiente de las ayudas británicas, para poder conservar su estatus supo convencer a Estados Unidos y los estados árabes de su papel vital en el mantenimiento de la seguridad regional. Entre 1973 y 1998 los préstamos y ayudas procedentes en su mayoría de Estados Unidos representaban entre el 22% y el 55% de los ingresos gubernamentales anuales, y aunque entre 1999 y 2003 hubiera una disminución a entre un 11% y un 29%, no dejaban de ser considerables. La importancia de estos ingresos obliga a la monarquía a mantener buenas relaciones con sus potenciales donantes, lo que puede acarrear a su vez una cierta influencia en las decisiones de política extranjera y reformas nacionales. Laurie Brand (1994: 42) apunta al respecto que «la búsqueda de la seguridad presupuestaria (es decir, la ayuda extranjera) es el factor clave que perfila la política exterior jordana y explica ampliamente el gran pragmatismo de su actuación internacional».

Desde los primeros meses de su reinado, el rey Abdalá puso en marcha intensas acciones diplomáticas orientadas al reestablecimiento de las relaciones regionales e internacionales afectadas por los acontecimientos en la región en los años ochenta y noventa. El hecho de que los primeros países visitados por el monarca fueran Omán y los Emiratos Árabes Unidos ilustra los esfuerzos del régimen por recuperar la posición ocupada al lado de las petromonarquías del Golfo en los años anteriores a la guerra Irán-Irak. En el caso saudí, el objetivo de Abdalá fue recuperar al menos los vínculos de cooperación económica que permitían abrir las puertas del país a los trabajadores y los productos jordanos.

Por otra parte, Jordania se convirtió durante los años noventa en el lugar más apropiado para vehicular los programas económicos de la región. Como observa Moore (2003)

Durante los años noventa los donantes internacionales y la Administración norteamericana se referían a Jordania como modelo de reforma económica en Oriente Medio... El representante comercial [de Estados Unidos] Robert Zoellick [nombrado presidente del Banco Mundial en 2007] elogiaba así su disposición a servir como el terreno de prueba para la aplicación de las grandes iniciativas (Iniciativa de Partenariado en Oriente Medio [MEPI] y el Área de Libre Comercio en Oriente Medio [MEFTA]).

El programa político de Abdalá II no es pues diferente del que llevaron a cabo sus predecesores, es decir, se basa en mantener la monarquía, preservar la estabilidad interna e impulsar la economía, apostando por la modernización, al mismo tiempo que incluye en su agenda la cuestión palestina (Campagna, 1998: 100). También tiene que mantener fuertes vínculos con Estados Unidos, al tiempo que intenta calmar la agitación de la opinión pública, que se muestra reticente o totalmente contraria a las alianzas con Washington debido a su política en la región. En este terreno Abdalá II representa la continuidad de la monarquía hachemí y mantiene un gobierno sólidamente prooccidental. Por otra parte, las intenciones reformistas del joven monarca parecen ser un intento de desvincularse del legado histórico y la fuerte dependencia del apoyo tribal, reflejado en gran medida en una burocracia excesiva. Su agenda reformista goza de un amplio respaldo popular entre las clases media y media-alta, especialmente entre los más jóvenes (Denoeux *et al.*, 2003: 23). Sin embargo, será difícil que el rey pueda mantener el equilibrio entre sus di-

ferentes apoyos y sus propios intereses, de una forma tan sutil como lo supo hacer su padre, especialmente frente a las tribus.

Además, seguramente el mayor problema es la falta de mejoras en las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad jordana, algo que se hace visible en el agravamiento de la brecha entre ricos y pobres. Así vemos que el desafío económico al que se enfrenta el rey Abdalá II es sin duda la principal amenaza para la estabilidad del régimen.

La élite gobernante

Nos referiremos en este apartado a un círculo restringido de altos mandatarios, que dirigen la agenda diaria del país o tienen influencia sobre el rey en las decisiones críticas.

El núcleo duro de esta élite gobernante incluye a altos cargos como el jefe de los servicios secretos (Mujabarat), el primer ministro, el jefe de la corte real, y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Con un grado de influencia menor, encontramos también al director general de Seguridad Pública, destacados oficiales militares y miembros de Palacio.

Este pequeño grupo de personas juega un papel esencial en la toma de decisiones importantes. La celebración de las elecciones de 1989, tras las grandes manifestaciones en el centro y el sur del país, por ejemplo, fue acordada por un pequeño círculo de personalidades presentes en la sesión del gabinete de crisis, durante la cual el rey Husein les encargó la tarea de determinar el alcance y el ritmo del proceso de liberalización.

A continuación encontramos a ciertas figuras clave que, aunque no poseen el mismo estatus, forman parte de esta élite gobernante gracias a haber desempeñado un papel relevante o a la lealtad mostrada al rey (o a su padre). Son personas generalmente procedentes de las grandes familias jordanas.

Por último, algunos ministros influyentes pueden llegar a formar parte de un sector más pequeño de la élite gubernamental. El gabinete ministerial está claramente dividido entre una minoría con gran influencia y los ministros que son percibidos como relativamente marginales, y que ejercen poca o ninguna influencia en la toma de decisiones que no son de su competencia.

Para concluir cabe recordar que el objetivo principal de la élite gobernante es mantener su posición y, en consecuencia, la estabilidad del

régimen. Durante las tres décadas de ley marcial, en ausencia de las sesiones parlamentarias, la élite gubernamental demostró una acusada tendencia a modificar las reglas clave del juego político de forma unilateral, mediante órdenes administrativas, leyes temporales o, simplemente, ignorando la normativa existente. Después, con el fin del Estado de excepción, la élite gobernante se encargó de instaurar leyes acordes al proceso de liberalización del momento pero capaces de preservar sus propios intereses. Así, durante estos últimos años, ha sido el mismo círculo de mandatarios quien se ha ocupado de la puesta en marcha de una ambiciosa agenda de reformas económicas, en sintonía con el discurso liberal del rey, y que, al mismo tiempo, controla y reprime toda clase de oposición.

La institución militar y el Mujabarat

Los oficiales de rango militar más alto, el jefe de los servicios secretos (Mujabarat) y el director general de Seguridad Pública (fuerzas policiales) también forman parte de estas élites primarias del país. Estas tres instituciones continúan teniendo un papel decisivo en la confección de la agenda política.

El cuerpo militar es la institución más influyente de las tres, junto con los servicios de inteligencia. Ambas conforman desde años atrás el pilar de la monarquía. El soberano está al frente de la institución militar, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas jordanas. Durante su mandato, el rey Husein era consciente de que su supervivencia en el trono estaba fuertemente ligada a su habilidad para preservar el apoyo del órgano militar. Por ello, se mostró particularmente generoso con esta institución, lo que le fue recompensado con la lealtad del cuerpo de oficiales y de las tropas, a las que honraba regularmente con su visita. Esta popularidad y sumisión de los oficiales se consolidó tras numerosos episodios turbulentos entre los años cincuenta y los setenta. El ejemplo más significativo es el de abril de 1957, cuando el rey Husein se dio cuenta de que su política prooccidental no era compatible con la visión de Náser, y decidió consolidar su régimen terminando con el gobierno de Nabulsi y disolviendo el parlamento. Más tarde cuando el monarca descubrió un proyecto de golpe de Estado en el seno del ejército llevó a cabo un contragolpe contra los oficiales rebeldes, destituyendo de sus funcio-

nes al jefe conspirador y ordenando que muchos de los implicados fueran juzgados por un tribunal militar. En julio de 1958, tras haber detectado otro complot, Husein solicitó ayuda militar a Gran Bretaña, quien envió sus tropas a Jordania. Durante los tres meses siguientes, los fuerzas/servicios de seguridad adoptaron medidas draconianas, arrestando a centenares de presuntos conspiradores. A partir de entonces, Husein logró mantener las Fuerzas Armadas bajo su control y limpiar sus filas de individuos desleales.

Hoy, el rey Abdalá II, también de formación militar, se beneficia del mismo respaldo del ejército. La institución, que hasta los años ochenta estaba casi totalmente compuesta por población beduina, se ha modernizado y su composición se ha diversificado, pero continúa siendo la población transjordana la que accede a los puestos más altos. La influencia de estos altos mandos va más allá de las cuestiones puramente militares. Por ejemplo, el régimen requiere a menudo la presencia del ejército para reprimir revueltas importantes. El hecho de que los dirigentes de los servicios secretos y las fuerzas policiales, ambas instituciones civiles, hayan sido repetidamente generales del ejército, nos da una idea del alcance de la influencia de las fuerzas armadas.

La influencia del Mujabarat en la agenda política del país es también relevante. Su primera función es la de velar por la seguridad nacional, la estabilidad política y la supervivencia del régimen, neutralizando cualquier amenaza interna o externa. También se encarga de vigilar toda actividad real o potencial considerada subversiva. Asimismo, interviene de forma directa en los asuntos internos del país, a través de directrices a la prensa, o a veces incluso intentando encauzar las actuaciones de algunos políticos. No debería subestimarse la influencia de este órgano en todas las esferas de la vida del país. Las operaciones de este servicio están, lógicamente, protegidas por el secreto y es al mismo tiempo la organización más poderosa y la que menos cuentas debe rendir. Por ello muchos analistas consideran que los jefes de los servicios secretos son los actores con más poder después de la figura del rey. El jefe del Mujabarat informa directamente al primer ministro y al rey. Solamente las personas que hayan demostrado lealtad hacia la corona y que procedan de eminentes familias jordanas con relaciones de larga tradición con el trono pueden pretender al puesto de jefe de estos servicios.

Por último, encontramos las fuerzas policiales de la Dirección de Seguridad Pública. Aunque algunas de sus actividades pudieran solapar-

se con las de los servicios secretos, no parece existir una colaboración estrecha entre ellos. Tampoco gozan de la autonomía del Mujabarat pues dependen directamente del Ministerio de Interior, y su director, generalmente un oficial de alta graduación del ejército, debe rendir cuentas al ministro. Así pues, vemos que el grado de influencia de esta institución en la política jordana es claramente menor al de los servicios secretos o el ejército.

Las élites secundarias

La comunidad tribal

Antes mencionábamos la importancia de las tribus y sus líderes en el seno de la estructura política del reino hachemí desde su creación. Abdalá I (1921-1951) logró consolidar su reinado gracias a una alianza con los líderes tribales. El acceso a los recursos del Estado permitió a estos líderes tejer una vasta red de patronazgo a través de la cual los habitantes de zonas tribales podían solicitar empleos, favores y otras formas de asistencia.

Esta práctica continuó durante el mandato del rey Talal (1951-1952) y después con el rey Husein (1952-1999). Así, los miembros de estas comunidades llegaron a ocupar la gran mayoría de los puestos públicos, al tiempo que la ley electoral les garantizaba una sobrerrepresentación en el Parlamento. El control de las instituciones más relevantes, como el ejército y los servicios de seguridad, ha constituido por lo tanto la base de la influencia tribal y del poder de sus líderes.

El reinado de Abdalá II ha alterado sin embargo este profundo vínculo. Aunque siga existiendo una gran lealtad hacia el régimen, cabe mencionar que el joven monarca encuentra dificultades para establecer con los jeques de la comunidad tribal una relación tan cercana como la que caracterizó el reinado de Husein, pues este grupo ve sus privilegios amenazados por la nueva agenda económica. A pesar de ello, la influencia de los líderes tribales continúa siendo fuerte en gran parte del territorio, especialmente en el sur del país. Estos dirigentes son los responsables de mantener el orden, proteger a los ciudadanos y los bienes, y asegurar la aplicación de las directivas gubernamentales. De hecho, históricamente los parlamentarios representantes de las zonas tribales han

concebido su función ante todo como «proveedores» de servicios colectivos e individuales a su electorado. Esta situación que aun perdura, aunque de forma atenuada, explica que resulte esencial para la monarquía conservar el control de los líderes tribales. Y ello presenta un problema para el actual monarca, pues es de esperar que los miembros más destacados de las tribus privilegiadas, ya veteranos en la estructura de poder de la política jordana, se opongan a cualquier reforma importante que pueda perjudicarles.

Jordanos de origen palestino: control del sector privado

El dominio transjordano de la Administración Pública y el ejército confinó a los palestinos al sector privado, a pesar de que, según algunas fuentes,² conforman el 60% de la población.

Las sucesivas olas de refugiados palestinos desde la creación de Israel en 1948 alteraron profundamente la estructura de la población. A su vez, la ocupación israelí de Cisjordania de 1967 generó la afluencia de 300.000 refugiados hacia el este del territorio. Sin embargo, en 1988, con la desanexión del territorio cisjordano, el país perdió 750.000 habitantes. Más tarde, tras la segunda guerra del Golfo en 1991, entre 250.000 y 400.000 jordanos de origen palestino fueron expulsados de Kuwait y se reinstalaron en Jordania (George, 2005a: 24).

Ante esta trayectoria, resulta imposible establecer de forma precisa qué proporción de la población jordana es de origen palestino. Esa realidad ha sido siempre un elemento determinante en la dinámica interna del país. Es lo que Milton-Edwards y Hinchcliffe (2001: xiv) denominan «la ambivalencia instintiva». Porque, a pesar de que Jordania haya ofrecido la nacionalidad a los refugiados, estos siguen sintiéndose tratados de forma injusta y siguen estando al margen del sistema jordano y la estructura política del país. Solo siete de los cincuenta y cinco senadores — todos ellos designados por el rey —, son de origen palestino, y la ley electoral que permite asegurar la sobrerepresentación de los segmentos aliados al régimen en la cámara baja del Parlamento (Choucair, 2006: 15).

Además, este proceso discriminatorio no hizo más que agravar las tensiones existentes entre los jordanos de la orilla oeste (Cisjordania) y la orilla este (Jordania). Los jordanos de origen palestino se vieron rele-

gados al sector privado. Así, se formó un grupo de actores que ocupaban puestos y papeles significativos en el sector privado, como médicos, abogados, ingenieros, periodistas, escritores, comerciantes, terratenientes; así como miembros de la comunidad académica y las altas instituciones religiosas islámicas. Estos actores de influencia política limitada supieron encontrar su representación y su peso político individual a través de las asociaciones profesionales.

En el contexto actual de liberalización económica, podría pensarse que una política económica de privatización abriría nuevos espacios a los empresarios del sector privado. Pero, a excepción de los hombres de negocios mejor situados, la base social y política de la élite gobernante no solo no ha crecido sino que ha disminuido considerablemente a partir de mediados de los años noventa. La creciente brecha entre ricos y pobres demuestra que las reformas económicas benefician solamente a una minoría y que hasta el momento no han contribuido al desarrollo de una clase media formada por empresarios. Los intentos de reformas económicas llevados a cabo en Jordania demuestran además que la supervivencia del régimen y más concretamente, su lógica política, dictan todavía el modo de instauración de dichas reformas.

La élite de los negocios

La cooperación entre empresarios y burócratas, y la mediación entre los intereses, a veces conflictivos, del Estado y el sector privado, se materializan en Jordania tanto en procesos de negociación como en procesos de captación de rentas mediante la manipulación del entorno legal y económico (*rent-seeking*).

En los años cincuenta, las primeras reformas económicas fueron realizadas «desde arriba», por medio de los grupos de empresarios y burócratas que cooperaban con las grandes familias, poseedoras del capital dirigido a proyectos industriales. Sin embargo, este recurso a capitales privados conllevó la concesión de privilegios, y la formación de monopolios y redes cada vez más independientes de Palacio.

Después, el *boom* del petróleo de 1973 traería consigo el paso de una estrategia de desarrollo interno, a la integración de Jordania en un sistema regional de circulación de la renta, lo que reforzó las élites ligadas a Palacio, a expensas de las élites del sector privado, activas en el

sector bancario y financiero (Wils, 2003: 139). La afluencia de ayudas árabes impulsó esta tendencia de la «búsqueda de la renta». Sin embargo, a partir de mediados los años ochenta y la caída de precios del petróleo se pusieron en marcha las primeras medidas de reforma económica, que debían dar respuesta a la disminución de la renta. El fracaso que estas conocieron es imputable tanto a la falta de voluntad interna y a la necesidad de proteger los privilegios existentes, como a las reformas impuestas por el FMI, en 1988-1989, dentro de un programa de reajuste estructural, en respuesta al creciente endeudamiento de Jordania, cuyas consecuencias políticas y sociales veremos más adelante.

Las medidas impulsadas por Abdalá II, como la privatización acelerada de los activos del Estado en sectores como las telecomunicaciones, la energía y el transporte no han sido convincentes en cuanto a resultados. El contexto de las redes de influencia y los vínculos entre burocráticos y hombres de negocios explican los mediocres resultados de estas reformas. A través del ejemplo de la reforma de impuestos y la privatización del sector de las telecomunicaciones, Wils (2003) muestra cómo la élite de los negocios logró manipular las medidas para su beneficio, protegiéndose ante una posible competencia en el sector privado y la aparición de nuevas redes, mediante la atribución de ventajas y opciones. La estabilidad de este reparto de privilegios quedó asegurada especialmente gracias a la debilidad de la gestión administrativa e institucional del Estado. Sin embargo, el autor hace hincapié en la novedosa presencia de los representantes de la élite de Palacio en el proceso de *rent-seeking*, élites que se benefician de la cooperación con los inversores extranjeros.

Los procesos de negociación entre el Estado y el sector privado, o los procesos de *rent-seeking* cobran una importancia particular en la fase actual de la reforma económica, pues las redes de relaciones implicadas permiten controlar el desarrollo del proceso, frenando la instauración de la libre competencia. Por otra parte, la persistencia de la dinámica de *rent-seeking* se inscribe dentro de la lógica del proceso de reforma, debido a la flexibilización de las condiciones para la atribución de ayudas y créditos internacionales impulsada por el contexto político que siguió al proceso de paz de 1994.³ Así, Los créditos y las atribuciones aumentan, esta vez procedentes de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (Wils, 2003: 139). En este contexto, las reformas y las medidas referentes a los impuestos, los derechos de aduana, las exportaciones y las inversiones tienen efectos importantes. Por lo tanto, aun no se dan las con-

diciones necesarias para atenuar los procesos de *rent-seeking* y lograr una competición libre entre empresarios, ya que este tipo de medidas podrían acarrear consecuencias que los donantes y Palacio no están dispuestos a asumir.

Movimientos de reivindicación, descontento popular y resistencia

Como apuntábamos, la falta de resultados económicos tangibles, los crecientes conflictos en los países vecinos y una política extranjera impopular son elementos de gran inestabilidad para el régimen. Por ello, la monarquía debe buscar constantemente el difícil equilibrio entre sus obligaciones prooccidentales en términos de política económica y las voces disidentes de la opinión pública.

Sociedad civil y reivindicaciones políticas

Con la apertura política iniciada en los años noventa, se instauró una nueva relación entre la sociedad y el régimen. Desde finales de los años ochenta, la sociedad civil creció considerablemente. En 2006 podían contarse dos mil organizaciones registradas, aunque entre la larga lista de asociaciones y entidades pocas representaban una sociedad civil politizada. Raras son las organizaciones civiles jordanas que cuentan con capacidad de reivindicación y oposición política al régimen. Entre ellas, las más importantes son las asociaciones profesionales. En comparación con estas, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de la democracia son poco numerosas —solo nueve en 2006 (Directory of CSO, 2006)—, y cuentan con una capacidad de actuación reducida, debido a dificultades de organización interna y, sobre todo, a un contexto legislativo hostil.

Las asociaciones profesionales

El poder y la influencia adquiridos desde los años cincuenta por las organizaciones profesionales fueron debidos en parte a su fortaleza econó-

mica, lograda gracias a un sistema de cuotas obligatorias para sus miembros, que las asociaciones acumularon e invirtieron, lo que les proporcionó una independencia creciente de cara al gobierno. En la jerarquía social estas agrupaciones representan a una élite que constituye la base de la clase media jordana. Cabe señalar que estas asociaciones profesionales dan voz sobre todo a las reivindicaciones políticas de esta clase media, por delante de sus problemas profesionales.

El episodio de ley marcial y, en consecuencia, la ausencia de organización política creó un vacío que las asociaciones profesionales supieron ocupar rápidamente. Además, a mediados de los años setenta, su influencia se reforzó con la progresiva infiltración de la corriente islamista en el tejido asociativo, hasta aquel momento controlado por grupos de izquierda. Los candidatos islamistas a la presidencia o al consejo de las asociaciones profesionales, presentaban un programa de clara orientación propalestina. En el año 2000, los islamistas lograron el control de la presidencia y del consejo de al menos ocho de las trece asociaciones miembros del Consejo de asociaciones profesionales, incluidas las más grandes e influyentes (Nevo, 2001: 173).

En el programa de estas asociaciones aparecen reivindicaciones políticas de orden panarabista, la democracia y las libertades sociales, el apoyo a la lucha palestina y el respaldo al Líbano e Irak en su confrontación con Israel y Estados Unidos. Pero las asociaciones profesionales van más allá, y ponen sobre la mesa también cuestiones nacionales polémicas, como el plan de reajuste estructural del FMI y el tratado de paz con Israel. Se posicionan además al frente de los movimientos de oposición a los procesos de normalización de las relaciones con Israel, adoptando el papel de líder en el Comité Antinormalización.⁴ En 1997, por ejemplo, decidieron boicotear las elecciones parlamentarias. Esta oposición política creciente generó grandes tensiones entre las asociaciones y el gobierno. Especialmente molesto por estas intromisiones en la agenda política nacional del país, especialmente en las cuestiones relativas a sus relaciones con Israel, el rey Husein empezó a poner freno a la actividad de estas asociaciones por la vía legal. Así, con el fin de limitar su alcance, impuso que las cuotas de sus miembros fueran opcionales y, sobre todo, les prohibió toda actividad política (Nevo, 2001: 177). Las asociaciones acusaron esta forma de represión legislativa, perdiendo capacidad de oposición política. Pero a pesar de este obstáculo, el movimiento asociativo profesional sigue constituyendo ac-

tualmente en Jordania la columna vertebral de una sociedad civil en fase de desarrollo.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y para la promoción de la democracia

Las organizaciones de defensa de los derechos políticos y civiles, como las organizaciones de derechos humanos o de derechos de la mujer son, como apuntábamos, poco numerosas. Las que hoy permanecen en activo pertenecen a una nueva generación de organizaciones civiles nacidas en los años noventa. Su desarrollo y sus recursos son muy diferentes e inferiores a los de las asociaciones profesionales. Durante los años de ley marcial los partidos políticos, principalmente de izquierdas, trataron de impulsar el terreno de las asociaciones políticas. Si estas organizaciones hubieran sabido coordinar sus esfuerzos y aprovechar la ola de liberalización política de 1989, podría haber nacido una verdadera cultura de ONG de esta experiencia. Por otro lado, la clase media jordana, que rechazaba politizarse, perdió también quizá en este período la oportunidad que se le ofrecía de llenar este espacio de nueva creación.⁵

Así, vemos cómo la aparición en los años noventa de organizaciones de defensa de los derechos civiles y políticos no procedía de movimientos internos, sino del exterior, especialmente a través de la sección de Amnistía Internacional abierta en Ammán en 1990. Por ello, los actores, una élite occidentalizada que mostró en seguida su acuerdo con la universalidad del concepto de derechos humanos presentada por Amnistía Internacional, no poseía la cultura política necesaria para la cohesión y el buen desarrollo del movimiento. La ausencia de lucha política y de militancia de partido en la historia de estos líderes se reflejó en el mal gobierno de sus organizaciones. La prioridad otorgada a la agenda política personal y la falta de relevo al frente de las organizaciones eran un claro ejemplo de ello. De esta forma observamos cómo en este período las conductas políticas individualistas de las organizaciones y su reticencia a cooperar — en parte debido a la competición de las organizaciones por conseguir fondos extranjeros — conllevaron la multiplicación y solapamiento de actividades y la dispersión de recursos.

A estos problemas de funcionamiento interno, se les sobrepone un marco legislativo muy desfavorable cuyo objetivo será limitar la crea-

ción de nuevas organizaciones y su capacidad de actuación. La ley define «una organización caritativa (o de voluntariado)» como un organismo compuesto por siete o más personas cuyo principal objetivo es aunar esfuerzos para ofrecer servicios sociales a los ciudadanos, sin que figure entre sus fines lograr o compartir beneficios materiales, lograr un privilegio personal o alcanzar un fin político. Por lo tanto, esta definición no incluye sociedades políticas, además no precisa los «fines políticos», por lo que este término se interpretará según el criterio del Ministerio de Desarrollo Social (Directory of SCO, 2006: 16). De este modo, la ley otorga un gran poder de decisión a las instituciones gubernamentales, principalmente el de denegar la expedición de nuevos permisos a las asociaciones o, incluso, el de disolverlas.⁶

En este contexto, resulta difícil identificar las organizaciones en defensa de los derechos humanos como actores capaces de influenciar y transformar el sistema político jordano. La aparición de los derechos humanos en el discurso de la monarquía, que se materializará con la creación del Centro Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (NCHR), responde más a presiones exteriores que a presiones internas.

Descontento popular

Como demuestran las manifestaciones realizadas en torno a cuestiones internacionales y nacionales, la población jordana se ve profundamente afectada tanto por una economía en continua recesión, como por una política internacional que tiene una incidencia directa en el país. Las reformas de liberalización económica de 1989 fueron la condición impuesta al régimen por el FMI para la concesión de ayudas de emergencia con las que afrontar el importante déficit contable y presupuestario del país. Las disposiciones del FMI fueron abordadas con cautela por el rey Hussein, pues este temía las consecuencias políticas y sociales que podían acarrear cambios tan drásticos. Sus temores eran fundados, tal y como lo demuestran las revueltas de 1989 y 1996, provocadas por el gran aumento de los precios de los productos básicos. El rey Abdalá, liberal y más convencido que su padre, aceleró el programa de reformas con el mismo objetivo de integrar a Jordania en el seno de la economía mundial. Tras dos décadas del programa de liberalización económica, no se aprecian mejoras para la sociedad jordana. La tasa de crecimiento del PIB del 3,5% en-

tre 1995 y 1999, y del 5,1% entre 2000 y 2005 podría entenderse como una mejora, pero esta progresión se ve afectada por el crecimiento de la población y, además, dicho aumento presenta una tendencia decreciente: un 2,5% en 2006 frente a un 3,3% en 1998-1999. Por otra parte, la deuda externa solo disminuyó ligeramente (7.130 millones de dólares en 2005 frente a los 8.700 millones en 1999)⁷ y representa todavía el 55,5% del PIB.

Las reformas no contribuyeron por lo tanto a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, sino que, al contrario, el aumento de precios por la subida de impuestos y la eliminación de las subvenciones golpeó con dureza a los menos favorecidos. Un estudio llevado a cabo en 1997 demostraba que un tercio de la población vivía bajo el umbral de la pobreza (de la cual un 12% en situación de miseria) (George, 2005a: 76). Casi diez años más tarde la situación no mejoraría; aunque los datos oficiales anunciaran una tasa de paro del 14,8% en 2005 y del 13,1% en 2006,⁸ la situación real rondaba el 25-30%.⁹ En la actualidad los observadores coinciden en subrayar una tendencia al agravamiento de las desigualdades, fuente de nuevas tensiones en el seno de la sociedad jordana.

Así, el descontento popular se tradujo en 1989 en una ola de levantamientos populares espontáneos, poco organizados pero masivos que fueron capaces de movilizar a la casi totalidad de la sociedad, incluidas las poblaciones tribales. Estos sucesos se repetirían de nuevo en 1996 y 2002 en Maan. Mientras que hasta entonces las manifestaciones se habían limitado a Ammán y a algunas ciudades del norte del país con gran número de ciudadanos jordanos de origen palestino, los movimientos se extendieron en 1989 también al sur del país, en respuesta a las medidas de austeridad exigidas por el FMI. Para gran sorpresa de Husein, estas manifestaciones estaban orquestadas por los habitantes procedentes de Transjordania, población que había sido históricamente fuente de respaldo y poder para la monarquía.

Las medidas encaminadas hacia una mayor apertura política, presentada como respuesta a las manifestaciones de descontento popular, fueron en realidad una solución a corto plazo. Siguiendo su habitual «estrategia doble (de liberalización y desliberalización) de supervivencia», como señala Russel A. Lucas (2003), el monarca utiliza constantemente la apertura o el cierre en función de la coyuntura del momento y de los equilibrios políticos del país. Así en 1994 por ejemplo, el movimiento de oposición surgido a raíz del tratado de paz con Israel fue lo suficiente-

mente fuerte como para provocar un retroceso en el proceso de liberalización. Esto no impediría la aparición de nuevas revueltas en 1996 en Karak y en 1997 en Ammán, en respuesta al nuevo programa de liberalización diseñado por el FMI. En este clima de tensión las libertades fundamentales como la libertad de expresión volvieron a disminuir. En 1997 Husein designó a un nuevo primer ministro, el conservador Abd al-Salam al-Majali, quien decretaría enseguida una serie de leyes de carácter restrictivo relativas a la prensa, que hacían difícil la creación de nuevos periódicos, limitaban su libertad de contenidos y aumentaban las sanciones. Estas leyes dieron lugar a múltiples protestas que fueron duramente reprimidas (Kilany, 2002: 33).

La tolerancia del régimen ante cualquier forma de disidencia política pública disminuyó aun más tras el estallido de la Intifada en 2000. A finales de año la policía ya había reprimido con dureza cientos de manifestaciones (Schwedler, 2003: 21). Con la Intifada, el joven Abdalá decidió retrasar las elecciones parlamentarias de 2001. El vacío legislativo no le impidió sin embargo dictar nuevas leyes. Encontramos cerca de 220 nuevas «leyes temporales» dictadas por decreto entre 2001 y 2003, muchas de ellas muy perjudiciales para la democracia y las libertades civiles. Pero estas no consiguieron acallar la disidencia política, y la grave situación política y económica continuó provocando movimientos de protesta.

Las manifestaciones de abril de 2002 en Maan, que después se extenderían rápidamente por todo el país, son hechos muy representativos de la diversidad de participantes que tomaban parte en estos movimientos: partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes. El espectro político cubierto iba desde los marxistas seculares hasta los islamistas conservadores y los grupos tribales. Las autoridades prefieren generalmente las manifestaciones organizadas por los partidos políticos conocidos, más fáciles de controlar. Las intervenciones policiales más represivas se reservaron, por lo tanto, para las manifestaciones organizadas por activistas independientes, en especial aquellos que se negaban a informar de sus actividades y pactar su consentimiento con las autoridades gubernamentales. Pero si bien negociar con las autoridades podía permitir asegurarse un espacio de expresión, la espontaneidad y la desorganización de una revuelta representaban también una ventaja en este contexto. En los sucesos de la primavera de 2002 el liderazgo de los diferentes grupos de protesta

surgió de forma espontánea. Los mensajes SMS e Internet se convirtieron en medios vitales para la difusión y coordinación de las protestas.

Pese a los sucesos de gran violencia que estaban teniendo lugar, Abdalá se mostró más firme que su padre respecto a su programa económico, pues apostaba firmemente por los programas de ajuste del FMI. Además, no olvidaba el elevadísimo coste que supuso la crisis de Kuwait de 1990-1991, tras la que su padre tardaría cinco años en restablecer relaciones con Washington, Kuwait y sus vecinos. Por ello, Abdalá II prefería optar por reducir las libertades políticas más básicas, si estaban en juego sus relaciones con Estados Unidos. Con su programa «Jordan First» Abdalá espera mejorar la economía jordana, y atenuar de paso la disidencia, pero mientras tanto y a la espera de resultados económicos convincentes, opta por reforzar el papel de los servicios de seguridad para mantener, ante todo, la estabilidad del régimen.

Los islamistas radicales

Los atentados terroristas perpetrados contra tres hoteles de Ammán en noviembre de 2005, con un balance de sesenta muertos, pusieron en evidencia el auge de los grupos más radicales en la región desde los años noventa. La vuelta de los *muyahidines* tras el final del conflicto antisoviético en Afganistán, junto a las dificultades económicas y tensiones políticas propiciaron que las ideologías islamistas más extremistas resultaran cada vez más atractivas (Internacional Crisis Group, 2005: 4). Así, mientras el movimiento moderado de los Hermanos Musulmanes perdía popularidad, la tendencia yihadista conseguía llegar a una parte de la población cada vez más grande. Sin embargo, el horror de los atentados de 2005 llevó a la opinión pública a demostrar un rechazo total a las bombas suicidas como estrategia de guerra y de terror (*The Economist*, 24 de noviembre de 2005) y a alejarse de los yihadistas. Por lo tanto, a pesar de ser devastadores, los atentados de Ammán no representaron ninguna amenaza para la estabilidad del régimen. En términos políticos, los atentados fueron un fracaso para los islamistas, provocando un acercamiento de los ciudadanos a la monarquía (George, 2005b).

Competencia y alianzas en el proceso de transición política

Para comprender el proceso de transición política y la integración del pluralismo en el sistema político jordano iniciada por el rey Husein en 1989, es necesario observar sus motivos. Como mencionábamos anteriormente, esta repentina apertura fue más debida a la voluntad de anticiparse a los efectos colaterales de los acuerdos estructurales realizados con el FMI que una respuesta a las protestas populares. El gobierno comprendió que un poco de liberalización ofrecería una válvula de escape para el momento en el que se aplicaran las medidas de austeridad económica. De hecho, según G. Robinson (1998: 391) «en Jordania, el programa de liberalización fue dirigido desde el principio por la monarquía, y debe verse como un medio para fortalecer la legitimidad del régimen y no como un ejemplo del régimen cediendo ante las revueltas populares».

Las limitaciones de las fuerzas de oposición en el seno del sistema pluralista

Los partidos políticos no salieron ilesos de los largos años de prohibición de participar en el escenario político del país. El período de ley marcial debilitó la capacidad de los partidos para desarrollar plataformas y programas políticos con capacidad de movilización. Por otra parte, la desmembración de los partidos estos últimos diez años¹⁰ es un indicador de la dificultad que experimentan para coordinar sus acciones y programas, a pesar de tener ideologías y orientaciones similares.¹¹

Los principales partidos aparecidos en la arena política en los años noventa eran muy similares a los ya existentes antes de la prohibición de los años cincuenta: los partidos leales al régimen y conservadores, los partidos islamistas, y los partidos laicos de izquierda y panarabistas. En los años cincuenta estos últimos lideraban claramente los movimientos de oposición, pero en los años noventa reaparecen debilitados. En su lugar, el partido más popular es el Frente de Acción Islámica (FAI), fundado en 1992 como brazo político de los Hermanos Musulmanes. La Hermandad Musulmana fue la única organización política que bajo la ley marcial podía operar abiertamente al presentarse como asociación religiosa. Aparte de esta preponderancia de los islamistas sobre la izquierda,

siguen siendo estos dos grupos los únicos que representan una verdadera oposición al régimen.

La invitación a los partidos de oposición para integrarse en el juego político fue algo muy alejado de la política de masas pues todo el proceso fue dirigido por la élite gobernante. En consecuencia, el espacio y la influencia otorgados a estos partidos fue especialmente limitado, ya que fue diseñado por un grupo reducido de figuras cercanas al rey y tuvo al propio monarca como árbitro. Los partidos de oposición son ignorados una y otra vez a la hora de formar gobierno, pues no solo es el rey quien designa al primer ministro, sino que nunca debate o negocia antes la nominación con los partidos. Si bien es cierto que el primer ministro negocia a continuación con los partidos su posible apoyo al gobierno, no existe ningún proceso formal de consulta con todos los grupos antes de la formación del gabinete. Así, observamos que los partidos políticos carecen de acceso institucionalizado al gobierno y además cuentan con un papel muy restringido en los procesos de decisión política, pues si bien el parlamento puede emitir propuestas de ley, el rey tiene derecho a vetarlas.

Apertura política y estrategias de alianzas

Queda claro, pues, que la integración de los partidos de oposición procede de un consenso entre élites dirigentes cercanas a palacio. Pero la aceptación de los partidos a entrar en este juego de pluralismo responde también a sus propios intereses.

Los Hermanos Musulmanes se incorporaron a la mesa de negociaciones por falta de alternativas estratégicas para promover la agenda islamista, y sus relaciones privilegiadas con el régimen facilitaron el proceso. Ya que si bien los Hermanos Musulmanes se oponen y critican con dureza algunas políticas del gobierno, nunca han cuestionado la legitimidad del régimen o las principales bases del sistema político jordano. De hecho, la política jordana se caracteriza por una larga historia de diálogo y frecuentes cooperaciones entre los Hermanos Musulmanes y palacio, ya desde los años cuarenta (Moaddel, 2002). El régimen ha apoyado de forma más o menos constante a los Hermanos Musulmanes para servirle de contrapeso y neutralizar a los partidos de izquierdas, panarabistas y organizaciones palestinas militantes. Esta relación entre el régi-

men y los partidos islamistas ha sido calificada en ocasiones por algunos especialistas como «alianza tácita». Para otros, como N.J. Brown (2006), dicha caracterización va demasiado lejos, pues incluso cuando mejores han sido las relaciones, el régimen siempre ha vigilado de cerca al movimiento y ha arrestado a sus líderes en más de una ocasión.

A principios de los noventa, los Hermanos Musulmanes aceptaron la invitación a formar parte del gabinete del primer ministro Mudar Badram solo después de que este aceptara la llamada agenda de los «14 puntos», propuesta por el movimiento islamista. Esta agenda proponía concesiones con el fin de poder aplicar la ley islámica, una promesa de no conceder ni un trozo de Palestina, así como la abolición de la ley marcial, la creación de una facultad islámica en la universidad de Yarmuk y la prohibición de servir alcohol en las instituciones públicas. Sin embargo, cuando los Hermanos Musulmanes empezaron a presentar propuestas con las que palacio estaba en desacuerdo, la consecuencia fue un cambio de gabinete y, finalmente, la disolución del parlamento.

Históricamente, las relaciones entre los panarabistas, los partidos de izquierda y el régimen han sido mucho más conflictivas. Numerosos miembros de estos partidos que habían sido conducidos a prisión por su actividad política rechazaron en un primer momento colaborar con los responsables de su encarcelación. Pero, por ejemplo, el Partido Comunista Jordano (PCJ) se dio cuenta enseguida de que si rechazaba la invitación de la monarquía de participar en el juego político pluralista, se arriesgaba a quedarse al margen de este nuevo orden. Así, Isa Mdanat, miembro del comité ejecutivo del PCJ, declaraba durante su primera entrevista con el rey Husein: «Creemos que la histórica barrera que nos separaba ha desaparecido. Se ha roto el hielo» (Mufti, 1999: 112). Para el gobierno esta integración de los partidos de izquierda legitimaba el proceso de liberalización y suponía, a su vez, una fuerza de oposición frente a los partidos islamistas.

Así, estas consideraciones estratégicas llevaron al gobierno y la oposición a negociar a finales de 1989 y principios de 1990. Pero la represión de los partidos en los diecisiete años anteriores, excepto a los Hermanos Musulmanes, les había dejado en una posición de extrema debilidad, por lo que carecían de capacidad de influencia en los procesos de toma de decisiones. Por esta razón, continuarían siendo las afiliaciones personales y la proximidad a palacio, más que los mecanismos institu-

cionales, lo que permitía a las élites ganar poder y entrar a forma parte del círculo de los «decisores políticos».

Liberalización económica y cambio en el sistema de alianzas

Las políticas de reformas administrativas y de privatización fueron esenciales a la hora de mejorar la competitividad económica de Jordania y atraer las inversiones extranjeras. A corto plazo, esto implicaba la supresión de un gran número de cargos de la burocracia y las empresas estatales, rompiendo así el contrato social garante de la estabilidad del régimen. Como hemos podido observar, los desafíos económicos y políticos a los que se enfrentaba el país comenzaron a erosionar el apoyo y la lealtad histórica de las grandes familias tribales. Hasta el momento, la monarquía había sabido mantener cierto equilibrio con esta base de apoyo, gracias a una estrategia de privatización parcial, ofreciéndole parte del capital público. En junio de 2005, por ejemplo, el rey Abdalá ordenó reservar acciones de empresas privadas para ofrecerlas a un precio reducido a miembros antiguos y actuales de las fuerzas de seguridad. Con esta política el rey buscaba mantener algunos puestos de privilegio para evitar la aparición de un poder alternativo. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, las élites tribales siguen inquietas por su futuro, pues temen no ser escuchadas por el nuevo monarca. Estas preocupaciones tuvieron voz en 2005 cuando los parlamentarios leales a la monarquía negaron su voto de confianza para la nominación como primer ministro del liberal Adnan Badram.

Por otro lado la élite de los negocios, que también brinda su apoyo a la monarquía, reclama más privatización atendiendo a sus intereses a largo plazo.

La estructura del sistema de poder en Jordania

La monarquía jordana ha logrado mantenerse en el poder tanto por medio de la persuasión, como mediante la coerción. La estructura del sistema de poder se inspira, pues, en la búsqueda de este equilibrio, y presenta las siguientes características:

- Un grupo de poder dominante representado por un número reducido de figuras cercanas al rey y con el rey al frente como catalizador de esta élite primaria.
- Una economía rentista que consolida el poder de la monarquía, pero que condiciona su política exterior.
- Una competición por el poder que se produce de manera estrictamente circular entre élites primarias, limitando las posibilidades de cambio.
- La dificultad de las élites periféricas y los grupos de oposición para crearse un espacio en la competición por el poder.
- La incapacidad de la sociedad civil para establecer relaciones lineales de poder que permitan transformar el sistema.

Como hemos visto a lo largo de este análisis, la monarquía define el equilibrio de la estructura de poder en Jordania gracias al control de los recursos más importantes como el Estado, las Fuerzas Armadas y el capital. El rey facilita a las élites primarias el acceso a estos recursos gracias a puestos estratégicos y a un sistema de redistribución de la renta que les beneficia y les permite luchar por sus intereses y, por lo tanto, por la supervivencia del régimen. Al mismo tiempo, las élites secundarias ven sus posiciones y capacidades muy condicionadas por esta élite primaria que monopoliza el control del proceso de toma de decisión política.

La debilidad de las relaciones lineales de poder no significa, sin embargo, que la población no desee el respeto de sus derechos fundamentales, la existencia de un gobierno responsable y transparente y una justicia independiente. Al contrario, existen reivindicaciones populares en este sentido. El problema es que el escenario actual no cuenta con el espacio legal necesario para permitir su actuación, y además, el apoyo popular a esta tendencia es aún débil. Las preocupaciones capaces de movilizar la población de forma masiva siguen estando muy ligadas a las dificultades económicas cotidianas, y los movimientos de defensa de los derechos humanos no cuentan con la fuerza necesaria para reunir a la población y generar movilizaciones importantes

Por último, cabe apuntar que el proceso de liberalización iniciado por el rey Husein y continuado después por su hijo Abdalá II no ha afectado a las bases de la estructura desarrollada por el reino hachemí desde su creación. Solo han sido modificadas algunas piezas del engranaje. Los actores periféricos de esta estructura se han visto afectados por las refor-

mas del nuevo rey, pero esto no afecta en absoluto al centro de la estructura que ha controlado los diferentes reinados. Resulta por lo tanto difícil prever una evolución o una redistribución de los poderes más allá de los grupos ya definidos como élite primaria y que ocupan esa posición desde hace décadas.

Escenarios de futuro: entre reformas económicas y continuidad política y social

Desde la perspectiva actual, todo apunta a que serán las reformas económicas las que perfilen la evolución del reino hachemí en los próximos años. El primer ministro Nader Dhabí¹² fue nombrado a finales de 2007 con el fin de formar un nuevo gabinete compuesto por reformistas occidentales y conservadores que habían gozado de gran influencia en los gobiernos precedentes.

El escenario más probable es el del mantenimiento de un sistema de entrada de recursos económicos exteriores a cambio de la continuación del proceso de liberalización del país. Una solución de carácter más económico que político y social. Además, el pluralismo político será fácil de controlar por el régimen, sobre todo debido a la debilidad y la falta de cohesión de la oposición. Incluso el partido islamista se vio debilitado durante las últimas elecciones legislativas por el hecho de una escisión entre moderados y radicales. Otro elemento novedoso en el paisaje político jordano ha sido la entrada en la competición electoral de poderosos hombres de negocios procedentes del sector financiero e inmobiliario. Las consecuencias más visibles de su irrupción en la vida política fueron la disminución de la presencia de pequeños candidatos y partidos políticos con poco presupuesto. La aparición de estos nuevos candidatos es percibida por algunos sectores de la oposición como corrupción y son acusados de pervertir el voto con dinero, como lo demuestra el eslogan: «quien compra a un ciudadano malvende un país».

Pero aunque la oposición política no representa ninguna amenaza en el horizonte, el régimen tendrá que seguir haciendo equilibrios con los conflictos regionales que le rodean. La crisis iraquí continuará afectando directamente al país, sobre todo por el flujo migratorio que esta genera. Las estimaciones cuentan ya entre 500.000 y 800.000 refugiados

iraquíes residentes en Jordania.¹³ Aunque acostumbrada a recibir a población víctima de conflictos vecinos, las consecuencias económicas y sociales de este aflujo de población no son desdeñables. Y a pesar de los esfuerzos de Jordania y sus vecinos para dificultar la entrada a los refugiados en su territorio, los inmigrantes continuarán llegando de forma ilegal.

Así, a pesar del convencimiento del rey Abdalá II sobre el acierto de su programa económico y todas las reformas llevadas a cabo, Jordania sigue siendo lo que siempre ha sido, un país pequeño, pobre en recursos, en una región inestable y, con dos tercios de sus recursos procedentes del sector no productivo de los servicios, dependiente de manera crítica de las ayudas e ingresos extranjeros. Las reformas en marcha continuarán generando resultados pero la teoría según la cual las riquezas producidas por el programa de liberalización (que desde el inicio solo ha beneficiado a los más privilegiados) llegarían a la masa de la población no parece cumplirse, pues recordemos que un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y el hecho de que los principales recursos del reino sigan siendo, sin duda, las ayudas exteriores y las rentas de los trabajadores expatriados, asegura la continuación de una fuerte dependencia de la economía nacional a la política exterior del reino.

Notas

1. Para impedir un golpe de Estado en abril de 1957, el rey disolvió el gobierno de Nablusi y se prohibieron los partidos políticos en el país. Asimismo, se instauró la ley marcial y se reforzó el *Mujabarat* (servicios de inteligencia). Este período de represión política sin precedentes, llevó a los partidos a la obligación de operar en secreto. En 1961, tras unas elecciones ligeramente más libres, se eligió un nuevo Parlamento con la presencia de diputados de ideología bastante independiente. Esto hizo que la experiencia no se repitiera en las elecciones de 1963 y 1967. En 1967 el conflicto árabo-israelí volvió a afectar a la política jordana, volviendo a proclamarse la ley marcial y manteniéndose durante dos décadas.

2. Las cifras varían según el número de generaciones de refugiados incluidas en el cálculo.

3. La firma, en 1994, del tratado de Wadi Araba entre Jordania e Israel, permite a Jordania beneficiarse de importantes «dividendos de la paz» gracias

a la flexibilización de las condiciones para la concesión de las ayudas al desarrollo.

4. El Comité Antinormalización agrupa a asociaciones profesionales, un pequeño número de partidos de oposición y figuras políticas independientes.

5. M. Almasri, Investigador en Centro para Estudios Estratégicos de Ammán, entrevista con los autores, 3 de mayo de 2007.

6. En el año 2002 desapareció la organización Jordan Society for Citizens' Rights (JSCR), después de que el ministro de Interior ordenara su cierre y la anulación de su registro «por presunta violación de la Ley de Sociedades e Instituciones Sociales».

7. Datos extraídos de los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial.

8. Datos procedentes del Jordan Economics and Commerce Bureau http://www.jordanecb.org/about_jordan_indicators1.shtm.

9. Datos disponibles en el Euromed Infocenter, <http://www.euromedinfo.eu/site.159.content.en.html>, en European Commission European Neighboring Policy, ENP Action Plans y Country Reports http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#2.

10. Muchos de los partidos políticos más recientes proceden de fragmentaciones de otros partidos (Braizat, 2004).

11. Treinta y tres partidos según el Directory of Civil Society Organizations, Al Urdun al Jadid, 2006.

12. Antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, cuyo hermano el general Mohamed Dhabí está al frente de los servicios secretos del país.

13. Datos extraídos de: <http://www.refugeesinternational.org/content/country/detail/2941>.

Bibliografía

- Bank, A. y O. Shlumberg (2004), «Jordan: Between regime survival and economic reform», en Volker Perthes, *Arab élites negotiating the politics of change*, Lynne Rienner Publishers, Londres, pp. 35-60.
- Braizat, M. (2004), «Towards a More Active Party System in Jordan The Need to Develop Major. Political and Intellectual Trends», *Al Quds center for strategic studies center paper*.
- Brand, L. (1994), *Jordan's inter-arab relations: The political economy of alliance making*, Columbia University Press, Nueva York.
- Brown, N. J. (2006), «Jordan and its Islamic movement: The limits of inclusions», *Carnegie Papers*.

- Campagna, J. (1998), «Jordania, severas restricciones: retroceso democrático general», *Nación Árabe*, n° 36, Madrid, pp. 90-105.
- Choucair, J. (2006), «Illusive Reform: Jordan's stubborn stability», *Carnegie Papers*.
- Denoeux, G., O. Wilcox y Z. Zawaneh (2003), «Jordan Democracy and Governance Assessment», *USAID Center for Democracy and Governance and USAID/Jordan*.
- Directory of Civil Society Organizations in Jordan (2006), Al-Urdun Al-Jadid Research Center.
- George, A. (2005a), *Jordan Living in the Crossfire*, Zed Books, Londres.
- (2005b), «Los atentados terroristas en Jordania: el tiro por la culata», *Mediterráneo y Mundo Árabe* – ARI N° 143/2005, Real Instituto Elcano.
- International Crisis Group (2005), «Jordan's 9/11: Dealing with Jihadi Islamism», *Middle East Report*, n° 47.
- Kilany S. (2002), «Hurriyat al-sahafa fi al-Urdunn», *Euro-Mediterranean Human Rights Network*, Copenhague.
- Lucas R. E. (2003), «Deliberalization in Jordan», *Journal of democracy*, vol. 14, n° 1, Washington, pp. 137-144.
- Milton-Edwards B. y P. Hinchcliffe (2001), *Jordan: A Hashemite legacy*, Routledge, Londres.
- Moaddel M. (2002), «Religion and the State: The Singularity of the Jordanian Religious Experience», *Internacional Journal of Politics, Culture and Society*, vol. 15, n° 4, Nueva York, pp. 527-568.
- Moore P.W. (2003), «The newest Jordan: free trade, peace and a ace in the hole», *Merip online*.
- Mufti M. (1999), «Élite bargains and the onset of political liberalization in Jordan», *Comparative Political Studies*, vol. 32, n° 1, Washington, pp. 100-129.
- Nevo, J. (2001), «Professional Associations in Jordan: The backbone of an emerging civil society», *Asian Studies Review*, vol. 2,5 n° 2, Adelaide, pp. 169-184.
- PEW Global Attitudes Project (2005), «Islamic Extremism: Common Concern for Muslim and Western Publics», PEWGlobal.org, 14 de julio de 2005.
- Robinson G. E. (1998), «Defensive democratization in Jordan», *Internacional Journal of Middle East Studies*, vol. 30, n° 3, Washington, pp. 387-410.
- Schwedler J. (2003), «More Than a Mob: The Dynamics of Political Demonstrations in Jordan», *Middle East Report*, n° 226, Washington, pp. 18-23.
- Wiktorowicz Q. (1999), «The limits of democracy in the Middle East: the case of Jordan», *Middle East Journal*, vol. 53, n° 4, Washington, pp. 606-620.
- (2000), «Civil Society as Social Control: State Power in Jordan», *Comparative Politics*, vol. 33, n° 1, Nueva York, pp. 43-61.
- Wils, O. (2003), *Wirtschaftseliten und Reform in Jordanien. Zur Relevanz von*

Unternehmer-Bürokraten-Netzwerken in Entwicklungsprozessen (Élites économiques et réforme en Jordanie. De l'importance des réseaux d'entrepreneurs et de bureaucrates dans le processus de développement), Deutsches Orient Institut, Hamburgo.

Website Jordan economics and commerce bureau, http://www.jordanecb.org/about_jordan_indicators1.shtm.

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), Observatorio Electoral, http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Observatorio_novedades.htm.

The EU's relations with Jordan, www.europa.eu.int World Bank – World Development indicators, <http://www.worldbank.org/jo>.

Jordania: los difíciles equilibrios internos y regionales

Haizam Amirah Fernández

Desde su independencia en 1946, la historia reciente del Reino Hashemí de Jordania ha estado condicionada por 1) su ubicación en una región altamente conflictiva, 2) su escasez de recursos naturales y 3) las tensiones sociales internas. A pesar de la demostrada capacidad de supervivencia del régimen pese a las dificultades, este se enfrenta a grandes retos, tanto nuevos como otros ya existentes que se agudizan.

En el ámbito regional, el conflicto israelo-palestino seguirá interfiriendo en el desarrollo político, social y humano de Jordania, país con una mayoría de población de origen palestino. A eso hay que sumar los efectos inmediatos y retardados de la desestabilizadora invasión estadounidense del vecino Irak, así como el impacto de los otros conflictos vecinales que se extienden por Oriente Medio. Por otro lado, la escasez de recursos naturales, hídricos y energéticos condicionan severamente los planes de desarrollo del país y aumentan su dependencia del exterior. En el plano interno, las desigualdades socioeconómicas, la arbitrariedad, la pobreza, el desempleo y subempleo y la carestía de los productos básicos y de la vivienda hacen que la vida del jordano medio sea cada vez más difícil, lo que aumenta la sensación de malestar social. Dicho malestar se intensifica al no existir formas de canalización política eficaces y satisfactorias, algo que, por otra parte, es la tónica en el resto del mundo árabe.

El sistema político jordano está centrado en la figura del monarca, que es quien reina, gobierna y manda con el apoyo de las fuerzas armadas y los servicios de información. Aunque existen partidos políticos y se celebran elecciones, las lealtades tribales y familiares tienen un peso muy alto en la vida política del país. Existen numerosas trabas para que

el Parlamento realice sus funciones en el ámbito legislativo y de supervisión del ejecutivo. La tendencia de los últimos tiempos es el faccionalismo de las fuerzas políticas que lo componen, lo que está llevando al Frente de Acción Islámica (FAI) a expresar posiciones más críticas con la política gubernamental. Sin embargo, también existen divisiones entre grupos rivales dentro del campo islamista. A lo anterior hay que añadir que, en la práctica, no existe una separación de poderes clara dentro del Estado (de hecho, tal como ocurre en otros países árabes, los conceptos de Estado, régimen y monarquía se suelen entremezclar). Cualquier voluntad democratizadora tendrá necesariamente que tener en cuenta estas realidades, cuya persistencia impide que la sociedad jordana pueda desarrollar su potencial humano y económico.

Desde su llegada al poder en 1999, el rey Abdalá II ha promovido numerosas reformas económicas, siguiendo las indicaciones de las instituciones financieras internacionales. No obstante, el Estado sigue incurriendo en un importante déficit fiscal y en la balanza por cuenta corriente. Además, la deuda externa equivale a más de la tercera parte del Producto Nacional Bruto (PNB) del país. Las políticas de ajuste están teniendo como consecuencia la eliminación de subsidios de algunos productos básicos, principalmente los combustibles, lo que está produciendo un importante aumento de los precios en los últimos tiempos. Esto no se ve correspondido con el aumento de las rentas familiares (el PNB per cápita en 2005 fue de poco más de 2.300 dólares). Las subidas simbólicas de los sueldos de los funcionarios y otros empleados públicos difícilmente podrán contrarrestar el constante deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad jordana. Seguramente este sea el principal reto al que deban enfrentarse las autoridades jordanas en los años venideros si se quieren evitar explosiones sociales, como ya ocurriera a finales de la década de 1980, a mediados de la siguiente y a principios de la actual, sobre todo en el sur del país, cuya lealtad es crucial para el régimen.

Desde hace años, existe en Jordania un debate sobre si la estabilidad a la larga se consigue a través del control y la represión estatal o mediante las reformas de fondo, tanto en el ámbito económico como en el político. Sin embargo, todo parece indicar que los sectores conservadores y los defensores del statu quo prevalecen frente a los reformistas. De hecho, algunas reformas realizadas desde finales de la década de 1980 han servido como medida de apaciguamiento temporal ante las presiones

sociales; una especie de «democratización defensiva». El efecto a la larga de dichas reformas parciales y reversibles ha sido la perpetuación del sistema y de las opciones más conservadoras e inmovilistas dentro del régimen, sobre todo en lo que al modelo político y a las libertades públicas se refiere. Asimismo, el temor a los atentados terroristas está siendo utilizado por sectores del régimen para frenar cualquier proceso de apertura política.

En el plano regional, Jordania juega el papel de Estado colchón, sometido a toda suerte de tensiones, por lo que seguirá necesitando el apoyo diplomático, económico y militar de las grandes potencias, concretamente de Estados Unidos, además de los países vecinos, incluidas las monarquías conservadoras del Golfo. Un objetivo de la política exterior jordana es mantener el diálogo con todos los actores regionales con el fin de evitar, en medida de lo posible, el contagio de los frecuentes conflictos regionales. A pesar de esa política pragmática, cualquier aumento considerable de la tensión regional (por ejemplo, en caso de un ataque contra Irán o de un sobresalto en algún país vecino) pondría al régimen jordano ante una situación complicada, sobre todo si se produce una movilización social dentro del país en respuesta a algún acontecimiento regional. La alianza estratégica de la monarquía jordana con Estados Unidos, sumada a sus relaciones cordiales con Israel, seguirán siendo una fuente de alienación social.

Las autoridades jordanas se enfrentan a numerosos retos, como reducir la deuda externa y la dependencia de las donaciones y ayudas procedentes del exterior, atraer inversiones que contribuyan a generar empleo, facilitar que las remesas de los trabajadores jordanos expatriados vayan a sectores productivos y no solo al consumo de productos importados, gestionar con eficacia los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de una población muy joven que crece a un ritmo elevado, combatir la corrupción y las prácticas de *wasta* (intermediación o «enchufe» a través de lazos familiares, amistad o influencia política), así como abordar los retos que han generado las distintas olas de refugiados venidos de otros países. De su éxito en conseguir avances significativos en esos ámbitos dependerá que el Reino Hashemí de Jordania pueda encarar el futuro con optimismo y estabilidad.